

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE DERECHO



TESIS DOCTORAL

**El derecho de libertad religiosa y su reconocimiento en el
actual ordenamiento jurídico español**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR
PRESENTADA POR

Juan Salgado Menor

DIRECTOR:

Joaquín Ruiz-Gimenez

Madrid, 2015

Rd. 54.435

257

FACULTAD DE DERECHO
UNIVERSIDAD DE MADRID

EL DERECHO DE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU RECONOCIMIENTO
EN EL ACTUAL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL

- Tesis doctoral -

Director : Dr. Joaquín Ruiz-Giménez
Catedrático de Derecho Natural
y Filosofía del Derecho.

Doctorando : Juan Salgado Menor.

M A D R I D

1976

-----oOo-----



BIBLIOTECA
DE DERECHO

DEDICATORIA

A mis padres y hermanos

I N D I C E G E N E R A L

Página

INDICE SISTEMATICO.....	V
BIBLIOGRAFIA	XVII
INTRODUCCION	XLIV
CAPITULO PRELIMINAR	XLVI
PRIMERA PARTE.- EL DERECHO DE LIBERTAD RELIGIOSA ,...	
CAPITULO I.- EL DERECHO DE LIBERTAD RELIGIOSA: PLANTEAMIENTO GENERAL	3
CAPITULO II.- ANALISIS DEL DERECHO DE LIBERTAD RELIGIOSA	20
CAPITULO III.- EL DERECHO DE LIBERTAD RELIGIOSA EN EL ORDEN INTERNACIONAL Y EN LAS CONSTITUCIONES DE LOS ESTADOS CONTEMPORANEOS	80
SEGUNDA PARTE.- RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LIBER- TAD RELIGIOSA EN EL ACTUAL ORDEN — AMIENTO JURIDICO ESPAÑOL.....	

CAPITULO I.-	RECONOCIMIENTO DEL DERECHO	
	DE LIBERTAD RELIGIOSA EN LAS	
	ACTUALES DISPOSICIONES CONSTITU-	
	CIONALES Y CONCORDATARIAS DE ESPAÑA ...	150

CAPITULO II.-	RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LI-	
	BERTAD RELIGIOSA EN LA LEY 44/1967 DE	
	28 DE JUNIO Y EN LAS NORMAS COMPLE -	
	MENTARIAS	411

CONCLUSIONES GENERALES	566
------------------------------	-----

- INDICE SISTEMATICO -

Página

PRIMERA PARTE.- EL DERECHO DE LIBERTAD RELIGIOSA.

CAPITULO I.- EL DERECHO DE LIBERTAD RELIGIOSA:

PLANTEAMIENTO GENERAL	3
1. Analisis de la expresión: liber- tad religiosa	3
1.1. La expresión usada por los autores ...	3
1.2. La expresión usada en los textos in- ternacionales	4
1.3. La expresión empleada por el Concilio Vaticano.II.....	6
1.4. Las expresiones más usadas en las Cons- tituciones de los Estados contempora- neos	6
1.5. Precisiones terminológicas	8
a) Libertad de conciencia	8
b) Libertad de cultos	9
c) Libertad religiosa	9
2. Noción y significado de la libertad re- ligiosa	10
3. Problemática de la libertad religiosa	11
a) La conciencia personal	11
b) La conciencia política	12
4. Derecho de libertad religiosa no tolerancia	14

CAPITULO II.-	ANALISIS DEL DERECHO DE LIBERTAD	
	RELIGIOSA	20
1.	Concepto de la libertad religiosa	"
1.1.	La libertad religiosa en sentido filosófico	"
1.2.	La libertad religiosa en sentido teológico	22
1.3.	La libertad religiosa en sentido jurídico	23
2.	Concepto del derecho de libertad religiosa	26
3.	Sujeto del derecho de libertad religiosa	28
4.	Objeto del derecho de libertad religiosa	"
4.1.	Libertad de conciencia	29
4.2.	Libertad de expresión	"
4.3.	Libertad eclesial o corporativa	30
4.4.	Libertad de asociación religiosa	"
4.5.	Libertad de apostolado	31
5.	Fundamento del derecho de libertad religiosa	33
5.1.	La dignidad de la persona humana	"
	A) Orden cósmico y moral	"
	B) Responsabilidad individual y libertad	36
	C) Presupuestos reales y éticos de la libertad	38
	D) La libertad como valor absoluto de la persona	39
	E) La ley libertadora de la libertad ...	40

5.2.	El derecho de libertad religiosa es una exigencia de la naturaleza racional	41
6.	Límites del derecho de libertad religiosa	45
6.1.	El bien común	48
6.1.1.	El bien común en sentido estático	49
6.1.2.	El bien común en sentido dinámico	50
6.2.	El orden público	55
6.2.1.	Concepto de orden público.....	"
6.2.2.	Clases de orden público	57
6.2.3.	Orden público-bien común y orden jurídico	59
6.2.4.	Justicia y territorialidad del orden público.	62
6.2.5.	Formulación doctrinal del orden público	67
6.2.6.	Formulación normativa	69

CAPÍTULO III.- EL DERECHO DE LIBERTAD RELIGIOSA EN EL ORDEN INTERNACIONAL Y EN LAS CONSTITUCIONES DE LOS ESTADOS CONTEMPORANEOS

80

I.	El derecho de libertad religiosa en el orden internacional universal	"
1.	La Carta de las Naciones Unidas	"
2.	La Declaración universal de los derechos del hombre	82
3.	La Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación racial ...	84
4.	El Pacto internacional sobre los derechos civiles y políticos	"
5.	El Proyecto de Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o en las creencias	85

Página

II.	El derecho de libertad religiosa en el ordenamiento internacional europeo	95
1.	El derecho de libertad religiosa en la Convención europea de Roma de 4 de noviembre de 1950	95
2.	El derecho de libertad religiosa en el Acta final de la Conferencia de Helsinki, sobre la Seguridad y cooperación en Europa	102
III.	El derecho de libertad religiosa en las constituciones de los Estados contemporáneos	103
1.	Sistema político-religioso de reconocimiento oficial de una religión	104
A)	Estados de confesionalidad musulmana	105
B)	Estados de confesionalidad budista	109
C)	Estados de confesionalidad cristiana:	111
a)	Estados de confesionalidad luterana	111
b)	Estados de confesionalidad anglicana	114
c)	Estados de confesionalidad ortodoxa	"
d)	Estados de confesionalidad católica	115
2.	Sistema político religioso de separación de la Iglesia y el Estado con verdadera libertad religiosa	119
3.	Sistema de separación hostil de la Iglesia y el Estado	129
IV.	Conclusión	142

SEGUNDA PARTE.- RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LIBERTAD
RELIGIOSA EN EL ACTUAL ORDENAMIENTO
JURÍDICO ESPAÑOL.

CAPITULO I.-	RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LIBERTAD RELIGIOSA EN LAS ACTUALES DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y CONCORDATARIAS DE ES- PAÑA.	150
1.	Reconocimiento del derecho de libertad religiosa en las actuales disposiciones constitucionales de España	"
1.1.	Confesionalidad católica del Estado es- pañol	"
1.2.	Clases de confesionalidad	153
1.2.1.	Confesionalidad explícita	"
1.2.2.	Confesionalidad implícita	"
1.2.3.	Confesionalidad excluyente	"
1.2.4.	Confesionalidad compatible con la liber- tad de otras religiones	154
1.2.5.	Confesionalidad doctrinal	"
1.2.6.	Confesionalidad sociológica	"
1.3.	La confesionalidad en las declara- ciones y concenciones internacionales	155
1.4.	La confesionalidad en el Concilio Va- ticano II	156
2.	La libertad religiosa	158
3.	Problemática y compatibilidad del régimen régimen confesional con el régimen de libertad religiosa	159
3.1.	Problemática de la confesionalidad	"
3.2.	Concepto y significado de la confe- sionalidad	"
3.4.	Actitud del Estado ante la religión	161

1.4.1.	El Estado confesional católico	164
1.4.2.	El Estado neutro	166
1.4.3.	Compatibilidad del régimen confesional con el régimen de libertad religiosa	170
	A) Compatibilidad exigida por la libertad religiosa,	171
	B) Compatibilidad exigida por el pluralismo religioso	174
1.5.	5. La confesionalidad española y su posible revisión	176
1.6.	6. La unidad espiritual de España como límite del derecho de libertad religiosa	180
2.	Reconocimiento del derecho de libertad religiosa en las actuales disposiciones concordatarias de España	187
1.	La confesionalidad en el actual Concordato español	"
1.1.	Posible modificación de la presente situación legal	188
2.	La libertad religiosa	192
3.	Revisión del Concordato de 27 de agosto de 1953	194
I.	Necesidad de la revisión	"
1º	Génesis del Concordato de 1953	195
2º	Consideraciones críticas acerca del Concordato de 1953	200
3º	El Concordato en la actualidad	209
II.	Forma de llevar a cabo la revisión	
1.	Primera solución: Supresión del Concordato	212

Página

2.	Segunda solución: Sustitución del actual Concordato español de 1953, por otro de las mismas características formales, aunque de diverso contenido	219
3.	Tercera solución: Acuerdos parciales	220
III.	Contenido de la revisión	223
1.	La confesionalidad del Estado	"
2.	La libertad de la Iglesia	"
2.1.	La libertad de la Iglesia para el nombramiento de cargos eclesiásticos	224
2.2.	La libertad de la Iglesia en su organización territorial	225
2.3.	La libertad de la Iglesia en la enseñanza	227
2.4.	La libertad de la Iglesia en la predicación de su doctrina	247
3.	Los privilegios que la Iglesia y el Estado español se reconocen en el actual Concordato de 27 de agosto de 1953: Su renuncia	255
3.1.	Renuncia de privilegios por parte de la Iglesia	256
3.1.1.	Privilegio y derecho común	258
3.1.2.	Privilegio y Estatuto particular	260
3.1.3.	Privilegio y situación privilegiada	263
3.1.4.	Privilegio del "fuero"	266
3.1.5.	La subvención económica	270
3.1.6.	Exenciones o bonificaciones fiscales	277
3.1.7.	Presencia de altas personalidades eclesiásticas en los organismos del Estado	279
	A) En el Consejo de Regencia	280
	B) En el Consejo del Reino	"
	C) En las Cortes Españolas	281
	D) En el Consejo de Estado	282
3.2.	Renuncia de privilegios por parte del Estado: El privilegio de presentación y el de las preces diarias por el Jefe del Estado.	289

-Página

4.	El matrimonio	303
4.1.	Consideraciones en torno al apartado C del protocolo final del Concordato de 1953	305
4. 2.	Consideraciones en relación con el artículo XXIV del actual Concordato español de 1953	310
4. 3.	Consideraciones en relación con el divorcio	312
IV.	Gestiones llevadas a cabo para la revisión del actual Concordato español de 1953	316
1º	Aportación del Episcopado español en relación con la revisión del actual Concordato y futuras negociaciones entre la Santa Sede y el Estado español	"
2º	Postura del Gobierno español en las relaciones Iglesia Estado	321
A)	Epoca de Franco	"
a)	Mensaje del Jefe del Estado a los españoles el último fin de año de 1972	"
b)	Discurso programático del Presidente Arias	322
c)	Nota del Ministerio de Información al reunirse con los periodistas tras el Consejo de Ministros celebrado el 15 de marzo de 1974	323
d)	Dos viejas notas del Gobierno y la Conferencia Episcopal	"
1º	Comunicación del Gobierno a la Conferencia Episcopal Española de 9 de abril de 1969	324
2º	Respuesta de la Conferencia Episcopal Española al Gobierno, de 4 de julio de 1969	231
B)	Epoca del Rey	
a)	Primer mensaje de la Corona	340

b) Discurso del Presidente del Gobierno ante las Cortes el 28 de enero de 1976 ...	340
3. Primeras gestiones en favor de la revisión	341
1º) Comunicación al Papa del Episcopado español de su voluntad de renunciar a todos los privi- legios	342
2º) Carta del Papa al Jefe del Estado	"
3º) Respuesta del Jefe del Estado al Papa	343
4º) Comienzo de las conversaciones para la revisión	"
4. Anteproyecto Casaroli - Garrigues	347
4.1. Texto integro del anteproyecto	350
5. Anteproyecto "Ministerio de Justicia	367
6. Simples contactos previos a las conversaciones Casaroli - Lopez Rodó en Madrid	372
1º Entrevista López Bravo - Pablo VI el 12 de enero de 1973	"
2º Primer coloquio Casaroli - López Rodó en Hel- sinki	373
3º Carta de López Rodó a la Secretararia de Es- tado señalando las tres condiciones previas del Gobierno a toda negociación	"
4º Visita a Roma del presidente y vicepresidente de la Conferencia Episcopal para aunar las pos- turas de la Secretaría del Estado y del episco- pado español	374
5º Respuesta del Cardenal Villot al ministro español recogiendo los puntos que para la Santa Sede y para el episcopado español son imprescin- dibles en la negociación	"
7. Conversaciones Casaroli - Lopez Rodó en Madrid ...	377
8. Comienzo oficial de la nueva negociación concorda- taria - Conversaciones Casaroli - Cortina en Madrid	387
8.1. Declaraciones en Roma de monseñor Casaroli antes de emprender viaje a Madrid	"

Página

8.2. Primeras declaraciones en Madrid.	388
8.3. Jornada del miercoles, día 5	389
8.4. Discurso del ministro de asuntos exteriores	"
8.5. Discurso de monseñor Casaroli	392
8.6. Comunicado conjunto	393
8.7. Ultimas declaraciones en Barajas	395
9. Conversaciones Casaroli - Cortina en Roma	396
9. 1. Texto del comunicado conjunto	"
10. Almuerzo de trabajo entre los más destacados representantes de la Iglesia y el Estado espa- ñol el día 26 de enero de 1976 en Madrid	398
11 . Visita a la Santa Sede del ministro de Asuntos Exteriores señor Areilza, durante los días 12 y 13 de abril de 1976	399
12. Acuerdo entre la Santa Sede y el Gobierno es- pañol de 28 de julio de 1976	402

**CAPITULO II.- RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LIBERTAD
RELIGIOSA EN LA LEY 44/ 1967 DE 28 DE
JUNIO Y EN LAS DISPOSICIONES COMPLEMEN-
TARIAS**

1. Reconocimiento y desarrollo del derecho de libertad reli- giosa en la Ley 44/1967, de 28 de junio	411
1.1. Concepto	412
1.2. Ambito	418
1.3. Objeto	420
1.4. Derechos individuales	422
1.4.1. Derecho a no discriminación para el trabajo	425
1.4.2. Derecho al cumplimiento de los deberes religiosos	426
1.4.3. Derecho a no ser obligados a actos de culto oficiales	427
	428

Página

1.4.4.	Derecho a fórmula de juramento según la propia religión	429
1.4.5.	Derecho a la no coacción en la forma del matrimonio	430
1.4.6.	Derecho a la educación de los hijos	432
1.4.7.	Derecho a recibir sepultura según sus propias creencias	433
1.4.8.	Derecho a no ser impedido en la enseñanza de la fe y derecho de manifestación religiosa	434
1.4.9.	Derecho de reunión y de asociación	436
1.5.	Derechos comunitarios	437
1.5.1.	Plano social centrípeto	439
1.5.1.1.	Personalidad jurídica de las confesiones religiosas	"
1.5.1.2.	Derecho al culto público	444
1.5.1.3.	Ministros del culto	446
1.5.1.4.	Derecho comunitario de enseñanza	449
1.5.2.	Plano social centrífugo	450
1º	El aspecto de la enseñanza pública	451
2º	El aspecto de la influencia social	453
3º	El aspecto de penetración a través de diversas asociaciones	"
1.6.	Sujeto del derecho civil de libertad religiosa	454
1.6.1.	Sujeto activo - Plano individual	456
1.6.2.	Sujeto activo - Plano social	"
1.6.3.	Sujeto pasivo	460
1.6.4.	Casos especiales	461
1.6.4.1.	Los ateos	"
1.6.4.2.	Los extranjeros	462
1.6.4.3.	Las confesiones religiosas supranacionales	463
1.7.	Límites	468

1.7.1.	El orden público	469
1.7.2.	La confesionalidad	471
1.7.3.	El proselitismo	472
1.8.	Competencia administrativa	475
1.9.	Garantías jurídico-administrativas ...	482
1.9.1.	Recurso de alzada	483
1.9.2.	Recurso de súplica	484
1.9.3.	Recurso contencioso-administrativo ...	485
1.10.	Incorre la Ley en contrafuero ?	487

2.	RECONOCIMIENTO Y DESARROLLO DEL DERECHO DE LIBERTAD RELIGIOSA EN LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS	494
2. 1.	El " Reglamento" para la aplicación de la Ley 44/1967 de 28 de junio	"
2.2.	Otras disposiciones	504
2.2.1.	Ordenes de 28 de julio y 12 de diciembre de 1967	516
2.2.2.	Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 23 de octubre de 1967	519
2.2.3.	Decreto 1138/1969, de 22 de mayo por el que se modifican determinados artículos del Registro civil, e Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre el expediente previo al matrimonio civil, de 22 de marzo de 1974	511
2.2.4.	Instrucción de la Comisión de Libertad religiosa número 9/1968 de 13 de abril referente a la habilitación de recintos para sepultura de los acatólicos	515

2.2.5.	Ley 44/1971, de 15 de noviembre sobre reforma del Código penal	516
2.2.6.	Ley 14/1973, de 19 de diciembre sobre negativa a la prestación del Servicio Militar	517
2.2.6.1.	Análisis previo sobre la problemática de la objeción y de los objetores de conciencia	518
2.2.6.1.1.	Significado de la objeción y de los objetores de conciencia	519
2.2.6.1.2.	Planteamiento jurídico	523
2.2.6.1.3.	Fundamento ontológico	524
2.2.6.1.4.	Movimiento internacional	"
2.2.6.1.5.	Los Estados europeos	526
2.2.6.1.6.	Recomendación del Consejo de Europa	532
2.2.6.1.7.	Posición oficial de la Iglesia Católica ante la objeción de conciencia	534
2.2.6.1.8.	Número de objetores existentes actualmente en España	538
2.2.6.1.9.	La situación jurídica de los objetores en España antes de la entrada en vigor de la Ley 14/1973	539
2.2.6.1.10.	Resolución de la Asamblea del Consejo de Europa relativa a la situación de los objetores de conciencia en España	546
2.2.6.1.11.	Posición oficial del Episcopado español ante la objeción de conciencia	547
2.2.6.2.	Análisis de la Ley 14/1973 de 19 de diciembre y su incidencia en la situación jurídica de los objetores de conciencia	551
2.2.7.	Decreto -Ley sobre amnistía	557
2.2.7.	Últimas disposiciones, dictadas en España, sobre enseñanza religiosa ...	559
	CONCLUSIONES GENERALES	566

BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFÍA

- ABAITUA, C.: La doctrina sobre la libertad política en el magisterio de León XIII (Vitoria, 1966).
- AGUILAR NAVARRO, M.: Lecciones de Derecho Internacional Privado, vol. I, t. I Madrid 1963; vol. I, t. II, Madrid, 1964.
- El orden público en el Derecho Internacional Privado, en "Revista española de Derecho Internacional", 6, 1953, págs. 33-81.
- AGUILAR BENITEZ DE LUGO, M.: Algunos aspectos del matrimonio confesional en el Derecho internacional privado español e italiano, en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid, vol. XII, Madrid, 1968, págs. 129 y sigs.
- AGUSTIN (S.): Tractatus XXVI in Joann., nº 2
- ALBALADEJO, M.: Manual de Derecho de Familia y Sucesiones, Barcelona, 1974. Librería Bosch.
- ALCALA ZAMORA, CASTILLO, N.: La protección procesal internacional de los derechos humanos, Madrid, 1975, Editorial Civitas, S.A.
- ALCORTA, J. IGN.: Lo social desde la persona, en Revista de Estudios Políticos, 11, 1951, págs 55-84.
- ALESSANDRINI: "Entre la Santa Sede y los obispos españoles: Contacto permanente", en Revista Vida Nueva de 1-XII-1973, pág. 12.
- ALFONSO J.M.: Derechos de la conciencia errónea y otros derechos, Madrid, 1964.

ALGORA M.A.: La Iglesia y la comunidad política, en Boletín Informativo de A.C.N. De P. Nº 918- mayo 1973.

ALMAGRO NOSETE(J).: El pluralismo social y los derechos fundamentales de la persona humana, en Boletín Informativo de A. C.N.De P., nº 918, mayo, 1973.

ARADILLAS: Matrimonios rotos, Madrid, 1975.

ARBEOA V.M.: Apuntes históricos en torno a la Ley de libertad religiosa, en Revista Española de Derecho Canónico, Vol. XXIII, septiembre - diciembre, 1967, Nº 66, pág. 711.

- El proyecto de Concordato del Padre Postius. en 1934, en Revista Española de Derecho Canónico, vol. XXIX, enero-abril, nº 82, 1973, págs. 205 y sigs.

ARIAS, C.: Discurso en las Cortes el 12 de febrero de 1974, en Revista Vida Nueva de 16 de febrero de 1974, pág. 6

- Discurso en las Cortes, el 28 de enero de 1976, en Diario "YA" de 29 de enero de 1976, pág. 14.

ARTECHE : "Crónica de quince días", en Revista Vida Nueva de 5 y 12 de enero de 1974

BALMES, J.: El protestantismo comparado con el catolicismo, Madrid, 1949, Editorial B.A.C.

BARBERENA, T.: Magisterio eclesiástico y libertad religiosa, en Revista Española de Derecho Canónico Vol. XXIII, septiembre-diciembre de 1967, Nº 66.

- Problemas de enseñanza en el Concordato español, en "La institución concordataria en la actualidad", Salamanca, 1971, Instituto San Raimundo de Peñafort.

BATLLE, M.: Consideraciones sobre la nueva Ley de libertad religiosa y el Derecho privado civil, en Revista General de Legislación y Jurisprudencia, Julio - Agosto, 1967, Nº 1-2. págs. 655-675.

BAUTISTA MONERO-RIOS, J.: El matrimonio civil de bautizados. El matrimonio civil de los españoles en el extranjero, en Estudios de Derecho Privado II, Madrid, 1965, págs 296 y sigs.

BEA: Libertad religiosa y transformaciones sociales, en " Razón y Fe" 169, 1964, págs. 341-356.

BERMUDEZ CANTON, A.: Legislación eclesiástica del Estado(1938-1964) Madrid, 1965. Editorial Tecnos.

- Elementos de Derecho eclesiástico español, en "Derecho Canónico", vol. II, Pamplona 1974. Ediciones universitarias de Navarra.

Bilan du Monde, 2 vols., Tournai, Casterman 1964.

BROGLIE, G.: El derecho natural a la libertad religiosa, Burgos 1965. Ediciones Aldecoa.

BROGLIO, F.M.: La protezione internazionale della Libertà Religiosa nella convenzione europea di diritti del'uomo, Milano 1967.

BUGAN, A.: La Comunità Internazionale e la Libertà Religiosa, Roma 1965.

BURGOS, J.M.: Gran mayoría de opiniones contra la confesionalidad del Estado, en Revista Vida Nueva, de 13 de febrero de 1971.

CANO MATA ANTONIO: Necesidad de un cambio en el sistema matrimonial español, en Boletín de Información del Ministerio de Justicia, nº 661 Año XIX- 5 de mayo de 1965, Madrid 1965.

CANTERO CUADRADO, P.: Reflexiones acerca de la libertad religiosa en el ordenamiento jurídico actual de España, en " La libertad religiosa una solución para todos", Madrid, 1964. Ediciones Studium.

CARRILLO DE ALBORNOZ: La libertad religiosa y el Concilio Vaticano II, Madrid 1966. Editorial Cuadernos para el Diálogo.

- Bases de la Libertad religiosa, Buenos Aires - Mexico, 1964.

CASTAN TOBENAS: Los derechos del hombre, 2ª edic, E. Reus, Madrid, 1976

CATTELAINE JEAN -PIERRE: La objeción de conciencia, Barcelona 1973, Ediciones Oikos, S.A.

CIERCO E. : Diálogo con un objetor de conciencia , en "Mundo Social" 181 Madrid 1970.

- Derecho civil a la libertad religiosa, en Revista Vida Nueva Nº 572, de 29 - 4- 1967.

COLOMBO CARLOS: El planteamiento de la libertad religiosa en "Ecclesia", 25 , 1965, págs 1151 - 1.155.

COMIN ALFONSO CARLOS: España, país de misión? Barcelona 1966.

CONCILIO VATICANO II, Madrid 1966 Ediciones B.A.C.

Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, Acta final - Helsinki 1975 . Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Madrid 1976.

CORRAL, CARLOS: La libertad religiosa en el Ordenamiento Internacional y sus previsibles consecuencias en el regimen español de confesionalidad. Comunicación al Congreso Internacional de Juristas Católicos de Acción Católica, Salamanca, septiembre 1965.

- La confesionalidad católica de España y el régimen de libertad religiosa son compatibles? en " Sal Terrae" 1965, 673-690.

- Libertad de la Iglesia e intervención de los Estados en los nombramientos episcopales: Revista Española de Derecho Canónico (1966) 63-92.

- Repercusión en España de la Declaración conciliar " Dignitatis Humanae" sobre la confesionalidad católica de España. en Revista Española de Derecho Canónico 1966, 269- 292.

- La Ley española de libertad religiosa ante el derecho comparado de Europa Occidental, en Revista Española de Derecho Canónico , 1967, págs. 623 y sigs.

- Análisis Político: I Estado e Iglesia según la Declaración de libertad religiosa. II Régimen de confesionalidad y Régimen de libertad religiosa. III La libertad religiosa y sus límites: El bien común o el orden público? en el libro: Universidad Pontificia de Comillas, Vaticano II - La Libertad religiosa, Madrid 1966 Editorial Razón y Fé.
- Análisis de las implicaciones jurídico positivas: I La situación jurídica actual de la libertad religiosa en el mundo. II La confesionalidad católica del Estado español ante las normas de la Declaración conciliar, en Vaticano II - La Libertad religiosa, Madrid 1966, págs. 567 y sigs.
- Valoración comparada de la legislación española de libertad religiosa, en Revista Española de Derecho Canónico, Vol. XXIV, Nº 68, mayo-agosto 1968, págs 321 y sigs.
- Normas complementarias para el ejercicio del derecho civil a la libertad en materia religiosa, en Revista Española de Derecho Canónico. Vol. XXIV nº 68, mayo agosto 1966.
- El Ordenamiento español de libertad religiosa, en Revista Española de Estudios Políticos (1968) 100.
- La libertad religiosa en la Comunidad Económica Europea, Madrid 1973. Instituto de Estudios Políticos.

CORRAL y G.M. CARVAJAL: "Relaciones de la Iglesia y el Estado", Madrid 1976, Facultad de Ciencias políticas -Universidad Complutense - Facultad de Derecho Canónico -Universidad Pontificia "Comillas".

- CORRAL: Estado e Iglesia según el Vaticano II, en "Relaciones de la Iglesia y el Estado", págs. 27-55.
- "Teoría de las relaciones de Iglesia y Estado", en Relaciones de la Iglesia y el Estado, pág. 21- 27.
 - Los sistemas político-religiosos vigentes en el mundo, en Relaciones de la Iglesia y el Estado" págs 71-91.
 - La libertad religiosa y sus límites. en Relaciones de la Iglesia y el Estado, págs 103- 117.
 - La Libertad religiosa en el Orden Internacional, en Relaciones de la Iglesia y el Estado, págs. 117-145.

- El sistema jurídico -positivo español de relaciones Iglesia-Estado, en "Relaciones de la Iglesia y el Estado" págs 199-235.
- El Concordato español ante los concordatos vigentes , en "Relaciones de la Iglesia y el Estado", págs. 235-277.
- El privilegio de presentación, en " Relaciones de la Iglesia y el Estado", págs 277-319.
- El privilegio del Fuero hoy, en " Relaciones de la Iglesia y el Estado", págs. 319- 329.
- Ordenamiento jurídico español de libertad religiosa y su valoración comparada, en "Relaciones de la Iglesia y el Estado" págs.389-419.
- Comentario a las normas complementarias de la Ley de libertad religiosa, en " Relaciones de la Iglesia y el Estado", págs. 419-427.

CRISOSTOMO, J.: In Epist. ad Rom.

CUELLO CALON: Derecho Penal, Tomo II, Vol. I Parte Especial, Barcelona, 1972, Edbrería Bosch.

Declaración Dignitatis Humanae, en Vaticano II, Historia- Doctrina- Documentos, Barcelona, 1966. Editorial Regina S.A.

DELAYE: La persona, su naturaleza, sus progresos, sus derechos, en " Persona y Sociedad " México, 1947.

DIAZ MORENO: El matrimonio meramente civil en España, en Revista "Sal Terrae" vol. 61- agosto septiembre de 1973, nº 8-9 pág. 589 y sigs.

DIEZ ALEGRÍA (JOSE MARIA): La libertad religiosa , Barcelona 1965. Instituto Católico de Estudios Sociales.

- La libertad religiosa, en " Libertad religiosa una solución para todos" Madrid, 1964.

ENRIQUE Y TARANCON, VICENTE: Homilia en la misa del Espiritu Santo con que Juan Carlos I ha querido inaugurar su reinado, en "YA" de 28 de noviembre de 1975, pág. 12.

- Discurso de apertura de la XXIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal española , en "YA" de 16 de diciembre de 1975, pág. 21.
- Carta Cristiana sobre la Iglesia ante el momento actual, en "YA" del 18 de enero de 1976, pág. 20.
- Homilia , en Revista Vida Nueva de 6 de abril de 1974, pág. 9.

EPISCOPADO ESPAÑOL: Instrucción de la Conferencia de Metropolitanos españoles sobre la propaganda protestante en España, de 28 de mayo de 1948, Revista Ecclesia, nº 361, 19-6-1948.

- Declaración colectiva del Episcopado español, de 8 de diciembre de 1965, en "Concilio Vaticano II, Constituciones, Decretos, Declaraciones", Madrid, 1965.
- Declaración colectiva del Episcopado Español de 22 de enero de 1968, sobre libertad religiosa. Revista Ecclesia, nº 1.376, de 27 de enero de 1968.
- Declaración colectiva de la Conferencia Episcopal sobre "La Iglesia y la Comunidad Política", de 23 de enero de 1973, en Revista Ecclesia, nº 1.627, de 27 de enero de 1973.

Estadística de la Enseñanza -Curso 1973-74, presentada por el Instituto Nacional de Estadística. Madrid, 1975, págs. 32-y 234.

ESTEPA(Monseñor): La enseñanza religiosa es de competencia exclusivamente eclesial, en "YA" de 4 de abril de 1974, pág. 43.

Estudios Sociológicos sobre la situación social de España, 1975, Fundación FOESA, Madrid 1976.

FERNANDEZ AREAL: La Iglesia y el Estado- Textos comentados , en Revista Mundo - 23 de enero de 1971, pág. 18.

- La política católica en España, Barcelona, sin fecha, Dopesa.

FERNANDEZ DE CASTRO: Unidad política de los cristianos? Madrid, 1959, Ediciones Taurus.

FRAGA IRIBARNE, MANUEL: La república, Barcelona 1974, Editoril Planeta.

- "Un Objetivo Nacional", Barcelona 1975, Editorial Planeta.
- "Las Leyes", Barcelona 1975, Editorial Planeta
- "El problema concordatario", en R. S. Cuadernos de Realidades Sociales, Madrid 1973, Nº 2.

FRANCO FRANCISCO: "Mensaje a los españoles el último fin de año" de 1972.

FUEN MAYOR AMADEO DE: El Convenio entre la Santa Sede y España, sobre Universidades de estudios civiles, Pamplona 1966.

FUSTE DE COULANGE: La Cité antique.

GALLINA, E.: La Chiesa Cattolica con le organizzazioni internazionali per i diritti umani, Roma, 1968.

GARCIA ARIAS L.: Corpus Iuris Gentium, Zaragoza 1968.

GARCIA DE ENTERRIA: Código de Leyes administrativas, Madrid 1966.

GARRIGUES: "La relación entre la Iglesia y el Estado es conflictiva" en Diario Informaciones de 29 de junio de 1974.

GIL DELGADO FRANCISCO: Conflicto Iglesia - Estado, Madrid 1975, Ediciones SEDMAY, S.A.

- GIMENEZ Y MARTINEZ DE CARVAJAL JOSE: "Temática general de la revisión del Concordato español", en "La institución concordataria en la actualidad", Salamanca 1971. Instituto San Raimundo de Peñafort.
- "Renuncia de privilegios por parte de la Iglesia" en Boletín Informativo de A.C.N.De P. mayo de 1973, pág. XI y sigs.

GIMENEZ Y MARTINEZ DE CARVAJAL J. Y CORRAL C.: Relaciones de la Iglesia y el Estado, Madrid 1976.

GIMENEZ Y MARTINEZ DE CARVAJAL: Principios doctrinales de las relaciones Iglesia - Estado, en "Relaciones de la Iglesia y el Estado" págs 55- 71.

- "Los concordatos en la actualidad", en " Relaciones de la Iglesia y el Estado", págs. 145-199
- La renuncia de la Iglesia a los privilegios", en Relaciones de la Iglesia y el Estado", págs. 329-345.
- Temática general de la revisión del Concordato español", en " Relaciones de la Iglesia y el Estado", págs. 345-389.

GOETHE: Pensamientos, Barcelona 1958. Ed. Sintet.

GONZALEZ CAMPOS J. : Jurisprudencia española sobre cuestiones de Derecho Internacional Público. Revista Española de Derecho Internacional Público, 18(1965), págs. 549-550.

- "La libertad religiosa y reclamaciones internacionales" en Homenaje al Profesor Gimenez Fernandez I, Sevilla 1967, págs 409- 473.

GREGORIO XVI: Enciclica "Mirari vos", 15 de agosto 1832, en Colec. Madrid, 1948, págs 37-48.

GUERRERO LOPEZ, E.: La libertad religiosa y el Estado Católico, Madrid, 1960.

HAMBURGER ERNEST : Droits de l' homme et relations internationales en Rec. des Cours, 1959, II, págs. 302 y sigs.

HAMER: Le Catholique reclame - t-il la liberte religieuse? , en "La Revue Nouv. 1950 , 6.

HAMER, JERONIMO: Historia del Texto de la Declaración, en "La libertad religiosa. Madrid 1969.

HARTMANN: Vraie et fausse tolerance, versión francesa de A. Bernard, de Toleranz und Christlicher glaube, Les Editions du Cer, Paris, 1958.

HERA(DEL LA): Pluralismo y libertad religiosa(Anales de la Universidad Hispalense- Sevilla - Serie Derecho N 10- 1971

HERRERA ORIA, ANGEL: Nuestra posición ante la libertad religiosa, en Revista Ecclesia, 24 (1964),pág. 1821.

HERRERO RUBIO , ANTONIO: Derecho Internacional Privado I, Valladolid, 1964, pág. 516.

HERREO TEJEDOR, FERNANDO: El Estado de Derecho en las Leyes Fundamentales españolas. " Revista de Estudios Políticos", Nº 152, Madrid 1967.

IGESIAS SELGAS,CARLOS: Iglesia y Ley de Educación en R.S. Cuadernos de Realidades Sociales, Nº 2, Madrid, 1963.

Informe episcopal sobre formación religiosa escolar en "YA", 6 -X- 1971, pág. 21.

JANSENS L.:Liberté de conscience et liberté religieuse, Paris 1964.

JIMENEZ LOZANO,JOSE: Meditación española sobre la libertad religiosa, Barcelona 1966. Ed. Destino.

JIMENEZ URRESTI ,T.I.: Estado e Iglesia, Vitoria ,1958. Ed. del Seminario.

- El Ecumenismo en el Concilio y en España. III. Ecumenismo y Libertad religiosa , en Revista ACN De P., 1 de abril,1964.
- Presentación a la declaración conciliar sobre libertad religiosa. Madrid,1965. Ed. P.P.C.
- Especial reconocimiento a una comunidad religiosa y límites de la libertad religiosa. Revista "Hechos y dichos",1966.
- La libertad religiosa vista desde un país católico, España. Rev. Concilium, nº 18,1966.
- De natura iuridica iuris ad libertatem religiosam, Rev. Esp. vol. XXVI,1966.
- La libertad religiosa en la España de hoy, rev. "Arbor", nº 256, 1967.
- Relaciones Iglesia - Estado en el momento actual español, en Boletín Informativo de A C. N.De P. - abril 1970 nº 881.

JUAN XXIII: Encíclica " Ad Petri Cathedram", 29 de junio de 1959.

AAS 51(1959), págs 497-531.

- Encíclica "Mater et Magistra", 15 de mayo de 1961. AAS 53(1961) págs 505-564.
- Encíclica "Pacem in terris", 11 abril 1963. AAS 55(1963) págs 257-304; y en " Cinco grandes mensajes", Madrid 1968 . Edit. por J. Iribarren y J.L. Gutierrez García.

JUBANY (Monseñor): Revisión de las relaciones Iglesia - Estado - Acuerdos parciales con la Santa Sede , con intervención de la Conferencia episcopal", en YA" 3 - diciembre- 1971, pág. 23.

KEESIN'S Contemporary Archives, February 23- 1975, p. 26968.

KONIG.F.: Cristo y las Religiones de la Tierra, Madrid, 1960 Ed. B.A.C.

KRISHNASWAMI: Estudio sobre la discriminación en materia de libertad de religión y de prácticas religiosas . Naciones Unidas, Nueva York, 1960.

KUNG, ANS: La Iglesia, Barcelona 1969.

LACRUZ BERDEJO - SANCHEZ REBULLIDA.: Derecho de familia, I Barcelona, 1974. Librería Bosch.

LACTANCIO: Divinae Institutiones. Lib. 5, c 20 y 21; Pl..6, 616 y 620.

LALINDE ABADIA(Jesus): Iniciación histórica al Derecho español, Barcelona 1970. Ediciones Ariel.

LANARES, PIERRE: La liberté religieuse dans les conventions internationales et dans le droit public general. Edit. Horvath 1965.

LAURENT : Historia de la humanidad.

LECLER, JOSEPH: Histoire de la tolerance au siecle de la Reforme, 2 ol. Paris 1959.

- Historia de la tolerancia en el siglo de la Reforma, versión española de Antonio Meliá. Alcoy, 1969.

LEGAZ LACAMBRA, LUIS: La noción jurídica de la persona humana y los derechos del hombre , Revista - Estudios Políticos, 1951, nº 35, págs. 15-16.

LENER, S.: Libertá di culto e ordine públlico - "Civité Catt. 104
(1953. I) págs. 48-61 - 641- 653.

LEON XIII: Encíclica "Humanum genus", 20 abril 1884. ASS (1883-1884)
págs. 417-433.

- Encíclica "Immortale Dei", 1 noviembre 1885. ASS 18(1885), págs
161-180 ; y en Col. Encícl. " Madrid 1948, págs 121-140.

LOPEZ ALARCON: Matrimonio civil y obstáculo legal de profesión de
la religión católica- Revista Española de Derecho Canónico, Vol.
XXIX 1973, nº 82

LOPEZ ALARCON: La jurisdicción competente para conocer de las cau-
sas de separación en el matrimonio canónico- Anales de la Univer-
sidad de Murcia 27(1969) págs 142-146 y 149.

LOPEZ ALARCON ANTONIO: Autonomía de la jurisdicción eclesiástica y
su reconocimiento por el Estado español- " Fenómeno religioso
en España- Aspectos jurídicospolíticos, Madrid 1972. Instituto
de Estudios Políticos.

LOPEZ JORDAN RAFAEL: Libertad religiosa una solución para todos,
Madrid 1964. Ediciones Studium.

- Libertad de cultos y de propaganda religiosa, Madrid 1964. Edi-
ciones Studium.

- Levando el ancla, Madrid 1964. Ediciones Studium.

LOPEZ MARTINEZ , ALFREDO: La Iglesia y el Estado.- "Mundo 23 enero
1971

- La Iglesia desde el Estado, Madrid 1972. Editora Nacional.

LOPEZ DE PRADO, JOAQUIN: Analisis jurídico , en "La Libertad reli-
giosa. Analisis de la Declaración "Dignitatis humanae", Madrid,
1966.

- Derecho humano y derecho cristiano a la libertad religiosa. Revis-
ta Española de Derecho Canónico, vol. XXI, 1966.

- Recepción de la libertad religiosa en el ordenamiento jurídico español. " Revista Española de Derecho Canónico", vol. XXIII, 1967.
- El proyecto de Ley sobre la libertad religiosa ante la Declaración "Dignitatis humanae". Revista "Razón y Fe", nº 832, 1967.
- La libertad religiosa en el Fuero de los Españoles. Revista "Razón y Fe", nº 175, 1967.

LUCES GIL: La reforma del Reglamento del Registro Civil, Madrid, 1970.

- LUMBRERAS MEABE: Un problema sin resolver (II) - Universidades no estatales: Convenio Universitario entre la Santa Sede y el Estado Español", "YA" 18 junio 1974, págs 7 y 8.
- (III) Urge promulgar las bases de las Universidades no estatales. "YA" , 22 junio 1974.

MAIRENA VALDAYO, JUAN: Estado y Religión. El valor religioso en el ordenamiento jurídico del Estado. Salamanca 1968. Instituto San Raimundo de Peñafort.

- MALDONADO JOSÉ: El Convenio de 5 de abril de 1962 sobre reconocimiento a efectos civiles de los estudios de ciencias no eclesíásticas, en Revista Española de Derecho Canónico 18(1963) 137-139
- "Los cultos no católicos en el Derecho español", en " El Concorato de 1953". Madrid 1956.

MARITAIN, JACQUES: Les droits de l'homme et la loi naturelle. New York, 1943.

- Los derechos del hombre y la Ley natural. Traducción de Hector F.Miri. Buenos Aires ,15 enero 1961. Editorial Dédalo.
- Humanisme intégral, nouvelle édition. Paris 1946.
- L'homme et l'Etat. Paris 1950
- Religion et Culture nouvelle édition Paris 1946. Edition Desclée de Brouwer.

MARTÍN-ARTAJU: Concordato de 1953, en Diccionario de Historia Eclesiástica de España, págs. 595 y sigs.

- Las reformas de carácter institucional del Estado español exigen un nuevo Concordato- Boletín Inf. de A.C. N. De P. abril 1970.

- "Es preciso un nuevo Concordato en las relaciones Iglesia - Estado", en "YA", 22 junio 1974.

MARTIN MARTINEZ, ISIDORO: Concordato de 1953 entre España y la Santa Sede, Madrid 1961.

- "Libertad religiosa y Estado católico despues del Concilio Vaticano II", en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid, vol. XIII nums. 34-35-36, Madrid, 1969.
- Libertad de la Iglesia y Concordatos, en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid, vol. XIV Madrid 1970, nº 36,
- Presentación del libro: "El fenómeno religioso en España. Aspectos jurídico-políticos, Madrid 1972. Instituto de Estudios Políticos.
- "Presencia de la Jerarquía de la Iglesia católica en organismos del Estado español", en "El fenómeno religioso en España .."
- Doctrina católica actual sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado, en "Derecho Canónico vol. II Madrid, 1974. Ediciones Universidad de Navarra.

MARTIN SANCHEZ CARLOS ISIDORO: "La patria potestad y la Educación religiosa de los hijos en el Derecho español", en "El fenómeno religioso en España. Aspectos jurídico políticos, Madrid 1972.

III

MARX KARL: Introducción para la crítica de la Filosofía de Hegel, en el libro: Filosofía del Derecho de Hegel, Buenos Aires 1955.

MEJAN, F. : La licité de l'Etat en droit positif et en fait en : La laïcité, Paris 1960, págs. 201-246. (Versión española, Madrid, 1963. Edic. Taurus, págs 123-182.).

Mensaje (Primer) de la Corona, en "YA" 22 noviembre 1975.

MESNER J.: La cuestión social, Madrid 1960

MESSINEO, ANTONIO: Libertà religiosa e libertà di coscienza, en "C. Catt.", 101 (1950) III, págs. 237- 247.

- Democrazia e religione, Ibid., 101 (1950, IV), págs 137- 48.

IV

- L'obiezione di coscienza, Ibid. 101(1950, IV) págs 361-369.
- Democrazia e libertà religiosa, Ibid. 102(1951, II) págs. 126-137.

MIGUEL ZARAGOZA, JUAN: El derecho de objeción de conciencia en el Consejo de Europa, en Boletín de Información del Ministerio d de Justicia, Nº 891 , año XXV, 25 de septiembre de 1971.

MIRET MAGDALENA E.: La Iglesia en la encrucijada, en Revista Tiunfo, 16- III-1-74

- Los nuevos católicos. Barcelona 1966. Ed. "Nova Terra".

MONCADAS (Mons.): Voces de renovación , en Revista Vida Nueva, de 24 octubre 1970.

MONROY J. : Libertad religiosa y Ecumenismo, Madrid 1967.
. Editorial IRMAYOL.

MONTERO RIOS, JOSE B. : El matrimonio civil de bautizados . El matrimonio civil de los Españoles en el Extranjero. Madrid, 1965. Estudios de Derecho Privado, II, pág. 300.

MORALES F.J. : Unidad religiosa unidad nacional, en Rev. Proyección, nº 51, 1966.

MORCILLO, C.(Mons.): La libertad religiosa según el Concilio, Madrid, 1966.

MOSLER HERMANN: La protección de los derechos humanos en el ámbito europeo, conferencia pronunciada en la Fundación " Dragan", "Informaciones " 16- IV- 1973.

MUÑOZ J.: Libertad religiosa aquí hoy. Comillas , 1964.

MUÑOZ PALACIOS, R.: El Proyecto de Ley sobre libertad religiosa. Revista " Cuadernos para el Diálogo", nº 43, 1967.

- MURRAY, JOHN C.: En torno a la libertad religiosa, en La libertad religiosa -Una solución para todos, Madrid 1964.
- La libertad religiosa, en "La Libertad y el hombre", Buenos Aires, 1965.
 - Le probleme de la liberté religieuse au Concile, en "La Liberté religieuse exige spirituelle et problème politique", Paris, 1965.
 - La Déclaration sur la liberté religieuse. "Nouvelle Revue Theologique", LXXXVIII, 1966.
- NARBONA F. : El divorcio viaja a España, Madrid 1975. Ediciones A.Q.
- NAVARRO VALLS R.: "Divorcio: Orden público y matrimonio canónico"
" Eficacia en España de las sentencias extranjeras de divorcio", Madrid 1972. Editorial Montecorvo.
- NEWMAN , J. H. : El asentimiento religioso (Barcelona 1960)
- NICOLAU, M.: Magisterio eclesiástico sobre la libertad religiosa.
- NOGUER, N.: La escuela única y el decreto de libertad de cultos, en "Razon y Fe", 97(1931), págs. 89-111.
- OREJA MARCELINO: "Análisis y desarrollo de la libertad religiosa en España", en Rev. A. C.N.De P., mayo 1973 p. V y sigs.
- ORIOI Y URQUIJO, A.Mª: Conferencia de prensa, 7 de mayo 1967. "YA", 8 de marzo 1967
- Discurso a las Cortes Españolas, 26 junio 1967. " Revista Española de Derecho Canónico", vol. XXXIII, 1967
- ORTEGA Y G.ª; La Historia como sistema. Madrid 1970 . Colec. El Arquero.
- ORTEGA JOAQUÍN: "Preparada la fase operativa de la revisión del Concordato en Madrid", en Rev. Vida Nueva, 10 noviembre 1973,

- " Tras las conversaciones Casaroli-Cortina", en Rev. Vida Nueva 15 junio 1974.
- Tan cordiales como secretas las conversaciones Casaroli- Cortina", en Rev. Vida Nueva 20 julio 1974.

PABLO VI: Encíclica Ecclesiam Suam , en AAS 56(1964)

- Discurso a las Misiones Diplomáticas llegadas a Roma para la clausura del Concilio, 7-12-1965, AAS 58(1966), págs 71-75.
Encíclica "Populorum progressio", 26 de marzo de 1967. AAS 59(1967), págs 257-299
- Discurso al Congreso Internacional de Derecho Canónico 19 enero 1970 en l' Osservatore Romano, 19 enero 1970 y en Ecclesia 31 enero 1970.
- Discurso en la presentación de Cartas credenciales del Embajador de Yugoslavia 12 noviembre 1970, en Revista Ecclesia noviembre de 1970.
- Carta apostólica " Octogésima adveniens", 14 de mayo 1971, en el LXXX Aniversario de la Encíclica " Rerum novarum" AAS 63(1971), pags. 402-441.
- La evangelización del mundo contemporaneo, traducción castellana de la Políglota Vaticana P.P.C. Madrid 1975.

PEASLEE: Constitutions of Nations Revised third ed. Netherlands, 1965.

PERE RALUY: Reflexiones sobre el Derecho del estado civil y su Registro , en Revista Pretor, número 53, pág. 677.

PECES-BARBA(Gregorio): Derechos fundamentales. I, Madrid, Barcelona, 1973

PEREÑA VICENTE LUCIANO: La objeción de conciencia en España. Salamanca 1971. Universidad Pontificia de Salamanca.

PEREZ ALHAMA JUAN : La Iglesia y el Estado, Madrid 1967. Instituto de Estudios Políticos.

PEREZ BAUNIN: "Puntos de vista", en Rev. Mundo - 1-XII)1973.

PEREZ LLANATADA JAIME: La Ley 44/1967 y los derechos civiles individuales de libertad religiosa, en el libro: " El fenómeno religioso en España. Madrid. 1972.

- La libertad religiosa en España y el Vaticano II. Madrid , 1974. Instituto de Estudios Políticos.

PEREZ MIER: Iglesia y Estado Nuevo, Madrid, 1940.

PERLADO(PEDRO ANTONIO): La libertad religiosa en las Constituyentes del 69, Pamplona 1970. Ediciones Universidad de Navarra.

PERPIÑA FERNANDO: España y el Concilio Vaticano II. Memoria presentada a la Escuela Diplomática. Madrid 1965.

PIO IX: Encíclica "Cuanta cura", 8 de diciembre 1864. AAS 3 (1867), págs 160-176.

- Syllabus, 8 diciembre 1864. AAS 3(1867), 167 y ss.

PIO XI: Encíclica "Non abbiamo bisogno", 29 junio 1931. AAS 23(1931), págs 285- 332.

- Encíclica " Mit brennender Sorge", 14 marzo 1937. AAS 29 (1937), págs 145-167.

- Encíclica " Divini redemptoris", 19 marzo 1937. AAS 29(1937), págs. 65-106.

PIO XII: Discurso al Congreso de Estudios Humanísticos de Roma, 25 de septiembre 1949. AAS 41(1949), págs 555-556.

PRIBILLA, MAX: Intolerancia dogmática y tolerancia civil. Rev. "Documentos", 4, 1950.

PRIETO RIVERA, MARTIN: La libre propaganda religiosa en los países católicos. Sevilla, 1965.

PORTERO LUIS: "Régimen matrimonial español y Concordato" , en el libro: "La institución concordataria en la actualidad ", Salamanca , 1971

POZO TAMAMES: Un pueblo más consecuente con su fe resultado de la independencia económica de la Iglesia, en "YA" 6 agosto 1975.

QUINTA CABANAS JOSE: La educación en la familia y en la escuela.
Alcoy, 1969. Marfil.

QUILES S.I.(ISMAEL): Libertad y cultura. Buenos Aires 1958. Club
de Lectores.

QUINTANO RIPOLLES: La objeción de conciencia ante el Derecho Penal.
Estudios de Deusto XIII, Bilbao 1965 - 301.

RACHID AMED: Islam et Droit de gens, Rec. 1937, II pág. 440 y ss.

RANER KARL: Dignidad y libertad del hombre, en Escritos de Teolo-
gía vol. II, Madrid 1961, págs 245 y ss.

- "El Estado confesional es un anacronismo", en "Informaciones 4
de abril de 1974, pág. 17.

RECASENS SICHES: Vida humana sociedad y Derecho . México 1952.

- Tratado General de Filosofía del Derecho, México, 1965.

ROLIN H. : Vers un ordre public reellement international" en "Hommage
au Pr. Basdevant", Paris 1960 págs 440-462.

RODRIGUEZ VICTORINO: La libertad político-religiosa para las con-
fesiones acatólicas, derecho estricto del hombre?, en "Ciencia
Tomista" , 90 (1963), págs 319-332.

- Sobre la libertad religiosa. Rev. "La ciencia Tomista", XCI, 1965.

- Estudio histórico -doctrinal de la Declaración sobre libertad
religiosa del Concilio Vaticano II. Revista "La ciencia Tomista",
XCIII, 1966.

RODRIGUEZ RIVERA, J.: La libertad del cristiano. Rev. "Proyección ",
nº 39, 1963.

RODRIGUEZ DE YURRE, G. Iglesia y Estado en España. Puntos de vista
sobre el mismo tema. Rev. "Iglesia Viva", nº 22, 1969.

ROSA LUIGI: Libertad de conciencia y libertad religiosa, en "Liber-
tad religiosa , una solución para todos", Madrid 1964.

RUFFINI: La libertad religiosa Torino 1901

- Corso di Diritto ecclesiástico italiano ,Torino 1924.
- Diritti di libertà ,Torino 1926.
- La liberta religiosa come diritto publico subjetivo",Torino 1964

RUIZ-GIMENEZ CORTES, JOAQUIN: El Concilio y los derechos del hombre. Madrid, 1968.

- " El derecho a la intimidad", en "YA" de 14 de enero de 1969.
- " Relaciones Iglesia - Estado en el momento actual español", en Boletín Informativo de A.C.N De P. abril 1970, Nº 881
- "Insatisfacciones- Mesa redonda sobre la Iglesia y la Comunidad política", en Rev. Cuadernos para el Diálogo, febrero 1970, pág.80.
- "Lucha por la liberación", en Rev. Cuadernos para el Diálogo, febrero 1973

RUPEREZ JAVIER: Estado confesional y libertad religiosa. Madrid,1970. Editorial Cuadernos para el Diálogo.

Sagrada Biblia, Versión directa de las lenguas orientales por ELOINO NACAR FUSTER Y ALBERTO COLUNGA CUETO O.P. - Cuarta Ed. Madrid, MCMLXX.

SAINZ BARBERÀ JUAN : Pensamiento histórico cristiano, Madrid, 1967.

SANCHEZ AGESTA, LUIS: Historia del constitucionalismo español. Madrid, 1955.

- Principios de Teoría Política, Madrid 1970.
- Documentos constitucionales y supranacionales con inclusión de las Leyes fundamentales de España . Madrid, 1973. Editora Nacional.

SAN AGUSTIN: Tractatus XXVI in Joan. 2.

SANCHEZ RUBIO? JOSE: Juicio imparcial y comentarios sobre el Concordato de 1851, celebrado entre S.S. Pio IX y S.M. C. la reina Isabel II. Madrid 1853.

SANCHO REBULLIDA: Las formalidades civiles del matrimonio canónico, Madrid, 1954.

- Patria potesta y educación religiosa de los hijos en Rev. de la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra (Ius Canonicum) julio -diciembre 1965, vol. V.fasc. II págs. 463-473.

SCHULER, MAX: El puesto del nombre en el cosmos, Buenos Aires, 1971. Editorial Losada.

SEBASTIAN FERNANDO: Orientaciones teológico-pastorales para la revisión de un Concordato. Revista "Iglesia Viva", nº 22, 1969.

- "Universidad y política", en "YA" 2 diciembre 1975.

SEGARRA, F.: Iglesia y Estado, Madrid, 1963.

SENECA LUCIO ANNEO: T. II in quo Epistolae et Quaestiones Naturales-Patavii Johannes Manfré.

SETIEN, JOSE M^a: Iglesia y libertades políticas, Madrid, 1964.

- Contenido doctrinal de la Declaración "Dignitatis humanae", Revista "Iglesia Viva", nº 2, 1966.

SEVILLA ANDRES, DIEGO: Historia política de España (1800-1967), Madrid, 1968.

- Constituciones y otras leyes y proyectos políticos de España, Madrid, 1969.

SIACA M.F.: Libertad y persona humana, en Rev. Estudios Políticos, 35- 1951, págs 104-ysigs.

SIDNEY Z. EHRLER: Historia de las relaciones entre Iglesia y Estado, Madrid, 1966. Ediciones Rialp.

SIMON, JULES: La liberté de conscience, Paris, 1867.

SIMO SANTOJA, VICENTE LUIS: Divorcio y Separación- Derecho comparado y conflictual europeo, Madrid, 1973. Editorial Tecnos.

SMEDT, EMILE JOSEPH DE: Discours au Concile ,Paris 1964.

- Les conséquences pastorales de la Déclaration, en " La liberté religieuse", Paris 1967.

- "Relación presentada al Concilio", en Libertad religiosa , una solución para todos" Madrid, 1964.

SOFOCLES: Antígona- Traducción de Miralles Solá(Carlos) ,Navarra 1969. Biblioteca Básica Salvat - Libro RTV,53.

TERTULIANO: Ad scapulam,c.2.: PL. 1699.

TEMIÑO: "Las circunstancias concretas de cada lugar determinan la libertad religiosa. El Ecumenismo , menester de teólogos" , en Revista Ecclesia, 24 1964,págl 686.

TODOLI: Filosofía de la Religión,Madri,1959.

TOMAS (San) : Art.11,cuestion 10ª de la 2ª 2ª

- In II Physic,14.

- Summa Theol. 2 q.29, 1

- Summa contra Gentes III,c. 3.

TRUYOL SERRA, A.: Los derechos humanos, Madrid,1968. Editorial Tecnos.

VALCARCE ALFAYATE, ENRIQUE: Coexistencia y convivencia, Madrid,1965. Ediciones y Publicaciones Españolas.

- El Estado y la libertad religiosa , Madrid,1965. Gráficas Ibero-americanas.

- Hacia un divorcio restringido, Barcelona 1973. Editorial Bosch.

- "...Y el matrimonio qué? Madrid,1975.

VALIENTE, TOMAS: Libertad religiosa y Derecho constitucional, en Boletín Informativo de Ciencia Política Nº 5 diciembre 1970.

VARIOS : Ensayos sobre la libertad religiosa , Barcelona 1967.
Editorial Estela.

Vaticano II, historia- doctrina- documentos, Barcelona 1966.
Editorial Regina.

VELA , LUIS: Análisis filosófico en "La libertad religiosa. Análisis de la Declaración " Dignitatis humanae", Madrid, 1966.

BERA URBANO, FRANCISCO: La libertad religiosa como derecho de la persona , Madrid, 1971. Instituto de Estudios Políticos.

VERDROSS ALFRED: Derecho Internacional Público. Traducción directa del alemán por Antonio TRUYOL Y SERRA, Madrid, 1963
Edic. Aguilar.

VERMEERSCH , A.: La tolerance. Lovaina, 1912; Versión castellana: La tolerancia. Buenos Aires, 1950.

VIDAL, Daniel: Nosotros , los protestantes españoles, Madrid, 1968.

VITORIA, FRANCISCO DE: De jure Belli, n 23 , Madrid 1934, pág. 407.
Ed. Getina.

YEAR BOOK, of the United Nations, 1965.

YANES ALVAREZ: El Documento y su significado en la evolución de la Iglesia Española, en Boletín de A.C.N.DE P. mayo 1973, Nº 918.

- "Claridad independencia y cooperación," en "YA" 30 de marzo de 1973, pág. 21.

ZAPICO; Estado laico o Estado confesional , Madrid, 1968.

ZARAGUETA, JUAN: Problemática de la libertad, en " La libertad", Madrid, 1957.

ZAVALONI ROBERTO; Educación y personalidad. Madrid, 1958. Editorial " Razon y Fe".

ZUBIRI, J. : Naturaleza , Historia, Madrid, 1950.

NOTA

Los textos internacionales vigentes sobre el derecho de libertad religiosa estan tomados del YEAR BOOK OF THE UNITED NATIONS; de ediciones hechas por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, o de ediciones críticas como la de A. TRUYOL: Los derechos humanos; la de A. BUGAN, La comunità internazionale e la libertà religiosa; la de E.GALLINA, La Chiesa cattolica con le organizzazioni internazionali per diritti umani; la de F.MARGIOTTA BROGLIO , La protezione internazionale della libertà religiosa nella convenzione europea dei diritti dell uomo, y la de P.LANARES, La liberté religieuse dans les conventions internationales et dans le droit public general.

Los textos de las constituciones actuales de los diversos Estados del mundo referentes al derecho de libertad religiosa han sido tomados fundamentalmente de A.J. PEASLEE, Constitutions of Nations - The first compilation in the English language of the texts of the constitutions of various nations of the world, y del KEESING'S CONTEMPORARY ARCHIVES.

Los artículos de las leyes españolas están tomados del texto del Boletín Oficial del Estado o del de las Cortes Españolas.

Los textos de las Constituciones y Leyes Fundamentales han sido tomados de la publicación oficial correspondiente.

En cuanto a las Resoluciones sobre reconocimiento legal de Asociaciones confesionales no católicas dictadas hasta el día 15 de diciembre de 1975 están tomadas de la publicación oficial del Ministerio de Justicia - Comisión de Libertad religiosa.

Para la elaboración de este trabajo ha sido manejado también un cierto número de revistas y diarios. Entre las revistas más utilizadas están: Vida Nueva, Ecclesia, Cuadernos para el Diálogo, Acción Católica Nacional De Propagandistas, Revista de la Facultad

de Derecho de la Universidad de Madrid, Revista Española de Derecho Canónico, Revista de Derecho Internacional, Revista de Estudios Políticos, Razón y Fe, Sal Terrae, Hechos y Dichos y Revista Concilium.

Con el fin de no remitir continuamente al índice bibliográfico, cuando de un autor aparece citada por vez primera una obra, se da su referencia completa. Las siguientes veces se utiliza la expresión usual ob. cit. o loc. cit. o art. cit. precedida del nombre y si se repite la cita en una misma página se emplea la locución ibidem.

Si de un mismo autor se citan diversos trabajos, después de su nombre se especifica el comienzo del título de la obra de referencia, añadiéndose la expresión loc. cit. u ob. cit., en las cit. segunda y siguientes; prefiriéndose la redundancia a la falta de claridad.

I N T R O D U C C I O N

Dos hechos de especial importancia nos han impulsado a intentar realizar un estudio profundo y objetivo del derecho de libertad religiosa y de su reconocimiento en el actual ordenamiento jurídico español: el haber realizado un curso monográfico del Doctorado sobre "problemas jurídicos de la libertad de conciencia", que de forma tan sabia como brillante dió en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid el Dr. D. Joaquín Ruiz-Giménez Cortés, catedrático de Derecho Natural y Filosofía del Derecho de dicha Universidad, durante el curso académico de 1964- a 1965, e ,indudablemente, la Declaración Dignitatis humanae del Vaticano II sobre el derecho de libertad en materia religiosa.

Hemos querido que la presente investigación fuese precedida de un capítulo preliminar dedicado a poner de relieve la importancia del derecho de libertad religiosa, y la hemos dividido en dos partes bien definidas. En la primera examinamos el derecho de libertad religiosa, presentándolo como un derecho humano y civil, fundado en la dignidad de la persona humana y referible, por tanto, a todos los hombres creyentes y no creyentes o ateos, y analizamos también en la misma parte, la situación jurídica de la libertad religiosa en los documentos internacionales y en las Constituciones de los diferentes Estados del mundo. En la segunda analizamos el reconocimiento del derecho de libertad religiosa en el actual ordenamiento jurídico español y señalamos las medidas que consideramos más oportunas y urgentes a adoptar por parte del Estado español en orden a un mejor y más eficaz reconocimiento de dicho derecho.

Queremos expresar nuestro más sincero y profundo agradecimiento al Dr. Don Joaquín Ruiz-Giménez Cortés por haber aceptado gustosamente la dirección de esta tesis haciendo así posible su redacción.

Nos consideramos ampliamente satisfechos si con este trabajo en el que hemos procurado llevar como estandarte la claridad y sistematización contribuimos, en alguna medida, a mostrar la importancia, fundamento y significación del derecho de libertad religio-

-sa, así como a esclarecer cual es el efectivo reconocimiento de este derecho en el ordenamiento jurídico español y a señalar las medidas más oportunas y urgentes que el Estado español deberá adoptar para un mejor y más efectivo reconocimiento del mencionado derecho en España.

CAPITULO PRELIMINAR

IMPORTANCIA DEL DERECHO DE LIBERTAD RELIGIOSA

La libertad religiosa constituye un derecho fundamental y básico de la persona humana.

El interés mundial por proteger el derecho de libertad religiosa debe atribuirse al hecho de que el mundo, como advierte KRISHNASWAMI(1), ha comprendido que esa libertad es esencial.

En efecto, la libertad de tener y de practicar una religión, de cambiar de religión o de no tener religión es el fundamento de todas las libertades. Ella justifica y supone toda una serie de libertades: expresión, reunión, asociación, etc. Hay así una estrecha relación entre la libertad política y la libertad filosófica o religiosa(2). " Toda religión cualquiera que ella sea sugiere a sus fieles una concepción particular del hombre, de su valor, de los fines que él debe dar a sus esfuerzos, a su papel en la humanidad y de la meta hacia la cual marcha esta humanidad"(3). "Nuestra vida, incluso en sus aspectos cotidianos, está influenciada por nuestra elección filosófica o religiosa.

El diagnóstico de una existencia humana, de un hombre, de un pueblo, afirma acertadamente ORTEGA(4), tiene que comenzar filando el repertorio de sus convicciones. Nuestra actitud ante el Estado, nuestros contactos con nuestros semejantes, nuestra manera

- (1) KRISHNASWAMI: Estudio sobre la discriminación en materia de libertad de religión y de prácticas religiosas, Naciones Unidas, Nueva York, 1960, pág. iX.
- (2) LANARES(Pierre): La liberté religieuse dans les conventions internationales et dans le droit public general, Edit. Horvath, 1965, pág. 11
- (3) GOEGNER(M.): L'influence de la Reforme sur le developpement du droit international, Rec. 1925, I, pág. 246, cit. por LANARES: Ob. y pag. cit.
- (4) ORTEGA: La Historia como sistema, Colac. El arquero, Madrid, 1970, pág. 4.

de descansar, de alimentarnos, de tratar los negocios o de educar a nuestros hijos variarán según nuestra aceptación de una u otra determinada creencia o filosofía. Es por consiguiente indispensable que esta libertad de elección sea respetada puesto que ella condiciona toda nuestra existencia en sus aspectos materiales, intelectuales, morales y espirituales(1).

La negación de esta libertad en el pasado ha tenido como consecuencia no solo incontables sufrimientos, sino también las persecuciones de que fueron objeto grupos enteros de población(2).

Después de largas y sangrientas luchas hemos llegado a una época en la que en el marco de la defensa de los Derechos del hombre, la comunidad internacional comprende la importancia de esta libertad, fundamental para la felicidad de cada uno y la paz de todos; y nosotros afirmamos con M. KRISHNASWAMI: " El derecho de libertad de religión... es el máspreciado de los derechos humanos, y en nuestros días se impone convertirlo en realidad para todo individuo"(3).

Pero el reconocimiento y la introducción de la libertad religiosa como derecho fundamental del individuo en las Convenciones internacionales y en las actuales Constituciones de los diferentes Estados del mundo, es el fruto de un largo y doloroso esfuerzo (4).

Aparece, en efecto, el derecho de libertad religiosa, al igual que los demás derechos humanos, como el producto de un largo proceso histórico. Con razón nos recuerda HAMBURGER: " L'évenement des droits de l'Homme a été souvent présenté comme le produit d'un long processus historique"(5)

(1) MARITAIN(J.): Les Droits de L'Homme et la Loi naturelle, New York, 1943, pág. 103; LANARES: Ob. y pag. cit.

(2) KRISHNASWAMI: Ob. y pag. cit.

(3) Ibidem.

(4) LANARES: Ob. cit. pág. 17.

(5) HAMBURGER(Ernest): Droits de l'homme et relations internationales, en Recueil des Cours, 1959, II, pág. 302.

La epifanía del derecho de libertad religiosa ha necesitado de la larga y lenta maduración de un cierto clima cultural o, si se prefiere, como advierte RUIZ-GIMENEZ, de un nivel ético o social más alto y más abierto a la plenitud de la existencia(1).

Constituye, en definitiva, pues, el derecho de libertad religiosa la conquista más heroica y sublime en el duro, azaroso y lento proceso histórico de los derechos humanos, y , en consecuencia, ocupa entre estos el puesto de primera importancia(2).

Su estudio, por tanto, bien merece el esfuerzo de este trabajo, que deseamos sirva, ante todo, para mostrar la importancia capital que dicho derecho tiene en la vida del hombre.

(1) RUIZ GIMENEZ: "El derecho a la intimidad", en Diario "YA", de 14 de enero de 1969.

(2) PABLO VI: La evangelización del mundo contemporaneo, traducción castellana de la Políglota Vaticana, PPC, Madrid, 1975, nº 39, pág. 33.

PRIMERA PARTE

EL DERECHO DE LIBERTAD RELIGIOSA

CAPITULO -I -

EL DERECHO DE LIBERTAD RELIGIOSA

SUMARIO

1. Analisis de la expresión : libertad religiosa .
 - 1.1. La expresión usada por los autores. 1. 2. La expresión usada en los textos internacionales. 1.3. La expresión empleada por el Concilio Vaticano II. 1.4. Las expresiones más usadas en las Constituciones de los Estados contemporáneos. 1.5. Precisiones terminológicas. a) Libertad de conciencia. b) Libertad de cultos . c) Libertad religiosa.
2. Noción y significado de la libertad religiosa. 3. Problemática de la libertad religiosa. a) La conciencia personal. b) La conciencia política.
4. Derecho de libertad religiosa no tolerancia.

CAPITULO I

EL DERECHO DE LIBERTAD RELIGIOSA:
PLANTEAMIENTO GENERAL.1. ANALISIS DE LA EXPRESION: " LIBERTAD RELIGIOSA" :
DIVERSIDAD DE NOMBRES.

El tema de nuestro estudio es de tal complejidad, que hace difícil precisar su exacto significado. Dicha dificultad dimana ya de la misma expresión de " libertad religiosa".

Una de las dificultades mayores , en efecto, para llegar a determinar el concepto de libertad religiosa es , sin duda, como advierte VERA URBANO (1), la diversidad de nombres que recibe.

1. 1. La expresión usada por los autores.

Con frecuencia los autores, al tratar de la libertad religiosa, hablan indistintamente de libertad de pensamiento(2), de libertad de conciencia(3), de fe (4) , etc. Y todo ello mezclan-

(1) VERA URBANO(Francisco): La libertad religiosa como derecho de la persona, Madrid, 1971, pág. 27.

(2) RECASENS SICHES (Luis): Tratado General de Filosofía del Derecho, Mexico, 1965, pág. 565.

(3) FERRANTE (Giusepe): Tolerancia o libertad de conciencia?, en "Libertad religiosa, una solución para todos ", Madrid, 1964, pág. 169.

(4) ORMESSON (Wladimir D'), en " La libertad religiosa una solución para todos, Madrid, 1964, pág. 19.

-dolo muchas veces, como señala VERA URBANO(1), con las denominaciones de tolerancia (2), "tesis e hipótesis", laicidad o confesionalidad del Estado, etc. (3).

Con razón , pues, afirma CARRILLO DE ALBORNOZ: " Si no nos equivocamos, una de las dificultades capitales en esta materia estriba en el sinnúmero de confusiones a que da lugar el término mismo de " libertad religiosa". Esta expresión se puede emplear y , de hecho, se ha empleado en sentidos tan diferentes y aun contradictorios, que no es tarea fácil precisar , en cada ocasión, lo que se entiende por ella. En ciertos países , los servicios de televisión han hecho una encuesta callejera, preguntando a los transeuntes cuál era su idea de la libertad religiosa, la mayor parte de las respuestas recibidas denotaban una crasa y sorprendente ignorancia, cuando no rayaban con una involuntaria comicidad. Y hay quien se pregunta si el resultado sería mucho más brillante preguntando a personas consideradas cultas"... "(4).

1.2. La expresión usada en los textos internacionales.

Al analizar los textos internacionales , que regulan la libertad religiosa, nos encontramos con las siguientes expresiones:

a) En la Carta de las Naciones Unidas, se contempla la libertad religiosa expresamente sólo en cuanto que la religión no es ni puede ser causa de discriminación; usando la expresión : "sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión"(5).

(1) VERA URBANO(Francisco): Ob. cit. pág. 27.

(2) RUFFINI(F.): La libertad religiosa, Torino, 1901, pág.8.

(3) VERA URBANO(F.): Ob. cit. pág. 27.

(4) CARRILLO DE ALBORNOZ(A.F.): La libertad religiosa y el Concilio Vaticano II, Madrid, 1966, págs 9 y 10.

(5) Preámbulo y art. 1, n. 3; Vid. LANARES (Pierre): La liberté religieuse dans les conventions internationales et dans le droit public general, Paris, 1965, pág. 165; Vid. también GARCIA ARIAS(Luis): Corpus Iuris Gentium, Zaragoza, 1968, pág. 21.

b) La Declaración universal de los derechos del hombre, del 10 de diciembre de 1948, en su artículo 18, emplea la expresión: "libertad de pensamiento, de conciencia y de religión", usando además el término "convicción"(1).

c) En la Convención internacional sobre eliminación de todas las formas de discriminación racial de 21 de diciembre de 1965, aparece la expresión: "libertad de pensamiento, de conciencia y de religión"(artículo 5, letra d VII) (2).

d) En el Pacto internacional sobre los derechos civiles y políticos, de 21 de diciembre de 1966, se habla de libertad de pensamiento, de conciencia y de religión" empleando también la expresión: "religión o sus creencias"(art. 18)(3).

e) El Proyecto de Convención internacional sobre eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o en las creencias(4) , emplea las expresiones : "religión o convicción"(art. II), "libertad de pensamiento, de conciencia , de religión o de convicción"(art. III)(5).

f) En la Convención europea de salvaguarda de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales, de Roma de 4 de noviembre de 1950, en su artículo 9, se utiliza la expresión de "libertad de pensamiento de conciencia y de religión..."; idéntica , por tanto a la empleada en el artículo 18 de la Declaración

(1) TRUYOL (Antonio): Los derechos humanos, Madrid, 1968, p. 66; GALLINA(E.): La Chiesa Cattolica con le organizzazioni internazionali per i diritti umani, Roma ,1968,p.365.

(2) GALLINA: Ob. cit. pág. 426. YEAR BOOK, New York,1965,p.443.

(3) TRUYOL(A.): Ob. cit. pág.89;GALLINA: Ob. cit. pág.387.

(4) Así ha quedado redactado el título del Proyecto de la Convención, tras su modificación por la Comisión tercera de Asunto sociales, humanitarios y culturales en noviembre de 1967:

" ONU Crónica 4,"(1967, fasc. 11)94.

(5) YEAR BOOK,1965, pág.449-450; BUGAN(Andrej): La comunità internazionale e la libertà religiosa, Roma,1965,págs 287-302.

universal de los derechos del hombre(1).

g) En el Acta final de la Conferencia de Helsinki, sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, clausurada el 1º de agosto de 1975, se emplea en el Principio VII la expresión de " libertad de pensamiento conciencia, religión o creencia"(2).

1. 3. La expresión usada por el Concilio Vaticano II

La Declaración "Dignitatis Humanae" , sobre libertad religiosa, del Concilio Vaticano II ,usa una sola vez el término libertad de culto", y es precisamente, como advierte CARRILLO DE ALBORNOZ(3), para lamentar que determinados gobiernos, "aunque reconozcan constitucionalmente la libertad de culto", ponen dificultades al ejercicio de la religión y hacen ardua y precaria la vida de las organizaciones religiosas(4). Fuera de esta ocasión, el Concilio usa única y exclusivamente la expresión de libertad religiosa o "libertad en materia religiosa"(5).

Como explicación breve del término "libertad religiosa ", más bien que como un nuevo término, la Declaración emplea también la expresión de inmunidad de coacción en materia religiosa(6).

1. 4. Las expresiones más usadas por las Constituciones de los Estados contemporaneos.

Al analizar los textos de las Constituciones de los Estados contemporaneos nos encontramos con las expresiones de: " liber-

(1) TRUYOL: Ob. cit. pág. 115.

(2) Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa- Acta final, Helsinki 1975(1 de agosto). Ediciones Ministerio de Asuntos Exteriores de España, Madrid, 1976, Principio VII, pág. 11.

(3) CARRILLO DE ALBORNOZ: Ob. cit. pág. 18.

(4) Declaración ,D H ,n 15, en Vaticano II, Barcelona, 1966, p.78

(5) Ibidem, n. 2. pág. 768.

(6) Ibidem , n. 4, pág. 770.

-tad de religión"(1),"libertad de conciencia"(2),"libertad religiosa y de conciencia"(3),"libertad de conciencia y de religión"(4), "libertad de pensamiento, de conciencia y de religión"(5), "libertad de conciencia y de creencia"(6), "libertad de confesión religiosa"(7),de profesión religiosa"(8)," de culto" (9), y liber-

-
- (1) Art. 20 de la Constitución japonesa de 3 de noviembre de 1946, en PEASLEE(Amos J.): Constitutions of Nations , Volume II, Printed in the Netherlands, 1966, pág. 524; Art. 23 de la Constitución de Mónaco de 17 de diciembre de 1962, en PEASLEE: Ob. cit. Volumen III, The Hague 1968, pág. 639; Art. 6 del Fuero de los Españoles, en su nueva redacción , según la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica del Estado, de 10 de enero de 1967, (B.O.del E. Nº 9 del 11 de enero de 1967).
 - (2) Artículo 2 de la Constitución griega de 1 de enero de 1952, en PEASLEE: Ob. cit. vol. III , pág. 403; Art. 30 de la Constitución de Rumanía de 1965 en PEASLEE: Ob. cit. volumen III, pág. 770.
 - (3) Artículo 37 de la Constitución de Liechtenstein de 5 de octubre de 1951, (con las enmiendas de 1965), en PEASLEE: ob. cit. volumen , III, pág. 536.
 - (4) Artículo 78 de la Constitución búlgara de 4 de diciembre de 1947 (con las enmiendas de 1965) , en PEASLEE: Ob. cit. vol.III, pág. 107.
 - (5) Artículo 18 de la Constitución de Chipre de 6 de abril de 1960, en PEASLEE: Ob. cit. vol. III, pág. 144.
 - (6) Artículo 49 de la Constitución suiza de 29 de mayo de 1874(con las enmiendas y revisiones realizadas hasta 1964), en PEASLEE: ob. cit. vol. III, pág. 951.
 - (7) Art. 32 de la Constitución checoslovaca de 11 de junio de 1960, en PEASLEE: Ob. cit. vol. III, pág. 233; Art. 8 de la Constitución italiana de 27 de diciembre de 1947, en PEASLEE: Ob. cit., vol. III, pág. 501.
 - (8) Art. 35 de la Constitución panameña de 1 de marzo de 1946, en PEASLEE: Ob. cit. vol. IV, pág. 1010.
 - (9) Artículo 19 de la Constitución de Luxemburgo de 17 de octubre de 1868 (con las enmiendas de 25 de octubre de 1956), en PEASLEE: Ob. cit. volumen III, pág. 533.

-tad de propaganda religiosa o antirreligiosa(1), etc.; pero, las expresiones más usadas son, sin duda, las de "libertad de conciencia", " libertad religiosa" o libre ejercicio de la religión " y " libertad de culto"(2).

1. 5. Precisiones terminológicas.

Se habla de libertad de religión , de creencia, de conciencia, de fe, ... Todas estas expresiones son, como advierte VERA URBANO(3), admisibles, pero con tal que se entiendan en un sentido no sólo positivo sino también negativo; es decir de creer o de no creer.

Sin embargo, conviene hacer algunas observaciones, al menos, sobre las expresiones más habitualmente usadas como sinónimas de "libertad religiosa": " libertad de conciencia" y " libertad de culto".

No parece ciertamente correcto emplear , como sinónimas de libertad religiosa, las expresiones de " libertad de conciencia" y " libertad de culto".

a) La libertad de conciencia.

La libertad de conciencia, si bien puede muy bien aplicarse, como señala CARRILLO DE ALBORNOZ(4), a la inmunidad de coacción en la profesión privada de una creencia religiosa, no parece extenderse a la manifestación y propagación de esa creencia. Menos

(1) Art. 99 de la Constitución de Bielo- Rusia, de 19 de febrero de 1937, con las enmiendas de 1960, en PEASLEE: Ob. cit. volumen III, The Hague, Netherlands, 1968, pág. 129; Art. 104 de la Constitución ucraniana de 30 de enero de 1933, con las enmiendas de 1965, en PEASLEE: Ob. cit. vol. III, cit. pág. 981; Art. 124 de la Constitución rusa de 5 de diciembre de 1936, con las enmiendas de 1965, en PEASLEE: Ob. cit. vol. III, cit. pág. 1005.

(2) Vid. PEASLEE: Ob. y vol. III, cit.

(3) VERA URBANO(F): Ob. cit. , pág. 32.

(4) CARRILLO DE ALBORNOZ: Ob. cit. pág. 18.

todavía se puede aplicar este término a la libertad religiosa de la Iglesia(1) y de las organizaciones religiosas(2), ya que las personas morales en modo alguno poseen la facultad humana llamada conciencia.

b) Libertad de cultos.

En cuanto a la expresión " libertad de cultos", favorita de la literatura medieval ochocentista , es, ciertamente, como nos recuerda CARRILLO DE ALBORNOZ(3), muy incompleta, ya que el área de la libertad religiosa, tal como creemos debe entenderse y como se la expone , por ejemplo en el documento conciliar es mucho más amplia que el culto propiamente dicho(4).

c) Libertad religiosa.

Por todo lo expuesto, la expresión "libertad religiosa" se presenta como la más acertada y significativa; pues ella es comprensiva de la libertad de conciencia propiamente dicha, de la libertad de culto y de la libertad de propaganda.

Con razón , la Declaración " Dignitatis Humanae" sobre la libertad religiosa del Concilio Vaticano II, muestra su preferencia por el empleo de la expresión : "libertad religiosa"(5).

Algunos se escandalizan , como advierte GUY DE BROGLIE (6), de que los documentos eclesiásticos, por ejemplo, no mencionen ni exalten la "libertad de conciencia" . Pero la razón es, sin embargo fácil de comprender. Como notaba Pío XI en su Encíclica "Non

(1) Declaración DH, nº 13, en ob. cit. pág. 778.

(2) Ibidem, nº 4, pág. 770.

(3) CARRILLO DE ALBORNOZ: Ob. cit. pág. 18.

(4) Declaración D H, nº 4, en ob. cit. pág. 770.

(5) Ibidem, nº 2, en ob. cit. pág. 768.

(6) GUY DE BROGLIE: El Derecho Natural a la libertad religiosa, Burgos , 1965, pág. 168.

abbiamo bisogno" del 29 de junio de 1931, se trata de un modo equívoco de hablar(1). Su Santidad, afirmaba: Ante la consideración de este noble derecho de las almas es por lo que Nos decíamos poco ha, estar alegres y enorgullecidos por combatir la buena batalla de la libertad de las conciencias, pero no (como alguno, tal vez sin advertirlo, Nos hizo decir) por la libertad de conciencia, frase equívoca de la que se ha abusado para significar la absoluta independencia de la conciencia, cosa absurda en el alma creada y redimida por Dios"(2).

Con razón, pues, los documentos eclesiásticos en lugar de hablar de "libertad de conciencia", prefieren hablar del derecho natural del hombre a una justa y amplia "libertad religiosa"(3).

Por todo ello, consideramos suficientemente justificado el haber adoptado en el título de nuestro trabajo la expresión de "libertad religiosa", pues es, como hemos expuesto la más acertada y significativa.

2. NOCION Y SIGNIFICADO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA.

La libertad religiosa supone la capacidad del individuo de investigar libremente la verdad religiosa y de adherirse o no a ella.

En general, como señala LOPEZ JORDAN(4), por "libertad religiosa" suele entenderse el " derecho de la persona humana al libre ejercicio de la religión según los dictámenes de su conciencia". Esto hablando positivamente. Negativamente hablando, la libertad religiosa es la ausencia de toda compulsión externa en las relaciones personales con Dios, reclamadas por la conciencia humana.

(1) A.AS. 1931, págs. 301-302.

(2) Ibidem.

(3) GUY DE BROGLIE: Ob. cit. pág. 189.

(4) LOPEZ JORDAN(Rafael): "Libertad religiosa, una solución para todos", Madrid, 1964, pág. 15.

La libertad religiosa implica la autonomía humana , no ab intra sino ab extra. Ab intra, el hombre no está dispensado de obligaciones frente al problema religioso.

Dos puntos doctrinales esenciales viene, así, a expresar el significado de la " libertad religiosa" . Primero, se afirma que todo hombre tiene, por derecho natural, el derecho de ejercer libremente su religión en la sociedad, conforme a los dictados de su conciencia personal. Segundo, se afirman las consecuencias jurídicas de este derecho, a saber: que los demás hombres en la sociedad, y especialmente el Estado, tienen la obligación de reconocer este derecho personal, de respetarlo en la práctica y de promover su libre ejercicio(1). Es claro, pues que la libertad religiosa significa el derecho natural del hombre y del ciudadano a vivir en conformidad con sus convicciones , dentro de los límites del derecho natural, de la ley moral y del bien común.

3. PROBLEMÁTICA DE LA LIBERTAD RELIGIOSA

La problemática de la libertad religiosa es concreta e histórica. Comienza, como advierte COURTNEY MURRAY(2) , con un escrutinio de los "signos de los tiempos". De ellos, dos son decisivos. El primero es desarrollo de la conciencia personal del hombre. El segundo es el desarrollo de la conciencia política.

Ambos fueron connotados por JUAN XXIII en los siguientes términos:

a) La conciencia personal.

" No obstante estas tendencias de que hemos hablado constituyen también un testimonio indudable de que en nuestro tiempo

(1) DE SMEDT(Joseph): Relación presentada al Concilio Ecuménico , en el curso de la 7ª Congregación General, el 19 de noviembre de 1963, en "Libertad religiosa una solución para todos", Madrid, 1964, págs 32 y 33.

(2) COURTNEY MURRAY(John): Libertad religiosa, en "La libertad religiosa, " Barcelona, 1966, pág. 33.

los hombres van adquiriendo una conciencia cada vez más viva de su propia dignidad y se sienten, por tanto, estimulados a intervenir en la vida pública y a exigir que sus derechos personales e inviolables se defiendan en la constitución política del país. No basta con esto; los hombres exigen hoy, además, que las autoridades se nombren de acuerdo con las normas constitucionales y ejerzan sus funciones dentro de los términos establecidos por las mismas"(1).

b) La conciencia política.

La conciencia política que corresponde a la conciencia personal, la describe JUAN XXIII afirmando: " La dignidad de la persona humana requiere además, que el hombre , en sus actividades proceda por propia iniciativa y libremente. Por lo cual, tratandose de la convivencia civil, debe respetar los derechos, cumplir las obligaciones y prestar su colaboración a los demás en una multitud de obras, principalmente en virtud de determinaciones personales. De esta manera, cada cual ha de actuar por su propia decisión, convencimiento y responsabilidad, y no movido por la coacción o por presiones que la mayoría de las veces provienen de fuera. Porque una sociedad que se apoye sólo en la razón de la fuerza ha de calificarse de inhumana. En ella, efectivamente, los hombres se ven privados de su libertad, en vez de sentirse estimulados, por el contrario, al progreso de la vida y al propio perfeccionamiento"(2).

Igualmente el Concilio Vaticano II en su Declaración "Dignita -

(1) JUAN XXIII: Encycl. Pacem in terris, 11 de abril 1963: AAS, 55 (1963), pág. 279; vease también en " Cinco Grandes Mensajes" editad. por J. IRIBARREN y J. L. GUTIERREZ GARCIA, 2ª ed. Madrid, 1968, núm. 79 pág. 113.

(2) Ibidem, pág. 265 y nº 34, pág. 99.

-tis Humanae" sobre la " libertad religiosa" se hace eco de la palpitante realidad que representa el desarrollo creciente de la conciencia personal y política del hombre en el momento presente, presenta la " libertad religiosa como la culminación de las demás libertades justas y su reivindicación como una especie de "a fortiori" de la reivindicación general de los derechos del hombre.

Dice así la Declaración: " La dignidad de la persona humana se hace cada vez más clara en la conciencia de los hombres de nuestro tiempo, y aumenta el número de quienes exigen que los hombres en su actuación gocen y susen de su propio criterio y de una libertad responsable, no movidos por coacción, sino guiados por la conciencia del deber. Piden igualmente la delimitación jurídica del poder público a fin de que no se restrinjan demasiado los confines de la justa libertad tanto de la persona como de las asociaciones. Esta exigencia de libertad en la sociedad humana concierne sobre todo a los bienes del espíritu humano, principalmente a aquellos que atañen al libre ejercicio de la religión en la sociedad"(1).

Esta justísima visión del entero problema de la libertad humana, encuadra la libertad religiosa en lo que la Declaración llama " la ordenación jurídica de la sociedad civil"(2).

El sentido de libertad personal del hombre actual se une realmente con una demanda de libertad política y social, es decir libertad frente a la coerción y coacción social o legal, excepto en la medida en que éstas son necesarias, y libertad para actuar en sociedad. La libertad, no la fuerza es el dinamismo del progreso social y personal(3).

(1) Declaración DH nº 1, en ob. cit. pág. 767.

(2) CARRILLO DE ALBORNOZ: Ob. cit. pág. 22.

(3) COURTNEY MURRAY (John) : Ob. cit. pág. 33.

La conciencia común de los hombres de hoy considera, como afirma COURTNEY MURRAY, que la exigencia de libertad personal, social y política es una exigencia que brota de las profundidades de la persona humana. Es la expresión de un sentido de derecho aprobado por la razón. Es, por tanto, una exigencia de la ley natural en el momento histórico actual. Esta exigencia de libertad se produce especialmente en relación a los bienes del espíritu humano: la búsqueda de la verdad, la libre expresión y difusión de la propia opinión, el cultivo de las artes y las ciencias, el acceso libre a la información sobre los acontecimientos públicos, las oportunidades adecuadas para el desarrollo de los talentos personales y para el progreso intelectual y cultural(1). En forma particular se siente que la libertad religiosa es un derecho del hombre en el ámbito de su interés más profundo, que es el ámbito religioso(2).

4. DERECHO DE LIBERTAD RELIGIOSA NO TOLERANCIA.

Como consecuencia de las nuevas perspectivas creadas por el aumento de conciencia personal y política ha cambiado la antigua situación relativa a la cura religionis.

Hoy día no se puede abordar el problema en términos medievales o de los tiempos de después de la Reforma o del siglo XIX, es decir, los derechos exclusivos de la verdad y de la tolerancia legal según el caso.

Conviene, por tanto hacer la distinción entre tolerancia y libertad religiosa.

Generalmente se entiende por tolerancia, como advierte VERA URBANO(3), la permisión de un mal.

(1) COURTNEY MURRAY: Ob. cit. pág. 33; vid. también Pacen in Terris, AAS, 55, 1963, 279, y en Cinco Grandes Mensajes, Madrid, 1968, N^{os} 12, 13 y 14, y Declaración Conciliar D H. n^o 1, en ob. cit. pág. 767.

(2) Ibidem.

(3) VERA URBANO: Ob. cit. pág. 40.

Puede definirse, siguiendo a CAPPELLO, como "la permisión negativa de un mal real o hipotético "(1).

Según la tesis tradicional " la tolerancia tiene siempre como objeto un mal: un defecto físico, un error intelectual, una deformidad moral"(2). "No se aprueba sino lo que es bueno, se tolera lo que es malo"(3). "Tolerar lo bueno, tolerar la virtud, serían expresiones monstruosas, escribe BALMES(4).

SAN AGUSTIN, al hablar de la paciencia en la adversidad, escribe: "Lo que se dice tolerancia, lo que se dice paciencia, lo que se dice longanimidad, no tiene aplicación sino con el mal"(5).

SANTO TOMAS, se expresa así sobre la tolerancia: " Respondo diciendo que el gobierno humano se deriva del poder divino y a éste debe imitar. Ahora bien, Dios, aunque es omnipotente y sumamente bueno, sin embargo, permite que se cometan algunos males en el mundo, que El podría evitar, no sea que al suprimirlos, se quitaran bienes mayores o se siguieran males peores. Por consiguiente, así en el gobierno humano los que dirigen rectamente toleran algunos males, para que no se impidan algunos bienes: o también para que no sucedan males peores: como dice AGUSTIN en el libro 2º " De ordine": quita las meretrices de la sociedad y lo perturbarás todo de liviandad". Así , pues, aunque los infieles pequen en sus ritos, se pueden tolerar o por algún bien que de ellos procede o por algún mal que se evite"(6).

(1) *Permissio negativa mali realis vel hypothetice*: *Summa Iuris publici ecclesiastici*(Romae, 1928) n.ºm. 270; cit. por VERA URBANO: Ob. cit. pág. 40.

(2) VERMEERSCH: *La tolerancia* (Buenos Aires, 1950, pág. 13.

(3) T. DE TRAUTMANSDORF: *De tolerantia ecclesiastica et civili*; cit. en VERMEERSCH: Loc. cit. pág. 13.

(4) BALMES: *El protestantismo comparado con el catolicismo*, ed. BAC (Madrid, 1949), pág. 342.

(5) Vid. Enarrat, in psalm. 31; ML, 36, 271).

(6) Vi. Art. 11, cuestión 10ª de la 2, 2ae.

Así es como surge la noción de tolerancia, como "permisión negativa del mal real o hipotético"(1), que invade todos los textos de la Escolástica, y las comparaciones de la herejía con la epidemia, la locura, etc., en orden a la posible represión de la misma(2).

De este modo llega a nosotros la idea de "una actitud de paciencia razonada respecto de un mal que se tendría el derecho o el poder de combatir"(3).

Se habla de los derechos de la verdad y del bien; se niega todo el derecho al "error" y al "mal". Lo que, de suyo, es una relación de personas, para a ser una dialectica de conceptos(4).

Aquí se encuentra, sin duda, la raíz del falso planteamiento de la cuestión.

No es un mal, un error lo que tenemos delante, sino una persona, que lo padece. No es la herejía, sino un alma caída en ella(5).

Se impone, pues, una concepción más positiva del problema de libertad religiosa: no es ya porque no se pueda ni por evitar los mayores males ni por conseguir bienes mejores, sino porque así lo exige la dignidad personal del hombre(6).

MIRABEAU declaraba en la Constituyente a propósito del artículo 10 de la Declaración de los Derechos del Hombre:

"Ce mot qui essaie d'exprimer la liberté de religion, ce mot

(1) CAPPELLO: Ob. cit., nota 1, pág. 14.

(2) G. MARCEL: Fenomenología y dialectica de la tolerancia, en Filosofía concreta(trad. esp. de " Du refus à l' invocation "). Madrid, 1959), pág. 245, cit. por VERA URBANO: Ob. cit. pág. 46.

(3) S. DENGHIEN; en " Dictionnaire Apologét. Foi Cathol. ", Vol. IV., col. 1714 y sigs., s.v. Tolérance; cit. por VERA URBANO: Ob. cit. pág. 46.

(4) VERA URBANO: Ob. cit. pág. 46.

(5) Ibidem, pág. 50.

(6) Ibidem, págs 54-55.

me paraît tyrannique lui-même puisque l'autorité qui a le pouvoir de tolérer attente á la liberté de pensée par cela même et qu' ainsi elle pourrait ne pas tolérer Donc nous regardons la tolerance comme une forme tres imperfaite et presque injurieuse de la liberté de conscience et comme telle nous la repoussons"(1).

" Ciertas palabras - escribe HAMER-entorpecen inutilmente los debates. Intolerancia evoca irresistiblemente una cierta estrechez de espíritu y tolerancia tiene un matiz de desprecio del que es difícil desprenderse. Por esta razon, pues, sería bueno eliminarla de una vez para siempre de nuestras discusiones en torno al problema de la libertad religiosa, Se insiste inutilmente que estas palabras, en nuestra intención, no tienen ese matiz peyorativo que se le atribuye en principio, cuando sería tan sencillo reemplazarlas por otras que no implican ningún equívoco"(2).

Los términos del problema son ciertamente hoy día simplemente los de libertad religiosa. Es decir la libertad religiosa o sea "la potestad del hombre de determinar su conducta solamente según los mandatos morales que le descubre su conciencia, se presenta no como fruto de la permisión de los demás(tolerancia), sino como exigencia personal que los demás deben respetar y que la autoridad debe tutelar.

La antigua tesis, que implica "soportar y sufrir" , ha de ceder el paso a esta consideración personalista que incluye, no ya el hecho del conflicto, sino la exigencia positiva del reconocimiento de un derecho(3).

(1) Vid.: LANARES: Ob. cit. pág. 50.

(2) HAMER: Le catholique reclame - t-il la liberté religieuse?, en "La Revue Nouv. ", 6 1950, pág. 325.

(3) MARCEL: Ob. cit. pág. 236; cit. por VERA URBANO: ob. cit. pág. 55.

Procede , pues, hablar no de "tolerancia" sino de libertad religiosa o mejor , como veremos , de derecho de libertad religiosa , según nosotros propugnamos en este trabajo.

CAPITULO -II -

ANALISIS DEL DERECHO DE LIBERTAD RELIGIOSA

SUMARIO

1. Concepto de la libertad religiosa. 1.1. La libertad religiosa en sentido filosófico. 1.2. La libertad religiosa en sentido teológico. 1.3. La libertad religiosa en sentido jurídico. 2. Concepto del derecho de libertad religiosa. 3. Sujeto del derecho de libertad religiosa. 4. Objeto del derecho de libertad religiosa. 4.1. Libertad de conciencia. 4.2. Libertad de expresión. 4.3. Libertad eclesial o corporativa. 4.4. Libertad de asociación religiosa. 4.5. Libertad de apostolado. 5. Fundamento del derecho de libertad religiosa. 5.1. La dignidad de la persona humana. A) Orden cósmico y moral. B) Responsabilidad individual y libertad. C) Presupuestos reales y éticos de la libertad. D) La libertad como valor absoluto de la persona. E) La ley libertadora de la libertad. 5.2. El derecho de libertad religiosa es una exigencia de la naturaleza racional. 6. Límites del derecho de libertad religiosa. 6.1. El bien común. 6.1.1. El bien común en sentido estático. 6.1.2. El bien común en sentido dinámico. 6.2. El orden público. 6.2.1. Concepto de orden público. 6.2.2. Clases de orden público. 6.2.3. Orden público - bien común y orden jurídico. 6.2.4. Justicia y territorialidad del orden público. 6.2.5. Formulación doctrinal del orden público. 6.2.6. Formulación normativa.

CAPITULO II

ANALISIS DEL DERECHO DE LIBERTAD RELIGIOSA

1. CONCEPTO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA.

La libertad religiosa es un principio enormemente complejo.

Para mejor comprender su concepto creemos conveniente distinguir , siguiendo a RUFFINI(1), un triple sentido en el concepto de libertad religiosa: el filosófico, el teológico y el jurídico.

1.1 La libertad religiosa en sentido filosófico.

En sentido filosófico, como señala VERA URBANO, todos la equiparan a la libertad de pensamiento, bajo al aspecto que la propugnaban el iluminismo, el deísmo, el racionalismo, el naturalismo y el materialismo(2). RUFFINI la define como "la liberación del espíritu humano de todo preconcepto dogmático, de toda traba confesionística"(3).

Bajo el mismo aspecto, la entiende Mons. PEREZ MIER, cuando

(1) RUFFINI: La libertad religiosa, Torino, 1901, pág. 1.

(2) VERA URBANO: Ob. cit. , pág. 28.

(3) RUFFINI: Ob. cit. pág. 1.

la llama " el derecho absoluto del hombre a profesar las ideas religiosas y a practicar el culto que quiera cada uno, con absoluta independencia de su verdad o falsedad y de su moralidad o inmoralidad, o de no profesar o practicar ninguno"(1).

Lo que persiguen estos librepensadores , como advierte RUFFINI (2) , no es conseguir la absoluta libertad religiosa para todos, sino "socavar las bases de las creencias tradicionales e impuestas" para así poder desterrar más fácilmente toda creencia religiosa, que ellos consideran perjudicial al bien social y un obstáculo para sus fines. .

Por esta razón , como advierte VERA URBANO(3), los Papas, al tiempo que proclamaban la doctrina tradicional sobre la tolerancia(4) y que el hombre sólo queriendo ("non nisi volens") puede abrazar la fe(5), no dudaron, sin embargo , en condenar esta libertad religiosa como "absurda y errónea sentencia o, mejor dicho delirio"(6), llamandola "libertad de perdición"(7).
" " Hay, sin embargo, una concepción recta de la libertad de conciencia. Sería la independencia interior del espíritu humano en la investigación de la verdad y en la adhesión y aceptación de la misma, sin que fuerza humana alguna pueda coaccionarla en determinado sentido. Viene a coincidir entonces con la inviolabilidad del fuero sagrado de la conciencia y constituye , sin

(1) Mons. PEREZ MIER: Iglesia y Estado Nuevo, Madrid, 1940, pág. 173 y siguiente.

(2) RUFFINI: Ob. cit. pág. 134, III

(3) VERA URBANO: Ob. cit. pág. 28.

(4) Vid. LEON XIII: Immortale Dei, núm. 46, en " Col. Encicl. Madrid, 1948, pág. 159.

(5) SAN AGUSTIN: Tract. XXVI in Joan. n. 2; vid. Immortale Dei, nº 47.

(6) Vid. GREGORIO XVI: Mirari Vos, nº. 10. en "Col. Enc. cit. pág.42.

(7) PIO IX: Cuanta Cura, nº 4, en " Col. Enc." cit. ,pág. 42.

duda la primera exigencia de la naturaleza racional"(1).

Pero no debe confundirse con la otra acepción, que podemos llamarla con PIO XI " libertad de la conciencia" y que viene a significar la absoluta independencia de la conciencia incluso frente a Dios. PIO XI distingue claramente el doble sentido en el texto ya citado de la "Non abbiamo bisogno": "Nos consideramos felices y orgullosos de combatir , no,(como tal vez por inadvertencia se Nos hace decir) por la libertad de conciencia, frase equívoca de la que se ha abusado demasiado para significar la absoluta independencia de la conciencia, cosa absurda en el alma creada y redimida por Dios"(2).

1.2. La libertad religiosa en sentido teológico.

En primer lugar queremos hacer constar que la libertad religiosa no coincide con la eleutheria de S. PABLO, la libertad con que Cristo nos ha hecho libres(G. 5-1). Esta es una libertad de tipo teológico, una capacidad que la gracia da al hombre.

Por el contrario, la libertad religiosa es de tipo social y civil. Es, como señala COURTNEY MURRAY, " una inmunidad que se da a la persona dentro de la sociedad y está garantizada en la ley civil"(3).

" Teológicamente o bajo el aspecto dogmático, la libertad religiosa no puede ser otra cosa sino el libre desahogue doctrinal, "cultural" y moral de la única verdadera religión revelada.

En efecto, en la hipótesis de una posesión absoluta y objetiva de la verdad por parte del hombre, toda tolerancia hacia aquello que contradice tal verdad, esto es, el error, sería teo-

(1) Vid, VERA URBANO: Ob. cit. pág. 29.

(2) "Colec. Encicl" cit. pág. 1.070, núm. 26.

(3) COURTNEY MURRAY: Ob. cit. pág. 37.

-ricamente absurda.

En este caso sólo cabe la tolerancia práctica en su más estricto sentido, lo contrario nos llevaría, al igual que la criticada libertad de pensamiento, a una actitud de indiferencia hacia las ideas o creencias religiosas, incluso opuestas entre sí, sin distinguir las verdaderas de las falsas.

Por esta razón, bajo este aspecto prevalentemente objetivo, la Iglesia católica, y cualquier otra Iglesia que se considere "la única verdadera religión revelada", tiene que mantenerse fiel a su dogma: adoptar una postura de indiferencia dogmática sería renunciar a su misma esencia de depositaria integral de las verdades divinamente reveladas y de única vía para la obtención de la salvación eterna("extra ecclesiam nulla salus")(1).

1.3. La libertad religiosa en sentido jurídico.

Para RUFFINI, la única verdadera libertad religiosa ha de tener un contenido jurídico.

Dice, en efecto: " Emerge da tutto questo, che la libertà religiosa non è come il libero pensiero, un concetto o un principio filosofico, non 'e neppure, como la libertà ecclesiastica, un concetto o un principio teológico; ma è un concetto o un principio essenzialmente giuridico"(2).

"La libertad religiosa, escribe en su Corso di Diritto ecclesiastico, no toma partido ni por la fe, ni por la incredulidad, ni por la ortodoxia, ni por la heterodoxia; sino que que en aquella lucha sin tregua, que entre ellas se combate desde que el hombre existe, y tal vez se combatirá mientras el hombre exista, ella se coloca completamente aparte. No decimos por encima, puesto

(1) Vid. BERA URBANO: Ob. cit. págs 29 y 30.

(2) RUFFINI: Ob. cit. pág. 5.

que su intento no es tan alto: no es, como para la fe, la salvación ultraterrena; no es, como para el libre pensamiento, la verdad científica. Su intento está, por el contrario, subordinado a estos dos fines trascendentes y es bastante más modesto; consiste en crear y mantener en la sociedad un ordenamiento jurídico tal, que cada individuo pueda conseguir por su cuenta aquellos dos fines supremos, sin que los otros hombres, ni separados ni reunidos en asociaciones o Iglesias, ni siquiera impersonados en aquella suprema colectividad que es el Estado, le puedan poner en esto el más pequeño impedimento o causarle por esto mismo el más tenue daño"(1).

De esta visión sociológica de la libertad religiosa, como advierte VERA URBANO(2), parte después RUFFINI a la demostración de que la libertad religiosa no puede quedarse en la categoría de principio jurídico, sino que se concreta en un verdadero derecho del individuo frente al Estado e incluso contra el Estado(3).

Finalmente, concluye definiendo a la libertad religiosa en sentido estrictamente jurídico, como "un derecho subjetivo, no un simple efecto reflejo o algo parecido; más aún, un derecho público y no simplemente privado. Añadamos: derecho absoluto y positivo, no simplemente relativo y negativo"(4).

Con las palabras anteriores, como muy bien señala VERA URBANO (5), más que definir el derecho de libertad religiosa, lo que hace RUFFINI es describir el clima social necesario para el pleno ejercicio del derecho de la libertad religiosa.

Bajo el aspecto jurídico, VERA URBANO define la libertad reli-

(1) RUFFINI: Corso di diritto ecclesiástico italiano, Torino, 1924, pág. 135.

(2) VERA URBANO: Ob. cit. pág. 31.

(3) RUFFINI: Corso di Diritto ..., págs. 135 y sigs.

(4) Ibidem, pág. 196.

(5) VERA URBANO: Ob. cit. pág. 32.

-giosa, como " la capacidad, que tiene el hombre, de autodeterminarse en la investigación y adopción de la verdad religiosa y de ajusta su conducta individual y social conforme a los preceptos morales, que le descubre su conciencia. Capacidad que , ... se supone constitutivamente limitada por los mosmos límites impuestos a la naturaleza racional dentro del orden moral"(1).

Monseñor PEREZ MIER la define diciendo: "En un sentido relativo y en una acepción exclusivamente jurídica , la libertad religiosa consiste en la facultad legítima frente al Estado de profesar la religión y practicar el culto que, después de un examen serio y diligente, se crea verdadero, según la razón y la conciencia"(2).

La libertad religiosa, como ya hemos indicado , es de tipo social y civil; es una inmunidad que se da a la persona humana dentro de la sociedad y está garantizada en la ley civil. .

"El problema de la libertad religiosa en la sociedad civil es un problema que, den hecho, se plantea exclusivamente en el terreno jurídico, no en el plano intelectual de la verdad teológica. Al defender la libertad e igualdad ante la ley para todas las confesiones y cultos, no se defiende que la verdad y el error tengan los mismos derechos objetivos, ni que se coloquen en pie de igualdad la religión verdadera y las religiones falsas, sino que tan sólo se defiende la implantación de un estado jurídico legal idéntico para todos los ciudadanos, que viven y quieren vivir de acuerdo con su derecho y deber subjetivos de honrar a Dios, según el dictamen de su recta conciencia"(3) y de vivir de acuerdo con sus convicciones, dentro de los límites del orden público.

(1) VERA URBANO: Ob. cit. pág. 32.

(2) Mons. PEREZ MIER: Ob. cit. págs 173 y siguiente.

(3) Vid. CÁNTERO CUADRADO(Pedro): Reflexiones acerca de la libertad religiosa en el Ordenamiento jurídico actual de España, en " Libertad religiosa, una solución para todos," pág. 127.

Realmente , en la práctica y bajo el aspecto jurídico, la libertad religiosa viene a coincidir con el derecho de libertad religiosa.

2. CONCEPTO DEL DERECHO DE LIBERTAD RELIGIOSA.

La libertad religiosa es un derecho humano y civil y como tal aparece hoy, como veremos más adelante, formulado y reconocido en los documentos internacionales y en las Constituciones de los diferentes Estados del mundo.

Significa que puede hacerse valer y puede protegerse por la ley o por la práctica administrativa.

" La libertad religiosa, señala acertadamente COURTNEY MURRAY, se presenta concretamente como un derecho humano y civil encarnado en una institución legal que forma parte, armónicamente, de un orden constitucional de libertad más amplio. Este orden a su vez apela para su validez a los principios tradicionales de política, filosofía legal y jurisprudencia, en cuanto estos principios se adaptan vitalmente a las realidades de la expresión histórica actual. De esta forma la libertad como derecho humano queda valorizado por una convergencia de los elementos teológico, ético, político y la jurisprudencia"(1).

"La libertad religiosa , afirma ROSA (Luigi), considerada en todos sus aspectos , es una exigencia natural y , por tanto, un derecho fundamental de la persona humana"(2).

Constituye, como advierte VERA URBANO(3), un derecho innato

(1) COURTNEY MURRAY: Ob. cit. págs. 35 y 37.

(2) ROSA (Luigi): Libertad de conciencia y libertad religiosa, anotaciones histórico-jurídicas y reflexiones, en "Libertad religiosa , una solución para todos," cit. pág. 331.

(3) VERA URBANO : Ob. cit. pág. 104.

y, por consiguiente inviolable de la persona humana.

"Se trata - según afirma LANARES - de un derecho universal, puesto que es expresión de la misma naturaleza del hombre y permanece independiente del tiempo y de las circunstancias. Este principio es válido para todos los hombres y todas las convicciones religiosas o no religiosas. Es un derecho del hombre, ya que él es considerado a la vez como individuo y como miembro de la sociedad"(1).

VINET lo define, por su parte, en los siguientes términos:

"C'est le droit que nous avons d' établir nos rapports avec la Divinité de la manière que nous paraît convenable. C'est le droit de n'admettre aucun juge de ce commerce intellectuel et moral, que notre conscience. C' est le droit de choisir entre croire et ne pas croire, entre adorer et ne pas adorer. C' est la parfaite indépendance de l'homme social en matière de croyance et de profession religieuse. Il est bon d'observer le caractère important de la liberté de conscience, afin d'apprécier toute l'étendue de ce droit.

La libertad de conciencia n'est pas seulement la faculté de se décider entre une religion et une autre, c'est aussi essentiellement le droit de n'en adopter aucune, et de rester étranger à toutes les formes et à tous les établissements que le sens religieux a pu créer dans la société"(2).

Por todo ello, es claro que la libertad religiosa constituye un derecho natural del hombre que los ordenamientos jurídicos de los diferentes Estados deben reconocer y proteger como derecho civil.

En cuanto derecho natural, el derecho de libertad religiosa es la facultad esencial del hombre a estar inmune de coacción externa en la investigación de la verdad religiosa, en el aceptar o rechazar la fe religiosa, en cambiar de religión y en vivir su vi-

(1) LANARES: Ob. cit. págs 50 y 51

(2) Ibidem, pág. 51

-da religiosa o no religiosamente, en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites exigidos por el justo orden público.

En cuanto derecho civil, es esa misma facultad esencial del hombre de estar inmune de coacción en materia religiosa reconocida y protegida por el ordenamiento jurídico del Estado.

3. Sujeto del derecho de libertad religiosa.

Como todo derecho fundamental, el derecho de libertad religiosa es una relación intersubjetiva en la que se distinguen claramente dos sujetos: el sujeto activo y el sujeto pasivo.

El sujeto activo o titular del derecho de libertad religiosa es el hombre, en sentido universal, y en consecuencia incumbe a todos: creyentes y no creyentes o ateos, ya actúen individual, colectivamente o en asociaciones corporativas.

" El sujeto adecuado de la Libertad religiosa en su sentido jurídico propio, como derecho humano y civil garantizado por la ley constitucional, afirma COURTNEY, es el cuerpo político, como tal Pueblo temporal: colectiva, individualmente y en sus asociaciones corporativas"(1).

El sujeto pasivo serán los demás hombres y sus estructuras sociales, especialmente el Estado.

4. Objeto del derecho de libertad religiosa.

El objeto del derecho de libertad religiosa es realmente complejo. En él podemos distinguir los siguientes aspectos o momentos: libertad de conciencia, libertad de expresión religiosa o de culto, libertad eclesial o corporativa y libertad de apostolado.

(1) COURTNEY MURRAY: Ob. cit. pág. 37.

4. 1. Libertad de conciencia.

La libertad de conciencia es la libertad religiosa considerada, ante todo, en la persona individual(1).

En su sentido jurídico "es, como señala COURTNEY MURRAY, el derecho humano y civil que la persona tiene a estar inmune de toda coacción externa en su búsqueda de Dios, en la investigación de la verdad religiosa, en el aceptar o rechazar la fe religiosa, en el vivir su vida interior religiosa o no religiosamente. En una palabra, es la libertad de decisión religiosa personal"(2).

Pero esta libertad es esencialmente social, "Las decisiones religiosas de un hombre, aunque personales, se plasman en el contexto de la existencia del hombre. Al adoptarlas el hombre tiene derecho a estar libre de coacción por parte de cualquier fuerza o poder humano dentro del medio social. La sociedad y todas sus instituciones están obligadas a respetar este derecho y a impedir la coacción(3). Y entendemos aquí por coacción, de acuerdo con COURTNEY MURRAY, " cualquier forma de compulsión y restricción, sea legal o extralegal. Incluye cosas tales como la discriminación social, los inconvenientes económicos y las incapacidades civiles impuestas por razón de la religión. Hoy día incluye, como parte importante las formas coactivas de presión psicológica, como la propaganda masiva, las técnicas de lavado de cerebro etc."(4).

4.2. Libertad de expresión.

La libertad de expresión religiosa, es " el derecho, tanto

(1) VERA URBANO: Ob. cit. pág. 33.

(2) COURTNEY MURRAY: Ob. cit. pág. 37.

(3) Ibidem.

(4) Ibidem, pág. 38.

de los individuos como de los cuerpos religiosos de estar inmunes de coacción en lo relativo al culto público de Dios, observancias y prácticas religiosas públicas, proclamación pública de la fe religiosa y declaración pública de las implicaciones de la religión y de la moral en los asuntos temporales de la comunidad" (1), dentro de los límites exigidos por el justo orden público.

4. 3. Libertad eclesial o corporativa.

La libertad religiosa eclesial o corporativa es, en realidad, "el derecho que las comunidades religiosas tienen dentro de la sociedad a gozar de autonomía interna. Es la inmunidad de la intervención de los poderes públicos o de cualquier organismo social en la definición de sus propios estatutos corporativos, en la determinación de su doctrina y política, en su disciplina interna y en su autogobierno, en el nombramiento de cargos y en la definición de sus funciones, en la formación y distribución de sus ministros, en su comunicación con otras comunidades y con las autoridades religiosas reconocidas de otros países. Esta libertad incluye también la inmunidad de las comunidades religiosas para ser empleadas por los poderes públicos como *instrumentum regni*. En una palabra, esta libertad es el equivalente corporativo de la libertad personal de conciencia"(2).

4. 4. Libertad de asociación religiosa.

La libertad de asociación religiosa consiste en el derecho de inmunidad frente a la coacción para afiliarse o dejar de pertenecer a cuerpos orgánicos; y en segundo lugar la misma inmu-

(1) COURTNEY MURRAY: Ob. cit. pág. 38.

(2) Ibidem. pág. 39.

-nidad para la formación de asociaciones con objetivos religiosos y de caridad(1).

4. 5. Libertad de apostolado.

La libertad de apostolado hace referencia a la actividad misional, se refiere, por consiguiente, también a individuos que no pertenecen a la propia Iglesia.

Tiene dos finalidades que de acuerdo con VERA URBANO podemos describir así: a) " El acrecentar el fervor religioso entre los fieles de la misma comunidad, por medio de la predicación(dentro o fuera de los actos de culto), enseñanza de catecismo, escritos en periódicos, revistas o libros, actuaciones públicas de carácter religioso en actos especialmente organizados para esto, o por medio del cine, el teatro, la radio, la televisión esto podríamos llamarlo realmente el apostolado interno"(2).

b) " O bien dirigir estos mismos actos de información religiosa hacia aquellas personas, que no participan de nuestra fe, con el fin de atraerlas a nuestra Iglesia. Este sería el apostolado externo, que se practica en las misiones exteriores y en general en las diversas formas sanas de proselitismo religioso.

En ambos aspectos la libertad de apostolado brota necesariamente del entusiasmo religioso por la propia fe, que quiere llevarse a los que no la tienen, o acrecentarse en los que ya la poseen. De cualquier modo, supone el pleno ejercicio de la libertad de la conciencia y se deriva de ella"(3).

La mayor dificultad práctica del régimen de libertad religiosa

(1) COURTNEY MURRAY: Ob. cit. pág. 38.

(2) VERA URBANO: Ob. cit. pág. 35.

(3) Ibidem, págs. 35 y 36.

radica, sin duda, en el ejercicio ordenado o no de este apostolado externo. " Casi toda la dificultad práctica del régimen de libertad religiosa, afirma VERA URBANO, radica en el ejercicio ordenado o no de este proselitismo externo. De aquí parten y han partido siempre las fricciones entre las diversas confesiones religiosas de un mismo país"(1). Consiguientemente, y, para un régimen social de libertad religiosa es necesario reglamentar con suma atención cuanto a esto se refiere y procurar su exacto cumplimiento en bien de todos(2).

(1) VERA URBANO: Ob. cit. pág. 36.

(2) Ibidem.

5. FUNDAMENTO DEL DERECHO DE LIBERTAD RELIGIOSA: LA DINIDAD DE LA PERSONA HUMANA.

El derecho de libertad religiosa tiene su fundamento realmente en la dignidad de la persona humana. Pero en qué consiste esta dignidad humana? A ello procuraremos responder en los apartados siguientes:

A) Orden cósmico y moral.

Lo que constituye la dignidad del hombre ut natura data(1) en un orden estático, es su cualidad de ser mundano, espiritual, consciente y libre.

Pero, el orden de la naturaleza no es estático, sino dinámico. "No se da el ser para que se perpetue eternamente en el mismo estado de origen. Todo ser es esencialmente dinámico. Lleva impresa en si por el creador una finalidad inmanente, que es, al propio tiempo, objetivo impuesto y exigencia de movimiento.

(1) VERA URBANO : Ob. cit. pág. 63.

(2) SANTO TOMAS DE AQUINO: In II Physic., 14.

(3) VERA URBANO: Ob. cit. pág. 64.

(4) Ibidem.

(5) Summa Theol., 1, q. 29,1.

Movimiento no local, sino metafísico. No es un trasladarse , sino un llegar a ser.

Evidentemente, a ser lo que no es todavía, a realizarse plenamente , consiguiendo la propia personalidad"(1).

" Todo ser tiende naturalmente hacia su propia perfección"(2).

Al hombre , al igual que al resto de los seres del universo, también se le da el ser con una finalidad, que es, asimismo, objetivo y exigencia de movimiento. "Movimiento de explicación, que busca acabarse, completarse, realizar plenamente las virtualidades de su naturaleza hasta conseguir en un ritmo creciente de perfección la propia finalidad, es decir, la realización completa de su ser de hombre"(3).

Pero existe , realmente, una diferencia fundamental en la realización de este orden de la naturaleza según se trate del hombre o de los otros seres del universo.

" En el mundo físico, la finalidad y el progreso son dados a los seres por medio de leyes físicas o de instintos "necesitantes", que determinan de modo invariable la evolución de cada ser conforme a su naturaleza"(4). Los animales, como advierte SANTO TOMAS, no actúan propiamente, "más bien son movidos que se mueven"(5). Es el orden cósmico.

" El hombre, sin embargo, aunque tiene también su propia meta impuesta por el Creador y está, como los demás seres, sometido a esta exigencia de perfectibilidad, posee el dominio de su propio progreso. No está determinado, sino que es libre"(6).

El hombre, afirma con razón MAX SCHELER " es el ser que sabe

(1) VERA URBANO: Ob. cit. pág. 63.

(2) SANTO TOMAS DE AQUINO: In II Physic., 14.

(3) VERA URBANO: Ob. cit. pág. 64.

(4) Ibidem.

(5) Summa Theol., 1, q. 29, 1.

decir no"(1).

" El orden no se le impone, sino que se le propone. Es una invitación, que le hace la naturaleza, pero que él ha de interpretar y realizar"(2).

"De ahí que la libertad sea el distintivo más característico del ser humano, lo que subraya el nombre de persona, con que se le designa, que le hace ser"sui iuris", en cierto sentido " a se"(3).

"Con la persona subimos, pues, un nuevo peldaño en la escala del ser y entramos de lleno en el plano de la moralidad. Una nueva manera de realizarse el orden de la naturaleza: la realidad responsable y libre"(4). Estamos entonces ante el orden moral.

B) Responsabilidad individual y libertad.

La dignidad de la persona humana fluye del hecho de que el hombre es un ser dotado de razón, de voluntad libre y de responsabilidad personal(5).

" El hombre se halla esencialmente ligado a una ineludible responsabilidad moral, la de realizar la plenitud ontológica de su naturaleza mediante el ejercicio de su libertad moral"(6).

(1) MAX SCHELER: El puesto del hombre en el cosmos, Buenos Aires, Novena edición, 1971, pág. 72.

(2) VERA URBANO: Ob. cit. pág. 65. Vid. también SANTO TOMAS: Summa Theológica, 2, 2 q. 108, 2. " Dios ha confiado al hombre sus designios, para que éste los realice personal y libremente...."

(3) VERA URBANO: Ob. cit. pág. 65. Vid., también SANTO TOMAS: Summa contra Gent. III, c. 3; Summ. Theol. 2, 2, q. 64, 2 ad 3.

(4) VERA URBANO: Ob. cit. pág. 66.

(5) Declaración DH Nº 2, en ob. cit. pág. 768.

(6) VERA URBANO: Ob. cit. pág. 66.

Al dotar al hombre de la libertad de elección, Dios pone en sus manos la responsabilidad de su propio destino. " Dueño de decidir su propio triunfo o su fracaso, la exigencia de desarrollo se convierte para él en una obligación moral, una tarea de su libertad moral, ya que ésta precisamente consiste en "la capacidad de ser con plena responsabilidad personal lo que la propia naturaleza lo determina a ser"(1); la facultad de autodeterminarse en orden a la realización de la propia plenitud ontológica"(2).

El recto uso de su libertad lo decide todo para el hombre, pues de su voluntad libre dependerá el pleno desarrollo de su naturaleza(3).

Ahora bien, un uso recto de la libertad presupone, como advierte VERA URBANO, dos cosas principalmente:

"Primero, que la voluntad, como potencia ciega, no ha de pronunciar su elección sino después de haber sido debidamente informada por la facultad intelectual acerca de la finalidad concreta a conseguir y sobre los medios posibles y apropiados para el logro de este objetivo.

Segundo, que conforme a este dictamen de la razón práctica, la voluntad ha de autodeterminarse decididamente, venciendo, para ello, los impulsos e inclinaciones naturales, corporales y espirituales, que se oponen al cumplimiento de la obligación moral"(3).

El hombre en su tendencia hacia la verdad y el bien conoce la tensión de su espíritu hacia la aprehensión y la comunicación (4).

(1) J.MESSNER: La cuestión social, Madrid, 1960, pág. 332; cit. por VERA URBANO: Ob. cit. pág. 66.

(2) VERA URBANO: Ob. cit. pág. 66.

(3) Ibidem.

(4) Ibidem, pág. 67.

" En la percepción de su subsistencia, advierte que el progresivo desarrollo de sus facultades solamente llegará a ser verdadero acabamiento de su personalidad, si el enriquecimiento de su indigencia lo lleva, por virtud de ese diálogo decisivo entre el deber y la libertad, a la plena posición de si mismo para la entrega total al Absoluto"(1).

" En la línea del bien como en la de la verdad, por medio de su voluntad como por medio de su inteligencia, el hombre, la persona humana no encuentra su término, su acabamiento, su reposo, su fin , más que en una referencia a lo absoluto, a lo definitivo, a lo que es y debe ser necesariamente. No se detiene sino cuando ha encontrado la roca sólida de lo que existe sin límites, sin contingencia alguna, aquello en lo cual no se puede creer nunca en demasía, como la verdad, aquello que no se puede amar nunca demasiado, como el bien.

Este absoluto muchos no llegan jamás a nombrarlo como no sea con un término abstracto: la verdad, la justicia. Entre cristianos podemos darle su verdadero nombre, pues sabemos que la Verdad subsistente, el Bien supremo, el Eterno, el Infinito, es alguien, es un Ser personal, es el Dios a quien adoramos"(2).

" El hombre no se engrandece, sino entregandose a Aquel, que, siendo más grande que el universo y que la humanidad, no es, empero, una criatura, sino el Creador; a Aquel, que ya no se encuentra en el plano del tener, sino que Es y , por tanto, es la fuente del ser y el dispensador de todo crecimiento en el ser"(3).

" Esta perfección última constituirá la dingidad esencial del hombre como misión ya acabada, su auténtica realización, su fin, su bienaventuranza. Este será, pues, en definitiva, el noble y grandioso empeño de nuestra libertad, la meta sublime de su de-

(1) VERA URBANO: Ob. cit. pág. 67.

(2) DELAYE: La persona humana, su naturaleza, sus progresos, sus derechos, sus deberes, en "Persona y Sociedad", México, 1947, págs. 28 y sigs.

(3) Ibidem, pág. 41.

-cisión suprema. El mismo acabamiento de la propia libertad"(1).

"La libertad , dirá muy sabiamente KARL RAHNER, no consiste en poder hacer continuamente lo contrario de lo hecho hasta a ahora, sino en poder hacerse a si mismo definitivamente y de una vez y para siempre"(2).

El hombre debe por tanto arriesgarlo todo en aras de la libertad.

C) Presupuestos reales y éticos de la libertad.

La libertad es posibilidad; tiene realmente un sentido positivo: ser libertad para algo; para realizar el orden impuesto por Dios según ya hemos señalado.

Pero, no se da la libertad sin restricciones; "antes bien, las restricciones le vienen exigidas por su propia esencia. Es posibilidad, pero dentro de unos presupuestos de orden ontológico y ético(presupuestos reales y éticos) (3).

Es lo que SANTO TOMAS enseña al definir a la libertad como " la facultad de elegir los medios aptos para el fin, dentro de un orden dado"; *vis electiva mediorum , servato ordine ad finem*" (4). "En el orden ontológico, la libertad del hombre se encuentra con una serie de realidades preexistentes, internas y externas, que condicionan su decisión dentro de determinados límites y circunstancias. Tales son la dignidad esencial dada a realizar y las propiedades individuantes de la misma persona y de su situación concreta en el mundo(capacidad natural, cualidades

(1) VERA URBANO: Ob. cit. pág. 67. Vid. K. RAHNER: Dignidad y libertad del hombre, en " Escritos de Teología", Madrid, 1961, tomo II, pág. 248, 3. Vid., también DELAYE: Ob. cit. p pág. 46

(2) K. RAHNER: Loc. cit. pág. 259, 4.

(3) VERA URBANO: Ob. cit. pág. 68.

(4) Vid. Summ. Theol., I, q. 83, a, 4(ad sensum).

personales, posibilidades económicas, históricas, etc.

En el orden ético el presupuesto fundamental lo constituye la responsabilidad moral, que lo liga a la exigencia de perfectibilidad dentro de las circunstancias concretas de su personalidad(formación inclinaciones, hábitos etc) y en los límites impuestos por Dios a su naturaleza"(1).

Estos presupuestos reales y éticos, no sólo condicionan y limitan las posibilidades de libertad, sino que constituyen, también, requisitos internos para la acutación de la libertad.

Forman " como el contorno natural de la libertad. Algo así como los muros de la casa, que son parte de la misma y limitan, a un tiempo, la capacidad del recinto"(2).

De la naturaleza de estos presupuestos fácilmente se comprende que varien no sólo en cada persona, sino, incluso, en distintas situaciones de la misma persona, variando, consiguientemente, de modo correlativo, las posibilidades de libertad en cada caso.

D) La libertad como valor absoluto de la persona.

La libertad constituye un elemento esencial en la dignidad personal del hombre, con valor absoluto en si misma, y, por tanto, no se puede considerar como simple medio para la realización de la persona. El desarrollo de la persona exige el pleno desarrollo de la libertad(3).

"Quien niega la libertad, niega al hombre"(4).

" El hombre , afirma RECASENS , es libertad"(5).

(1) VERA URBANO: Ob. cit. págs 68 y 69.

(2) Ibidem, pág. 69.

(3) Ibidem.

(4) SCIACCA(M.F.): Libertad y persona humana, en "Rev. Estud. Pol.", 35(1951), pág. 104.

(5) RECASENS: Ob. cit.

"Por consiguiente, el respeto a la dignidad de la persona exige asimismo el respeto a su libertad y a esa serie de requisitos previos, que hemos calificado de "contorno natural" de la libertad. Impedir, estorbar o suprimir de algún modo esta esfera de la libertad sería, sin más, violar el orden moral y herir la dignidad de la persona humana en su parte más sensible"(1).

E) La ley libertadora de la libertad.

El hombre es la eterna paradoja, capaz de elevarse hasta lo más sublime y espiritual, hasta Dios, y de rebajarse hasta las bestias.

"Para remediar la posible desviación de la voluntad y ayudar a la libertad en su tarea de autoseñorío racional fué dada al hombre la ley moral, ley libertadora de la libertad. Pero la influencia de esta ley no ha de partir nunca de fuera, sino que debe ser un imperativo interior fundado en la exigencia natural del orden divino.

Del cumplimiento o incumplimiento de esta ley dependerá , ciertamente, la degradación o la conquista de la suprema dignidad de la persona. Es la tremenda aventura y el sublime privilegio de la libertad. Es también su ley y su destino: "La libertad es una carga, un peso tremendo que susta; es casi insoportable", pero que el hombre no puede dejar, ni siquiera por propia voluntad. Renunciar a la libertad sería atentar contra el orden moral, sustraerse a la responsabilidad moral en que se halla enraizada su naturaleza espiritual"(2).

"La libertad obliga al hombre a exponerse, a comprometerse en el serio juego de la vida... El hombre debe tener el valor de ser despiadado consigo mismo, esto es, estar siempre presente en toda acción a su libertad y a su responsabilidad"(3).

(1) VERA URBANO: Ob. cit. pág. 70.

(2) Ibidem. p.

(3) SCIACCA(M.F.) : Art. cit., págs 106 y sigs.

La libertad constituye una meta llena de dificultades, que el hombre habrá de conquistar tras continuada lucha y heroico esfuerzo. " Solo es digno de la libertad y de la vida, afirma GOETHE, aquel que sabe cada día conquistar una y otra"(1).

Podemos, por último, concluir afirmando con VERA URBANO: "No se concibe persona humana sin libertad moral: si la persona tiene un deber que cumplir libremente, tiene también sus exigencias y, entre ellas, la de escoger y la de que se le deje escoger"(2).

5. 2. El derecho de libertad religiosa es una exigencia de la naturaleza racional.

Por exigencia de su naturaleza racional, el hombre necesita de la libertad para conseguir la propia plenitud ontológica del modo responsable y libre, que corresponde a su naturaleza.

El hombre tiene la necesidad inviolable (responsabilidad moral) de tender a este fin, y, como consecuencia, el hombre tiene el derecho de poder elegir los medios aptos para alcanzarlo. Este poder elegir los medios es precisamente la libertad: facultad de elegir los medios aptos para el fin dentro de un orden dado(3).

Luego el hombre , por exigencia de su misma naturaleza racional tiene el derecho de autodeterminarse en orden a la realización de la propia plenitud ontológica, o sea moral.

Este derecho a la libertad moral en el hombre incluye el derecho al respeto de las distintas esferas de autodeterminación o sea los llamados derechos fundamentales de la personalidad.

Es así que entre estos derechos está la esfera religiosa, la

(1) GOETHE: PENSAMIENTOS, Barcelona, 1958, pág. 73.

(2) VERA URBANO: Ob. cit. pág. 72.

(3) Summa Theol. 1,q. 83,a 4.

búsqueda de la verdad religiosa. Luego el hombre, por exigencia de su naturaleza racional ha de poseer el derecho inviolable de autodeterminarse en lo que se refiere a la búsqueda de la verdad religiosa a la búsqueda de Dios.

Esta deducción es evidente; pues si el hombre tiene derecho a los medios para conseguir su fin, con mucha mayor razón tiene derecho a la verdad, que ha de orientarlo hacia ese fin y que constituye la perfección propia de su naturaleza racional.

Por ello, SANTO TOMAS la enumera entre la triple exigencia fundamental del hombre, de acuerdo con la triple urgencia de su naturaleza, que manda conseguir estos bienes y prohíbe lo que a ellos se opone(1):

"Pues según el orden de las inclinaciones, así es el orden de los preceptos de la Ley natural. Porque, en primer lugar, hay en el hombre una inclinación hacia el bien según la naturaleza que tiene en común con todas las sustancias: en efecto, como cualquier otra sustancia, desea la conservación de su ser, conforme a su naturaleza. Y de acuerdo con esta inclinación, 'pertenecen a la ley natural aquellas cosas, por medio de las cuales la vida del hombre se conserva y se impide su contrario.

En segundo lugar, hay en el hombre una inclinación hacia otras cosas más específicas, de acuerdo con la naturaleza que tiene en común con los demás animales. Y según esto, se dicen ser de ley natural aquellas cosas que la naturaleza enseñó a todos los animales, como es la unión del macho con la hembra, la educación de los hijos y otras cosas por el estilo.

En tercer lugar existe en el hombre una inclinación al bien según la naturaleza racional, que le es propia: así el hombre tiene la inclinación natural a conocer la verdad acerca de Dios

(1) VERA URBANO: Ob. cit. pág. 101.

y a vivir en sociedad. Y según esto, pertenecen a la ley natural aquellas cosas que se relacionan con esta inclinación: como el que el hombre evite la ignorancia, que no ofenda a aquellos con los que tiene que vivir y otras cosas que con esto se relacionan" (1).

La religión como la cultura, la estética, la ciencia ... (y las otras cosas) constituyen , por consiguiente , para SANTO TOMAS, potestades humanas anteriores a la sociedad y superiores a ella; que se imponen por exigencia misma de la naturaleza racional y están fundadas, por tanto, en la misma justicia objetiva(2).

Escapan, por ello, a la competencia del Estado. Y así podemos afirmar con VERA URBANO: " Del mismo modo que la sociedad no tiene poder sobre la verdad matemática, tampoco lo tiene sobre la verdad religiosa"(3).

La libertad religiosa constituye, así, una exigencia del derecho natural, que el derecho positivo debe respetar y tutelar.

El Estado, al establecer las normas prácticas de la vida social, ha de contar por consiguiente, con este fuero reservado por la misma justicia objetiva, y respetar y tutelar las respectivas esferas privativas, que Dios mismo, como autor de la naturaleza, reservó al hombre, confiriéndole el dominio o señorío de si mismo(4).

Se impone, como consecuencia, el reconocimiento de la libertad religiosa como derecho humano y civil y su protección por los diferentes ordenamientos jurídicos, haciendo que todo hombre goce realmente de un derecho tan esencial para su vida: "La libertad religiosa".

(1) Summ. Theol. 1, 2. 94, a. 2.

(2) VERA URBANO: Ob. cit. pág. 102.

(3) Ibidem.

(4) Ibidem.

LIMITES DEL DERECHO DE LIBERTAD RELIGIOSA:
BIEN COMUN Y ORDEN PUBLICO.

6. LIMITES DEL DERECHO DE LIBERTAD RELIGIOSA: BIEN COMUN Y ORDEN PUBLICO.

Constituye esta cuestión una de las facetas más espinosas del problema de la libertad religiosa(1).

Se hace preciso distinguir aquí el ámbito suprasocial, trans-temporal o sagrado y el secular o temporal de la vida humana.

En efecto, pues no toda la vida del hombre se reduce a su existencia temporal y terrestre. Existe también para un fin transcendental. El poder del gobierno no llega a este ámbito superior y sagrado de la existencia humana. No es el juez ni el representante de la verdad trascendente en relación con el destino eterno del hombre. Sus poderes están limitados a los asuntos de orden temporal y terrestre de la existencia humana(2).

El Estado no posee competencia jurídico moral para intervenir en la esfera privada del hombre. Y a esta esfera privativa

(1) LOPEZ JORDAN(Rafael): Libertad religiosa, una solución para todos, Madrid,1964,pág. 23.

(2) COURTNEY MURRAY(John): Libertad religiosa, en "Libertad religiosa(I, S.P.A.) ,Barcelona 1966,pág. 40.

y sagrada pertenece precisamente el derecho de libertad religiosa.

Por exigencias de su misma naturaleza racional el hombre tiene el derecho de autodeterminarse en orden a la realización de la propia plenitud ontológica o sea el derecho a su libertad moral, como ya anteriormente hemos apuntado.

Este derecho de libertad moral en el hombre incluye el derecho al respeto de las distintas esferas de autodeterminación, o sea, los llamados derechos fundamentales de la personalidad. Y, entre estas esferas de autodeterminación, necesarias para alcanzar la plenitud de la personalidad está la esfera religiosa como derecho innato y por consiguiente inviolable de la persona humana.

El papel del Estado, por tanto, en esta materia es más bien negativo; se ha de reducir como dice RUFFINI, a crear y mantener en la sociedad un ordenamiento jurídico tal, que cada individuo pueda conseguir por su cuenta aquellos fines superiores (salvación eterna y verdad científica) sin que los otros hombre, ni separados ni reunidos en asociaciones, o iglesias, ni siquiera impersonados en aquella suprema colectividad que es el Estado, le puedan poner en esto el más pequeño estorbo o causarle por esto mismo el más pequeño estorbo o causarle por esto mismo el más tenue daño(1).

Sin embargo, hay un aspecto de la libertad religiosa, que ciertamente, entra en la competencia de la autoridad social. Es éste el que se refiere al ejercicio externo de la religión en cuanto puede tener implicaciones de orden público.

En efecto, siempre que el ejercicio(individual o colectivo de la creencia religiosa incida en el orden público produciendo

(1) RUFFINI(Francesco): Corso di Diritto ecclesiastico italiano, Torino, 1924, pág. 135.

un trastorno social, el Derecho , es decir la Ley positiva, puede y debe limitar el ejercicio externo del mismo; pero solamente en aquella medida en que así lo exija el orden o la seguridad social"(1).

Esto nos conduce al problema de los límites del derecho de libertad religiosa.

Ahora bien, en un estricto sentido, no se debería nunca hablar, como dice CARRILLO DE ALBORNOZ(2), no se debería nunca hablar de la libertad religiosa sino más bien de normas moderadoras del ejercicio del derecho a la libertad religiosa". Particularmente cuando se trata de la limitación legal o estatal, sería una contradicción hablar de una verdadera limitación de la libertad de las relaciones del hombre con Dios"(3), ya que los actos religiosos, por los cuales los hombres ...se ordenan a Dios, exceden y trascienden, como dejamos indicado, el orden terreno y temporal, único en el que la autoridad civil tiene competencia. Por eso, el poder público excede sus límites si intenta dirigir o impedir los actos religiosos(4). "Es claro, pues, que, cuando se trata de esta clase de libertad religiosa, por decirlo así, prueba, toda limitación de ella está fuera y por encima de la competencia del Estado"(5).

Sin embargo, en el ejercicio de la libertad religiosa cabe una limitación externa justificada, pero no de la libertad misma sino de su campo de acción, como consecuencia de actividades

(1) VERA URBANO(F.): Ob. cit. pág. 116.

(2) CARRILLO DE ALBORNOZ(A.F.): Ob. cit. pág. 103.

(3) Vid. Declaración "Dignitatis Humanae", nº 7, en "Vaticano II: Historia , Doctrina, Documentos, Barcelona, 1967, pág. 773.

(4) Ibidem, nº 3. pág. 770.

(5) CARRILLO DE ALBORNOZ (A.F.): Ob. cit. pág. 104; Bases de la Libertad religiosa, Buenos Aires , Mexico, 1964, págs. 26- 30; 164-171.

personales finitas en un campo común y limitado de existencia. Toda organización racional de la sociedad civilizada reconoce la necesidad de moderar el suso de todas las libertades en consonancia con los supremos intereses esenciales de la comunidad civil(1).

Así pues, en el orden social, el ejercicio de los derechos de libertad, incluido el de libertad religiosa, pueden sufrir cierta restricción legítima por consideración a los derechos de otras personas. Es una exigencia impuesta por la misma colaboración social.

"La legitimidad de estas restricciones resulta evidente por exigencia de la responsabilidad propia de la persona en el orden social. No se puede hablar de violación del Derecho de libertad, sino, más bien, de una función legítima de la autoridad al regular la colaboración activa"(2). "Constituye la ayuda más eficaz para realizar la libertad ideal, "aquella libertad que conjuga con la conciencia del propio derecho el respeto a la libertad y al derecho de los otros, y es consciente de la propia responsabilidad hacia el bien general"(3).

6. 1. El bien común.

El bien común constituye el fin inmediato de la sociedad.

(1) GARRILLO DE ALBORNOZ: La libertad religiosa y el Concilio Vaticano II, Madrid, 1966, pág. 104.

(2) VERA URBANO(F.): Ob. cit. pág. 109.

(3) PIO XII: Radom. Nav. 1953, n. 18, en Enc. "Madrid, 1955, pág. 1.502.

" Esta expresión, bien común, fué acuñada en la lengua latina (bonum commune) por Santo Tomas, dano un nuevo valor a la completa suficiencia de la vida que Aristóteles (Política, I,1,1252,a) había definido como fin universal y especificador en esa misma universalidad de la comunidad política.

La historia del término es en si misma curiosa. Santo Tomas no definió el valor del término, aunque dejó valiosas indicaciones para precisarlo; fué recogido por la literatura española de los siglos XVI y XVII y fué después olvidado y desconocido (salvo alguna curiosa excepción) hasta el último tercio del siglo XIX y el siglo XX. En el siglo XIX fué revalidado por Leon XIII, que destacó su importancia denominandolo " razón de ser de la autoridad social" "primera y última ley de la sociedad humana" (au milieu, 15,123), pero sin ofrecer tampoco un concepto preciso.

En nuestros días tiene una sorprendente actualidad, que determina incluso diversas corrientes doctrinales en polémica sobre su significación"(1).

El bien común comprende dos aspectos fundamentales:

1. El bien común en sentido estático, y el bien común en sentido dinámico.

6.1. 1. El bien común en sentido estático.

"El bien común en sentido estático, exige la creación de un conjunto de realidades sociales que hagan posible a los miembros de la sociedad la realización de sus cometidos culturales y vitales en libre actuación. Bajo este aspecto, el bien común constituye un orden, y los medios, con que se realiza, son partes esenciales del mismo bien común; así, v.gr. tratandose del Estado, el ejército, las comunicaciones, las instituciones oficiales

(1) SANCHEZ AGESTA(Luis); Principios de Teoría Política, Madrid, 1970, pág. 69.

de sanidad y enseñanza, el Ordenamiento jurídico y las instituciones que lo garantizan"(1).

En este sentido lo toma PIO XII, cuando lo llama " aquellas condiciones externas, que son necesarias al conjunto de los ciudadanos para el desarrollo de sus cualidades y de sus funciones, de su vida material, intelectual y religiosa"(2); y JUAN XXIII, cuando dice que la recta noción del bien común de todos "abarca todo un conjunto de condiciones sociales que permiten a los ciudadanos el desarrollo expedito y pleno de su propia perfección" (3).

Del mismo modo lo define CATHREIN: " el conjunto de las condiciones necesarias para que dentro de lo posible todos los miembros del Estado puedan alcanzar libremente y por si mismo su auténtica felicidad(4). Igualmente lo define FRAGA IRIBARNE, al considerarlo como "la suma de aquellas condiciones de la vida social mediante las cuales los hombres pueden conseguir con mayor plenitud y facilidad su propia perfección"(5) . Se trata realmente de un bien (bien común), pero personalista y no colectivista y que consiste, sobre todo, como señala también el citado autor, en el respeto de los derechos y deberes de la persona humana(6).

6. 1. 2. El bien común en sentido dinámico.

El bien común en sentido dinámico es el resultado de la puesta en marcha de " esta organización social"(7).

(1) VERA URBANO: Ob. cit. pág. 78.

(2) Radiomens. (24. diciembre 1943) (AAS, 1943, 13).

(3) Vid. Mater et Magistra, nº 65, en "Cinco grandes mensajes, ed. por IRIBARREN(J.) y GUTIERREZ GARCIA(J.L.), Madrid, 1968, págs. 27-28; y en "AAS" 53(1961), pág. 417.

(4) Cit. en VERA URBANO: Ob. cit. pág. 78.

(5) FRAGA IRIBARNE: Conferencia, publicada en "YA" de 25-IV-72.

(6) Ibidem.

(7) VERA URBANO: Ob. cit. pág. 79.

"Parte de la concepción de la sociedad como estructura de prestaciones, en la que todos los miembros contribuyen a hacer posible la realización del fin social último. Este fin social sería el orden público, el orden social de la comunidad estatal, como meta impuesta por Dios a la convivencia de las personas en la vida social. Así, el Bien común sería medio para el logro del orden público(fin) y, por tanto, viene condicionado por las exigencias de orden público"(1). Este fin social último, de que hemos hablado, consiste como señala MESSNER(2), " en que todos los que se hallan insertos en dicha estructura de prestaciones obtengan también su parte correspondiente en los frutos de la misma". " Es el auxilio que obtienen los hombres, como resultado de su cooperación social, en orden a la realización de sus fines vitales esenciales"(3). Y exige necesariamente, como afirma VERA URBANO, la actuación de la responsabilidad personal, mediante el despliegue social de la libertad humana(4).

Todo esto lo resume y expresa de forma clara y elocuente el siguiente texto del P. DELOB:

"El bien común, objeto de la política , es, pues, un orden establecido entre los elementos diversos que componen un pueblo. La política no crea nada más que orden....Tomado bajo su aspecto formal, el bien común no es otra cosa que el orden mismo o la organización, que permite a los individuos y a los grupos privados, no solamente el coexistir y el conseguir sus fines propios, sino el encontrar en su acción concertada, la ayuda que su solidaridad natural vuelve algo necesario

El bien común no es una masa ni una suma de bienes; es un estado social, un conjunto de reglas, de costumbres, de institu-

(1) VERA URBANO(F.): Ob. cit. pág. 78.

(2) MESSNER(J.): La cuestión social, Madrid,1960, pág. 356, 3.

(3) *Ibidem*, pág. 362.

(4) VERA URBANO(F.): Ob. cit. pág. 78.

-ciones, de cosas y de valores que condicionan la vida privada y sus iniciativasUna palabra , por si sola, resume toda esta filosofía del bien común: él es el bien de la naturaleza del hombre El bien común es un bien colectivo, no porque él asuma y totalice los bienes individuales; sino porque los condiciona a todos. Tiene la fecundidad de una causa y no la riqueza cuantitativa de una masa Por ello el bien común muestra que él es de orden distinto a los bienes individuales. Es el bien de la naturaleza y de la especie, y no el de un individuo; es a su modo causa de todos los bienes particulares, porque los condiciona a todos desde el punto de vista social Del mismo modo que la especie y la naturaleza se colocan sobre el individuo, el bien común trasciende a los bienes de los particulares, cuyo mantenimiento asegura, de generación en generación, la vida y la prosperidad de la especie"(1).

El bien común de la sociedad se asienta, sin duda, sobre todo, en " la observancia de los derechos y deberes de la persona humana"(2), y "la protección y promoción de los derechos inviolables del hombre es un deber esencial de la autoridad civil"(3).

Ahora bien, la persona humana, como ya hemos expuesto, tiene derecho a la libertad religiosa y " este derecho ... está realmente fundado en la dignidad misma de la persona humana, tal como se conoce por la palabra de Dios y por la misma razón natural. De ambas premisas, pués, necesariamente se sigue, como advierte LOPEZ DE PRADO(4), en primer lugar, que el derecho a la libertad religiosa es parte esencial del bien común; en segundo lugar que " ... la protección del derecho a la libertad religiosa concierne a los ciudadanos, a las autoridades civi-

(1) DELOS: La fin propre de la politique et le bien commun temporel, en "Semaines Soc. de France", 1953, págs 222 y sig. cit. en VERA URBANO: Ob. cit. pág. 79.

(2) Declaración DH, nº 6, en ob. cit. pág. 772.

(3) Ibidem.

(4) LOPEZ DE PRADO(J.): Analisis jurídico, en "Vaticano II. La libertad religiosa, Univ. P. Comillas, Madrid, 1966, p.276

-les, a la Iglesia y demás comunidades religiosas, según la índole peculiar de cada una de ellas, a tenor de su respectiva obligación para con el bien común"(1); se sigue, también, que esta protección corresponde, ante todo, a la autoridad civil, al Estado como gerente máximo del bien común, de manera que "este derecho de la persona humana a la libertad religiosa ha de ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad de forma que llegue a convertirse en derecho civil"(2); se sigue finalmente que "debe, pues, la potestad civil tomar a su cargo la tutela de la libertad religiosa de todos los ciudadanos por medio de leyes justas y otros medios aptos y facilitar las condiciones propicias que favorezcan la vida religiosa, para que los ciudadanos puedan ejercer activamente los derechos de la religión y cumplir sus deberes"(3).

Si, pues, el derecho a la libertad religiosa es parte esencial del bien común y la autoridad pública tiene por fin la protección de ese bien común, es una contradicción que la autoridad pública, en nombre del bien común pueda poner límites a la libertad religiosa utilizando cualquier clase de coacción(4). La conclusión de este razonamiento es, por ello mismo, evidente: el bien común como contrapuesto al orden público no puede constituir un límite jurídico a la libertad religiosa de los ciudadanos, exigible por la potestad coactiva del Estado.

El límite sólo puede ser impuesto por la defensa de aquella parte fundamental del bien común necesaria para la existencia de la sociedad. Es lo que hoy técnicamente se llama orden público(5), y que comprende aquellas "normas que son requeridas

(1) Declaración DH, nº 6, en Concilio Vaticano II, cit. pág. 772.

(2) Ibidem, nº 2, pág. 768.

(3) Ibidem, nº 6 pág. 772.

(4) LOPEZ DE PRADO(J.): Ob. cit. pág. 277.

(5) Declaración B H.ª, en Vaticano II, cit. pág. 773.

por la tutela eficaz, en favor de todos los ciudadanos , de sus derechos individuales, y por la pacífica composición de tales derechos; por la adecuada promoción de la honesta paz pública, que es la ordenada convivencia en la verdadera justicia; y por la debida custodia de la moralidad pública"(1).

"Los elementos del orden público son otras tantas exigencias de derecho natural, constitutivos de otros tantos límites naturales al derecho de libertad religiosa. Al Estado corresponderá el incorporarlos, determinarlos y actualizarlos en su ordenamiento jurídico positivo"(2).

Si el Estado se acomoda a este criterio al establecer los límites a la libertad religiosa, ciertamente , sus normas no serán arbitrarias, ni favorecerán injustamente a una parte, sino que, como señala el Concilio Vaticano II, serán "normas jurídicas conformes con el orden moral objetivo"(3).

Así pues, el orden público, es decir la parte fundamental del bien común adquiere un relieve especial en el problema de "los límites de la libertad religiosa", pues es solamente el orden público la única causa de limitación jurídica admisible del derecho de esta libertad. Por todo ello creemos necesario un análisis detenido del mismo, que procuraremos realizar en el apartado siguiente.

(1) Declaración DH, nº 7.

(2) LOPEZ DE PRADO(J.): Ob. cit. pág. 278.

6. 2. EL ORDEN PÚBLICO

Al constituir el "orden público" la única causa admisible de limitación jurídica del "derecho de libertad religiosa", se impone necesariamente un análisis detenido del mismo.

Así pues, y para su mejor comprensión, consideramos de capital importancia analizar los siguientes puntos:

- 6. 2. 1 . Concepto de "orden público".
 - 6.2. 2. Clases de "orden público".
 - 6.2. 3. "Orden público".- Bien común y orden jurídico.
 - 6.2. 4. Justicia y territorialidad del "orden público".
 - 6.2. 5. Formulación doctrinal del "orden público".
 - 6. 2. 6. Formulación normativa.
-

6.2.1. Concepto del orden público.

Al intentar analizar el orden público hay que reconocer que nos encontramos ante una fórmula vaga e inconcreta.

El orden público, como señala MARTIN -RETORTILLO(1), es un concepto de muy vago significado e imprecisos contornos.

Todos los que han estudiado el concepto de orden público

(1) MARTIN RETORTILLO(Lorenzo): Libertad religiosa y orden público, (Un estudio de Jurisprudencia), Madrid, 1970, pág. 14

han coincidido, como advierte AGUILAR NAVARRO(1), en afirmar que se trata de una noción tremendamente enigmática.

Falta, en realidad, una exposición acabada de lo que se entiende por orden público.

Los autores que lo han estudiado incidentalmente, expresa VERA URBANO(2), convienen en afirmar que la noción de orden público tanto en derecho positivo como en la ciencia es muy vaga y equívoca: tan pronto se presenta con la categoría abstracta de un principio orientador, como aparece materializado en una rica gama de formas sociales concretas.

Sin embargo, dentro del sistema personalista que nosotros seguimos, pensamos con el P. LNER(3) y de acuerdo con VERA URBANO(4), que se trata de un término no equívoco sino analógico; pues, entre las diversas definiciones que del orden público dan las distintas ramas jurídicas, es fácil destacar una nota común que coincide con la idea que acerca de este punto tiene el común de los ciudadanos.

Esta nota común a toda concepción de orden público sería el conjunto de principios morales, políticos, económicos y sociales que inspiran todo Ordenamiento jurídico y que son considerados como fundamentos esenciales de una ordenada convivencia, en el sentido dinámico de colaboración activa, que entraña la idea de sociedad"(5).

(1) AGUILAR NAVARRO(MARIANO): Lecciones de Derecho Internacional privado, vol. I, Tomo II Madrid, 1964, pág. 167; y D.I. Priv. Vo. I, Tomo II, Madrid, 1975, págs. 213 y ss.

(2) VERA URBANO; La libertad religiosa como derecho de la persona, Madrid, 1971, cit. pág. 121.

(3) LENER(S.): Libertá di culto e ordine pubblico, en Civ. Cat. 104(1953, I), págs 48-61; 641-653, cit. por VERA URBANO: Ob. cit. pág. 121.

(4) VERA URBANO: Ob. cit. pág. 121.

(5) Ibidem, pág. 122

Estos principios deben mantenerse, pues, a toda costa, en el ámbito de cada ordenamiento y sólo en casos límites, de ciertas situaciones expresamente previstas, podrían ser derogados.

De esta forma, el orden público, como señala VERA URBANO, mantiene un contenido esencialmente jurídico y lleva en sí, por la misma razón, la mejor garantía de su exigibilidad(1).

Constituye, ciertamente, como afirma PILLET, un medio de defensa de las leyes de garantía social(2).

Viene a ser, por tanto, el orden público, como advierte VERA URBANO, la expresión del "orden social necesario para cada sociedad pública en concreto(3).

6. 2. 2. Clases de orden público.

La distinción más fundamental, al hablar de orden público, es la que contrapone el orden público interno al orden público internacional(4).

"El orden público interno representaría la imposición de aquellas normas que el Ordenamiento del Foro considera como inderogables normas vigentes con una especial reserva de aplicación en tanto que el orden público internacional se presenta como una excepción a las normas materiales extranjeras como una "negativa allocation"(5).

Las leyes de orden público interno, advierte HERRERO RUBIO, "son las que constituyen el derecho necesario; es decir

(1) VERA URBANO: Ob. cit. pág. 122.

(2) PILLET: De l'ordre public en droit international privé, Paris, 1890, cit. por HERRERO RUBIO(Alfredo): Derecho Internacional Privado, I Valladolid, 1964, pág. 516.

(3) VERA URBANO: Ob. cit. pág. 122.

(4) AGUILAR NAVARRO: Ob. cit. (Lect. 3ª), pág. 169.

(5) Ibidem.

el conjunto de preceptos que los individuos no pueden menos de aceptar su aplicación, son las leyes imperativas(*ius cogens*)"(1).

Son leyes que tienen por fin principal la tutela de un interes fundamental de la sociedad nacional(2).

Constituye, así, el orden público un límite a la autonomía de la voluntad(3).

El orden público internacional consiste " en que en determinadas ocasiones la regla general, es decir el principio de la personalidad del derecho, sufre algunas limitaciones y deja paso al sistema opuesto, al de la territorialidad. Es por lo tanto, una excepción al sistema general"(4).

Abarca aquellos principios éticos, que deben regular toda relación entre autoridades soberanas(5).

El orden público interno comprende además de las exigencias de orden moral supremo aplicable a todos los Estados, la serie de características propias de cada nacionalidad concreta, que matizan aquellas exigencias superiores y explican la consiguiente diversidad de órdenes públicos internos: como consecuencia lógica de la misma multiplicidad de Estados(6).

Está constituido por los principios del orden social estatal general, pero matizados en cada caso concreto, como señala VERA URBANO, por las características propias de la comunidad en cuestión; actuando como principio necesario, que informa el Ordenamiento jurídico estatal respectivo(7).

(1) HERRERO RUBIO(A): Ob. cit. pág. 516.

(2) MAURY: L' evicción de la loi normalement cometent: l'ordre public ., Col. Villag. lí 561,1952; cit. por HERRERO RUBIO: Ob. cit. pág. 516.

(3) HERRERO RUBIO(A): Ob. cit. pág. 516.

(4) Ibidem, pág. 517.

(5) VERA URBANO: Ob. cit. pág. 122.

(6) Ibidem , pág. 123.

(7) Ibidem.

El orden público es, pues la expresión del orden social dentro de la comunidad estatal(2).

Ahora bien, siendo el Estado la sociedad tipo, cuando se habla de "orden público " sin otra precisión ulterior se entiende normalmente la referencia como hecha al orden público interno estatal. Así lo usaremos nosotros en las reflexiones siguientes.

6. 2. 3. Orden público- Bien común y orden jurídico.

El orden público, como patrón de toda gestión social, condiciona realmente al bien común estatal(bien comun) como bien que es de orden organizador. "Como medio respecto del fin el bien común debe ser una organización(bien común en sentido estático) acorde con las exigencias del orden público, que promueva y facilite (bien común en sentido dinámico) la ordenada realización de este mismo orden público como meta final(3).

En el plano ya más inmediato de la ejecución práctica como norma que recoge a un tiempo los principios necesarios(orden público y las otras exigencias últimas para el bienestar social(bien común), se sitúa el Derecho(la ley) como ordenación vinculante, que hará eficaz la activa convivencia en la sociedad; produciendo como resultado el equilibrio social y la paz(4).

(1) VERA URBANO: Ob. cit. pág. 123.

(2) Ibidem,

(3) Ibidem.

(4) Ibidem, págs. 123-124.

Así pues, con respecto a la ley, tanto el orden público como el bien común se sitúan, como advierte VERA URBANO, en la escala de los principios informadores; aunque el segundo con mayor concreción que el primero por acercarse más al nivel de la variada realidad social(1). En este sentido deben interpretarse las palabras de Monseñor DE SMEDT, que dice: " Cuando se trata de limitación (del derecho de libertad religiosa) se toma el bien común en su parte fundamental. Esta parte del bien común se llama hoy, en el Derecho civil moderno y en muchas Constituciones públicas "orden público"(2).

Existe por tanto una distinción entre el bien común y el orden público.

El bien común recoge los principios necesarios del orden público y, además otras exigencias útiles para el más fácil logro del fin social. En este aspecto, como expresa VERA URBANO, "se puede hablar del bien común como principio necesario, ciertamente, pero, no absoluto como el orden público, sino solamente relativo. Por consiguiente, mientras el orden público justifica siempre la restricción de la libertad, el bien común la justifica sólo cuando se atenta a su parte fundamental y no cuando se refiere a la pura "conveniencia y utilidad"; pues esto iría contra las mismas exigencias del orden público, al que la organización social se debe conformar"(3).

(1) VERA URBANO: Ob. cit. pág. 124.

(2) DE SMEDT: Relación presentada al Concilio Vaticano II el 19 de noviembre de 1965, cit. en JIMENEZ URRESTI: Libertad religiosa, Madrid, 1965, pág. 173, nota 15.

(3) VERA URBANO: Ob. cit. pág. 124.

"La distinción entre bien común y orden público- afirma DE SMEDT - concuerda con la conocida distinción entre sociedad y Estado. Una cosa es el bien de la sociedad, que toda sociedad debe conservar, y otra el ser mismo de la sociedad, que el Estado debe asegurar. Al bienestar de la sociedad pertenecen todos los bienes, de todo género, que se refieren a la protección de la persona humana aquí en la tierra. Al ser mismo de la sociedad, en cambio, pertenecen el bien político, que es la paz pública; el bien moral, que es la moralidad pública; el bien de la justicia, que es la posesión y el ejercicio garantizado de los derechos humanos y civiles.

Una cosa es por tanto, lo útil a la sociedad, y otra, lo necesario a la misma. E, igualmente, una cosa es lo que se opone al orden público, y que debe ser reprimido, y otra, lo que se opone al bien común, que no tiene por qué ser reprimido necesariamente, ya que de suyo vale el principio de la libertad, sancionado por la clásica "regula juris" (según el cual "se ha de reconocer la máxima libertad posible, y se ha de desear sólo aquella restricción de libertad que fuere necesaria"). Siendo esto así, se ha de ver por qué las exigencias del orden público pueden justificar la restricción de la libertad en un caso, y a la vez por qué las utilidades del bien común no lo justificarían. Aquellas urgen de modo especial; estas, en cambio, no. La restricción de la libertad puede ser legítima para evitar daños, pero no, en modo alguno, para promover bien común. Pues al bien común mismo pertenece la máxima libertad civil posible, ya que ha nacido para el progreso de la vida y para alcanzar la perfección de la persona humana⁽¹⁾.

(1) DE SMEDT: Loc. cit. en ob. cit. págs. 176-177.

El orden público comprende , pues, aquellos bienes que son esenciales para la existencia de la sociedad. De ahí que lo que se opone al orden público de ser reprimido , como advierte LOPEZ DE PRADO, con la correspondiente restricción de libertad , ya que sin ello no habría sociedad y por consiguiente las condiciones mínimas de existencia humana(1).

6.2. 4. Justicia y territorialidad del orden público.

Justicia y territorialidad, como ingredientes del orden público, son notas que no admiten discusión pero que si exigen aclaración(2):

a) El orden público debe ser, ante todo, un orden basado en la justicia. Teniendo en cuenta la funcionalidad de la sociedad y de todo el orden social, esta justicia habrá de reflejar y respetar el concepto fundamental del Estado como Ordenamiento de la autoridad al servicio de la libertad personal(3).

" Esto que en teoría parece cosa clara y que desde la generalidad resulta facil no lo es tanto cuando se trata de completar aquel concepto fundamental (orden público estatal general) con las características de una determinada comunidad. Entonces al inevitable relativismo doctrinal impuesto por la propia concepción filosófica puede sumarse el riesgo de querer hacerse una justicia a medida de los propios deseos, considerando esencial modos propios muy respetables ciertamente, pero que no pueden reclamar una exigi-

(1) LOPEZ DE PRADO(Joaquín): Análisis jurídico, en "La libertad religiosa " Universidad de Comillas, Madrid, 1966, pag. 275.

(2) VERA URBANO(F.): Ob. cit. pág. 125.

(3) Ibidem.

bibilidad universal"(1).

b) El orden público debe tener un acento territorial. Esta territorialidad se impone desde dos puntos distintos: el teórico y el funcional: a) Por definición , todo orden público interno debe tener, según hemos indicado , un sello nacional constituido por la propia concepción de la vida, la existencia de instituciones arraigadas en la vida de la comunidad, etc como algo que pertenece al espíritu del pueblo y que adquieren cierta categoría de necesidad. Con razón el profesor AGUILAR NAVARRO, establece como postulado muy destacado en la elaboración del principio del orden público "el respeto de los derechos adquiridos"(2).

b') Funcionalmente, porque el orden público representa, como expresa VERA URBANO, una doble exigencia dentro del marco nacional: positiva, de conformación de toda la gestión social (autoridad, derechos de los particulares) con la serie de principios que lo constituyen; negativa, de exclusión de toda institución extraña, que atente al equilibrio social pretendido(3).

Pero aquí también puede darse el exceso y por lo mismo se impone la aclaración. En la fijación de los elementos nacionales precisos no se puede tener, según advierte el citado autor, como base el concepto de soberanía (ni se puede exagerar la función defensiva, desconociendo legítimos intereses extraños e incluso la mayor necesidad de un orden público superior (internacional)(4).

El orden público , por ello, debe ser aplicado conforme indica AGUILAR NAVARRO(5) con sentido restrictivo, frente a casos de manifiesta injusticia, de grave perturbación, de indispensable defensa. Y, así, la subsidiaridad y la excepcionalidad constituyen rasgos fundamentales del orden público.

(1) VERA URBANO: Ob. cit. pág. 125.

(2) AGUILAR NAVARRO: Ob. cit. (Lecciones ...) pág. 151.

(3) VERA URBANO: Ob. cit. pág. 125-126.

(4) Ibidem, pág. 126.

(5) AGUILAR NAVARRO: Ob. cit. (Lecciones ...) pág. 170.

Se advierte , pues, que el concepto de la comunidad de Derecho de Savigny(1), como moderador de un territorialismo exagerado, constituye un factor del que no se puede prescindir en la elaboración del principio del orden público, y de él puede obtenerse la orientación que permita, al mismo tiempo, destacar elementos de un orden público interno, como ingredientes de un progresivo orden internacional, o supranacional"(2). Es la pretensión modernamente defendida , como advierte VERA URBANO(3), en el campo del Derecho internacional privado por el profesor AGUILAR NAVARRO(4) y que han expuesto con particular detenimiento H. ROLIN, en el terreno doctrinal(5) y W. H. ARIËNS en el judicial(6).

Como expresión de esta tendencia universalista en la concepción y aplicación del orden público tenemos dos sentencias relativamente recientes. La primera, de la Cour de Cassation francesa de 25 de mayo de 1948, indica como criterio de orden público interno "los principios de justicia universal considerados en la opinión francesa como dotados de valor internacional absoluto"(7); la segunda, más explícita, de la Corte Federal - Reichsgericht de la Bundesrepublik de 15 de noviembre de 1956, establece que " la supresión de una norma de derecho extranjero, aplicable en principio, siendo contraria a las buenas costumbres o al orden público alemán, no tiene lugar a no ser que esta norma sea incompatible con los principios generales de Derecho reconocidos por las naciones civilizadas".

(1) AGUILAR NAVARRO: Lecciones ... págs. 149 y sigs.

(2) Ibidem, pág. 141.

(3) VERA URBANO: Ob. cit. pág. 126.

(4) AGUILAR NAVARRO: Obs. y págs citas.

(5) ROLIN (H): Vers un ordre public réellement international", en "Hommage ...au Pr. BASDEVANT" (Paris, 1960), págs. 440-462.

(6) ARIËNS: Chauvinisme judiciaire, en "Nederlands Tijdschrift voor International Recht", IX(1962), págs. 1-40, cit. en VERA URBANO: Ob. cit. pág. 126.

(7) Ibidem, pág. 39, en VERA URBANO: Ob. cit. pág. 126.

naciones civilizadas"(1).

En la misma dirección puede situarse el apartado 2 del artículo 9 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 de los Derechos del Hombre, cuando hablando precisamente del derecho a la libertad de religión, declara: " La libertad de manifestar la propia religión o creencia no puede ser objeto de otras restricciones, sino aquellas que, previstas por la ley, constituyen medidas necesarias, dentro de una sociedad democrática, para la seguridad pública, la protección del orden, la salud o la moralidad pública, o la protección de los derechos y libertades de los otros"(2).

El Magisterio Pontificio también se ha pronunciado repetidamente en este sentido. Como testimonios recientes más destacados podemos citar el discurso de Pío XII al V Congreso Nacional de la Unión de Juristas Católicos Italianos (de 6 de diciembre de 1953) (3); la carta -encíclica "Pacem in terris de Juan XXIII,(4); los mensajes de Pablo VI con motivo de su visita a las Naciones Unidas el 4 de octubre de 1965(5), y la Constitución pastoral sobre "La Iglesia en el mundo actual" del Concilio Vaticano II(6).

- (1) Vid. R.B. SCHLESINGER: Research on the General Principles of Law Escognized by Civilized Ntions, en "American Yournal of International Law",51(1957), págs 746-7, cit. en ARIENS: Loc. cit, págs 7 y sigs, en VERA URBANO: Ob. cit. págs.126-127.
- (2) Annuaire Européen ... Publié sous Les auspices du Conseil de l'Europe, Vol. I (La Haya, 1955), pág.322; TRUYOL SERRA (A.): Los derechos humanos , Madrid,1968,pág. 115; VERA URBANO(F.): Ob. cit. págs 126-127.
- (3) "Ecclesia",13(1953,II,págs 709-712).
- (4) Vid. nº 98 de la edic. de la B.A.C.Madrid,1963, págs 40 y s.
- (5)"Ecclesia", 25 (1965,II),págs 1403 y sigs.
- (6) Concilio Vaticano II: Constituciones, Decretos, Declaraciones, 2ª edici. de la B.A.C. Madrid.1966,págs 342 y sigs.

Con razón, pues, el Concilio Vaticano II, en su Declaración sobre la libertad religiosa, destaca la "universalidad de este derecho, "persona humana", "todos los hombres"(nº1.2....), insiste en la justicia de los límites" justo orden público"(nº 2 y 3) y subordina la acción del Estado, a este respecto, al interés general de la humanidad(1).

" Se hace, pues, injuria a la persona humana y al orden que Dios ha establecido para los hombres, si se niega a aquella el libre ejercicio de la religión en la sociedad, siempre que quede a salvo el justo orden público"(nº 3)(2).

"Por consiguiente, para que se establezcan y consoliden las relaciones pacíficas y la concordia en el género humano, se requiere que en todas las partes del mundo la libertad religiosa sea protegida por una eficaz tutela jurídica y que se respeten los supremos deberes y derechos de los hombres para desarrollar libremente la vida religiosa dentro de la sociedad(nº 15)(3).

6.2. 5. Formulación doctrinal del "orden público".

Antes de analizar la expresión normativa del orden público, se impone lógicamente analizar el contenido de este principio en el campo doctrinal.

Aquí se renuevan las discusiones que habían surgido al analizar el concepto.

(1) VERA URBANO: Ob. cit. pág. 128.

(2) "Concilio Vaticano II": Constituciones, Decretos, Declaraciones, cit. pág. 688; Vaticano II, Historia - Doctrina - Documentos, Barcelona, 1967, págs 770.

(3) Ibidem, págs 704 y 781.

AGUILAR NAVARRO expone lo que podríamos llamar línea media de estas opiniones. " Resumiendo, escribe él, en un compacto esquema estas opiniones, es posible afirmar que el orden público intenta proteger y salvaguardar todos estos principios y valores: 1. La soberanía nacional con todo lo que implica en lo político social y económico. 2. El orden social y jurídico del Estado. 3. El fin social que inspira determinadas leyes, o la acción protectora de determinadas instituciones políticas y sociales (protección de los socialmente débiles, política de planificación social, planes de desarrollo económico ...) 4. El esquema institucional e ideológico del Estado. 5. Los supremos principios del Derecho natural y de la justicia . 6. Los intereses esenciales y constitutivos del estatuto del ciudadano"(1).

Y, a continuación , añade este mismo autor una serie de precisiones dogmáticas muy acertadas, pues contienen la base de la "analogía, que consideramos, de acuerdo con VERA URBANO(2), la clave fundamental para la recta inteligencia de los problemas teóricos , que plantea a la Sociología y al Derecho el llamado principio del orden público.

"Todas estas dimensiones - continúa , así , diciendo AGUILAR NAVARRO, pueden hacerse converger en una concepción personalista del problema, en la que quedan integradas tanto la condición de la persona protegida como la de los intereses defendidos o amparados. El orden público sirve como una fórmula que equilibra dentro de una interpretación comunal y orgánica de la vida los elementos e interese que tejen la existencia de la persona. El orden público protege los intereses consustanciales de la comunidad internacional, es garantía y defensa de los principios constitutivos de la comunidad estatal y procede al ampara de la persona humana en sus intereses y libertades esenciales. El orden público es un instrumento del que se sirve una concepción perso-

(1) AGUILAR NAVARRO: Ob. . cit. (Lecciones), págs. 171 y sig.

(2) VERA URBANO: Ob. cit. pág. 129.

-nalista para poner límites al proceso de gregarización, de uniformidad universal y tecnificada de la vida. Por esto el orden público ampara especialmente las formas sociales de vivir y de ser una comunidad humana. Esto explica que el orden público no sea absorbido por la defensa del Ordenamiento estatal, sino que también atienda a velar por la autenticidad y personalidad de otras comunidades, como minorías nacionales, regiones, miembros de una federación, grupos nacionales que en su pasado fueron expresión de auténticas nacionalidades (como sucede dentro del esquema de las Españas). Son estas consideraciones las que nos han movido a reconocer - con características peculiares - la existencia del orden público dentro de los llamados conflictos internos"(1).

El Concilio Vaticano II, al precisar el ámbito del orden público justo, como límite al ejercicio del derecho de libertad religiosa, también se ha interesado por este particular.

Y, así, la Declaración sobre libertad religiosa, que se limita a enumerar una serie de puntos, afirma que estos están comprendidos en la noción orden público y constituyen "una parte fundamental del bien común"(nº 7). A saber:

1º) "La tutela eficaz, en favor de todos los ciudadanos, de estos derechos y ... la pacífica composición de tales derechos(nº7) (2).

2º) "La adecuada promoción de esta paz pública, que es la

(1) AGUILAR NAVARRO: Ob. cit. (Lecciones,....) pág. 171 y 172.

(2) VATICANO II: Historia - Doctrina ... cit. pág. 773. En la expresión : tales derechos, se refiere a "los derechos inviolables, según señala el nº 6 de la misma Declaración, entre los que se incluye el de "libertad religiosa, mediante cuyo ejercicio, dentro de las justas condiciones de la vida social, pueden los hombres observar sus deberes para conseguir con mayor plenitud y facilidad su propia perfección".

ordenada convivencia en la verdadera justicia"(ibid.).

3º) "La debida custodia de la moralidad pública(ibid.).

4º) Todo ello guardando los principios de igualdad jurídica: " esto no debe hacerse de forma arbitraria, o favoreciendo injustamente a una parte, sino según normas jurídicas conformes con el orden moral objetivo"(ibid.)(1).

De este modo el Concilio llega , como advierte VERA URBANO, hasta precisar cómo ha de ser la formulación normativa(2).

De acuerdo con esta tendencia universalista en la concepción y aplicación del orden público estatal y siguiendo a FRAGA IRIBARNE, podemos considerar el orden público como" un conjunto de normas conformes con el orden moral objetivo, y por lo mismo, encaminadas a la tutela eficaz en favor de todos los ciudadanos , de los derechos de la persona y su pacífico arreglo en caso de conflicto, todo ello por medio de la paz pública que es la ordenada convivencia en la verdadera justicia y la custodia de la moralidad pública(3).

6.2. 6. Formulación normativa.

La realización de las exigencias del orden público debe conseguirse a través de las normas jurídicas, pues el Derecho es precisamente el instrumentos de las exigencias del orden social, como la norma ética lo es del personal.

En su aspecto positivo como señala VERA URBANO, la Cons

(1) VERA URBANO: Ob. cit. pág. 130.

(2) Ibidem.

(3) FRAGA IRIBARNE(Manuel): Vid. Conferencia, publicada en "YA" del 25 - IV - 72.

-titución(Leyes fundamentales) y las leyes administrativas, procesales y civiles las que conformen la actividad social de autoridad y súbdito con aquel orden supremo organizador. En su aspecto negativo, el Código penal y las normas de policía evitarán y castigarán los atentados contra el orden , que dificulten la pacífica convivencia(1).

"Una vez formuladas las exigencias del orden público en el plano doctrinal, todo se reduce a fundir estas mismas exigencias en normas prácticas valederas para las distintas actividades con trascendencia general en la vida de la comunidad(2).

Por lo que respecta a nuestra Patria está vigente la Ley de Orden Público de 30 de julio de 1959. Concretamente, los artículos en que la propia ley define el concepto y contenido del orden público, que élla considera, son: artículos 1º y 2º.

El artículo 1º dispone: "El normal funcionamiento de las instituciones públicas y privadas, el mantenimiento de la paz interior y el libre y pacífico ejercicio de los derechos individuales, políticos y sociales, reconocidos en las Leyes, constituyen el fundamento del orden público.

El artículo 2º establece: " Son actos contrarios al orden público: a) Los que perturben o intenten perturbar el ejercicio de los derechos reconocidos en el Fuero de los Españoles y demás Leyes fundamentales de la nación, o que atenten a la unidad espiritual y social de España.

b) Los que alteren o intenten alterar la seguridad pública, el normal funcionamiento de los servicios públicos y la regularidad de los abastecimientos o de los precios prevaleciendo abusivamente de las circunstancias.

c) Los para colectivos y los cierres o suspensiones ilegales de Empresas, así como provocar o dar ocasión a que se pro-

(1) VERA URBANO: Ob. cit. pág. 132.

(2) Ibidem.

-duzean unos y otros.

d) Los que originen tumultos en la vía pública y cualesquiera otros en que se emplee coacción, amenaza o fuerza o se cometan o intenten cometer con armas o explosivos.

e) Las manifestaciones y las reuniones públicas ilegales o que produzcan desórdenes y violencias, y la celebración de espectáculos en iguales circunstancias.

f) Todos aquellos por los cuales se propague, recomiende o provoque la subversión o se haga la apología de la violencia o de cualquier otro medio para llegar a ella.

g) Los atentados contra la salubridad pública y la transgresión de las disposiciones sanitarias dictadas para evitar las epidemias y contagios colectivos.

h) Excitar al incumplimiento de las normas relativas al orden público y la desobediencia a las decisiones que la Autoridad o sus agentes tomaren para conservarlo o restablecerlo.

i) Los que de cualquier otro modo no previsto en los párrafos anteriores faltaren a lo dispuesto en la presente Ley o alterasen la paz pública o la convivencia social(1).

Conviene advertir que, aunque de primera intención, la expresión legal parece referirse sólo al "orden público (material y externo)"(orden de la policía de seguridad), sin embargo, el distinto fundamento legal de la organización social y de los derechos humanos, que se protegen, arguyen, a su vez, una evolución en el entendimiento del orden público supremo, del que el orden material no es sino un reflejo(2).

El orden público, como principio informador, conserva siempre un contenido más amplio que el mismo orden normativo. Así lo supone la misma Ley de Orden Público anteriormente citada

(1) Vid. ARANZADI: Repertorio cronológico de Legislación, Pamplona, 1959, pág. 1.010.

(2) VERA URBANO: Ob. cit. pág. 133.

al destacar el carácter enunciativo de los hechos enumerados como contrarios al orden público(artículo 2º,i), y al conceder, en consecuencia, un cierto poder discrecional al Ministro de la Gobernación(" y en su caso, al Gobierno") (Disposición final 2ª), a los Gobernadores civiles(artículo 6º,1) y a los mismos alcaldes(artículo 7º)(1).

Esto se explica por la necesaria generalidad de la ley: es imposible encerrar, en el marco estrecho de un artículo, la variada y rica gama de la contingencia humana. Pero impone, al propio tiempo, según advierte VERA URBANO, una doble e importante afirmación:

1ª) La necesidad de llegar al máximo de concreción en la formulación normativa de lo que se estima exigencia(o infracción) del orden público(3).

2ª) La importancia decisiva de la actuación de los Tribunales en esta materia, para que se salven los derechos ciertos y se establezca el límite sólo con calidad de excepción(4).

La primera afirmación viene exigida realmente por el principio de certeza y de seguridad jurídica. A este respecto se refiere, con todo acierto, VERA URBANO, cuando dice: " Una buena regulación de la vida comunitaria impone el conocimiento cierto de lo lícito y de lo ilícito. Esto vale, sobre todo, cuando, como en el caso presente, la actuación gubernativa es subsidiaria y se supone como previo el principio supremo de la "máxima libertad". La ley debe, en este caso, establecer del modo más concreto posible lo que se estima como criterio de excepción . Deben reglamentarse las materias y las situaciones

(1) Vid. ARANZADI: Repertorio cit. págs 1015 y 1.010 resp.

(2) VERA URBANO: Ob. cit. pág. 136.

(3) Ibidem.

que actúen como límite a esa facultad cierta, previamente admitida. La misma discrecionalidad - supuesta la necesaria generalidad de la regla, que establece la limitación - debe estar reglamentada. En el supuesto, por ejemplo, de la "ordenada circulación, no bastan los principios generales, ni siquiera la ley general; es preciso el reglamento detallado de lo que se estima desorden en la conducción de vehículos para que los particulares sepan a qué atenerse y las consecuencias jurídicas, a que se exponen, si no hacen un uso "debido " de la libertad de circular"(1).

Al aplicar al caso concreto de la libertad religiosa, lo anterior afirmación, resulta una doble consecuencia:

1ª) " El reconocimiento abierto del "derecho de libertad religiosa", en el Ordenamiento jurídico, con las precisiones necesarias acerca de las facultades, que se estiman incluidas en tal reconocimiento"(2). Pues este derecho de la persona humana a la libertad religiosa ha de ser reconocido, como muy bien señala la Declaración del Vaticano II sobre libertad religiosa, en el Ordenamiento jurídico de la sociedad de forma que llegue a convertirse en un derecho civil(3).

Para no quedarnos, sin embargo, en el terreno de la pura abstracción, conviene exponer de modo más sistemático y concreto, lo que consideramos constituye el contenido del derecho de libertad religiosa, de que ya hemos hablado. Para ello seguiremos la exposición que hace VERA URBANO(4) siguiendo a PIERRE LANARES(5):

A) En cuanto derecho del individuo, el derecho de libertad religiosa comprende:

a) El derecho a poseer una convicción o una religión y como

(1) VERA URBANO: Ob. cit. págs 136-137.

(2) Ibidem, pág. 137.

(3) VATICANO II: Historia - Doctrina - Documentos, Barcelona, 1967, nº 2, 768.

(4) VERA URBANO: Ob. cit. págs. 137 y sigs.

(5) LANARES(Pierre): La liberté religieuse dans les Conventions internationales et dans le Droit général(Roanne, 1964, págs. 50 y sigs.

corolario, el derecho a informarse en la búsqueda de su creencia.

b) El derecho a manifestar su convicción o religión, desde la observancia de prácticas dietéticas impuestas por su religión.

c) El derecho a una educación religiosa de acuerdo a sus convicciones y, correlativamente, la no discriminación por motivos religiosos en el campo de la enseñanza(1).

d) El derecho a una exención del servicio militar y su sustitución por un servicio de carácter civil por motivos religiosos, en el caso de los "objetores de conciencia".

e) El derecho a celebrar matrimonio conforme a sus creencias y, correlativamente, la libertad de no ser forzado a participar en una ceremonia religiosa de otra creencia, contra su voluntad ,

f) El derecho al trabajo sin ninguna discriminación de orden religioso, así como el derecho al descanso y a los días feriados, según su creencia religiosa.

g) El derecho a practicar libremente el culto de su religión, tanto individual como colectivamente, y tanto en público como en privado.

h) El derecho a que se respeten las prescripciones de una persona respecto a sus funerales, de acuerdo a los dictados de su religión.

i) La libertad de toda coacción respecto a participación obligatoria en un acto religioso, o respecto a la prestación de un juramento religioso.

B) En cuanto derecho de la comunidad , la libertad religiosa comprende: a) El derecho de asociación respecto a los grupos

(1) Vid. a este respecto , el artículo 1 del Convenio aprobado por la Conferencia general de la UNESCO, el 14 de diciembre de 1960, sobre la lucha contra la discriminación en materia de enseñanza.

y comunidades religiosas y el derecho a su reconocimiento por el Estado.

b) El derecho de reunión pacífica, que entraña la libre práctica del culto y una protección por parte del Estado de los objetos y emblemas del culto de las distintas religiones.

c) El derecho de organizar procesiones o manifestaciones públicas de culto con sujeción a las normas dictadas por el Estado para tales actos, y, en el mismo sentido el derecho de realizar peregrinaciones religiosas.

d) El derecho de reunirse en congresos o asambleas de fieles para tratar de los problemas de su comunidad .

e) El derecho de organización del grupo o comunidad religiosa, reconociendo autonomía a las normas del ordenamiento del grupo, tanto en lo que respecta a la situación de los fieles del mismo como respecto a sus jerarquías.

f) El derecho de autogestión o administración del patrimonio y recursos de las comunidades de creyentes.

g) El derecho de predicación de su fe o creencia religiosa, tanto en el interior de sus templos como en el exterior y, correlativamente, la libertad de formación del personal que ha de ocupar el papel de ministros del culto.

h) La libre educación religiosa de acuerdo a las convicciones del grupo o comunidad.

i) El derecho a propagar su fe por todos los medios lícitos de comunicación admitidos por el Estado.

j) La libertad de realizar actos de beneficencia del grupo, mediante la organización de los entes y servicios adecuados.

C) En cuanto derecho del ciudadano respecto al Estado, la libertad religiosa implica una serie de responsabilidades colectivas, entre las que se destacan:

a) La obligación de crear un clima social favorable al res-

peto de la libertad religiosa.

b) El deber de dar satisfacción a los derechos de la persona derivados de la libertad religiosa.

c) La obligación de no utilizar la religión como instrumento político, ni dar entrada a la religión para fijar los derechos civiles y políticos de los ciudadanos.

d) El Estado, por su parte, velará por que se mantenga el principio de igualdad jurídica entre las distintas comunidades religiosas y, en casos de conflicto, se limitará a intervenir con moderación para buscar una solución que satisfaga al máximo la libertad de religión en el Estado(1).

2ª) "La reglamentación detallada y razonada, en cada una de las materias, de lo que se estima "no conforme con las exigencias del orden público interno; con la determinación de las sanciones consiguientes, que deban imponerse"(2).

En esta materia es, ciertamente, evidente la importancia decisiva de los Tribunales, supuesta la necesaria generalidad del principio, que escapa a toda normación, aun dentro de la mayor precisión. " Es precisamente la razón de ser de la misma función judicial: siempre se darán conflictos jurídicos"(3).

Ahora bien, el Tribunal habrá de actuar guardando la regla de la proporcionalidad y aplicando el principio fundamental de que se ha de aplicar un criterio restrictivo a las normas que restringen los derechos individuales, sólo entonces se salvará

(1) VERA URBANO: Ob. cit. pág. 139; toma este resumen VERA URBANO de GONZALEZ CAMPOS(Julio): Jurisprudencia española sobre cuestiones de Derecho Internacional Público, en Rev. española de Derecho Internacional", 18(1965), págs 549-550

(2) VERA URBANO: Ob. cit. pág. 139.

(3) Ibidem.

el carácter funcional, y por ende, excepcional del principio de orden público y se afirmará en la vida de la sociedad la regla , " según la cual la libertad debe reconocerse en grado sumo al hombre, y no debe restringirse sino cuando es necesario y en la medida en que lo sea"(1).

(1) Declaración D H, nº 7 , en Vaticano II, Historia - Doctrina - Documentos, Barcelona, 1967, pág. 773-774.

CAPITULO III

EL DERECHO DE LIBERTAD RELIGIOSA EN EL ORDEN
INTERNACIONAL Y EN LAS CONSTITUCIONES DE LOS
ESTADOS CONTEMPORANEOS.

CAPITULO -III -

EL DERECHO DE LIBERTAD RELIGIOSA EN EL ORDEN INTERNACIONAL Y EN LAS CONSTITUCIONES DE LOS ESTADOS CONTEMPORANEOS.

SUMARIO

I. El derecho de libertad religiosa en el orden internacional universal . 1. La Carta de las Naciones Unidas. 2. La Declaración universal de los derechos del hombre. 3. La Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación racial. 4. El Pacto internacional sobre los derechos civiles y políticos. El Proyecto de Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o en las creencias. II. El derecho de libertad religiosa en el ordenamiento internacional europeo. 1. El derecho de libertad religiosa en la Convención europea de Roma de 4 de noviembre de 1950. 2. El derecho de libertad religiosa en el Acta final de la Conferencia de Helsinki, sobre la Seguridad y cooperación en Europa. III. El derecho de libertad religiosa en las constituciones de los Estados contemporaneos. 1. Sistema político-religioso de reconocimiento oficial de una religión. A) Estados de confesionalidad musulmana. B) Estados de confesionalidad budista. C) Estados de confesionalidad cristiana: a) Estados de confesionalidad luterana. b) Estados de confesionalidad anglicana. c) Estados de confesionalidad ortodoxa . d) Estados de confesionalidad católica. 2. Sistema político-religioso de separación de la Iglesia y del Estado con verdadera libertad religiosa. 3. Sistema de separación hostil de la Iglesia y el Estado. IV. Conclusión.

CAPITULO III

EL DERECHO DE LIBERTAD RELIGIOSA EN EL ORDEN INTERNACIONAL Y EN LAS CONSTITUCIONES DE LOS ESTADOS CONTEMPORANEOS.

I. EL DERECHO DE LIBERTAD DE LIBERTAD RELIGIOSA EN EL ORDEN INTERNACIONAL UNIVERSAL.

El ordenamiento internacional del derecho de libertad religiosa en el ámbito universal está constituido por las disposiciones de los documentos siguientes: la Carta de las Naciones Unidas del 26 de junio de 1945; la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, del 10 de diciembre de 1948; la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación racial, del 21 de diciembre de 1965; y Pacto internacional sobre los derechos civiles y políticos del 16 de diciembre de 1966. A pesar de no haber alcanzado todavía el rango de declaración ni convención, debe tenerse en cuenta el actual Proyecto de Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y de discriminación fundadas en la religión o en las creencias".

Se hace necesario ,pues, para conocer la situación actual del derecho de libertad religiosa en el orden internacional universal, un examen detenido de los citados textos y a este fin van dedicados los apartados siguientes.

1. Carta de las Naciones Unidas(1).

La Carta de la Organización de las Naciones Unidas, constituye el primer documento en el que aparece un reconocimiento

(1) Texto en GARCIA ARIAS:Ob. cit. pág. 21 y sigs.

internacional de principio de los derechos humanos, y por consiguiente del derecho de libertad religiosa. Así lo advierte claramente TRUYOL, cuando afirma: " Cualquiera que se el papel que quepa asignar a la regulación internacional de determinados derechos de la persona humana en el pasado(libertad religiosa y de conciencia, prohibición de la esclavitud, derechos laborales, etc.), el hecho es que hasta la Carta de la Organización de las Naciones no encontramos un reconocimiento internacional de principio de los derechos humanos. Este es indiscutiblemente uno de los méritos históricos de la Carta. Y lo es a pesar de que tal reconocimiento sólo tiene lugar de manera parcial. La Carta, en efecto, se limitó a formular el principio de una protección, más aún, de una promoción internacional de los derechos humanos y las libertades fundamentales, sin desarrollarlo por medio de normas concretas"(1)

En la Carta, los pueblos de las Naciones Unidas, solemnemente proclaman este principio: "La fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas"(2); y una doble consecuencia: la tolerancia y la cooperación internacional en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión(3).

A ello contribuirán las actividades de la Asamblea General, de la Organización, y del Consejo Económico y Social.

"La Asamblea General promoverá estudios y hará recomendaciones para los fines siguientes: (...o) fomentar la cooperación

(1) TRUYOL: Ob. cit. pág. 26 y 27.

(2) Preamble(apartado 2º).

(3) Ibidem, art. 1º, apartado 3º

internacional en materias de aspecto económico, social, cultural, educativo y sanitario, y ayudar a hacer efectivos los derechos humanos y libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión"(1).

Y la Organización promoverá "el respeto universal a los derechos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión y la efectividad de tales derechos y libertades"(2). " Todos los miembros se comprometen a tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización, para la realización de los propósitos consignados en el art. 55"(3). Además, " el Consejo Económico y Social podrá hacer recomendaciones con el objeto de promover el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos y a la efectividad de tales derechos y libertades "(4).

En la Carta se contempla la libertad religiosa, expresamente, sólo en cuanto que la religión no es, ni puede ser causa de discriminación; implícitamente, además, en cuanto que es una de las libertades fundamentales. Expresamente lo determinará la ONU, al proclamar en su Declaración Universal cuáles son las libertades y derechos fundamentales enunciados en la Carta(5).

2. Declaración Universal de los derechos del hombre del 10 de diciembre de 1948(6).

En la Declaración Universal, se reconoce el derecho fundamen-

(1) Art. 13, nº 1 b.

(2) Art. 55 c;

(3) Art. 56.

(4) Art. 62. n. 2.

(5) CORRAL: Análisis de las Implicaciones jurídico-positivas, "La libertad religiosa" - 13 - Universidad Pontificia de Comillas , Madrid, 1966, pág. 57.

-tal a la libertad de religión, de pensamiento y de conciencia, determinandose su contenido, en el artículo 18, que será resumido y desarrollado en posteriores convenios internacionales.

" Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia"(1).

Se mantiene, además el principio de la no discriminación por motivos de religión.

En dependencia del mismo se proclaman dos derechos, íntimamente relacionados con la libertad religiosa, relativos el uno al matrimonio, y el otro a la enseñanza, en la forma siguiente:

" Art. 16.º 1. A partir de la edad núbil el hombre y la mujer, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.

2. El matrimonio no puede ser realizado sino con el libre y pleno consentimiento de los futuros esposos.

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y del Estado".

(1) Texto en TRUYOL: Ob. cit. pág. 64 y sigs; también en GALLINA: Ob. cit. pág. 533.

" Artículo 26 - 2. La educación debe tender al pleno desarrollo de la personalidad humana y a reforzar el respeto de los Derechos del Hombre y de las libertades fundamentales. Debe favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos sociales o religiosos, así como el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos".

3. Convención internacional sobre eliminación de todas las formas de discriminación racial del 21 de diciembre de 1965(1).

En esta convención, los Estados expresamente se comprometen a garantizar el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión(art. 5 letra d VII).

4. Pacto internacional sobre los derechos civiles y políticos, del 16 de diciembre de 1966.

En este Pacto se garantiza el derecho de libertad religiosa de la siguiente forma:

" Art. 18.- 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o sus creencias,

(1) Vid. el texto en GALLINA: Ob. cit. pág. 71 y sigs; también en YEAR BOOK, 1967, pág. 443.

(2) TRUYOL: Ob. cit. pág. 81 y sigs.

individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza.

2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección.

3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicas, o los derechos y libertades fundamentales de los demás.

4. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".

5. Proyecto de Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o en las creencias"(1).

La tarea realmente difícil de la O.N.U. es la de convertir en normas los principios enunciados en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.

Para ello se ha seguido el sistema de Convenios internacionales, que regulen en cada uno de los derechos solemnemente

(1) United Nations, Economic and Social Council Commission on human Rights. Subcommission on prevention of discrimination and protection of minorities. E/4022, p. 78, n. 316 y 321: BUGAN, La comunità internazionale e la libertà religiosa, Roma, 1965, pág. 299-321. Véase también YEAR BOOK, New York, 1965, págs 449- 450.

declarados e impongan a los Estados su reconocimiento y garantía. Tal es el fin del Proyecto de "Convenio internacional sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia religiosa", respecto al derecho de libertad religiosa, proclamado en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.

"He aquí el porqué de nuestro interés en conocerlo. Ciertamente que es todavía un Proyecto; pero nos está señalando las directrices y normas que la O.N.U. ha de establecer definitivamente para sus miembros, y que éstos habrán de recoger en su legislación internacional(1) Es un Proyecto en marcha hacia la aprobación que esperamos no sea lejana, de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Fué presentado y aprobado por la "Subcomisión para la lucha contra la discriminación y para la protección de las minorías", en enero de 1965. Tres meses después, fué examinado y aprobado en sus tres primeros artículos por la Comisión de los Derechos del Hombre, reunida en Ginebra del 22 de marzo al 15 de abril(2). Esta recientemente ha dado su aprobación al articulado del Proyecto(3).

" En él se regula la libertad religiosa desde un punto de vista jurídico, partiendo del pluralismo religioso y conceptual vigente en el mundo actual. Su finalidad, por consiguiente, es el restablecimiento de un régimen jurídico tal de libertad religiosa, que eficazmente la tutele y armónicamente la compagine con los demás derechos y deberes fundamentales del hombre, a la vez que permita la convivencia pacífica de todos los hombres y de las sociedades por ellos formadas.

La dificultad de llegar a un tal régimen jurídico internacional está en el hecho de que cada Estado tiene su propia concepción respecto a la cuestión de libertad de pensamiento, con

(1) CORRAL: Loc. cit. pág. 578.

(2) BUGAN: Ob. cit. págs 160-162 y 268.

(3) En su 858ª sesión, 8 de marzo de 1966: Comisión de Derechos humanos, Informe sobre el 22º periodo de sesiones 8 de marzo - 5 de abril 1966, nº 8, apartados 58-64.

-ciencia y religión"(1).

Contenido del Proyecto.- Se enuncia, en el Proyecto, el derecho a la libertad de religión o de convicción, las garantías del mismo y sus limitaciones, Todos los Estados en sus Constituciones, al entrar a formar parte de la Organización de las Naciones Unidas, afirman tutelar este derecho. Por el presente Proyecto, se obligarán, además internacionalmente.

"Artículo II.- Los Estados firmantes reconocen que la religión o la convicción de cada individuo depende de su propia conciencia y consiguientemente debe ser respetada. Condenan toda forma de intolerancia religiosa y toda discriminación por motivos de religión o convicción y se comprometen a promover y poner en práctica las medidas destinadas a proteger la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión o de convicción, a garantizar la tolerancia religiosa y a suprimir toda discriminación basada en la religión o convicción".

Sin embargo, sólo será auténtica esta afirmación, en la medida en que el ejercicio de aquél se vea garantizado y no resulte anulado por cláusulas restrictivas.

Se garantiza en el Proyecto, en primer lugar, la libertad plena de adherirse o no a cualquier religión o convicción, sin estar sujeta, ni a limitaciones por parte del Estado, ni a ninguna otra coacción; es decir la inmunidad de cualquier coacción en general y de la proveniente, en particular, de limitaciones del Estado, declarada por el Vaticano II.

En segundo lugar, "se tutela la libertad de manifestar su religión o convicción, individual o colectivamente, en público y en privado, sin estar sometida a ninguna discriminación basada en la religión o la convicción. Esta llevará consigo la libertad de culto, enseñanza y propaganda; de establecer centros

(1) CORRAL: Loc. cit. pág. 580.

benéficos y docentes; de perigrinaciones; de comunicación y de asociación a escala local, regional, nacional e internacional; y aún de exponer las explicaciones de los preceptos de su religión o convicción en la vida pública"(1).

Así queda especificado el objeto del derecho de libertad religiosa:

" Art. III.- 1. Los Estados firmantes se obligan a garantizar a toda persona, sujeta a su jurisdicción, el derecho a la libertad de pensamiento de conciencia, de religión o de convicción.

Este derecho implica:

a) La libertad de adherirse o no a cualquier religión o convicción, y de cambiar de religión o convicción según las exigencias de su conciencia, sin que se la someta a ninguna de las limitaciones mencionadas en el artículo XII, ni a ninguna otra coacción capaz de restringir su libertad de elección o decisión en la materia, sobreentendiéndose que las disposiciones del presente párrafo no se interpretarán como manifestaciones de la religión o de la convicción.

b) La libertad de manifestar su religión o convicción, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, sin que se la someta a discriminación alguna por motivos de religión o convicción.

c) La libertad de expresar su opinión sobre cuestiones relativas a una religión o convicción.

2. Los Estados signatarios garantizarán a toda persona, sujeta a su jurisdicción:

a) La libertad de practicar el culto, de tener reuniones relativas a la religión o convicción, y de fundar y mantener lugares de culto o de reunión para estos fines.

(1) CORRAL: Loc. cit. pág. 580.

b) La libertad de enseñar, propagar y aprender su religión o convicción, de escribir, imprimir y publicar libros y textos religiosos, y de formar el personal destinado a la celebración de las prácticas o ritos de esta religión o convicción.

c) La libertad de practicar su religión o convicción, fundando y sosteniendo instituciones de beneficencia y enseñanza, y exponiendo los preceptos de su religión o convicción en la vida pública.

d) La libertad de observar los ritos y las prácticas dietéticas y de otra clase propias de su religión o convicción, y de producir, o si fuera necesario, de importar los objetos, alimentos y otros artículos y materiales ordinariamente usados en sus ritos y prácticas.

e) La libertad de ir en peregrinación, de realizar otros viajes relacionados con su religión o convicción, dentro o fuera del propio país.

f) La igualdad de protección, por la ley, para los lugares de culto o de reunión, para sus ritos, ceremonias y actividades, así como para los lugares donde se procede a las prácticas funerarias reconocidos por su religión o convicción.

g) La libertad de organizar y mantener asociaciones locales, regionales, nacionales e internacionales, relacionadas con su religión o convicción, de participar en sus actividades, y de comunicarse con los adherentes a su religión o convicción.

h) El derecho de no ser constreñido a prestar juramento de carácter religioso.

A toda persona se garantiza el derecho de libertad religiosa.

Respecto a la persona que no ha llegado al uso de la razón o sencillamente depende de los padres, el convenio afirma la

prioridad del derecho de los padres. A estos se equiparan sus legítimos representantes.

En el caso anormal de verse el hijo privado de sus padres, deberán tomarse en consideración los deseos expresos o presuntos de aquellos; y si el niño ha alcanzado el suficiente uso de razón, deberán ser tenidos en cuenta los deseos de éste(1).

" Artículo IV.- Los Estados Parte se comprometen a respetar el derecho de los padres y, en su caso, de los tutores legales a educar en la religión o en la creencia que elijan a sus hijos o pupilos todavía incapaces para ejercer la libertad de elección garantizada en virtud del inciso a) del párrafo 1 del art. III.

2. El ejercicio de este derecho lleva consigo, para los padres y tutores legales, la obligación de inculcar en sus hijos o pupilos la tolerancia para con la religión o creencia de otras personas , y de protegerlos frente a cualesquiera preceptos o prácticas basados en la intolerancia religiosa o en la discriminación por motivos de religión o creencia.

3. En el caso de un niño privado de sus padres, habrán de tenerse debidamente en cuenta los deseos expresos o presuntos de éstos.

4. Para la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo, el interés superior del niño será el principio rector para quienes tienen la responsabilidad de su crianza y educación".

El derecho reconocido a los padres es realmente trascendental: de estos dependerá, o mejor tendrá que depender, la pervivencia de un pueblo en la fe recibida.

El objeto de la libertad tutelada es la religión o convicción. La expresión religión o convicción comprende las convicciones

(1) CORRAL: Ob. cit. pág. 581.

teistas no teistas y ateas(art. 1 a).

Y la expresión "intolerancia religiosa" " designa la intolerancia en materia de religión o convicción"(art. 1 c).

"Lo que realmente se intenta proteger es la libertad del hombre en la esfera religiosa, comprendiéndose bajo ella tanto la religión como su carencia y aún su negación. Antinomias exigidas por la disparidad de concepciones político-religiosas mantenidas en la elaboración del Proyecto. De los 14 miembros de la subcomisión, dos eran delegados de países comunistas: Polonia y Rusia. La religión, por tanto, viene a ser considerada como una de las clases de concepciones de la vida, o como uno de los apartados de la libertad de pensamiento, conciencia, religión o convicción. Si bien acertadamente se afirma en el Preambulo, que la religión, para quien la profesa, es un elemento fundamental de su concepción de la vida; lo mismo se dice de la convicción"(1).

Los Estados se comprometen a prestar garantías, unas de caracter positivo y otras de caracter negativo. Entre las primeras está la obligación genérica de los Estados de fomentar la tolerancia, la comprensión y la amistad entre las naciones y los grupos religiosos.

"Art. V.- Los Estados firmantes se obligan a asoptar inmediatamente medidas eficaces, por métodos apropiados a las condiciones y prácticas nacionales, específicamente en el campo de la enseñanza e información, con vistas a fomentar la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones y los grupos religiosos, así como a difundir los fines y principios de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal de los derechos del hombre, y a luchar contra los prejuicios que conducen a la intolerancia religiosa entre las personas, grupos e instituciones y a la discriminación por motivos de religión o convicción".

Se añaden las obligaciones tendentes a asegurar la igualdad ante la ley, tanto en el ejercicio del derecho a la libertad de religión o convicción, como en su protección.

"Art. VII.- Las Altas Partes Constatantes se obligan a asegurar a toda persona la igualdad ante la ley, sin discriminación alguna, en el ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, y una igual tutela de la ley contra toda discriminación por motivos de religión o creencia."

" Art. VIII.- Las Altas Partes Contratantes garantizarán igual tutela de la ley contra la promoción o incitación a la intolerancia religiosa o discriminación por motivo de religión y creencia. Toda incitación al odio o acto de violencia, tanto contra cualquier religión o creencia, como contra sus adherentes, será considerada como delito punible por la ley, y toda propaganda destinada a fomentarla será condenada".

Los Estados, como garantía del cumplimiento de estas obligaciones, se comprometen a prestar la cooperación eficaz de las autoridades judiciales y administrativas.

"Art. X.- Las Altas Partes Contratantes se obligan a facilitar los procedimientos de reparación apropiados por medio de sus autoridades competentes, judicial y administrativa, contra cualquier violación de los derechos protegidos por este convenio".

De caracter negativo son las medidas encaminadas a prevenir y suprimir toda discriminación legal por motivos de religión o convicción.

" Artío VI.- Las Altas Partes Contratantes tomarán medidas efectivas para impedir y eliminar la discriminación basada en religión o creencia, incluyendo la invalidación y abrogación de la legislación , cuando sea necesario prohibir tal discriminación, para con persona, grupo u organización.

Las Altas Partes Contratantes se comprometen, en particular, a no seguir una política o aplicar o mantener leyes o normas

restrictivas o impeditivas de la libertad de religión y creencia o del libre y abierto ejercicio de ellas: y a no hacer discriminación contra una persona, grupo u organización por razón tanto de la pertenencia y adhesión a una religión o creencia, como de la práctica de la misma".

Un caso específico de discriminación que evitar, sería el de la desigualdad en las subvenciones y exenciones.

"Art. IX.- Las Altas Partes Contratantes se obligan a no hacer distinción entre cualquier religión o creencia y sus adeptos o instituciones, ni darles preferencia, en el caso de otorgar subsidios, exenciones o subvenciones para la conservación de edificios reconocidos como monumentos de valor histórico o artístico.

Cualquier distinción o preferencia establecida por la ley, por razón de interés público al respecto, no se considerará discriminación con arreglo a este convenio.

Pero el ejercicio ilimitado de un derecho no puede darse dentro de una sociedad, por tanto, el ejercicio de la libertad de religión o convicción quedará sometida a unos límites. Tratándose de obligaciones de orden internacional, el primer límite - barrera a un tiempo del desarrollo armónico y cada vez más necesario de ese mismo orden - es el de la soberanía nacional(1).

" Art. XII.- Nada en este convenio será interpretado de modo que impida a un Estado signatario prescribir por ley aquellas limitaciones, que sean necesarias para proteger la seguridad, orden, salud y moral públicas, o los derechos individuales y la

(1) CORRAL: Loc. cit. pág. 584.

libertad de los demás, o el bienestar general de una sociedad democrática".

Conviene precisar, además que ninguno de los sistemas contrapuestos de relaciones político-religiosas, el de unión y el de separación, se opone, de por sí a una legítima libertad religiosa, ni entraña discriminación. Expresamente, el Proyecto de convenio, dispone(1):

"Ni el establecimiento de una religión, ni el reconocimiento de una religión o creencia por un Estado, ni la separación de la Iglesia y el Estado, se considerarán por sí mismas como medidas discriminatorias".

Por consiguiente, cualquier Estado podrá mantener, en principio, como afirma CORRAL, su sistema político-religioso, con tal que respete de hecho la libertad religiosa de los adherentes a otra religión y de las asociaciones por ellos fundadas(2).

Sin embargo, al igual que en toda ordenación del ejercicio de un derecho, aún fundamental del hombre, quedará siempre en pie el problema de la tensión y equilibrio entre libertad y orden. " Problema que se agudiza a escala internacional por la relación Estado- Sociedad Internacional, soberanía y orden público de una parte, y orden jurídico internacional de la otra, concretado en las cláusulas de jurisdicción interna de la Carta de la O N U"(3).

(1) Art. 1 c). Se habla en él de 3 sistemas; pero el primero y segundo se reducen realmente a uno.

(2) CORRAL: Ob. cit. pág. 585.

(3) Ibidem.

II. EL DERECHO DE LIBERTAD RELIGIOSA EN EL ORDENAMIENTO INTERNACIONAL EUROPEO.

El marco jurídico del régimen internacional europeo del derecho de libertad religiosa está constituido nuclearmente por la Convención europea para la salvaguardia de los derechos humanos y las libertades fundamentales, de Roma del 4 de noviembre de 1950, con sus 5 Protocolos adicionales(1). A ella deben añadirse los Tratados de Paz, del 10 de febrero de 1946, de las potencias aliadas con Rumanía, Italia, Hungría, Bulgaria y Finlandia; lógicamente debieran incluirse los Concordatos. Tiene igualmente fundamental importancia para el régimen internacional europeo del derecho de libertad religiosa el Acta final de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa de 1 de agosto de 1975. De ambas nos ocuparemos a continuación.

1. El derecho de libertad religiosa en la Convención europea de Roma del 4 de noviembre de 1950(3).

La Convención europea para la salvaguardia de los derechos del hombre y las libertades fundamentales, representa el paso más trascendental en la defensa de los Derechos del hombre, enunciadas en la Declaración Universal.

El fin de la convención europea es realizar normativamente los principios de la Carta de la O.N.U. y garantizar colectivamente la aplicación efectiva de la Declaración Universal.

No se trata de una declaración más de derechos. Se trata de su efectiva garantía. Viene a ser el equivalente europeo del Pacto internacional sobre derechos civiles y políticos de la Organización de las Naciones Unidas. Pero el sistema de protec-

(1) Vid. el texto en TRUYOL: Ob. cit. págs 111-138.

(2) Así LANARES: Ob. cit. págs 167-172.

(3) Vid. una exposición monográfica en F. M. BROGLIO, La protezione internazionale della libertà religiosa nella convenzione europea dei diritti dell'uomo, Milano 1967; analisis breves en LANARES: Ob. cit. y en GALLINA: Ob. cit.

Pero el sistema de protección de los derechos humanos de la Convención europea es mucho más perfecto y eficaz que el de las Naciones Unidas,

El profesor "MOSLER"(1), en la conferencia pronunciada en la fundación "DRAGAN" sobre la protección de los derechos humanos en el ámbito europeo, se refirió muy especialmente a la relación existente entre el sistema europeo de protección de los derechos humanos y los pactos de las Naciones Unidas sobre la misma materia, y señaló que prescindiendo del hecho de que los pactos no han conseguido aún el número de ratificaciones necesarias para su entrada en vigor, el sistema de protección del convenio de Roma es mucho más perfecto y eficaz.

"La gran superioridad de la Convención europea relativa a los derechos humanos sobre los Pactos de derechos humanos de la O.N.U. consiste en que la Convención establece el mecanismo de aplicación más eficaz: un mecanismo que, si no carece de precedentes, puede, sin embargo, por la amplitud y el carácter "de principio" que alcanza, ser calificado de revolucionario en el orden jurídico - internacional. La Convención no se limitó a imponer obligaciones a los Estados, ni siquiera a establecer un Tribunal ante el cual pudieran éstos presentar demandas, sino que confirió derechos a los individuos como tales frente a sus propios Estados, y creó instancias de decisión supranacionales cuyo uso no monopolizan ya los Estados. Se instituyeron dos órganos específicos para la protección de los derechos humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos(art. 19). Junto a ellos, ejercen algunos poderes adicionales en esta materia el Comité de Ministros y el Secretario General del Consejo de Europa"(2).

Por la Convención europea de Roma de 1950, con su Protocolo de 1952, se pasa ciertamente de la pura proclamación de principios, a un sistema jurídico de garantías que eficazmente los

(1) MOSLER(HERMANN): La protección de los derechos humanos en el ámbito europeo, conferencia pronunciada en la fundación "DRAGAN", vid. en "Informaciones", 16-IV- 73.

(2) TRUYOL: Ob. cit. pág. 46.

tutela. Constituye el primero y más trascendental paso en tomar medidas adecuadas de garantía colectiva internacional de los Derechos enunciados en la Declaración Universal(1).

En la actualidad, de los paises miembros del Consejo de Europa : Belgica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Italia, Noruega, Holanda, Reino Unido, Suecia, Grecia, Islandia y Turquía, la Republica Federal alemana, Austria, Chipre, Suiza y Malta, solamente Francia no la ha ratificado. Sin embargo, hemos de hacer constar el "llamamiento para que Francia ratifique la Convención Europea de los Derechos del Hombre": "Diecinueve personalidades francesas, entre ellas seis premios Nobel, el Cardenal Marty y el señor JEAN MONNET, han lanzado un llamamiento público para que Francia ratifique la Convención Europea de los Derechos del Hombre. En el texto hecho público, estas personalidades señalan que, después de veintidos años, Francia es el único país miembro inicial del Consejo de Europa y del Mercado Común, que no ha ratificado esta convención, en cuya elaboración, sin embargo intervino y que fué firmada en su nombre en 1950 por el señor ROBERT SCHUMAN. Los Gobiernos no han querido someter el tema ni a la vía del referendum ni a la parlamentaria, y sólo recientemente el primer ministro señor MESMER, declaraba ante el Senado que su Gobierno estaba dispuesto a estudiar el problema. Entre los firmantes se hallaban, como se ha dicho, el Cardenal MARTY, arzobispo de Paris; los señores ARON, JEAN MONNET, FERNAND BRANDEL, el cardenal DANIELOU, el pastor ANDRÉ DUMAS, el gran rabino de Francia, señor JACOB KAPLAN; los académicos JEAN GEHENNO y MAURICE GENEVOIX, el profesor MILLEZ y los premios Nobel RENÉ CASSIN, JEAN FRANCISCO JACOB, JEAN MONOD, ANDRÉ LWOFF, ALFRED KASTLER Y LOUIS NEEL.

Hasta ahora los Gobiernos franceses se habían opuesto a la ratificación por motivos jurídicos y constitucionales. En efecto, esta convención concede a los particulares el derecho de reclamar jurídicamente ante el Tribunal Supremo europeo frente a su propio Estado. Pero en el resto de los paises que los han ratificado existía una situación similar. Según el premio Nobel de la Paz, señor

(1) TRUYOL : Ob. cit. pág. 46.

RENÉ CASSIN, situaciones como esta perjudican al prestigio internacional de Francia, que sufre por ello un cierto clima de desconfianza"(1).

En la Convención de Roma de 1950, se reconoce el derecho a la libertad religiosa en los mismos términos del artículo 18 de la Declaración Universal, añadiéndose que no podrá tener otras restricciones, que las necesarias para la seguridad y orden públicos, o para la protección de los derechos y libertades de los demás.

Dice así:

"Art. IX.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de cambiar de religión o convicción, así como la libertad de manifestar su religión o su convicción, individual o colectivamente, en público o en privado, mediante el culto, la enseñanza, las prácticas y el cumplimiento de los ritos.

La libertad de manifestar su religión o sus convicciones no puede ser objeto de más restricciones que las que, previstas por la ley, constituyen medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad pública, la protección de los derechos y las libertades de los demás".

El derecho de libertad religiosa comprende un haz de facultades: de adhesión, de cambio, de manifestación. Este haz se amplía, al entrar en conexión con otras libertades fundamentales, como las de expresión, de reunión y asociación, de casarse y fundar una familia, y de recibir instrucción,

Respecto al matrimonio se reconoce el derecho a casarse y fundar una familia". Nada se dice respecto de la forma, religiosa o no, de celebrarse. Se deja a la determinación de "las leyes nacionales que rigen el ejercicio de este derecho(art. 12).

Así, Italia seguirá manteniendo el matrimonio canónico, mientras Francia y Alemania urgirán, bajo pena, la celebración del matrimonio civil antes del religioso, Inglaterra, en cambio, permitirá indistintamente ambas formas.

(1) Diario, Informaciones, 7 de diciembre de 1972.

indistintamente ambas formas.

Dentro de la familia es a los padres, no al Estado, a quienes primariamente compete la educación y la elección de la forma de instruir a sus hijos. En esta punto el Protocolo adicional a la Convención Europea es terminante.

" Art. II. - A nadie se puede negar el derecho a la instrucción. El Estado, en el ejercicio de las funciones que asumirá en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas"

Los estados signatarios, sin embargo, y por desgracia, no se muestran tan firmes en llevarlo a la práctica, como lo pusieron de manifiesto por las reservas y declaraciones hechas al momento de subscribir la Convención y permitidas por esta(art.64). Los Países Bajos declaraban: " El Estado debería no sólo respetar los derechos de los padres en el campo de la educación, sino también, en caso de necesidad, asegurar el ejercicio de estos derechos mediante medidas financieras apropiadas"(1). Similarmente Irlanda; más atenuadamente Alemania Federal. En sentido restrictivo Grecia, Reino Unido, Suecia sobre todo y Turquía(2).

Como cauce de intercomunicación de las ideas, en nuestro caso de las ideas religiosas, está el derecho al uso de los medios de comunicación social que se garantiza como complemento de la libertad de expresión. Se garantiza también y como mera faceta de la libertad la libertad de propaganda, que al realizarse por los actuales medios de comunicación, ha de estar sometida a la misma amplia gama de límites establecidos para la libertad de expresión.

" Art. X.- Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber inferencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los Estados sometan las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa.

(1) LANARES: Ob. cit. pág. 195.

(2) Ibidem, págs. 195 y s.

2. El ejercicio de estas libertades, por cuanto implica deberes y responsabilidades, puede ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones, previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la fama o de los derechos de otro, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autotidad y la imparcialidad del poder judicial".

Pero el derecho de libertad religiosa, para que sea plena realidad, no se le puede concebir como meramente individual. No basta garantizar su exteriorización y aún meramente individual. No basta garantizar su exteriorización y aún su propagación por el ejercicio de la libertad de expresión. La religión abarca a todo el hombre. Y el hombre es esencialmente social. Necesariamente, por tanto, tiene que completarse el derecho a la libertad religiosa con el de reunión y asociación, espresamente reconocidos en la Convención.

" Art. XI.- 1 Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación comprendiendo el derecho de fundar, con otros, sindicatos y adherirse a ellos, para la defensa de sus intereses.

2. El ejercicio de estos derechos no puede ser objeto de otras restricciones que aquellas que, previstas por la Ley, constituyen medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa del orden, para la prevención del crimen, la protección de la salud o la moral, o para la para la protección de los derechos y libertades ajenas. El presente artículo no prohíbe que sean impuestas restricciones legítimas para el ejercicio de estos derechos por miembros de las fuerzas armadas, por la Policía o por miembros de la administración".

Su ámbito de aplicación, sin embargo, dependerá primordialmente del orden interno de cada uno de los Estados firmantes.

Respecto al problema de la objeción de conciencia, tan estrechamente unido al derecho de libertad religiosa, la Convención Europea establece:

" Art. IV. 3. No se considera como "trabajo forzado u obligatorio " en el sentido del presente artículo:

b) Todo servicio de caracter militar o no, en el caso de los objetores de conciencia en los países en que la objeción de conciencia sea reconocida como legítima, cualquier otro servicio sustitutivo del servicio militar obligatorio.

La nota más característica de la Convención consiste, como ya hemos apuntado, en la creación de una Comisión Europea de los Derechos del Hombre y de un Tribunal Europeo de los Derechos del Hombre (art. 19) y en la admisión del recurso individual (art. 25).

El reconocimiento de los más importantes derechos fundamentales del hombre, y el sistema de garantías mediante la creación de una Comisión y un tribunal Europeos y la admisión del recurso individual, constituyen ciertamente los dos puntos claves de la Convención Europea. Para su ordenado engranaje en una sociedad democrática se establecen unos límites de actuación. Estos límites están determinados con una amplitud tal que, de una parte, aseguran al máximo la soberanía del Estado que se trata de recortar, y de otra parte, tutelan de verdad las libertades reconocidas. En el ejercicio de la libertad religiosa, vienen enumeradas como restricciones para la seguridad pública, el orden público, la moralidad y salud pública o la protección de los derechos o libertades

de los demás(arts. 9 y 11).

La Convención, cuyo Preámbulo, como señala TRUYOL " toma como punto de partida la Declaración universal de derechos humanos de la O.N.U. ofrece la importante peculiaridad de que el compromiso que en ella asumen las partes contratantes no se limita a sus propios nacionales, sino " a toda persona dentro de su jurisdicción" (art. 1º) cualquiera que sea su nacionalidad. Por otra parte, la Convención es de aplicación inmediata una vez ratificada, sin que se requiera la promulgación de medidas legislativas complementarias. Lo cual implica, naturalmente, que el derecho interno de cada parte se ajuste a la Convención. Es significativo, y merece por ello subrayarse, el hecho de que algunas de las partes contratantes han modificado su legislación a estos efectos: Bélgica, su Código penal(1961); Austria, su Código de Procedimiento penal(1963). Noruega revocó en 1956 la disposición de la Constitución de 1814 que prohibía a los jesuitas el acceso a su territorio"(1).

Después de todo lo expuesto, no podemos menos de expresar nuestro deseo de que la ratificación de la Convención de Roma de 1950 sea pronto una realidad para todos los Estados de Europa Occidental, pues es evidente que con ello será más fácil un mejor y más efectivo reconocimiento y protección de los derechos fundamentales del hombre y por lo mismo del derecho de libertad religiosa que nosotros propugnamos.

1.2. Acta final de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa.

La Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa ha sido clausurada en Helsinki el 1º de agosto de 1975.

En el Acta final y en su Principio VII, que trata del "respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, incluida la libertad de pensamiento, conciencia, religión o creencia", se dispone que " los Estados participantes respetarán los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, incluyendo la

(1) TRUYOL: Ob. cit. pág. 45.

libertad de pensamiento, conciencia , religión o creencia , sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión"(1)

Es indudable que esta disposición del Acta final de la Conferencia de Helsinki constituye un paso decisivo y un medio muy valioso para conseguir un mejor y más eficaz reconocimiento y protección de los derechos fundamentales del hombre y consecuentemente del derecho de libertad religiosa. 'Ojala los Estados cumplan lo que han firmado!

III. EL DERECHO DE LIBERTAD RELIGIOSA EN LAS CONSTITUCIONES DE LOS ESTADOS CONTEMPORANEOS.

En la mayoría de las Constituciones se reconoce hoy el derecho de libertad religiosa. Todos los Estados, al menos cuando ingresan como miembros de la O.N.U. , se comprometen , como señala CORRAL(2), a respetar, las libertades fundamentales en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.

Y, así, " sin dificultad ninguna es reconocida la libertad religiosa por los Estados nuevos, que la configuran conforme al patrón del régimen internacional y casi con los mismos términos. Con mayor dificultad va siendo acogida por las Naciones viejas, especialmente por las que , durante siglos, han vivido con el Islam o el Protestantismo como la religión oficial"(3).

Incluso los Estados sometidos al comunismo reconocen la libertad religiosa, Pero a ellos principalmente , parece referirse el Concilio cuando dice que " las mismas autoridades públicas se empeñan en apartar a los ciudadanos de profesar la religión y en hacer extremadamente difícil e insegura la vida de las comunidades religiosas"(4).

En todo caso podemos clasificar los sistemas político-religiosos seguidos por los diferentes Estados ante la religión y las comunidades religiosas , de acuerdo con CORRAL de la siguiente

(1) Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa cit en edición. yppág. cit.

(2) CORRAL: Los sistemas político-religiosos vigentes en el mundo, en "Relaciones de la Iglesia y el Estado", hecha en colaboración con G.M CARVAJAL, Madrid, 1976, pág. 71.

(3) Ibidem.

(4) Declaración D H, n. 15.

forma(1):

1. Sistema de reconocimiento oficial de una o más religiones o Iglesias.

2. Sistema de separación de Iglesia y Estado con auténtica libertad religiosa.

3. Sistema de separación de Iglesia y Estado facticamente hostil.

1. Sistema político-religioso de reconocimiento oficial de una religión.

Denominamos este primer sistema con el término confesional o confesionalidad, aunque reconocemos sus ambigüedad cambiante conforme a los diversos momentos históricos y a las diversas concepciones en que se basa. Hemos de señalar también que mientras es típico de toda confesionalidad no católica el monismo de sociedades y poderes, de la católica es el dualismo.

Examinaremos los distintos sistemas confesionales, partiendo del monismo más agudo, al dualismo más recto(2).

(1) CORRAL : Art. cit. en ob. cit. pág. 72 y sigs.

(2) Ibidem. pág.

A) Estados de confesionalidad musulmana.

En la concepción islámica del derecho, del Estado y de la religión, rige, como señala CORRAL(1), el monismo más absoluto.

La ley no es sino el aspecto práctico de la doctrina religiosa y social predicada por Mahoma.

"Los derechos del hombre en el Islam sólo corresponden en su plenitud al ser humano, adulto, libre y musulmán. Los no musulmanes y los esclavos, sólo gozan de una protección parcial o, sencillamente, no poseen ninguna capacidad jurídica"(2).

Se niega todo proselitismo a cualquier otra religión, mientras el Islam es intensamente proselitista(3).

Son Estados musulmanes, en Africa: Argelia, Marruecos, Tunez, Egipto, Mauritania, Somalia; también debe contarse Sudán; en Asia: Afganistán, Arabia Saudí, Irak, Iran, Jordania, Malasia, Pakistán, Siria y Yemen.

En todos ellos, el Islam es la religión del Estado, alcanzando su máximo grado en Afganistán, Arabia Saudí y el Yemen, en los que se da una teocracia(4).

Nacidos después de la fundación de las Naciones Unidas, la mayoría de los Estados musulmanes no pueden menos de garantizar la libertad religiosa.

La situación es como sigue:

AFRICA

Argelia.- " El Islam es la religión del Estado. La República garantiza a cada uno el respeto de la propia opinión y creencia

(1) CORRAL: Loc. cit. pág. 588

(2) Ibidem, pág. 589.

(3) RACHID AMED: Islam et Droit de gens, Rec. 1937, II, p. 446, 448, cit. por LANARÉS: Ob. cit. pág. 211; cit. también por CORRAL: Loc. cit. pág. 589.

y el libre ejercicio del culto"(art. 4)(1).

Egipto.- " El Islam es la religión del Estado y el Arabe es la lengua oficial"(2).

" La libertad de creencia es absoluta. El Estado protege la libertad de la práctica de religión y de credos de acuerdo con las costumbres, en vigor en Egipto con tal que no violen el orden público y la moralidad"(3).

Somalia.- " El Islam es la religión del Estado"(art. 1) (4).

" Todos tienen derecho a la libertad de conciencia y a profesar libremente la propia religión, ejercitar el culto e impartir la enseñanza, con las limitaciones que puedan establecerse por la ley al objeto de proteger las buenas costumbres, la higiene y el orden público"(art. 29)(5).

Tunez.- " Tunez es un Estado libre, independiente y soberano. Su religión es el Islamismo"(art.1) (6).

"La República de Tunez garantiza la libertad del individuo y la libertad de conciencia y protege el libre ejercicio del culto a condición de que ello no perturbe el orden público"(art. 5)(7).

Marruecos.- " El Islam es la religión del Estado, el cual

(1) Constitución , 10 -septiembre de 1963: PEASLEE: Ob. cit. Vol. I, Printed in the Netherlands, 1965, pág. 8; PAVAN: Libertá religiosa e publici poteri, Milano, 1965, pág. 11.

(2) y (3) Constitución (Republica Arabe Unida) , 25 de mayo de 1964, arts. 5 y 34: PEASLEE: Ob. cit. , Vol. I, págs. 992 y 994.

(4) y (5) Constitución, 1 de julio de 1960: PEASLEE: Ob. cit. vol. I, págs. 777 y 782; PAVAN, pág. 37.

(6) y (7) Constitución de 1 de junio de 1959: PEASLEE: Ob. cit. vol. I, pág. 910; PAVAN: Ob. cit. pág. 44.

asegurará a todos el libre ejercicio del culto"(art. 6) (1).

Mauritania.- "La religión del pueblo mauritano es la religión musulmana. La República garantiza a cada uno la libertad de conciencia, y el derecho de practicar su religión bajo las reservas impuestas por la moralidad y el orden público"(art. 2)(2).

Sudan.- Sin proclamarse constitucionalmente musulman el Estado Sudanés lo es en la práctica, y garantiza la libertad religiosa (art. 5) (3).

ASIA

Afganistán.- "La religión de Afganistán es la Santa Religión del Islam, y su rito oficial y general es el dignísimo rito benéfico. Los ciudadanos musulmanes serán libres para realizar sus ritos con los límites determinados por las leyes para la decencia y la paz pública"(art. 2) (4).

Arabia Saudí.- " Es una monarquía absoluta y teocrática. El Islam es la religión oficial" (art. 5) y se garantiza la libertad religiosa"(art. 8- 13) (5).

Irak.- "La República de Irak es una democracia, Estado socialista, derivando de los principios de su forma democrática y socialista de herencia árabe y del espíritu islámico(art. 1) (6). La libertad de religión será salvaguardada, El Estado protegerá

(1) Constitución de 7 de diciembre de 1962: PEASLEE: Ob. cit.

1962.

(2) Constitución de 20 de mayo de 1961: PEASLEE: Ob. cit. vol. II, Netherlands, 1966, pág. 549.

(3) Vid. CORRAL: Loc. cit. pág. 591 y 592.

(4) Constitución de 1 de septiembre de 1964: PEASLEE: Ob. cit. vol. II, cit. pág. 7 y 12.

(5) Decreto de 29 de enero de 1927.

(6) PEASLEE: Ob. cit. vol. II, cit, pág. 476

la libertad de practicar los ritos, con tal que estos no se opongan a la disciplina pública o a la moral"(art. 28)(1).

Irán.- "La religión del Estado es el Islam"(art. 1). Se garantiza la libertad religiosa(art. 14) (2).

Jordania.- " El Islam es la religión del Estado y el Arabe la lengua oficial. El Estado garantiza el libre ejercicio del culto y de los ritos religiosos en concordancia con la costumbre, observada en el Reino"(art.) (3).

Malasia.- " El Islam es la religión de la Federación; pero pueden practicarse en paz y armonía otras religiones en cualquier parte de la Federación"(art. 3, nº 1) (4).

Pakistán.- " El Estado de Pakistán será una República, bajo el nombre de República Islámica del Pakistán"(art. 1).

" Todos los ciudadanos tiene derecho a profesar, practicar y propagar una religión"(art, 10) (5).

Siria.- " Siria es una república parlamentaria, La religión del Presidente de la República es el Islam"(art. 3).

"Se garantiza la libertad de creencia. El Estado respetará todas las religiones y garantizará el libre ejercicio de la religión en tanto no comprometa el orden público"(art. 16) (6).

(1) Constitución de abril de 1964 , enmendada el 14 de diciembre de 1964 y el 18 de septiembre de 1965: PEASLEE:Ob. cit, vol. II, pág. 476.

(2) Constitución de 30 de diciembre de 1906, enmendada 1957: PEASLEE: Ibidem, pág. 460.

(3) Constitución de 7 de noviembre de 1951: PEASLEE; Ibidem pág. 537 - 58.

(4) Constitución , 23 agosto de 1957, enmendada el 1 de marzo de 1964: PEASLEE: Ibidem, pág. 653.

(5) Constitución 1962, enmendada 23 de junio de 1964; PEASLEE: Ibidem, pág. 987.

(6) Constitución de 25 de abril de 1964: PEASLEE: Ibidem, pág. 1138-39

Yemen.- "La religión del Estado es el Islam y la lengua oficial es el Árabe"(art. 3).

"La ley islámica es la fuente de todas las leyes"(art. 4).

"Los Yemenitas tienen, ante la ley iguales derechos y deberes públicos, sin distinción por cuestión de raza, origen, lengua o escuela religiosa"(art. 17)(1).

Destacan por su acción gubernamental en favor de los cristianos, Irán(2), Marruecos(3) y Pakistán(4).

La Iglesia Católica goza de libertad en Irán, Jordania y Pakistán(5).

B) Estados de confesionalidad budista.

Tres Estados de Asia reconocen en sus constituciones al Budismo como la religión oficial: Birmania, Camboya, y Laos.

Respecto a las demás religiones, adoptan de las Naciones Unidas, dos principios: el de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley sin discriminación y el de libertad de pensamiento.

En sus constituciones, concretamente expresan:

Birmania.- " Siendo el Budismo la religión profesada por la mayoría de los ciudadanos de la Unión será la religión del Estado" (art. 21, nº 1). " El Estado reconoce también al Islam, al Cristianismo, al Hinduismo y al Animismo, como religiones existentes en la Unión, al momento de entrar en vigor esta constitución"(art. 21, nº 2). " El Estado no impone incapacidades por razón de fe religio-

(1) Constitución de 3 de abril de 1963: PAVAN; Ob. cit, pág. 86-87; PEASLEE; Ob. cit. , vol. II, pág. 1268.

(2) Ecclesia (1953) nº. 634, pág. 22; en particular a la Iglesia Católica: Ecclesia(1960), p. 1543.

(3) Informat. Cathol. Internat. 183(1963), p. 15: Discurso de Hassan II.

(3) Orbis Catholicus 2 (1962), 420.

(5) CORRAL: Loc. cit. pág. 593.

-sa o creencia(art. 21, nº3).

El abuso de la religión para fines políticos está prohibido" (art. 21, nº 4).

Todas las personas son igualmente autorizadas a la libertad de conciencia y a profesar y practicar libremente la religión bajo el orden, la moralidad, o la salud públicos u otras disposiciones de este Capítulo"(1).

Cambodja.- "La libertad de conciencia es absoluta. La libertad de religión es también garantizada, limitada solamente por las restricciones necesarias para que el orden público pueda no ser perturbado.

El Budismo es la religión del Estado"(art. 8) (2).

Laos.- " El Budismo será la religión del Estado. El rey será su gran protector"(art. 7).

" Esta constitución reconoce como principios fundamentales los derechos del pueblo de Laos, especialmente su igualdad ante la ley, la protección legal de los sentimientos de la vida, su libertad de conciencia y las demás libertades democráticas definidas por la ley"(Preámbulo) (3).

" Sin ser constitucionalmente budista, Ceilán conoció de 1956 a 1959 un periodo gubernamental de fuerte presión budista contra los cristianos. Se pretendía establecer el budismo como la religión del Estado, nacionalizar las escuelas, expulsar de los hospitales a las religiosas"(4).

(1) Constitución de 24 de septiembre de 1947, enmendada en 1959, y en 1961: PEASLEE: Vol. II, pág. 71.

(2) Constitución de 6 de mayo de 1947, con las enmiendas hechas hasta enero de 1964: PEASLEE, Vol. II, pág. 126.

(3) Constitución de 11 de mayo de 1947, enmendada el 19 de marzo de 1965: PEASLEE: Vol. II, pág. 624.

(4) CORRAL: Loc. cit. pág. 594.

En su constitución prohíbe especialmente el hecho de que las leyes se opongan al libre ejercicio de la religión(1).

Como Estado confesional hindú podía haberse contado , quizás, el Nepal, ocupado hoy por China, en cuanto que prohíbe a todos convertir a otros a su religión(art. 14) (2). Precepto constitucional prácticamente encaminado contra el cristianismo(3).

C) Estados de confesionalidad cristiana.

Según la confesión cristiana adoptada por el Estado, se distingue confesionalidad evangélica(luterana), anglicana, ortodoxa y católica.

a) Estados de confesionalidad luterana.

Los países nórdicos: Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia, en cuanto Estados, se declaran evangélico-luteranos. Pero su confesionalidad tiene en ellos ciertamente un matiz especial; pues no se trata solamente de declararse partidarios de una determinada confesión, sino que prácticamente la Iglesia se constituye, en Iglesia Nacional. A ella pertenecen, de hecho, todos los ciudadanos y aún el Estado mismo(4).

Dinamarca.- "La Iglesia Evangélica luterana es la Iglesia Nacional y, como tal, en mantenida por el Estado"(art. 4).

" El Rey debe pertenecer a la Iglesia evangélica luterana (art. 6)" . " El estatuto de la Iglesia nacional será regulado por la ley"(art. 66). " Los ciudadanos serán autorizados para formar congregaciones para el culto a Dios de acuerdo con sus convicciones, siempre que no se opongan a la buena moral y al orden público"(art. 67).

(1) Constitución de 15 de

(2) Constitución de 1962: PEASLEE: Ob. cit., vol. II, pág. 775.

(3) CORRAL: Loc. cit. pág. 594.

(4) Ibidem.

Nadie será privado del acceso al completo disfrute de sus derechos civiles y políticos, por razón de su creencia u origen"(art. 70)(1).

Islandia.- " La religión evangélica luterana es la religión del Estado y, como tal, debe ser sostenida y protegida por el Estado(art. 62)". El pueblo está autorizado a formar sociedades para el culto a Dios, de acuerdo con sus convicciones individuales; pero no se puede predicar ni practicar lo que sea perjudicial al orden público y a la moral"(art. 63) (2).

Noruega.- " Todos los habitantes del Reino tendrán libertad de religión.

La religión evangélica luterana continuará siendo la oficial del Estado.

Los habitantes del Reino que la profesen están obligados a educar a sus hijos en la misma"(art. 2) (3).

Suecia.- " El Rey deberá profesar siempre la pura doctrina evangélica, tal como ha sido adoptada y explicada por la confesión inalterada de Ausburgo, y por la decisión del Sínodo de Upsala de 1953(art, 2)"(4). El Rey deberá siempre, en los casos determinados más abajo, poner en conocimiento y tomar consejo de un Consejo de Estado, para el cual nombrará a personas suecas de nacimiento, capaces, experimentadas, integradas, de buena fama y que profesen la pura doctrina evangélica(art.4)".

"Pertenece también al Riksdag, de acuerdo con el Rey, modificar, elaborar o abrogar leyes eclesiásticas; pero el consentimiento

(1) Constitución de 5 de junio de 1953: PEASLEE, Vol. III, pág. 263

(2) Constitución de 14 de junio de 1944, enmendada el 14 de agosto de 1959: PEASLEE, Vol. III, pág. 456

(3) Constitución de 17 de mayo de 1814, enmendada el 4 de mayo de 1964: PEASLEE, Vol. III, pág. 689

(4) Constitución de 6 de junio de 1809, con las enmiendas hechas hasta 1965,: PEASLEE, Vol. II pág. 848.

-to del Sínodo General será igualmente requerido a este efecto(art. 87)".

Finlandia.- " El Presidente de la República nombra: 2) El arzobispo y los obispos, así como el Canciller de la Universidad (art. 87)". " Todos los ciudadanos finlandeses tienen el derecho de ejercer su culto en público y en privado, a condición de no violar la ley y las buenas costumbres"(art. 8). "La profesión religiosa o el hecho de no pertenecer a alguna religión no tiene influencia en los derechos y deberes de los ciudadanos finlandeses (art. 9)"(1).

"La Iglesia oficial es hoy un organismo estatal más, incluso con un departamento ministerial especial. Es un servicio público, no sólo en el sentido normal de la expresión , sino en el técnico, administrativo.

Ante la posición de la Iglesia luterana se dan dos reacciones: una, de separar del Estado a la Iglesia para revitalizarla; y otra de crear comunidades religiosas, desidentes"(2).

El derecho de libertad religiosa está garantizado, además de constitucionalmente, por el Convenio Europeo para la salvaguardia de los Derechos del hombre, ratificado por los cinco países escandinavos. En su virtud, queda derogado el precepto constitucional noruego de que "los jesuitas no serán admitidos"por carta del 4 de diciembre de 1956(3).

Suecia añade respecto a dicho Convenio, que la obligación de la enseñanza del cristianismo en las escuelas públicas, sólo puede ser dispensada a los hijos de otra profesión de fe (4).

(1) Constitución de 17 de julio de 1919, enmendada en 1947 y 1956 y 1957: PEASLEE, Vol. III, pág. 272.

(2) CORRAL: Loc. cit. pág. 596.

(3) LANARÉS: Ob. cit. pág. 195; PEASLEE, Vol. III, pág. 689.

(4) LANARES: Ob. cit. pág. 195.

b) Estados de confesionalidad anglicana.

Inglaterra conserva el sistema de Iglesia establecida a una con la libertad religiosa para todas las religiones.

Se hace cabeza de la Iglesia de Inglaterra, separada de Roma por Enrique VIII, protestizada por Eduardo VI, al Rey-Reina de Inglaterra por el Act o Supremacy de Isabel den 1559(1).

Posteriormente, se excluye a los "papistas", los católicos, de ocupar el trono inglés(2). Y se exige " que quienquiera que en adelante entre en posesión de esta corona, habrá de conformarse con la comunión de la Iglesia de Inglaterra, tal como se haya establecida por la Ley(3).

Respecto a las demás confesiones y religiones se observa hoy plena libertad. Para los católicos arranca esta del "Roman Catholic Act de 1829. Su Jerarquía, empero, no fué restablecida hasta el año 1859 en Inglaterra y Gales, y hasta 1870 en Escocia(4).

c) Estados de confesionalidad ortodoxa.

La Constitución de Grecia establece:

" La religión dominante en Grecia es la de la Iglesia Oriental Ortodoxa de Cristo(art. 1)"(5). " El Rey ha de jurar proteger la religión dominante de los griegos"(art. 43), y la enseñanza en todas las escuelas primarias y secundarias se basará en las directrices ideológicas de la cultura greco-cristiana(art. 16).

(1) Bilan du Monde, II, pág. 752. LEYS, Catholic in England, London 1948.

(2) Bill of Right, art. 9, del 13 de febrero de 1688; Act of Settlemente del 12 de junio de 1701, art. 2: Leyes Constitucionales, Salamanca, Taurus, 1959, pág. 11 y sigs., y en "Los documentos nacionales y supra-nacionales con inclusión de las Leyes Fundamentales, Editora Nacional, Madrid, 1973, pág. 29

(3) ^{y sigs.} Act of Settlemente, art. III, n. 1.

(4) Bilan du Monde, II, p. 799.

(5) Constitución de 1 de enero de 1952: PEASLEE, vol. III, p. 403.

" La libertad de conciencia es inviolable"(art. 2).

" Se garantiza la libertad de las demás religiones. Se prohíbe el proselitismo y toda otra forma de intervención contra la religión dominante"(art. 1).

La Iglesia griega tiene poanteado actualmente el problema de su relación con el Estado, que hasta el presente es de íntima dependencia del Rey y de su gobierno(1).

Podría figurar dentro de la confesionalidad ortodoxa, como advierte CORRAL(2), Etiopía, en cuanto que el Emperador jura profesar y defender la santa fe ortodoxa, fundamentada en la doctrina de San Marcos de Alejandría (art. 21) (3). En el ejercicio de los ritos de cualquier religión o credo no hau interferencias del Estado(art. 40)..

d) Estados de confesionalidad católica.

En los Estados católicos , a diferencia de los Estados confesionales hasta ahora considerados, sus jefes no son a la vez jefes de la Religión oficial; ni la Iglesia católica por ser reconocida como oficial, deviene una iglesia nacional. " Tal reconocimiento nuna puede abocar a una confusión-unión jurídico-constitucional ni de sociedades, ni de poderes ni de órganos. Siempre distinción con colaboración". Pero , cuando esta alcanza un grado tal que a un Estado se le pueda denominar católico? Ahí radica precisamente la dificultad de determinar que Estados son católicos y en que medida realmente lo son.

En Europa lo son: España, Italia y Liechtenstein; en América: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Santo Domingo, Paraguay, Panamá y Perú.

(1) Ecclesia(1966), 554, cit.

(2) CORRAL: Loc. cit. pág. 597.

(3) Constitución de 4 de noviembre de 1955: PEASLEE, Ob. cit. vol I, pág. 178.

(4) CORRAL: Loc. cit. pág. 597.

Liechtenstein.- " Se garantiza a todos la libertad religiosa y de conciencia.

La Iglesia católica romana es la Iglesia nacional y en cuanto tal goza de la plena protección del Estado; las demás religiones son garantizadas: la libertad de manifestar su propia confesión y la celebración del propio ejercicio religioso bajo los límites de la moral y del orden público(art. 37)(1).

Bolivia.- " El Estado reconoce y sostiene la religión católica, apostólica y romana, garantizando el ejercicio público de todo otro culto"(art. 3) (2).

Costa Rica.- "La religión Católica Apostólica Romana es la del Estado que contribuye a su sostenimiento, sin impedimento del libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moralidad o a las buenas costumbres"(art. 76)(3).

Paraguay.- "La religión Católica Apostólica Romana es la del Estado, sin perjuicio de la libertad religiosa que es garantizada de acuerdo con las disposiciones de esta Constitución. Las relaciones oficiales de la República con la Santa Sede serán reguladas por concordatos u otros acuerdos liberales"(art. 6) (4).

" La libertad de conciencia y el derecho de profesar, enseñar y propagar una religión libremente, y el culto de esa religión, son garantizados en el territorio de la República, con tal que no sean contrarios a las buenas costumbres o al orden público"(art. 70)

(1) Constitución de 5 de octubre de 1921, enmendada en 1939, 1947, 1958, 1963, y 1965: PEASLEE, Vol. III, pág. 536.

(2) Constitución de 2 de febrero de 1967: PEASLEE: Ob.cit. pág. 101.

(3) Constitución de 7 de noviembre de 1963: PEASLEE: Ob.cit. pág. 337.

(4) Constitución de 25 de agosto de 1967: PEASLEE: Ob. cit. pág. 1068.

Argentina.- " El Gobierno Federal sostiene el culto Católico Apostólico Romano"(art. 2)(1). "Todos los habitantes de la Nación gozan del derecho de profesar libremente su culto"(art. 14).

" Para ser elegido Presidente o Vicepresidente de la Nación, se requiere haber nacido en el territorio argentino, o ser hijo de ciudadano nativo, habiendo nacido en país extranjero; pertenecer a la Comunión Católica Apostólica Romana, y las demás cualidades exigidas para ser electo Senador"(art. 76).

Colombia.- Reconoce a la religión católica como religión del Estado en virtud del Concordato del 31 de diciembre de 1884(2); y el derecho de libertad religiosa en su Constitución, que establece: " El Estado garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus opiniones religiosas, ni compelido a profesar creencias ni a observar prácticas contrarias a su conciencia"(art. 53)(3).

Panamá.- " Se reconoce que la religión católica es la de la mayoría de los panameños. Se la enseñará en las escuelas públicas, pero su aprendizaje y la asistencia a actos de cultos religiosos no serán obligatorios para los alumnos, cuando así lo soliciten sus padres o tutores"(art. 36)(4). " Es libre la profesión de todas las religiones, así como el ejercicio de todos los cultos, sin otra limitación que el respeto a la moral cristiana y al orden público"(art. 35).

-
- (1) Constitución del 1 de marzo de 1853, enmendada en 1860 y 1866, 1898 y 1957: PEASLEE: Ob. cit. vol. IV, págs 7, 9 y 19.
 - (2) Arts. 1, 2 y 3: MERCATI(A): Raccolta di Concordati, Romae, Poliglota Vaticana 1964, I, p. 1051, cit. por CORRAL: Loc. cit. pág. 598.
 - (3) Constitución del 4 de agosto de 1886 , enmendada en 1960: PEASLEE: Ob. cit. vol. IV, pág. 287.
 - (4) Constitución del 1 de marzo de 1946, enmendada el 24 de octubre de 1956: PEASLEE: Ob. cit. vol. IV, pág. 1019.

Perú.- " Respetando los sentimientos de la mayoría nacional, el Estado protege la religión Católica Apostólica y Romana. Las demás religiones gozan de libertad para el ejercicio de sus respectivos cultos"(art. 232)(1).

Santo Domingo.- En su Concordato establece: " La religión católica , Apostólica , Romana, sigue siendo la de la nación, y gozará de los derechos y prerrogativas que le corresponde en conformidad con la ley Divina y el Derecho Canónico"(art. 1)(2).

En su Constitución reconoce el derecho de libertad religiosa, al disponer: " Se establece el principio de la libertad de conciencia y de culto, con sujeción al orden público y a las buenas costumbres"(art. 8, nº 8) (3).

En el número de estos Estados podemos incluir a Irlanda, que en su Constitución expresamente dispone: " El Estado reconoce la posición social de la Santa Iglesia Apostólica Romana en cuanto custodia de la fe profesada por la gran mayoría de los ciudadanos"(art. 44-1) 2º) (4). " El Estado reconoce la Iglesia pura de Irlanda, la Iglesia Presbiteriana, la Metodista, la Sociedad religiosa de las Amigos, las Comunidades israelitas y las demás confesiones existentes en Irlanda, en el momento de la entrada en vigor de la presente Constitución"(art. 44-1) 3º).

La libertad de conciencia y la libre profesión y práctica de la religión , subordinadas a la moral y al orden públicos, se garantizan a todos los ciudadanos"(art. 2) 1º).

Entre los países sudamericanos que tienen la Religión Católica como la profesada por la mayoría de la nación, debiera encontrarse ciertamente Haití. Sin embargo desde 1959 tiene lugar

(1) Constitución del 9 de abril de 1933, con las enmiendas realizadas hasta 1964: PEASLEE: Ob. cit., vol. III, pág. 1131.

(2) Concordato del 16 de junio de 1954.

(3) Constitución del 28 de noviembre de 1966: PEASLEE: Ob. cit., vol. IV, págs. 429 - 430.

(4) Constitución del 1 de julio de 1937, con las enmiendas hechas hasta el 30 de mayo de 1941; PEASLEE: Ob. cit. vol. III, pág. 492.

una serie de ataques a la Iglesia Católica, como la expulsión de varios sacerdotes, extranjeros y aún de tres Obispos(1).

En realidad, el grado de confesionalidad de un Estado y el alcance de su compatibilidad con el derecho de libertad religiosa se miden especialmente, por la situación jurídica reconocida a las demás confesiones y religiones. Y esta, como norma general, según advierte CORRAL(2), es hoy en todos los países católicos la de libertad religiosa, tanto en público como en privado.

2. Sistema político - religioso de separación de la Iglesia y del Estado con verdadera libertad religiosa.

Este sistema lo adoptan aquellos Estados que, de una parte, no tienen reconocida una religión como la oficial del Estado, proclaman o no expresamente el principio político -religioso de separación de la Iglesia y del Estado y, de otra parte, garantizan de un modo real y efectivo el derecho de libertad religiosa en su territorio. Así ocurre en los países siguientes:

En Africa:

Camerún.- " El Camerún es una República indivisible, laica , democrática y social. Asegura la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. Afirma su adhesión a las libertades fundamentales descritas en la Declaración Universal de los derechos del hombre y en la Carta de las Naciones Unidas"(art. 1) (3).

(1) Bilan du Monde, II, pág. 37, cit. por CORRAL: Loc. cit. pág.599.

(2) CORRAL:Loc. cit. pág. 598-599.

(3) Constitución del 1 de septiembre de 1961: PEASLEE: Ob. cit. pa. 34: PAVAN: Ob. cit. pág. 14.

Guinea.- " El Estado de Guinea presta su total adhesión a la Carta de las Naciones Unidas y a la Declaración Universal de los derechos del hombre"(Preámbulo)(1).

" Guinea es una República basada en los principios de democracia, libertad de religión y justicia social"(art. 1).

"La libertad de conciencia es asegurada a todos los ciudadanos por la laicidad de la escuela y del Estado"(art. 41).

Madagascar.- " La República de Madagascar es una, indivisible, democrática y social. Afirma su neutralidad para con las diferentes religiones. El Estado y las Iglesias gozan de autonomía en su terreno respectivo. Se les prohíbe toda intromisión en el terreno que no sea el suyo"(art. 2)(2).

Tanganyika.- " Teniendo en cuenta que el reconocimiento de la dignidad natural y de la inalienabilidad de los derechos de todos los miembros de la familia humana es el fundamento de la libertad, de la justicia y de la paz; considerando que tales derechos incluyen el derecho para todo individuo, cualquiera que sea su raza, su tribu, su lugar de nacimiento, sus opiniones políticas, su color, sus creencias, su sexo, pero con las reservas del respeto a los derechos y libertades de los otros y del interés público, a la vida , a la vida, a la libertad, a la seguridad, personal, a la propiedad, a la protección reconocida por la ley a la libertad de conciencia, a la libertad de expresión, a la libertad de reunión y de asociación, y al respeto de su vida privada y familiar, y considerando que tales derechos son mejor mantenidos y protegidos en una sociedad democrática en la que el Gobierno es responsable ante un Parlamento libremente elegido y representativo del pueblo, y en donde los tribunales de justicia son independientes e imparciales "(3).

(1) Constitución del 10 de diciembre de 1958: PEASLEE: Ob. cit. vol. I, pág. 232.

(2) Constitución, 29 de abril de 1959, enmendada el 28 de junio de 1960 y 6 de junio de 1962: PEASLEE: Ob. cit. vol. I, pág. 458.

(3) Constitución de 30 de diciembre de 1962: PEASLEE, Vol. I, pág. 860.

En estas condiciones la Asamblea Constituyente de Tanganika promulga la presente Constitución, que organiza el Gobierno de Tanganyika en una determinada sociedad democrática"(Preámbulo)(1).

Togo.- " El pueblo togoles, independiente y soberano firmemente adherido a los principios que inspiran la Declaración Universal de los derechos del hombre, proclama solemnemente su voluntad de permanecer fiel a los ideales de libertad , de igualdad, y de justicia que le han guiado constantemente y sostenido en su lucha por la independencia nacional"(Preámbulo)(2).

" La República de Togo es indivisible, democrática y social. Asegura la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. Respeta todas las creencias(art.2)". " La libertad de conciencia y la libre profesión y práctica de la religión se garantiza a todos, con sujeción al orden público. Las instituciones y comunidades religiosas tienen derecho a desarrollarse sin obstáculo con sujeción a las leyes y reglamentos existentes"(art. 17).

Unión Sudafricana.- "Nosotros reunidos aquí en Parlamento, conscientes de nuestra responsabilidad ante Dios y ante los hombres convencidos de la necesidad de permanecer unidos para salvar la integridad y la libertad de nuestro país, mantener la ley y el orden, promover la satisfacción y el bienestar espiritual y moral de los que nos rodean"(Preámbulo)(3).

" El pueblo de la República de Africa del Sur reconoce la soberanía y la ayuda de Dios Todo Poderoso"(art.2).

" El Presidente de la República o su suplente, antes de entrar en funciones, deben prestar juramento, en los términos siguientes ante el Jefe de justicia de Africa del Sur o ante un juez de la Corte Suprema de Africa del Sur: " Ante Dios Todo Poderoso, consciente plenamente de la pesada responsabilidad que asumo en cali-

(1) Constitución - 9 de diciembre de 1962: PEASLEE: Ob. cit. vol. I, pág. 860.

(2) Constitución ,5 de mayo de 1963:PEASLEE:Ob. cit. vol.,I, pág. 890-893.

(3) Constitución , 25 de abril de 1961: PEASLEE: Ob. cit. vol.I, pág. 813.

-dad de Presidente (suplente) de la República al servicio de mi pueblo, yo juro ser fiel a la República de Africa del Sur y prometo solemne y sinceramente en todo lo que pueda, hacerla progresar, oponerme a todo cuanto pueda perjudicarla, consagrarme al bienestar de sus habitantes, observar, respetar, mantener y conservar la Constitución y las demás leyes de la República, de desempeñar mis deberes con todas mis fuerzas y mis talentos, con todos mis medios y todos mis conocimientos, conforme a los dictámenes de mi conciencia, de hacer justicia a todos y dedicarme al bienestar de mi pueblo"(art. 12).

América:

Brasil.- " La Constitución asegura a los Brasileños y a los extranjeros residentes en el país la inviolabilidad de derechos concernientes a la vida, libertad, seguridad, y propiedad en los siguientes términos:" Todos son iguales ante el derecho, sin distinción por razón de sexo, raza, ocupación, credo religioso, o convicciones políticas. Los prejuicios serán castigados por el derecho Parágrafo 1º) art. 150)(1). Existe plena libertad de conciencia y los creyentes tiene asegurado el derecho a practicar los cultos religiosos que no sean contrarios al orden público y a la buena moral"(art. 150 - parágrafo 5).

Canadá.- " El Parlamento de Canada afirma que la Nación de Canadá se funda en los principios que reconocen la supremacía de Dios, la dignidad y el valor de la persona y de la posición de la familia en la sociedad"(Preámbulo) (2). Por la presente se reconoce y declara que en Canada ha existido y continua existiendo sin discriminación por razón de raza, origen nacional, color, religión o sexo, los siguientes derechos humanos y libertades

(1) Constitución , 24 de enero de 1967: PEASLEE: Ob. cit. vol, IV, pág. 192. pág. 192.

(2) The 1960 Canadian Bill of Rights, August 10, 1960.; PEASLEE: Ob. cit. vol. IV, pág. 237.

fundamentales:

(C) libertad de religión"(art. 1).

Chile.- " La Constitución asegura a todos los habitantes de la República"(art. 10): " La manifestación de todas las creencias, la libertad de conciencia y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público, pudiendo, por tanto, las respectivas confesiones religiosas erigir y conservar templos y sus dependencias con las condiciones de seguridad e higiene fijadas por las leyes y ordenanzas.

Las iglesias, las confesiones e instituciones religiosas de cualquier culto, tendrán los derechos que otorgan y reconocen, con respecto a los bienes, las leyes actualmente en vigor; pero quedarán sometidas, dentro de las Garantías de esta Constitución, al derecho común para el ejercicio del dominio de sus bienes futuros.

Los templos y sus dependencias, destinados al servicio de un culto, estarán exentos de contribuciones"(art. 12) (1).

Ecuador.- " El Estado garantiza la libertad de creencia religiosa, y de culto individual y colectivo, en público o en privado"(art. 28,nº 9)(2).

"No pueden ser candidatos para el cargo de Senador o Diputado: Los ministros de cualquier religión y los miembros de comunidades religiosas"(art. 122).

Estados Unidos.- " El Congreso no podrá aprobar ninguna ley conducente al establecimiento de religión alguna, ni a prohibir el ejercicio de ninguna de ellas. Tampoco aprobará ley alguna que coarte la libertad de palabra y de prensa o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a solicitar reparación de cualquier agravio"(Enmienda I)(3).

(1) Constitución del 18 de septiembre de 1925, con las enmiendas hechas hasta 1967: PEASLEE: Ob. cit. vol. IV, p. 246.

(2) Constitución del 25 de mayo de 1967: PEASLEE: Ob. cit. vol. IV, pág. 464.

(3) Constitución del 17 de septiembre de 1787, enmendada en 1967: PEASLEE: Ob. cit. vol. IV, pág. 1205.

Guatemala.- " En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos.

Toda discriminación por razón de raza, color, sexo, religión, nacimiento, posición económica o social u opiniones políticas están prohibidas"(art. 43)(2).

" Se garantiza la profesión de cualquier religión.

Toda persona tiene el derecho a practicar su religión o creencia en público o privado, a través de la instrucción, culto y ritos, limitado solamente por la paz, buena moral, orden público, y por el respeto debido a los símbolos de la patria.

Las sociedades y agrupaciones religiosas no pueden intervenir en política y los ministros de la fe en la propaganda"(art. 66).

"La Iglesia Católica y las demás confesiones se reconocen como personas jurídicas y ellas pueden adquirir, poseer, y disponer, de la propiedad, con tal que tal propiedad sea empleada para propósitos de beneficencia o educación"(art. 67).

Honduras.- " Se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones, sin distinción con tal que no se viole la ley y el orden público.

Los ministros de las distintas religiones no pueden ocupar cargos públicos ni ocuparse en cualquier forma de propaganda política, invocando motivos religiosos o destinados a tal fin, aprovechándose de las creencias religiosas del pueblo"(art. 87)(3).

Nicaragua.- " El Estado no tiene religión oficial"(art.8)(4).

" Los templos destinados exclusivamente al servicio de un culto

(1) Constitución del 15 de septiembre de 1965; PEASLEE: Ob. cit. vol. IV, pág. 575.

(2) Constitución , 3 de junio de 1965: PEASLEE: Ob. cit. vol. IV, p. 763.

(3) Constitución, de 1 de noviembre de 1950, con las enmiendas realizadas hasta el 25 de mayo de 1962: PEASLEE: Ob. cit. vol. IV, págs 960 y sigs.

y sus dependencias están exentos de contribución"(art. 84).

"Se prohíbe aprobar cualquier ley que proteja o restrinja las creencias particulares"(art. 110).

Uruguay.- " Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna. Reconoce a la Iglesia Católica el dominio de todos los templos que hayan sido total o parcialmente construidos con fondos del Erario Nacional, exceptuándose sólo las capillas destinadas al servicio de asilos, hospitales, cárceles, u otros establecimientos públicos. Declara asimismo, exentos de toda clase de impuestos a los templos consagrados al culto de las diversas religiones"(art. 5) (1).

Venezuela.- " El Congreso de la República de Venezuela en nombre del pueblo venezolano por el que invoca la protección de Dios Omnipotente, decreta la siguiente Constitución"(Preámbulo) (2).

"No se permitirá discriminación basada en la raza, sexo, credo o condición social"(art. 61).

" Cada uno tiene derecho de profesar la propia fe religiosa y de practicar el culto en privado o en público, siempre que dicho culto no se oponga al orden público"(art. 65).

"Para ser elegido Presidente de la República es necesario ser venezolano de nacimiento, tener por lo menos treinta años, y no ser eclesiástico"(art. 182).

En Europa:

Alemania Occidental.- " La dignidad del hombre es inviolable. Es deber de toda autoridad estatal respetarla y protegerla"(art.1) (3).

(1) Constitución ,15 de febrero de 1967:PEASLEE: Ob. cit. vol. IV,pág. 1229.

(2) Constitución, 23 de enero de 1961:PEASLEE: OB.cit. vol.IV, pág. 1229 y sigs.

(3) Constitución, de 8 de mayo de 1949, enmendada el 1 de enero de 1966:PEASLEE: Ob. cit. vol.III, págs 362 y sigs.

" La libertad de fe y de conciencia y la libertad de profesión religiosa e ideológica son inviolables, 1). Se garantiza el pacífico ejercicio del culto, 2).

Nadie puede ser obligado, contra su conciencia al servicio en guerra con las armas. Una ley federal regula los casos particulares, 3)"(art. 4).

" No habrá religión estatal.

La libertad de asociarse en sociedades religiosas será protegida"(art. 137).

Austria.- " Austria es una república democrática ..." (art.1) (1).

" Austria es un Estado federal"(art. 2 nº 1).

"Todos los ciudadanos de la Federación serán iguales ante la ley. Se excluirán los privilegios basados en el nacimiento, sexo, posición social, clase o credo"(art. 7).

Bélgica.- "La libertad de culto y su público ejercicio juntamente con la libertad de manifestar las propias opiniones de todas las formas, se garantiza, con sujeción a la represión de los delitos cometidos con ocasión de esa libertad"(art. 14)(2).

"Nadie será obligado a participar de cualquier modo en los actos y en las ceremonias de un culto y a observar los días de descanso"(art. 15).

Francia.- " Francia es una República , indivisible, secular, democrática y social. Asegurará la igualdad a todos los ciudadanos ante la ley sin distinción de origen o religión. Respetará todas las creencias"(art. 2) (3).

(1) Constitución, 26 de octubre de 1955, enmendada en 1964: PEASLEE; Ob. cit. vol. III, pág. 25.

(2) Constitución, 7 de febrero de 1831, con las enmiendas hechas hasta el 15 de octubre de 1921: PEASLEE: Ob. cit. p.14-17.

(3) Constitución de 4 de octubre de 1958, con las enmiendas hechas hasta el 30 de octubre de 1963: PEASLEE: Ob. cit., vol. III, pág. 312.

Holanda.- El rey presta sobre la Constitución el juramento siguiente: Prometo al pueblo holandés mantener y observar siempre la Constitución.

Prometo defender y conservar con todo mi poder la independencia y la integridad territorial del Estado, proteger la libertad pública e individual y los derechos de todos mis subditos y emplear todos los medios que las leyes ponen a mi disposición para el mantenimiento y el desarrollo del bienestar público y privado, como un buen rey está obligado a hacer.

Que Dios Omnipotente me ayude (Lo prometo)(art. 53)(1).

"Cada uno profesa su opinión religiosa en plena libertad, salvada la protección de la sociedad y de sus miembros contra la infracción de la ley penal"(art. 174).

" Igual protección se concede a todas las confesiones religiosas del Reino"(art. 175).

" El ejercicio público de todos los cultos está permitido en el interior de los edificios y lugares destinados, con sujeción a las medidas necesarias para asegurar la tranquilidad y el orden públicos.

El ejercicio público del culto (fuera de los edificios) está permitido y autorizado actualmente según la ley y los reglamentos"(art. 177).

Mónaco.- " Se garantiza la libertad de cultos, de religión, de supúblico ejercicio y la libertad de expresar las opiniones en todas las materias, excepto las ofensas cometidas en el ejercicio de esas libertades que han de ser suprimidas"(art. 10)(2).

"Nadie puede ser obligado a tomar parte en actos y ceremonias de cualquier religión ni a guardar los días de descanso"(art.23).

(1) Constitución del 30 de noviembre de 1887, con las emmendas hechas hasta 1948: PEASLEE: Ob. cit. , vol.III, pág. 136-137.

(2) Constitución , 17 de diciembre de 1962:PEASLEE: Ob.cit. vol. III, pág. 639.

Portugal.- 1. La libertad de conciencia, religión e culto es inviolable.

2. Nadie puede ser perseguido, privado de los derechos o libre de obligaciones o deberes cívicos por causa de sus convicciones o práctica religiosa.

3. Las iglesias y comunidades religiosas están separadas del Estado y son libres en su organización y no en el ejercicio de sus funciones y del culto.

4. Se garantiza la libertad de enseñanza de cualquier religión practicada en el ámbito de la respectiva confesión, así como la utilización de los medios de comunicación social propios para el desarrollo de sus actividades.

5. Se reconoce el derecho a la objeción de conciencia, quedando los objetores obligados a la prestación del servicio no armado con duración idéntica a la del servicio militar obligatorio" (1).

Suiza.- " La escuela pública debe estar abierta a la asistencia de todas las religiones sin prejuicio hacia ellas de cualquier forma respecto a su conciencia o creencia"(art. 23,n.º 3)(2).

" La libertad de conciencia y de creencia es inviolable.

Nadie puede ser obligado a hacerse miembro de una asociación religiosa, sometido a determinada instrucción religiosa, a ejecutar cualquier acto religioso o incurrir en penas de cualquier clase a causa de sus opiniones religiosas"(art. 49).

" El libre ejercicio de las formas del culto es garantizado con los límites de la moral y el orden públicos"(art. 50).

"La Orden de los Jesuitas y las sociedades afiliadas a ella no pueden ser admitidas en ningún lugar de Suiza y todas sus actividades tanto en la Iglesia como en la escuela son prohibidas a sus miembros.

Esta prohibición puede extenderse por decreto federal a otras órdenes religiosas cuya actividad sea peligrosa al Estado o per-

(1) Constitución de 2 de abril de 1976.(Impresa Nacional-Casa da Moeda, Lisboa, -19 76),art. 41, pág. 32.

(2) Constitución del 29 de mayo de 1874, con las enmiendas y revisiones hechas hasta el 31 de diciembre de 1964:PEASLEE: Ob. cit. vol. III, págs 939,951,952. Fueron suprimidos, últimamente, los arts 51 y 52 por referendum del 20 de mayo de 1973, con resultado favorable a la libertad religiosa: Diaria "YA" del 20 de mayo de 1973, pág. 21.

-turbe la paz de los diferentes grupos religiosos"(art. 51).

"La fundación de nuevas órdenes religiosas y el restablecimiento de aquellas que han sido suprimidas está prohibido"(art. 52).

En Oceanía:

Australia.- "La Commonwealth no hará leyes para el establecimiento de cualquier religión o para cualquier observancia religiosa o para prohibir el libre ejercicio de cualquier religión y no será requerido examen religioso como requisito para un cargo o puesto público en la Commonwealth"(art. 116)(1).

3. Sistema político religioso de separación hostil de la Iglesia y el Estado.

Adoptan este sistema los Estados inspirados por el comunismo, que, bajo la apariencia jurídica de separación, pretenden la implantación del materialismo dialéctico y el sometimiento absoluto de todas las personas al mismo.

Lejos de un sistema separacionista, se establece, como señala CORRAL(2), el reverso del Estado Confesional, es decir el Estado antirreligioso.

La postura del marxismo es completamente contraria a la religión. "La religión- dice Marx - es el sollozo de la criatura oprimida, es el significado real de un mundo sin corazón, así como es el espíritu de una época privada de espíritu.

Es el opio del pueblo.

La eliminación de la religión como ilusoria felicidad del pueblo, es la condición para su felicidad real"(3).

" La base filosófica del marxismo, dice Lenin, tal como lo han

(1) Constitución Act de 1 de julio de 1900, con las enmiendas hechas hasta el 10 de diciembre de 1946: PEASLEE: Ob.cit. pág. 57.

(2) CORRAL: Loc. cit. pág. 602.

(3) MARX(K): Introducción para la crítica de la Filosofía de HEGEL, en Filosofía del Derecho de HEGEL, Buenos Aires, 1955, págs 7 y sigs.

proclamado repetidamente Marx y Engels, es el materialismo dialéctico ..., materialismo innegablemente ateo, resueltamente hostil a toda religión"(1). Más tarde afirmará Stalin: "Nsotros consideramos la religión como nuestro mayor enemigo; he aquí porque nunca debe hablarse de tolerancia para con ella, pues es contraria a nuestro fin último"(2).

A la concepción filosófica del marxismo corresponde, como advierte CORRAL(3), su peculiar concepción jurídica del Estado, del derecho, de la justicia, y de la libertad religiosa. El Estado no es más que "la máquina para el mantenimiento de la dominación de una clase por otra"(4). " El derecho es el conjunto de las normas, que expresan la voluntad de la clase dominadora, establecidas según un orden legal y sancionadas por la autoridad del Estado, que garantiza su aplicación por la fuerza coercitiva en orden a defender, consolidar y desarrollar las religiones e instituciones sociales convenientes al interés de la clase dominadora. A nuestros jueces demandamos que apliquen la política de dictadura del proletariado, que corresponde al interés de la población socialista"(5).

La libertad religiosa y , en general, el sistema de relaciones de Iglesia y Estado vienen concebidos según Lenin en el sentido de que " el Estado no debe mezclarse en las cosas de la religión, las comunidades religiosas no deben ligarse al poder del Estado, cada uno debe ser libre de profesar el culto que le plazca o de no profesar ninguno, es decir de ser ateo como lo es generalmente todo socialista, no debe ser tolerada entre los ciudadanos ninguna discriminación en los derechos cívicos por motivos de creencia"(6).

Conforme a estos principios filosóficos jurídicos se ordenan

-
- (1) De la religión, cit. por LANARES: Ob. cit. pág. 216, nota 50.
 - (2) Discurso radiofónico nov. 1936, cit. por LANARES: Ob. cit. pág. 216, not. 51; cit. también por CORRAL: Loc. cit. p. 603.
 - (3) CORRAL: Loc. cit. pág. 603.
 - (4) Soviet Legal Philosophy, Cambridge, Mass. 1951, cit. por LANARES: Ob. cit. pág. 217, cit. por CORRAL: Loc. cit. pág. 603.
 - (5) VYSCHINSKY, El Derecho Internacional y la organización internacional, cit. por LANARES: Ob. cit. pág. 217, nota 57.
 - (6) Vid. LANARES: Ob. cit. pág. 218, nota 61

y obran los países que siguen el régimen comunista.

Su modelo lo constituye la Constitución de la Unión Soviética, que en su art. 124 dice así: " A fin de asegurar a los ciudadanos la libertad de conciencia, la Iglesia en la U R S S, está separada del Estado y la escuela de la Iglesia. Se reconoce a todos los ciudadanos la libertad de cultos y la libertad de propaganda antireligiosa"(1).

Es reproducida por Rusia Blanca(art. 99) (2), Ucrania(art.104) (3), y la República Popular de Mongolia(art. 81)(4). Con palabras distintas es imitada por Checoslovaquia, que en su Constitución establece: " Se garantiza la libertad de confesión.

Cada uno tiene el derecho de practicar cualquier confesión religiosa o de estar sin confesión religiosa, y de practicar sus creencias en tanto no se opongan a la ley.

La fe y la convicción no constituyen fundamento para que ninguno rehuse cumplir los deberes prescritos por la ley"(art. 31)(5).

A estos países deben añadirse los siguientes:

Albania.- " Se garantiza la libertad de conciencia y de fe a todos los ciudadanos. La Iglesia está separada del Estado.

Las comunidades religiosas son libres en cuestiones de creencias y práctica externa.

Se prohíbe emplear la Iglesia y la religión para fines políticos. El Estado puede prestar ayuda material a las comunidades religiosas"(art. 18)(6).

Alemania Oriental.- " Todos los ciudadanos gozan de absoluta libertad de conciencia y de fe religiosa. El libre ejercicio de la religión está protegido por la República.

(1) Constitución del 5 de diciembre de 1936, con las enmiendas hechas hasta 1965: PEASLEE: Ob. cit. vol., III, pág. 1005.

(2) Constitución de 1937, enmendada ,1960: PEASLEE: Ob. cit. pág. 129.

(3) Constitución de 1937: PEASLEE: Ob. cit. vol. III; PAVAN: Ob. cit. pág. 147.

(4) Constitución del 30 de junio de 1940: PEASLEE: Ob. cit. vol. III, pág. 91.

(5) Constitución, 11 de julio de 1960: PEASLEE: Ob. cit. vol. III, pág. 233.

(6) Constitución, 14-III-1946, con enmiendas hasta 1958: PEASLEE: Ob. cit. vol. III, p. 9.

Las instituciones de las comunidades religiosas, las actividades y la instrucción no pueden emplearse para fines contrarios a la Constitución o para fines de política de partido. Sin embargo, no se discute el derecho de las comunidades religiosas para expresar sus opiniones en cuestiones vitales de la nación"(art. 41)(1).

" Los derechos y las obligaciones privados o públicos no están condicionados por el ejercicio del culto, y no pueden estar limitados por causa de este.

El ejercicio de los derechos privados o civiles o la admisión a puestos públicos son independientes de la creencia religiosa.

Nadie puede ser obligado a manifestar la propia convicción religiosa"(art. 42).

"No existe una Iglesia del Estado. La libertad para formar asociaciones religiosas está garantizada"(art. 43).

Bulgaria.- " Se garantiza a los ciudadanos la libertad de conciencia y de religión y la libertad de practicar los ritos religiosos.

La Iglesia está separada del Estado. Una ley especial regula la situación jurídica, las cuestiones relativas a la sustentación material, el derecho de la libre organización interna y la autonomía de las diversas comunidades religiosas.

El abuso de la Iglesia y de la religión para fines políticos o para formar organizaciones políticas con fundamento religioso está prohibido"(art. 78)(2).

Corea del Norte.- "Todos los ciudadanos de la República Popular Democrática de Corea, tienen iguales derechos en todas las esferas del gobierno, actividades, política, económica social y cultural, sin distinción de sexo, nacionalidad, creencia religiosa, especialidad, propiedad, estado o educación"(art. 11)(3).

(1) Constitución del 7 de octubre de 1949 con las enmiendas hechas hasta el 12 de septiembre de 1960: PEASLEE: Ob. cit. Vol. III pág. 341.

(2) Constitución de 1947, enmendada, 1965: PEASLEE: Ob. cit. v. III, pág. 107.

(3) Constitución, de 1948, enmendada, 1962: PEASLEE: Ob. cit. v. II, p. 563.

"Los ciudadanos de la República Popular Democrática de Corea tienen libertad de creencia religiosa y de realizar los servicios religiosos"(art. 14).

Cina Popular.- " Los ciudadanos tienen libertad de palabra , de correspondencia , de prensa, de reunión, de asociación, de desfile, de manifestación y de huelga, y tienen libertad de profesar creencias religiosas y de profesarlas y de propagar el ateísmo"(1).

Hungría.- " La ley castiga severamente toda perjudicial discriminación , concerniente al sexo, la diferencia de confesión o de nacionalidad.

La República Popular de Hungría garantiza la libertad de conciencia y el derecho al libre ejercicio del culto.

Para asegurar la libertad de conciencia, la República , Popular de Hungría separa la Iglesia del Estado"(54)(2).

Polonia.- "Los ciudadanos de la República Popular polaca gozan de iguales derechos en las esferas de la vida pública, política, económica, social y cultural, sin distinción de nacionalidad, raza, o religión"(3).

"La República Popular de Polonia garantiza la libertad de conciencia y de religión a los ciudadanos. La Iglesia y las otras uniones religiosas pueden ejercer libremente sus actividades o ritos

(1) Constitución de la República Popular China de 17 de enero de 1975, art. 28(Ediciones en lenguas extranjeras, Primera edición) Pequín,1975;vid.también en Keesing's Contemporary Archives ,february,23,1975,pág. 26968;vid.igualmente,"La nueva Constitución china incluye la propaganda antirreligiosa", en"YA" de 23 del II de 1975,pág. 22.

(2) Constitución, de 1949, enmendada,1957, en PEASLEE: Ob. cit. vol. III, pág. 442.

(3) Constitución de 1952,enmendada,1963;PEASLEE: Ob. cit. vol. III, pág. 721 y sigs.

religiosos. Está además prohibido obligar a alguien a participar en actividades o ritos religiosos.

La Iglesia está separada del Estado. Los principios de las relaciones entre la Iglesia y el Estado y la posición jurídica y patrimonial de las uniones confesionales son determinados por la ley.

El abuso de la libertad de conciencia y de religión para fines perjudiciales a los intereses de la República popular polaca están castigados por la ley"(art.70).

Rumanía.- "Los ciudadanos de la República Socialista de Rumanía sin distinción de nacionalidad, raza, sexo, o religión ,tienen iguales derechos en todos los campos de la vida económica, política, jurídica, social y cultural"(art. 17)(1).

Se garantiza la libertad de conciencia a todos los ciudadanos de la República Socialista de Rumanía.

Cada uno es libre para compartir o no compartir una creencia religiosa. La libertad de practicar un culto está garantizada. El culto religioso se organiza y funciona libremente. La forma de organización y funcionamiento de los cultos religiosos se regulan por la ley.

La escuela está separada de la Iglesia. Las confesiones y congregaciones o comunidades religiosas no pueden abrir o sostener otros establecimientos docentes, que los especiales para la enseñanza de los sirvientes de la Iglesia"(art. 30).

Vietnam del Norte.- "Los ciudadanos de la República de Vietnam son iguales ante la ley(art 22) (2).

"Los ciudadanos de la República democrática de Vietnam gozan de libertad de creencia religiosa, ellos pueden practicar o no practicar una religión"(art.26).

Actualmente el Gobierno Revolucionario Provisional difundió el 30 de abril de 1975 los diez mandamientos o puntos del programa que proponía a la población de Vietnam del Sur. En el mandamiento 2 ordena "la igualdad de sexos , libertad de conciencia y de cultos"(3).

(1) Constitución de 1965; PEASLEE, Vol. III, pág. 769-772.

(2) Constitución del 31 de diciembre de 1959: PEASLEE, Vol. III, pág. 1230.

(3) "Los diez mandamientos" del GRP a la población, en Ya del 13 de junio de 1976, p. 31 de Hecogrado.

Yugoslavia.- "Los ciudadanos son iguales en derechos y obligaciones , prescindiendo de la nacionalidad, raza, religión, sexo, lenguaje, educación o posición social. Todos son iguales ante la ley"(art. 33)(1).

"Las comunidades religiosas estarán separadas del Estado y serán libres para desempeñar las funciones y ritos religiosos. Las comunidades religiosas pueden fundar colegios religiosos para educar a su clero. El abuso de la religión y del trabajo religioso para fines políticos es inconstitucional. La comunidad social puede prestar asistencia material a las comunidades religiosas.

Las comunidades religiosas pueden tener derecho de propiedad sobre bienes inmuebles, con los límites determinados por la ley" (art. 46)

En el número de estos países hay que incluir también a Cuba, ya de antigua tradición laica, si bien no tiene los preceptos constitucionales que enuncian y aún tutelen la libertad de propaganda atea y antirreligiosa. En su Constitución establece:

" El Estado socialista, que basa su actividad y educa al pueblo en la concepción científica materialista del universo, reconoce y garantiza la libertad de conciencia, el derecho de cada uno a profesar cualquier creencia religiosa y a practicar , dentro del respeto a la ley, el culto de su preferencia.

La ley regula las actividades de las instituciones religiosas.

Es ilegal y punible oponer la fe o la creencia religiosa a la Revolución, a la educación o al cumplimiento de los deberes de trabajar, defender la patria con las armas, reverenciar sus símbolos y los demás deberes establecidos por la Constitución"(2).

Estos países , en la práctica violan aún estas estrechas disposiciones.

En Rusia estas disposiciones se cumplen al compás de la política cambiante del partido. En el quinquenio de la guerra mundial conoce hasta la amplitud de la tolerancia y aun el respeto hacia

(1) Constitución 17 de abril de 1963: PEASLEE: Ob. cit. vol. III, págs. 1253 -1256.

(2) Constitución de la República de Cuba, de 24 de febrero de 1976, art. 54, pág. 21 (Editorial Orbe, La Habana, 1976).

la Iglesia ortodoxa rusa, que se une al Estado en la lucha contra el invasor. Acabada ésta, vuelve la propaganda antirreligiosa. Durante el mandato de Jruschev se recrudece la lucha antirreligiosa; cerrandose de 1961 a 1964 unas 10.000 iglesias(1). " Lo denuncian hoy junto con otras violaciones del "reconocido" derecho de libertad de conciencia , tales como la liquidación ilegal de asociaciones religiosas, la exigencia de licencias para los actos de cultos, ya permitidos por la legalidad, la intromisión en los nombramientos de los ministros del culto"(2).

Al compás de Rusia Soviética se mueven los demás estados satélites.

El partido comunista checo ataca ciegamente a la Iglesia. "El Comité Central del Partido Comunista Checoslovaco niega a la religión la posibilidad de desempeñar papel progresivo alguno en la sociedad socialista, exige "una normalización" según los conceptos que el comunismo checoslovaco tiene de la vida religiosa y acusa a la Iglesia - como ya es tradicional en la propaganda comunista - de intentar explotar todas las oportunidades para recuperar su influjo sobre las masas.

El Comité Central ha lanzado estas acusaciones en un documento de 144 páginas, publicado en un número especial de la revista mensual ideológica "Nova Misl". El documento exige la "normalización" sin tener en cuenta los principios de la Constitución checoslovaca respecto a separación de la Iglesia y del Estado. Propugna un sistema de vigilancia estatal sobre las cuestiones de la Iglesia.

La actitud del comunismo checoslovaco queda rigurosamente fijada en la siguiente declaración: "A pesar de la actitud positiva adoptada con ocasión de las elecciones en primavera por casi todas las comunidades religiosas, y a pesar también de la consolidación en el sector religioso, no se puede aceptar la concepción

(1) CORRAL: Loc. cit. pág. 604

(2) Carta de Nicolás Echlimann y Gleh Ykunin, del 15 de diciembre al Presidente del Soviet Supremo: Ecclesia(1966), 765-769, cit. por CORRAL: Loc. cit. pág. 605.

de que la religión pueda jugar, dentro de las condiciones de la vida socialista, ningún tipo de papel progresivo, pues tal concepto significaría una grave violación de los principios ideológicos del marxismo-leninismo". El documento del Comité Central Comunista Checoslovaco ha llamado poderosamente la atención de los observadores por presentar el panorama más completo hasta el momento de la vida eclesiástica en Checoslovaquia y plantear claramente la actitud oficial contra los resultados de la llamada "primavera de Praga", respecto a la situación de las Iglesias.

El documento censura que durante los años 1968 y 1969 se registrara en Checoslovaquia un vigoroso aumento de la vida religiosa. Lamenta, en especial, aunque sin citar cifras concretas, el aumento de bautizados, matrimonios y entierros religiosos en aquella época y subraya en tono crítico que todavía hoy, en Checoslovaquia, el 34 por 100 de los niños reciben instrucción religiosa - porcentaje que en parte eslovaca del país se eleva incluso al 50 por 100 - mientras que en el año 1966 sólo el 22 por 100 de los niños se atrevían a frecuentar las clases de religión.

El Comité Central ataca especialmente a la Iglesia Católica, y asegura que la jerarquía católica intentó explotar en la era de Dubcek la distensión política. Se acusa a la Iglesia Católica de haber luchado por el restablecimiento de las órdenes religiosas, disueltas desde 1950, y de haber intentado eliminar el control estatal sobre las cuestiones religiosas laicas. El documento no olvida tampoco la disolución en 1968 del llamado "movimiento de sacerdotes para la paz", organización de sacerdotes incondicionalmente adictos al régimen comunista.

Finalmente, el documento del Comité Central rechaza las declaraciones de la Iglesia respecto a que ésta mantuvo siempre una actitud correcta con relación al Estado y afirma, por el contrario, que continúan manifestandose tendencias por las que se pretende aprovechar toda oportunidad de recuperar el influjo de la Iglesia sobre las masas populares. La publicación de este documento representa para los observadores la demostración de que, tras haber utilizado las declaraciones de personalidades religiosas para la gran batalla de las últimas elecciones, vital para el régimen, el ala comunista reclama de nuevo la vuelta a una postura comunista clásica de intolerancia respecto a la religión, y, en especial

de hostilidad contra la Iglesia Católica"(1).

" Recientemente la influyente revista checoslovaca - Tribuna - ha publicado un artículo en que se critica con los tonos más duros la nueva postura de la Santa Sede y del Consejo Ecuménico de las Iglesias con respecto a los países comunistas. De la actuación del Papa Juan XXIII afirma que el ajuste realizado en su pontificado "no significa cambio alguno de largo alcance, sino únicamente un cambio de táctica". En relación a la encíclica "Populorum progressio" de Pablo VI, la publicación comunista afirma que se trata de un documento aparentemente crítico, pero que en realidad entraña una apología del capitalismo. "Ofrece su apoyo material y espiritual al tercer mundo, pero con el objeto de retrasar los cambios y conseguir la vuelta de dichos países a la vía del desarrollo capitalista.

El Consejo Ecuménico de las Iglesias, en el que se dan cita las principales confesiones ortodoxas y protestantes, es presentado como un intento de frenar la infiltración de las tesis marxistas y como un organismo vinculado a los "círculos políticos reaccionarios".

El artículo termina proclamando que la sociedad comunista demuestra "lo fraudulento de los valores impuestos a la humanidad por la Iglesia" y "la esclavización del hombre mediante las ilusiones religiosas"(2).

En Albania la persecución religiosa llega a extremos desconcertantes e increíbles. Bástenos citar el caso de un sacerdote fusilado por haber bautizado a un niño: " Un sacerdote ha sido fusilado en Albania por haber bautizado a un niño. La condena, tras un proceso sumarísimo, se ejecutó - según la agencia católica Kathpres - en un campo de trabajo y es la prueba más evidente de la terrible persecución religiosa en Albania. Se da el caso de que el sacerdote estaba internado en campo de trabajo por haber participado , junto con otros sacerdotes, en una manifestación contra el régimen comunista. Una mujer , que había dado a luz a un niño la semana pasada en el mismo campo, en que estaba internada

(1) Diario "YA" del 14 de abril de 1972, pág. 21

(2) Diario "YA" del 18 de mayo de 1973, pág. 21.

por un "delito político" no especificado, se había acercado hace dos días al sacerdote para pedirle el bautismo de su hijo.

El sacerdote, consciente de la prohibición, se sintió en el deber de cumplir su misión y secretamente lo hizo, pero alguien le denunció. La brutal ejecución fué inmediata y la reacción que ha causado ha sido fulgurante, incluso en Albania"(1).

" No hay lugares de culto, ya que han sido convertidos en tiendas, cuarteles, oficinas, salas de baile, palacios de deportes. Iglesias ortodoxas y mezquitas musulmanas han corrido la misma desgracia. Un telón de silencio ha caído, sin embargo, sobre todo esto.

Nadie, ningún contestador de tantos como hay ha levantado la voz para denunciar la violación de estos derechos humanos elementales pisoteados. Ni siquiera esas organizaciones y movimientos tan democráticos, tan generosos en protestas contra cualquier limitación de algunas libertades, que a ellos les interesan"(2). "Pese a las medidas represivas, la fe del pueblo se mantiene y se celebra la Eucaristía en secreto"(3). " No se ve - dice el Papa - que esperanza humana quede en Albania a la Iglesia; pero hay que esperar siempre"(4).

El silencio constituye, a veces, la única forma de protesta contra actos de esta clase, no sólo antirreligiosos, sino antihumanos y anticivilizados; así lo subrayó Radio Vaticano, al comentar la trágica noticia del sacerdote albanés fusilado por bautizar a un niño: " El silencio de la Iglesia - dice - frente a la violencia con que se intenta impedir el derecho a la libertad religiosa no debe ser interpretado como insensibilidad o ignorancia, sino como una dura necesidad para evitar otras más opresivas violencias y más graves situaciones. El silencio viene a constituir así la única forma de protesta contra actos no sólo antirreligiosos, sino antihumanos y anticivilizados"(5).

(1) DIARIO "YA", del 29 de marzo de 1973, pág. 21.

(2) DIARIO "YA", del 1 de abril de 1973, pág. 21.

(3) Diario "YA", del 29 de marzo de 1973, pág. 21.

(4) Diario "YA", del 1 de abril de 1973, pág. 21.

(5) Diario "YA", del 29 de marzo de 1973, pág. 29.

Creemos , sin embargo, que los Estados y Organismos Internacionales deben denunciar tales hechos delictivos, manifestandose abierta y explícitamente en contra de la violación de los derechos naturales y sagrados del hombre, y adoptar, en la medida de lo posible, las medidas represivas y preventivas más eficaces y oportunas en cada caso.

Entre los países que mantienen en su Constitución una posición contraria a la religión en general y a la Iglesia en particular hay que incluir a México. Sin embargo y felizmente la realidad discurre por otros cauces(1).

En su Constitución ordena: " La educación que imparte el Estado Federal, tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez el amor a la Patria y la conciencia de la solaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, el criterio que orientará a dicha educación se mantendrá por completo ajeno a cualquier doctrina religiosa y, basado en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

Las corporaciones religiosas, los ministros de los cultos, las sociedades por acciones que, exclusiva o predominantemente, realicen actividades educativas y las asociaciones o sociedades ligadas con la propaganda de cualquier credo religioso no intervendrán en forma alguna en planteles en que se imparte educación primaria, secundaria y normal y la destinada a obreros y campesinos"(art. 3)(2).

"Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrada y para practicar las ceremonias, devociones o

(1) Se ha venido notando en los últimos años un deseo de entablar relaciones con la Iglesia. Por parte de ésta

Juan XXIII, ha creado Cardenal al Arzobispo de Guadalajara, dic. 1958, y a su vez el Presidente López Mateos ha visitado a Pablo VI: Bilan du Monde, II, 1964, pág. 677 y ss. especialmente 613, cit. por CORRAL: Loc. cit. pág. 606;

(2) Constitución de 1917, con las enmiendas hechas hasta el 11 de octubre de 1966: PEASLEE: Ob. cit. vol. IV, págs 891 y sigs.

actos del culto respectivo, en los templos o en su domicilio particular, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley.

Todo acto religioso del culto público deberá celebrarse precisamente dentro de los templos, los cuales estarán siempre bajo vigilancia de la autoridad"(art. 24).

" Las asociaciones religiosas denominadas iglesias, cualquiera que sea su credo, no podrán en ningún caso tener capacidad para adquirir, poseer, o administrar bienes raíces, ni capitales impuestos sobre ellos; los que tuvieren actualmente, por si o por interpósita persona, entrarán al dominio de la Nación, concediéndose acción particular para denunciar los bienes que se hallaren en tal caso. La prueba de presunciones será bastante para declarar fundada la denuncia. Los templos destinados al culto público son de la propiedad de la Nación representada por el Gobierno Federal, quien determinará los que deben continuar destinados a su objeto. Los obispados, casas curales, seminarios, asilos o colegios de asociaciones religiosas, conventos o cualquier otro edificio que hubiese sido construido o destinado a la administración, propaganda o enseñanza de un culto religioso, pasarán desde luego al dominio directo de la Nación para destinarse exclusivamente a los servicios públicos de la Federación o de los Estados en sus respectivas jurisdicciones. Los templos que en lo sucesivo se erigieren para el culto público, serán propiedad de la Nación (art. 27)".

"Para ser diputado se requieren los siguientes requisitos: No ser ministro de algún culto religioso.
....."(art.55);

"Para ser senador se requieren los mismos requisitos que para ser diputado, excepto el de la edad, que será la de treinta y cinco el día de la elección"(art.58).

"Para ser Presidente, se requiere:
.....

"No pertenece al estado eclesiástico ni ser ministros de algún culto"(art. 82,nº IV).

"Los poderes federales ejercerán la inspección exigida por la

ley en materias relacionadas con el culto y con las forma eclesiásticas externas. Las demás autoridades actuarán como auxiliares de la Federación. El Congreso no puede promulgar leyes para establecer o prohibir cualquier religión.

El matrimonio es un contrato civil.

La ley no podrá reconocer personalidad jurídica a los grupos religiosos llamados iglesias, Los ministros de las sectas religiosas serán consideradas como personas que practican una profesión y estarán sujetos a las leyes promulgadas para tal materia" (art. 130).

IV.- CONCLUSION.

Después de haber examinado la situación jurídica de la libertad religiosa en los textos internacionales y en las constituciones de los diferentes Estados del mundo, es evidente que la libertad religiosa se reconoce solemnemente como derecho humano fundamental en documentos internacionales y se declara como derecho civil en casi todas las constituciones del mundo.

Su efectiva observancia, sin embargo, no se cumple igualmente en todos los Estados.

El sistema de reconocimiento de una religión como la oficial de un Estado ha de hacerse compatible con el derecho de libertad religiosa.

Los Estados confesionales deben evolucionar hacia una confesionalidad abierta, que no obstaculice el disfrute del derecho de libertad religiosa.

Los Estados que adoptan el sistema de separación de Iglesia y Estado habrán de respetar el derecho de libertad religiosa; la postura contraria supone la violación de un derecho fundamental del hombre, reconocido internacionalmente.

Como consecuencia deberán suprimir todas las medidas antirreligiosas todas los Estados comunistas, además de Megico y otras naciones que tengan periodos de persecución religiosa , abierta o solapada, como Birmania, Ceilan y Haití.

Los Estados y las Organizaciones internacionales destinadas a la protección y desarrollo de los derechos del hombre deberán denunciar en cada caso las violaciones del derecho de libertad religiosa, mostrando su repulsa y lógica indignación y adoptando las medidas más eficaces y oportunas contra quienes violan este derecho.

Por lo que se refiere a la Iglesia Católica , en sus relaciones con los Estados , comprobamos que goza de una situación estable en plano de verdadera igualdad, en los Estados de sistema político religioso de separación de Iglesia y Estado con verdadera libertad religiosa(grupo 2º).

Carece de esta libertad en los Estados de sistema de separación hostil(grupo 3) y en los de confesionalidad musulmana, ortodoxa o budista.

En cambio goza de posición especial, debida a la población católica en los Estados católicos, y para asegurar su situación jurídica mantiene relaciones diplomáticas con la casi totalidad de los Estados del mundo.

Así pues, con esta exposición global, creemos haber conseguido el objetivo de este capítulo: mostrar una panorámica bastante exacta de la situación jurídica actual de la libertad religiosa en el mundo.

— SEGUNDA PARTE —

SEGUNDA PARTE

RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LIBER-
TAD RELIGIOSA EN EL ACTUAL ORDE-
NAMIENTO JURIDICO ESPAÑOL

CAPITULO -I -

RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LIBERTAD RELIGIOSA EN LAS ACTUALES DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y CON- CORDATARIAS DE ESPAÑA.

SUMARIO

1. Reconocimiento del derecho de libertad religiosa en las actuales disposiciones constitucionales de España.

1.1. Confesionalidad católica del Estado español. 1.2. La libertad religiosa. 1.3. Problemática y compatibilidad del régimen confesional con el régimen de libertad religiosa.

1.3.1. Problemática de la confesionalidad. 1.3.1.1. Concepto y significado de la confesionalidad. 1.3.1.2. Clases de confesionalidad. 1.3.1.2.1. Confesionalidad explícita. 1.3.1.2.2. Confesionalidad implícita. 1.3.1.2.3. Confesionalidad excluyente. 1.3.1.2.4. Confesionalidad compatible con la libertad de otras religiones. 1.3.1.2.5. Confesionalidad doctrinal. 1.3.1.2.6. Confesionalidad sociológica. 1.3.1.3. La confesionalidad en las declaraciones y convenciones internacionales. 1.3.1.4. La confesionalidad en el Concilio Vaticano II. 1.3.1.5. Actitud del Estado ante la religión. 1.3.1.5.1. El Estado confesional católico. 1.3.1.5.2. El Estado neutro. 1.3.2. Compatibilidad del régimen confesional con el régimen de libertad religiosa. A) Compatibilidad exigida por la libertad religiosa. B) Compatibilidad exigida por el pluralismo religioso. 1.4. La confesionalidad española y su posible revisión. 1.5. La unidad espiritual de España como límite del derecho de libertad religiosa. 2. Reconocimiento del derecho de libertad religiosa en las actuales disposiciones con-

-cordatarias de España. 1. La confesionalidad en el actual Concordato español. 1.1. Posible modificación de la presente situación legal. 2. La libertad religiosa. 3. Revisión del Concordato de 27 de agosto de 1953. I. Necesidad de la revisión 1º Génesis del Concordato de 1953. 2º Consideraciones críticas acerca del Concordato de 1953. 3º El Concordato en la actualidad. II. Forma de llevar a cabo la revisión . 1 Primera solución: Supresión del Concordato. 2. Segunda solución: Sustitución del actual Concordato español de 1953 por otro de las mismas características formales aunque de diverso contenido. 3. Tercera solución: Acuerdos parciales. III. Contenido de la revisión. 1. La confesionalidad del Estado. 2. La libertad de la Iglesia. 2 .1. La libertad de la Iglesia para el nombramiento de cargos eclesiásticos. 2.2. La libertad de la Iglesia en su organización territorial. 2.3. La libertad de la Iglesia en la enseñanza. 2. 4. La libertad de la Iglesia en la predicación de su doctrina . 3. Los privilegios que la Iglesia y el Estado español se reconocen en el actual Concordato de 27 de agosto de 1953: Su renuncia . 3.1. Renuncia de privilegios por parte de la Iglesia. 3.1.1.Privilegio y derecho común. 3.1.2. Privilegio y Estatuto particular. 3.1.3.Privilegio y situación privilegiada. 3.1.4. Privilegio del fuero. 3.1.5. La subvención económica. 3.1.6. Exenciones o bonificaciones fiscales. 3.1.7.Presencia de altas personalidades eclesiásticas en los organismos del Estado. A) En el Consejo de Regencia. B) En el Consejo del Reino. C) En las Cortes Españolas. D) En el Consejo de Estado. 3.2. Renuncia de privilegios por parte del Estado: El privilegio de presentación y el de las preces diarias por el Jefe del Estado. 4. El matrimonio. 4.1. Consideraciones en torno al apartado C del protocolo final del Concordato de 1953. 4.2. Consideraciones en relación con el artículo XXIV del actual Concordato español de 1953. 4.3. Consideraciones en relación con el divorcio. IV. Gestiones llevadas a cabo para la revisión del actual Concordato español de 1953. 1. Aportación del Episcopado español en relación con la revisión del actual Concordato español y futuras negociaciones entre la Santa Sede y el Estado español. 2º Postura del Gobierno español en las relaciones Iglesia Estado.

A) Epoca de Franco. a) Mensaje del Jefe del Estado a los españoles el último Fin de año de 1972. b) Discurso programático del Presidente Arias. c) Nota del Ministerio de Información al reunirse con los periodistas tras el Consejo de Ministros celebrado el 15 de marzo de 1974. d) Dos viejas notas del Gobierno la Conferencia Episcopal. 1º Comunicación del Gobierno a la Conferencia Episcopal Española de 9 de abril de 1969. 2º Respuesta de la Conferencia Episcopal Española al Gobierno, de 4 de julio de 1969. B) Epoca del Rey a) Primer mensaje de la Corona. b) Discurso del Presidente del Gobierno ante las Cortes el 28 de enero de 1976. 3. Primeras gestiones en favor de la revisión. 1º) Comunicación al Papa del Episcopado español de su voluntad de renunciar a todos los privilegios. 2º) Carta del Papa al Jefe del Estado. 3º) Respuesta del Jefe del Estado al Papa. 4º) Comienzo de las conversaciones para la revisión . 4. Anteproyecto Casaroli- Garrigues. 4.1. Texto íntegro del anteproyecto. 5. Anteproyecto Ministerio de Justicia. 6. Simples contactos previos a las conversaciones Casaroli - López Rodó - en Madrid. 1º Entrevista López Bravo - Pablo VI el 12 de enero de 1973. 2º Primer coloquio Casaroli-López Rodó en Helsinki. 3º Carta de López Rodó a la Secretaría de Estado señalando las tres condiciones previas del Gobierno a toda negociación. 4. Visita a Roma del presidente y vicepresidente de la Conferencia Episcopal para aunar las posturas de la Secretaría del Estado y del episcopado español. 5. Respuesta del Cardenal Villot al ministro español recogiendo los puntos que para la Santa Sede y para el episcopado español son imprescindibles en la negociación. 7. Conversaciones Casaroli - López Rodó en Madrid. 8. Comienzo oficial de la nueva negociación concordataria: Conversaciones Casaroli - Cortina en Madrid. 8.1. Declaraciones en Roma de monseñor Casaroli antes de emprender viaje a Madrid. 8.2. Primeras declaraciones en Madrid. 8.3. Jornada del miércoles, día 5. 8.4. Discurso del ministro de asuntos exteriores. 8.5. Discurso de monseñor Casaroli. 8.6. Comunicado conjunto. 8.7. Últimas declaraciones en Barajas.

SUMARIO- CAPITULO I - Cont.

9. Conversaciones Casaroli - Cortina en Roma. 9.1. Texto del comunicado conjunto. 10. Almuerzo de trabajo entre los más destacados representatntes de la Iglesia y el Estado español el día 26 de enero de 1976 en Madrid. 11. Visita a la Santa Sede del ministro de Asuntos Exteriores señor Areilza, durante los días 12 y 13 de abril de 1976.

SEGUNDA PARTE

RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LIBERTAD RELIGIOSA EN EL ACTUAL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL.

CAPITULO - I

RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LIBERTAD RELIGIOSA EN LAS ACTUALES DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y CONCORDATARIAS DE ESPAÑA.

1.- Reconocimiento del derecho de libertad religiosa en las actuales disposiciones constitucionales de España.

Al intentar analizar el actual ordenamiento jurídico español relativo al derecho de libertad religiosa, en su grado supremo, el constitucional, nos encontramos con los siguientes principios: el de confesionalidad católica del Estado y el de libertad religiosa.

1. 1. Confesionalidad católica del Estado español.

El primer principio constitucional que preside la regulación de la posición del Estado español para con la religión es el de confesionalidad católica del Estado.

No se trata, ciertamente, de la imposición de la religión católica por el Estado a todos los españoles. "La autoridad pública comete un abuso al imponer a los ciudadanos por la violencia, el terror, u otros recursos la profesión o el abandono de cualquier religión, o el impedir que alguien ingrese en una comunidad religiosa o la abandone"(1).

(1) Vaticano II: Declaración "Dignitatis humanae" sobre libertad religiosa, n. 6, en ob. cit. pág. 773.

La fe no se puede imponer, ni menos por el Estado, sería caer en el cesaropapismo(1).

Se trata de una confesionalidad católica del Estado, cuyo contenido lo forman los siguientes elementos: reconocimiento de la religión católica como la del Estado, protección especial de la Iglesia y religión católica en relación con las demás religiones existentes en su esfera y compromiso del Estado de inspirarse, en sus actuaciones, en la doctrina y moral católica.

En efecto, las Leyes Fundamentales de la Nación española disponen:

1ª) Fuero de los Españoles: "La profesión y práctica de la religión católica, que es la del Estado español, gozará de la protección oficial"(2).

2ª) Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado: "España como unidad política, es un Estado católico, social y representativo, que de acuerdo con su tradición, se declara constituido en Reino"(3).

"Para ejercer la Jefatura del Estado como Rey o Regente se requerirá ser varón y español, haber cumplido la edad de treinta años, profesar la religión católica, poseer las cualidades necesarias para el desempeño de su alta misión y jurar las Leyes fundamentales, así como lealtad a los Principios que informan el Movimiento Nacional. El mismo juramento habrá de prestar el sucesor después de cumplir la edad de treinta años"(4).

3ª) Ley de Principios del Movimiento Nacional: "La nación española considera como timbre de honor el acatamiento a la Ley de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, única verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional, que inspirará su legislación"(5).

(1) CORRAL: Artículo cit. en Vaticano II - La libertad religiosa cit. pág. 612; Teoría de las relaciones de Iglesia y Estado, en Relaciones de la Iglesia y el Estado, Madrid, 1976, págs. 25-26.

(2) Fuero de los Españoles de 17 de julio de 1945, art. 6º modificado por la Ley Orgánica del Estado de 10 de enero de 1967, vid. en Leyes Fundamentales del Reino, Biblioteca Oficial Legislativa) Madrid, 1973, pág. 11.

(3) Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 26 de julio de 1947, modificada por la Ley Orgánica del Estado de 1967, art. 1º vid. en Colección legislativa cit. pág. 65

(4) Ibidem.

(6) Ley de Principios del Movimiento Nacional de 17 de mayo de 1958, Principio II, en Colección legislativa cit. pág. 5.

"En realidad, el término confesionalidad, afirma monseñor YANES ALVAREZ, ni siquiera a nivel teórico está claro"(1).

Sin embargo, normalmente, se entiende que un Estado es confesional cuando reconoce y acepta determinada religión como la única verdadera. "Un Estado confesionalmente católico es aquel que reconoce a Cristo y a su Iglesia como la única verdadera religión"(2).

Ahora bien, existe una diferencia esencial entre la confesionalidad católica y acatólica del Estado.

La expresión "Estado confesional" puede tener, como señala MARTIN MARTINEZ(3), un alcance muy distinto según se trate de un concepto católico o acatólico de la relación entre lo político y lo religioso.

"En la confesionalidad católica del Estado, como advierte CORRAL, es principio esencial el dualismo: dos Sociedades Perfectas (autónomas, independientes) dos Potestades Supremas en su orden, dos ordenes: eclesial y estatal; Dios y Cesar.

En la confesionalidad acatólica es principio esencial el monismo: única Sociedad y única Potestad: la política; único orden, el estatal, sólo Cesar"(4).

"En la tradicional concepción no cristiana, afirma MARTIN MARTINEZ, - en el concepto musulmán o judaico, por ejemplo - lo religioso y lo político, más que unidos, se hallan confundidos.

En la visión cristiana, pero acatólica, lo político y religioso aparecen, con frecuencia, íntimamente unidos, de manera que lo religioso queda bajo la autoridad del poder político. Tales son las actitudes anglicana luterana u ortodoxa.

En el concepto católico, lo político y lo religioso, corres-

(1) YANES ALVAREZ: Claridad, independencia y cooperación, en "YA" del día 30 de marzo de 1937, pág. 22.

(2) JIMENEZ URRESTI: Estado e Iglesia, Vitoria, 1958, pág. 402.

(3) MARTIN MARTINEZ(Isidoro): Libertad religiosa y Estado católico después del Concilio Vaticano II, en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid, 1969, Vol. XIII, pág. 48.

(4) CORRAL: Estado e Iglesia según el Vaticano II, en Relaciones de la Iglesia y del Estado cit. pág. 43.

-penden a dos esferas de poder perfectamente distintas y con específica competencia"(1).

1. 3. 1. 2. Clases de confesionalidad.

Caben ciertamente muchas clasificaciones de la confesionalidad de un Estado. Sin embargo, nos parece muy acertada la que hace el profesor MARTINEZ DE CARVAJAL(2), al distinguir los siguientes tipos de confesionalidad: confesionalidad explícita o implícita; compatible o no con la libertad de otras religiones; y doctrinal o sociológica.

1. 3. 1. 2. 1. Confesionalidad explícita.

La confesionalidad es explícita cuando " el Estado - en un concordato o en sus leyes fundamentales - reconoce expresamente a una determinada religión como la propia y oficial del mismo Estado o de la nación(3). Y suele establecer un trato de favor para la religión oficial e inspirar en esa ideología religiosa sus leyes e instituciones.

1. 3.1.2. 2. Confesionalidad implícita.

Será implícita la confesionalidad cuando la legislación estatal responda fundamentalmente a una determinada ideología religiosa, aunque no haya una formal y expresa declaración de confesionalidad(4).

1.3. 1. 2. 3. Confesionalidad excluyente.

Se considera excluyente la confesionalidad de un Estado cuan-

(1) MARTIN MARTINEZ: Ob. cit. pág.s. 48-49.

(2) MARTINEZ DE CARVAJAL: Ob. cit. pág. 393.

(3) Ibidem.

(4) Ibidem.

-do de tal forma se protege la religión oficial que se prohíbe
- en mayor o menor grado - el ejercicio de otras religiones(1).

1.3.1.2.4. Confesionalidad compatible con la libertad de otras religiones:

Se da esta clase de confesionalidad cuando realmente la confesionalidad del Estado se armoniza con la plena libertad de las otras religiones(2).

1.3.1.2.5. Confesionalidad doctrinal.

Existe esta confesionalidad cuando "el Estado toma como propia una determinada religión por considerarla la única verdadera o la más perfecta de todas, Es la que se funda en un juicio de valor estrictamente religioso"(3).

1.3.1.2.6. Confesionalidad sociológica.

Se puede considerar sociológica la confesionalidad cuando un Estado hace propia una determinada religión, **no** fundándose en un juicio de valor, sino en una realidad sociológica, "De forma semejante al reconocimiento oficial que puede hacerse, de un idioma no por su perfección o valor lingüístico, sino por ser el propio de todos o de la mayoría de los ciudadanos. Así también una religión puede inspirar las instituciones y las leyes del país, recibir un trato de favor, e incluso ser declarada oficial del Estado, por ser la profesada por la totalidad o mayoría de los ciudadanos y por razones históricas o culturales"(4).

(1) MARTINEZ DE CARVAJAL: Ob. cit. págs. 493-494.

(2) Ibidem, pág. 494.

(3) Ibidem.

(4) Ibidem.

1.3.1.3. La confesionalidad en las declaraciones y convenciones internacionales.

Ni en la Declaración Universal de los derechos del hombre, (1), ni en la Convención europea para la tutela de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales(2), ni en el Pacto internacional sobre los derechos civiles y políticos(3), ni en el Proyecto de convención para la eliminación de todas las formas de intolerancia religiosa (4), encontramos precepto alguno que de forma expresa se pronuncie en favor o en contra de la confesionalidad. "Nada se dice expresamente, señala MARTINEZ DE CARVAJAL, ni en las declaraciones ni en los pactos, en favor ni en contra de la confesionalidad. Se ha querido, con ese silencio, respetar las diversas posturas adoptadas en las constituciones, siempre que queden a salvo la libertad religiosa y la igualdad de los ciudadanos ante la ley, sin discriminación fundada en motivos religiosos. .

Cuando el problema se ha querido afrontar con más amplitud ha sido para acabar diciendo que una cierta preferencia consagrada legalmente, en favor de una confesión religiosa, no implica necesariamente una "discriminación, ni por lo tanto, una violación del principio de libertad religiosa"(5). Así sucede en el Proyecto de la convención para la eliminación de todas las formas de intolerancia religiosa(6).

En efecto, el Proyecto en el art. 1º c, dice de forma expresa: "Ni el establecimiento de una religión, ni el reconocimiento de una religión o creencia por un Estado, ni la separación de la Iglesia y el Estado, se considerarán por si

(1) Vid.: Art. 2º y 18º, en TRUYOL: Ob. cit. págs 64y 66.

(2) Vid.: art. 9 en TRUYOL: Ob. cit. pág. 115

(3) Ibidem, art. 18, pág. 89

(4) Art. 1º al 12 en RUPÉREZ: Ob. cit. pág. 177 y ss.

(5) MARTINEZ DE CARVAJAL: Ob. cit. pág. 491.

(6) BUGAN(Andrej):Ob. cit. págs. 287-302; RUPÉREZ:Ob. cit. pág. 177 y 181.

mismas como medidas discriminatorias"(1).

En su art. 9 establece: "Las Altas Partes Contratantes se obligan a no hacer distinción entre cualquier religión o creencia y sus adeptos o instituciones, ni darles preferencia, en el caso de otorgar subsidios, exenciones o subvenciones para la conservación de edificios religiosos reconocidos como monumentos de valor histórico o artístico.

Cualquier distinción o preferencia establecida por la ley, por razón de interés público al respecto, no se considerará discriminatoria con arreglo a este convenio".

El primer parrafo hace afirmaciones que parecen contrarias al Estado confesional, pero esta postura queda mitigada, como advierte MARTINEZ DE CARVAJAL, en el parrafo segundo, hasta admitir practicamente cierta confesionalidad estatal"(2).

1.3.1.4. La confesionalidad en el Concilio Vaticano II.

La postura del Concilio ante la confesionalidad del Estado la encontramos reflejada en la Declaración "Dignitatis Humanae", sobre libertad religiosa, en los siguientes términos: "Además, los actos religiosos con que los hombres por íntima convicción, privada y publicamente, se ponen en relación con Dios, trascienden por su naturaleza el orden terrestre y temporal. Por consiguiente la autoridad civil, cuyo fin propio es velar por el bien común temporal, debe reconocer la vida religiosa de los ciudadanos y favorecerla; pero hay que afirmar que excede sus límites si pretende dirigir o impedir los actos religiosos"(3).

El Concilio, como señala CORRAL (4), no usa el término confesional, dado su concepto ambiguo en la terminología constitucional.

(1) BUGAN: Ob. cit. págs. 287-302; RUPEREZ: Ob. cit. págs. 177 y 181.

(2) MARTINEZ DE CARVAJAL: Ob. cit. pág. 491.

(3) Decl. L. R. nº 3 párrafo 6º, en Ob. cit. pág. 770.

(4) CORRAL: Ob. cit. pág. 399.

La doctrina conciliar reflejada en la Declaración, parece ciertamente contraria a una confesionalidad fundada en un juicio de valor; pues niega la competencia del Estado en materia religiosa. Incompetencia que como advierte MARTINEZ DE CARVAJAL(1), parece presuponer la de emitir un juicio valorativo acerca de cual sea la religión verdadera o revelada por Dios.

El nº 6 del mismo documento pontificio dice: " Si en atención a peculiares circunstancias del pueblo, se otorga a una comunidad religiosa un especial reconocimiento civil en la ordenación jurídica de la sociedad, es necesario que a la vez se reconozca y respete el derecho a la libertad, en materia religiosa, de todos los ciudadanos y comunidades religiosas"(2).

De este segundo texto parece deducirse, que la situación normal, según la doctrina conciliar, es la del Estado neutro en materia religiosa y lo excepcional y realmente tolerable Estado confesional, fundado en determinadas circunstancias históricas, sociológicas, culturales etc. Solución que por otra parte quedaría admitida siempre que quedara a salvo la libertad y los derechos de los que profesen otra religión.

"La confesionalidad en el Concilio, advierte RUIZ GIMENEZ, se estableció como excepción mientras que la regla es la libertad"(3).

"El especial reconocimiento civil, señala LOPEZ, es una situación excepcional. La norma general es la de libertad religiosa(4).

"El Concilio, afirma BURGOS, particularmente en la declaración sobre la libertad religiosa, parte del supuesto de que la tesis o regla general es el reconocimiento de la libertad a las personas, grupos u organizaciones y la excepción, el régimen de confesionalidad o de reconocimiento especial a un grupo concre-

(1) MARTINEZ DE CARVAJAL: Ob. cit. pág. 492.

(2) Decl L. R. nº 6, en Ob. cit. pag. 772.

(3) RUIZ GIMENEZ: Relaciones Iglesia -Estado en el momento actual español, en Boletín de A. C. N. D. P. Madrid, 1970, pág. 16.

(4) LOPEZ (A): La Iglesia y el Estado en Rev. Mundo, 23-I-71, pág. 17.

" El pueblo español unido en un orden de Derecho , informado por los postulados de autoridad, libertad y servicio constituye el Estado Nacional. Su forma política es, dentro de los principios inmutables del Movimiento Nacional y de cuanto determinan la Ley de Sucesión y demás Leyes Fundamentales, la Monarquía tradicional católica, social y representativa"(1).

De los preceptos de rango constitucional, que acabamos de examinar, se deduce claramente una estructuración del Estado español que responde plenamente a la idea ya contenido de Estado confesional católico, cuyos elementos ya hemos señalado.

1. 2. La libertad religiosa.

El segundo principio constitucional que regula la posición del Estado español para con la religión es el de libertad religiosa.

El principio fundamental es el que declara el artículo 6º del Fuero de los Españoles, párrafo segundo, que en su nueva redacción vigente establece:

"El Estado asumirá la protección de la libertad religiosa, que será garantizada por una eficaz tutela jurídica que, a la vez salvaguarde la moral y el orden público"(2).

Respecto a esta nueva redacción del párrafo segundo del artículo 6º del Fuero de los Españoles hay que señalar que responde a las necesidades de reforma del Vaticano II sobre libertad religiosa.

Tal reforma venía constitucionalmente impuesta por el principio II del Movimiento Nacional ya transcrito. Así se reconoce explícitamente en el Preámbulo de la Ley Orgánica del Estado de 10 de enero de 1967 que expresamente dice: "... la Declaración Conciliar sobre la libertad religiosa, promulgada el siete de diciembre de mil novecientos sesenta y cinco, exige el reconocimiento explícito de este derecho y la consiguiente modificación del artículo sexto del Fuero de los Españoles, en consonancia con el segundo

(1) Ley de Principios del Movimiento Nacional cit., en colección legislativa cit. Principio VII, pág. 6.

(2) Fuero de los Españoles cit. artículo 6º en Colecc. cit, p. cit.

de los Principios Fundamentales del Movimiento, según el cual la doctrina de la Iglesia habrá de inspirar nuestra legislación"(1).

Queda, así, claro, por los textos examinados, que tanto el principio de confesionalidad como el de libertad religiosa se reconocen de forma expresa en el actual ordenamiento jurídico constitucional de España.

1. 3. Problemática y compatibilidad del régimen confesional con el régimen de libertad religiosa.

1. 3. 1. Problemática de la confesionalidad.

El tema de la confesionalidad es de los más delicados y difíciles de tratar. Lo es especialmente por la confusión conceptual que existe en torno al término confesional. Por ello, y para su mejor comprensión, creemos conveniente dividir su estudio en los siguientes apartados:

1. 3. 1. 1. Concepto y significado de la confesionalidad.

La palabra confesionalidad constituye un término sumamente equívoco, ya que responde, como señala GIMENEZ Y MARTINEZ DE CARVAJAL (1), a conceptos y realidades muy diversas. "Es una de esas palabras que se usa con los contenidos más diversos y, en muchas ocasiones, confundiendo el concepto en sí con alguna de sus realizaciones concretas. Por eso no es extraño que las discusiones acerca de la confesionalidad sean a veces puramente verbales, o que se mezclen conceptos generales con realizaciones prácticas, que no siempre se derivan necesariamente de la confesionalidad en cuanto tal"(3)

(1) Boletín Oficial del Estado de 11 de enero de 1967.

(2) GIMENEZ Y MARTINEZ DE CARVAJAL: Temática general de la revisión del Concordato español, en "La Institución concordataria en la actualidad", Salamanca, 1973, pág. 493; y en "Relaciones de la Iglesia y el Estado, Madrid, 1976, págs. 366-367.

(3) Ibidem, pag. 489 y 366-367, respectivamente.

-to"(1).

Cabría, ciertamente, afirmar con MARTIN MARTINEZ " que el Concilio Vaticano II considera legítimo el Estado aconfesional y el Estado confesional, que reconocen y favorecen la vida religiosa de los ciudadanos sin pretender dirigir o impedir los actos religiosos; lo que rechaza es el Estado que podríamos llamar anticonfesional"(2), ya que " tanto más se obra contra la voluntad de Dios y contra los sagrados derechos de la persona y de la familia humana, si la fuerza se aplica bajo cualquier forma con el fin de eliminar o cohibir la religión, ya sea en todo el género humano, ya en alguna región, o en un determinado grupo"(3). Pues ciertamente, "no faltan regímenes en los que, si bien su Constitución reconoce la libertad de culto religioso, sin embargo, las mismas autoridades públicas se empeñan en apartar a los ciudadanos de profesar la religión y en hacer extremadamente difícil e insegura la vida de las comunidades religiosas"(4).

Rechaza también el Concilio el especial reconocimiento civil a la irreligión: " se debe rechazar la infausta doctrina que intenta edificar a la sociedad prescindiendo en absoluto de la religión y que ataca o destruye la libertad religiosa de los ciudadanos"(5).

Concluiremos, pues, señalando con MARTINEZ DE CARVAJAL, que " la Iglesia se manifiesta, en el conjunto de todos los documentos conciliares, más bien favorable a un Estado que, siendo respetuoso y garantizando y protegiendo los valores religiosos en general, no adopte una religión determinada como la propia y oficial"(6).

(1) BURGOS(José María): Gran mayoría de opiniones contra la confesionalidad del Estado, en Vida Nueva, 13-II-71, pág. 25.

(2) MARTIN MARTINEZ: Ob. cit. pág. 48.

(3) Dcl. Dignitatis Humanae, nº 6, en Ob. cit. pág. 772.

(4) Ibidem, nº 15.

(5) Lumen Gentium, nº 36, en Ob. cit. pág. 161.

(6) MARTINEZ DE CARVAJAL: Ob. cit. pág. 493.

1.3.1.5. Actitud del Estado ante la religión.

El Estado es y tiene su razón de ser en el hombre, en la perfección y en el desarrollo de los valores que integran su personalidad humana.

La finalidad natural del Estado es el bien común . Pero "el concepto de bien común abarca todo un conjunto de condiciones sociales que permiten a los ciudadanos el desarrollo expedito y pleno de su propia perfección"(1).

" La finalidad del Estado consiste, pues, como señala MAIRENA VALDAYO, en crear las condiciones básicas fundamentales en las que sea posible el ejercicio de los valores integrativos de la persona humana en pro de la consecución consciente y libre, por parte del individuo, de su perfección total o pleno desarrollo" (2).

Ahora bien para que el Estado cumpla con su misión debe aceptar al hombre como el hombre es y se le presenta; es decir como ser naturalmente religioso. "Esta religiosidad está postulada por la misma naturaleza del alma racional, que emerge de ella como una propiedad por la fuerza misma de su capacidad intelectual y amorosa frente a su Primera Causa"(3).

"La íntima inclinación humana hacia la religión resulta prueba consciente, dice JUAN XXIII, de que el hombre ha sido en realidad creado por Dios y tiende irrevocablemente hacia El"(4).

Así pues, "la religión se nos presenta como un verdadero valor, como un valor natural que radica en las mismas entrañas de nuestra naturaleza racional, no sólo en cuanto a nuestra religación en el ser, sino como una propiedad del hombre, que está dotado de un alma espiritual por un acto propio y exclusivo de Dios, y está dotado, juntamente con esto, de una inteli-

(1) Gaudium et Spes, nº 26; JUAN XXIII: Enc. Mater et Magistra, en "Comentarios a la Mater et Magistra" (B.A.C.) Madrid, 1962, pág. 65, nº 28.

(2) MAIRENA VALDAYO: Estado y Religión, Salamanca, 1968, p. 43.

(3) TODOLI (J.): Filosofía de la Religión, Madrid, 1959 pág. 215.

(4) Juan XXIII, en Ob. cit. págs. 86-88 n. 214-217.

- gencia para conocerle y ~~de~~ una voluntad para amarle, es decir de la religiosidad. Solo en el hombre racional y volitivo se da y puede darse esta religiosidad... La religión, en este sentido ontológico y axiológico en que nos movemos ahora, es decir no como virtud moral, sino como elemento del ser humano, es una propiedad del mismo. Es, por lo tanto, un valor, una perfección, que, como todas las perfecciones específicas, hemos de reducir a la causa misma del ser del hombre"(1).

Hasta tal punto es inherente la religiosidad natural al hombre, que puede muy bien afirmarse con ZUBIRI: "El ateísmo no es posible sin Dios. El ateísmo (o la irreligiosidad) sólo es posible en el ámbito de la deidad abierto por la religión"(2).

"La actividad religiosa del hombre, individual y asociada, en el seno de la comunidad política es, como indica MARTIN MARTINEZ, un hecho constante y universal. Hoy como ayer, en todos los pueblos la fe religiosa - o si se quiere, la actitud antirreligiosa - inspira y configura la vida personal y colectiva"(3). "El hombre, como señala el Concilio, atraído incesantemente por el espíritu de Dios, nunca será totalmente indiferente acerca del problema religioso, como lo demuestra no sólo la experiencia de pasados siglos, sino la de nuestro tiempo con muchísimos testimonios. Pues el hombre deseará siempre saber, al menos de una manera confusa, cuál es el significado de su vida, de su actividad y de su muerte"(4).

"A pesar de la innegable secularización de amplias zonas de la sociedad contemporánea, la vivencia religiosa constituye un fenómeno insoslayable, que el poder político no puede desconocer, aunque su actitud ofrezca una amplia gama de tonos, que va desde la plena aceptación hasta la oposición más violenta"(5).

(1) TODOLI(J.): Ob. cit. pág. 246.

(2) ZUBIRI(J.): Naturaleza, Historia, Dios (Madrid, 1950) pág. 462.

(3) MARTIN MARTINEZ: El fenómeno religioso en España, Madrid, 1972, - Presentación pág. 14.

(4) Gaudium et spes, nº 41

(5) MARTIN MARTINEZ: Ob. y pag. cit.

"Aquellos que afirman que el Estado en cuanto organización en el Ordenamiento Jurídico, puede desentenderse del valor religioso, siendo totalmente agnóstico en lo que a la religión natural se refiere, ignoran, por una parte, la naturaleza y finalidad natural del Estado, y por otra el ser religioso del hombre"(1)

Consecuentemente el Estado no puede desentenderse del valor religioso. Y si el hombre, razón y causa del existir histórico de la sociedad civil o Estado, se presenta con una religiosidad positiva y determinada y como miembro de una sociedad religiosa en la que se concreta comunitariamente dicha religión, el Estado, instrumento del desarrollo y perfección del hombre, no puede menos de aceptarlo y adaptarse a las exigencias provenientes de esta cualidad o valor de sus miembros"(2).

Ahora bien, el Estado no podrá ser arbitro sobre la verdad o falsedad de una determinada religión. Es un campo que cae fuera de su competencia. "La religión, respecto al Estado, como señala MAIRENA, no es más que un hecho sociológico, orientado por un valor de sus ciudadanos y que cae "sub ratione iustitiae" bajo el propio Ordenamiento Jurídico"(3).

La competencia del Estado, como ya señala San Juan CRISOSTOMO, se refiere al orden público temporal: "La autoridad civil procura el orden, la paz y las otras prestaciones, la pública administración, el servicio militar, el cuidado de los intereses comunes"(4). La autoridad civil es una autoridad laica cuya competencia se limita a los asuntos temporales y terrestres de los seres humanos, que deben vivir juntos en justicia, en paz y en libertad. La autoridad civil actuaría, por tanto, ultra vires (más allá de su propio fin si intentase juzgar si una religión es verdadera y otra falsa. Evidentemente, la autori-

(1) MAIRENA: Ob. cit. pág. 55.

(2) MAIRENA: Ob. cit. pág. 87.

(3) Ibidem, pág. 106.

(4) CRISOSTOMO (S.J.): In Epist. ad Rom., Vid. en DIEZ ALEGRIA: La libertad religiosa Barcelona, 1965, pág. 59-60.

-dad civil actuaría más ultra vires si impusiera a los ciudadanos, por medio de una ley, un juicio teológico cualquiera, es decir, si estableciera legalmente que una religión particular - digamos la católica debe ser la religión de la comunidad nacional"(1).

El principio de justicia objetiva tiene aplicación definitiva, como señala MAIRENA(2), cuando se quiere dar una reglamentación jurídica al valor religioso en el ámbito del Ordenamiento Jurídico Nacional.

"El criterio que sirva de línea de máxima se ha de buscar y encontrar en un principio que intente conseguir la igualdad jurídica de todos los ciudadanos"(3).

1.3.1.5.1. El Estado confesional católico.

Es necesario señalar que "la posible confesionalidad católica de un Estado no puede tener nunca el carácter de un acto sobrenatural de fe, del que el Estado, como persona moral y sujeto jurídico es radicalmente incapaz..., ni puede tener tampoco el valor especulativo de un acto de ciencia, pues el Estado, como tal, no tiene autoridad en el orden especulativo"(4).

El Estado no puede emitir un juicio de valor en materia religiosa. "No puede, al menos determinar cual es la religión verdadera. El Estado - y menos el Estado contemporáneo técnico administrativo - no puede hacer un acto de fe. Todo acto de adhesión a la religión católica, de carácter sobrenatural, supone, sobre una base racional, un salto más allá de lo científico y experimental. Y eso trasciende a la naturaleza y capacidad del Estado. Lo más que puede hacer es constatar un hecho objetivo, ra-

(1) COURTNEY MURRAY: "En torno a la libertad religiosa", en "La libertad religiosa - Una solución para todos, Madrid, 1964, pág. 51.

(2) MAIRENA: Ob. cit. pág. 112.

(3) Ibidem, pág. 113.

(4) DIEZ ALEGRIA: La libertad religiosa, Barcelona, 1965, p. 96-97.

-cional y sociológico - la adhesión a dicha religión de todos o la mayoría de los ciudadanos - y actuar en consecuencia. Pero no puede fundamentar su confesionalidad en la afirmación doctrinal de que la religión católica es la única verdadera"(1).

"El máximo de confesionalidad a la que podría llegarse, sería un reconocimiento de los derechos de la Iglesia verdadera a modo y bajo manera de una disposición pragmático-jurídica con base en la realidad de un Estado de católicos"(2).

"En todo caso , afirma DIEZ ALEGRIA? no parece que tal género de confesionalidad sea exigido por el derecho natural ni por el derecho divino"(3).

En realidad hay que afirmar que "la actitud del Estado ante la religión tiene que ser positiva. No en el sentido de que esté obligado a formular un juicio de valor sobre la religión decidiendo de por sí cual es la verdadera o la falsa, cosa que evidentemente escapa a su competencia(4). Sino mediante leyes justas y otros medios aptos, facilitar condiciones propicias para fomentar la vida religiosa a fin de que los ciudadanos puedan realmente ejercer los derechos de religión y cumplir las obligaciones de la misma y la sociedad misma goce así de los bienes de la justicia y de la paz que dimanen de la fidelidad de los hombres para con Dios"(5). "No se trata de otorgar privilegios a una iglesia particular sino de reconocerle a todas las personas y sociedades religiosas sus derechos naturales y ayudar a todos, con equidad, a realizarlos"(6).

Por todo ello creemos que la única forma de confesionalidad posible sería la fundada en un puro reconocimiento sociológico de una mayoría católica y que "respete el derecho a la li-

(1) MARTINEZ CARVAJAL: Ob. cit. pág. 494.

(2) RUPEREZ: Ob. cit. pág. 79.

(3) DIEZ ALEGRIA: La libertad religiosa, en "La libertad religiosa , una solución para todos" cit. pag. 159 y 160.

(4) BURGOS(José María):Art. cit. en Revista y pág.cit.

(5) Decl. L. R. nº 6, párrafo 2º.

(6)BURGOS: Loc. cit.

-bertad en materia religiosa de todos los ciudadanos y comunidades religiosas"(1).

1.3.1. 5.2. El Estado Neutro.

Dos aspectos hay que tener en cuenta al estudiar el Estado Neutro: Su posición en relación con la religión natural y su posición en relación con la religión positiva.

En relación a la religión natural el Estado Neutro no puede darse(1). "El valor religioso es algo tan intrínseco a la colectividad políticamente organizada, que no puede concebirse ni lógica ni metafísicamente un Estado Arreligioso". Naturalmente, se habla de lo que debe ser no en el orden de las excepciones debidas a la imposición y a la fuerza que por hipótesis impedirían exterior y comunitariamente las manifestaciones de la religiosidad interna"(2).

Referente al concepto de Estado Neutro en relación a la religión positiva, lo primero que es necesario aclarar, como advierte MAIRENA(3) es su distinción con el Estado Agnóstico respecto a todo valor religioso.

El Estado Agnóstico es contradictorio, absurdo y antijurídico.

"El pueblo o nación está integrado como comunidad, por las personas singulares que movidas por la cualidad social de su naturaleza racional se unen en sociedad para procurarse la suficiencia de medios en orden al total y completo desarrollo de todos los valores humanos.

Entre los valores humanos el fundamental y básico es el religioso, que históricamente en nuestros días queda expresado en las diversas confesiones o religiones en las que los individuos libremente se asocian para desarrollar el valor religioso con todas

(1) Decl. Dignitatis Humanae" sobre L. R. n.º 6, párrafo 3º.

(2) MAIRENA: Ob. cit. pág. 126.

(3) Ibidem, p.º 1.

las exigencias inherentes"(1).

Por todo, ello el concepto de Estado Agnóstico repugna jurídicamente, ya que supone el desconocimiento y desvalorización de las realidades sociológicas que integran la comunidad nacional(2).

El Estado Agnóstico, como indica FERNANDEZ CASTAÑO, "es aquel que desconoce la religión y la sociedad que la representa. Es indiferente ante una u otra confesión religiosa y conforma su conducta con el más absoluto ateísmo"(3).

"Cuando este Estado se establece en virtud de los prejuicios antirreligiosos y anticlericales de los gobernantes, el Estado Agnóstico va contra la misma realidad de las cosas y se crea un concepto y realidad de Estado que no tiene más consistencia que la fuerza y la coacción que lo mantiene tiránicamente contra la voluntad libre de los ciudadanos.

Unicamente se podría justificar y admitir el Estado Agnóstico en el caso hipotético de una sociedad, comunidad, nación o pueblo, totalmente arreligioso y desposeído del concepto de Dios. La experiencia actual de las naciones oprimidas por el Comunismo Ateo y la historia de todos los pueblos contradicen ambas cosas"(4).

Finalmente, hemos de señalar con MAIRENA(5), que el Estado Agnóstico ha sido estudiado y condenado por todos los últimos Pontífices de León XIII a Pablo VI, como una violación de los derechos de la persona humana cuyos valores fundamentales han de encontrar en el Estado las condiciones sociológicas y jurídicas necesarias a su desarrollo y perfeccionamiento(6).

(1) MAIRENA: Ob. cit. pág. 144.

(2) Ibidem, pág. 145.

(3) FERNANDEZ CASTAÑO(J.M.): Relaciones entre la Iglesia y el Estado, Roma 1960, Cap.V, págs.95-96, n 131, cit. por Mairena: Ob. cit. pág. 145.

(4) MAIRENA: Ob. pág. 145.

(5) Ibidem.

(6) PABLO VI: Enc. Ecclesiam Suam, en A.A.S 56(1964); MAIRENA: Ob. cit. pág. 145.

El Estado Neutro, en cambio, conserva, como afirma MAIRENA(1), un respeto al valor religioso, que reconoce como fundamental en la vida de los individuos, procurando la creación de aquellas condiciones sociológicas y jurídicas en las que este valor pueda desarrollarse y desenvolverse, fuera de toda coacción e intromisión de su poder político en el campo reservado a la religión.

"El Estado Neutro, en la Carta Constitucional, que da la fisonomía político-social, establece como principio fundamental, base de su legislación en lo que a materia religiosa se refiere, el respeto y apoyo al valor religioso.

El Estado Neutro permitirá y reconocerá como supremo principio del Derecho Natural la libre asociación de los ciudadanos por finalidades de tipo religioso dejando a la iniciativa de los mismos su interna estructuración y régimen, siempre, naturalmente, que no obstan al bien común de la nación en su sentido pleno.

El régimen jurídico del valor religioso, en el Estado Neutro se caracterizará por la más amplia libertad asociativa-religiosa.

Habrà de reconocer que el valor **religioso** es de trascendental y vital importancia para sus ciudadanos y que éstos, respecto a aquél, conservan su plena autodeterminación en cuanto a la realización práctica de la opción religiosa libre e individual, y el derecho natural de asociación por motivo de finalidades religiosas"(2).

Al Estado Neutro le corresponde por tanto: " Crear las condiciones sociológicas aptas para el desarrollo del valor religioso, expresado y manifestado en el pluralismo de sectas y comunidades religiosas, que es como historicamente se da y se ofrece el valor religioso en la realidad de sus ciudadanos. . . .

Ordenar externamente las relaciones y acciones sociológicas, que provocan este pluralismo religioso, al objeto de que la paz y convivencia social sean conservadas y respetadas entre los adeptos de las diversas confesiones o comunidades religiosas, permitiendo una cooperación eficaz y solidaria en los problemas, económicos, civiles, sociales etc., de la Nación.

(1) MAIRENA: Ob. cit. pág. 146

(2) Ibidem, págs. 146-147.

La declaración programática de su incompetencia teológica en orden a la valoración de la verdad o falsedad contenida en la religión o comunidad religiosa. Excepción hecha, en el caso de que el contenido religioso de las Confesiones se opusieran a las normas más elementales de moralidad y respeto a los derechos naturales de la persona humana, evidentes por sí mismas.

La defensa del valor religioso contra toda forma de irreligiosidad o ateísmo que intente destruir este valor humano"(1).

Proporcionar la facilidad más absoluta para el ejercicio del culto privado y público interior y exterior a los templos.

Castigar las injurias y ultrajes inferidos contra las confesiones religiosas y sus ministros, con puniciones determinadas en el Código Penal como insultos inferidos a un sentimiento que se considera en la comunidad nacional de vital importancia(2).

Proporcionar a todas y a cada uno de las confesiones religiosas el disfrute del derecho de predicación de sus respectivos mensajes religiosos.

Reconocer el derecho de apostolado de todas las Comunidades Religiosas entre los que aún no son adeptos.

Respetar ampliamente el derecho a la enseñanza.

Inspirar la moralidad pública del Estado en las leyes o prescripciones o normas éticas de la Ley Natural y en la común base moral de todas las comunidades religiosas.

Precisar por una legislación concreta y acomodada a las circunstancias de la nación las relaciones de las diversas minorías religiosas entre sí y con el propio Estado, de forma que no sufra menoscabo el orden público y la convivencia pacífica entre todos los ciudadanos, en cuanto miembros de las distintas confesiones(3). "El Estado, tiene la obligación de proteger y garantizar a las Comunidades religiosas, con la única reserva de que no se violen las justas exigencias del orden pú-

(1) MAIRENA: Ob. cit. pág. 139.

(2) Ibidm, pág. 148.

(3) Ibidem, págs. 148-149.

blico, los siguientes derechos:

- a) Regirse por sus propias normas .
- b) Honrar a la divinidad con culto público.
- c) Ayudar a sus miembros en el **ejercicio** de la vida religiosa.
- d) Promover instituciones en las que colaboren sus miembros con el fin de ordenar la propia vida según los principios religiosos.
- e) Elección, formación nombramiento y traslado de sus propios ministros.
- f) Comunicación con las autoridades religiosas de otras partes del mundo.
- g) Erección de edificios religiosos.
- h) Adquisición y uso de bienes convenientes.
- i) Enseñanza y profesión pública de palabra y por escrito de su fe.

Pero en la divulgación de la fe religiosa y en la introducción de costumbres hay que abstenerse siempre de cualquier clase de actos que puedan tener sabor a coacción o a persuasión inhonesta".

(1). Y si se ha acordado el sistema de protección económica directa por parte del Estado, éste **habrá de proporcionar** la ayuda y **protección al valor religioso, expresado en las diversas** confesiones y sectas, habida cuenta de las necesidades de las distintas confesiones, en forma igualitaria y proporcional al número de adeptos.

Igualmente le corresponde al Estado Neutro velar, en la forma más apta para ello, a fin de que no se dé en su territorio ninguna comunidad religiosa o secta que, en sus ritos o doctrinas profieran criterios o realicen acciones contra el pudor natural y buenas costumbres en materia de moralidad pública(2).

1.3.2. Compatibilidad del régimen confesional con el régimen de libertad religiosa.

"La posible confesionalidad de un Estado ha de ser siempre

(1) Decl. Dignitatis Humanae sobre L. R. nº 4.

(2) MAIRENA: Ob. cit. pág. 149.

y en todo caso plenamente compatible con las exigencias de la justa libertad de las conciencias y de la recta libertad religiosa..."(1).

Des realidades evidentes vienen a exigir esta misma compatibilidad: la libertad religiosa y el pluralismo religioso.

A) Compatibilidad exigida por la libertad religiosa.

La compatibilidad del régimen confesional con la libertad religiosa viene exigida por la misma libertad religiosa, "fundada realmente en la dignidad misma de la persona humana tal como se la conoce por la palabra revelada por Dios y por la misma razón natural" (2).

La autoridad civil actuaría, como ya hemos visto más allá de sus propios límites si tratara de imponer a los ciudadanos un juicio teológico cualquiera.

"Todos los hombres han de estar inmunes de coacción tanto por parte de personas particulares como de grupos sociales y de cualquier potestad humana; y esto de tal manera que, en materia religiosa, ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos"(3).

Los actos religiosos por los cuales los hombres se ordenan directamente a Dios "no pueden mandarles ni prohibirles ningún poder humano"(4); en consecuencia "el poder civiltraspasa sus límites si pretende dirigir las acciones religiosas"(5). "Se hace, pues, injuria a la persona humana y al orden que Dios ha establecido para los hombres, si se niega al hombre el libre ejercicio de la religión en la sociedad, siempre que quede a salvo el justo orden

(1) DIEZ ALEGRIA: Ob. cit. págs. 96 y ss.:

(2) Declaración "Dignitatis humanae" nº 2, a) 1ª, en Ob.cit. pag.768.

(3) Ibidem, nº 2, b).

(4) Ibidem, nº 2, c), pág. 770.

(5) Ibidem, nº 2, e).

público"(1).

Así pues, "el ejercicio de la libertad religiosa por todos dentro de los límites del justo orden público, condiciona todo reconocimiento especial que en un Estado pueda darse de una o varias religiones"(2). Y así el Concilio Vaticano II, en su Declaración "Dignitatis humanae", nº 6, c) acertadamente, dice: "Si por circunstancias especiales de los países, se da un reconocimiento civil especial a una comunidad religiosa en la ordenación jurídica de la sociedad, es necesario que a la vez se reconozca y respete el derecho a la libertad en materia religiosa de todos los ciudadanos y comunidades religiosas"(3).

La confesionalidad es ciertamente un bien, que forma parte del bien común, que hace referencia a algo útil; debe por tanto ser defendida y protegida por el poder civil.

Pero, cómo habrá de ser defendida ?

Su justa defensa sólo será posible a través del derecho de libertad religiosa.

La cuestión es evidente: la confesionalidad forma parte del bien común, que hace referencia a algo útil, como hemos dicho; pero la libertad religiosa se integra en esa parte esencial, indispensable del bien común, que denominamos orden público, y que hace referencia a algo necesario. Así pues, en un enfrentamiento entre lo útil y lo necesario, entre la confesionalidad y la libertad religiosa deberá prevalecer lógicamente lo necesario a lo útil y como consecuencia la libertad religiosa a la confesionalidad. Lógicamente por tanto, la compatibilidad del binomio confesionalidad- libertad religiosa viene exigida por la misma libertad religiosa.

En el ordenamiento jurídico fundamental español, el binomio, confesionalidad- libertad religiosa aparece consagrado por el nuevo artículo 6 del Fuero de los Españoles, según ya hemos ana-

(1) Declaración DH, nº 3, d) en Ob. cit. pág. 770.

(2) PEREZ LLANTADA: La libertad religiosa... cit. pág. 374.

(3) Declaración D H, nº 6, c), en Ob. cit. pág. 772.

-lizado; sin embargo la compatibilidad del binomio "confesionalidad - libertad religiosa encuentra graves dificultades en el ordenamiento constitucional español, dado que la Ley Orgánica del Estado del 20 de enero de 1967 (1), modificó el artículo 6 del Fuero de los Españoles; pero no modificó el artículo 33 del mismo Fuero, según el cual el ejercicio de los derechos que se reconocen en dicho Fuero no podrán atentar a la unidad espiritual... de España"(2).

Es claro pues, que existe contradicción entre los artículos 6 - 2º y el 33 del Fuero de los Españoles. Y ello por una razón muy sencilla: cualquier actuación dirigida a fomentar las religiones, si parece permitida por el artículo 6, va ^{sin embargo} ~~va~~ ^{contratando} la unidad espiritual de España y se opone, por ello, a lo que dispone el artículo 33 del mismo Fuero. De esta forma el equilibrio, la compatibilidad del binomio "confesionalidad - libertad religiosa", se rompe, como veremos más adelante, por encima de la justicia distributiva a favor de una decidida defensa de la Religión Católica que es la oficial del Estado y que constituye la base oficial de la unidad espiritual de España. Por todo ello, se hace necesario modificar el artículo 33 en consonancia con el artículo 6 del Fuero, a fin de lograr la compatibilidad entre la confesionalidad y la libertad religiosa que debe existir según hemos señalado y según dispone también el Concilio Vaticano II, cuya doctrina, por otra parte, nuestro ordenamiento constitucional dice expresamente reconocer y que inspirará la legislación de la nación española(3).

(1) Vid. B.O.E., nº 9, de 11 de enero de 1967.

(2) Vide en Leyes Fundamentales del Reino... cit. pág. 17.

(3) Vid. Ley de Principios del Movimiento Nacional de 17 de mayo de 1958, Principio II, en Leyes Fundamentales... cit. pág. 5.

B) Compatibilidad exigida por el pluralismo religioso.

Hoy asistimos a un fenómeno nuevo, que se da como el resultado del libre juego de la libertad de las conciencias en un clima de respeto a los derechos sustanciales de la persona.

Es el llamado pluralismo religioso.

"Las grandes masas religiosamente monocolors se han fraccionado, las naciones aparecen cada vez más como religiosamente plurales. El número de países así constituidos crece de día en día y múltiples concausas ayudan a la consolidación del cambio: grandes migraciones, pérdida de la fidelidad a una fe debida a meras razones de herencia, disminución de la presión estatal en favor de una Iglesia concreta, apoteosis mundial de las libertades en todos los terrenos, potenciación de grupos antes minoritarios al ceder terreno otros antes en notable mayoría."(1).

El pluralismo religioso es un hecho que nos sale al encuentro con todo su realismo.

"No sólo el mundo , sino cada una de las partes del mismo son ~~múltiformemente~~ religiosas en mayor o menor grado.

El valor religioso existente hoy en la sociedad se presenta pluriforme como fruto de la adhesión de los individuos a una diversa y distinta fe que se enmarca en diversas y distintas sociedades religiosas. Las diversas relaciones y manifestaciones externas originadas por este hecho del pluralismo religioso están exigiendo no sólo su reconocimiento sino su reglamentación jurídica a fin de que la convivencia social desde el ángulo religioso sea pacífica y eficaz"(2).

Este pluralismo religioso imprime a nuestro tiempo una característica expresada en el ansia sentida más que nunca, de respeto a la libertad individual de las conciencias y de una igualdad auténtica para todos en la manifestación de sus ideas"(3).

(1) DE LA HERRA: Pluralismo y libertad religiosa, Sevilla, 1971, págs. 12 y 13.

(2) MAIRENA: Ob. cit. págs. 98 y 108.

(3) MARITAIN J. : L'homme et l'Etat, París, 1950, pág. 150.

Consecuentemente el pluralismo religioso exige que la posible confesionalidad del Estado se haga en todo caso compatible con la libertad religiosa de todos los ciudadanos.

Logicamente además, la aparición del pluralismo religioso hace disminuir, como señala DE LA HERA(1), el número de los países confesionales. Y, así, la confesionalidad se ve realmente fraccionada ante la multiplicación del fenómeno pluralista que día a día conquista terreno.

Centrando el estudio sobre el pluralismo religioso español, hemos de señalar que "en España existe realmente una mayoría católica, y minorías religiosas, que profesan otras religiones. "No hay, pues, unanimidad religiosa, probablemente nunca la hubo"(2).

La parte más importante de esas minorías está constituida por las confesiones protestantes: Hermanos de Plymouth, Unión Evangélica Bautista, Federación de Iglesias Evangélicas (bautistas), Iglesia Evangélica Española, Iglesia Reformada Episcopal, Iglesia Cristiana Adventista del séptimo día, Iglesias Evangélicas Pentecostales, Iglesias Evangélicas Independientes(3).

Las cifras más ampliamente admitidas señalan en 1966 un número de unos treinta mil fieles adscritos a tales confesiones, según datos facilitados por el secretario ejecutivo de la Comisión de Defensa Evangélica - Organismo interconfesional protestante(4).

"En 1966 existía un total de 425 lugares destinados al culto protestante, de ellos 320 templos y 105 domicilios particulares. El 60 por 100 de tales centros de culto estaban oficialmente reconocidos como capillas y el 30 por 100 simplemente tolerados(5).

Sin embargo, hay que reconocer con RUPEREZ, que "al faltar

(1) DE LA HERA: Pluralismo y libertad religiosa, Sevilla, 1971, págs. 12 y 13.

(2) RUPEREZ: Ob. cit. págs. 60 y 61.

(3) Ibidem, pág. 55-56.

(4) Ibidem, pág. 55.

(5) Ibidem.

datos sociológicos **coherentes** sobre las minorías protestantes... no es posible conocer con exactitud la situación de tales minorías"(1).

En todo caso, y de acuerdo con el principio de libertad religiosa, la concesión de un derecho latente en la misma dignidad de la persona humana, no admite el ser rechazada fundándose en razones exclusivamente cuantitativas, "Pero además y de forma básica, creemos que el problema ha de ser planteado tanto a las minorías religiosas no católicas cuanto a los núcleos decididamente separados de cualquier vivencia religiosa. Esos 'núcleos' existen e incluso numericamente superan a las minorías no católicas. Podemos lamentar el hecho, pero no ignorarlo. Utilizar la unidad religiosa como postulado irrevocable en estas condiciones puede suponer:

Desde el punto de vista **pastoral**, un suicidio. Porque desconocer una determinada realidad impide adoptar los medios adecuados para enfrentarse a ella.

Desde el punto de vista político, la utilización ilícita de un dato que, además, resulta cuando menos tremendamente discutible. Ilusión peligrosa cuando la realidad no responde ya a ese lejano querer ser sociedad sacral y uniforme"(2).

Por todo ello creemos que la compatibilidad del régimen confesional con el régimen de libertad religiosa se presenta cada día más clara fácil y necesaria. Es decir que la posible confesionalidad de un Estado ha de fundarse en un puro reconocimiento sociológico de una mayoría católica, y que respeta siempre el derecho en materia religiosa de todos los ciudadanos.

1. 4. La confesionalidad española y su posible revisión.

Hasta el año 1967 la confesionalidad española ha sido una confesionalidad expresa, doctrinal, y excluyente. En 1967 con

(1) RUIZ: Ob. cit. pág. 56.

(2) Ibidem, pág. 61.

la promulgación de la Ley Orgánica del Estado se modifica el artículo 6º del Fuero de los Españoles y desaparece el carácter excluyente de la confesionalidad, al aceptar el principio de libertad religiosa para las otras religiones. Actualmente sigue siendo una confesionalidad expresa y doctrinal. Por ello creemos con MARTINEZ DE CARVAJAL(1), que la confesionalidad española ha de ser revisada.

"La diferencia entre un tipo u otro de confesionalidad no es puramente teórica. Las consecuencias prácticas de aceptar una u otra forma de confesionalidad pueden ser muy importantes.

En efecto, si se parte de la confesionalidad doctrinal, es lógico que el Estado pretenda llevarla hasta sus últimas consecuencias. Así sucede, de hecho, con el ordenamiento español. Aceptada la doctrina católica, por ser la verdadera, como principio básico y fundamental del mismo ordenamiento español, es lógico que en aquella ideología se inspiren todas las normas e instituciones. Y es lógico también que, como establece el artículo 3º de la Ley Fundamental del Reino, las leyes y disposiciones de cualquier clase que vulneren o menoscaben ese principio fundamental, sean nulas por su propia naturaleza.

En cambio, si la confesionalidad es sociológica el Estado no queda obligado a reflejar en todas sus leyes, normas e instituciones, la doctrina católica y en su integridad, sino sólo en la medida en que sea exigido por la conciencia y la voluntad de los ciudadanos. En la medida, en una palabra, de lo realizable, de acuerdo con la complejidad de la vida práctica.

Este punto es fundamental. Con él aparece una primera ventaja práctica para el Estado. Debe recobrar su libertad para legislar sin estar vinculado necesariamente a una determinada ideología como algo total e indivisible.

También la Iglesia saldría beneficiada con la renuncia a una confesionalidad doctrinal. Ganaría en libertad para ejercer

(1) MARTINEZ DE CARVAJAL: Ob. cit. págs 494 y 495.

una de sus funciones irrenunciables: la de iluminar con la luz del evangelio todas las actividades terrenas de los fieles y proclamar su juicio moral aun de cosas que tocan al orden político.

La razón es clara - continúa diciendo MARTINEZ DE CARVAJAL - En la actualidad, si un pastor o ministro de la Iglesia afirma por ejemplo en su predicación, que una determinada institución o una norma jurídica-positiva no es conforme a los preceptos evangélicos o no está plenamente de acuerdo con la doctrina católica, no sólo está emitiendo un juicio moral, sino que parece estar acusando a esa institución o norma de anticonstitucional. Y, así, la predicación evangélica puede parecer, en ese hipotético caso, que incluye un grave delito de injuria a los órganos del poder legislativo, judicial o ejecutivo"(1).

Las anteriores consideraciones nos parecen francamente importantes, acertadas y muy significativas.

Existen opiniones, sin embargo que no parecen estar completamente de acuerdo con esto. Así, por ejemplo, FRAGA IRIBARNE, afirma: "Yo no llego a la interpretación de algún ilustre comentarista, de que el mantener ese principio (y se está refiriendo a la confesionalidad) de esa forma tiene el grave riesgo de que cualquier crítica a una ley por razones de no conformarse a la doctrina cristiana, convierte en autor de injuria o de calumnia al autor de tal crítica, si se atiene a una interpretación estricta, por entender que se ha violado la constitucion" (2).

Una sentencia del Tribunal Supremo de 10 de noviembre de 1967 afirma: "La explicación de preceptos evangélicos, no permite relación alguna con circunstancias políticas y mucho menos cuando como sucede en España el Estado es católico, tiene Concordato con la Santa Sede y la religión católica tiene beneficios

(1) MARTINEZ DE CARVAJAL: Ob. cit. págs. 494 y 495.

(2) FRAGA IRIBARNE: El problema concordatario, en Cuadernos de realidades sociales, 1973, nº 2, pág. 65.

y consideraciones de las que carecen otras religiones...Pero, cómo se compagina, entonces la doctrina del Tribunal Supremo con la proclamada por el Concilio Vaticano II?

"Difícilmente, dice acertadamente MARTINEZ DE CARVAJAL, se compagina esa doctrina con la proclamada por el Concilio Vaticano II, cuando afirma, por ejemplo, que "los Obispos a quienes está confiado el oficio de regir la Iglesia de Dios, prediquen de tal modo con sus presbíteros el mensaje de Cristo, que todas las actividades terrenas de los fieles se iluminen con la luz del Evangelio(Gaudium et Spes, nº 43). O cuando dice en el mismo documento, nº 76 que a la Iglesia le sea permitido siempre y en todas partes, predicar la fe con auténtica libertad, enseñar su doctrina sobre la sociedad...y proclamar su juicio moral aun de cosas que tocan al orden político, cuando lo exijan así los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas, poniendo en juego todos y sólo los recursos que estan de acuerdo con el Evangelio y con el bien universal según la diversidad de los tiempos y las condiciones. Y la misma doctrina se proclama en la Declaración conciliar *Dignitatis Humanae* sobre libertad religiosa"(1). En efecto la Declaración dice: "Forma parte también de la libertad religiosa el que no se prohíba a las comunidades religiosas manifestar libremente el valor peculiar de su doctrina para la ordenación de la sociedad y para la vitalización de toda actividad humana"(2).

La raíz última de esa dificultad estriba, como afirma MARTINEZ DE CARVAJAL, "en la confesionalidad doctrinal y en el compromiso proclamado en el art. 3º, en relación con el n II, de la Ley Fundamental del Reino, de adecuar la legislación española a la doctrina de la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana. Compromiso que priva de libertad a ambas instituciones y entor-

(1) MARTINEZ DE CARVAJAL: Ob. cit. pág. 496.

(2) Declaración, L. R. nº 4.

pece, tanto la labor legislativa del Estado, como la función magisterial de la Iglesia. En cambio, si se parte de la base de que el Estado no tiene necesariamente que plasmar, en todas y cada una de sus instituciones y normas, la doctrina católica en su perfección y totalidad, sino sólo en la medida de lo realizable en una determinada sociedad y en un momento histórico, la denuncia evangélica y el juicio moral sobre la adecuación a la doctrina católica de una norma o institución, no implica ninguna acusación de ilegalidad. Sus efectos son puramente eclesiológicos y orientadores para los fieles que quieran actuar dentro de la pureza evangélica. Puede afirmarse que una determinada norma no reproduce exactamente la doctrina ideal católica, sin que eso constituya una injuria para el legislador, o los órganos del poder que aplican la norma, que tal vez no pueden - sin salirse de su competencia de puros mandatarios de una determinada sociedad - hacer otra cosa distinta"(1).

Por todo lo expuesto, creemos con MARTÍNEZ DE CARVAJAL, que "debe desaparecer la confesionalidad fundada sobre un juicio de valor religioso, para dar paso a una confesionalidad sociológica y de hecho, sin más compromiso, por parte del estado, que el que le viene dado por la voluntad y el sentir de los ciudadanos"(2).

1. 5. La unidad espiritual de España como límite al derecho de libertad religiosa.

En España existe ciertamente una mayoría católica y minorías religiosas que profesan otras religiones.

No hay, pues, unanimidad religiosa.

Por otra parte, hay que reconocer que "la confesionalidad española no es incompatible con el normal ejercicio de otras religiones. Pero, al afirmar la unidad espiritual, si que per-

(1) MARTÍNEZ DE CARVAJAL: Ob. cit. pág. 496.

(2) Ibidem, pág. 497.

-mite entender que quedará perturbada con el ejercicio de otras religiones"(1).

El artículo 33 del Fuero de los Españoles declara: " El ejercicio de los derechos que se reconocen en este Fuero no podrá atentar a la unidad espiritual nacional y social de España"(2).

El nuevo artículo 6 del mencionado Fuero, aparece así abiertamente contradicho por el artículo 33 del mismo cuerpo legal.

"Estamos , como afirma MARTIN RETORTILLO, ante dos preceptos de un mismo cuerpo legal - con la peculiaridad de que se trata de una Ley Fundamental - que son contradictorios"(3).

El Tribunal Supremo, en sentencias de 6 de octubre de 1967 y 5 de junio de 1968 ha considerado " que el propio Fuero de los Españoles, por medio de su artículo 33, exige que el ejercicio de los derechos que se reconocen en el mismo, no se desenvuelvan ni se desarrollen con actitudes que sean atentatorias a la unidad espiritual de España, la cual es bien sabido es la Religión Católica oficial, para cuya efectividad, el posterior preceptuado del artículo 33 de la misma Ley establece que cuando se produzcan tales violencias... deberán ser sancionadas por las leyes correspondientes, lo que en este caso constituye materia propia de la Ley de Orden Público"(4).

De esta forma ocurre realmente que cualquier actuación dirigida a fomentar las religiones, tal como afirma garantizar el artículo 6, número 2, va inexorablemente contra la unidad espiritual de España. Cualquier actuación de las llamadas libertades religiosas, si parece permitida por el artículo 6, se enfrenta incontestablemente con el artículo 33 del propio Fuero(5).

Por todo ello, cabe preguntarse con TOMAS VALIENTE: "La actitud del legislador español, ha consistido realmente en acatar la nueva doctrina católica sin reserva ni limitación alguna , o por

(1) MARTIN RETORTILLO: Ob. cit. pág. 90.

(2) Vid. Leyes F. del Reino(B.O.E), Madrid, 1973, pág. 17.

(3) MARTIN RETORTILLO: Ob. cit. pág. 90.

(4) Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi(1967), nº 4.529; y el mismo Repertorio (1968), nº 3112.

(5) MARTIN RETORTILLO: Ob. cit. pág. 89.

el contrario, quedan aun preceptos constitucionales que no encajan dentro de la linea del "aggiornamento" ?(1).

Realmente hay que reconocer con el citado autor que, en efecto, quedan aun preceptos del más alto rango normativo en nuestro ordenamiento jurídico que restringen y aun contradicen el artículo 6 del Fuero de los Españoles, según ya hemos apuntado, y el artículo 1 de la Ley de libertad religiosa de 28 de junio de 1967, que más adelante examinaremos, y que por supuesto no encajan dentro de la linea del "aggiornamento".

Ello es evidente, pues se modificó, según ya hemos señalado, el artículo 6 del Fuero de los Españoles; pero nada más que el artículo 6. Continúa por tanto vigente como precepto fundamental el artículo 33, cuyo texto, como hemos visto, dispone que " el ejercicio de los derechos.. no podrá atentar a la unidad espiritual .. de España".

De acuerdo con esta lógica se sigue utilizando el artículo 36 del Fuero, que considera "sancionable por las Leyes cualquier violación de los derechos reconocidos por el Fuero de los Españoles"; y se sigue legitimando consecuentemente la aplicación del artículo 2, a) de la Ley de Orden Público de 30 de julio de 1958, que, según ya hemos indicado, considera "actos contrarios al orden público y por lo mismo sancionables por dicha Ley aquellos que atentan a la unidad espiritual de España".

Esta situación es ciertamente contradictoria, ya que de esta forma , según hemos advertido repetidamente, cualquier actuación dirigida a fomentar las religiones tal y como afirma garantizar el artículo 6, va inexorablemente contra la unidad espiritual de España.

Nos encontramos, así, con la decidida defensa de la unidad católica considerada consustancial con la unidad política, lo cual hace, como hemos visto, que el equilibrio se rompa por encima de la justicia distributiva, a favor de la religión del Estado, base oficial de la unidad espiritual de España. Todo ello lleva a poner como límite del derecho de libertad religiosa la confesionali-

(1) TOMAS VALIENTE: Libertad religiosa y derecho constitucional, en Boletín Informativo de C. F. nº 5 de diciembre de 1970, pág. 136.

-dad católica , base oficial de la unidad espiritual de España, cuando justamente debería ser todo lo contrario; ya que la unidad espiritual de la nación , aun identificada como unidad católica, constituye un excelso bien común, según ya hemos expuesto, pero no encajable en la parte más esencial del mismo, que es la que constituye el orden público y por tanto su defensa no debe ser límite del ejercicio de la libertad religiosa que si es bien esencial y por ello integrada en el concepto de orden público(1).

En consecuencia, se hace necesario y urgente revisar aquellos preceptos citados que se oponen al artículo 6 del Fuero de los Españoles a fin de evitar la situación contradictoria a que dan lugar.

Mientras tanto, una vía de solución puede montarse a base de valorar el actual espíritu que debe informar la confesionalidad que proclama el párrafo primero del artículo 6, por incidencia de su nuevo párrafo segundo, y especialmente, a base de una justa ponderación del proselitismo. Esta , precisamente, es la solución adoptada por la nueva Jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, en sus sentencias de 29 de febrero de 1972 y de 24 de abril de 1973(2), que más adelante examinaremos.

Por otra parte, y ante este problema, es justo reconocer que la nostalgia política tiende a utilizar la religión como elemento cohesivo. Y utilizando, como justificación supuestamente válida, momentos históricos en que ello fué posible, se pretende perpetuar ese carácter instrumental de lo religioso. Pero, al vincular una determinada creencia con lo que pudieramos denominar ser nacional, los desidentes de la ortodoxia quedan realmente al margen de la vida comunitaria(3). Además, es evidente que los términos religión y espíritu nacional, ni son contrarios, ni pueden identificarse; son naturalmente distintos. Se puede y se debe ser buen católico, y se puede y no se debe ser mal patriota. Se puede y se debe ser buen patriota , siendo buen católico. Lo que es necesario es despolitizar lo religioso, porque religión y política comprenden valores totalmente diferentes.

(1) PEREZ-LLANTADA: La libertad religiosa...ob. cit. pág. 390.

(2) Vid. Repertorio de jurisprudencia Aranzadi(1972), nº1.141, y (1973), nº 1.864.

(3) RUPEREZ: Ob. cit. pág. 27-28.

ferentes(1).

Ciertamente, " lo social- religioso es de orden radicalmente distinto en sus orígenes, en su expresión, en su realización y sobre todo en su finalidad respecto al aspecto social de la unidad política. No debe haber confusionismo entre el plano natural y el sobrenatural , diversos en su origen y en su fin"(2).

"Me da miedo, decía MUNOZ ALONSO, cuando se habla de la consustancialidad entre la unidad religiosa y la unidad política. Es preciso vencer esta consustancialidad que por otra parte a los filósofos nos parece una barbaridad"(3).

Así pues, "La unidad nacional política no debe contar con la unidad de credo religioso como fundamento indispensable de la vida social de la nación. Son contenidos distintos e independientes por su naturaleza y cuentan con medios diversos para el logro de sus distintos fines. La primera es función del Estado conseguirla; la segunda es misión de la Iglesia. Es evidente que se producirá una relación entre ellas al integrar sujetos comunes, pero no deben identificarse por ello; igual que hay una clara relación entre libertad religiosa y libertad política, sin que tampoco quiera decir que tengan que confundirse en su contenido y en su desarrollo"(4).

Por otra parte la unidad religiosa, según ya hemos expuesto repetidamente, no es un elemento necesario e indispensable para la unidad política de la nación(5). Por ello, nuestro ordenamiento constitucional, no debe invocar, como límite de la libertad religiosa de los no católicos, la defensa de la unidad católica, base de la unidad espiritual de España, puesto que , como ya hemos expuesto, repe-

(1) Vid. Levante, 13-11-1969.

(2) MORALES(FranciscoJavier):Unidad religiosa, unidad nacional, en Rev. Proyección,nº 51, agosto 1966, págs. 247- y 251.

(3) Vid. Provincias, 3- 5- 1967.

(4) PEREZ-LLANTADA: La libertad religiosa...,ob. cit. pág. 388.

(5) CANTERO(Msr. Pedro): Reflexiones acerca de la libertad religiosa en el ordenamiento jurídico actual de España, en " La libertad religiosa, una solución para todos cit., pag. 136.

tidamente, no es admisible como tal límite, ya que forma parte del bien común pero no del justo orden público.

Por otra parte, el "concepto según el cual la unidad del Estado se basa en la unidad religiosa, y el concepto pagano de la fusión completa de la vida política y de la vida religiosa, han sido abolidos por el Cristianismo, que establece, al contrario, una neta distinción entre la Iglesia y el Estado"(1).

"La idea de que la unidad religiosa sería necesaria para la unidad política conduciría al Estado a decidir en materia de religión, y éste sería un atentado a la dignidad de la religión, que por naturaleza es superior al Estado"(2).

Además, "pensar que ^{un}un país donde las grandes tragedias se producen indefectiblemente por razones religiosas, se mantiene una unidad católica, es desconocer voluntariamente un estado de hechos muy concretos. Hacer de esa unidad religiosa un arma decisiva supone perpetuar la posibilidad de tales tragedias. Un pueblo permanentemente incisivo y sarcástico con los ministros de la Iglesia católica, un pueblo que hace del anticlericalismo motivo continuo de inspiración vital hace pensar en un grave abandono hacia instituciones sagradas básicas que difícilmente se compagina con la unidad religiosa como hecho asentado y orgánico"(3).

Lo que es obvio, dice RUPEREZ, es que el tema de la unidad religiosa desune(4).

Realmente creemos que el país tiene suficientes resortes como para preservar su unidad política sin hacer recurso abusivo de la unidad religiosa. Recordemos que "la mejor manera de llegar a una política en verdad humana es desarrollar el sentido interior de la justicia, de la bondad y del servicio al bien común, robustecer las convicciones fundamentales sobre la verdadera índole de la comuni-

(1) HARTMANN(A): *Vraie et fausse tolérance*, versión francesa de A. BERNARD, de *Toleranz und Christlicher Glaube*, Les Editions du Cerf, Paris, 1958, pág. 243.

(2) Ibidem, pág. 343.

(3) RUPEREZ: *Estado confesional y libertad religiosa*, Madrid, 1970, págs. 63-64.

(4) Ibidem, pág. 64.

-dad política y su finalidad, como también sobre el ejercicio y los límites de la autoridad pública"(1). Para ello hace falta conseguir una renovación de los espíritus, que en palabras conciliares exige no sólo la promulgación de leyes justas, sino también la promoción de la cultura y la utilización de los medios de comunicación social dependientes de la potestad civil que... creen un clima favorable al respeto, por parte de los ciudadanos y de los grupos sociales, del derecho de libertad religiosa (2).

Esa parece ser, como advierte RUPEREZ (3), la única manera de estructurar una sociedad vitalmente cristiana y de conseguir una vivencia religiosa verdaderamente atenta al hombre y a su circunstancia.

(1) G S. nº 73, e), en Vaticano II, ob. cit. pág. 390.

(2) D H. nº 6, b) , en Vaticano II, ob. cit. pág. 772.

(3) RUPEREZ: Ob. cit. pág. 64.

2.- RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LIBERTAD RELIGIOSA EN EN LAS ACTUALES DISPOSICIONES CONCORDATARIAS DE ESPAÑA,

Para un correcto análisis del derecho de libertad religiosa en las actuales disposiciones concordatarias entre la Santa Sede y el Estado español, creemos conveniente examinar los siguientes puntos: 1º La confesionalidad en el actual Concordato español y la posible modificación de la presente situación legal; 2º La libertad religiosa en el actual Concordato español; y 3º La revisión del actual Concordato español.

1. La confesionalidad en el actual Concordato español.

Uno de los aspectos, sin duda, el más importante y delicado de las relaciones Iglesia - Estado en España es el de la confesionalidad católica del Estado.

Dicha confesionalidad aparece expresamente reconocida en el actual Concordato de 27 de agosto de 1953, que en su artículo 1, dice: "La religión Católica, Apostólica, Romana sigue siendo la única de la Nación española, y gozará de los derechos y de las prerrogativas que le corresponden en conformidad con la Ley Divina y el Derecho Canónico"(1). Asimismo, se reconoce la confesionalidad católica del Estado, en el Protocolo final del Concordato en relación con el artículo I de éste, al recoger dicho Protocolo en sus declaraciones el artículo 6º del Fuero de los Españoles, disponiendo expresamente que "en el territorio nacional seguirá en vigor lo establecido en el artículo 6º del Fuero de los Españoles"(2); y el artículo 6º de dicho Fuero en su párrafo primero, según ya hemos expuesto dice así: "La profesión y práctica de la Religión Católica, que es la del Estado español, gozará de la protección oficial"(3), con lo que expresamente, en dicho texto, se reconoce también la confesionalidad del Estado, y por lo mismo también se re-

(1) Vid. en Apéndice IX al Código de Derecho Canónico, Madrid, 1957, pág. 1021.

(2) Ibidem pág. 1029.

(3) Vid. Fuero de los Españoles en Leyes Fundamentales del Reino, (Biblioteca Oficial Legislativa) Madrid, 1973, cit. pág. 11.

-conoce dicha confesionalidad en el citado protocolo.

Este reconocimiento supone, ciertamente, un cambio importante en relación con el reconocimiento que de la confesionalidad se hacía en el Concordato de 16 de marzo de 1851, concluido entre S.S. Pío IX y S.M. Isabel II, que disponía: "La religión Católica, Apostólica, Romana, que, con exclusión de cualquier otro culto, continua siendo la única de la nación española, se conservará siempre en los dominios de S. M. Católica, con todos los derechos y prerrogativas de que debe gozar según la ley de Dios y lo dispuesto por los sagrados cánones"(1).

En el actual Concordato de 1953 se introducen en efecto, respecto a la confesionalidad, dos variantes: primera, se suprime la cláusula con exclusión de cualquier otro culto"; segunda, se sustituye la frase de "se conservará siempre" por la de "gozará".

1.1.- Posible modificación de la presente situación legal.

La confesionalidad tiene evidentemente, como señala FRAGA IRIBARNE, cuatro bases importantes en nuestro país: en primer lugar, una larga tradición; en segundo lugar, lo que indudablemente fue para la mayoría, el espíritu de una cruzada; en tercer lugar, las Leyes Fundamentales (fundamentalmente tres: la Ley de Sucesión, el Fuero de los Españoles y los Principios fundamentales del Movimiento). Y por otra parte tiene en este momento una base concordataria(2), según ya hemos expuesto. Sin embargo, una cosa se presenta hoy clara: la confesionalidad no debe ser de derecho concordatario. Debe ser, de acuerdo con el Concilio, exclusivamente una decisión de derecho interno(3).

Muy significativas son, sin duda, a este respecto, las palabras de CANTARERO DEL CASTILLO, cuando dice: "Historicamente no se puede concebir al Régimen del 18 de julio desvinculado de la Iglesia, cualquiera que sea la actividad que la Iglesia tome en estos instantes. En cualquier caso creo que procede ir cuanto antes a la separación de la Iglesia y del Estado"(4).

(1) Vid. CORRAL: Ob. cit. pág. 615.

(2) FRAGA IRIBARNE: Ob. cit. pág. 64.

(3) Ibidem.

(4) CANTARERO DEL CASTILLO: Conferencia pronunciada en la Delegación Provincial de Información y Turismo de Orense, cit. por PEREZ BONNIN: Puntos de vista, en Revista Mundo, 1-XII-73, pág. 26.

Conviene señalar también, cómo un sondeo de opinión pública realizado con laudable oportunidad por la revista Vida Nueva ha mostrado que la inmensa mayoría de los españoles consultados, un 90 por 100, se muestran contrarios a la confesionalidad del Estado(1).

En realidad, hay que reconocer que la confesionalidad, como señala Monseñor MONCADAS, no siempre favorece a la comunidad humana, hoy más que nunca secularizada y pluralista(2).

Con razón la confesionalidad del Estado ha perdido vigencia en la teología católica; y ello principalmente, como advierte GUERRERO(3), por razones de tipo sociológico.

Este es el criterio que, como afirma OREJA, parece compartir el Episcopado español, cuando, en su documento sobre las relaciones entre la Iglesia y la Comunidad política, indica: "... se sigue afirmando explícitamente que España es un Estado católico, mientras, por otra parte, se mantiene que la nación española considera como timbre de honor el acatamiento a la Ley de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia católica, apostólica y romana, única verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional que inspirará su legislación. En que medida la presente situación legal haya de ser mantenida o modificada, es cosa que corresponde al mismo Estado español y al conjunto de los ciudadanos. Por nuestra parte creemos que lo importante es garantizar eficazmente a todos los ciudadanos la libertad religiosa, tanto en el orden personal como en el familiar y social.... Además el compromiso de inspirar nuestra legislación en el acatamiento de la Ley de Dios según la doctrina de la Santa Iglesia debe ser muy bien ponderado por todos, pero particularmente por los legisladores y gobernantes, que han hecho de él un timbre de honor. Porque de ese compromiso se siguen ineludiblemente consecuencias muy serias, cualquiera que sea la postura que ante él se adopte.

Si ese compromiso se ha de cumplir fielmente será necesaria -

(1) "5.600 Lectores de Vida Nueva opinan sobre el Concordato", Rev. Vida Nueva del 13 de febrero de 1971, pág. 28-29.

(2) Monseñor MONCADAS: Voces de renovación, en Vida Nueva, de 24 de octubre de 1970, pág. 42.

(3) Cit. por OREJA (Marcelino): Análisis y desarrollo de la libertad religiosa en España, en Rev. A.C.N. DE P.-V.-73, pág. IX.

rio esforzarse por acomodar toda nuestra legislación a la Ley de Dios tal como la interpreta la doctrina de la Iglesia, con todo el dinamismo que ella encierra, sobre todo cuando se proyecta sobre las realidades temporales. Esto entrañará muchas veces no pocas dificultades. Por otra parte, aun procurándolo con todo empeño, siempre será verdad que las leyes habrán de optar necesariamente por un modo concreto de aplicar la doctrina católica a aquellos problemas, sin que nadie pueda pretender que ese modo es el único, ni siquiera el más acertado. Habrá, pues, muchos que legítimamente discreparán de esa opción e incluso la combaritán en nombre de la misma doctrina. Y todo ello es evidente que puede plantear, tanto a la autoridad del Estado como a los ciudadanos y a la propia Iglesia, problemas enojosos.

Si, por el contrario, ese compromiso no se cumpliera, fueren cuales fueren los motivos, el Estado podría ser acusado, con mayor razón, de ~~deslealtad~~ a los principios que dice profesar y, como consecuencia, ~~comprometería~~ a la Iglesia y más concretamente a su jerarquía.

En todo caso, el hecho de que el Estado procure que sus leyes se inspiren en la doctrina de la Iglesia no significa en modo alguno que por ello la Iglesia o su jerarquía queden implicadas en la valoración de las mismas"(1).

La postura del Episcopado español aparece clara en este planteamiento, que RUIZ GIMENEZ(2) ha llamado de desconfesionalización del Estado desde la Iglesia misma. En efecto, "la jerarquía como señal elicitado autor, indica que no está en su mano cambiar las Leyes Fundamentales del Estado, pues esa es tarea específica de los gobernantes; pero deja igualmente claro que el Estado español ya no es confesional para la Iglesia. En otros términos, que las autoridades que encarnan al Estado no podrán ya decir que las instituciones y las normas jurídicas vigentes son cristalización de la doctrina de la Iglesia. La declaración episcopal rechaza que el

(1) Documento: La Iglesia y la Comunidad política, en Rev. Ecclesia, nº 1.627 27 de enero de 1973, 2ª Parte, nos 55 y 56.

(2) RUIZ GIMENEZ: Lucha por la liberación, en "Mesa redonda" sobre el documento "La Iglesia y la Comunidad Política", en Rev. Cuadernos para el D. II- 73 pág. 79.

Estado reenvíe el contenido de su legislación a la doctrina social y política de la Iglesia, precisamente porque ésta se orienta inequívocamente hacia una diversidad o pluralidad de opciones, todas ellas lícitas para los cristianos, siempre que se respeten las libertades y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos"(1).

Ciertamente, "la declaración expresa de confesionalidad comporta unos deberes específicos que comprometen a un Estado de manera clara"(2). Pues el Estado" se compromete el mismo a inspirar en la doctrina de esa religión sus leyes y sus actos de Gobierno; a someterse a la moral de dicha religión ..."(3). Y esto que para los católicos por ejemplo, como señala FERNANDEZ AREAL, puede parecer óptimo en principio por cuanto supone de garantía de mantenimiento de un nivel público nacional de honradez en todos los órdenes, con posibilidades de educación de sus hijos en una doctrina adecuada ,etc., en la práctica es fuente de confusiones y conflictos, como la reciente historia del país ha venido demostrando. Qué pasa si el Gobierno de un Estado que dice inspirar su legislación en la doctrina de la Iglesia católica no la inspira de hecho? Qué pasa cuando la jerarquía de la Iglesia se ve envuelta en decisiones políticas concretas de un Gobierno que dice inspirarse en la doctrina de la Iglesia católica, pero cuyas decisiones por mucho que se inspiren en esa doctrina , nunca pueden ser consideradas como las únicas aceptables por un católico?.

El natural pluralismo que en la religión católica se da cuando se trata de cuestiones opinables, que son la mayoría, queda muchas veces confuso si el Estado es confesional, y la jerarquía de la Iglesia en los límites de ese Estado se encuentra como obligada a sancionar de alguna manera los actos de gobierno de

(1) RUIZ GIMENEZ : Loc. cit.

(2) FERNANDEZ AREAL: La Iglesia y el Estado- Textos comentados, en Rev. Mundo 23 enero 1971, 18.

(3) LÓPEZ MARTINEZ: La Iglesia y el Estado, en Rev. Mundo, 23 enero 1971, pág. 17 y 18.

ese Estado que quiere ser católico. Más bien parece que católicas son las personas, o budistas o protestantes o mahometanas, pero los estados no está claro en que manera puedan serlo sin violentar las conciencias de sus súbditos"(1).

Por otra parte hay que señalar una vez más que la declaración de confesionalidad es un acto interno de la nación; "un propósito pudieramos decir, personal, del ser que la nación constituye, del que su Estado se hace intérprete y lo proclama" (2).

Consecuentemente consideramos acertado propugnar con MARTINEZ DE CARVAJAL," que el Concordato deje de vincular en ese punto, al Estado español, el cual, de acuerdo con sus procedimientos constitucionales pueda libremente reformar, si lo estima oportuno y en la medida en que lo estime, su propio ordenamiento interno.

Por eso creemos con MIRET MAGDALENA "que tanto la Iglesia católica como el Estado español, debén replantear a fondo la cuestión de la confesionalidad convenida en el Concordato de 1953, y superar de una vez aquellos esquemas que no tienen ya ni vigencia cultural, ni vigencia social, por un lado, ni tampoco efectividad **práctica** por otro, salvo el seguir manteniendo una confusión que cada vez los hechos harán ver más **claramente** su inconveniencia en el porvenir si no se arbitran seriamente soluciones claras de independencia total"(3).

2. La libertad religiosa

El sistema actual del Concordato de 1953 es el de libertad-religiosa. Pues, si bien es cierto que el Concordato de 1953 sigue en vigor sin que haya sido derogado ninguno de sus artículos, sin embargo ha sufrido de una forma u otra notables

(1) FERNANDEZ ARSAL: Locuc. y pag. ócit.

(2) LOPEZ MARTINEZ(A): La Iglesia desde el Estado, Madrid, 1972, pág. 92.

(3) MIRET MAGDALENA(E.): La Iglesia en la encrucijada, en Rev. Triunfo, 16 - III - 1974, pág. 53.

variaciones. En algunas materias, sin que haya existido cambio expreso, se han dado modificaciones reales en su aplicación"(1).

Una de estas modificaciones, sin duda la más importante, es la que hace referencia a la libertad religiosa. " En virtud de ella el sistema de una confesionalidad católica excluyente de cualquier otro culto público y con pura tolerancia para el privado de otras confesiones, ha sido sustituido por el de una confesionalidad con libertad religiosa"(2). Pues, por Ley Orgánica del Estado de 10 de enero de 1967 quedó modificado el artículo 60 del Fuero de los Españoles(recogido en el Protocolo final del Concordato, en relación con el art. I), que quedó redactado en los siguientes términos: "La profesión y práctica de la religión católica, que es la del Estado español gozará de la protección oficial .

El Estado asumirá la protección de la libertad religiosa, que será garantizada por una eficaz tutela jurídica que, a la vez , salvaguarde la moral y el orden público"(3).

Consecuentemente, por tanto, hay que afirmar que el derecho de libertad religiosa se reconoce en el vigente Concordato español de 27 de agosto de 1953. Sin embargo, existen en el mismo Concordato español, como veremos más adelante, otras disposiciones que resultan realmente incompatibles con el derecho de libertad religiosa y con un ordenamiento jurídico acorde con el pluralismo religioso que como ya hemos expuesto, existe realmente en España.

Por todo ello, se impone evidentemente, una urgente y profunda revisión del Concordato vigente español de 1953, especialmente en lo que a tales disposiciones se refiere; pero, de todo esto nos ocuparemos en los apartados siguientes, al tratar de la revisión del Concordato.

(1) MARTINEZ DE CARVAJAL: Ob. cit. pág. 475.

(2) Ibidem, pág. 476.

(3) Leyes Fundamentales del Reino(B.O.E.) Madrid, 1973.

3. Revisión del Concordato de 27 de agosto de 1953.

El derecho de libertad religiosa y el pluralismo religioso realmente existente en España exigen, según ya hemos indicado, la revisión del vigente Concordato español de 1953. Por ello, al analizar el reconocimiento del derecho de libertad religiosa en las actuales disposiciones concordatarias de España, consideramos necesario hacer unas cuantas consideraciones en torno a la necesaria y posible revisión de dicho Concordato. Para lo cual creemos conveniente examinar los siguientes puntos: 1º Necesidad de revisar el actual Concordato español; 2º Forma de llevar a cabo dicha revisión; 3º Contenido de la misma; y 4º Gestiones realizadas para llevar a cabo la revisión.

I. Necesidad de la revisión.

La revisión del actual Concordato español de 1953 se presenta hoy como necesidad urgente e inaplazable.

Por otra parte, además, "todo el mundo conviene, hoy, como afirma la Conferencia Episcopal Española, en que el Concordato suscrito entre la Santa Sede y el Estado español debe ser sometido a revisión" (1).

Realmente, a más de veintidós años de su firma, el Concordato de 1953, se presenta hoy a los ojos de todos los observadores como un instrumento jurídico superado doctrinalmente e incapaz de aportar soluciones eficaces a los problemas que plantea la dimensión social de la vida religiosa de los españoles. "El problema concordatario español, afirma FRAGA IRIBARNE, consiste obviamente en el hecho de que el Concordato vigente a pesar de ser relativamente reciente se encuentra plenamente superado" (2). En realidad el Concordato español de 1953, como señala MARTINEZ DE CARVAJAL, nació ya inadap-
tado a su época. No respondía ni a la realidad socio-religiosa española de aquel tiempo ni a los principios doctrinales que iban

(1) Documento: "La Iglesia y la comunicad política", nº 50, en Rev. Ecclesia de 27 de enero de 1973, pág. 33.

(2) FRAGA IRIBARNE (Manuel): El problema consordatario", en Cuadernos de Realidades Sociales-1973- n 2, p 53.

afirmandose progresivamente tanto en la doctrina política como en la eclesiológica acerca de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Desde el año 1953 la evolución ha sido profunda y casi espectacular. No es pues extraño que se imponga hoy, como necesidad urgente e inaplazable, la revisión de un acuerdo firmado hace ya más de 21 años (1). Sin embargo, la inadaptación del Concordato a su época y la necesidad urgente e inaplazable de su revisión cobra aún más sentido teniendo en cuenta las siguientes cuestiones: 1º Génesis del Concordato español de 1953; 2º Consideraciones críticas acerca del Concordato de 1953; y 3º El Concordato en la actualidad.

1.º Génesis del Concordato de 1953.

El 27 de agosto de 1953, siendo embajador cerca de la Santa Sede el señor CASTIELLA, se firmaba en la Ciudad del Vaticano el Concordato entre la Santa Sede y el Estado español, pacto solemne que veníase preparando desde 1949, principalmente por el entonces embajador cerca de la Santa Sede señor RUIZ GIMENEZ, y que vino a cubrir, sin duda, unas graves necesidades de estabilidad en las relaciones de la Iglesia y el Estado Español.

Firmaron el texto, compuesto de 36 artículos y un "Protocolo final" (2), en nombre del Vaticano monseñor TARDINI prosecretario de Estado para los Asuntos Exteriores; y en nombre del Gobierno español, el entonces ministro de Asuntos Exteriores, don Alberto MARTIN ARTAJO y el embajador cerca de la Santa Sede, ya mencionado señor CASTIELLA.

"Es de justicia reconocer, como señala MARTIN ARTAJO, que los protagonistas de esta empresa fueran las altas partes contratantes. La magnanimidad y la comprensión de Su Santidad el Papa Pío XII y del Jefe del Estado español, hicieron posible que se emprendiera, se madurase y se acabara un empeño que se ofrecía

(1) MARTINEZ DE CARVAJAL: Temática general de la revisión del Concordato español, en "La institución concordataria, cit. pág. 467 - 468.

(2) Vid. el texto.. en el Apéndice IX al Código de Derecho Canónico, (B.A.C.), Madrid, 1957.

como muy difícil, dadas las circunstancias internacionales"(1).

El espíritu con que se negoció el Concordato parece reflejarse claramente en las palabras dirigidas por el Jefe del Estado a las Cortes: "Preparado en ambiente de sosiego, durante un largo período de armonía y con espíritu de plena sinceridad, estamos (decía a las Cortes el Jefe del Estado) ante uno de los singulares casos de la historia en que un Concordato no presenta el carácter de un armisticio, ni de una componenda transaccional, ni de un estatuto de garantías mínimas. Nos hallamos ante un pacto que consagra una amistad firme y probada y que asegura una colaboración cordial en marcha"(2).

Hay que señalar, sin embargo que "aunque firmado el 27 de agosto de 1953, el Concordato es en realidad , en muchos de sus aspectos esenciales, anterior a dicha época, ya que recoge - a veces literalmente - acuerdos y normas de años precedentes. Acuerdos , a su vez , que no siempre estuvieron adaptados a la realidad y a las necesidades de su tiempo.

El primero y principal de esos acuerdos precedentes, incorporados posteriormente al Concordato, se remonta al año 1941. Se trata del "Acuerdo sobre el modo de ejercicio del privilegio de presentación entre el Gobierno español y la Santa Sede" firmado el 7 de junio de 1941. En dicho acuerdo se establecen dos principios básicos para las futuras relaciones entre la Iglesia y el Estado en España; la intervención en el nombramiento de los obispos y la confesionalidad del Estado español. Ambos serán recogidos por el Concordato de 1953.

a) En lo referente a los nombramientos episcopales, el Concordato se limita a declarar y ratificar la vigencia del acuerdo de 1941, sin introducir ninguna modificación. El artículo VII del Concordato establece textualmente: " Para el nombramiento de los

(1) MARTIN ARTAJO: " Concordato de 1953", en Diccionario de Historia Eclesiástica de España, pág. 595.

(2) Ibidem, pág. 596.

Arzobispos y Obispos residenciales y de los Coadjutores con derecho a sucesión , continuarán rigiendo las normas del Acuerdo estipulado entre la Santa Sede y el Gobierno español el 7 de junio de 1941".

b) Acerca de la confesionalidad, el acuerdo de 1941 establecía en su número 6: "El Gobierno español, por su parte, se compromete formalmente a concluir cuanto antes con la Santa Sede un nuevo Concordato inspirado en su deseo de restaurar el sentido católico de la gloriosa tradición nacional".

Cual sea el alcance de ese deseo y de ese compromiso, queda de manifiesto en el número 9 del mismo acuerdo: "Entretanto se llega a la conclusión de un nuevo Concordato, el Gobierno español se compromete a observar las disposiciones contenidas en los cuatro primeros artículos del Concordato del año 1851". El artículo 1º de dicho Concordato establecía expresamente la confesionalidad española: "La Religión Católica, Apostólica, Romana que, con exclusión de cualquier otro culto, continúa siendo la única de la nación española, se conservará siempre en los dominios de S. M. Católica, con todos los derechos y prerrogativas de que debe gozar según la ley de Dios y lo dispuesto por los sagrados cánones". La aplicación práctica del principio de la confesionalidad queda garantizada en los tres artículos siguientes. El artículo 2º se refiere a la enseñanza y pureza de la doctrina católica en las universidades, colegios, seminarios y escuelas de cualquier clase. El 3º establece la protección y apoyo del Estado a las autoridades eclesiásticas en el desenvolvimiento de sus actividades y funciones propias. El 4º garantiza la plena libertad de obispos y clérigos en el ejercicio de su ministerio.

Tanto el principio general de la confesionalidad como las aplicaciones prácticas señaladas pasan, más o menos literalmente, al nuevo Concordato de 1953. El principio general queda establecido en el artículo I: "La Religión Católica, Apostólica, Romana sigue siendo la única de la nación española y gozará de los

derechos y de las prerrogativas que le corresponden en conformidad de la Ley Divina y el Derecho Canónico". Es evidente, que no difiere mucho del artículo 1º del Concordato de 1851, sobre todo si el nuevo se completa con el artículo 6º del Fuero de los Españoles, recogido en el Protocolo final del Concordato de 1953.

La protección a la enseñanza de la doctrina católica y a su pureza, que establecía el artículo 2º del Concordato de 1851, se garantiza de nuevo y se explicitan aún más en los artículos XXVI XXXI del Concordato de 1953.

La protección y apoyo a las autoridades eclesiásticas, que establecía el artículo 3º del Concordato de 1851, continúan de igual forma, ya que dicho artículo queda en vigor al ser incorporado al nuevo Concordato, según se dispone en su Protocolo final, en relación con el artículo II : "Las Autoridades eclesiásticas gozarán del apoyo del Estado en el desenvolvimiento de su actividad y, al respecto, seguirá rigiendo lo establecido en el artículo 3 del Concordato de 1851".

Finalmente , la libertad en el ejercicio del ministerio sagrado, de que se ocupaba el artículo 4º del Concordato de 1851, queda garantizada en el artículo II del nuevo Concordato de 1953.

Dentro del mismo tema de la confesionalidad, se proclama en el año 1945, por parte del Estado español, el Fuero de los Españoles, cuyo artículo 6º ~~...~~ se incorporará también al Concordato de 1953, ya que así lo determina el Protocolo final del mismo , en relación con el artículo I: "En el territorio nacional seguirá en vigor lo establecido en el artículo 6º del Fuero de los españoles". El texto ~~de este artículo~~, ya mencionado, establece: "La profesión y práctica de la Religión Católica , que es la del Estado español, gozará de la protección oficial. Nadie será molestado por sus creencias religiosas, ni el ejercicio privado de su culto. No se permitirán otras ceremonias ni manifestaciones externas que las de la Religión Católica".

En 1946 se firmaron dos acuerdos, incorporados también al Concordato de 1953. El primero, de 16 de julio , para la provisión de beneficios no consistoriales, recogido por el artículo

X del Concordato. El segundo, de 8 de diciembre, sobre seminarios y universidades de estudios eclesiales, incorporado igualmente al Concordato en virtud de los artículos XIX y XXX.

El 7 de abril de 1947 se promulgaba un "Motu proprio" Pontificio, restableciendo en Madrid el Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica. A pesar de su carácter de "Motu proprio" y, por lo tanto, acto formalmente unilateral de la Iglesia, se promulga de acuerdo con el Estado y, como expresamente se dice en el mismo documento, " para secundar los deseos de la mayor parte de los Obispos de España, así como de su Gobierno". También este documento pontificio es recogido y confirmado en el Concordato de 1953, en su artículo XXV.

Otro acuerdo precedente de gran importancia, es el firmado entre la Santa Sede y el Gobierno español sobre la jurisdicción castrense y asistencia religiosa de las Fuerzas armadas, el día 5 de agosto de 1950. También éste, como los anteriores, sigue vigente en el Concordato, en virtud de su artículo XXXII.

Finalmente, unos días antes de la firma del Concordato, Pío XII promulga la Bula "Hispaniarum fidelitas", de 5 de agosto de 1953, concediendo, en favor de España, una serie de privilegios. El artículo XIII del Concordato los confirma e incorpora al derecho concordado: " En consideración de los vínculos de piedad y devoción que han unido a la nación española con la Patriarcal Basílica de Santa María la Mayor, la Santa Sede confirma los tradicionales privilegios honoríficos y las otras disposiciones en favor de España contenidos en la Bula Hispaniarum fidelitas del 5 de agosto de 1953"(1).

Hemos recordado estos documentos y estas fechas ,siguiendo a MARTINEZ DE CARVAJAL, «para dejar bien patente , como dice el ci-

MARTINEZ DE CARVAJAL: Ob. cit. págs 468- 470.

-tado autor, que, aunque el Concordato se firmara en 1953, muchas de sus disposiciones pertenecen realmente a una época anterior. Puntos tan trascendentales como el de la confesionalidad y el del nombramiento de los obispos se remontan al año 1941"(1).

"No es pues extraño que alguna de esas disposiciones, que resultaban ya anacrónicas y discutidas, en el momento de su firma - como sucedía con el privilegio de presentación de los obispos - lo fueran aún mas en 1953, y carezcan de sentido en nuestros días"(2).

2º Consideraciones críticas acerca del Concordato de 1953.

"Son muchos los méritos y virtudes de este acuerdo entre la Iglesia y el Estado español . Para no pocos iuspublicistas de la época constituía el ideal de un Concordato y la meta máxima a que podía aspirar la Iglesia en un estado católico. Lo han definido, haciendo de él los mayores elogios, como un Concordato de "tesis, un Concordato ideal, completo, íntegro y de amistad"(3).

Ciertamente hay que reconocer que "el Concordato apareció en su tiempo como un texto positivo y fué alabado por sus avances jurídico-doctrinales, que aportaban a las relaciones de la Iglesia con el Estado un clima de armonía, de colaboración leal y de recíproca independencia"(4).

"La firma del Concordato de 1953, supuso sin duda un espaldarazo para el Régimen español que en aquellos momentos le supuso una renta de prestigio y aceptación internacional reconocida por todos cuantos se han ocupado de este tema"(5).

(1) MARTINEZ DE CARVAJAL: Ob. cit. pág. 470.

(2) Ibidem,

(3) Ibidem, pág. 471.

(4) "20 años de Concordato", un editorial de Ecclesia, en Rev. Vida Nueva, de 15 de septiembre de 1973, pág. 27.

(5) LOPEZ(Alfredo): La Iglesia y el Estado, en Rev. Mundo, de 23 de enero de 1971, pág. 20.

"Al firmarse el Concordato ,actualmente vigente, el alborozo nacional fué grande en los medios oficiales. El entonces ministro de **Asuntos Exteriores** MARTIN ARTAJO, decía por los micrófonos de Radio Nacional el 27 de agosto de 1953 a su vuelta de Roma, tras la firma del documento : " es la consagración formal y escrita del régimen de perfecta colaboración entre Iglesia y Estado, instaurado por el Movimiento Nacional acaudillado por el Generalísimo FRANCO. Por lo cual entiendo que tenemos motivos para felicitarnos de su firma como españoles y como católicos"(1).

En declaraciones recogidas por la prensa diaria el día 29, MARTIN ARTAJO afirmaba : " este concordato "regirá por muchos años las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado español"(2).

Eloy MONTERO al hablar del Concordato de 1953, señala que " es sin duda el más conforme a la doctrina de la Iglesia que haya podido ajustarse a través de todas las épocas de la Historia"(3).

LOPEZ ORTIZ llama al texto del Concordato de 1953 " extraordinario y dice que ha llegado a la perfección"(4).

Según MARTIN MARTINEZ este pacto se caracteriza por ser:
" Primero, un Concordato completo, en cuanto que abarca el mayor número de las cuestiones que afectan a la Iglesia y al Estado; segundo, un Concordato de tesis, en cuanto que incorpora a su articulado numerosas disposiciones, tal como se hallan establecidas en la legislación canónica, con muy contadas excepciones, y en los principios fundamentales del derecho público eclesiástico, dándoles un desarrollo en perfecta consonancia con tales nor-

(1) LÓPEZ (Alfredo): "La Iglesia y el Estado" en Rev. cit., pág. 20.

(2) Vid. LÓPEZ (Alfredo) ,art. cit. en Rev. cit.

(3) Vid. MARTIN ARTAJO: " El Concordato de 1953" , en Diccionario de Historia Eclesiástica, pág. 596.

(4) Ibidem.

-mas; tercero , un Concordato de amistad, no de pacificación, en cuanto que no viene a poner término a un periodo de lucha, sino a robustecer una actitud de colaboración cordial; cuarto que abre una profunda brecha en el tradicional regalismo español, hasta dejarlo sumamente atenuado"(1).

El Padre REGATILLO por su parte resume su juicio sobre el pacto de 1953 en estas terminantes palabras: "Nosotros , despues de haber recorrido los 150 convenios o consordatos celebrados entre la Santa Sede y los diversos Estados en el correr de los siglos; despues de haber explicado muchos años la asignatura de Concordatos, no creemos aventurado el afirmar que éste se lleva la palma entre todos los de otras naciones y de todos los tiempos. Los Concordatos de esta categoría son raros muy raros. Es un convenio general y completo, un Concordato de tesis ; o sea íntegro, que ordena las relaciones entre ambas potencias como de suyo debe ser. Lo cual no quiere decir que carezca , como toda obra humana, de defectos, sino que " en conjunto él en si es el más perfecto de todos"(2). " En toda la historia de los concordatos , añade el citado autor, no hay ninguno comparable al nuestro; se lleva la palma entre todos los concordatos del mundo entero y de todos los tiempos"(3).

Es interesante también recordar como en un curso de conferencias sobre el nuevo Concordato, organizado en la facultad de Derecho de la Universidad de Madrid, durante el curso académico 1953 - 54, tuvieron ocasión de explicar muchos aspectos sobre la gestación del Concordato los entonces ministros de Asuntos Exteriores Alberto MARTIN ARTAJÓ y de Educación Nacional Joaquín RUIZ GIMÉNEZ. Uno y otro hicieron cálidos elogios del acuerdo alcanzado por ellos mismos y por Fernando María de CASTIELLA, por entonces embajador en el Vaticano, pronosticando una larga

(1) MARTIN MARTINEZ: "Concordato de 1953 entre España y la Santa Sede , Madrid, 1961, ...

(2) Vid. MARTIN ARTAJÓ: El Concordato de 1953, en Ob. c. p.597.

(3) Vid. LOPEZ(Alfredo) , art. cit.

vida al concordato considerado como modélico"(1).

Decía MARTÍN ARTAJO: " Nuestro concordato con la Santa Sede fué indiscutiblemente un concordato de nuevo cuño ... Se trata de un concordato de tesis, de tesis católica, puesto que el Movimiento Nacional ha proclamado su fidelidad a la Iglesia desde los comienzos, y el Generalísimo Franco - como ha recordado recientemente el profesor francés Duclos - llegó de Marruecos a la península en 1936, como portaestandarte y abanderado de la fe católica ... En España se ha dado realidad, gracias a Dios , a la tesis de la armonía entre el Estado y la Iglesia, sociedades perfectas ambas, y, por lo tanto. soberanas en su esfera propia cada una, pero confluyentes en el servicio del bien común dentro de la nación ...Nuestro concordato, tan leal a nuestra santa madre la Iglesia como a la tradición nacional y a los intereses patrios, puso término a las campañas insidiosas contra España en el terreno católico ..."(2).

Por su parte, el ministro de Educación Nacional y anteriormente embajador en el Vaticano, Joaquín RUIZ GIMENEZ, en su discurso de clausura del ciclo de conferencias sobre el concordato, decía:

"Si tomo aquí la palabra es mucho más que como ministro de Educación actualmente en el ejercicio de ese cargo, por honrosa confianza del Caudillo, como miembro de un equipo de hombres de recta intención que asumieron la responsabilidad de llegar a un texto en el que se normalizaran las relaciones jurídicas entre la Iglesia y el Estado en España... En lo que a mí vida personal se refiere, fué una coincidencia providencial el que, hallándome cabalmente en un país hispanoamericano, recibiera la noticia telegráfica de que S.E. el Jefe del Estado me había querido honrar nombrándome embajador ante Su Santidad Pío XII.

Desde aquel momento formulé el propósito - si el Caudillo lo estimaba oportuno y su Gobierno lo ratificaba - de luchar

(1) Vide LOPEZ(Alfredo): art. cit. en Rev. cit. pág.21.

(2) Ibidem. ...

tenazmente por llegar a la conclusión de un nuevo concordato, ese mismo que tres años después, el ministro de Asuntos Exteriores y mi sucesor en el cargo, el dinámico e inteligente profesor de esta Universidad Fernando María Castiella, iban a tener la profunda alegría de firmar ... Si quisiera sintetizar las razones por las cuales el Gobierno español fué al concordato con la Santa Sede, diría, substancialmente, que fueron tres: las ideas y creencias sustanciales de los hombres que en torno al Caudillo gobiernan; las circunstancias históricas del mundo, que obligaban en cierta manera a España a adoptar una actitud de ejemplaridad; y el cumplimiento de una estricta obligación jurídica ... Había que salvar, ciertamente - y eso se hizo con plena conciencia de responsabilidad - los auténticos derechos del Estado, lo que propiamente era del Cesar, e incluso se incorporaron a nuestro concordato privilegios, beneficios y atenciones de la Iglesia que no figuran, por ejemplo, ni en el concordato de 1933 con el Reich germánico, ni en el concordato de la Italia de Benito Mussolini..."(1).

Los apologistas del Concordato son ciertamente numerosos, pero este Concordato también ha tenido detractores. En cuanto a estos, sin embargo, pierden autoridad sus diatribas en cuanto se observa que son no sólo encontradas sino contradictorias. Para unos, el pacto adolece de regalismo, porque en él se renuevan las prerrogativas tradicionales del Jefe del Estado, sobre todo en orden al derecho de presentación. Para otros, por el contrario, peca de clerical porque concede a la jerarquía eclesial y al clero un status jurídico muy generoso por comparación al que tienen en otros países"(2).

"La verdad - dice MARTIN ARTAJO - es que del texto concordado no se infiere legitimamente ninguna de estas acusaciones. A la Iglesia se le reconoce lo que es suyo y se le brinda un apoyo de autoridad civil y de medios jurídicos y económicos perfecta-

(1) Vid. LOPEZ(Alfredo):Art. y Rev. cit. pág. 21.

(2) MARTIN ARTAJO: Concordato de 1953, en Diccionario cit. , pág. 597.

-mente razonable. Y en cuanto a los privilegios del Estado, con concesión graciosa de la Santa Sede, quien está en su derecho al otorgarlos.

En realidad ~~son muchos, ciertamente,~~ como señala MARTINEZ DE CARVAJAL, los méritos y virtudes de este acuerdo entre la Iglesia y el Estado español. Para no pocos juspublicistas de la época - españoles y extranjeros - constituía el ideal de un Concordato y la meta máxima a que podía aspirar la Iglesia en un Estado católico. Lo han definido, haciendo de él los mayores elogios, como un Concordato de "tesis", un Concordato ideal, completo, íntegro y de amistad.

Y lo que, por encima de todo, es evidente y de justicia reconocer es la buena voluntad y el afán sincero de servir a la Iglesia que animaba a los gobernantes católicos españoles que, junto con la Santa Sede, elaboraron el Acuerdo. Quisieron reproducir en él lo que constituía, si no la doctrina oficial, sí, al menos, la más común entre los canonistas y eclesiasticistas católicos de entonces"(1).

Pero ~~precisamente en ese~~ idealismo y en ese exceso de perfección teórica es donde se encuentra, como advierte el citado autor, la raíz de no pocos de sus defectos y limitaciones(2).

En efecto, pues, "el valor del Concordato, como el de cualquier norma jurídica, no es absoluto sino instrumental. La bondad o malicia de una ley no pueden medirse sólo por su contenido, sino también por su capacidad para resolver una situación objetiva y real. Una ley con un contenido ideal y perfecto, puede ser una mala ley sino tiene en cuenta una realidad concreta y una situación sociológica sobre la que debe actuar....".

El Concordato es un tratado del que brotan obligaciones y derechos subjetivos para las Altas Partes contratantes. Y es también una norma objetiva de derecho válida para el ordenamiento civil y para el eclesiástico. No puede, por lo tanto, hablarse de

(1) MARTINEZ DE CARVAJAL: Ob. cit. págs 470 - 471.

(2) Ibidem, pág. 471.

un Concordato ideal. El Concordato no es sólo una declaración de principios. Aun cuando se dé , explícitamente, esa declaración de principios, el Concordato, en cuanto norma jurídica, no puede realizarlos en términos absolutos sino en la medida en que pueden ser recibidos por una sociedad concreta.

Y ahí radica, sin duda el defecto básico del Concordato español. Se elaboró ~~más~~ sobre una sociedad española ideal, que sobre la sociedad real. En un momento de euforia y exaltación religiosa dejaron de considerar los aspectos quizás menos gratos de la realidad. Se legisló más para la España que se deseaba que para la España que era....

Por otra parte era de preveer - a la vista de las ideas que se imponían y de los contactos cada vez más intensos y frecuentes entre los diversos pueblos - que la evolución futura no iría precisamente por la línea de un monismo y unidad religiosa, sino más bien por la del pluralismo y variedad. Faltó una visión del futuro y una percepción de los "signos de los tiempos"(1).

Junto a ~~ese primer~~ defecto de realismo político y legislativo señala MARTINEZ DE CARVAJAL, otro que le hizo quedarse pronto anticuado. "Se elaboró ~~dicen este autor, sobre unos~~ principios doctrinales - sobre todo en lo que se refiere al Derecho Público Eclesiástico - que empezaban a estar ya en crisis y que sólo propugnaban, al menos en su integridad, los sectores más tradicionalistas y conservadores. El Concilio , unos años más tarde , no vino más que a consagrar la evolución apuntada, profundizando en los principios que, a la vista de las nuevas realidades sociales y políticas, han de regir las relaciones entre la Iglesia y el Estado.

Las viejas categorías y los viejos esquemas - la "tesis" y la "hipótesis", el "Estado católico, cristiano o pagano", las sociedades "perfectas", el poder indirecto de la Iglesia , la tolerancia, etc. - ya carecían de sentido. Se imponía un conocimiento más preciso y una conciencia más clara de las funciones de

(1) MARTINEZ DE CARVAJAL: Ob. cit. pág.471-472.

de la Iglesia y el Estado de su naturaleza y autonomía...."

"La autonomía de la Iglesia y del Estado, así como la independencia en sus propias organizaciones, hacían anacrónicos tanto los privilegios de la Iglesia como las intervenciones estatales en los nombramientos episcopales. La idea de que la libertad religiosa no es un mal tolerable sino un bien positivo, un derecho fundamental del hombre, era ya aceptada en las declaraciones internacionales y en la mayoría de las constituciones contemporáneas. El proceso secularizador del Estado y su autonomía en lo temporal, coincidía con otro proceso paralelo y complementario: la destemporalización progresiva de la Iglesia"(1).

En cuanto al aspecto técnico jurídico pueden también señalarse defectos notables en el Concordato. El principal como señala el mismo CARVAJAL es su falta de precisión y certeza en muchos de sus puntos fundamentales(2). Así ocurre, por ejemplo, en los siguientes puntos: "a) En el nombramiento de los Obispos: falta precisión y certeza al establecer la forma de elaborar la sexta terna, la posibilidad de cambio de la terna por el Santo Padre, la naturaleza y alcance de las objeciones de carácter político general, "se continuarán las negociaciones". b) En el privilegio del fuero: qué efectos produce, y qué fuerza vinculante tiene para la magistratura la negativa de la autoridad eclesiástica a dar su consentimiento para que se instruya el proceso?, etc.

Sin embargo, hay que reconocer con el mismo autor que a un acuerdo internacional o concordato no se le puede exigir siempre la misma precisión y certeza, aun en los más pequeños detalles, que a una norma de derecho interno, que suele obtenerla mediante las normas de rango inferior que se dictan para su aplicación y cumplimiento.

En todo caso, es evidente que "las circunstancias aconsejaban

(1) MARTINEZ DE CARVAJAL: Ob. cit. págs. 472-473.

(2) Ibidem, págs 473- 475.

el establecimiento de un sistema jurídico como el que entonces se aprobó a satisfacción de ambas partes, o tal vez mejor, por tolerancia mutua de ambas partes..."(1). Tenemos que recordar como Pío XII miraba el Concordato español con moderado entusiasmo, como lo prueban sus palabras a los juristas católicos en el mismo 1953 en las que les hizo notar que una es la validez jurídica de un concordato en su conjunto y otro el grado íntimo de satisfacción de las partes contratantes en cada cláusula; válida la firma para todo el documento, cada elemento de éste "puede - dijo - significar un acuerdo expreso - pero puede expresar también una simple tolerancia"(2).

Por todo ello, tenemos que concluir reconociendo con RUIZ GIMENEZ que " el Concordato es una obra humana y, como tal, juzgable; y, además, como todo Concordato, obra de transacción. Aunque se haya llegado a él con espíritu muy abierto por ambas potestades, no deja de ser fruto de negociación. En todo caso es una obra que hay que enfocarla y examinarla en su conjunto y en su contorno, es decir, en su situación histórica, con todo el peso de los antecedentes, con todas las implicaciones e incluso con todas las responsabilidades que contraían el Gobierno y la Santa Sede al firmar el primer Concordato después de acabada en el mundo la segunda guerra mundial"(3).

Ahora bien desde 1953 la evolución en la Iglesia y en el Estado ha sido profunda. No es pues extraño que muchas disposiciones del Concordato que ya resultaban anacrónicas y discutidas en el momento de su firma, carázanse de sentido en nuestros días y hagan realmente urgente la revisión del Concordato.

(1) RUIZ GIMENEZ: Relaciones Iglesia- Estado en el momento actual español, en Rev. de A.C.N.de P.cit. pág. 13.

(2) "Pío XII quedó contento, pero menos", un art. de la Rev. Vida Nueva, de 24 de octubre de 1970, pág. 29.

(3) Vid. MARTÍN ARTAJO: "Es preciso un nuevo marco en las relaciones Iglesia - Estado", en "YA" de 22 de junio de 1974, pág. 22.

3º El Concordato en la actualidad.

Hay que reconocer que el Concordato español de 1953 sigue todavía en vigor(1). Sin embargo, ha sufrido, de una forma u otra notables variaciones. En algunas materias, sin que haya existido cambio expreso, se han dado modificaciones reales en su aplicación. En otras, no han llegado a tener efectividad las normas concordadas(2). Por tanto, creemos conveniente, siguiendo a MARTINEZ DE CARVAJAL(3), hacer las siguientes consideraciones:

1º " Dos son los puntos en que el Concordato de 1953 ha sufrido modificaciones más notables: el matrimonio y la libertad religiosa(4).

a) En materia matrimonial, las modificaciones más importantes han tenido lugar al permitir el matrimonio civil a los apóstatas y hacer más fácil a los católicos poder contraer matrimonio civil. Ello se ha realizado mediante unas disposiciones de diverso rango, como el decreto de 26 de octubre de 1956, la Circular de la Nunciatura a los Obispos españoles de 25 de marzo de 1957, la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 2 de abril de 1957, la ley de 24 de abril de 1958 por la que se modifican algunos artículos del Código civil español, el Decreto de 22 de mayo de 1969 y la instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado, inserta en el Boletín Oficial del Estado del día 15 de abril de 1974, sobre el expediente previo al matrimonio civil, que más adelante examinaremos.

De esta forma, en la práctica, se ha modificado de forma notable la letra o el espíritu del Concordato español de 1953, al abrir a los apóstatas la posibilidad de contraer matrimonio civil y facilitar en buena medida, como veremos, a los católicos la prueba de no profesar la religión católica, para poder contraer matrimonio civil, convirtiendo, así de hecho, al sistema matrimonial español en un

(1) Este capítulo fué redactado antes de concluirse el Acuerdo entre la Santa Sede y el Gobierno español, de 28 de julio de 1976, por el que se suprimen los artículos del actual Concordato referentes a los privilegios del Fuero eclesiástico y al de presentación de obispos, vid. pág. 40 2 y sigs de esta tesis.

(2) MARTINEZ DE CARVAJAL: Ob. cit. pag.475.

(3) Ibidem

(4) LUCES GIL: La reforma del Reglamento del Registro Civil, Madrid, 1970.

sistema cuasi facultativo.

b) **La modificación más importante, sin embargo, es la referente a la libertad religiosa.** En virtud de ella, el sistema de una confesionalidad católica excluyente de cualquier otro culto público y con pura tolerancia para el privado de otras confesiones, ha sido sustituido por el de una confesionalidad con libertad religiosa. Por Ley Orgánica del Estado de 10 de enero de 1967 quedó modificado el artículo 6º del Fuero de los Españoles (recogido como quedó dicho anteriormente, en el Protocolo final del Concordato, en relación con el artículo 1), que quedó redactado en los siguientes términos, ya también anteriormente expuestos: "La profesión y práctica de la religión católica, que es la del estado español, gozará de la protección religiosa que será garantizada por una eficaz tutela jurídica que a la vez salvaguarde la moral y el orden público. Posteriormente, el día 28 de junio de 1967, se promulgó la Ley reguladora del ejercicio del derecho civil a la libertad religiosa, por la que se trata precisamente de amoldar la legislación española, en esta materia, a la doctrina proclamada por la Iglesia católica en el Concilio Vaticano II(1).

2. "En otros puntos el Concordato, o no ha llegado nunca a aplicarse plenamente; o han faltado las disposiciones complementarias oportunas o se han aplicado - con consentimiento tácito o tolerancia por la otra parte - en un sentido que no era exactamente el que se deducía de la letra del tratado o del espíritu del mismo"(2).

Sin pretender entrar aquí en un estudio detallado de todos estos aspectos, recordaremos solamente algunas de las disposiciones afectadas, en un sentido u otro, por esas peculiares condiciones y circunstancias. Piénsese - y sólo a título de ejemplo - en los siguientes artículos: a) el artículo XII nº 1, sobre la creación de un adecuado patrimonio eclesiástico; y el nº 4 sobre la colaboración estatal en orden a crear y financiar instituciones asistenciales en

(1) MARTINEZ DE CARVAJAL: Ob. cit. pág. 476.

(2) Ibidem.

favor del clero anciano, enfermo o inválido, así como la signación de una adecuada pensión a los Prelados residenciales que, por razones de edad o salud, se retiran de su cargo; b) el artículo XXVII, nº 4, sobre la organización para el territorio nacional de pruebas especiales de suficiencia pedagógica para aquellos a quienes debe ser confiada la enseñanza de la Religión en las Universidades y en los centros estatales de enseñanza Media; así como el nº 6 sobre la equiparación del profesorado de religión a los otros profesores en sus derechos y participación en el claustro del centro docente; etc."(1).

3. "El hecho de que muchas de las disposiciones concordatarias no hayan podido llevarse a la práctica - al menos plenamente - así como las modificaciones introducidas, son una prueba más de la incapacidad del mismo para atender a la situación actual. Por otra parte, los cambios realizados no son suficientes, ni los únicos necesarios, para actualizar el Concordato"(2).

El doble defecto señalado más arriba - la inadaptación a la realidad socio-religiosa española y a los principios doctrinales contemporáneos acerca de las relaciones entre la Iglesia y el Estado - se ha acentuado y se ha hecho más patente a más de veintiún años de la firma del Concordato. La evolución que ha tenido lugar, según anteriormente hemos indicado, tanto en la Iglesia como en el Estado ha sido profunda. Resulta pues inaplazable un nuevo planteamiento, serio y sereno, de los problemas pendientes y de los mismos principios básicos que deben regir las relaciones actuales entre la Iglesia y el Estado español"(3).

(1) MARTINEZ DE CARVAJAL: Ob. cit. pág. 476.

(2) Ibidem, págs. 476-477.

(3) Ibidem, pág. 477.

II. Forma de llevar a cabo la revisión.

En cuanto a la forma de llevar a cabo la revisión del Concordato español de 1953, cabría elegir, según advierte MARTINEZ DE CARVAJAL, entre las siguientes soluciones:

1ª "Supresión total o abolición del Concordato, quedando libres ambas Partes para establecer su propia legislación interna.

2ª " Sustitución del actual Concordato por otro, igualmente solemne y completo, de las mismas características formales, aunque de diverso contenido. Dentro de esta solución caben a su vez dos posturas:

a) mantener los principios básicos y las líneas fundamentales del actual concordato introduciendo aquellas modificaciones o retoques que parecen aconsejar la experiencia, así como los cambios producidos en la legislación de la Iglesia y del Estado español, y la evolución sociológica del país.

b) cambiar profundamente el contenido del Concordato, no sólo modificando detalles de su articulado, sino revisando los mismos principios básicos e informadores del acuerdo.

3ª "Proceder a la firma de acuerdos parciales referentes a los problemas más graves y urgentes, que no admititen demora, manteniendo mientras en vigor, en la parte no afectada por los nuevos y sucesivos acuerdos, el actual concordato"(1).

Consideramos conveniente analizar las diversas fórmulas propuestas, considerando sus ventajas e inconvenientes y así justificar o al menos razonar la preferencia por una determinada solución.

1. PRIMERA SOLUCIÓN: SUPRESIÓN DEL CONCORDATO

Quienes niegan que los concordatos tengan vigencia hoy día,

(1) MARTINEZ DE CARVAJAL: Ob. cit. págs. 477-478.

aducen , como advierte JURRESTI los siguientes argumentos:

" Unos dicen, que la doctrina conciliar - después de que el Vaticano II ha formulado la declaración sobre la libertad religiosa, el dinamismo de la vida moderna y el desarrollo de la conciencia y de la formulación de los derechos humanos universales - no admite Concordatos. O que , al menos, el Vaticano II, por su propio dinamismo interno de evitar legalismos y juridismos, nos lleva a una era no concordataria.

Otros alegan que los concordatos suelen ser formulación de privilegios.

Otros suelen aducir que los Concordatos son dañinos por su naturaleza, y ello porque canonizan en cierto sentido al Estado y matan con ello la libertad de la Iglesia, que debe ser intangible.

Otros no admiten que la Iglesia sea una sociedad perfecta, y por tanto que pueda realizar un pacto bilateral con el Estado, en razon de que si la Iglesia es sociedad no lo es en el mismo plano que el Estado.

Otros aducen - y es posición que formuló SARACENI hace ya veinte años(1) - que las relaciones entre Iglesia y Estado no deben formularse a través de potestades, sino a través de los mismos ciudadanos, en cuanto que, siendo éstos católicos y funcionando y actuando como tales, presiones sobre el Estado por los medios políticos establecidos a fin de que la legislación se modifique, cambie, o perfeccione según las exigencias de las conciencias de los mismos ciudadanos.

Por último, otros afirman que no hace falta Concordatos porque las ventajas o las relaciones jurídicas que se establecen en los mismos, pueden formularse y obtenerse por medios menos solemnes y por tanto menos comprometidos, menos sujetos a una

(1) SARACENI (Guido): La potestà della Chiesa in materia temporale e il pensiero degli ultimi cinque Pontifici, Ed. Giuffrè Milano, 1951; cit. por JIMENEZ URRESTI: Relaciones Iglesia - Estado en el momento actual español, en Rev. cit. pág. 9.

vigencia firme y rígida que quede monolítica con el devenir de los tiempos y por lo tanto inadecuada"(1).

Respecto a estas posturas, hay que afirmar en primer lugar que "no hay obstáculo alguno, de tipo teológico, para que la Iglesia pueda firmar acuerdos con los Estados o comunidades políticas. La heterogeneidad indudable entre la Iglesia y el Estado no impide encontrar una base común que legitime la elaboración y firma de un acuerdo. La Iglesia es también comunidad humana con un sistema normativo y una organización propia.

Es cierto que los sujetos - Iglesia y Estado - son heterogéneos, pero tienen el mínimo común necesario - comunidad humana - para entrar en contacto. No se requiere para un tratado o acuerdo homogeneidad absoluta de sujetos. Dificilmente se puede imaginar una diversidad ontológica mayor que la existente entre una persona física y una persona moral y, sin embargo, quedan igualadas en la condición de "partes" de un contrato o un proceso"(2).

Más fuerza tienen sin duda "los argumentos que contra el sistema concordatario se invocan con base jurídica o política. Lo jurídico y lo político dicen relación esencial a una situación concreta. Y es posible que en unas determinadas circunstancias históricas no sea oportuno utilizar un medio o instrumento que, en cambio, sea idóneo y conveniente en otro contexto sociológico o histórico.

El problema pues se plantea en un terreno no de valores absolutos sino de oportunidad, conveniencia y eficacia."(3).

Se hace necesario así, analizar, en que medida el Concordato es innecesario e incluso contraproducente, en las actuales circunstancias históricas

(1) JIMENEZ URRESTI: Relaciones Iglesia - Estado en el momento actual español, en Revi cit. págs 9-10.

(2) MARTINEZ DE CARVAJAL: Temática de la revisión del Concordato español, en ob. cit. pág. 480.

(3) Ibidem, págs. 480- 481.

Ante todo hay que señalar que los concordatos entran dentro de la doctrina conciliar. Pues, el Vaticano II en 1ª declaración sobre la "Libertad religiosa", dice: "...la libertad religiosa... deja íntegra la doctrina tradicional católica del deber moral de los hombres y de las sociedades para con la verdadera religión y única Iglesia de Cristo"(nl,c).

Y en el n.13,b, la misma declaración dice: "En la sociedad humana y ante cualquier potestad pública la Iglesia, en cuanto autoridad espiritual constituida por Cristo, vindica para sí la libertad".Aquí, advierte J. URRESTI, se ve explícita la relación de autoridad espiritual a potestad pública, e implícitos los Concordatos, ya que habla de "vindicar" y se plantea en el plano de reivindicación de derechos, es decir, "de defenderse contra injurias"(n. 13,a)"(1).

Por tanto, las relaciones mutuas entre estas dos instituciones, Iglesia y Estado, pueden hacerse, a la luz del Vaticano II, en el plano de pactos bilaterales o Concordatos.

Ahora bien, es evidente que los Concordatos son posibles dentro del esquema conciliar. No hay ningún texto que los prohíba. Sin embargo lo que sí es discutible es que sean necesarios, dependerá ¿como dice RUIZ GIMENEZ(2), de las circunstancias históricas.

El problema, pues, se plantea en un terreno no de valores absolutos sino de oportunidad, conveniencia y eficacia.

"El Concilio ni impone ni excluye la práctica jurídica de los Concordatos. Dependerá de las circunstancias históricas el que sea conveniente recurrir o no a ese procedimiento de un Tratado o convenio bilateral más o menos sistemático y estable para regular las relaciones entre la Iglesia y el Estado"(3).

(1) JIMENEZ URRESTI: Relaciones Iglesia -Estado en el momento en Rev. cit. pág. 9.

(2) RUIZ GIMENEZ: Relaciones Iglesia - Estado en el momento actual español, en Rev. cit., pág. 12.

(3) Ibidem.

Hay un texto del Vaticano II, que tiene una extraordinaria luminosidad, respecto a lo que puede ser, en esa dinámica postconciliar el problema de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. El texto a que aludimos está en la Constitución *Gaudium et Spes*, en el capítulo 4º de la segunda parte, es decir, el capítulo de la comunidad política. Concretamente se encuentra en el párrafo 76, que dice: "... La comunidad política y la Iglesia son, en sus propios campos, independientes y autónomas la una respecto de la otra. Pero las dos, aunque con diverso título, están al servicio de la vocación personal y social de los mismos hombres. Este servicio lo prestarán con tanta mayor eficacia cuanto ambas sociedades mantengan entre sí una sana colaboración, siempre dentro de las circunstancias de lugares y tiempos"

Pero en lo que más insiste aquí el Concilio es en que "la Iglesia no pone su esperanza en los privilegios que le ofrece el poder civil; antes bien renunciará de buen grado al ejercicio de ciertos derechos legitimamente adquiridos si consta que su uso puede empañar la pureza de su testimonio, o si nuevas circunstancias exigen otras disposiciones. Pero siempre y en todas partes reconózcase su derecho a predicar con libertad la fe, a enseñar su doctrina social, a ejercer sin trabas su misión entre los hombres e incluso a pronunciar el juicio moral, aun en problemas que tienen conexión con el orden político, cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas, utilizando todos y sólo los medios que sean conformes al Evangelio y convengan al bien de todos, según la diversidad de los tiempos y las circunstancias"(1).

Este lenguaje extraordinariamente dinámico nos situa como advierte RUIZ GIMENEZ en una perspectiva de superación hacia el futuro de los Concordatos como instrumentos de relación entre la Iglesia y el Estado(2).

(1) G S 76, en Vaticano II, cit. pág. 394.

(2) RUIZ GIMENEZ: Relaciones Iglesia-Estado en el momento actual español, en Rev. cit. pág.12.

Pues dado que la Iglesia renuncia a todo lo que sean privilegios, (Guadium et Spes, nº 76), no tiene sentido que un Concordato conceda y garantice a la Iglesia unos privilegios que la misma Iglesia proclama no desear y que incluso estima perjudiciales para el ejercicio de su misión propia.

" Si pues la Iglesia sólo aspira a tener la libertad necesaria - en paridad de situación con todos los ciudadanos y grupos humanos - y el reconocimiento de sus derechos básicos - que son y deben ser los de todos los hombres - no se ve necesidad de un acuerdo especial que, insensiblemente, llevará a la Iglesia a una situación de privilegio con relación a los otros grupos humanos"(1).

Por ello, no puede extrañarnos que Pablo VI en su mensaje final del Concilio Vaticano II se dirigiese a los gobernantes de los pueblos en los siguientes términos: "¿Qué pide de vosotros esa Iglesia, después de casi dos mil años de vicisitudes de todas clases en sus relaciones con vosotros, las potencias de la tierra, que os pide hoy?. Os lo dice en uno de los textos de mayor importancia de su Concilio; no os pide más que libertad: la libertad de creer y de predicar su fe; de amar a su Dios y de servirle ; la libertad de vivir y de llevar a los hombres su mensaje de vida"(2).

Y el 19 de enero de 1970 , dirigiéndose a los miembros del Congreso Internacional de Derecho Canónico, reunido en Roma afirmaba :que la Iglesia" no puede desear otra cosa sino que efectivamente le sea asegurado el libre ejercicio de su misión espiritual y moral mediante justas , leales y estables delimitaciones de las respectivas competencias"(3).

En este sentido "la Iglesia , hacia el futuro, como dice RUIZ GIMENEZ, puede y debe pedir que desaparezca toda fórmula concorda-

(1) MARTINEZ DE CARVAJAL: Ob. cit. pág. 481.

(2) PABLO VI: Mensaje final del Concilio: A los gobernantes.

(3) PABLO VI: Discurso al Congreso Internacional de Derecho Canónico, 19- I- 1970, en el "Osservatore Romano", 19-I-1970, y "Ecclesia", 31 - I - 1970 cit. por MARTIN (Isidoro): Libertad de la Iglesia y Concordatos, en Rev, cit. pág. 13.

-taria y que se promulgue en nuestra patria una ley constitucional que garantice a todas las Iglesias, pero también a todas las asociaciones o instituciones humanas religiosas o no, una efectiva igualdad de derechos en torno a esos puntos concretos que...están netamente señalados en la encíclica *Pacem in terris*, en los textos del Concilio Vaticano II, en los del Sínodo de obispos y en las declaraciones y pactos de los organismos internacionales" (1).

Ciertamente, "los concordatos, como ha dicho monseñor DADAGLIO, no serían necesarios si las leyes garantizasen a todos el pleno disfrute de todos los derechos humanos" (2).

Es evidente que "en un Estado moderno, justo y democrático, que reconozca en su ordenamiento jurídico todos los derechos de los ciudadanos, incluidos naturalmente los religiosos, y en una Iglesia purificada y sin deseos de privilegios temporales, el Concordato carecería de sentido" (3).

El futuro sin duda irá por ahí y habrá que caminar hacia eso.

Sin embargo, hoy, no podemos partir del presupuesto de una Iglesia perfecta, sin fisuras ni impurezas, y de un Estado igualmente perfecto dentro de una concepción democrática. Hoy, ~~no es~~ esta, por desgracia la situación real. Y la política y el derecho deben partir de situaciones reales, aunque no respondan al ideal de nuestras concepciones (4).

Por otra parte, lo cambiante de nuestra realidad socio-religiosa, constituye otro argumento en contra de la elaboración de un sólo ~~cuerpo~~ jurídico, la de un concordato único y monolítico.

Por ello, consideramos que la solución más realista e ido-

(1) RUIZ GIMENEZ: "Mesa redonda..." en Rev. cit. pág. 80.

(2) Vid.: "No a los Concordatos", editorial de Rev. Vida Nueva, de 24 de octubre de 1970, pág. 45.

(3) MARTINEZ DE CARVAJAL: Ob. cit. pág. 478.

(4) Ibidem, pág. 485.

-nea,, está, hoy en el medio camino: los acuerdos parciales. Esto le daría agilidad, al mismo tiempo que la posibilidad de evolucionar sin necesidad de tocar , para cualquier aspecto secundario, la totalidad de un concordato único, como instrumento de relación entre la Iglesia y el Estado.

2. SEGUNDA SOLUCION : SUSTITUCION DEL ACTUAL CONCORDATO POR OTRO DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS FORMALES AUNQUE DE DIVERSO CONTENIDO.

Según esta solución los problemas de las relaciones Iglesia-Estado habrán de ser solucionados por medio de tratados en un documento unitario y no en acuerdos parciales(1).

Sin embargo, dentro de esta solución caben , como advierte MARTINEZ DE VARVAJAL, dos posturas fundamentales, con todos los matices que se quiera:

a) Mantener el actual Concordato en sus líneas fundamentales, introduciendo aquellas correcciones de detalle aconsejadas por la experiencia de estos 21 años, incorporando también las nuevas normas emanadas de la Iglesia y el Estado y suprimiendo aquellas que resultan hoy inoperantes.

b) Cabe también un Concordato totalmente nuevo y distinto, elaborado sobre principios radicalmente diversos de los tradicionales, de forma que constituya un cuerpo completo y coherente por el que se regulen todos los problemas que afectan a las relaciones entre la Iglesia y el Estado.

La primera de estas fórmulas - mantener el actual concordato con pequeñas modificaciones - no parece admisible. Las reformas que necesita el Concordato español ... afectan a temas fundamentales e incluso a principios básicos del mismo, sin que puedan reducirse a pequeños retoques o modificaciones.

(1) GARRIGUES: "La relación entre la Iglesia y el Estado es conflictiva", "INFORMACIONES" de 29 de junio de 1974, p. 8.

La segunda **fórmula** - elaboración de un concordato totalmente nuevo y radicalmente distinto del anterior - podría, tal vez, ser aceptable en principio. Pero no en la práctica, al menos si se desea una rápida actualización de ciertos puntos graves y urgentes, que no admiten demora.....

Lo cambiante de nuestra realidad socio-religiosa constituye otro argumento en contra de la elaboración de un concordato completo y nuevo, sin previos ensayos y experiencias. Un "rodaje" parece necesario para que no se nos quece pronto anticuado un nuevo y flamante concordato.

Las materias objeto de la revisión - y esta sería otra razón no presentan todas, ni la misma urgencia, ni la misma claridad en su resolución. Estimamos que hay aspectos urgentes y suficientemente estudiados para poder llegar a un acuerdo. Otros en cambio, o no son tan urgentes, o son más difíciles de resolver por su propia complejidad. Retrasarlos todos hasta que pueda hacerse un concordato completo y perfecto, nos parece inútil y contraproducente" (1).

Todo esto nos lleva a pensar que, la mejor solución no parece precisamente la de un solo cuerpo jurídico, la de un concordato único y monolítico, sino la de una serie de acuerdos y normas jurídicas incluso de diverso rango, bien trabadas entre si y jerarquizadas que en su conjunto constituyan un nuevo tipo de concordato(2).

3. TERCERA SOLUCIÓN: ACUERDOS PARCIALES.

La tercera solución sería ir procediendo sucesivamente a la firma de acuerdos parciales entre la Santa Sede y el Gobierno español. Podría comenzarse por aquellas materias que exigen una urgente revisión y que parecen suficientemente claras. De esta forma pueden afrontarse los problemas más graves y urgentes sin la demora que supondría la elaboración, tan difícil, de un nuevo concordato; las negociaciones podrían ser más ágiles; cabría, incluso,

(1) MARTINEZ DE CARVAJAL: Ob. cit. pág. 486.

(2) Ibidem, p. 487.

establecer normas "ad experimentum", revisables despues de un cierto tiempo; etc.(1). "Eso fué lo que se hizo en el período transcurrido entre el año 1941 y el 1953. Durante doce años se fueron elaborando y firmando acuerdos parciales entre la Santa Sede y el Gobierno español, hasta que todos ellos quedaron incorporados a un cuerpo único y completo: el Concordato de 1953.

Es más, en el fondo, eso mismo se ha venido haciendo -aunque no en la forma de acuerdos solemnes - cuando ha parecido conveniente retocar el actual Concordato. Basta recordar las modificaciones - de mayor o menor alcance y de una u otra naturaleza - introducidas en los años 1958 y 1967, en materia de matrimonio y libertad religiosa, respectivamente"(2).

En este sentido afirma acertadamente monseñor JUBANI: "Por haber cambiado la óptica de la Iglesia en la doctrina de la libertad religiosa y en la perspectiva de sus relaciones con el Estado; por haber aparecido en la vida interna de la Iglesia, en un proceso descentralizador irreversible, las conferencias episcopales; por entrar los Estados modernos por la vía democrática del respeto a las libertades individuales, aunque ello se realice a veces con paso lentísimo y doloroso en los países totalitarios y ateos, se están creando nuevos cauces en el ordenamiento de las relaciones Iglesia - Estado.

El viejo Concordato de 1953 (y el anteproyecto de revisión de 1970) en algunos de sus puntos, continúa diciendo monseñor JUBANI, no puede garantizar plenamente la libertad de la Iglesia en la realización de su misión evangelizadora.

El realismo exige la revisión profunda del concordato, reformando las materias, únicamente las materias en cuestión, mediante acuerdos parciales con la Santa Sede, previa intervención de la Conferencia Episcopal.

A las razones que abogan en favor del camino de los acuerdos

(1) MARTINEZ DE CARVAJAL: Ob. cit. pág. 487.

(2) Ibidem, pág. 488.

parciales, puede añadirse todavía la siguiente: la posible endeblez de un concordato global, cara al futuro del país y de la Iglesia... Tanto por parte del Estado como por parte de la Iglesia debe existir el enorme interés de que la legislación concordada pulse atinadamente la realidad social de la nación, no sólo la actual, sino también la futura, y de que aquella legislación tenga la suficiente flexibilidad de ganarse ~~de ganarse~~ la confianza de la conciencia social. Y nadie duda que en los momentos actuales, abiertos los nuevos cauces del Vaticano II, la conciencia social del país desea se evite toda confusión que oscurezca a los ojos de los hombres la misión espiritual de la Iglesia. El futuro de ésta reside cada vez menos en la protección del Estado y sí en la fuerza misma de su mensaje y la nitidez de su compromiso cristiano"(1).

Asimismo, en favor de los acuerdos parciales, parece haberse pronunciado MANZANARES MARIJUAN al señalar que "en el momento en que nosotros estamos quizá los acuerdos parciales resolverían el problema mejor que los globales cuyas negociaciones se están mostrando excesivamente largas. Los acuerdos sobre los temas más urgentes tal vez hubieran podido ya realizarse, resolviendo las cosas que ya "claman al cielo como la provisión de diócesis vacantes..."(2).

En consecuencia con todo lo expuesto, estamos de acuerdo con MARTINEZ DE CARVAJAL en afirmar que "la forma más idónea de revisar el actual Concordato español es hacerlo mediante acuerdos parciales en los que se vayan resolviendo los problemas más graves y urgentes; se vayan derogando aquellas normas que parecen inútiles o que pueden ser sustituidas por otras de carácter unilateral por parte de la Iglesia o el Estado; manteniendo mientras en vigor aquellas normas concordadas para las que no se haya encontrado todavía la sustitución más conveniente"(3); y "jerarquizar los acuerdos con un sistema de convenios, cuya importancia se puede escalonar para que resulte más orgánico, ágil y revisable por partes, cuando se juzgue necesario,

-
- (1) JUBANY(Monseñor): Revisión de las relaciones Iglesia - Estado- "Acuerdos parciales con la Santa Sede con intervención de la Conferencia episcopal", en "YA de 3 del XII- de 1971, pág.23.
 (2) MANZANARES MARIJUAN: "Declaracionese en la Semana Teológica de León, en la VIII Semana " Vide en " A.B.C. del 29 -VIII-75, p.2
 (3) MARTINEZ DE CARVAJAL: Ob. cit. pág. 488.

incluso a plazo fijo"(1).

III.- Contenido de la revisión.

El contenido del Concordato que necesita urgente y profunda revisión está constituido por aquellos puntos fundamentales que afectan a la estructura y espíritu del mismo Concordato.

Estos puntos fundamentales son los que hacen referencia a las siguientes materias: 1º La confesionalidad del Estado; 2º La libertad de la Iglesia; 3º Los privilegios que la Iglesia y el Estado español se reconocen en el actual Concordato de 27 de agosto de 195 y 4º El matrimonio.

1. La confesionalidad.

La confesionalidad constituye, sin duda, uno de los puntos fundamentales del actual Concordato español más necesitados de revisión.

La confesionalidad, según ya hemos expuesto no debe ser de derecho concordatario sino una decisión de derecho interno.

El Concordato debe dejar, pues, de vincular en ese punto al Estado.

Pero, sobre los problemas del reconocimiento de la confesionalidad en el actual Concordato español y sobre su posible solución nos remitimos a cuanto hemos expuesto ya, al analizar la confesionalidad en el Concordato, (ns. 1 y 1.1).

2. La libertad de la Iglesia.

La libertad de la Iglesia está, en principio y en términos generales, plenamente reconocida y garantizada en el actual Concordato español.

De una forma implícita, en el artículo I, según el cual "la

(1) GIMENEZ Y MARTINEZ DE CARVAJAL: Ponencia sobre "la revisión del Concordato, Estado actual de las negociaciones y perspectivas", en "Jornadas de Derecho Canónico", Vid. en YA, 18-IX, 75, p. 18.

Religión Católica, Apostólica, Romana... gozará de los derechos y de las prerrogativas que le corresponden en conformidad con la Ley Divina y el Derecho Canónico". Entre esos derechos y prerrogativas está , sin duda, como advierte GIMENEZ Y MARTINEZ DE CARVAJAL(1), el de su propia libertad para existir, organizarse y actuar.

De una forma más explícita, en el artículo II., número 1, en el que se establece que " el Estado español reconoce a la Iglesia Católica el carácter de sociedad perfecta y le garantiza el libre y pleno ejercicio de su poder espiritual y de su jurisdicción, así como el libre y público ejercicio de su culto". Y, asimismo, en el número 2 se dispone que " en particular la Santa Sede podrá libremente promulgar y publicar en España cualquier disposición relativa al gobierno de la Iglesia y comunicar sin impedimento con los prelados, el clero y los fieles del país de la misma manera que éstos podrán hacerlo con la Santa Sede. Gozarán de las mismas facultades los Ordinarios y las otras Autoridades eclesiásticas en lo referente a su clero y fieles".

Sin embargo, la libertad de la Iglesia en varios aspectos de su ejercicio se encuentra o bien limitada por otras disposiciones del Concordato, o bien regulada en el mismo convenio de forma discordante con las exigencias del pluralismo religioso que como ya hemos indicado existe actualmente en España.

Por todo ello, se hace necesario revisar el Concordato también en lo que se refiere a estos aspectos de la libertad de la Iglesia y que son fundamentalmente los siguientes: 1º La libertad de la Iglesia para el nombramiento de cargos eclesiásticos; 2º La libertad de la Iglesia en su organización territorial; 3º La libertad de la Iglesia en la enseñanza; y 4º La libertad de la Iglesia en la predicación de su doctrina.

2. 1. La libertad de la Iglesia para el nombramiento de cargos eclesiásticos(2).

La libertad de la Iglesia para el nombramiento de cargos eclesiásticos y especialmente para el nombramiento de sus Obispos , constituye uno de los puntos básicos en la revisión del Concordato actual.

(1) GIMENEZ Y MARTINEZ DE CARVAJAL: Art. cit. en ob. cit. pág.497.

(2) Vid. el primer acuerdo entre la Iglesia y el Estado español de 28 de julio de 1976, en este trabajo, p. 402 y ss.

El derecho de la Iglesia de elegir y nombrar libremente a sus ministros es, ciertamente, una de las consecuencias más obvias del derecho de libertad religiosa y que hay que defender para todas las demás confesiones.

Así pues, la Iglesia debe ser libre para elegir y nombrar a sus ministros, Obispos, Arzobispos etc.

Sin embargo, la Iglesia encuentra limitada en gran medida su libertad en este aspecto en España por el privilegio de presentación que ella misma concede al Estado español en el actual Concordato. (2)

Por eso, se hace también realmente necesario revisar el actual Concordato en cuanto se refiere a este aspecto de la libertad de la Iglesia, a fin de lograr para la misma Iglesia la plena libertad que debe tener para elegir y nombrar a sus Obispos, Arzobispos etc.

Ello, evidentemente, sólo será posible mediante la supresión del indicado privilegio. Pero de este privilegio y de la necesidad de su supresión trataremos más ampliamente cuando analicemos la renuncia de privilegios por parte del Estado.

2. 2-. La libertad de la Iglesia en su organización territorial.

En el actual Concordato español está en principio y de forma general, según ya hemos indicado, reconocida y garantizada la libertad de la Iglesia. Pero, es evidente que, para que la Iglesia pueda organizar adecuadamente su actividad pastoral, deberá tener también libertad para eregir diócesis o cualquier tipo de unidad o circunscripción eclesiástica, así como para introducir cualquier modificación territorial.

Sin embargo, en el actual Concordato español sólo puede hacerse esto previo acuerdo con el Gobierno. Así se dispone en el artículo IX, n. 2, que dice: "Para la erección de una nueva diócesis o provincia eclesiástica y para otros cambios de circunscripciones diocesanas que pudieran juzgarse necesarios, la Santa Sede se pondrá previamente de acuerdo con el Gobierno español, salvo si se tratase de mínimas rectificaciones de territorio reclamadas por el bien de las almas"(1).

(1) Vid. Concordato entre la Santa Sede y España de 27 de agosto de 1953, en Ob. cit. pág. 1021.

(2) Este privilegio acaba de ser suprimido vid. página 402 y ss de t

En este texto, pues, el Concordato limita realmente la libertad de la Iglesia en su organización territorial, que debe considerarse de gran importancia en el momento actual. Ello exige, evidentemente, revisar el Concordato también en este punto a fin de conseguir que la Iglesia tenga plena libertad para organizarse territorialmente.

Por otra parte el Concilio Vaticano II ha señalado la necesidad de revisar las circunscripciones de las diócesis y ha trazado las normas que se han de observar, para conseguirlo.

Y así, en el Decreto *Christus Dominus*, sobre el oficio pastoral de los Obispos dispone: "En cuanto a la circunscripción de las diócesis atañe, en la medida que lo exija el bien de las almas, se atienda cuanto antes con prudencia a la conveniente revisión, dividiéndolas, desmembrándolas o uniéndolas, o mudando sus límites, o determinando lugar más acomodado para sede episcopal, o, finalmente, sobre todo si se trata de diócesis que se componen de grandes ciudades, dándoles una nueva ordenación interna"(1).

Para llevar a cabo tales propósitos debe atenderse como dice el mismo Concilio "si se da el caso, a los límites de las circunscripciones civiles y a las circunstancias particulares de personas y lugares en el orden, por ejemplo, psicológico, económico, geográfico e histórico"(2).

Asimismo en la ejecución de tales cambios o innovaciones se prevé que las Conferencias episcopales de cada país examinen la cuestión, oídos siempre los Obispos de las provincias o regiones a quienes afecte, y luego porpongan sus decisiones y deseos a la Santa Sede(3).

Todo lo expuesto viene a confirmar que la Iglesia debe ser libre para organizarse, como hemos dicho, territorialmente. El Estado puede ser prenotificado, en todo caso, para que exponga excepcionalmente sus razones, en caso de que existan, en orden a alguna variación. Podrá haber incluso, en caso excepcional, negociación entre la Iglesia y el Poder político para buscar un entendimiento en este punto, pero nunca derecho de veto.

(1) Concilio Vaticano II, cit.; Decreto *Christus Dominus*, 22.

(2) Concilio Vaticano II: Decreto *Christus Dominus*, 23.

(3) Concilio Vaticano II: Decreto *Christus Dominus*, 24.

2. 3.- La libertad de la Iglesia en la enseñanza.

La libertad de la Iglesia en la enseñanza está, ciertamente, reconocida y garantizada en el actual Concordato español de 1953, y constituye, como veremos, un verdadero y fundamental derecho.

Sin embargo, las disposiciones del Concordato que regulan este aspecto de la libertad de la Iglesia necesitan, actualmente, de una urgente revisión acorde con las exigencias del derecho de libertad religiosa y del pluralismo religioso existente en España.

El actual Concordato español reconoce y garantiza, en efecto, la libertad de la Iglesia en la enseñanza. De una forma implícita, en el artículo I, al disponer que "la Religión Católica, Apostólica, Romana sigue siendo la única de la Nación española, y gozará de los derechos y de las prerrogativas que le corresponden en conformidad con la Ley Divina y el Derecho Canónico"(1). De una forma expresa, en el artículo II, que garantiza a la Iglesia Católica "el libre y pleno ejercicio de su poder espiritual y de su jurisdicción, así como el libre y público ejercicio del culto"(2).

Però, además de estos principios generales, el actual Concordato español dedica varios artículos al reconocimiento del magisterio de la Iglesia de forma expresa y particular. Estos artículos son: el artículo XXVI, sobre la ortodoxia de la doctrina que se imparta en los centros de enseñanza, y la forma de garantizarla; el artículo XXVII, estableciendo la religión como asignatura ordinaria y obligatoria en todos los centros docentes; el artículo XXVIII, facilitando y favoreciendo el contacto e intercambio entre la teología y las ciencias profanas; el artículo XXIX, sobre la utilización, en orden a la formación religiosa, de las instituciones y servicios de la opinión pública y medios de comunicación social; el artículo XXX, acerca de las Universidades eclesiásticas, Seminarios e Instituciones para la formación de clérigos y religiosos; y el artículo XXXI, que reconoce a la Iglesia el derecho a organizar y dirigir

(1) Concordato entre la Santa Sede y España, de 27 de agosto de 1953, en ob. cit. pág., 1026.

(2) Ibidem.

escuelas públicas de cualquier orden y grado, disponiendo que en lo que se refiere a las disposiciones civiles relativas al reconocimiento a efectos civiles, de los estudios que en ellas se realicen, el Estado procederá de acuerdo con la competente Autoridad eclesiástica, y reconociendo además a la Iglesia el derecho de fundar Colegios Mayores o Residencias universitarias.

En efecto, estos artículos textualmente disponen:

Artículo XXVI.- " En todos los centros docentes de cualquier orden y grado, sean estatales o no estatales, la enseñanza se ajustará a los principios del dogma y de la moral de la Iglesia Católica.

Los Ordinarios ejercerán libremente su misión de vigilancia sobre dichos centros docentes en lo que concierne a la pureza de la fe, las buenas costumbres y la educación religiosa.

Los Ordinarios podrán exigir que no sean permitidos o que sean retirados los libros, publicaciones y material de enseñanza contrarios al dogma y a la moral católica"(1).

Artículo XXVII.- "1. El Estado español garantiza la enseñanza de la Religión católica como materia ordinaria y obligatoria en todos los centros docentes, sean estatales o no estatales, de cualquier orden o grado.

Serán dispensados de tales enseñanzas los hijos de no católicos cuando lo soliciten sus padres o quienes hagan sus veces.

2. En las escuelas primarias del Estado, la enseñanza de la Religión será dada por los propios maestros, salvo el caso de reparo por parte del Ordinario contra alguno de ellos por los motivos a que se refiere el canon 1381, número 3, del Código de Derecho Canónico. Se dará también en forma periódica por el párroco o su delegado por medio de lecciones catequísticas.

3. En los centros estatales de Enseñanza Media la enseñanza de la Religión será dada por profesores sacerdotes o religiosos, y subsidiariamente por profesores seculares, nombrados por la Autoridad civil competente a propuesta del Ordinario diocesano.

Cuando se trate de escuelas o centros militares, la propuesta

(1) Concordato entre la Santa Sede y España, de 27 de agosto de 1953, en ob, cit. pág. 1026.

corresponderá al Vicario General Castrense.

4. La Autoridad civil y la eclesiástica, de común acuerdo, organizarán para todo el territorio nacional pruebas especiales de suficiencia pedagógica para aquellos a quienes deba ser confiada la enseñanza de la Religión en las Universidades y en los centros estatales de Enseñanza Media.

Los candidatos para estos últimos centros que no estén en posesión de grados académicos mayores en las ciencias sagradas (doctores o licenciados o el equivalente en su Orden, si se trata de religiosos), deberán someterse también a especiales pruebas de suficiencia científica.

Los Tribunales examinadores para ambas pruebas estarán compuestos por cinco miembros, tres de ellos eclesiásticos, uno de los cuales ocupará la presidencia.

5. La enseñanza de la Religión en las Universidades y en los centros a ella asimilados se dará por eclesiásticos en posesión del grado académico de doctor, obtenido en una Universidad eclesiástica, o del equivalente en su Orden, si se tratase de religiosos. Una vez realizadas las pruebas de capacidad pedagógica, su nombramiento se hará a propuesta del Ordinario diocesano.

6. Los profesores de Religión nombrados conforme a lo dispuesto en los números 3, 4 y 5 del presente artículo gozarán de los mismos derechos que los otros profesores y formarán parte del claustro de que se trate.

Serán removidos cuando lo requiera el Ordinario diocesano por alguno de los motivos contenidos en el citado canon 1381, número 3, del Código de Derecho Canónico.

El Ordinario diocesano deberá ser previamente oído cuando la remoción de un profesor de Religión fuese considerada necesaria por la Autoridad académica competente por motivos de orden pedagógico o de disciplina.

7. Los profesores de Religión en las escuelas no estatales deberán poseer un especial certificado de idoneidad expedido por el Ordinario propio.

La revocación de tal certificado les priva, sin más, de la capacidad para la enseñanza religiosa.

8. Los programas de Religión para las escuelas tanto estatales como no estatales serán fijados de acuerdo con la competente Autori-

-dad eclesiástica.

Para la enseñanza de la Religión no podrán ser adoptados otros libros de texto que los aprobados por la Autoridad eclesiástica"(1).

Artículo XXVIII. " 1. Las Universidades del Estado, de acuerdo con la competente Autoridad eclesiástica, podrán organizar cursos sistemáticos especialmente de Filosofía escolástica, Sagrada Teología y Derecho canónico, con programas y libros de texto aprobados por la misma Autoridad eclesiástica.

Podrán enseñar en estos cursos profesores sacerdotes, religiosos o seculares que posean grados académicos mayores otorgados por una Universidad eclesiástica, o títulos equivalentes obtenidos en su propia Orden, si se trata de religiosos, y que estén en posesión del nihil obstat del Ordinario diocesano.

2. Las Autoridades eclesiásticas permitirán que, en algunas de las Universidades dependientes de ellas, se matriculen los estudiantes seculares en las Facultades superiores de Sagrada Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Historia eclesiástica, etc. asistan a sus cursos, salvo en aquellos que por su índole estén reservados exclusivamente a los estudiantes eclesiásticos y en ellas alcancen los respectivos títulos académicos."(2).

Artículo XXIX. "El Estado cuidará de que en las instituciones y servicios de formación de la opinión pública, en particular en los programas de radiodifusión y televisión, se dé el conveniente puesto a la exposición y defensa de la verdad religiosa por medio de sacerdotes y religiosos designados de acuerdo con el respectivo Ordinario".(3).

Artículo XXX. " 1. Las Universidades eclesiásticas, los Seminarios y las demás instituciones católicas para la formación y la cultura de los clérigos y religiosos continuarán dependiendo exclusivamente de la Autoridad eclesiástica y gozarán del reconocimiento y garantía del Estado.

Seguirán en vigor las normas del Acuerdo de 8 de diciembre de 1946 en todo lo que concierne a los Seminarios y Universidades de estudios eclesiásticos.

(1) Concordato entre la Santa Sede y España, de 27 de agosto de 1953, en ob. cit. pág. 1026- 1027.

(2) Ibidem, pág. 1027.

(3) Ibidem.

El Estado procurará ayudar económicamente, en la medida de lo posible a las casas de formación de las Ordenes y Congregaciones religiosas, especialmente a aquellas de carácter misional.

2. Los grados mayores en ciencias eclesiásticas conferidos a clérigos o a seglares por las Facultades aprobadas por la Santa Sede serán reconocidos, a todos los efectos, por el Estado español.

3. Dichos grados mayores en ciencias eclesiásticas serán considerados título suficiente para la enseñanza, en calidad de profesor titular, de las disciplinas de la Sección de Letras en los centros de Enseñanza Media dependientes de la Autoridad eclesiástica"(1).

Artículo XXXI. " 1. La Iglesia podrá libremente ejercer el derecho que le compete, según el canon 1375 del Código de Derecho Canónico, de organizar y dirigir escuelas públicas de cualquier orden y grado, incluso para seglares.

En lo que se refiere a las disposiciones civiles relativas al reconocimiento, a efectos civiles, de los estudios que en ellas se realicen, el Estado procederá de acuerdo con la competente Autoridad eclesiástica.

2. La Iglesia podrá fundar colegios mayores o residencias, adscritos a los respectivos distritos universitarios, los cuales gozarán de los beneficios previstos por las leyes para tales instituciones"(2).

Por otra parte, y para dar efectividad a lo que establece el artículo XXXI del Concordato, la Iglesia y el Estado español firmaron el Convenio de 5 de abril de 1962, "sobre el reconocimiento, a efectos civiles, de los estudios de ciencias no eclesiásticas realizados en España en Universidades de la Iglesia"(3). Dicho Convenio en sus principales artículos dice así: Artículo 1. Este artículo determina el objeto del Convenio, disponiendo: " El Estado Español reconoce, conforme al artículo XXXI del Concordato vigente, las Universidades de la Iglesia , creadas, dentro de su territorio, con arreglo al Canon 1376 del Codex Iuris Canonici.

Reconoce , asimismo, efectos civiles a los estudios que se realicen en las Facultades y Escuelas Técnicas Superiores de las mismas dedicadas a ciencias no eclesiásticas, con los requisitos que se ex-

(1) Concordato entre la Santa Sede y España, de 27 de agosto de 1953, en ob. cit. pág. 1027.

(2) Ibidem, pág. 1027-1028.

(3) Vid. B.O.E. de 20 de julio de 1962.

-presan en el presente Convenio"(1).

Artículo 4. " El reconocimiento de efectos civiles sólo puede referirse a estudios de las Facultades que tenga el Estado español, no, por lo tanto, a los títulos de nuevas carreras universitarias o técnicas. Igualmente, sólo podrán reconocerse efectos civiles a aquellas Facultades y Escuelas Técnicas Superiores(E.T.S.) que estén dentro de la misma provincia eclesiástica - arzobispado - que su sede central.

Artículo 5º. Este artículo es sin duda el más exigente de todos. Dice así: 1º "Los planes de estudio han de ser "iguales" a los oficiales y las pruebas académicas, cursos y grados, los "mismos" que en las universidades y E. T. S. del Estado.

2º Para que los estudios cursados sean automáticamente equiparados en sus efectos civiles a los del Estado, se requiere , en cuanto al profesorado:

a) Que la plantilla de catedráticos sea igual a la de los centros del Estado y esté ocupada en sus tres cuartas partes - el 75 por 100 - efectivamente por profesores que tengan el título civil de catedrático numerario de universidad de la respectiva asignatura.

b) El resto de la plantilla - el 25 por 100 - debe tener una habilitación especial, que será otorgada por el Ministerio mediante unos exámenes iguales en todo a las oposiciones a cátedras del escalafón correspondiente. Esta habilitación no valdrá para los centros del Estado.

c) Se concede un plazo de cinco años para dar pleno cumplimiento a los porcentajes indicados: en el primer curso, un mínimo del 30 por 100 de catedráticos y del 15 de habilitados; al cabo de tres cursos, del 50 por 100 de catedráticos y el 25 de habilitados; a los cinco años, el 75 por 100 de catedráticos y el 25 de habilitados. Durante este tiempo , el resto de las cátedras de la plantilla estará encomendado a encargados de curso.

3. En las Universidades de este tipo habrá un representante del Ministerio de Educación y Ciencia, que será necesariamente catedrático numerario de universidad o E.T. del Estado, que gozará de li-

(1) Vid. B. O. E. de 20 de julio de 1962; BARBERENA(Tomás Gt.): en "Problemas de enseñanza en el Concordato español", en "La institución concordataria en la actualidad, cit. pág. 567.

-bre acceso a todos los actos académicos de enseñanza y exámenes a fin de informar al Ministerio del régimen, condiciones de la enseñanza y exámenes, especialmente en una memoria anual"(1).

Artículo 6º "Los estudios realizados en universidades de la Iglesia que no reúnan los requisitos del artículo 5º en cuanto al profesorado: 75 por 100 de catedráticos y 25 por 100 de habilitados podrán ser reconocidos para sus efectos civiles, pero para ello los estudiantes deben acreditar al final de sus estudios que poseen una formación y capacidad no inferior a la que se exige en los centros oficiales, Para ello han de aprobar una prueba de conjunto teórica y práctica que será juzgada por un tribunal nombrado por el Ministerio y compuesto por un presidente, con título de rango igual a los catedráticos numerarios de los centros estatales; dos vocales catedráticos numerarios civiles y dos vocales profesores numerarios de la universidad o E. T. S. de la Iglesia"(2).

Este Convenio fué un avance importante , un primer paso , en la implantación efectiva de la libertad de enseñanza universitaria, pero está lleno de limitaciones, de exigencias, de controles; en una palabra de recelo y desconfianza (3) Resaltaban en él, ya entonces, la falta de autonomía de las universidades de la Iglesia: en todo habían de ser iguales a las estatales; la desconfianza que se plasma en esa figura del representante del Ministerio, y, sobre todo, el requisito de que los profesores fueran catedráticos numerarios en sus tres cuartas partes y habilitados en la cuarta parte restante(4).

El sistema de oposiciones a cátedra es, como dice LUMBRERAS(5), peculiar de España; no es un título académico, sino un método , discutible y discutido, de seleccionar el Estado a sus profesores.

"El requisito de que los profesores sean en tan alta proporción catedráticos numerarios, ¿no encarecería considerablemente el coste de la enseñanza, lo que repercutiría en las pensiones a las familias? ¿Por qué no basta el título de doctor? Todos sabemos que las oposiciones

(1) B.O.E. de 20 de julio de 1962; LUMBRERAS MEABE: Un problema sin resolver(II): Universidades no estatales: Convenio universitario entre la Santa Sede y el Estado Español", en "YA" de 18 de julio de 1974, págs.7-8

(2) Ibidem.

(3) LUMBRERAS MEABE: Art. cit. en Diario cit.

(4) Ibidem.

(5) Ibidem.

estatales a cátedras se prodigan muy poco. ¿De dónde iban a conseguir las universidades no estatales tantos catedráticos? Sólo a costa de las Universidades del Estado. ¿Es esto viable?

Además, ¿tienen todas las facultades del Estado sus E.T.S. el 75 por 100 de su plantilla cubierto con catedráticos numerarios y el 25 por 100 restante por habilitados?"(1). A título informativo, damos las estadísticas del I.N.E. referentes al curso 1973-74 sobre el profesorado de las universidades:

- El total de los profesores es de 15.973.
- De ellos, 15.054 están integrados en cuerpos del Estado: 1.261 como catedráticos numerarios, 416 como agregados y 1.033 como adjuntos.
- El personal contratado suma 12.206 profesores: 161 catedráticos, 538 profesores agregados; 2.185 adjuntos; 500 profesores especiales; 2.810 encargados de curso y 6.012 ayudantes.
- Y el resto del personal docente: profesores de religión, formación política, educación física, maestros de talleres o laboratorio, tec., son 1057(2).

Ante estas estadísticas cabe preguntarse: ¿Es razonable exigir a las universidades no estatales en cuanto al profesorado lo que no pueden cumplir la mayoría de las universidades del Estado? Además de que se trata, como advierte LUMBRERAS, de un sistema típicamente estatal español. En el resto de los países no existe y en el nuestro es muy discutido y creemos que ha de ser revisado, dado el futuro, y aun el actual crecimiento de universitarios(3).

Por otra parte, hemos de señalar que al interpretar el texto del artículo 1 del Convenio, parte de la doctrina(4) y sobre todo la práctica del Consejo Nacional de Educación, según pone de relieve BARBERENA(5), consideran que quedan fuera del objeto del Convenio los estudios eclesiásticos, precisamente por no estar regula-

(1) LUMBRERAS MEABE: Art. cit. en Diario y pág. cit.

(2) Estadística de la Enseñanza - Curso 1973-74, presentada por el I. N. E., Madrid, 1975, págs. 32 y 234.

(3) LUMBRERAS MEABE: Art. cit. en Diario y pág. cit.

(4) FUENMAYOR(Amadeo de): El Convenio entre la Santa Sede y España sobre Universidades de estudios civiles, Pamplona, 1966, p. 89.

(5) BARBERENA: Art. cit. en ob. cit. pág. 568.

-dos por el canon 1376 que aquí se cita, sino por la Constitución Deus scientiarum Dominus de 24 de mayo de 1931, según la cual son Universidades y Facultades de estudios eclesiásticos las que bajo la autoridad de la Santa Sede están instituidas para cultivar las disciplinas sacras vel cum sacris conexas(1).

Según esta interpretación, no pueden reconocerse los estudios realizados en una Universidad o Facultad de la Iglesia erigida con arreglo a dicha Constitución puesto que ese modo de erigir clasifica los estudios de esas Universidades o Facultades como eclesiásticos a la vez que las contradistingue de las Universidades o Facultades erigidas con arreglo al canon 1376 que serían las dedicadas a estudios profanos. Con la cita al canon 1376. el Convenio, como advierte BARBERENA(2), habría contribuido además- según esa interpretación - a clarificar la terminología, distinguiendo la Universidad "católica" que en sentido estricto es la dedicada a estudios no eclesiásticos de los que habla el canon 1376, de la Universidad que cultiva los estudios eclesiásticos, la cual no debe llamarse católica en sentido propio sino eclesiástica o pontificia.

Sin embargo, creemos que esa doctrina contiene una interpretación errónea del canon 1376 y supone, asimismo, un errado concepto restrictivo de los estudios eclesiásticos(3).

Ningún intérprete afirma que el canon 1376 habla de estudios no eclesiásticos, Tal interpretación es incluso ajena al texto del artículo 1º del citado Convenio, que en su apartado primero se refiere al reconocimiento general y en el segundo al reconocimiento a efectos civiles. Cuando el Convenio habla de reconocimientos civiles no se apoya en el canon 1376, sino que se limita a decir que se reconocen las ciencias no eclesiásticas(4).

La consecuencia de todo esto, como dice BARBERENA(5), es que la postura exegética defendida por algunos y aceptada por el Consejo Nacional de Educación no es correcta; al contrario debemos admitir que el Convenio se refiere a toda clase de estudios que sean reconocibles por el Estado, porque corresponden a estudios y títulos

(1) BARBERENA: Art. cit. en ob. cit. pág. 568.

(2) Ibidem.

(3) Ibidem.

(4) Ibidem.

(5) Ibidem, pág. 569.

profesionales que el Estado tiene establecidos en su propia esfera, prescindiendo totalmente del grado de sacralidad atribuible a los mismos y estén o no regulados por la Constitución Deus scientiarum Dominus(1).

El Convenio , pues, es una manera de realizar lo establecido en el artículo XXXI del Concordato pero no excluye otras(2)."El Estado se compromete en el Convenio a reconocer los estudios que llenan las condiciones del Convenio, pero evidentemente no se ha comprometido a no reconocer si no es dentro de las condiciones del Convenio. Si éste desapareciera hoy total o parcialmente, continuaría vigente el artículo XXXI del Concordato y cabría siempre el reconocimiento con sola la aquiescencia de la competente Autoridad eclesiástica, que bien puede ser la Conferencia de obispos, pues el Concordato no pide que sea precisamente la Santa Sede la Autoridad encargada de prestar su conformidad . La nueva Ley de educación viene a corroborar estas posibilidades al admitir como norma general centros no regulados por el Convenio sino nacidos de iniciativa privada, los cuales ofrecen una posibilidad extraconcordataria de docencia y titulación"(3).

En efecto la nueva ley general de educación(4) dice así:

Artículo 5. 1. " Las entidades públicas y privadas y los particulares pueden promover y sostener Centros docentes que se ajustarán a lo establecido en esta Ley y en las disposiciones que la desarrollen" .

Artículo 4. "Corresponde al Gobierno

d) Estimular y proteger la libre iniciativa de la sociedad, encaminada al logro de los fines educativos, y eliminar los obstáculos que los impidan o dificulten, así como los influjos extraescolares que perjudiquen la formación y la educación. e) La reglamentación de todas las enseñanzas y la concesión y reconocimiento de los títulos correspondientes" .

Artículo 94. 1. " Todas las personas físicas y jurídicas de nacionalidad española, tanto públicas como privadas, podrán crear Cen-

(1) MALDONADO: El Convenio de 5 de abril de 1962 sobre reconocimiento a efectos civiles de los estudios de ciencias no ecles-
iásticas, en Rev.E.de D.Canónico, 18(1963) 137-139.

(2) Ibidem; FUENMAYOR: Ob. cit. pág. 191.

(3) BARBERENA: Art. cit. en ob. y cit. pág. 572.

(4) Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educa-
tiva de 4 de agosto de 1970, en B.O.E. de 6 de agosto de 1970.

-tros docentes que impartan enseñanzas reguladas en el título I de esta Ley, acomodándose en lo esencial a lo que respecto a los Centros estatales nivel, ciclo o modalidad se establece en la presente Ley y en las normas que la desarrollan sin perjuicio de lo dispuesto en las normas concordadas".

Aunque estos principios están poco desarrollados en la Ley, sobre todo en lo que a escuelas de grado superior se refiere, abren sin embargo para el futuro, como advierte BARBERENA(1), fecundas posibilidades de actuación.

Es francamente laudable el sentido pluralista con que la Ley enfoca la educación, al ofrecer la posibilidad de que converjan en ella no sólo elementos estatales sino también no estatales.

"La ley general de Educación es, como dice LUMBRERAS, la culminación de la reconquista universitaria, suprimida hace poco más de un siglo. Lo que urge ahora es pasar de la declaración a las realizaciones"(2). Pero, en este sentido, hemos de reconocer que lamentablemente en España, según indica MARTIN MARTINEZ, ni antes ni ahora con la nueva ley general de Educación se goza en la práctica de una auténtica libertad docente que con todas las garantías necesarias para evitar abusos intolerables excluya cualquier monopolio escolar. Falta mucho camino que recorrer en España para llegar a un reparto proporcional del presupuesto nacional de educación de manera que el derecho de los padres a escoger libremente el centro de educación para sus hijos no se vea obstaculizado por motivos económicos(3).

Es de desear que la fórmula de la enseñanza se preconice, según señala RUIZ-GIMENEZ, como un gran servicio social en el que participan el Estado, la Iglesia y las diferentes asociaciones de carácter profesional, convergentes todos en una gran tarea nacional(4).

En cuanto al Convenio es claro que supuso en aquellos momentos, como ya hemos señalado un paso importante en el reconocimiento y la implantación efectiva de las universidades no estatales, concretamente de la Iglesia, sin embargo hoy resulta un instrumento desfa-

1 BARBERENA: Art. cit. en ob. cit. pág. 572.

(2) LUMBRERAS MEABE: Art. cit. en Diario "YA" cit. pág. 7.

(3) MARTIN MARTINEZ: Libertad de la Iglesia y Concordatos en Rev., de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid, Madrid, 1970, Núm. 37, págs. 24-25.

(4) RUIZ-GIMENEZ: "Insatisfacciones"-Mesa redonda: "La Iglesia y la comunidad política", en Rev. Cuadernos para el Diálogo, 1970, II, pág. 80.

-sado e inadecuado. Desfasado porque no tiene en cuenta la nueva situación creada a partir de la ley General de Educación(1).

En efecto, en la nueva Ley está aceptada la autonomía universitaria. En particular el plan de estudios pertenece de tal modo a la autonomía universitaria que el sistema hasta ahora vigente de fijación del plan por el Gobierno pasa a ser un procedimiento subsidiario, sólo posible en el caso de que la Universidad no elabore su propio plan (2). En cambio, el artículo 5, número 2 del Convenio da por supuesto, según hemos visto, que en los Centros oficiales del Estado hay un plan de estudios idénticos en todos ellos, lo cual sucedía cuando se firmó el Convenio, pero hoy no es así. Significa esto, que los principios de autonomía consagrados en la nueva Ley pasan ipso facto a tener validez en las Universidades y Facultades reguladas por el Convenio? Esta interpretación parece, sin duda, la más razonable, si bien hay que admitir, como indica BARBERENA(3), que no se ajusta a la letra del texto pactado y que una interpretación restrictiva podría poner en dificultad a dichas Universidades.

"Este desajuste entre la Ley nueva y el artículo 5 del Convenio deja abierto un tema de discusión que evidentemente debe resolverse en favor de una amplia autonomía Universitaria católica"(4).

Pero, además, el Convenio resulta inadecuado, porque en las Universidades católicas acogidas al artículo 6 del Convenio los alumnos al fin de su carrera tienen que revalidar ante un Tribunal Mixto sus estudios mediante una prueba de conjunto "que se verificará de modo igual a los que menciona el artículo 20 de la Ley de Ordenación Universitaria de 29 de julio de 1943(5); es decir, que en esta prueba no se establece preceptivamente el examen del aprovechamiento del alumno a lo largo de su currículum, lo cual no es sólo una exigencia de la autonomía en cuanto que la Universidad reconocida debe poder establecer legítimamente su sistema de pruebas y su baremo de puntuaciones, sino

(1) SEBASTIAN AGUILAR(Fernando), rector de la Universidad Pontificia de Salamanca): "Universidad i Política", en "YA", 2-XI-75.

(2) Vid. Ley General de Educación cit. arts 56. 1. y 37. 1 en B.O. E. cit.

(3) BARBERENA: Art. cit. en ob. cit. pág. 573.

(4) Ibidem.

(5) B.O.E. de 31 de julio de 1943.

que además ello está preceptuado expresamente, como advierte BARBERENA(1), en la nueva Ley(2). Ello resulta, como hemos dicho, inadecuado porque lo que entonces podía parecer un trato justo, hoy, dado el desarrollo de las universidades de la Iglesia resulta gravemente discriminatorio y dificulta incluso la colaboración que dichas universidades podrían prestar para aliviar los problemas universitarios en general(3). Resulta realmente injusto, como afirma SEBASTIAN AGUILAR(4), que los alumnos de la Universidad de la Iglesia después de haber seguido regularmente los planes de estudio y los programas oficiales, con profesores perfectamente cualificados tengan que someterse a una reválida ante un tribunal compuesto mayoritariamente por profesores de la universidad estatal. Se da la circunstancia curiosa, como dice el citado autor, de que algunos de los profesores de la Universidad de la Iglesia enseñan también en la Universidad del Estado; lo que allí enseñan se da por bueno, y lo que enseñan en su propia casa tiene que estar sometido al control de la reválida(5).

En realidad son muchas las contradicciones entre el Convenio y la Ley. Sin embargo, un resumen de las más llamativas podría ser este:

1º Según el convenio, los planes de estudio han de ser "iguales" a los planes oficiales. Según la ley, los planes de estudio serán elaborados por cada Universidad.

2º Según el convenio, las pruebas académicas han de ser "las mismas" que en las universidades del Estado. Según la ley, cada Universidad determinará por sí misma los procedimientos de control y verificación de conocimientos.

3º Según el convenio, las universidades han de tener, para que sus títulos tengan efectos civiles, el 75 por 100 de la plantilla cubierta por catedráticos numerarios y el 25 por 100 restante por quienes hayan superado una habilitación especial. Según la ley, en las universidades no estatales sólo se requiere el máximo título académico, el de doctor.

(1) BARBERENA: Art. cit. en ob. cit. págs. 573-574.

(2) Ley General de Educación cit. en B.O.E.: Art. 38.

(3) SEBASTIAN AGUILAR(Fernando): Art. cit. en "YA"cit.

(4) Ibidem.

(5) Ibidem.

4º Según el convenio, las universidades no estatales a que se refiere han de tener un representante del Ministerio, catedrático numerario, que vigilará e informará de todo al mismo. Según la ley, tal figura es desconocida"(1). Resulta, pues, necesario ajustar el Convenio a la nueva Ley de educación con el fin de lograr una amplia autonomía de la Universidad católica. Consideramos, sin embargo, una solución más satisfactoria el promulgar las bases de las universidades no estatales de acuerdo con el espíritu y la letra de la ley General de Educación. A dichas bases se podrían acoger todas las universidades no estatales, las de la Iglesia y las demás, las presentes y las futuras, y tales bases serían un estímulo para la creación de nuevas universidades no estatales, tan necesarias(2).

"Las exigencias del convenio, que en su día fué un paso importante, además de estar anticuadas, son irrealizables y, por tanto, una rémora para la apertura de universidades no estatales. Además de que el convenio sólo tiene valor para las universidades de la Iglesia, pero ninguno para otras universidades no estatales de otras personas físicas o jurídicas, privadas o públicas inferiores"(3). Es urgente, pues, como señala LUMBRERAS(4), la promulgación de unas bases conforme a la Ley.

Por lo demás, de los textos concordatarios examinados se deduce claramente que la libertad de la Iglesia en la enseñanza, aún en materias profanas, está reconocida y garantizada en el actual Concordato español de 1953. Ello es lógico, pues esta libertad de que goza la Iglesia en España no constituye privilegio alguno antes bien es un verdadero y fundamental derecho. Es realmente de justicia que pueda la Iglesia establecer y dirigir libremente escuelas de cualquier orden y grado. Y así el Concilio Vaticano II, acertadamente declara: "Este sagrado Concilio proclama de nuevo el derecho de la Iglesia a establecer y dirigir libremente escuelas de cualquier orden y grado, declarado ya en muchísimos documentos del Magisterio"(5)

(1) LUMBRERAS MEABE: Un problema sin resolver(III)- "Urge promulgar las bases de las universidades no estatales", en "YA" de 22 de junio de 1974, pág. 8

(2) Ibidem.

(3) Ibidem.

(4) Ibidem.

(5) Vaticano II, Grvissimum educationes, 8.

Es realmente deber del Estado garantizar la plena libertad decente, oponiéndose a cualquier monopolio escolar, actitud contraria, ciertamente, a los derechos naturales de la persona humana(1). Por eso, "la Iglesia aplaude cordialmente a las autoridades y sociedades civiles que, teniendo en cuenta el pluralismo de la sociedad moderna y favoreciendo la debida libertad religiosa, ayudan a las familias para que pueda darse a sus hijos en todas las escuelas una educación conforme a los principios morales y religiosos de las familias"(2). Ciertamente es preciso que los padres

Con mucha razón, pues, el Episcopado español, al hablar del derecho de la Iglesia en materia de enseñanza, declara: "Sólo queremos referirnos a dos derechos de la Iglesia en esta materia que, con frecuencia, vemos se confunden, considerándolos como un privilegio.

El primero es el que asiste a la Iglesia, por estrictas razones de bien común, a impartir enseñanzas, en cualquier grado o rama del saber, dentro de un régimen de auténtica igualdad de oportunidades. Se trata de un derecho fundamental de la persona humana, no exclusivo de la Iglesia, sino común a toda la colectividad civil, con el cual se corresponde el que, a su vez asiste a los padres de familia para escoger el centro educativo que prefieran para sus hijos. Derecho que, además, comporta el deber, por parte del Estado de ofrecer a la Iglesia, lo mismo que a cualquier otra institución capacitada para ello y dispuesta a cumplir los requisitos que regulen justamente la actividad educativa, los medios necesarios para servir a tan elevado fin social, en proporción a las posibilidades reales del país y al servicio efectivo que realicen, sin discriminación en favor de los centros estatales.

Nótese bien que este derecho no envuelve privilegio alguno para la Iglesia. Si acaso, ésta tiene en su favor el hecho cierto de la amplia y prolongada ejecutoria de servicios que viene prestando a la sociedad.

El segundo es un derecho de la colectividad católica española a

(1) Vaticano II, Gravissimum educationes, 8.

(2) Ibidem, 7.

recibir formación religiosa en los centros escolares. Tampoco aquí hay ninguna clase de privilegios para la Iglesia, supuesto que esa formación es parte integrante de la educación y por lo mismo del bien común, considerados desde una visión cristiana.

Consecuencia de ese derecho es el deber del Estado de proveer a aspecto tan esencial de la educación, y de arbitrar para ello los medios adecuados. La programación de la enseñanza religiosa en los distintos niveles educativos es uno de los campos principales para una sana colaboración entre el Estado, por ser responsable del bien común del país, y la Iglesia, por su competencia específica en la materia.

Sólo nos resta añadir- terminan diciendo los obispos españoles en esta declaración - que también en este campo debe quedar siempre a salvo el derecho de todos los ciudadanos a la libertad religiosa"(1).

A todo esto hemos de señalar, sin embargo, que lo que no constituye privilegio desde un punto de vista estricto puede resultar privilegio en una situación histórica concreta, si por ejemplo, el derecho de enseñanza sólo se reconoce a la Iglesia Católica y no a todas las comunidades humanas que respeten un mínimo ético, dentro de un orden jurídico nacional(2). Y en este sentido, hay que reconocer que esta libertad de que deben gozar también todas las confesiones religiosas no católicas, que respeten ese mínimo ético no está suficientemente reconocida y garantizada en el actual Concordato español, que se limita a dispensar a los hijos de los no católicos de la obligatoriedad de recibir enseñanza católica en los centros docentes; cuando es evidente que el Estado deberá proveer incluso a la educación religiosa de los acatólicos cuando estos fueran en número suficiente y lo desearan(3).

Asimismo, creemos que el actual Concordato español debería ser revisado en los siguientes puntos:

a) Deberían revisarse, como dice BARBERENA(4), aquellas normas

(1) "La Iglesia y la comunidad política", nº 61 en Rev. Ecclesia, de 27 de enero de 1973, págs. 36-37.

(2) RUIZ-GIMENEZ: "Relaciones Iglesia - Estado en el momento actual español", en B. I. de A.C.N. de P. cit. pág. 13

(3) BARBERENA: Art. cit. en ob. cit. pág. 575.

(4) Ibidem,

que atribuyen a los Ordinarios funciones y poderes que chocan con la mentalidad actual y que chocaban ya cuando se firmó el Concordato, como lo demuestra el hecho de que no han sido ejercitados. Así la vigilancia de los centros estatales de cualquier orden y grado que establece el artículo XXVI, ya transcrito; la facultad de exigir que sean retirados los libros, publicaciones y material de enseñanza que estimen contrarios al dogma y a la moral católica, a que se refiere también el citado artículo. "Normas como estas, dice acertadamente BARBERENA, pueden considerarse, hoy, como vestigios de poder civil de los jerarcas de la Iglesia poco conformes con la naturaleza de su misión lo cual aconseja mitigar tales normas legales o incluso suprimirlas"(1).

b) Deberían revisarse, asimismo, las normas referentes al nombramiento de los profesores de Religión contenidas en el artículo XXVII, también ya transcrito. En este artículo se regula, el nombramiento de los profesores de Religión, como hemos visto, con detalles que no es necesario descenda un Concordato. Por otra parte, el criterio adoptado con relación a dichos profesores es, como señala el BARBERENA(2), de un clericalismo exagerado. Para la enseñanza superior se preceptúa que el profesor sea eclesiástico(3) y para la segunda enseñanza sólo subsidiariamente se admite al profesor seglar(4).

c) En el mismo artículo XXVII el actual Concordato establece pruebas de suficiencia científica y pedagógica para los cargos de profesores de Religión. Se prevee incluso la composición del Tribunal: cinco miembros, tres de ellos, como ya hemos podido comprobar en el texto de este artículo, eclesiásticos, debiendo ser Presidente uno de éstos. Tales tribunales, no han funcionado y no es previsible que hoy se puedan poner en funcionamiento, por lo cual parece lógico suprimirlos.

El Concordato establece, en el citado artículo XXVII, como hemos podido observar, que los profesores de Religión en los Centros es-

(1) BARBERENA: Art. cit. en ob. cit. pág. 576.

(2) Ibidem.

(3) Concordato entre la Santa Sede y España de 27 de agosto de 1953, art. XXVII, nº 5.

(4) Ibidem, nº 3

-tatales sean nombrados por la Autoridad civil competente a propuesta del Ordinario diocesano(1) y que dichos profesores en las escuelas no estatales habrán de poseer un especial certificado de idoneidad expedido por el Ordinario propio(2); disponiendo, además, en el primer caso, que los profesores serán removidos cuando lo requiera el Ordinario diocesano por alguno de los motivos contenidos en el canon 1381 del Código de Derecho Canónico y en el segundo caso, que la revocación de tal certificado de idoneidad les privará sin más de la capacidad para la enseñanza religiosa(3).

Estas disposiciones sujetan, evidentemente, al profesor de Religión a su correspondiente Ordinario, lo cual "tropieza, como advierte BARBERENA, con los vigentes conceptos de autonomía universitaria y crea el peligro, no irreal, de la presencia en los centros universitarios de profesores más notables por su afección a su Ordinario que por su prestigio científico"(4).

Por todo ello, parece necesario revisar también dichas disposiciones de acuerdo con las exigencias de la mencionada autonomía universitaria, que, como hemos visto se reconoce en la Ley General de Educación.

Ahora bien, para una correcta revisión de tales disposiciones, se habrá de tener presente que la programación de la enseñanza religiosa en los distintos niveles educativos es uno de los campos principales para una sana colaboración entre el Estado, por ser responsable del bien común del país, y la Iglesia, por su competencia específica en la materia"(5); lo cual quiere decir que dicha programación deberá ser regulada por el Gobierno, previo acuerdo con la Jerarquía eclesiástica(6).

En cuanto a lo establecido en el número 6 del citado artículo XXVII sobre la equiparación del profesorado de religión a los otros profesores en sus derechos y participación en el claustro del centro docente, creemos necesario y urgente el darle completa efecti-

(1) Consorcio entre la Santa Sede y España de 27 de agosto de 1953, cit., artículo XXVII, números 3 y 5.

(2) Ibidem, nº 7.

(3) Ibidem, nº. 6 y 7.

(4) BARBERENA: Art. cit., p. ob. cit. pág. 576.

(5) "La Iglesia y la comunidad política", cit. en Rev. cit. p. 37.

(6) Vid. Ley General de Educación..cit. art. 136, 41 en B.O. del E. cit.

-vidad

Por otra parte, y según hemos podido contemplar en los textos del actual Concordato, también ya transcritos, la enseñanza de la Religión católica está prevista en España por el sistema de asignatura obligatoria en todos los niveles docentes(1).

Ante esta situación creemos acertado afirmar con los obispos españoles: 1º " Que la enseñanza religiosa sea común y obligatoria en todos los niveles educativos, excepto en la Universidad, y que el derecho a ser eximido de la misma se realice mediante petición formal que no lleve acarreada declaración de no católico"(2).

2º " Que se admita para los no católicos y para los católicos que así lo decidan la posibilidad de eximirse de la enseñanza religiosa, previa petición positiva y formal de exención de parte de los padres o tutores del alumno ~~o de este en caso de ser adulto~~"(3).

3º " Que quienes queden exentos de la formación religiosa reciban formación moral natural o deontología profesional"(4).

Asimismo y en cuanto a la enseñanza de la Religión en la Universidad es evidente que la situación actual no sólo no es positiva, sino que es nociva porque se desprestigia con la asignatura su contenido. Sería muy conveniente, pues, encontrar otro sistema que podría consistir muy bien en crear alguna cátedra, de libre asistencia, donde la Facultad lo permitiese, organizar conferencias de libre asistencia, actuar a través de instituciones para universitarios, sean colegios mayores u otras de la Iglesia etc. El objetivo, en todo caso, debe consistir en conseguir que esa instrucción y educación religiosa se lleve a cabo realmente. No se trata, por tanto, de abandonar la enseñanza religiosa, sino de revigorizarla"(5).

(1) Concordato entre la Santa Sede y España de 27 de agosto de 1953, cit. artículo XXVII, nº 1.

(2) La enseñanza religiosa es de competencia exclusivamente eclesial, dice monseñor ESTEPA", en "YA" de 4 de abril de 1974, pág. 43.

(3) "Informe episcopal sobre formación religiosa escolar ", en "YA" de 6 de octubre de 1971, pág. 21.

(4) Ibidem.

(5) "El cardenal TARANCON presidió una reunión consultiva sobre enseñanza de la religión en la Universidad", en "YA" de 27 de noviembre de 1974, pág. 41.

Finalmente, y en cuanto afecta a la autonomía de la Universidad católica, creemos que debe ampliarse el reconocimiento de los estudios hechos en los centros de la Iglesia y el acceso a estudios eclesiásticos de seglares que deseen hacerlos.

2. 4. La libertad de la Iglesia en la predicación de su doctrina.

La libertad de la Iglesia en la predicación de su doctrina es un derecho fundamental y una clara exigencia del derecho de libertad religiosa. Por eso, con mucha razón, el Concilio Vaticano II, en su Declaración "Dignitatis humanae", declara: " Forma también parte de la libertad religiosa el que no se prohíba a las comunidades religiosas manifestar libremente el valor peculiar de su doctrina para la ordenación de la sociedad y para la vitalización de toda actividad humana"(1).

Así pues, "es de justicia , como afirma el mismo Concilio, que pueda la Iglesia en todo momento y en todas partes predicar la fe con auténtica libertad, enseñar su doctrina social, ejercer su misión entre los hombres sin traba alguna y dar su juicio moral, incluso en problemas que tienen conexión con el orden político, cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas, utilizando todos y sólo los medios que sean conformes al Evangelio y convengan al bien de todos, según la diversidad de los tiempos y las circunstancias"(2).

Esta libertad de la Iglesia está reconocida en España en su actual Concordato con la Santa Sede y desde 27 de agosto de 1953. Implícitamente, en el artículo I, al declarar, según ya hemos analizado, que "la Religión Católica, Apostólica, Romana sigue siendo la única de la Nación española y que gozará de los derechos y de las prerrogativas que le corresponden en conformidad con la Ley Divina y el Derecho Canónico"(3). Explícitamente, en el artículo II, que garantiza , a la Iglesia católica, como también ya hemos examinado, "el libre y pleno ejercicio de su poder espiritual y de su jurisdicción, así como

(1) Concilio Vaticano II: Declaración Dignitatis humanae, nº 4, en ob. cit. pág. 771.

(2) Concilio Vaticano II: Decreto "Gaudium et spes, nº 76, en ob. cit. pág. 395.

(3) Concordato entre la Santa Sede y España de 27 de agosto de 1953, en ob. cit. págs 1020.

el libre y público ejercicio del culto"(1). Y , evidentemente, la predicación, primera de las funciones de la Iglesia y parte integrante de su culto, está incluida en estos artículos. Pero, además de estas disposiciones generales, el actual Concordato español dedica , según hemos visto, varios artículos al reconocimiento, y garantía del magisterio de la Iglesia y por lo mismo también al reconocimiento y garantía de la libertad de la Iglesia en la predicación de su doctrina, especialmente el artículo XXIX, cuyo texto, como también ya hemos analizado establece que " el Estado cuidará de que en las instituciones y servicios de formación de la opinión pública, en particular en los programas de radiodifusión y televisión, se dé el conveniente puesto a la exposición y defensa de la verdad religiosa por medio de sacerdotes y religiosos designados de acuerdo con el respectivo Ordinario"(2).

Por todo ello es claro que la Iglesia goza en España de libertad para exponer y predicar su doctrina. Podría, por eso, resultar extraño , como dice GIMENEZ Y MARTINEZ DE CARVAJAL(3), el que se hable de la libertad de la Iglesia en la predicación , como uno de los puntos que deben ser objeto de revisión, al afrontar la reforma del actual sistema concordatario español.

Sin embargo, no pueden ignorarse los casos en que, como advierte el citado autor, por haber tocado la predicación temas que podríamos llamar políticos, se han producido tensiones entre la Iglesia y el Estado(4). Tensiones agravadas, en algunos casos, por entrar en juego el artículo XVI en el que se consagra un cierto privilegio del fuero para los clérigos, al exigirse la necesidad del consentimiento previo del Ordinario para instruir el proceso criminal(5).

(1) Concordato entre la Santa Sede y España de 27 de agosto de 1953, en ob. cit. pág. 1020.

(2) Ibidem, pág. 1027.

(3) GIMENEZ Y MARTINEZ DE CARVAJAL: Temática general de la revisión del Concordato español, en ob. cit. pág. 504.

(4) A más de once millones de pesetas ascienden las multas por homilías, impuestas en España a más de un centenar de sacerdotes en los últimos tres años. En ningún caso hubo dictámen pastoral, previo a la multa , por parte de la Autoridad eclesiástica, vid. en DIARIO "YA"; de 9-III- 75, pág. 21; y caso "AÑO VEROS" vid. en GIL DELGADO: Conflicto Iglesia- Estado, Madrid, 1975, pág. 259 y ss.

(5) GIMENEZ Y MARTINEZ DE CARVAJAL : Art.cit. en ob. y pág. cita.

El problema, evidentemente, no es de fácil solución. " Se enfrentan dos actitudes que, desde sus respectivos puntos de vista, parecen totalmente legítimas y razonables. La Iglesia no puede renunciar a algo tan fundamental como es, en su vida y en su doctrina, proclamar su ética individual y colectiva y emitir su juicio moral sobre todas las actividades de sus fieles. El Estado, por su parte, no puede permanecer indiferente ante los posibles delitos que se cometen en el ejercicio de una función cualquiera, aunque sea tan sagrada como la predicación. En pura teoría no debería darse ningún roce, si las normas e instituciones estatales estuvieran de acuerdo con los principios católicos y si la predicación se limitara a la exposición de dichos principios. Pero esa perfección no es asequible - al menos de una forma permanente - a la condición humana. Puede ser que las instituciones y normas no reproduzcan en todo caso, exacta y perfectamente, la doctrina de la Iglesia; y puede ser también que la predicación no se mantenga siempre dentro de los límites precisos de la doctrina evangélica indiscutible "(1).

La Iglesia , nunca , y menos en estos momentos, puede renunciar a proclamar su doctrina sobre el hombre y la sociedad.

La predicación de su doctrina sobre el hombre y la sociedad constituye, realmente, para la Iglesia no sólo un derecho sino incluso una obligación.

"La religión cristiana - y en concreto la católica - no es una pura religión misteriosa en la que el hombre busque su salvación en la celebración de unos ritos o la iniciación en unos misterios, al margen de cualquier concepción ética. La religión cristiana importa, esencialmente, una concepción integral del hombre y de la vida, lleva consigo una ética - inseparable de su doctrina y derivada de la misma - , necesaria para la salvación del fiel y que se refiere a toda actividad humana, que no sea puramente técnica, y que abarca el aspecto individual, familiar y colectivo, y que se refiere a todos los campos vitales , sin excluir el social, político y económico"(2).

(1) GIMENEZ Y MARTINEZ DE CARVAJAL: Temática general de la revisión del Concordato español, en ob. cit. pág. 504.

(2) Ibidem, pág. 505

Por eso la Iglesia, desde su misma fundación como advierte GIMENEZ Y MARTINEZ DE CARVAJAL(1), ha predicado su doctrina sobre el hombre y sus actividades tanto individuales como colectivas, en el ámbito de su vida privada, familiar o social. Y por eso mismo también el Concilio Vaticano II además de reconocer el derecho de la Iglesia a proclamar su doctrina, como hemos visto, sobre el hombre y la sociedad, declara: "Los obispos, a quienes se ha confiado la misión de gobernar la Iglesia de Dios, prediquen con sus presbíteros de tal manera el mensaje de Cristo que todas las actividades terrenas de los fieles queden empapadas por la luz del Evangelio"(2). Y afirma además el mismo Concilio: "En lo que atañe a obras e instituciones del orden temporal, la función de la Jerarquía eclesiástica es enseñar e interpretar auténticamente los principios morales que deben observarse en las cosas temporales; tiene también el derecho de juzgar, tras madura consideración y con la ayuda de peritos, acerca de la conformidad de tales obras e instituciones con los principios morales, y dictaminar sobre cuanto sea necesario para salvaguardar y promover los fines de orden sobrenatural"(3).

Es claro, pues, que la Iglesia no puede situarse en una etérea neutralidad respecto al quehacer humano. La cuestión es evidente; pues, como la misma Iglesia reconoce, "entre evangelización y promoción humana - desarrollo, liberación - existen efectivamente lazos muy fuertes. Vínculos de orden antropológico, porque el hombre que hay que evangelizar no es un ser abstracto, sino un ser sujeto a los problemas sociales y económicos"(4). Y, así, la Iglesia afirma que tiene el deber de anunciar la liberación total del hombre. Declara que "no admite el circunscribir su misión al solo terreno religioso desinteresándose de los problemas temporales del hombre", pero "afirma también que la liberación que la evangelización anuncia no puede reducirse a la simple y estrecha dimensión económica, social o cultural sino que debe abarcar al hombre entero, en todas sus dimensiones, incluida su apertura al Absoluto que es Dios"(5).

(1) GIMENEZ Y MARTINEZ DE CARVAJAL: Temática general de la revisión del Concordato español, en ob. cit. pág. 505.

(2) Concilio Vaticano II: Gaudium et spes, nº 43, e).

(3) Concilio Vaticano II: Decreto Apostolicam actuositatem, 24.

(4) PABLO VI: "La evangelización del mundo contemporáneo", traducción castellana de la Poliglota Vaticana, Madrid, 1975, nº 31. p. 28.

(5) Ibidem, nº 33.

La liberación evangélica no es sólo el bienestar material; lo político y lo social no es suficiente. Si la Iglesia se ocupase sólo de esto, perdería su significación más profunda(1).

"La Iglesia asocia, pero no identifica nunca liberación humana y salvación en Jesucristo. No toda noción de liberación es necesariamente coherente y compatible con una visión evangélica del hombre"(2). Y, así, "la Iglesia no puede aceptar la violencia sobre todo la fuerza de las armas- incontrolable cuando se desata - ni la muerte de quienquiera que sea, como camino de liberación, porque sabe que la violencia engendra inexorablemente nuevas formas de opresión y de esclavitud, a veces más graves que las que aquellas de las que se pretende liberar... esta actitud es contraria al espíritu cristiano e incluso puede retardar, en vez de favorecer, la legítima elevación social"(3).

A todo esto hay que decir, sin embargo, que "la fe cristiana no es ninguna ideología política ni puede ser identificada con ninguna de ellas, dado que ningún sistema social o político puede agotar toda la riqueza del Evangelio, ni pertenece a la misión de la Iglesia presentar opciones o soluciones concretas de gobierno en los campos temporales de las ciencias sociales económicas o políticas"(4).

La Iglesia reconoce, incluso, que para lo que es competencia propia del Estado los laicos tienen sus propios carismas. " Los seglares, dice el Concilio, esperen de los sacerdotes la luz y el impulso espiritual. Pero no piensen que sus pastores vayan a estar siempre en condiciones de tal competencia que hayan de tener al alcance una solución concreta para cada problema que surja, aun grave, o que esa sea su misión; es a ellos mismos a quien corresponde cargar con las propias responsabilidades, debidamente conducidos por la sabiduría cristiana y atentos a las enseñanzas del Magisterio"(5).

(1) PABLO VI: "La evangelización del mundo contemporáneo" cit, nº 33.

(2) Ibidem, nº 35.

(3) Ibidem, nº 37.

(4) ENRIQUE Y TARANCON: Homilía en la misa del Espíritu Santo con que Juan Carlos I ha querido inaugurar su reinado, en "YA", de 28 de noviembre de 1975, pág. 12.

(5) Concilio Vaticano II: G S 43 e).

"Cuando la Iglesia anuncia el Evangelio y trata de actualizarlo auténticamente para la sociedad en la que realiza su misión, propone metas u objetivos tales como la justicia, la paz y la fraterna convivencia, pero respeta el campo estricto de la política en el que dentro de los límites de la ética cristiana, los creyentes han de elegir los medios, determinar las posibilidades y programar los momentos, colaborando y cumpliendo con el resto de los ciudadanos. La luz del Evangelio proyectada sobre la sociedad y sobre todas las realidades temporales, no concluye a formas políticas concretas, aunque si puede excluir aquellas que atentan contra la pacífica convivencia o los derechos fundamentales del hombre o se valen de medios o estrategias no conformes con el Evangelio"(1).

Existen, evidentemente, unos valores humanos que han de promoverse, acrecentarse y defenderse en la acción política - es políticamente como estos valores se pueden defender practicamente - que la Iglesia, que es la gran defensora del hombre, de su dignidad, de sus derechos, de sus aspiraciones legítimas, ha de predicar constantemente y que los cristianos tienen el deber ineludible de luchar por conseguir con una actuación adecuada y en colaboración con los demás ciudadanos(2).

No se mete, pues, en política la Iglesia cuando denuncia las injusticias existentes o cuando pide una mayor libertad responsable para los ciudadanos. Está cumpliendo con su deber(3), pues la Iglesia tiene la obligación, según ya hemos indicado, de predicar la palabra de Dios sobre la sociedad, sobre todo cuando se trata de promover los derechos humanos(4).

Ahora bien, la Iglesia para cumplir su misión no pide ningún tipo de privilegio; pide que se le reconozca la libertad que proclama para todos; pide el derecho a predicar el Evangelio entero; pide una libertad que no es concesión discernible o situación pac-

(1) ENRIQUE Y TARANCON: Discurso de apertura de la XXIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, en "YA" de 16 de diciembre de 1975, pág. 21.

(2) ENRIQUE Y TARANCON: Carta cristiana sobre "la Iglesia ante el momento actual", en "YA", de 18 de enero de 1976, pág. 20.

(3) Ibidem.

(4) ENRIQUE Y TARANCON: Homilia en la misa del Espíritu Santo... cit. en DIARIO "YA" y pág. cit.

-table, sino el ejercicio de un derecho inviolable de todo hombre(1).

Y esta es, en realidad, doctrina común a todas las Iglesias cristianas. Y, así, en 1948, el Consejo Ecuménico de las Iglesias, en su primera Asamblea de Amsterdam, hizo una declaración sobre la libertad religiosa en la que entre otras cosas afirma: " Toda persona tiene el derecho de expresar sus creencias religiosas por medio del culto, la enseñanza y la práctica y de proclamar las consecuencias de sus convicciones para las relaciones humanas en el seno de la comunidad social y política Incluye también la libertad de expresar las consecuencias de las propias creencias respecto de la sociedad y de su gobierno"(2). Y en este mismo sentido se ha manifestado el mismo Consejo Ecuménico en su V Asamblea General celebrada en Nairobi(Kenia) en diciembre de 1975(3).

Por su parte, el Estado tiene evidentemente, derecho a defender el bien común y a sancionar cualquier delito que se cometa en la sociedad. Y es claro que en el ejercicio de la predicación se puede cometer, como dice GIMENEZ Y MARTINEZ DE CARVAJAL(4), un delito tipificado, por ejemplo de difamación, calumnia o injuria. Y puede ocurrir también, como dice el citado autor, que un predicador, sin cometer delito tipificado en el ordenamiento estatal, expongan como doctrina evangélica o de la Iglesia católica. lo que en realidad no es más que una opinión suya particular, quizás muy discutible(5).

Por todo ello, hay que distinguir en estos casos un doble aspecto: la conformidad de la doctrina que se expone en las homilías con el Evangelio y con la doctrina o disciplina de la Iglesia, y éste aspecto no puede juzgarlo más que la misma Iglesia, y la posible transgresión de alguna ley civil, que como es lógico debe juzgarlo la autoridad pública.

El problema, desaparecería en gran parte, según ya hemos apuntado, si, como dice GIMENEZ Y MARTINEZ DE CARVAJAL(6), desaparecie-

(1) ENRIQUE Y TARANCON: Homilía en la misa del Espíritu Santo, cit. en DIARIO cit.

(2) Declaración sobre libertad religiosa de la primera Asamblea del Consejo Ecuménico de Iglesias, Amsterdam, 1948, en VERA URBANO: Ob. cit. págs 160-161.

(3) V Asamblea General del Consejo Ecuménico de las Iglesias, celebrado en Nairobi(Kenia), en diciembre de 1975, en DIARIO, "YA" de 6 de diciembre de 1975, pág. 21.

(4) GIMENEZ Y MARTINEZ DE CARVAJAL: Art. cit. en ob. cit. pág. 505.

(5) Ibidem, págs, 505-506.

(6) Ibidem, pág. 506.

-ra la confesionalidad doctrinal, en cuyo caso el Estado no quedaría rigurosamente vinculado a legislar conforme a la plenitud de la doctrina católica. De esta forma, la opinión de que una determinada norma no está conforme con aquella doctrina no tiene por qué constituir un delito de calumnia o injuria. Y, por otra parte, debe desaparecer totalmente un privilegio del fuero que, como dice GIMENEZ Y MARTINEZ DE CARVAJAL, empaña el testimonio de la Iglesia y dificulta la acción de la justicia(1).

La Iglesia quedaría así, según ya hemos expresado, siguiendo al citado autor, libre para exponer su doctrina, incluso sobre las materias políticas, económicas y sociales. Los abusos de tipo doctrinal que en el ejercicio de la predicación se cometieran deberían ser sancionados por la misma Iglesia. Y el Estado quedaría también libre para procesar o sancionar a cualquier clérigo que, abusando de su ministerio, hubiera cometido cualquier delito tipificado en el código penal(2). Esta sería, como reconoce el mismo FRAGA IRIBARNE (3), la única solución correcta del problema.

Ahora bien, "si aún así se plantean conflictos, claro está que no queda más solución que la actuación libre de ambas partes: el Estado para mantener su legislación y decisiones y la Iglesia para proclamar ante el pueblo, si así lo estima, que aquellas normas o actuaciones - al margen de cualquier juicio puramente legal - no están conformes con su ética y doctrina"(4).

(1) GIMENEZ Y MARTINEZ DE CARVAJAL: Art. cit. en ob. cit. pág. 506.

(2) Ibidem,

(3) FRAGA IRIBARNE: El problema concordatario, en Cuadernos de "Realidades Sociales", 1973, nº 2, pág. 66.

(4) GIMENEZ Y MARTINEZ DE CARVAJAL: Art. cit. en ob. cit. pág. 506.

3. Los privilegios que la Iglesia y el Estado español se reconocen en el actual Concordato de 27 de agosto de 1953: Su renuncia.

Sin pretender hacer de este tema una montaña, como FRAGA IRIBARNE(1), dice se quiere hacer, hay que reconocer que el estudio de los privilegios que la Iglesia y el Estado español se reconocen en el actual Concordato de 1953 y su renuncia es objetivamente difícil, delicado y muy específico de nuestro país.

El principio general de que la Iglesia y el Estado deben renunciar a todos sus privilegios resulta claro y es compartido por todos.

Existen, en realidad, varias razones que fundamentan la conveniencia de dicha renuncia. Por una parte existen, en efecto, "razones que brotan de una teoría moderna del Estado y de los derechos fundamentales del hombre y de unos principios, hoy comúnmente aceptados, sobre las relaciones entre la comunidad política y las iglesias y los grupos religiosos. Tales serían por ejemplo, la mutua independencia y autonomía de lo temporal y de lo religioso y la libertad religiosa, concebida como derecho básico del hombre y como inmunidad a cualquier tipo de coacción jurídica o moral. Y, por otra parte, existen también razones más estrictamente eclesiológicas; pues, el privilegio civil no es un medio idóneo para el ejercicio de las funciones eclesiales; por el contrario, constituye un obstáculo positivo, ya que la apertencia de situaciones privilegiadas en el orden temporal puede falsear el verdadero sentido y valor de lo espiritual y empañar el testimonio(2).

Por todo ello, hoy, es indudable, como advierte RUIZ-GIMENEZ(3), que debe producirse lo antes que sea posible una renuncia a los privilegios que la Iglesia y el Estado se reconocieron en el actual Concordato español de 1953.

Pero, lo que ya no es tan claro es determinar con precisión cuales son esos privilegios y en que orden una y otra sociedad deberán renunciar a sus propios privilegios.

Todo ello procuraremos analizarlo en los apartados siguientes.

(1) FRAGA IRIBARNE: El problema concordatario, en "Cuadernos de Realidades Sociales, Madrid, 1973, nº 2, pág. 66.

(2) G. MARTINEZ DE CARVAJAL: Renuncia a los privilegios de la Iglesia, en Relaciones de la Iglesia y el Estado, Madrid, 1976, p. 332.

(3) RUIZ-GIMENEZ: Relaciones Iglesia Estado.. en Rev. cit., pág. 13

3. 1. Renuncia de privilegios por parte de la Iglesia(1).

La renuncia por parte de la Iglesia a los privilegios de que actualmente goza en el ordenamiento jurídico español constituye, sin duda, uno de los aspectos más importantes y urgentes en la revisión del vigente Concordato de 1953.

El Concilio Vaticano II manifiesta claramente que la Iglesia "no pone su esperanza en privilegios que le ofrece el poder civil, antes bien renunciará de buen grado al ejercicio de ciertos derechos legítimamente adquiridos si consta que su uso puede empañar la pureza de su testimonio, o si nuevas circunstancias exigen otras disposiciones"(2).

Pablo VI en su mensaje final del Concilio Vaticano II al dirigirse a los gobernantes de los pueblos les dice: "La Iglesia no os pide más que libertad de creer y de predicar su fe; de amar a su Dios y de servirle; de servir y de llevar a los hombres a su mensaje de vida"(3).

"La Iglesia, dice también Pablo VI, no pide situaciones de privilegio. Pide solamente, que respetando las funciones, los fines y las prerrogativas del Estado, pueda ejercer plenamente su misión religiosa y espiritual"(4).

(1) Ultimamente y después de redactado este capítulo han sido suprimidos los principales privilegios que la Iglesia y el Estado español se reconocían en el Actual Concordato de 1953, por el acuerdo entre la Santa Sede y el Gobierno español de 28 de julio de 1976 que suprime el privilegio de presentación y el privilegio del Fuero eclesiástico, vid. p. 402 y sigs.

(2) Concilio Vaticano II, GS. nº 76.

(3) PABLO VI: Mensaje final del Concilio: A los Gobernantes.

(4) PABLO VI: Discurso en la presentación de cartas credenciales del embajador de Yugoslavia, 12-XI-1970, en Rev. Ecclesia del XI - 1970, pág. 14.

En el mismo sentido se manifiesta el Episcopado español.

En efecto en su declaración colectiva sobre "La Iglesia y la comunidad política" señala: "Fiel a la doctrina evangelica enseñada por el Concilio, la Conferencia Episcopal española ha declarado publicamente su decidida voluntad de renunciar a cualquier privilegio otorgado por el Estado en favor de personas o entidades eclesiásticas.

Hoy reitera esta fundamental disposición suya, no sólo porque sabe que la Iglesia no ha de poner su esperanza en los poderes humanos, sino porque, además, entiende que la renuncia a todo verdadero privilegio contribuirá a poner más en claro la necesaria distinción entre Iglesia y Estado, dará mayor relieve a la mutua independencia de ambos y, como resultado, eliminará no pocos problemas"(1).

La renuncia por parte de la Iglesia a los privilegios, encuentra su apoyo y justificación en "razones que brotan de una teoría moderna del Estado y de los derechos fundamentales del hombre y de unos principios, hoy comúnmente aceptados, sobre las relaciones entre la comunidad política y las iglesias y los grupos religiosos. Tales serían, por ejemplo, la mutua independencia y autonomía de lo temporal y de lo religioso; la libertad religiosa, concebida como derecho básico del hombre y como inmunidad a cualquier tipo de coacción jurídica o moral; la concepción tecnico administrativa de un Estado democrático y representativo que no suele hacer, al menos en materia religiosa, juicios doctrinales de valor; el principio, aceptado hoy en todas las constituciones y en todas las declaraciones y convenciones internacionales, de la igualdad de los ciudadanos ante la ley; la irrelevancia jurídico-civil de la profesión o no profesión de cualquier religión"(2).

El principio general de que la Iglesia no debe tener privi-

(1) La Iglesia y la comunidad política, nº 57, *Revista Eclesiástica*, 27 -I- 1973, pág. 33.

(2) MARTINEZ DE CARVAJAL: Renuncia de privilegios por parte de la Iglesia, en *BoI. de A.C.N. de P.* de mayo de 1973,

-legios temporales en el ordenamiento civil es claro y compartido por todos. Pero, cuales son esos privilegios? El tema es realmente difícil. Pues, "a la dificultad que brota de la complejidad y de la variedad de situaciones contempladas por el Concordato - español de 1953, en este caso concreto, hay que añadir la de precisar y definir el concepto mismo de privilegio"(1).

Se trata de un concepto no menos equívoco que el de confesionalidad. La palabra privilegio puede utilizarse en sentidos muy diversos y para realizar actividades muy dispares(2).

"No siempre es fácil, en la práctica e incluso en la teoría, discernir claramente un verdadero privilegio de un derecho fundamental del hombre o de los grupos humanos; como no lo es distinguir en muchas ocasiones un privilegio de un estatuto particular propio de una profesión o de un determinado grupo social. A veces incluso suele presentarse con apariencia de privilegio lo que, en realidad, no es más que un derecho común a todos los ciudadanos. Lo que para unos es un verdadero privilegio, al no gozar del mismo todos los hombres o grupos sociales, para otros no sería más que un derecho natural y fundamental de los hombres que el Estado se limita a reconocer y debería extender a todos. Lo que aparece como privilegio de un grupo, puede que no sea más que un estatuto particular fundado en razones de utilidad social"(3).

Consecuentemente y para una mejor comprensión del problema creemos conveniente analizar las cuestiones siguientes:

3.1.1. Privilegio y derecho común.

"Ante todo es claro que no debe hablarse de privilegios de la Iglesia en aquellos casos en los que las normas de dere-

(1) MARTÍNEZ DE CARVAJAL: Renuncia de privilegios por parte de la Iglesia, en Bol. Í. de A.C.N. de P. V-1973, p.X.

(2) MARTÍNEZ DE CARVAJAL: Temática de la revisión del Concordato español, en "La institución concordataria en la actualidad, Salamanca, 1971, pág. 507.

(3) Ibidem, Ob. y Bol. cit.

cho común, aplicables a todos los ciudadanos a grupos sociales, les, se aplican también, sin ninguna ventaja especial, a la Iglesia o a sus ministros"(1).

Habría que excluir, por tanto, de la consideración de privilegio aquellos derechos y beneficios que son comunes a todos los ciudadanos aunque se hable de ellos expresamente y con especial relación a la Iglesia o sus ministros.

Existen disposiciones en el Concordato español de 1953, que parecen sugerir una situación privilegiada de la Iglesia, cuando en realidad se trata de normas de derecho común, cuya inclusión en el texto concordado no parece justificada.

El primer privilegio nos lo ofrece el número 5 del artículo XVI del Concordato, en el que se establece que a los clérigos y religiosos "les serán aplicables los beneficios de la libertad condicional y los demás establecidos en la legislación del Estado"(2). "Es claro que la aplicación a los clérigos y religiosos españoles de la legislación común a todos los ciudadanos no constituye ni privilegio ni situación privilegiada alguna"(3).

El segundo ejemplo es el que hace referencia a la protección al uso del hábito eclesiástico. Se encuentra expresamente regulado en el Concordato en su art. XVII, que dice: "El uso del hábito eclesiástico o religioso por los seculares o por aquellos clérigos o religiosos a quienes les haya sido prohibido por decisión firme de las autoridades eclesiásticas competentes, está prohibido y será castigado, una vez comunicada oficialmente al Gobierno, con las mismas sanciones y penas que se aplican a los que usan indebidamente el uniforme militar"(4).

En el ejemplo citado es evidente que la simple protección

(1) MARTINEZ DE CARVAJAL: Renuncia de privilegios por parte de la Iglesia, en Bol. I. de A.C. N. de P. V. 1973, p. XI.

(2) Vid. Código de Derecho Canónico, Madrid, 1957, Apéndice IX, pág. 1023.

(3) MARTINEZ DE CARVAJAL: Renuncia de privilegios por parte de la Iglesia, en Bol. I. de A.C. N. de P. V. 1973, pág. XI.

del hábito eclesiástico no constituye un privilegio.

Pues, todos los distintivos debidamente registrados, marcas, insignias, uniformes, títulos, etc. de cualquier profesión legítima, personas morales o grupos sociales deben protegerse en una sociedad bien organizada. El hábito eclesiástico, como las insignias y los distintivos de la Iglesia católica, deben ser tutelados por el derecho común sin que sean necesarios normas peculiares que puedan ofrecer la apariencia de un privilegio(1).

Los ejemplos, como advierte MARTINEZ DE CARVAJAL, podrían multiplicarse, tanto en el derecho concordado como en el derecho eclesiástico estatal. Muchas de esas normas referentes a la Iglesia Católica, a sus ministros e instituciones deberían simplemente desaparecer, quedando incluidas, sin apariencia de privilegio, dentro de la normativa de derecho común(2).

3. 1. 2. Privilegio y Estatuto particular.

Es importante distinguir un privilegio de un estatuto particular, aplicable a una profesión; a un estamento o a un grupo determinado, en función del servicio que presta a la sociedad y para un mejor aprovechamiento de sus propias energías.

Para ello es necesario tener en cuenta dos criterios fundamentales: uno negativo, que no se haga en consideración a la dignidad o categoría de las personas; y otro positivo que redunde en beneficio del bien común de la sociedad.

Según el primer criterio "hay privilegio cuando se establece una discriminación social, fundada en razones personales y violando el principio básico de la igualdad de los ciudadanos ante la ley"(3).

Deben desaparecer por tanto del Concordato y de la legislación española todos los privilegios propiamente dichos y todas las situaciones privilegiadas que se funden en consideraciones

(1) MARTINEZ DE CARVAJAL: Renuncia de privilegios por parte de la Iglesia, en Bol.I. de A.C.N.de P. V-1973-págs.-XII.

(2) Ibidem, pág. XII.

(3) Ibidem.

personales, en el carácter sobrenatural de la Iglesia, en la dignidad de sus ministros o en el valor sagrado de sus funciones(1).

Es decir "deben suprimirse todos los privilegios procesales, penales, militares, fiscales, etc, que se funden en la dignidad de los miembros de la Iglesia. El clérigo deliciente, en términos generales, debe responder ante la justicia exactamente igual que cualquier ciudadano y debe estar sometido a las mismas normas procesales y penales, sin **ningún** tipo de excepción o beneficio. El clérigo y el religioso deben pagar los impuestos **exactamente** igual que los demás ciudadanos, aun de los ingresos o beneficios obtenidos en el ejercicio de sus funciones. Lo mismo cabe decir de la Iglesia y de sus instituciones, cuando los beneficios o exenciones se fundan en su carácter sobrenatural y no en su función social.

También debe desaparecer toda protección estatal, fundada en motivos sobrenaturales y que no sean las garantías jurídicas comunes a los ciudadanos, a los grupos sociales o a las personas morales que, desde un punto de vista sociológico y humano, ejerzan funciones análogas. (2).

El segundo principio que justifica en algunos casos una legislación o estatuto particular es igualmente claro, al menos en teoría, aunque su aplicación pueda ser difícil y discutida en muchos momentos.

Una sociedad bien **organizada** debe aprovechar al máximo todas sus energías y posibilidades. Y puede por tanto, establecer unas normas **especiales** para las diversas profesiones o grupos sociales, siempre que estén orientadas no **en beneficio** de los individuos particulares, sino de toda la sociedad"(2).

Un ejemplo claro puede ser el servicio militar, que lo mismo el clérigo que el religioso deben hacer igual que los demás ciudadanos o que no lo haga nadie, como muy bien señala

(1) MARTINEZ DE CARVAJAL: Renuncia de privilegios por parte de la Iglesia, en Bol. I. de A.C.N. de P. V -1973, pág. XII.

(2) Ibidem.

RUIZ GIMENEZ(1), pero tanto el clérigo como el religioso puede acogerse, como es lógico, a las normas generales que le sean aplicables, por ejemplo para estudiantes, objetores de conciencia etc o a un posible estatuto particular, fundado en interés social. "En una sociedad, por ejemplo, donde existen todavía graves problemas de analfabetismo, subdesarrollo, higiene., parece lógico que el servicio social de ciertos profesionales, por ejemplo, médicos, técnicos, maestros, etc., pueda hacerse no necesariamente con las armas, sino poniendo al servicio de la comunidad las cualidades específicas de aquellos profesionales. Naturalmente, y para que no exista privilegio, la actividad de éstos deberá ser tan desinteresada y social como la de los que prestan el servicio de las armas. Algo parecido podría decirse, en una sociedad que valore y desee los servicios religiosos, y en la medida en que lo valore y desee, de los ministros de las Iglesias.

En este sentido no sería privilegio el establecimiento de un estatuto propio de la Iglesia, fundado en el servicio social que la misma presta, y en la medida en que la sociedad lo valora y desea. Estatuto que por otra parte, con los matices exigidos por su propia naturaleza ..., podría ser aplicable a otras confesiones religiosas..."(2).

Sin embargo estos estatutos y normas especiales deben reducirse al máximo y deben aplicarse sólo en casos evidentes y excepcionales. "El mundo actual es especialmente sensible al principio de la igualdad y, aun cuando la especialización del trabajo social que brota de los estatutos particulares puede enriquecer a la sociedad, su precio sería demasiado elevado si crea un mal estar entre los ciudadanos que se sienten discriminados"(3).

Consecuentemente, aun reconociendo que un estatuto particular del clero y de las comunidades religiosas pueda ser justo e

(1) RUIZ GIMENEZ: Relaciones Iglesia y Estado, en Bol. I. de A.C.N. de P. IV -1970 pág.14

(2) MARTINEZ DE CARVAJAL: Renuncia de privilegios por parte de la Iglesia, en Bol. I. A.C.N. de P. V-1973 pXII.

(3) Ibidem.

incluso conveniente, como el de otras profesiones o grupos sociales, creemos con MARTINEZ DE CARVAJAL(1) que debe ser reducido a lo absolutamente necesario sin que en ningún caso comporte unos beneficios excepcionales, ni directos ni indirectos, para los clérigos o miembros de la Iglesia.

3.1. 3.- Privilegio y situación privilegiada.

Es evidente, como advierte RUIZ GIMENEZ(2), que no todas las situaciones de que goza la Iglesia son privilegios, pues algunas son simplemente derechos y libertades fundamentales, como el derecho de la Iglesia a predicar la doctrina o a establecer escuelas, centros docentes etc. "Pero pueden resultar privilegios en una situación histórica concreta. En efecto, si sólo se reconocen a la Iglesia Católica y no a otras Instituciones o Asociaciones; esto es, la medida en que no se reconozcan a todas las comunidades humanas que respeten un mínimo ético, dentro de un orden jurídico nacional, es evidente que entonces serían privilegios, que ya no serían propiamente derechos"(3).

En este sentido señala MARTINEZ DE CARVAJAL: "En el orden del derecho positivo, podemos hablar de situación privilegiada, si siempre que la Iglesia goce de un estatuto o unos derechos que no sean comunes y compartidos por los otros ciudadanos y grupos sociales, prescindiendo de su naturaleza más íntima desde la perspectiva del derecho natural o de una filosofía del Estado y del derecho"(4).

Sin embargo el tema es enormemente complejo. Pues no es lo mismo un puro derecho, que reporta un beneficio personal y a cu-

(1) MARTINEZ DE CARVAJAL: Bol. I. cit. pág. XIII

(2) RUIZ GIMENEZ: Bol. I. cit. pág. 13

(3) Ibidem

(4) MARTINEZ DE CARVAJAL: Bol. I. cit. Ibidem.

yo ejercicio puede renunciar el titular sin dano alguno para los demás , que un derecho que sea el medio necesario para el cumplimiento de unas obligaciones ineludibles ; tratándose de la Iglesia para el ejercicio de las funciones encomendadas por Cristo.

La Iglesia, por ejemplo no puede renunciar, se le reconozca o no por la legislación estatal al derecho y obligación de predicar el evangelio, incluso en aquellos casos que comporta una crítica de situaciones, estructuras o normas legales"(1).

" La Iglesia, señala el Cardenal ENRIQUE y TARANCON, cumple su deber y está sirviendo de la mejor manera a los hombres, aún a aquellos que se sienten heridos, predicando la verdad, aunque sea perseguida por ellos.

Recordar sus deberes a los que mandan y a los que obedecen puede ser, algunas veces, motivo de disgustos y de discordias. Pero la Iglesia cumple su misión y hace un verdadero bien a la sociedad, aunque sea incomprendida"(2).

Se hace, por tanto, necesario distinguir, como hace RAHNER, entre derechos esenciales y derechos históricos. "Hay dos clases de derechos fundamentales , que establecen la sociedad y los individuos, dice RAHNER, Unos son los que proceden de la esencia de la institución, y a los que la Iglesia no puede renunciar. Otros son los derechos que se construyen con el tiempo. La Iglesia tiene unos derechos que proceden de su esencia y de su institución, que nunca podrá renunciar. Por ejemplo : el derecho a predicar el Evangelio. En cambio, hay otros derechos que se construyen en la circunstancia histórica, en un momento dado, con una historia peculiar de la relación entre dos instituciones, como son la Iglesia y el Estado; derechos que tienen perfecta consistencia aunque hayan nacido históricamente, pero que son otra cosa. Este tipo de derechos que se construyen históricamente han de ser continuamente revisables en el desarrollo de la historia para ver si siguen teniendo la función que tenían.

(1) MARTINEZ DE CARVAJAL: Bol. I. cit. pág. XIII.

(2) ENRIQUE Y TARANCON: Homilia, en Rev. Vida Nueva, de 6 de abril de 1974, pág.9.

Ahora bien, los derechos que proceden de la esencialidad de la Iglesia son, por supuesto irrenunciables"(1).

A estos derechos históricos la Iglesia puede y en ocasiones debe renunciar, si no son reconocidos a todos los hombres, en aras de su testimonio y de su solidaridad con todos los miembros de la sociedad humana. A los otros derechos que son esenciales y que constituyen al mismo tiempo una grave obligación, la Iglesia no puede renunciar.

En este sentido el Concilio señala claramente que la Iglesia "no pone su esperanza en privilegios ofrecidos por la autoridad civil; más aún renunciará al ejercicio de ciertos derechos legítimamente adquiridos allí donde con su uso se ponga en duda la sinceridad de su testimonio o donde las nuevas condiciones de vida exijan otra ordenación" y a continuación añade: "seale permitido siempre, sin embargo, y en todas partes, el predicar la fe con auténtica libertad, enseñar su doctrina sobre la sociedad, ejercer su juicio moral aun de cosas que tocan al orden político, cuando lo exijan así los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas, poniendo en juego todos y solos los recursos que están conformes con el Evangelio y con el bien universal según la diversidad de los tiempos y las condiciones "(2).

Igualmente se manifiesta el Episcopado español en su declaración sobre "La Iglesia y la comunidad". Pues al hablar de renuncia a situaciones privilegiadas, pone a salvo la libertad de la Iglesia en el ejercicio de sus funciones: "Si en las leyes constitucionales de un país está debidamente definida y garantizada esa libertad, como la misma Iglesia pide y enseña, ésta no necesita ni quiere situaciones de privilegio"(3).

Consecuentemente la Iglesia, en el caso, concreto español, pue-

(1) RAHNER(Karl): El estado confesional es un anacronismo, en

Diario Informaciones de 4 de abril de 1974, pág. 17.

(2) Concilio Vaticano II, G.S. nº 76

(3) La Iglesia y la comunidad política, nº 45, en Rev. Ecclesia, 27-I -1973.

de y debe renunciar a ciertas normas que le favorecen y colocan en una situación ventajosa con relación a otros ciudadanos e instituciones." La Iglesia, por ejemplo, podría renunciar a las inviolabilidades establecidas en el artículo XXII del Concordato, colocándose dentro del derecho común. No es necesario que las normas que rigen la entrada de la fuerza pública en los templos o edificios de la Iglesia sean distintas de las que están en vigor en relación a otros edificios públicos o privados, según los casos".

Muchas de las actuales situaciones privilegiadas de la Iglesia en España creemos sinceramente que desaparecerían con una legislación que dejara un mayor grado de optatividad a los ciudadanos para elegir entre fórmulas o soluciones que, respetando al máximo la libertad, fueran igualmente idóneas y útiles al bien común" (1).

Para aclarar esto podríamos citar algunos ejemplos. Uno de ellos puede ser el ya insinuado servicio militar. Si se acepta la objeción de conciencia y, con ella, la posibilidad de que cualquier ciudadano opte por un servicio a la sociedad, más en consonancia con su conciencia, aficiones y posibilidades, no sería necesario establecer ninguna discriminación con relación a los clérigos y religiosos. Lo mismo podría decirse en lo referente a los cargos públicos y funciones de que habla el artículo XIV del Concordato (2).

3.1.4. Privilegio del "fuero" (3).

El llamado privilegio del fuero es el privilegio del Canon 120 del Código de Derecho Canónico. En el Concordato español, se encuentra regulado en su artículo XVI que en sus puntos principales señala:

- 1º Los prelados no pueden ser emplazados ante un juez laico sin haber obtenido previamente licencia de la Santa Sede.
- 2º Las causas contenciosas sobre bienes o derechos temporales en las que son demandados clérigos o religiosos son tramitadas por

(1) MARTÍNEZ DE CARVAJAL: Bol. I. cit. pág. XIII.

(2) Ibidem.

(3) Este privilegio ha sido suprimido ya, vid. pág. 402 y sigs. de este trabajo.

los tribunales normales del Estado, requiriéndose sólo la previa notificación al Ordinario del lugar.

3º Los delitos que violan exclusivamente una ley eclesiástica son de competencia privativa de la Iglesia.

4º Las causas criminales contra clérigos y religiosos son juzgadas por los tribunales del Estado, pero, antes de proceder, la autoridad judicial deberá solicitar el consentimiento del Ordinario del lugar.

5º En casos de detención o arresto, los clérigos y religiosos serán tratados con ciertas consideraciones en atención a su estado y grado jerárquico.

6º En caso de embargo judicial de bienes, se dejará a los eclesiásticos lo necesario para su honesta sustentación, quedando en pie la obligación de pagar cuantos antes a sus acreedores.

7º Se necesita licencia del Ordinario del lugar para citar como testigos a clérigos y religiosos en juicios criminales por delitos para los que se señalen penas graves.

8º No se requerirá a los clérigos para dar informaciones sobre personas o materias de las que hayan tenido conocimiento por razón del sagrado ministerio.

De las normas contenidas en el citado artículo XVI del Concordato, es evidente que algunas no constituyen privilegio alguno y que no son, en la práctica, más que la aplicación a la Iglesia de normas de derecho común: tales son, por ejemplo las que se refieren al embargo de bienes (número 6) y al secreto profesional (número 8). El dejar a la Iglesia que juzgue de los delitos que exclusivamente violan una ley eclesiástica no es más que el reconocimiento de la incompetencia del Estado en esa materia (número 3)(1).

El problema más importante es, sin duda, el de la necesidad de previa licencia de la Santa Sede para emplazar a un prelado ante el juez laico (número 1) y el del consentimiento del Ordinario del lugar para proceder, en materia criminal, contra

(1) MARTINEZ DE CARVAJAL: Bol. Informativo cit. pág. XIII-XIV.

un clérigo o un religioso (número 4)(1).

"Realmente, como dice RUIZ GIMENEZ, "es de derecho común de la Iglesia el que los Obispos y Prelados y también los sacerdotes no puedan ser emplazados ante Juez civil sin previa licencia de la Santa Sede, los unos, o del Ordinario del lugar, los otros. No es ciertamente un privilegio en sentido estricto, pero admitimos que a los efectos externos aparece como privilegios, entre otras razones porque los demás ciudadanos no tienen este punto de apoyo en alguien que salga en su defensa. En el plano jurídico español sólo los eclesiásticos gozan de ese privilegio de que haga falta una autorización para juzgarles"(2).

Consecuentemente es lógico que la Iglesia renuncie por principio de igualdad, pero además porque, de hecho, ese privilegio se utiliza raramente(3).

Hay que advertir, por otra parte, que en la actualidad no suelen plantear problemas los delitos comunes de clérigos o religiosos. Los ordinarios del lugar suelen conceder automáticamente la autorización para el proceso. "...Se pueden contar, como los dedos de una mano de las dos manos, afirma RUIZ GIMENEZ, los casos en que un Obispo ha negado a los Jueces civiles el derecho a proceder contra clérigos en materias que llamaríamos de tipo social y político; en otras materias que puedan afectar a aspectos de la vida privada de un sacerdote, es posible que se haya usado más. Pero me refiero ahora a los casos que resultan más públicos y respecto a los cuales es donde se han producido los mayores puntos de fricción con las autoridades civiles o militares; es decir fundamentalmente a los llamados delitos políticos o, al menos, delitos de los que juzga el Tribunal de Orden Público y la Jurisdicción castrense. Son muy pocos los casos en que ha sido denegada la autorización. Personalmente conozco cinco o seis; el más notorio es el Vicario de Bilbao; otro, es el de un sacerdote de la Diócesis de Murcia, etc. Sin embargo, "de jure" el privilegio subsiste y a mí me parece que hay que suprimirlo.

(1) MARTINEZ DE CARVAJAL: Bol. I. cit. pág. XIV.

(2) RUIZ GIMENEZ: Bol. I. cit. pág. 13.

(3) Ibidem.

Sinceramente creo que no hay razón alguna para que, sobre todo, en la actual conjuntura española, si un sacerdote comete un delito de los penados en las leyes ordinarias, tenga un régimen especial en cuanto a su procesabilidad. Pero digo claramente si las leyes sociales y políticas no han de ser objeto de una revisión profunda para que no se tipifiquen como delitos "delitos políticos artificiales... y determinadas actitudes humanas, legales en la gran mayoría de los pueblos occidentales"(1).

Realmente, la igualdad de los ciudadanos ante la ley pide que sean los mismos jueces los que juzguen de los mismos delitos de cualquier ciudadano.

Es lógico, por ello, según ya hemos indicado, que la Iglesia renuncie a este privilegio.

No obstante, la Iglesia no puede renunciar a la grave obligación de proclamar su doctrina sobre el hombre y la sociedad, a fin de que "todas las actividades terrenas se iluminen con la luz del Evangelio"(2). Esta predicación incluye la posibilidad y obligación, en algunos casos, de "proclamar su juicio moral, aun a cosas que tocan al orden político, cuando lo exijan así los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas"(3).

Por todo ello, una solución sería la renuncia al fuero por parte de la Iglesia, que deje en cambio, plena libertad a la Iglesia, para emitir su juicio moral y religioso, al margen y aun en contra de las decisiones de las autoridades judiciales estatales.

Si aun así se siguen planteando conflictos la solución definitiva sería la actuación libre de ambas partes: el Estado para mantener su legislación y las decisiones que estime justas; la Iglesia para proclamar ante el pueblo, si así lo estima necesario, que aquellas normas y actuaciones - al margen de cualquier juicio puramente legal - no están conformes con su ética y doctrina. Y

(1) RUIZ GIMÉNEZ: Bol. Inf. cit. pág. 14.

(2) Gaudiúm et Spes número 43.

(3) Ibidem número 76.

con ello, se obtiene al menos, como advierte MARTINEZ DE CARVAJAL (1), una clarificación de los campos y posturas.

3. 1. 5. La subvención económica

La ayuda económica a la Iglesia por parte del Estado en España, se encuentra regulada bajo la denominación de culto y clero en el artículo XIX del Concordato, que expresamente dispone: "La Iglesia y el Estado estudiarán, de común acuerdo, la creación de un adecuado patrimonio eclesiástico que asegure una congrua dotación del culto y clero.

2. Mientras tanto, el Estado, a título de indemnización por las pasadas desamortizaciones de bienes eclesiásticos y como contribución a la obra de la Iglesia en favor de la Nación, le asignará anualmente una adecuada dotación. Esta comprenderá, en particular, las consignaciones correspondientes a los Arzobispos y Obispos diocesanos, los Coadjutores, Auxiliares, Vicarios Generales, los Cabildos Catedralicios y de las Colegiatas, el clero parroquial, así como las asignaciones en favor de los Seminarios y Universidades eclesiásticas y para el ejercicio del culto.

Por lo que se refiere a la dotación de beneficios no consistoriales y a las subvenciones para los Seminarios y las Universidades eclesiásticas, continuarán en vigor las normas fijadas en los respectivos Acuerdos del 16 de julio y 8 de diciembre de 1946.

Si en el futuro tuviese lugar una alteración notable de las condiciones económicas generales, dichas dotaciones serán oportunamente adecuadas a las nuevas circunstancias, de forma que siempre quede asegurado el sostenimiento del culto y la congrua sustentación del clero.

3. El Estado, fiel a la tradición nacional, concederá anualmente

(1) MARTINEZ DE CARVAJAL: Boletín Informativo cit. pág.XV.

subvenciones para la construcción y conservación de templos parroquiales y rectorales y Seminarios; el fomento de las Órdenes, Congregaciones e Institutos eclesiásticos consagrados a la actividad misional y el cuidado de los monasterios de relevante valor histórico en España, así como para ayudar al sostenimiento del Colegio Español de San José y de la Iglesia y residencia españolas de Montserrat, en Roma.

4. El Estado prestará a la Iglesia su colaboración para crear y financiar instituciones asistenciales en favor del clero anciano, enfermo o inválido, igualmente asignará una adecuada pensión a los Prelados residenciales que, por razones de edad o salud, se retiran de su cargo."(1).

Esta ayuda económica por parte del Estado a la Iglesia española se suele incluir entre los privilegios de que goza la Iglesia en España y a veces en primer término y como el más importante de todos.

Sin embargo, el problema de la subvención económica si se plantea correctamente no se agota en el ámbito de los privilegios de la Iglesia y merece un tratamiento propio y detenido

Se hace necesario distinguir entre un planteamiento político-jurídico del problema y un planteamiento intraeclesial y evangélico.

Desde el primer aspecto que es el propio de un jurista y politólogo creemos, de acuerdo con MARTINEZ DE CARVAJAL, que el derecho a la libertad religiosa puede concebirse de dos formas:

"1º Como un puro derecho civil de los ciudadanos ante el cual el Estado se limita a reconocerlo, garantizarlo y tutelarlos, sin ofrecerle ningún medio o facilidad para hacerlo eficaz. El ciudadano que quiera profesar una religión o practicar algún culto religioso podrá contar con el respeto y tutela del Estado, pero deberá buscarse los medios necesarios para hacer efectivos sus derechos religiosos. Como el ciudadano aficionado al golf, a los deportes hípico-

(1) Concordato entre la Santa Sede y España, de 27 de agosto de 1953, vid. en Código de Derecho Canónico B.A.C. Madrid, 1957, Apéndice IX, págs 1023- 1024.

-cos o a cualquier otra actividad recreativa considerada de lujo, que deberá afrontar **sus gastos sin ninguna** ayuda estatal. Lo religioso vendría a ser considerado como un **lujo**, un **capricho** honesto o una actividad legítima personal, pero no como una actividad de repercusión positiva para la sociedad que merece la protección estatal. Esta concepción típicamente decimonónica, del derecho a la libertad religiosa como un derecho formal, como un puro poder hacer, es la que domina en países de corte más liberal y menos socializantes.

2º Pero caben también concebir el derecho a la libertad religiosa como un derecho subjetivo público de contenido **social y positivo**. La actitud del Estado frente a este tipo de derechos del ciudadano, no se agota, aunque lo presuponga, en el reconocimiento, garantía y tutela de los mismos, sino que procura hacerlo eficaz y posible - especialmente a las clases económicamente más débiles - ofreciendo los medios necesarios y llevando a la práctica un **auténtico principio de igualdad** de oportunidades. Un Estado de este tipo procura ofrecer a todos los ciudadanos, de forma gratuita o al menos sin que tengan que sufragar personalmente todos los gastos - una serie de servicios - por ejemplo, culturales, deportivos, higiénicos, recreativos, etc. que en otro tiempo, al tener que ser costeados personalmente, eran sólo patrimonio de las clases económicamente privilegiadas.

Concebido lo religioso, desde un punto de vista político y sociológico, como una apetencia legítima y enriquecedora del individuo y de la sociedad y como un valor no inferior al cultural, deportivo o recreativo, es lógico que también el Estado ofrezca los medios necesarios para su fomento y desarrollo. Como la sociedad, a través del Estado, ofrece a los ciudadanos parques, escuelas, bibliotecas o instalaciones deportivas; así, logicamente, debe ofrecerle también iglesias o lugares de culto. Como costes a los funcionarios de aquellas instalaciones o servicios, no se ve inconveniente en que lo haga también con los ministros de los servicios religiosos.

Concebido el derecho a la libertad religiosa de esta segunda forma, no puede hablarse propiamente de la ayuda económica como

de un privilegio que se otorga a la Iglesia, La ayuda se ofrece a los ciudadanos para hacer efectivo su derecho a practicar la religión, desde el momento en que se le facilitan unos lugares y unos servicios gratuitos"(1).

Consecuentemente y desde el punto de vista político y jurídico nos inclinamos por la segunda solución. Pues, un Estado moderno, sensible a lo social, deberá ofrecer gratis a todos los ciudadanos la posibilidad de acceder libremente a la cultura, al deporte, a la higiene, etc, y también a las actividades y prácticas religiosas"(2).

Este es el sentir del Episcopado español, que en su declaración colectiva: "La Iglesia y la comunidad política", expresamente, declara: " Es este un tema singularmente propicio para engendrar equívocos, sobre todo porque de ordinario falta en muchos suficiente conocimiento de causa o porque se tiene un concepto deformado de lo que es la misión de la Iglesia en relación con la sociedad.

No es exclusiva de España la asignación a la Iglesia católica o a otras confesiones de una determinada partida del presupuesto estatal, destinada a facilitar su labor. Ni siquiera se reduce a Estados que, como el nuestro, son confesionales.

En una concepción, hoy superada, de dicha ayuda, se entendía que la institución eclesiástica o, más exactamente, los ministros del culto, eran los destinatarios exclusivos de estas subvenciones. Hoy, con mayor profundidad y precisión, se tiende a considerar dichas prestaciones como un servicio a los ciudadanos destinado a desarrollar su dimensión religiosa.

Mayor importancia si cabe se concede hoy al dato de que la Iglesia católica, inspirada en el misterio de la Encarnación y en el amor evangélico a los hombres, ha empeñado siempre, y sigue empeñando, grandes esfuerzos en la creación y mantenimiento de centros docentes, hospitales, asilos de ancianos, vivien-

(1) MARTINEZ DE CARVAJAL: Boletín Informativo cit. pág. XV-XVI.

(2) Ibidem, pág. XVI.

-das, centros juveniles y toda clase de servicios de asistencia y de promoción humana. A lo largo de la historia, la Iglesia ha ido muchas veces por delante del Estado en la atención a incontables necesidades de los hombres; y todavía hoy, en el ambiente nacional y en el mundial, la Iglesia constituye un factor incalculable de bienestar social, conocido y estimado sin discusión por sus generosos servicios a la humanidad.

Nada puede reclamar la Iglesia por estos servicios. Siempre serán menores que los que exige de sus miembros nuestra condición de discípulos de Cristo, que se hizo uno de nosotros y murió por nosotros. La Iglesia se presenta en el Concilio como maestra de humanidad y servidora de los pobres. Y cualquier ayuda que reciba de personas o de instituciones va destinada siempre al servicio de Dios y a la salvación de los hombres. Aunque es natural que para desarrollar plenamente su misión necesite de medios materiales, una Iglesia rica carece de sentido.

A esta luz deben mirarse todos los sistemas vigentes en el mundo de ayuda estatal a la labor de la Iglesia, a los que nadie califica de privilegios. Y en estos principios se inspiran las prestaciones que ella viene recibiendo del Estado español. Por otra parte, conviene distinguir bien entre aquellas - ciertamente módicas - que retribuyen a las personas y aquellas otras - logicamente cuantiosas - que van destinadas a los servicios educativos y asistenciales, a la conservación del tesoro religioso histórico-artístico o a la reparación y construcción de templos y otros inmuebles.

La Iglesia debe educar en sus fieles una conciencia de colaboración económica que haga posibles la evangelización, el culto y la caridad, Pero ni rechaza aquellas ayudas que, sin oscurecer la pureza de su testimonio, potencien su misión de servicio, ni considera un privilegio recibirlas del pueblo español a través del Estado, gerente y responsable principal del bien común.

Es de esperar, en fin, que la revisión concordataria consiga dar a este problema la equitativa solución que requiere. La Iglesia es consciente de su vocación de servicio. Ni pretende ponerle precio alguno, ni puede hipotecar su libertad a cambio

de las prestaciones que reciba. Y en este espíritu de sencillez de respetuosa dignidad y de desprendimiento evangélico deseamos actuar siempre en materia económica"(1).

Por todo lo expuesto se comprende que el régimen económico de la Iglesia es realmente un problema serio que ha de plantearse a la hora de la revisión o supresión del Concordato.

Sin pretender dar aquí una solución concreta, creemos que una posible forma de paliar el tremendo expolio de que ha sido víctima la Iglesia en España y de dar, de algún modo solución al problema del régimen económico de la Iglesia en España, sería entregar, como dice FRAGA IRIBARNE, "un capital a la Iglesia española y, en adelante, subvenciones sólo en el régimen general de acción social, con un régimen especial de edificios y patrimonios artísticos, acabando de una vez con la vieja cuestión del principio de indemnización, resuelto de principio con ese capital fundacional; y por otra parte, en lugar de hablar de una contribución a la obra de la Iglesia en favor de la nación, como habla el artículo 19 del Concordato, hablar de las contribuciones sociales concretas"(2).

Creemos, pues, que "hay que estructurar como servicios públicos, con cooperación de todos los sectores sociales, aquellos servicios que realiza la Iglesia en el orden temporal, en el cultural, en el asistencial, en el benéfico etc."(3).

"Hay que buscar como dice RUIZ GIMENEZ, la fórmula de equidad, no tanto para resarcir expoliaciones pretéritas, cuanto para buscar fórmulas nuevas, como en muchos otros países del mundo donde la Iglesia Católica no tiene subvención alguna del Estado y, sin embargo, recibe, como las demás Iglesias o como determinadas Asociaciones culturales, una parte de subvenciones, a través del Presupuesto público, por sus servicios concretos, asistenciales, de enseñanza, etc"(4).

En todo caso la subvención estatal a la Iglesia, en virtud del

(1) La Iglesia y la comunidad política, nº 60, vid., en Ecclesia, Madrid, 27 de enero de 1973 pág. 36.

(2) FRAGA IRIBARNE: El problema concordatario, vid. en Cuadernos de Realidades Sociales, Madrid, 1973, nº 2 pág. 70, La república, Barcelona, 1974, págs. 236-237.

(3) RUIZ-GIMENEZ: Relaciones Iglesia-Estado.. cit. en Rev. c.p. 4.

(4) Ibidem.

principio de igualdad de oportunidades se deberán extender, proporcionalmente al número de fieles usuarios y a sus necesidades, a las otras confesiones que respeten la moral y el justo orden público.

El problema es realmente serio y complejo y no existe unanimidad en cuanto a la forma de resolverlo por parte de los diversos Estados(1).

Para POZO TAMAMES (2) el problema económico de la Iglesia sólo tendrá solución válida y radical a partir de la aportación consciente y responsable del pueblo creyente y del trabajo civil de la mayoría de los sacerdotes.

Consideramos bastante aceptado este sistema; sin embargo presenta un claro inconveniente: el trabajo civil, lógicamente, impedirá a los sacerdotes dedicarse de forma más completa a su propia, sagrada y social misión. No parece por tanto este sistema el más aceptable.

Tampoco creemos completamente correcto el entregar una dotación globalmente a la Conferencia Episcopal, tal como se establece por ejemplo en el Anteproyecto (oficial de revisión del Concordato español(3); pues con ello parece como si se quisiera resaltar propagandísticamente, como indica CORRAL, cuanto se entrega(4). (4),

Por todo ello, creemos con el citado autor que la solución más correcta es la vigente al tratar la cuestión como se tratan materias afines, sueldos de maestros, profesores, funcionarios...(5).

Otra perspectiva del problema es la pastoral o evangélica. Desde esta perspectiva la solución más aceptable y correcta es, evidentemente, que la Iglesia subsista por los recursos prestados por los propios fieles a fin de que pueda, así, mantenerse liberada en lo posible de vinculaciones con el Estado, teniendo en todo caso presente que una Iglesia pobre será una Iglesia santa; y que una Iglesia socialmente vigente siempre encontrará ayudas(6). Pero para conseguir esto habrá que concienciar antes al pueblo sobre dicho problema.

(1) CORRAL: *El Concordato Español ante los Concordatos vigentes*, en "Relaciones de la Iglesia y el Estado", Madrid, 1976, pág. 261.

(2) POZO TAMAMES: "Un pueblo más consecuente con su fe, resultado de la independencia económica de la Iglesia", en "YA", 6, VIII, 75.

(3) Artículo XVII, nº 1.

(4) CORRAL: Artículo cit. en ob. cit. pág. 261.

(5) Ibidem.

(6) FRAGA: *La república*, cit. pág. 237.

3. 1. 6. Exenciones o bonificaciones fiscales de la Iglesia.

Las exenciones de impuestos de la Iglesia aparecen reguladas en el actual Concordato español de 1953, en su artículo XX(1), que dice así:

1. "Gozarán de exención de impuestos y contribuciones de índole estatal o local:

a) las Iglesias y capillas destinadas al culto, y, asimismo, los edificios y locales anejos destinados a su servicio o a sede de asociaciones católicas;

b) la residencia de los Obispos, de los canónigos y de los sacerdotes con cura de almas, siempre que el inmueble sea propiedad de la Iglesia;

c) los locales destinados a oficinas de la Curia diocesana y a oficinas parroquiales;

d) las Universidades eclesiásticas y los Seminarios destinados a la formación del clero;

e) las casas de Órdenes, Congregaciones e Institutos religiosos y seculares canónicamente establecidos en España;

f) los colegios u otros centros de enseñanza dependientes de la Jerarquía eclesiástica que tengan la condición de benéfico-docentes.

Están comprendidos en la exención los huertos, jardines y dependencias de los inmuebles arriba enumerados, siempre que no estén destinados a industria o a cualquier otro uso de carácter lucrativo.

2. "Gozarán igualmente de total exención tributaria los objetos destinados al culto católico, así como la publicación de las instrucciones, ordenanzas, cartas pastorales, boletines diocesanos y cualquier otro documento de las Autoridades eclesiásticas competentes referente al gobierno espiritual de los fieles, y también su fijación en los sitios de costumbre."

3. Están igualmente exentas de todo impuesto o contribución

(1) Concordato entre la Santa Sede y España...cit. en ob. cit.

las dotaciones del culto y clero a que se refiere el artículo XIX y el ejercicio del ministerio sacerdotal."

4. " Todos los demás bienes de entidades o personas eclesiásticas, así como los ingresos de éstas que no provengan del ejercicio de actividades religiosas propias de su apostolado, quedarán sujetos a tributación conforme a las leyes generales del Estado, en paridad de condición con las demás instituciones o personas".

5. " Las donaciones, legados o herencias destinados a la construcción de edificios del culto católico o de casas religiosas, o, en general , a finalidades del culto o religiosas, serán equiparados, a todos los efectos tributarios, a aquellos destinados a fines benéficos o benéfico- docentes".

Creemos sinceramente, que deben desaparecer todos las exenciones que se funden en el caracter sobrenatural de la Iglesia y no en su función social o caracter benéfico-docente.

Igualmente"debe desaparecer toda protección estatal, fundada en motivos sobrenaturales, y que no sean las garantías jurídicas comunes a los ciudadanos, a los grupos sociales o a las personas morales que desde un punto de vista sociológico ejercen funciones análogas"(1).

El criterio de exención tributaria (y beneficios fiscales), como señala CORRAL, no ha de ser subjetivo, basado en privilegios o discriminación algunos; ha de ser objetivo, en virtud de la contribución al bien de la sociedad española y en paridad y proporción con instituciones análogas(benéficas, docentes e incluso religiosas de otras confesiones)(2).

De mantenerse la dotación estatal sólo como complemento de la Iglesia en España coincidimos con el mismo autor en considerar más correcto el régimen vigente que el contenido en el Anteproyecto(3).

(1) GIMENEZ Y MARTINEZ DE CARVAJAL: Artículo cit. en ob.cit.p. 509.

(2) CORRAL: El Concordato español ante los Concordatos vigentes, en Relaciones de la Iglesia y el Estado, Madrid, 1976, pág.262.

(3) Vid."Un Anteproyecto que no resuelve nada, vid. en Rev.Vida Nueva de 13 de febrero de 1971,(Artículo XVIII) pág. 13.

3. 1.7.. Presencia de altas personalidades eclesiásticas en los organismos del Estado.

La cuestión de la presencia de altas personalidades eclesiásticas en los organismos del Estado es, como dice FRAGA IRIBARNE, "un tema delicado y muy específico de nuestro país"(1).

No es ciertamente una insólita novedad introducida en el vigente ordenamiento jurídico de España, sino que responde más bien, a una larga tradición histórica en nuestro país.

En efecto, pues, sin retroceder demasiado en nuestro Derecho histórico, ya encontramos prevista la presencia de eclesiásticos en organismos políticos de la nación, en la primera de nuestras Constituciones, la nonata de Bayona de 6 de julio de 1808(2), y continua presente en las sucesivas Constituciones hasta nuestros días, en que las Leyes fundamentales que integran la vigente Constitución del Estado español establecen tres casos concretos en que la Iglesia católica ha de estar representada por miembros de su jerarquía en organismos políticos. A ellos se puede añadir un cuarto caso que, si bien no está previsto por una Ley fundamental, se contiene en la Ley orgánica del Consejo de Estado, supremo órgano consultivo en asuntos de gobierno y de administración(3).

"Todos ellos responde, como dice MARTIN MARTINEZ, a disposiciones dadas unilateralmente por el Estado español y sin que haya constancia alguna de un previo acuerdo con la Santa Sede, ni siquiera con la Jerarquía española. Se trata, como advierte el citado autor, de la pervivencia de una larga tradición conforme a la cual en España se ha considerado a la jerarquía de la Iglesia católica como un estamento de singular importancia y especial significación en la vida nacional"(4).

(1) FRAGA IRIBARNE: El problema concordatario, en Cuadernos de realidades sociales 1973, n2, pág. 67.

(2) Vid. arts 61, 62, 65.

(3) MARTIN MARTINEZ: Presencia de la Jerarquía de la Iglesia católica en organismos políticos del Estado español, en "El fenómeno religioso en España, Madrid, 1972, pág. 358.

-ficación dentro de la vida nacional"(1).

Estos cuatro casos de presencia de la jerarquía católica en organismos políticos a que antes hemos hecho referencia son:

A) En el Consejo de Regencia.

Según la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, en el Consejo de Regencia, órgano que asume los poderes de la Jefatura del Estado al quedar ésta vacante, ha de figurar un representante de la jerarquía eclesiástica.

Y así según la citada Ley, el Consejo de Regencia está integrado por tres miembros: el Presidente de las Cortes, "el Prelado de mayor jerarquía y antigüedad Consejero del Reino" y el Capitán General o, en su defecto, el Teniente General, en activo y de mayor antigüedad de los Ejércitos de Tierra, Mar o Aire, y por este mismo orden, o sus respectivos suplentes, que son designados por el Jefe del Estado, a propuesta del Consejo del Reino, entre sus miembros(2).

B) En el Consejo del Reino.

La jerarquía eclesiástica se ha de encontrar representada, según la Ley de Sucesión, en el Consejo del Reino, órgano que tiene **preferencia sobre los** Cuerpos consultivos de la nación y que asiste al Jefe del Estado en los asuntos y **resoluciones trascendentales** de la exclusiva competencia de éste.

Está presidido, como el Consejo de Regencia, por el Presidente de las Cortes y está compuesto por dieciséis miembros, entre los cuales figura, en primer lugar, "el Prelado de mayor jerarquía

(1) MARTÍN MARTINEZ; **Presencia de la Jerarquía de la Iglesia Católica en organismos políticos del Estado español**, en Ob. cit. pág.358.

(2) Art. 3º de la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, de 26 de julio de 1947, modificada por la Ley Orgánica del Estado de 10 de enero de 1967.

y antigüedad entre los que sean procuradores en Cortes"(1).

Se advierte ciertamente como la necesaria integración de un Prelado en el Consejo de Regencia viene condicionada por el hecho de que tal Prelado sea miembro del Consejo del Reino y, a su vez, por la exigencia de que sea previamente Procurador en Cortes."

"Se produce así como señala MARTIN MARTINEZ, una clara gradación. Es preciso comenzar por el hecho de que algunos prelados sean procuradores en Cortes. El de mayor jerarquía y antigüedad entre ellos será el primer miembro del Consejo del Reino. Finalmente, el Prelado de mayor jerarquía y antigüedad entre los consejeros del Reino - lo cual hace suponer que puedan ser varios - ha de formar parte del Consejo de Regencia"(2).

C) En las Cortes Españolas.

Según la Ley fundamental constitutiva de las Cortes Españolas, éstas se componen de los procuradores comprendidos en diez apartados, el último de los cuales es el siguiente: "aquellas personas que por su jerarquía eclesiástica, militar o administrativa, o por sus relevantes servicios a la Patria, designe el Jefe del Estado, oído el Consejo del Reino, hasta un número no superior a veinticinco"(3).

Podría pensarse que el Jefe del Estado no nombrase Procurador en Cortes a ningún eclesiástico si sólo se atendiese al mencionado precepto de la Ley constitutiva de las Cortes.

Sin embargo, "no puede olvidarse, como dice MARTIN MARTINEZ, "la necesidad de que sean procuradores en Cortes los prelados que también, ineludiblemente, han de formar parte del Consejo del

(1) Ley de Sucesión, cit. art. 4º.

(2) MARTIN MARTINEZ: Presencia de la Jerarquía de la Iglesia Católica en organismos políticos del Estado español, en Ob. cit. pág. 361.

(3) Ley constitutiva de las Cortes Españolas, de 17 de julio de 1942, modificada por la Ley Orgánica del Estado, de 10 de enero de 1967, artículo 2º, 1, j).

Reino y del Consejo de Regencia"(1).

Hay que entender, pues, que el Jefe del Estado, como señala el citado autor, se halla en la necesidad de nombrar algún Prelado como Procurador en Cortes, para que pueda funcionar normalmente el sistema constitucional de asesoramiento de la Jefatura del Estado mediante el Consejo del Reino y de asunción de las funciones supremas de gobierno por el Consejo de Regencia en caso de vacante de la suprema magistratura de la nación"(2).

D) En el Consejo de Estado.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Estado de 25 de noviembre de 1944 es obligada la presencia de un miembro de la jerarquía de la Iglesia católica, e incluso es posible la de algún otro prelado, en el "supremo Cuerpo consultivo en asuntos de gobierno y administración"(3), es decir en el Consejo de Estado.

En efecto, pues entre los ocho consejeros natos de este Cuerpo consultivo figura, en primer término, "el Primado de las Españas", esto es, el Arzobispo de la sede de Toledo, siempre designado Cardenal por la Santa Sede si ya no lo fuese en el momento de ser encargado del cuidado pastoral de la archidiócesis toledana(4).

Figuran además en el Consejo de Estado otros siete consejeros, libremente elegidos por el Jefe del Estado entre **personas** pertenecientes a otras tantas categorías o estamentos de las cuales figura en segundo lugar la de "arzobispo u obispo"(5). "Es evidente, como advierte MARTÍN MARTÍNEZ, que tanto en los tres casos previstos en las Leyes fundamentales integrantes de

(1) MARTÍN MARTÍNEZ: Presencia de la Jerarquía de la Iglesia Católica....en Ob. cit. pág. 361.

(2) *Ibidem*.

(3) Ley Orgánica del Consejo de Estado, de 25 de noviembre de 1944, artículo 1º y Ley Orgánica del Estado, artículo 40, IV.

(4) MARTÍN MARTÍNEZ: Presencia de la Jerarquía ...en Ob. cit. pág. 363.

(5) Ley Orgánica del Consejo de Estado, cit. art. 3º, 3º, b).

la vigente Constitución española, como en los dos a que se refiere la Ley orgánica del Consejo de Estado, el nombramiento de miembros de la jerarquía de la Iglesia católica para formar parte de órganos políticos o de gobierno, responde a una decisión unilateral del Estado español, que considera a los miembros de la jerarquía eclesial entre los ciudadanos de especial relieve y significado"(1).

La cuestión está planteada en términos realmente anacrónicos, que deben ser cuanto antes modificados.

Hay que señalar, en aras de la mutua independencia de la Iglesia y del Estado, la necesidad de que los obispos se retiren de los puestos en los organismos políticos de la nación.

Este es también el sentir de la Iglesia, que expresamente declara:

a) Concilio Vaticano II : " La Iglesia, por razón de su misión y competencia , no se confunde en modo alguno con la comunidad política ni está ligada a sistema político alguno. La comunidad política y la Iglesia son independientes y autónomas cada una en su propio terreno"(2). " La Iglesia no quiere mezclarse en modo alguno en el gobierno de la ciudad terrena. No reivindica para sí otra autoridad que la de servir, con el favor, de Dios, a los hombres con amor y fidelidad"(3).

"Los laicos están llamados, particularmente, a hacer presente y operante a la Iglesia en los lugares y condiciones donde ella no puede ser sal de la tierra si no es a través de ellos"(4).

"Las profesiones y las actividades seculares corresponden propiamente, aunque no exclusivamente, a los seglares.. Los seglares esperen de los sacerdotes la luz y el impulso espiritual. Pero no piensen que sus pastores vayan a estar siempre en condiciones de tal competencia que hayan de tener al alcance una solución concreta para cada problema que surja, aun grave, o que esa sea su misión; es a ellos mismos a quien corresponde car-

(1) MARTIN MARTINEZ: La Jerarquía de la Iglesia..en ob.ct.,p pag. 363.

(2) Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, 76.

(3) Concilio Vaticano II, Ad gentes, 12.

(4) Concilio Vaticano II, Lumen gentium, 33.

-gar con las propias responsabilidades, debidamente conducidos por la sabiduría cristiana y atentos a las enseñanzas del Magisterio"(1).

"Es obligación de toda la Iglesia el trabajar para que los hombres se capaciten de restablecer rectamente el orden de los bienes temporales y de ordenarlos hacia Dios por Jesucristo. A los pastores atañe el enunciar claramente los principios sobre la finalidad de la creación y el uso del mundo, y prestar los auxilios morales y espirituales para instaurar en Cristo el orden de las cosas temporales. Es preciso, con todo que los seglares asuman como obligación específica suya la restauración del orden temporal, y que, dirigidos por la luz del evangelio y por la mente de la Iglesia y movidos por la caridad cristiana, actúen en dicho orden directamente y en forma concreta; que cooperen unos ciudadanos con otros con sus conocimientos especiales y su responsabilidad propia; y que busquen en todas partes y en todo la justicia del reino de Dios. Hay que restaurar el orden temporal de tal forma que, observando íntegramente sus propias leyes, se conforme con los principios fundamentales de la vida cristiana, adaptado a las variadas circunstancias de lugares, tiempos y pueblos. Entre las obras de este apostolado sobresale la acción social de los cristianos, que desea el santo Concilio se extienda hoy a todo el ámbito temporal, incluso a la cultura"(2).

"Es menester procurar celosamente la educación cívica y política que en nuestros días es particularmente necesaria, ya para el conjunto del pueblo, ya, ante todo, para los jóvenes, a fin de que todos los ciudadanos puedan desempeñar su papel en la vida de la comunidad política. Los que son, o pueden llegar a ser capaces de ejercer un arte tan difícil, pero a la vez tan noble, cual es la política, prepárense para ella y procuren ejercitarla con olvido del propio interés y ventajas materiales. Luchen contra la injusticia y la opresión, contra la intolerancia y el absolutismo de un hombre o de un partido, obren con inte-

(1) Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, 43.

(2) Concilio Vaticano II, Apostolicam actuositatem, 7.

-gritud y prudencia; conságrense al servicio de todos con sinceridad y rectitud, más aún, con amor y fortaleza política"(1).

"Ciertamente las realidades temporales y las que en la condición humana trascienden este mundo están estrechamente unidas entre sí, y la Iglesia misma se sirve de instrumentos temporales cuando su propia misión se lo exige. Sin embargo, ella no pone su esperanza en los privilegios que le ofrece el poder civil; antes bien renunciará de buen grado al ejercicio de ciertos derechos legítimamente adquiridos, si consta que su uso puede empañar la pureza de su testimonio, o si nuevas circunstancias exigen otras disposiciones"(2).

"La misión propia que Cristo confió a su Iglesia no es de orden político, económico o social: el fin que le asignó es de orden religioso. Con todo, de esta misión religiosa emanan un encargo, una luz y unas fuerzas que pueden servir para establecer y consolidar según la ley divina la comunidad humana"(3).

"La Iglesia... por la fuerza del evangelio que se le ha confiado, proclama los derechos humanos, y reconoce y estima en mucho el dinamismo de nuestro tiempo, con el que se promueven estos derechos por todas partes"(4).

"El carácter secular es propio y peculiar de los laicos. Los que recibieron el orden sagrado, aunque algunas veces pueden tratar asuntos seculares, incluso ejerciendo una profesión secular, están ordenados principal y directamente al sagrado ministerio, por razón de su vocación particular.. A los laicos pertenece por propia vocación buscar el reino de Dios tratando y ordenando, según Dios, los asuntos temporales. ..A ellos, muy en especial, corresponde iluminar y organizar todos los asuntos temporales a los que están estrechamente vinculados, de tal manera, que se realicen continuamente según el espíritu de Jesucristo y se desarrollen y sean para la gloria del Creador y Redentor"(5).

(1) Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, 75.

(2) Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, 76.

(3) Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, 42.

(4) Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, 41.

(5) Concilio Vaticano II, Lumen gentium, 31.

b) Sinodo episcopal:

No se excluye que un presbítero pueda militar activamente en un partido político e incluso asumir una función de dirigente, pero estas son situaciones realmente excepcionales(1), "algo que debe excluir cualquier presbítero a no ser que, en circunstancias concretas y excepcionales, lo exija realmente el bien de la comunidad, obteniendo el consentimiento del obispo, consultado el Consejo Presbiteral y— si el caso lo requiere — también la Conferencia Episcopal"(2). El eclesiástico sin embargo, de ordinario, "debe mantener cierta distancia de cualquier cargo o empeño político"(3).

c) Declaración colectiva del Episcopado español:

"La intervención de eclesiásticos en órganos de gobierno o representación política de la comunidad civil cuenta en España, al igual que otros temas ya tratados, con una larga ejecutoria. Obedeció, sin duda, a la búsqueda de cauces eficaces de colaboración armónica entre la Iglesia y el Estado en bien de todo el pueblo.

Pero las circunstancias de hoy son muy distintas, tanto en la Iglesia como en la sociedad española. A la luz de la propia evolución operada en ambas, consideramos que la participación de eclesiásticos en los mencionados órganos de decisión política no responde ya ni a los criterios pastorales de la Iglesia ni a las exigencias de una sana colaboración entre ella y el Estado.

Enseña el Concilio que la inspiración de la legislación y de toda la vida política es misión específica de los seglares, los cuales, por su propia condición secular, viven más de cerca los problemas temporales. A aquellos que creen tener una clara vocación política los exhortamos a que se preparen seriamente y ejerciten las virtudes necesarias para el cumplimiento de tan impor-

(1) MARTÍN MARTÍNEZ: Problema de la Jerarquía de la Iglesia católica..., en ob. cit. pág. 389.

(2) Sinodo de los Obispos, El sacerdocio ministerial, Segunda parte, I, 2., en Ecclesia, 18 y 25 de diciembre 1971, pág. 23.

(3) Ibidem.

-tante misión (GS. 75). En cuanto a los pastores, les compete fundamentalmente, además de proporcionar a los seglares la debida formación y confortarlos con la fuerza del Espíritu, la de crear, mantener y perfeccionar la unidad del pueblo cristiano en la fidelidad a Jesucristo (GS. 43.7).

Es claro que la actividad legislativa y política exigen necesariamente pronunciarse por opciones concretas. Y este no sólo no favorece la misión unificadora de los pastores, sino que muchas veces la dificulta.

Por otra parte, una colaboración entre la Iglesia y el Estado, que respete, como es debido, la mutua independencia entre ambos, se salvaguarda mejor por parte de quienes son responsables de la comunidad eclesial, si estos quedan libres de toda implicación de carácter político.

En consecuencia, consideramos conveniente que las instancias competentes promuevan las oportunas modificaciones legales, a fin de sustituir la actual presencia de eclesiásticos en órganos políticos y de gobierno por otras fórmulas en las que queden claramente a salvo los intereses pastorales de la Iglesia y su fructífera colaboración con el Estado" (1).

El Concordato, por su parte, dispone: " Los clérigos y los religiosos no estarán obligados a asumir cargos públicos o funciones que, según las normas del Derecho Canónico, sean incompatibles con su estado.

Para ocupar empleos o cargos públicos necesitarán el nihil obstat de su Ordinario propio y el del Ordinario del lugar donde hubieran de desempeñar su actividad. Revocado el nihil obstat,

(1) Declaración colectiva del Episcopado español, nº 62, en Ecclesia, 27 de enero de 1973, pág. 37.

no podrán continuar ejerciéndolos"(1).

Después de haber examinado los anteriores textos, y centrándonos ya en el problema concreto de España, parece evidente la necesidad de que los obispos se retiren de los puestos en los organismos políticos de la nación. "Aquí, como advierte RUIZ-GIMENEZ, no caben interpretaciones evasivas"(2). En la declaración colectiva del Episcopado español, después de marcar ese criterio en forma muy categórica se hace un llamamiento a las autoridades del Estado para que modifiquen las Leyes Fundamentales en consonancia con aquella exigencia. "Pero hay que evitar un equívoco, con el que más de una vez se ha pretendido respaldar la permanencia de prelados en esos puestos públicos. Las Leyes Fundamentales podrán prever o no que haya representantes de la Iglesia en las instituciones políticas; pero en modo alguno pueden obligar a que se acepten esos puestos"(3).

Consecuentemente, hay que señalar de acuerdo con la Conferencia Episcopal española que lo hace a nivel corporativo, la grave inconveniencia de que dichos puestos se ocupen por los prelados, sin perjuicio de que el Estado, para ser respetuoso con esta decisión y coherente con su afirmación de no dañar a la independencia de la Iglesia, no permita que dichos puestos sean ocupados por los clérigos. (1) Concordato entre la Santa Sede y España, de 27 de agosto de 1953, en Código de Derecho Canónico, (B. 400.) Madrid, 1957, Apéndice IX, art. XIV, pág. 1022.

Recuérdese además que el Código de Derecho canónico, en su c. 139 prohíbe que los clérigos soliciten el cargo de senadores o diputados y que lo acepten sin licencia de la Santa Sede en las regiones donde haya prohibición pontificia, ni que intenten lo mismo en las demás regiones sin licencia, tanto de su Ordinario como del Ordinario del lugar en que se ha de efectuar la elección.

(2) RUIZ-GIMENEZ: Lucha por la liberación; en "Mesa redonda:

La Iglesia y la comunidad política, en Rev. Cuadernos para el diálogo, febrero de 1973, pág. 79.

(3) Ibidem.

-dependencia de la Iglesia, modifique dichos preceptos por los trámites de urgencia que las propias Leyes Fundamentales prevén, entre ellos el ejercicio de la Ley de Prerrogativas(1).

No es, ciertamente necesaria, pero si creemos que muy conveniente, para la independencia de la Iglesia, dicha modificación.

3. 2.- Renuncia de privilegios por parte del Estado: El privilegio de presentación y el de las preces diarias por el Jefe del Estado.

Hemos analizado en los apartados anteriores la indudable necesidad, para la mutua independencia de la Iglesia y del Estado, de la renuncia por parte de la Iglesia a sus privilegios.

Ahora, examinaremos cómo, para esa mutua independencia, es también inequívoca la necesidad de la renuncia por parte del Estado a sus privilegios y especialmente el llamado privilegio de presentación.

Este privilegio de presentación, para la designación de Arzobispos, Obispos residentes, Coadjutores etc, se encuentra regulado en el Artículo VII del Concordato y en el Acuerdo del 7 de junio de 1941.

El Concordato en su Artículo VII dispone: " Para el nombramiento de Arzobispos y Obispos residentes y de los Coadjutores con derecho de sucesión continuarán rigiendo las normas del Acuerdo estipulado entre la Santa Sede y el Gobierno español el 7 de junio de 1941"(2). Y el acuerdo de 7 de junio de 1941, expresamente establece: " El Gobierno español y la Santa Sede han convenido los puntos siguientes:

1. Tan pronto como se haya producido la vacante de una Sede Arzobispal o Episcopal (o de una Administración Apostólica), o cuando la Santa Sede juzgue necesario nombrar un Coadjutor con derecho de sucesión, el Nuncio Apostólico, de modo confidencial, tomará contacto con el Gobierno español, y, una vez conseguido

(1) RUIZ GIMENEZ: Lucha por la liberación, en "Mesa redonda: La Iglesia y la comunidad política en Rev. cit. pág.79.

(2) Concordato entre la Santa Sede y España de 27 de agosto de 1953, en Ob. cit. pág.1021.

un principio de acuerdo, enviará a la Santa Sede una lista de nombres de personas idóneas, al menos en número de seis.

2. El Santo Padre elegirá tres de entre aquellos nombres y, por conducto de la Nunciatura Apostólica, los comunicará al Gobierno español, y entonces el Jefe del Estado, en el término de treinta días, presentará oficialmente uno de los tres.

3. Si el Santo Padre, en su alto criterio, no estimase aceptables todos o parte de los nombres comprendidos en la lista, de suerte que no pudiera elegir tres o ninguno de entre ellos, de propia iniciativa completará o formulará una terna de candidatos, comunicándola por el mismo conducto al Gobierno español.

Si éste tuviera objeciones de carácter político general que oponer a todos o a alguno de los nuevos nombres, las manifestará a la Santa Sede.

En caso de que transcurriesen treinta días desde la fecha de la susodicha comunicación sin una respuesta del Gobierno, su silencio se interpretará en el sentido de que éste no tiene objeciones de aquella índole que oponer a los nuevos nombres, quedando entendido que entonces el Jefe del Estado presentará sin más a Su Santidad uno de los candidatos incluidos en dicha terna.

Por el contrario, si el Gobierno formula aquellas objeciones, se continuarán las negociaciones aun trascurridos los treinta días.

4. En todo caso, aun cuando el Santo Padre acepte tres nombres de los enviados, siempre podrá además sugerir nuevos nombres, que añadirá a la terna, pudiendo entonces el Jefe del Estado presentar indistintamente un nombre de los comprendidos en la terna o alguno de los sugeridos complementariamente por el Santo Padre.

5. Todas estas negociaciones previas tendrán carácter absolutamente secreto, guardándose de manera especial el secreto, con respecto a las personas, hasta el momento de su nombramiento.

6. El Gobierno español, por su parte, se compromete formalmente a concluir cuanto antes con la Santa Sede un nuevo Concordato inspirado en su deseo de restaurar el sentido católico de la tradición nacional.

El presente Convenio estará en vigor hasta que se incorporen sus normas al nuevo Concordato.

7. En lo relativo a la provisión de los beneficios no consistoriales, en el mismo momento de la firma de este Convenio se iniciará la oportuna negociación para concluir otro en el que se establezcan las normas para su provisión.

La Iglesia, a la que por derecho propio y nativo corresponde la provisión incluso de aquellos beneficios no consistoriales sobre los que el Rey de España gozaba de particulares privilegios, está dispuesta, no obstante, a hacer también algunas concesiones en este punto al Gobierno español.

8. Hasta que la cuestión quede definitivamente arreglada en el futuro Concordato, los Prelados podrán proceder libremente a la provisión de las parroquias, dentro de las normas del Derecho Canónico, sin más que notificar los nombramientos al Gobierno con anterioridad a la toma de posesión, para el caso excepcional de que éste tuviera que formular alguna objeción contra el nombramiento por razones de carácter político general.

9. Entretanto se llega a la conclusión de un nuevo Concordato, el Gobierno español se compromete a observar las disposiciones contenidas en los cuatro primeros artículos del Concordato del año 1851.

10. Durante el mismo tiempo, el Gobierno se compromete a no legislar sobre materias mixtas, sin previo acuerdo con la Santa Sede⁽¹⁾.

Asimismo ese privilegio afecta también a la provisión de beneficios no consistoriales: Canónigos, Párrocos etc., que regula el Concordato en su artículo X y el Acuerdo del 16 de julio de 1946.

En efecto, el artículo X del Concordato declara: "En la provisión de beneficios no consistoriales se seguirán aplicando las disposiciones del Acuerdo estipulado el 16 de julio de 1946.

(1) Acuerdo sobre el modo de ejercicio del privilegio de presentación entre el Gobierno español y la Santa Sede, de 7 de junio de 1941, (Anejo I), en Código de Derecho Canónico cit. pág. 1030- 1031.

Y el Acuerdo de 16 de julio de 1946, establece: "

"Art.1. La provisión de los beneficios no consistoriales pertenece a la Autoridad eclesiástica, la cual los confiere en conformidad con el Código, salvo cuanto por concesión de la Santa Sede, en consideración de las tradiciones católicas de España, se dispone en el presente Convenio.

Art. 2. Los Ordinarios diocesanos procederán a la provisión de las parroquias a tenor del canon 459 y previo concurso general y abierto, de acuerdo con el nº 4 de dicho canon.

Antes de publicar los nombramientos de los párrocos, los notificarán reservadamente al Gobierno para el caso excepcional en que éste tuviera que oponer alguna dificultad de carácter político general.

En caso de divergencia entre el Ordinario y el Gobierno, se acudirá a la Santa Sede, la cual, de acuerdo con el Jefe del Estado, tomará la decisión que convenga.

Transcurridos treinta días desde la antedicha comunicación sin que el Gobierno haya dado respuesta, su silencio se interpretará en el sentido de que no existe objeción alguna, y el nombramiento será publicado sin más.

Las disposiciones de este artículo en nada afectarán al régimen de provisión de curatos de patronato particular.

Art. 3. P.1 Cuando se trate de proveer la dignidad de Deán de los Cabildos metropolitanos y catedrales, el Obispo, después de oír al Cabildo sobre los varios candidatos, formará una lista de tres eclesiásticos dignos y la enviará al jefe del Estado, el cual escogerá y presentará a la Santa Sede una de las personas que componen la terna.

P. 2. La provisión de la dignidad de Chantre corresponderá siempre a la libre colación de la Santa Sede.

P.3 La provisión de las demás dignidades de los Cabildos metropolitanos y catedrales será efectuada por la Santa Sede alternativamente: a) por libre colación, y b) por presentación previa del Jefe del Estado. En este segundo caso se procederá como se indica en el párrafo primero del presente artículo.

P.4. Para el nombramiento de Abad de los Cabildos colegiales, el Obispo previa oposición, formará y enviará al Jefe del Estado

una lista de tres eclesiásticos que hayan sido reputados dignos en dicha oposición. El Jefe del Estado escogerá y presentará a la Santa Sede uno de los nombres comprendidos en la terna.

P. 5. Para el nombramiento de Capellán Mayor de las capillas de los Reyes de Toledo, de los Reyes Católicos de Granada y de San Fernando de Sevilla, el Jefe del Estado presentará al Obispo un candidato escogido de una terna formada al efecto por el mismo Obispo, según lo establecido en el párrafo primero de este artículo.

Art. 4. Las canonjías de oficio de las iglesias catedrales y colegiadas serán conferidas previa oposición, efectuándose la elección del candidato por el Obispo y el Cabildo.

Para ser nombrado dignidad o canónigo de oficio se necesita poseer grado mayor en Filosofía, Teología o Derecho Canónico, o haber desempeñado meritoriamente en ministerio eclesiástico en funciones de gobierno, como Vicario General, Provisor, Secretario de Cámara o en cargo de magisterio, como profesor de Filosofía, Teología o Derecho Canónico.

Art. 5.P.1. Las canonjías simples y los beneficios menores de las iglesias, catedrales y colegiadas se proveerán una mitad previa oposición y la otra mitad en la forma llamada "de gracia". Cuando el número de las prebendas fuera impar, la unidad sobrante se sumará al grupo de las de oposición. En la mitad correspondiente a oposición se entenderán incluidos los beneficios denominados de oficio.

P.2. Al proveer estos beneficios, el Obispo conserva la facultad de imponerles, oído el Cabildo, cargas particulares, principalmente de ministerio.

P. 3. Bien sea que haya habido oposición o que se proceda en forma "de gracia", las canonjías y los beneficios a que se refiere el párrafo primero serán conferidos por el Obispo alternativamente: a) por libre colación, después de haber oído al Cabildo, y b) por previa presentación al Jefe del Estado.

En este segundo caso, el Jefe del Estado escogerá al candidato que ha de presentar de una lista de tres eclesiásticos dignos,

que el Obispo formará a base de los resultados de la oposición, o después de oír al Cabildo **sobre los** varios candidatos, por su libre designación.

Art. 6. P.L. Las prebendas del priorato nullius de Ciudad Real se conferirán de conformidad con su régimen tradicional establecido en la Bula Ad Apostolicam.

P. 2. Para el nombramiento de capellanes y beneficiados menores de las capillas de los Reyes de Toledo, de los Reyes Católicos de Granada y de San Fernando de Sevilla se procederá previa presentación del Jefe del Estado. La terna de los eclesiásticos de entre los cuales el Jefe del Estado escogerá el nombre que habrá de presentar al Obispo la hará el mismo Obispo después de oír el parecer del Cabildo y de la respectiva Corporación sobre los varios candidatos,

P. 3. Los capellanes, párrocos y beneficiados mozárabes serán nombrados según las constituciones propias de su Cabildo.

P. 4. ~~Salvo lo dispuesto en el artículo 8, de las Iglesias Colegiadas~~ de Santa María de Roncesvalles, de San Isidoro de León y la de Gandía, lo mismo que las iglesias magistrales del Sacro Monte y de Alcalá de Henares, conservarán su régimen peculiar de conferir las prebendas en las colegiadas de patronato particular.

Art. 7. P. 1. Cuando la provisión de un beneficio haya de hacerse por oposición **podrán** participar en ella sacerdotes de todas las diócesis españolas, con el consentimiento de los Ordinarios interesados, y se efectuará aquélla según las normas que dicte la Santa Sede.

P. 2. Cuando la elección del candidato a un beneficio se efectúe, previa oposición, por el Ordinario y el Cabildo, corresponderán en aquélla al Prelado tres, cuatro o cinco votos, según que el número de capitulares sea de diceséis o menos, de veinte o de más de veinte.

P. 3. Cuando la provisión de un beneficio se efectúe, previa oposición para el turno en que corresponde al Jefe del Estado.

la presentación, el Ordinario formará la lista de tres eclesiásticos dignos a base de los resultados de la eposición; pero si no le es posible reunir ese número, podrá elevar una lista incompleta, exponiendo el motivo que haya tenido para ello.

P. 4. La presentación por parte del Jefe del Estado se efectuará siempre en plazo de treinta días, a contar desde aquel en que el Ordinario haya transmitido al Ministerio competente la terna formada por él. Transcurrido dicho plazo sin que se realice la presentación, la provisión del beneficio será considerada como libre.

P. 5. La Autoridad eclesiástica diocesana dará comunicación oficial al Gobierno de las provisiones efectuadas para los efectos oportunos,

Art. 8. Quedando firmes los principios generales del Código de Derecho Canónico acerca de las reservas pontificias, la Santa Sede consiente en que no se apliquen las prescripciones del canon 1435, número 1º y 4º, cuando, según los términos del presente Convenio, la provisión de un beneficio no consistorial tenga lugar previa presentación del Jefe del Estado.

Las provisiones de los bendficios eclesiásticos que queden vacantes "por resulta" serán consideradas en todo igual a las otras provisiones, y, por tanto, se ajustarán a las normas que para cada caso se establecen en este Convenio, salvo cuando se haya producido la vacante a consecuencia de la provisión de un beneficio no consistorial efectuada por libre colación de la Santa Sede, en cuyo caso se aplicarán las normas del Código de Derecho Canónico.

Art. 9. El Gobierno español conservará las dotaciones señaladas a los beneficios objeto del presente Convenio en la cuantía consignada actualmente.

Si en elfuturo se verificasen cambios notables en las condiciones económicas generales, las dotaciones del Gobierno se acomodarán a la nueva situación en medida no inferior al valor real de las asignadas actualmente.

Art. 10. El presente Convenio se aplicará a todos los beneficios que estén vacantes en el acto de la firma, y permanecerá en vigor hasta que sus normas sean incorporadas al nuevo Concordato.

El Gobierno español renueva, a este propósito, el empeño de observar las disposiciones contenidas en los cuatro primeros artículos del Concordato de 1851, y de no legislar sobre materias mixtas, o que de algún modo puedan **interesar a la Iglesia**, sin previo acuerdo con la Santa Sede"(1).

Nada dice el Concordato sobre los Obispos auxiliares. Sin embargo " es evidente que el hecho de no regular en el Concordato la presentación de los auxiliares no se debió a un portillo **dejado abierto** inadvertidamente por el Gobierno. Esto sería un insulto a nuestros diplomáticos. Quienes lo pactaron sabían, sin duda , que nunca en ningún convenio firmado por la Santa Sede se había aceptado intervención alguna de ningún gobierno en el nombramiento de los auxiliares y administradores apostólicos. Sabían además que la Santa Sede solía usar, en los casos conflictivos, ese recurso del nombramiento de administradores apostólicos y la historia reciente de España lo había demostrado en los nombramientos - durante la monarquía - de administradores para Ciudad Rodrigo, Barbastro, Solsona, Calahorra, Málaga, Jaen y varias diócesis más, Nuestros diplomáticos conocían sin duda estos hechos y esta práctica.

Decir que los Obispos auxiliares carecían de jurisdicción antes y la han adquirido en los últimos años es seguir ignorando la historia. Evidentemente antes del Concilio no eran miembros de la Conferencia Episcopal, porque la Conferencia Episcopal no existía . Pero...actuaban e intervenían en las decisiones colectivas del episcopado. El documento colectivo más antiguo de los Obispos españoles reunidos en Roma durante el Vaticano I (año 1870) lleva ya la firma del Obispo titular de Archis, auxiliar del Toledo. Y firmas de auxiliares encontramos en los docu-

(1) Acuerdo entre la Santa Sede y el Gobierno español para la provisión de beneficios no consistoriales, de 16 de julio de 1946(B.O. E. del 18 de julio de 1946), en Código de Derecho canónico, cit. Anexo II, .pág. 11031-1033.

-mentos de 1870, 1886, 1887, 1888, 1889, 1892, 1905, 1910, 1912, 1915, 1917, 1922, 1923. Presentar como novedoso algo que tiene tanta historia sólo puede ser un gesto de ignorancia"(1).

Intentar conseguir que se incluya a los auxiliares en el llamado derecho de presentación (2), va contra el deseo manifestado expresamente por la Iglesia universal en el Concilio, cuando por práctica unanimidad se votó que no se concediera ningún nuevo privilegio en ese campo y se pidió cortésmente a los gobiernos que renunciaran incluso a los privilegios que en el momento actual tienen(3). "Conceder intervención en el nombramiento de auxiliares sería no sólo un privilegio nuevo sino un giro histórico en una praxis secular de la Santa Sede"(4).

Respecto al privilegio de presentación para la designación de Arzobispos, Obispos residentes, Coadjutores, etc. la renuncia por parte del Estado a dicho privilegio, ha de ser, como señala RUIZ-GIMENEZ sin demora alguna y con generosidad, porque así lo pidió expresa y formalmente el Concilio a los gobernantes cristianos. Nadie puede negarlo ni atenuarlo. El Concilio de una manera formal y expresa, pidió a los gobernantes cristianos, donde este privilegio subsistiera, que renunciaran a él al mismo tiempo que prohibía la concesión de privilegios análogos para el futuro"(5).

El Concilio, expresamente declara: "Como el cargo apostólico de los Obispos ha sido instituido por Cristo Señor y persigue un fin espiritual y sobrenatural, el sacrosanto Concilio ecuménico declara que el derecho de nombrar e instituir a los Obispos es propio, peculiar y de suyo exclusivo de la competente autoridad eclesiástica.

Por tanto, con el fin de defender debidamente la libertad de la Iglesia y de promover más apta y expeditamente el bien de los

(1) Vid. Editorial: "Regresa el mito de los auxiliares", de Rev. Vida Nueva, de 18 de mayo de 1974, pág. 4.

(2) Ibidem, pág. 5

(3) Concilio Vaticano II, Decreto Christus Dominus, 20.

(4) Editorial de Vida Nueva cit.

(5) RUIZ GIMENEZ: Relaciones Iglesia Estado en el momento actual español, en Boletín de A.C.N. de P. de IV-1970, p.13.

fieles, es deseo del sacrosanto Concilio que en lo sucesivo no se concedan a las autoridades civiles más derechos o privilegios de elección, nombramiento, presentación o designación para el cargo del episcopado; en cuanto a las autoridades civiles, cuya voluntad para con la Iglesia reconoce y altamente estima el Concilio, humanísimamente se les reconoce y altamente estima el Concilio, humanísimamente se les ruega que quieran renunciar espontáneamente, después de consultada la Santa Sede Apostólica, a los derechos o privilegios susodichos de que por pacto o costumbre gozan hasta el presente"(1).

"En el cumplimiento de su cargo apostólico que mira a la salvación de las almas, los Obispos gozan de suyo de plena y perfecta libertad e independencia respecto de cualquier potestad civil. No es lícito, por tanto, impedir directa o indirectamente el ejercicio de su cargo eclesiástico, ni prohibirles que se comuniquen libremente con la Sede Apostólica y otras autoridades eclesiásticas y con sus propios súbditos"(2).

Con respecto al nombramiento de los párrocos el Concilio declara: " Como quiera que toda la razón del cargo parroquial es el bien de las almas, con el fin de que el Obispo pueda proceder más fácil y adecuadamente a la provisión de las parroquias, suprimáse, salvo el derecho de los religiosos, cualesquiera derechos de presentación, nombramiento o reserva"(3). Rotundamente el Concilio reivindica pues la libertas Ecclesiae en orden a los nombramientos de cargos eclesiásticos y, pide humanísimamente a las autoridades civiles la renuncia de los derechos o privilegios de que actualmente gozan en esta materia (4).

La declaración colectiva del Episcopado español a su vez declara: " Consideramos igualmente necesario iluminar las con-

(1) Concilio Vaticano II, Decreto Christus Dominus, 20.

(2) Ibidem , 19.

(3) Ibidem 31.

(4) MARTIN MARTINEZ: Libertad de la Iglesia y Concordatos en Rev. de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid, M 1970, núm. 37, pág. 31.

-ciencias de todos, súbditos y gobernantes, católicos o no, acerca del que el propio Concordato llama "privilegio de presentación" (El título del anejo 1º al texto concordatario).

Por virtud del mismo, el Jefe del Estado español es quien presenta el nombre del candidato llamado a cubrir cualquier sede vacante, bien residencial, bien administración apostólica, o a ser designado coadjutor con derecho a sucesión (Concordato entre la Santa Sede y el Estado español, y acuerdo entre la Santa Sede y el gobierno español, anejo a aquel, de 7 de junio de 1941).

Dejando a un lado las normas de detalle que regulan el ejercicio de este privilegio y salvando, como es debido, la competencia exclusiva que en la materia corresponde a la Santa Sede y al Estado español, importa aclarar algunos puntos.

En el conjunto de mutuas concesiones contenidas en el Concordato vigente, es ésta, sin duda, la que sobresale por encima de todas las demás. Se trata, en efecto, de un verdadero privilegio que confiere al Estado una intervención eficaz en el nombramiento de quienes han de ocupar los puestos de mayor responsabilidad en la vida de la Iglesia. Es precisamente el ejercicio de tal privilegio el que, en momentos de dificultad para las pacíficas relaciones entre la Iglesia y el Estado, contribuye en mayor medida a hacerlas complejas y enojosas e incluso a confundir a buena parte de nuestro pueblo en relación con los límites que separan las respectivas competencias de una y otra. Como consecuencia de aquellas dificultades, no pocas veces se dilata la provisión de las diócesis españolas, lo cual, como a nadie se le oculta, causa grave daño al pueblo cristiano..

El Concilio Vaticano II, por otra parte, declaró solemnemente " que el derecho de nombrar e instituir a los obispos es propio, peculiar y de suyo exclusivo de la competente autoridad eclesiástica" ("C.D", 20). Es verdad que la Iglesia misma, a lo largo del tiempo, había concedido a las autoridades civiles de algunos países católicos un cierto derecho a intervenir en el nombramiento de sus obispos. Pero fué el mismo Concilio el que, dirigiéndose a esas autoridades, "cuya obediente volun-

-tad para con la Iglesia reconoce y altamente estima", les rogó con toda cortesía que quieran renunciar espontáneamente, después de consultada la Sede Apostólica, a los derechos o privilegios mencionados, de que por pacto o costumbre gozan hasta el presente"("C.D."),20).

El Concilio entendió que el deseo explícito de la Iglesia de reivindicar su plena libertad en el nombramiento de los obispos habría de ser más valorado y dejaría más expedito el camino para cualquier negociación si confiaba, como lo hizo al dirigir a las autoridades civiles afectadas ruego tan cortés, en su recta comprensión, sobre todo tratándose, como se trataba, precisamente de países católicos. Por nuestra parte, estamos seguros de que las buenas relaciones entre la Iglesia y el Estado son tanto más fáciles de conservar y de perfeccionar cuanto mayor sea la reconocida independencia de ambos en materia de tanta importancia.

Por último, el derecho a elegir y nombrar libremente a sus ministros es una de las consecuencias más obvias del derecho a la libertad religiosa, que el Concilio defiende para todas las confesiones. Y el mismo Estado español, al incorporar - como ya vimos - aquel derecho a nuestro ordenamiento jurídico, reconoce ese derecho a las confesiones no católicas, sin reservarse privilegio alguno de presentación.

Por todo ello, consideramos llegado el momento de responder de manera eficaz a la justa petición de la Iglesia y, en consecuencia, rogamos respetuosamente a las autoridades del Estado que adopten las medidas conducentes a la solución de este problema"(1).

La declaración colectiva del Episcopado español, mantiene en el texto citado la misma doctrina del Concilio Vaticano II sobre la compleja cuestión del privilegio de presentación.

Por ello es lógico que concluya rogando respetuosamente a las autoridades del Estado para que adopten las medidas conducentes a la solución de este problema.

Realmente hay que afirmar que "siendo deber de la Jerarquía

(1) Declaración colectiva del Episcopado español, nº 59, en Rev. Ecclesia de 27 de enero de 1973, págs 35-36.

eclesiástica apacentar al Pueblo de Dios"(1) a la Iglesia se le debe reconocer esa elemental libertad de nombrar a sus jerarcas o pastores de la misma manera que al Estado debe reconocérsele plena libertad para nombrar a sus autoridades sin que nadie piense que, ni siquiera en un Estado que se declare confesionalmente católico, el nombramiento de las autoridades civiles haya de obtener el placet de la Iglesia en punto a su ortodoxia religiosa(2).

En este sentido es interesante hacer constar como el Jefe del Estado una exposición de este problema en 1950- 1951, por el entonces embajador ante la Santa Sede, profesor RUIZ GIMENEZ, contestó diciendo: " que la Iglesia tenía razón; que era un privilegio históricamente explicable por razones que él respetaba, un privilegio a la Corona de España, pero que a la altura de nuestro tiempo (y esto era en 1951, todavía bajo Pío XII, y sin haberse producido la conmoción espiritual de Juan XXIII ni del Concilio) realmente no era lógico el mantenimiento de un privilegio de este tipo"y añade: " sería un poco como si la Santa Sede quisiera intervenir en el nombramiento de mis Gobernadores" (3).

Ante esta situación cabrían, como señala MARTIN MARTINEZ (4), dos posturas respetuosas con la libertad de la Iglesia. "La primera se daría cuando la Iglesia lleve a cabo los nombramientos sin intervención alguna del Estado y sólo en el caso de que se produjera alguna difícil situación de carácter político podría hacerse una apelación a la superior autoridad eclesiástica para lograr el entendimiento y la sana cooperación que debe existir entre la Iglesia y el Estado.

La segunda postura sería la de notificar al Poder político, con oportuna antelación, el nombre de la persona a quien la Igle-

(1) Concilio Vaticano II, Constitución Lumen gentium, 45

(2) BELLUGA: Memorial al rey Felipe Quinto.. cit. por MARTIN MARTINEZ, Libertad de la Iglesia y Concordatos cit., p. 31.

(3) RUIZ GIMENEZ: Relaciones Iglesia-Estado cit. en Rev. cit. pág. 13.

(4) MARTIN MARTINEZ: Libertad de la Iglesia....cit. pág. 32.

-sia ha elegido para el desempeño de un oficio episcopal. Podrían entonces admitirse observaciones y hasta objeciones fundadas, por parte del Estado ; lo que no cabría admitir es un derecho de veto cualquiera que sea la fórmula con que se trate de paliar"(1).

Confiemos que este problema tan delicado y tenso sea pronto resuelto, y que el derecho a elegir y nombrar libremente a sus ministros que constituye una de las consecuencias mas obvias del derecho de libertad religiosa y que logicamente hay que defender como ya lo hace el Concilio para las demás confesiones y no sólo para la Católica sea pronto una realidad en España.

En cuanto al privilegio de las preces diarias por el Jefe del Estado se encuentra regulado en el artículo VI del Concordato en los siguientes terminos: " Conforme a las concesiones de los Sumos Pontifices San Pio V y Gregorio XIII, los sacerdotes españoles diariamente elevarán preces por España y por el Jefe del Estado, según la fórmula tradicional y las prescripciones de la Sagrada Liturgia"(2).

El contenido de este artículo constituye, evidentemente, un privilegio del Estado español y que como tal privilegio no tiene por que existir. Puede subsumirse, realmente, en las preces de carácter genérico de la nueva Liturgia, y, con ello, se resolvería perfectamente dicha cuestión.

(1) MARTIN MARTINEZ: Libertad de la Iglesia y Concordatos, en Rev. de la Facultad de Derecho, Madrid, 1970, nº 37, p. 32.

(2) Concordato entre la Santa Sede y España cit. en ob.cit, pág. 1021.

4. El matrimonio

El matrimonio es , ciertamente, otro de los puntos más importantes del actual Concordato español que necesita , como veremos, de una urgente y profunda revisión.

A su regulación dedica dicho Concordato los artículos XXIII, XXIV y XXV, así como las disposiciones del protocolo final en relación con los artículos XXIII y XXV.

El contenido de estos textos dice así:

Artículo XXIII.- " El Estado español reconoce plenos efectos civiles al matrimonio celebrado según las normas del Derecho Canónico" (1).

Artículo XXIV. 1. " El Estado español reconoce la competencia exclusiva de los Tribunales y Dicasterios eclesiásticos en las causas referentes a la nulidad del matrimonio canónico y a la separación de los cónyuges , en la dispensa del matrimonio rato y no consumado y en el procedimiento relativo al Privilegio Paulino".

2. "Incoada y admitida ante el Tribunal eclesiástico una demanda de separación o de nulidad, corresponde al Tribunal civil dictar, a instancia de la parte interesada, las normas y medidas precautorias que regulen los efectos civiles relacionados con el procedimiento pendiente".

3. "Las sentencias y resoluciones de que se trate, cuando sean firmes y ejecutivas, serán comunicadas por el Tribunal eclesiástico al Tribunal competente, el cual decretará lo necesario para su ejecución en cuanto a efectos civiles y ordenará - cuando se trate de nulidad, de dispensa super rato o aplicación del privilegio paulino - que sean anotadas en el registro del estado civil al margen del acta de matrimonio".

4. " En general, todas las sentencias, decisiones en vía administrativa y decretos emanados de las Autoridades eclesiásticas, en cualquier materia dentro del ámbito de su competencia, tendrán

(1) Concordato entre la Santa Sede y España, de 27 de agosto de 1953 cit. en ob. cit. págs. 1025-

también efecto en el orden civil cuando hubieren sido comunicados a las competentes Autoridades del Estado, las cuales prestarán además el apoyo necesario para su ejecución"(1).

Artículo XXV.- 1. "La Santa Sede confirma el privilegio concedido a España de que sean conocidas y decididas determinadas causas ante el Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica, conforme al Motu proprio pontificio del 7 de abril de 1947, que restablece dicho tribunal".

2. " Siempre formarán parte del Tribunal de la Sagrada Rota Romana dos Autoridades de nacionalidad española, que ocuparán las sillas tradicionales de Aragón y Castilla"(2).

Disposiciones del protocolo final;

1º) En relación con el artículo XXIII:

A) Para el reconocimiento, por parte del Estado, de los efectos civiles del matrimonio canónico será suficiente que el acta del matrimonio sea transcrita en el Registro Civil correspondiente.

Esta transcripción se seguirá llevando a cabo como en el momento presente. No obstante, quedan convenidos los siguientes extremos:

1. En ningún caso la presencia del funcionario del Estado en la celebración del matrimonio canónico será considerada condición necesaria para el reconocimiento de sus efectos civiles.

2. La inscripción de un matrimonio canónico que no haya sido anotado en el Registro inmediatamente después de su celebración, podrá siempre efectuarse a requerimiento de cualquiera de las partes o de quien tenga un interés legítimo en ella.

A tal fin será suficiente la presentación en las oficinas del Registro Civil de una copia auténtica del acta del matrimonio extendida por el párroco en cuya parroquia aquel se haya celebrado.

La citada inscripción será comunicada al párroco competente por el encargado del Registro Civil.

3. La muerte de uno o de ambos cónyuges no será obstáculo para efectuar dicha inscripción.

(1) Concordato entre la Santa Sede y España cit. en ob.cit.págs. 1025-1026.

(2) Ibidem, pág. 1026.

4. Se entiende que los efectos civiles de un matrimonio debidamente transcrito regirán a partir de la fecha de la celebración canónica de dicho matrimonio. Sin embargo, cuando la inscripción del matrimonio sea solicitada una vez transcurridos los cinco días de su celebración, dicha inscripción no perjudicará los derechos adquiridos legítimamente por terceras personas.

B) Las normas civiles referentes al matrimonio de los hijos tanto menores como mayores serán puestos en armonía con lo que disponen los cánones 1034 y 1035 del Código de Derecho Canónico.

C) En materia de reconocimiento de matrimonio mixto entre personas católicas y no católicas, el Estado pondrá en armonía su propia legislación con el Derecho Canónico.

D) En la reglamentación jurídica del matrimonio para los no bautizados no se establecerá impedimentos opuestos a la ley natural" (1).

2º) En relación con el artículo XXV:

"La concesión a que se refiere el apartado número 2 del presente artículo, se entiende condicionada al compromiso por parte del Gobierno español de proveer al sostenimiento de los dos Auditores de la Sagrada Rota Romana"(2).

Ante estos textos del actual Concordato español, transcritos, y a la luz del derecho de libertad religiosa creemos conveniente hacer las siguientes consideraciones :

4. 1 Consideraciones en torno al apartado C del protocolo final en relación con el artículo XXIII.

El texto de la letra C del protocolo final del actual Concordato en relación con el artículo XXIII no es otra cosa más que una

(1) Concordato entre la Santa Sede y España de 27 de agosto de 1953, cit. en ob. cit. pág. 1029.

(2) Ibidem.

estipulación contractual, de poner en armonía la legislación estatal con la canónica(1). Y para ser consecuente con esta disposición el legislador español, por medio de la Ley de 24 de abril de 1958, ha llevado a cabo la reforma del artículo 42 del Código civil, estableciendo que " el matrimonio habrá de contraerse canónicamente cuando uno al menos de los contrayentes profese la Religión Católica. Se autoriza el matrimonio civil cuando se prueba que ninguno de los contrayentes profesa la Religión Católica" (2).

De esta forma nos encontramos ante un texto legal cuyo evidente significado es la inequívoca obligación civil de realizar un acto religioso. Así el español que profese la religión católica no sólo tiene la obligación moral y religiosa de contraer matrimonio canónicamente, sino que a esa obligación moral y religiosa se le añade , como dice DIAZ MORENO una verdadera obligación civil(3).

Se establece así en España por el artículo 42 del Código civil el sistema de matrimonio civil subsidiario, en virtud del cual la legislación civil asegura la obligatoriedad del matrimonio canónico para los que profesen la Religión Católica y sólo subsidiariamente se autoriza el matrimonio civil, según ya hemos visto, cuando se pruebe que ninguno de los contrayentes profesa dicha

religión. Este carácter subsidiario del matrimonio civil, presenta, evidentemente, una coacción en materia religiosa, al imponer el Estado el matrimonio canónico a los que no prueben que no profesan la Religión Católica. Así los católicos que por las razones que sea no deseen - hic et nunc- contraer matrimonio canónico, pero buscan sinceramente una protección jurídica eficaz por parte del Estado para la familia que han constituido, o van a constituir, se ven en trance de apostatar de su fe católica. Porque sólo así serán admitidos al matrimonio meramente civil"(4).

(1) MONTERO-RIOS(José Bautista): "El matrimonio civil de bautizados. El matrimonio civil de los españoles en el extranjero", en Estudios de Derecho Privado, Madrid, 1965, II, pág. 300.

(2) Código civil español, (Reus, S.A.) Madrid, 1972.

(3) DIAZ MORENO: El matrimonio meramente civil en España, en Rev. SAL TERRAE, Vol. 61, agosto-septiembre, 1973, n 8 - 9, pág. 589.

(4) Ibidem.

Esta imposición civil del matrimonio canónico atenta directamente contra el derecho de libertad religiosa, que incluye , como hemos señalado, el derecho que toda persona tiene de contraer matrimonio según el dictamen de su conciencia, respetando siempre las justas exigencias del orden público.

El matrimonio es, en efecto, una situación vital importante en la que el hombre ha de ejercer su libertad religiosa(1).

El Estado no es , pues, quién para obligar a quienes pretenden contraer matrimonio , a celebrar un acto de culto y recibir un sacramento que ellos voluntariamente rechazan. Pensar lo contrario, podría en pura lógica llevarnos a considerar , como advierte PORTERO (2), al absurdo de que con las mismas bases el Estado diese algún día una disposición ordenando a los que profesan la religión católica que se confiesen una vez al año o que comulguen por Pascua.

Es cierto que se ha intentado corregir la aplicación estricta y rigurosa del artículo 42 del Código civil, que comentamos, mediante una serie de disposiciones legales complementarias; pero estas disposiciones, como veremos más adelante, cuando nos ocupemos de su estudio, no son otra cosa que una interpretación más benigna y amplia de profesar la religión católica. Por ello, resultan , como dice DIAZ MORENO(3), insuficientes en el ámbito preciso de la libertad religiosa, constituyendo en realidad un residuo del régimen de tolerancia que evidentemente debe desaparecer porque, sencillamente, entraña una contradicción con el derecho de libertad religiosa que incluye , como hemos señalado, la libertad de los ciudadanos para contraer matrimonio según el dictamen de su conciencia y dentro de las exigencias del justo orden público; sin que el Estado pueda ni deba imponer una forma únicamente válida de contraer matrimonio apoyada en una motivación de orden puramente religioso. El Estado se excede, realmente, de su competencia al imponer directa o indirectamente unas disposiciones meramente eclesiásticas a sus súbditos que no quieren aceptarlas. Y, así,

(1) CORRAL: El Concordato español ante los concordatos vigentes, en "Relaciones de la Iglesia y el Estado, Madrid, 1976, p. 264.

(2) PORTERO: Régimen matrimonial español y Concordato, en "La institución concordataria en la actualidad, cit., pág. 516.

(3) DIAZ MORENO: Art. cit. en Rev. cit. pág. 574.

el Estado se excede también de su competencia cuando en el artículo 83, número 4, del Código civil dispone que "quienes hubieran sido ordenados " in sacris o estén ligados con voto solemne de castidad, dentro de la Iglesia católica, no podrán contraer matrimonio sin dispensa canónica"(1). La falta de esta dispensa no debió traducirse por la Ley como impedimento al matrimonio civil, ya que al aceptarlo como tal, supone hacer , como dice MUNOZ PALACIOS, de una prohibición religiosa un impedimento de orden temporal(2). El Estado , por el contrario, debe considerar la no conceción de esa dispensa por la Iglesia como asunto interno de ella , ajeno a él(3). Tal prohibición implica, realmente, violencia de la conciencia de la persona y de su libertad; lo cual , evidentemente atenta también contra el derecho de libertad religiosa, constituyendo una clara discriminación por motivos religiosos.

Por todo ello, se hace necesario revisar el artículo 42 y 83, número 4, del Código civil; pero dicha revisión sólo será posible mediante la previa revisión del apartado C del protocolo final del actual Concordato en relación con su artículo XXIII pues es precisamente la disposición de dicho apartado la que exige la vigencia del contenido de dichos artículos. De ahí la necesidad y urgencia de que dicho apartado C sea revisado.

Pero, ¿cuál será, entonces, la fórmula más acorde con el derecho de libertad religiosa para regular el matrimonio?

Dos fórmulas parecen las más acertadas: el sistema de matrimonio civil obligatorio y el sistema matrimonial doble y optativo.

La primera fórmula o sistema ofrece un control más eficaz, por parte del Estado, de los matrimonios, y en consecuencia una mayor seguridad social. Tiene , sin embargo , en contra suya este sistema el desconocer totalmente el matrimonio religioso e imponer la obligación de contraer matrimonio civil. Por ello sólo consideramos admisible este sistema siempre que antes o después de la celebración civil del matrimonio permita la celebración de los ritos propios de las distintas confesiones. Así parece entenderlo también ERAGA IRIBARNE, cuando dice: " Yo estimo que el derecho de

(1) MUNOZ PALACIOS: El proyecto de Ley sobre libertad religiosa, en Rev. Cuadernos para el Diálogo, nº 43, abril 1967, pág. 13.

(2) Ibidem.

familia debe ser plenamente regulado por el legislador ordinario, y que la Iglesia sólo debe reservarse el derecho a bendicir o no este o aquel matrimonio civil, con arreglo a sus propias normas. Pero la seguridad social exige hoy una regulación uniforme y pública de todo el sistema familiar, aplicado por los jueces ordinarios"(1). Con todo, este sistema, como advierte DIAZ MORENO, no parece ni necesario ni conveniente ni adaptado a nuestra realidad sociológica(2).

El segundo sistema permite que todo ciudadano pueda elegir entre realizar un matrimonio civil o religioso del culto que profese; por ello, este sistema es el que más respeta la conciencia del individuo y por lo mismo parece el más acorde con el derecho de libertad religiosa. Pero consideramos que el Estado debe reconocer además plenos efectos jurídicos al matrimonio religioso, y ello, como dice DIAZ MORENO, "como una consecuencia del derecho a la libertad religiosa que tiene todo ciudadano. Y como una prueba de realismo jurídico y político por parte del legislador civil, Porque el Estado tiene la obligación y el derecho de ejercer un control sobre la necesaria publicidad de los matrimonios en orden a dotarles de una necesaria protección jurídica. Pero para ello es bastante y suficiente la obligación de registrar civilmente al matrimonio religioso. Parece ciertamente absurdo exigir que - previo o posterior al matrimonio religioso - sea necesario, para que el Estado reconozca el matrimonio, que se repita el consentimiento matrimonial ante la competente autoridad civil"(3).

De esta forma el segundo sistema se presenta como un sistema abierto de matrimonio civil facultativo con reconocimiento de efectos civiles al matrimonio canónico, con lo que "tiene la gran ventaja de proteger debidamente la libertad religiosa de los ciudadanos sin obligarles a repetir el consentimiento ante las autoridades de la Iglesia y del Estado"(4).

(1) FRAGA IRIBARNE: "Las Leyes", Barcelona, 1975, págs. 143-144; La República, Barcelona, 1974, pág. 236.

(3) DIAZ MORENO: Artículo cit. en Rev. cit. pág. 580.

(4) DIAZ MORENO: Matrimonio canónico y matrimonio civil, previsible regulación matrimonial en ambos ordenamientos, en "YA" de 24 de enero de 1976, pág. 19.

Por otra parte, y en cuanto se refiere a la registración de los matrimonios religiosos en los libros del Registro civil creemos con SANCHO REBULLIDA(1), que el procedimiento de las formalidades civiles estipuladas, como hemos visto, en el Protocolo final del Concordato correspondiente al artículo XXIII y recogidas en la Ley y Reglamento del Registro civil, referente al matrimonio canónico(2), merecen crítica favorable, y que es, desde luego, más perfecto y más respetuoso para con la Iglesia que otros procedimientos formales parecidos. Por ello creemos ~~que~~ este procedimiento debe continuar vigente y aplicarse no sólo al matrimonio canónico sino también a todos los matrimonios religiosos celebrados en aquellas confesiones religiosas que posean un ordenamiento jurídico matrimonial que garantice su estabilidad y su lógica y substancial armonía con el Derecho natural y positivo estatal.

4. 2. Consideraciones en relación con el artículo XXIV del actual Concordato español de 1953.

El artículo XXIV del actual Concordato español reconoce de forma exclusiva a la Iglesia, como hemos podido comprobar en su texto ya transcrito, la jurisdicción en las causas matrimoniales. Y en términos casi idénticos reitera este principio el Código civil, en su artículo 80, en su redacción de 1958(3), matizando que el conocimiento de estas causas corresponde exclusivamente a la jurisdicción eclesiástica, conforme al procedimiento canónico.

Hay que señalar, sin embargo, que, salvando la competencia de los tribunales eclesiásticos sobre el fondo del asunto, el Estado reclama una intervención, marginal si se quiere pero no poco importante, en una fase previa y en otra posterior a la acción de los órganos canónicos. Y así el Código civil en los artículos 67-68 y 81-82 recoge fielmente lo concordado por ambos poderes sin más añadido que la posibilidad por parte del juez civil de dictar las medidas con-

(1) SANCHO REBULLIDA: Las formalidades civiles del matrimonio canónico, Madrid, 1954, págs. 87-88.

(2) Vid. Ley del Registro Civil de 8 de julio de 1957 y su Reglamento de 14 de noviembre de 1958(B.O.del E. del 11-12- 58).

(3) Código civil español, cit. artículo 80

-venientes que faciliten a la mujer la preparación de su demanda de separación e impidiendo, por tanto, que el marido pueda interponer acción penal por abandono de familia(1).

Existe, así, en España un sistema mixto, eclesiástico -civil, que si, por un lado, merece los plácemes de haber querido respetar al máximo las normas canónicas, por otro, adolece, como advierte PORTERO(2), de los inconvenientes propios de la actuación de dos jurisdicciones diferentes con la falta de agilidad consiguiente. Presenta, en efecto, este sistema varios fallos entre los cuales cabe considerar, como principales, los que tan acertadamente LOPEZ ALARCON expone en los siguientes términos:

a) Por un lado se trata de un proceso largo, costoso, apasionado, que favorece el distanciamiento de los esposos y que se proyecta sobre los familiares e incluso sobre los hijos.

b) Por otro lado la falta dentro del campo civil y el eclesiástico de unos verdaderos Tribunales familiares, con asesores competentes para el tratamiento adecuado de estos procesos.

c) Finalmente, aflige ver a los Jueces eclesiásticos implicados con la mejor buena fe en asuntos que, aun cuando aparentemente se refieran a las personas de los esposos y de los hijos, en el fondo persiguen intereses económicos, pues lo que principalmente se pretende en el juicio de separación es que se declare la inocencia propia y la culpabilidad del otro cónyuge, no tanto por lo que vale moralmente el título de inocencia, como por lo que tiene de valor económico la culpabilidad del otro (2).

Por todo ello parece necesario revisar el artículo XXIV del actual Concordato a fin de que las causas matrimoniales de separación conyugal se sometan a los Tribunales civiles y que estos apliquen la ley civil. Podría darse, sin embargo, una cierta intervención religiosa en estos momentos importantes en la vida de los cónyuges y

(1) PORTERO: Artículo cit. en ob. cit. pág. 532.

(2) LOPEZ ALARCON: La jurisdicción competente para conocer de las causas de separación en el matrimonio canónico, en Anales de la Universidad de Murcia, 27(1969), págs 142-146 y 149.

una forma a considerar podría consistir , como dice PORTERO(1), en exigir, como trámite previo a la admisión de la demanda por las autoridades civiles, la celebración ante las autoridades religiosas competentes de una especie de acto de conciliación con vertiente jurídica y pastoral.

Respecto a las causas de nulidad, parece más claro que supuesto el sometimiento del matrimonio religioso a las leyes de la confesión en que se contrae, sean las propias autoridades o tribunales eclesiásticos las que determinen cuándo hay o no nulidad del vínculo. Aquí no se trata de juzgar algo devenido con posterioridad a la unión, sino sobre el cumplimiento de una normativa a la que los cónyuges se sometieron voluntariamente(2). Por ello, en este aspecto creemos aceptable el sistema establecido en el actual Concordato y consecuentemente abogamos porque continúe vigente.

4. 3. Consideraciones en relación con el divorcio.

Otro punto importante que , en nuestra opinión , deberá ser tenido en cuenta a la hora de revisar el actual Concordato español es sin duda el referente al divorcio.

A este respecto hemos de señalar que el sistema legislativo del Estado español es absolutamente opuesto al divorcio: la indisolubilidad del matrimonio se considera en España como de orden público.

Frente a esta situación hay que decir que es indudable que para una conciencia cristiana el orden público y la moralidad pública deben facilitar la estabilidad matrimonial, como algo que la Iglesia enseña basado en la propia naturaleza humana. Pero es evidente que no puede imponerse tal concepción con carácter general apelando para ello al rigor de la ley y viviendo como vivimos en unas sociedades pluralistas donde el consenso en tal sentido no es real-

(1) PORTERO: Art. cit. en ob. cit. pág. 533.

(2) Ibidem, pág. 534.

- mente unánime(1).

El Estado debe atenerse, ciertamente, al bien común y al orden público a la hora de legislar, pero tales conceptos implican una relatividad consecuente con el momento histórico y con las circunstancias ambientales de cada comunidad(2).

El legislador estatal deberá, por tanto, tener en cuenta que en la sociedad actual, pluralista y democrática buena parte de las confesiones religiosas permiten el divorcio y que si por moral pública universal se entiende la practicada en la gran mayoría del mundo civilizado, el divorcio no puede considerarse ya opuesto a ella: el divorcio es una realidad que, como dice PORTERO, parece ir ganando terreno en el concierto universal de los pueblos(3).

En cuanto se refiere a España el divorcio es un hecho social insoslayable que adquiere cada día más importancia ante el número, por desgracia, cada vez mayor de matrimonios rotos(4).

Es cierto que el ideal, como advierte FERNANDEZ DE LA MORA(5), sería que el amor permaneciese siempre entre los cónyuges, de forma que ningún matrimonio llegase a deshacerse pero la realidad es bien distinta y el número de matrimonios que de hecho se rompen aumenta de día en día, incluso, como ya hemos señalado, en España.

A todo esto y refiriéndonos al caso concreto de España hay que añadir que el actual Concordato de 1953 admite dos casos de divorcio vincular según dispone el artículo XXIV ya transcrito: la disolución de matrimonios ratos y no consumados(6) y los casos en que se aplica el privilegio de la fe(7), y que el Código civil con-

(1) PORTERO: Artículo cit. en ob. cit. pág. 535.

(2) Ibidem; SIMO SANTOJA: Divorcio y separación- Derecho comparado y conflictual europeo, Madrid, 1973, págs 127-128.

(3) PORTERO: Art. cit. en ob. cit. pág. 537.

(4) ARADILLAS: Matrimonios rotos, Madrid 1975.

(5) Vid. VALCABCE ALFAYATE(Enrique): "...Y el matrimonio qué?", Madrid, 1975, Prólogo.

(6) Código de Derecho Canónico cit. canon 1119.

(7) Ibidem, canones 1120-1127.

-secuente con dicho Concordato reconoce plenos efectos civiles a estos dos casos de divorcio vincular, por disposición de los artículos 80 y 82. Consecuentemente no parece justo que el Estado niegue a sus súbditos de otras confesiones lo que concede a los católicos; y no parece justa tampoco la situación de clara desventaja en que , con relación a los católicos, quedan los que contraen matrimonio civil, respecto a la posibilidad de conseguir el divorcio.

Por todo ello, y en contra de quienes se oponen a que el Estado dicte una ley de divorcio(1), nosotros abogamos, de acuerdo con FRAGA IRIBARNE(2), por una ley que de modo realista lo hiciera difícil al capricho, pero posible cuando se trata de un mal menor; pues, cuando, como dice el mismo autor , el fracaso de un matrimonio sea total y definitivo, y exista para uno o los dos cónyuges la posibilidad de rehacer su vida, porqué negársela?(3). Por lo demás, es claro que, cada uno verá además lo que hace con su conciencia(4).

Por último y en cuanto a una posible fórmula que sobre el divorcio debería establecerse en las futuras relaciones Iglesia-Estado , en España, creemos muy aceptable la empleada en el artículo 24 del actual Concordato portugués, en su nueva redacción, cuyo texto dice así: " Al celebrar el matrimonio católico, los cónyuges asumen , por el propio hecho, frente a la Iglesia, el compromiso de atenerse a las normas canónicas que lo regulan y, en particular, de respetar sus características esenciales. La Santa Sede, a la vez que reafirma la doctrina de la Iglesia católica sobre la indisolubilidad del vínculo matrimonial, recuerda a los cónyuges que han contraído matrimonio canónico el grave deber que les incumbe de no valerse de la facultad civil de pedir el divorcio"(5).

(1) Vid. NAVARRO VALLS: Divorcio: Orden público y matrimonio canónico, Madrid, 1972, págs 242-248

(2) FRAGA IRIBARNE: Las Leyes, cit. pág. 144.

(3) Ibidem.

(4) Ibidem.

(5) Vid. "Portugal- Un acuerdo parcial modifica el Concordato", en Rev. Vida Nueva de 22 de febrero de 1975, pág. 17

**IV. GESTIONES EN FAVOR DE LA REVISIÓN DEL ACTUAL CONCOR-
DATO.**

IV. Gestiones en favor de la revisión del actual Concordato español de 1953.

Son, ciertamente , múltiples y laboriosas las gestiones llevadas a cabo hasta estos momentos, en favor de la revisión del Concordato español de 1953, por la Santa Sede y el Gobierno español.

Hay que señalar , sin embargo, que , aunque las conversaciones dependen y deberán depender de la Santa Sede y del Gobierno español, no se puede olvidar el papel importante y la aportación necesaria del Episcopado español en tan importante gestión.

Por ello, consideramos conveniente, antes de examinar las gestiones llevadas a cabo para la revisión del Concordato, analizar los puntos siguientes:

- 1º. Aportación del Episcopado español en relación con la revisión del actual Concordato y futuras negociaciones entre la Santa Sede y el Estado español.

Respecto a la aportación del Episcopado español en la importante gestión de la revisión del actual Concordato español y en las futuras negociaciones entre la Santa Sede y el Estado español, creemos conveniente señalar que " las conversaciones diplomáticas entre la Santa Sede y el Estado no pueden medirse por el patrón de las relaciones entre dos Gobiernos extranjeros. No se trata de coordinar intereses externos, sino de armonizar los supremos valores internos de una misma comunidad. La Santa Sede dialoga y acuerda en nombre de la

Iglesia; de la Iglesia universal , y de la Iglesia concreta que vive, lucha y trabaja en cada país. Los planteamientos y los pactos que hace la Santa Sede con los Estados no sólo le afectan a ella, en cuanto organismo supremo, sino directa y radicalmente a las respectivas comunidades cristianas, a todos y cada uno de los obispos, sacerdotes y cristianos,

Así pues, el diálogo diplomático estudiará y elaborará las fórmulas jurídicas de las relaciones de la Iglesia con el Estado en España; pero estas han de responder a la vida real, a las inquietudes, al ritmo de sentimientos y de acción de nuestra Iglesia actual.

Por tanto, una negociación vaticana no puede, no debe, estar jamás desvinculada del parecer de la aportación válida del Episcopado nacional, que conoce bien las necesidades, los obstáculos y las aspiraciones de su propio pueblo"(1).

Resultan realmente engañosas ciertas elucubraciones a propósito de la dualidad Santa Sede y Episcopado español en materia de concordatos. Si los súbditos del Jefe de la Iglesia católica son los fieles españoles, y estos son pastoreados por los obispos españoles, parece normal la garantía de que el Papa les consulte a ellos para la valoración y criterio sobre todo punto difícil que afecte a la Iglesia de nuestro país, Pero si un concordato tiene el rango de tratado internacional por razón de la relación territorial entre un Estado cualquiera y el conjunto universal del catolicismo, representado por un Poder espiritual igualmente universal , es natural que las conversaciones se verifiquen por sobre las cabezas de nuestros obispos, a nivel internacional. Sería todavía más absurdo que chocante que el Gobierno español tuviera como interlocutores a sus súbditos civiles los obispos españoles"(2).

Pero la Santa Sede , que en esta materia ha actuado siempre con prudencia exquisita no podía dejar de consultar y oír al

(1) Aportación del Episcopado a la negociación concordataria,

Vide un editorial del "Diario YA", 8-VI-74, pág. 21.

(2) Iglesia y Estado, Vid. un editorial de YA, 11-VII-73, p. 21.

Episcopado español; y así el 18 de noviembre de 1968 el nuncio de su Santidad, de parte de la Secretaría de Estado, comunicaba a los obispos que ya se había decidido oficialmente proceder a la revisión del Concordato"(1).

Asimismo, en el documento "La Iglesia y la comunidad política" aprobado por la XVII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, el 20 de enero de 1973, la Conferencia Episcopal declara, que ha sido consultada por la Santa Sede sobre temas propuestos para la revisión. Dice de haber dado lealmente su parecer sobre esto, y añade: "...Si hoy respetando la competencia exclusiva en la materia de la Santa Sede y el Estado español, toca publicamente el problema, lo hace solicitada por su responsabilidad pastoral para que el pueblo cristiano entienda la importancia fundamental que para el bien del país y la misión de la Iglesia tiene la correcta solución de esto, y que, habiéndolo entendido, eleve al Señor su oración para que se resuelvan cuanto antes las graves cuestiones pendientes...."(2).

En realidad, el Episcopado español ha expresado su opinión sobre la cuestión concordataria en cuatro ocasiones:

1ª. Febrero de 1971: el Episcopado español, reunido en su XIV asamblea, por encargo de la Santa Sede emitió su parecer sobre un texto "ad referendum" del anteproyecto de Concordato, que representaba un primer punto de acuerdo entre la Embajada de España ante la Santa Sede y el Consejo de Asuntos Públicos de la Iglesia (el llamado anteproyecto Garrigues -Casaroli).

2ª. Julio de 1973: antes de celebrarse el encuentro en Helsinki entre monseñor Casaroli y el ministro de Asuntos Exteriores, señor López Rodó, la Secretaría de Estado consulta a la Comisión Permanente del Episcopado - en el marco de la XVIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal - su opinión sobre la renovación concordataria y sobre los puntos más necesitados de revisión.

(1) "El tema del Concordato en la Conferencia Episcopal", en Rev. Vida Nueva, de 24 de octubre de 1970, pág. 31.

(2) Vid. Documento "La Iglesia y la comunidad política, n50, en Rev. Ecclesia de 27 de enero de 1973, pág. 33.

3^a. Octubre de 1973: monseñor Yanes, secretario de la Conferencia, dirige a los obispos una carta indicándoles dieciséis posibles puntos de revisión, y solicitando su opinión sobre los mismos, ampliación de la lista, etc.

4^a. Diciembre de 1973: los obispos han contestado a un extenso formulario de, aproximadamente, cuarenta puntos referentes al Concordato; como respuesta se les ofrecen una serie de opciones plurales y muy diversificadas. Los resultados, una vez elaborados por los servicios técnicos de la secretaría del Episcopado, serían comunicados a la Secretaría de Estado" (1).

En realidad, la Conferencia Episcopal Española es permanentemente consultada por la Santa Sede sobre cada punto importante de la revisión del Concordato español. La Santa Sede, como señala ALESSANDRINI (2), se propone - y lo ha asegurado repetidamente - mantenerse en contacto constante con la jerarquía española.

Esto mismo nos lo confirman las palabras de monseñor CASAROLI, pronunciadas durante las conversaciones sostenidas con el ministro español de Asuntos Exteriores, señor LOPEZ RODÒ, en Madrid, desde la mañana del día 1 de noviembre hasta la tarde del día 3. Monseñor CASAROLI, expresamente, dijo: " Por lo que respecta a la Santa Sede, yo diría que no procede sola, como no puede y no debe hacerlo, sino que se mantiene, se ha mantenido y se mantendrá en contacto con la Iglesia de España y con el Episcopado para poder hacer un trabajo serio que pueda servir verdaderamente a los intereses de la Iglesia y a los intereses profundos del pueblo español"(3).

También encontramos confirmada esta aportación del Episcopado español en relación con la revisión del Concordato y las relaciones

(1) "Monseñor Yanes confirma la consulta a los obispos sobre el Concordato, editorial de "YA", del día 19 de diciembre de 1973, pág. 19

(2) ALESSANDRINI: Entre la Santa Sede y los obispos españoles : Contacto permanente", en Vida Nueva, 1- XII- 73, p.12.

Santa Sede- Estado español, en las conclusiones aprobadas por la XXIV Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, sobre "Independencia y colaboración", aplicadas a las relaciones Iglesia- Estado, celebrada en Madrid durante la última semana de febrero de 1976.

En estas conclusiones, en efecto, la Conferencia Episcopal Española claramente declara: " 7. La Conferencia Episcopal Española traslada a la Santa Sede, a través de la Nunciatura Apostólica, los resultados de su reflexión colectiva sobre el tema "Independencia y colaboración", aplicadas a las relaciones Iglesia- Estado.

Agradece a la misma Santa Sede - a la que compete la responsabilidad decisoria en este campo - la confianza recibida en consultas anteriores sobre el particular, al par que manifiesta su disponibilidad permanente para cualquier servicio de esta índole.

9. En todo lo concerniente a la problemática Iglesia- Estado y a la revisión del Concordato de 1953 proliferan en la opinión pública apreciaciones desorientadas y confusas sobre la misión de la Iglesia, los derechos de sus fieles, los privilegios renunciables, etc. El secretario del Episcopado incrementará los contactos con equipos de reflexión teológica, jurídica y pastoral para clarificar estos problemas, y la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social movilizará los instrumentos de divulgación que lleve a nuestra sociedad enfoques correctos sobre estos temas"(1).

Queda , pues, clara, con estas consideraciones, la efectiva aportación del Episcopado español respecto a la revisión del Concordato español de 1953 y a toda la problemática de las relaciones Iglesia - Estado español. Asimismo reflejan esta efectiva aportación respecto a la revisión del Concordato y en general a todo lo que se refiere a las relaciones Iglesia - Estado español, la respuesta de la Conferencia Episcopal Española al Gobierno de 4 de julio de 1969 y demás contactos Conferencia Episcopal - Gobierno que más adelante examinaremos.

(1) Conferencia Episcopal Española, XXIV Asamblea Plenaria; Conclusiones sobre temas de reflexión acerca de la Iglesia en el momento actual, Tema 3º Independencia y colaboración, en "YA" de 29 de febrero de 1976, pág. 20.

2º Postura del Gobierno español en las relaciones Iglesia-Estado.

Para conocer la postura del Gobierno español en los últimos años, respecto a las relaciones Iglesia- Estado, es necesario distinguir los dos momentos distintos en la Jefatura del Estado español: la época de Franco y la época del Rey .

A) Época de Franco.

La postura del Gobierno español en los últimos años de la época de Franco, respecto a las relaciones Iglesia -Estado, aparece claramente reflejada en los siguientes textos:

a) Mensaje del Jefe del Estado a los españoles el último Fin de año, de 1972.

En este mensaje el Jefe del Estado pronunció las siguientes palabras:

" Nuestro Gobierno, acorde con los sentimientos católicos de la casi totalidad de los españoles, ha mantenido invariablemente a lo largo de más de siete lustros su actitud de respeto y cooperación hacia la Iglesia, brindándole gustosamente facilidades y ayudas de todo orden para el cumplimiento de su sagrada misión. Todo cuanto hemos hecho, y seguiremos haciendo, en servicio de la Iglesia lo hacemos de acuerdo con lo que nuestra conciencia cristiana nos dicta, sin buscar el aplauso ni siquiera el agradecimiento"(1). Las palabras del Jefe del Estado son claramente expresivas de una actitud del Gobierno español de respeto y colaboración con la Iglesia , pero también parecen reflejar una cierta tensión o falta de completo entendimiento entre la Iglesia y el Estado español.

(1) Vid. en " YA" del día 17 de noviembre de 1973, pág.13.

b) Discurso programático del Presidente Arias.

El Presidente Arias expuso la postura del Gobierno en las relaciones Iglesia -Estado en las siguientes palabras:

" Por su incidencia en el orden interno, ya que afecta a la conciencia de millones de españoles y por la fisonomía innegablemente conflictiva que ha venido presentando en los últimos años, merece una consideración especialmente separada y cuidadosa el tema de las relaciones con la Iglesia.

Una vez más el pensamiento del Jefe del Estado, explícitamente manifestado en su mensaje de fin de año , al finalizar el año 1972, constituye la más certera y esclarecedora guía para nuestra reflexión.

Estimamos que lo que realmente conviene y lo que, en definitiva contribuye a la salud moral y política del pueblo español, es alcanzar un adecuado entendimiento, a todas luces factible, sin perdernos en lo accesorio y encontrándonos en lo fundamental.

Las relaciones entre la Iglesia y el Estado han de continuar sobre la base de la mutua independencia y de una sana cooperación, manifestada en el respeto recíproco entre ambas potestades, El Gobierno mantendrá las condiciones que permitan a aquella desempeñar sin trabas su sagrada misión y el ejercicio de su apostolado, pero rechazará con la misma firmeza cualquier interferencia en las cuestiones que, por estar enmarcadas en el horizonte temporal de la comunidad, están reservadas al juicio y decisión de la autoridad civil"(1).

El presidente Arias en este su primer pronunciamiento se refirió a la alusión que hizo el Jefe del Estado en su discurso de final de año de 1972, que fué la última pública del Jefe del Estado ya que al concluir el 73 no hubo alusión ninguna al tema.

"La conflictividad del momento religioso-político queda desta-

(1) Del discurso del Presidente Arias Navarro en las Cortes 12 de febrero de 1974, Vid. en Vida Nueva ,16 de febrero de 1974,pág. 6; y Vida Nueva, 23 de febrero de 1974,p

-cada en estos breves párrafos así como la confianza en su solución paulatina y factible.

- c) Nota del Ministerio de Información y Turismo del 15 de marzo de 1974.

El texto íntegro de la nota oficial que dió a conocer el Ministro de Información y Turismo al reunirse con los periodistas tras el Consejo de Ministros celebrado el 15 de marzo, dice así:

" Los últimos acontecimientos han puesto de manifiesto, una vez más, que las normas vigentes en la materia no son adecuadas a la actual realidad y que resulta urgente un nuevo replanteamiento. El Gobierno tiene plena conciencia de ello y está decidido a proveer sin pausa al respecto, para clarificar las relaciones entre el Estado y la Iglesia, conforme a las orientaciones de colaboración y mutua independencia"(1).

Es obvia la brevedad y grisura de esta nota oficial. Sus setenta palabras escasas a la vez que dan por liquidado el conflicto, emplazan el problema en un nivel superior: el de la inaplazable remodelación de las relaciones entre Roma y España.

- d) Dos viejas notas del Gobierno y la Conferencia Episcopal.

Es importante tener en cuenta dos textos, uno del Gobierno de 9 de abril de 1969 y otro de los obispos de 4 de julio del mismo año. Ambos documentos estuvieron inéditos hasta 1974, en que fueron publicados en el "Boletín Oficial del Obispado de Cuenca". Los dos textos nos ayudan a ver mejor la postura del Gobierno y de la Iglesia en sus mutuas relaciones en España.

(1) Tras "el caso Añoveros", Crónica de L. ORTEGA, en Vida Nueva de 30 de marzo de 1974, pág. 6.

Estos textos o viejas notas del Gobierno y de la Conferencia Episcopal son :

1º Comunicación del Gobierno a la Conferencia Episcopal Española, de 9 de abril de 1969.

Este texto dice así:

" Informado el Gobierno de la visita hecha al señor ministro de Justicia por los miembros del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española agradece a esta Corporación, y personalmente a los reverendos prelados que integran el Comité , la iniciativa de aquella reunión, situada en la línea de sana y eficaz cooperación que ha de existir siempre en las relaciones entre la Iglesia y el Estado.

Tuvo por objeto aquella visita reiterar verbalmente al Gobierno, después de reunida la Conferencia Episcopal, el contenido de la nota publicada por la comisión Permanente, antes de que se reuniese la Conferencia, sobre el estado de excepción declarado por el Gobierno,

El Gobierno tiene la satisfacción de haber demostrado, primero con las palabras de su vicepresidente, pronunciadas ante las Cortes, y después con el hecho del levantamiento del estado de excepción un mes antes del plazo por el que fué declarado, su identificación con la doctrina de la Iglesia Católica, recordada en la nota de referencia, según la cual "Allí donde por razones de bien común se restrinja temporalmente el ejercicio de los derechos, restablézcase la libertad cuanto antes, una vez hayan cambiado las circunstancias".

La resolución del Gobierno, declarando el estado de excepción fué utilizada como instrumento ofensivo contra el Estado, dentro y fuera de España, por sus enemigos políticos, secundadas por personas eclesiásticas no a título particular, sino en el ejercicio de su misión sagrada movidas por una gama de motivaciones que van desde las deliberadamente subversivas a las simplemente recelosas pasando por las tácticas de calmar por medio de algunas concesiones a los grupos indisciplinados y perturbadores.

Ello es fruto de una acusada tendencia de nuestros tiempos a comprometer - como ahora se dice a la Iglesia en los asuntos temporales y, especialmente, en los políticos, Los señores obispos saben mejor que nadie las instancias y presiones que frecuentemente reciben en esa línea del compromiso, cuyo punto extremo reclama el rompimiento de la Iglesia con el Estado.

Movido por la situación creada por tales estados de opinión y por las un tanto frecuentes exteriorizaciones clericales de los mismos y al dictado del espíritu de cooperación, que en mejor servicio del pueblo español lleva a la Iglesia y al Estado a la prudente armonía en el ejercicio independiente y autónomo de sus propios fines, el Gobierno español ha juzgado conveniente, y aun necesario, exponer al Episcopado algunos hechos que ponen en peligro aquella cooperación y algunas consideraciones útiles para conservarla y acrecentarla.

DERECHO DE LA IGLESIA Y DERECHO DEL ESTADO EN EL CAMPO POLÍTICO

El ejercicio por la Iglesia de su derecho a juzgar moralmente los actos de los gobernantes y a publicar sus juicios es una facultad reconocida y muy importante para la buena marcha de los Estados y la honesta conducta de quienes los gobiernan. Cualquier desviación en su empleo puede dañar altísimos bienes; el de la independencia del Estado, si la Iglesia se presentase simpatizante, protectora, despegada u obstaculizadora de posiciones políticas opinables - bastaría la apariencia para que el daño se produjese - y el de la sana cooperación entre la Ciudad de Dios y la Ciudad Temporal, si la Iglesia obrase con defecto en la información, en el asesoramiento y en los modos de proceder, es decir, sin toda la prudencia necesaria, o el Estado no admitiese con sereno espíritu cristiano las enseñanzas que la Iglesia profesa con amor de madre y con sabiduría de maestra.

No parecerá intromisión impertinente del Estado ni de los gobernantes su deseo de dialogar con la jerarquía, no sobre la facultad que ésta tiene de emitir su juicio, sino sobre el modo de elaborarlo, notificarlo y hacerlo público, si se tiene en cuenta que lo enjuiciado son actos de gobierno temporal, ajenos a la competencia

de la Iglesia, y además complejos e influidos por circunstancias de lugar y de tiempo, cuya determinación y análisis no constituyen frecuentemente tarea fácil.

Otras razones abonan la sana cooperación entre la Iglesia y el Estado en esta materia. Lo importante es que el juicio de la Iglesia produzca los efectos deseados por ésta. Trayendo aquí lo de que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, podemos concluir que lo que la Iglesia pretenderá siempre no será crear dificultades a los Gobiernos, sino que se ajusten a los dictados de la moral de Jesucristo, y para ello los modos de notificación del juicio moral y de exteriorización del mismo son muy importantes.

Si además la Iglesia desea dialogar con la familia humana acerca de los diferentes problemas, es claro que no ha de excluir de tal deseo a gobernantes católicos, que se aprecian de ser hijos muy fieles de la Iglesia, a la que aman fervorosamente y a la que desean servir, convencidos de que todo lo que sea bueno para la Iglesia es bueno para el pueblo, cuyo bien temporal tienen la obligación de procurar.

El Gobierno desea dejar constancia indubitada, una vez más, de su reconocimiento, expreso y complacido, de la competencia magistral de la Iglesia para dar juicio y valoración moral en las cuestiones temporales. Y ello por diversas razones:

a) Porque el Estado es el representante del pueblo español en el orden político, y la nación española, católica en su manifiesta mayoría quiere recibir de la Iglesia orientación en todos los temas en que Dios la ha constituido Maestra de los hombres.

b) Porque el Concilio Vaticano II ha señalado a todos los pueblos de la tierra, y muy en particular a los católicos, que es competencia de la Iglesia - ejercida a través de la jerarquía eclesiástica - emitir juicio moral, incluso sobre los asuntos que se refieren a la vida política de las naciones.

c) Porque también el Concilio Vaticano II ha declarado que aún manteniendo la firme independencia de su propia jurisdicción, la Iglesia y el Estado deben colaborar para el más eficaz servicio de la vocación personal y social del hombre.

2

d) Porque el Estado, como intérprete de la conciencia mayoritaria y constante del pueblo español, ha consagrado en sus propias Leyes Fundamentales el compromiso de inspirar su legislación y sus actos de gobierno en los inmutables principios de la ley divina, expuestos por el magisterio de la Iglesia.

e) Porque quienes dirigen en esta hora de España la acción del Estado son personalmente católicos y consideran la orientación doctrinal emanada del magisterio como inestimable garantía frente al error doctrinal o práctico.

Para que la consideración del problema no sea parcial ha de contemplarse, junto al derecho de la jerarquía de la Iglesia a juzgar la conformidad o disconformidad del orden temporal con los principios morales, la facultad y obligación de los gobernantes de proyectar y ejecutar sus actos de gobierno con arreglo a su conciencia, rectamente formada, y a su personal responsabilidad técnica ante el pueblo.

El gobernante cristiano aplica los principios de la doctrina de la Iglesia con la medida y modo que sólo a él compete apreciar, después de considerar las circunstancias con prudencia política.

Nos vienen a la memoria estas palabras oportunísimas del mensaje navideño de Su Santidad Pío XII el 24 de diciembre de 1951:

" Los hombres políticos, y a veces incluso hombres de iglesia, que intentasen hacer de la Esposa de Cristo su aliado o instrumento de sus combinaciones políticas ..., lesionarían la esencia misma de la Iglesia, dañarían la propia vida de ésta; en una palabra, la rebajarían al plano en que se debaten los conflictos o intereses temporales. Y esto continúa siendo verdad, aunque se haga por razones o intereses en sí legítimos".

CONDUCTA PERTURBADORA DE ALGUNOS CLERIGOS

Recordados el derecho de la Iglesia a emitir su juicio moral y el de los gobernantes a gobernar, es llegado el momento de exponer nuestras consideraciones sobre la conducta de algunos miembros de

la Iglesia que viene a perturbar esa sana cooperación reflejada en la fórmula de juramento de los señores obispos convenida con la Santa Sede.

Es necesario que "quienes se dedican al Ministerio de la palabra de Dios utilicen los caminos y los medios propios del evangelio, que en muchas cosas difieren de los medios de la ciudad terrena"

Pues bien, sin perjuicio de facilitar las informaciones precisas y concretas que se conocen y de las que a título de ejemplo se acompañan algunas en el anejo 1, tenemos que hacer constar que ~~clérigos y religiosos~~ vienen haciendo de la violencia frecuente instrumento de una pretendida actuación pastoral. Tal es el caso de los que en los últimos años vienen emitiendo juicios políticos que de ningún modo son de su competencia, sobre la vida pública de la nación española y ocupando lugares sagrados, seminarios y oficinas episcopales, siendo de notar que no existe norma alguna en nuestro derecho concordatario que permita deducir la configuración de un verdadero derecho de asilo en lugares religiosos o casas clericales que, además, estaría matizado por la circunstancia insólita de que continuasen desde su asilo los acogidos a él lanzando contra la autoridad civil su actitud agresiva.

Se ha buscado el cobijo de los edificios parroquiales para organizar propaganda clandestina y anticristiana del comunismo o promotora del desmembramiento de la unidad de la Patria.

Sacerdotes y clérigos se han exhibido con evidente escándalo de los fieles, en manifestaciones callejeras y han llegado a esgrimir para coaccionar a su prelado la negativa a celebrar el santo sacrificio de la misa o la decisión de suspender sus homilías durante tiempo prefijado, como protesta contra medidas estrictamente políticas como la declaración del estado de excepción.

Algunos sacerdotes se han visto asociados en la complicidad y el encubrimiento de actos de terrorismo. Anejo número 2.

(La nota del Gobierno expone aquí dos casos graves ocurridos en Vizcaya; se omite este párrafo, por no dar nombres de personas).

Otras veces han hecho patente su empeño de vincular la sagrada solemnidad de la liturgia funeral a acciones políticas subversivas.

De los labios de estas personas no sale nunca una palabra de reconocimiento de los logros alcanzados por el Régimen en treinta años de paz, evidentes ante quienes contemplan la realidad española con mirada serena, lo cual es una prueba más de la parcialidad injusta de su posición.

Estas actitudes políticas se exhiben al otro lado de nuestras fronteras. El último episodio de esta ciega actitud antiespañola tiene como protagonista el abad de un monasterio catalán que, desde la televisión alemana se ha sumado a la campaña de difamación organizada en el extranjero contra el Estado español mediante informaciones falsas y conceptos que posiblemente entren en el ámbito de lo delictivo. Se acompaña en el anejo número 3 acta firmada por el padre abad en la que se confirman los términos de su intervención.

Se recogen en el anejo 4 los preceptos legales que tipifican los actos a los que se refiere esta comunicación de manera genérica, así como las fotocopias de las comunicaciones del presidente del Tribunal Supremo dando traslado de la negativa a conceder la autorización para procesar, lo que crea una situación de impunidad, si no aplicase las sanciones correspondientes la autoridad eclesiástica.

Todas estas actitudes destinadas a coaccionar a la auténtica jerarquía para obligarla a pronunciarse sobre problemas dejados por Dios y por su Iglesia a la libre opinión de los seglares, han enturbiado y dañado la serenidad del magisterio de la Iglesia llevando tristeza, y escándalo a la mayoría del clero y del pueblo fiel.

UNIDAD , CLARIDAD,
INFORMACIÓN, EN EL MAGISTERIO SOBRE
ASUNTOS TEMPORALES

Este pueblo fiel y el Gobierno que le representa desean también que al magisterio de la Iglesia no le falte la nota, a su juicio esencial, de la unidad.

La falta de congruencia entre los juicios magisteriales, su diversidad y aún su contradicción, desorientan más que enseñan. Por ello, parece que sería aconsejable y muy provechoso que los asuntos temporales de dimensión nacional fueran enjuiciados por el magisterio eclesiástico en declaraciones colectivas, posiblemente a través de la Conferencia Episcopal. Con ello, se evitaría la confusa fragmentación de los criterios que tanto desorientan a las gentes cuando llegan a ellas atomizados a través de las diversas diócesis y dentro de éstas de la variedad de predicadores parroquiales.

Junto a la nota de unidad es muy deseable, también, la de claridad. En algunas ocasiones el magisterio sobre los asuntos temporales ha empleado, a nuestro entender, expresiones ambiguas e insinuaciones equívocas que sin contentar a quienes un día y otro piden un rompimiento de la Iglesia con la autoridad civil, han entrañado el riesgo de cebilitar a ésta.

El Gobierno español tiene siempre a disposición del Episcopado, para el ejercicio de su magisterio sobre los asuntos temporales, cuantos elementos informativos estén a su alcance y sugiere la organización de consultas y comunicaciones mutuas que en beneficio del bien común de los españoles eviten la aspreza del disentimiento público (tanto por parte del Estado como de la Iglesia), recurso último y nunca óptimo para conducir las relaciones entre uno y otra.

El Gobierno español se complace en manifestar su firme esperanza de que con la ayuda de Dios la Jerarquía de la Iglesia en España logrará que sea cumplido lo dispuesto por el Concilio Vaticano II cuando enseña que en el ejercicio del magisterio sobre los asuntos temporales se proceda considerando bien todas las circunstancias, ayudándose de peritos, empleando todos y sólo los medios del evangelio, respetando la independencia del poder civil y de los seglares y actuando, muy por encima de las variadas opciones políticas, cuando lo pida la salvación de las almas y la dignidad del hombre y sus derechos fundamentales de perso-

- na humana"(1).

2º. Respuesta de la Conferencia Episcopal Española al Gobierno,
de 4 de julio de 1969.

El texto ~~de la respuesta~~ de la Conferencia Episcopal al Gobierno , de 4 de julio de 1969 es el siguiente:

1."El Episcopado ha recibido la nota sobre relaciones entre la Iglesia y el Estado en España, presentada por el Ministerio de Justicia en nombre del Gobierno el día 9 de abril de 1969, y la ha estudiado con la atención que merece.

El Episcopado aprecia en todo su valor la importancia del asunto que la nota propone, y la alta finalidad que la inspira , a saber, el fomento de una sana y eficaz cooperación entre la Iglesia y el Estado en el ejercicio independiente y autónomo de sus misiones propias.

La nota misma es una muestra del espíritu de diálogo y cooperación que mueve al Gobierno español. Por su parte , el Episcopado agradece que haya sido interpretada en el mismo sentido la visita hecha al señor ministro de Justicia por el comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal el pasado día 28 de febrero. Visita que corresponde a una actitud y una línea de conducta habituales, formuladas una vez más, el 29 de junio de 1966 en la instrucción "La Iglesia y el orden temporal a la luz del Concilio Vaticano II" (IOT).

CONDICIONES DEL MAGISTERIO
EN EL ORDEN TEMPORAL Y
AUTONOMÍA DEL PODER CIVIL

2. El Gobierno español hace constar que el Estado reconoce complacido la competencia magisterial de la Iglesia , no sólo para exponer principios morales, sino también para juzgar la con-

(1) "Dos viejas notas del Gobierno y la Conferencia Episcopal que aclaran antiguos y actuales problemas", Vid. en Vida Nueva de 20 de abril de 1974 , págs 10 - 12.

-formidad o disconformidad del orden tem^{pl}oral y de los actos de los gobernantes con los principios citados. El Episcopado español no puede menos de registrar con elogio y gratitud tan noble y clara manifestación, así como las razones de índole religiosa y social en que se funda.

Por su parte, el Episcopado reconoce también el derecho de los gobernantes a "proyectar y ejecutar sus actos de Gobierno con arreglo a su conciencia rectamente formada y a su personal responsabilidad técnica ante el pueblo". Como dijo la Comisión Permanente el 6 de febrero último, " si es misión de la jerarquía iluminar la conciencia de los fieles en el cumplimiento de sus deberes ~~vivico=sociales~~, no lo es invadir el terreno de la autoridad civil, adoptando posturas o emitiendo juicios que, por referirse a la elección de medios contingentes en el orden temporal, dependen del ejercicio de la prudencia política".

Los obispos no olvidan que pueden , y en algunos casos deben, dar juicio moral sobre los actos del Gobierno "cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas"(GS 76). Saben también que han de proceder "utilizando todos y sólo aquellos medios que sean conformes al Evangelio y al bien de todos, según la diversidad de tiempos y situaciones"(IB), considerando bien todas las circunstancias, ayudándose de peritos, respetando la independencia del poder civil y de los ciudadanos. En los casos en que es necesario determinar qué es lo factible o elegir entre varios modos posibles de realizar los principios en el orden temporal "el magisterio no puede imponer un modo concreto ni definirse en favor o en contra de una situación determinada. Tanto los obispos como los sacerdotes, en cuanto maestros de la Palabra deberán cuidar o muy bien de no confundir la Palabra de Dios o de la Iglesia con una personal apreciación de situaciones que admiten estimaciones variadas"(IOT).

Mas no será inoportuno recordar también lo que añade la instrucción citada: aún en los casos en que la Iglesia "con la autoridad de sus pastores no haya de formular una decisión moral lo que si puede y debe hacer es proponer a la atención responsable de los ciudadanos los fines o valores que conviene promover en

la sociedad, y despertar la conciencia de todos los que puedan contribuir a implantarlos", si bien "el planeamiento y la técnica de la investigación y la decisión prudencial a que se llegue corresponden a los ciudadanos en el marco de la sociedad civil, la Iglesia (en esto) carece de competencia y de autoridad"(IOT).

DIALOGO E INFORMACION

MODOS DE NOTIFICAR EL JUICIO DE LA IGLESIA

3. Para que el juicio de la Iglesia sobre los actos de los gobernantes cumpla su finalidad moral, realizando la sana y eficaz cooperación de ambas potestades en un campo en que convergen sus competencias respectivas, el Estado manifiesta el deseo de dialogar con la jerarquía, no (así ~~lo~~ entendemos) para condicionar la libertad magisterial de la misma, sino para que pueda elaborar su juicio con la información suficiente, atendidas las complejas circunstancias que envuelven los actos de Gobierno, y para acertar con los modos más convenientes y evangélicos de notificar o publicar el juicio. Con ese fin, el Gobierno "sugiere la organización de consultas y comunicaciones mutuas que en beneficio de los españoles eviten la aspereza del disenso público, tanto por parte del estado como de la Iglesia".

El Episcopado está de acuerdo en que el diálogo es, sumamente deseable, y la experiencia ha demostrado que ha sido muy provechoso. Más aún el diálogo es de necesidad ordinaria. En primer lugar para la debida información. Por eso es muy de agradecer el generoso ofrecimiento del Gobierno que, según dice la nota, "tiene a la disposición del Episcopado, para el ejercicio de su magisterio sobre los asuntos temporales, cuantos elementos informativos estén a su alcance".

Pero además de su función informativa, las consultas y comunicaciones hacen posible el ejercicio del derecho, propio de los laicos, a expresar ante la jerarquía sus necesidades, deseos y pareceres, con lo cual los mismos pastores "ayudados por la expe-

-riencia de los seglares, están en condiciones de juzgar con más precisión y objetividad, tanto los asuntos espirituales como los temporales"(LG 37). Una forma especial de esta ayuda proviene de la específica competencia técnica, notada de su propio valor moral, que posee la autoridad civil.

El Episcopado Español, que procura mantener y mantiene diálogo con toda clase de personas, tanto individualmente como en diversas organizaciones, no puede excluir a los gobernantes católicos, y por ello aprecia complacido las amplias posibilidades de diálogo que encuentra en España y acoge con agrado las que ofrece la propuesta de consultas y comunicaciones mutuas, contenida en la nota.

Creemos, sin embargo - y estamos seguros de que el Gobierno comparte la misma convicción - , que no se deberán descuidar dos condiciones que, al preservar la independencia tanto del juicio de la Iglesia como de la legítima acción temporal del Estado, harán más eficaz la cooperación para bien de los españoles:

1. Que, la Iglesia ~~no se confunda en modo alguno~~ con la comunidad política , ni se dé ocasión a pensar que "está atada a ningún sistema político". Por ello, estimamos de permanente oportunidad la recomendación contenida en la Instrucción IOT: "La fidelidad a la doctrina de la Iglesia obliga a procurar, sincera y cordialmente convertida en realidad en la vida social, estudiando fórmulas de aplicación. La misma fidelidad nos veda identificar con ella nuestras fórmulas". "Ni los ciudadanos ni los gobernantes, aún profesándose católicos e intentando realizar fielmente el ideal de la doctrina de la Iglesia, propagan sus ideas, realizaciones o programas como las únicas que corresponden a las exigencias del Evangelio, sino que deben reconocer la posibilidad de aplicación de los principios cristianos en otras fórmulas diversas, teniendo en cuenta la diferencia de las estimaciones o la variación de las circunstancias".

2. El uso habitual de las consultas, practicadas en el modo y la medida que en cada caso convenga para alcanzar sus fines, no ha de convertirse en requisito vinculante para cada uno de los actos ni del Gobierno ni de la Iglesia.

Por lo que toca a la Iglesia , cabe prever situaciones de interés público urgente en que el Episcopado deba manifestar su pensamiento sin esperar nuevas consultas. Aún entonces procurará comunicar confidencialmente al Gobierno su declaración colectiva antes de hacerla pública.

En cuanto al modo de notificación de sus juicios sobre el orden temporal, el Episcopado, salva siempre la libertad de hacerlos públicos cuando así lo requiera la orientación pastoral del pueblo, no puede olvidar la normal moral de hacer con prioridad, en secreto, las observaciones que de este modo contribuyen al mayor bien de todos sin perjuicios innecesarios para nadie. Estamos convencidos de que una práctica prudente de conversaciones será muy favorable a los fines propios de la Iglesia y del Estado y en definitiva, " al servicio de la vocación personal y social" de los españoles.

LA UNIDAD EN EL MAGISTERIO Y LA LIBERTAD DE CADA OBISPO

3. El Gobierno expresa el deseo de que al magisterio de la Iglesia en asuntos temporales de dimensión nacional no le falte la nota de la unidad. "La falta de congruencia entre los juicios magisteriales, su diversidad y aun su contradicción, desorientan más que enseñan".

El Episcopado considera evidente que ante problemas de escala nacional carecerían de eficacia las enseñanzas discordantes.

Hay que advertir, a este efecto, que cada obispo tiene en su diócesis potestad de magisterio inalienable, que sólo puede ser limitada por el Papa o el Concilio. Pero precisamente para ejercerla de modo conveniente, lo mismo que las demás funciones pastorales se han constituido las conferencias episcopales , cuyo fin es el ejercicio conjunto de la misión de los obispos en los asuntos de interés común (Estatutos de la Conferencia Episcopal Española, artículo 1). Sin duda, las decisiones de la Conferencia sólo tienen fuerza jurídica obligante en los casos establecidos por el Derecho Común o por un mandato peculiar de la Santa Sede, " en los demás casos tienen valor normativo en función del bien

común y de la necesaria unidad en las actividades de la jerarquía" (Estatutos , art 18. Los Estatutos vigentes desde el año 1972 dicen: "Valor directivo..."). Esta unidad es necesaria sobre todo en la doctrina y en los juicios sobre la fe y la moral. Los obispos se sienten obligados en conciencia a proceder en este campo de modo que el ejercicio del magisterio auténtico no produzca desorientaciones en el espíritu de los fieles, y conocen bien el valor que en el momento actual tiene la Conferencia para conseguir ese objetivo.

Pero una cosa es la unidad en la doctrina, y otra, la unidad o pluralidad de los documentos que la exponen. El Gobierno indica, como medio aconsejable para evitar la fragmentación de los criterios que los asuntos temporales de dimensión nacional sean enjuiciados en declaraciones colectivas, posiblemente a través de la Conferencia Episcopal.

En efecto aunque la concordancia de criterios pueda manifestarse a través de los documentos promulgados por los distintos prelados, la Conferencia Episcopal viene dando documentos colectivos y procurará seguir haciéndolo. Con todo , ni puede impedir que un obispo , en el uso de su facultad magistral, haga su propia declaración sobre el mismo tema, ni se puede afirmar de un modo absoluto la conveniencia de que los obispos particulares se abstengan del ejercicio de su derecho. Porque, dentro de la unidad sustancial exigible, caben exposiciones variadas que subrayan matices legítimos o atienden a determinadas circunstancias locales.

En todo caso se ha de proveer a que la predicación de los presbíteros sea conforme con el magisterio episcopal.

CLARIDAD EN LAS DECLARACIONES

4. El Episcopado comprende y hace suyo el deseo de que las declaraciones sobre el orden temporal tengan, juntamente con la nota de unidad , la de claridad. Toda expresión ambigua o insinuación equívoca resulta perturbadora.

Advierte, sin embargo, que a veces la apariencia de ambigüedad se produce por la misma complejidad objetiva en las situaciones o por la dificultad en deslindar las responsabilidades de cuantos se relacionan con algún suceso. En otros casos, la ambigüedad brota inevitablemente, sea cual sea la nitidez de lo que se dice, en la turbiedad de ciertos ambientes apasionados. Aun la simple evocación de principios generales puede ser deformada por unos y otros como si se tratase de juicios condenatorios que pueden lanzar contra sus respectivos adversarios.

ELECCIÓN SUBVERSIVA DE ALGUNOS CLÉRIGOS

(5) El Gobierno expone algunos hechos y conductas de miembros de la Iglesia que perturban la sana cooperación con el Estado. Se refiere en concreto a "clérigos y religiosos que - como dice la nota - vienen haciendo de la violencia frecuente instrumento de una pretendida actuación pastoral". Hace notar además que en los casos en que la autoridad eclesiástica no consiente en el procesamiento civil ni aplica sanciones canónicas se crea una situación de impunidad.

El Episcopado lamenta y reprueba los hechos de violencia o los abusos que se hayan producido. Los primeros afectados por tales hechos son los obispos. Le interesa, con todo, hacer notar que en gran parte no se trata de una situación peculiar de España, sino de manifestaciones de una conmoción universal y que no es fácil el enderezamiento de la misma. Dificultad que experimentan los Gobiernos en su propia esfera no obstante, el mayor poder coercitivo de que disponen. Por otra parte es preciso admitir que hay algunos hechos cuya calificación moral no es del todo simple.

En todo caso es notorio que hay hechos inequívocamente condenables. Pero también es notorio que corresponden a un reducidísimo sector del clero. Y es de justicia procurar que la consideración de ciertas actitudes minoritarias no empañen el juicio

que merece la casi totalidad del clero español, verdaderamente digna de ser aprobada y aun admirada, en su condición de sacerdotes de la Iglesia y de súbditos leales de la autoridad civil. Por lo que es de desear que se haga lo posible por ejemplo, en el ámbito de la información, para salvaguardar en torno al clero una atmósfera de serenidad y para hacer patente lo beneficioso de la función espiritual del mismo en favor de la sociedad española.

L ACCIÓN JUDICIAL SOBRE LOS CLERIGOS

En cuanto a la sanción de los hechos delictivos en el orden civil - los delitos metamente eclesiásticos serán tratados por cada prelado según su prudente estimación de las circunstancias - , es indudable que los clérigos no pueden quedar impunes. En particular, es también indudable que los obispos no han de tolerar que los clérigos tomen parte "en las perturbaciones del orden público" (Canon 141), ni que "maquinen contra las potestades civiles legítimas" (Canon 2.331), ni que injurien o perjudiquen a nadie en su buena fama (Canon 2.311). Los prelados diocesanos han jurado ante Dios, "como conviene a un obispo" , hacer que su clero "no tome parte en ningún acuerdo ni asista a ninguna reunión que pueda perjudicar al Estado español y al orden público".

Problema muy delicado es el de las acusaciones que se puedan dirigir a un sacerdote por lo que hace o dice en el ejercicio de su ministerio sagrado, especialmente de la predicación. La predicación sacerdotal, a tenor de lo que se ha indicado antes sobre el magisterio de la Iglesia, ha de ejercerse con libertad cuando expone la doctrina del evangelio y de la Iglesia y la proyecta sobre las circunstancias concretas de la vida. Es claro que en esta proyección el sacerdote ha de abstenerse de invadir competencias que le son ajenas y ha de respetar a las personas y a las instituciones legítimas. Por eso, la predicación y demás ministerios, si se utilizasen para cometer delito o para incitar a actos delictivos, no quedarían exceptuados de la correspondiente sanción. Pero determinar el hecho de una supuesta extralimitación no puede hacerse sin contar con el prelado propio, el cual en algún aspecto

es decir en lo que toca a la conformidad o no de lo predicado con la doctrina católica, es juez único.

Una observación muy importante nos parece oportuno subrayar respecto a los casos en que el ordinario del lugar por graves motivos niegue el consentimiento para que la autoridad judicial del Estado instruya proceso contra clérigos o religiosos en las causas criminales, según está previsto en el Concordato con la Santa Sede. Tampoco en estos casos se impone forzosamente una situación de impunidad. Porque, aunque no se dice expresamente en el texto del Concordato es el ordinario del lugar quien debe en tal supuesto, incoar por propia iniciativa un proceso eclesiástico, si es evidente por Derecho Natural y Canónico que el fuero de que disfrute un reo no es óbice para que se ejercite por quien corresponda la acción penal. Se ejercitará ciertamente ante el tribunal que sea competente; pero tiene que haber alguno que lo sea. Según la ley general de la Iglesia (Canon 120) los clérigos deben ser emplazados ante el juez eclesiástico. Siempre que, según el sistema del Concordato, no hubiere otro tribunal competente, la acción penal contra un clérigo puede ser ejercitada en el Tribunal de la Iglesia, y la parte interesada tiene derecho a ser oída por vía judicial ante la autoridad eclesiástica. Todo ello sin mengua de las acciones gubernativas que los prelados estimen oportunas.

CONFIANZA EN SOLUCIONES FAVORABLES AL BIEN COMUN

(6) Otros aspectos de las relaciones entre la Iglesia y el Estado no señalados en la nota a que estamos respondiendo, podrán ser estudiados fructuosamente en las conversaciones ya iniciadas y en otras que se emprendan en el futuro. El Episcopado presentará en su momento los hechos y preocupaciones que a su parecer necesitan esclarecimiento.

Agradecidos a la confianza que el Gobierno manifiesta hacia la gestión del episcopado, manifestamos la misma confianza

hacia el Gobierno y expresamos la firme esperanza de que el diálogo será facilitado por la buena voluntad y la concordia espiritual de ambas partes y conducirá a las soluciones más favorables al bien común"(1).

La postura tanto del Gobierno como de la Iglesia en las relaciones Iglesia- Estado, que reflejan los textos citados son francamente de respeto, de mutua independencia y de sana cooperación pero también de clara tensión entre la Iglesia y el Estado.

B) Epoca del Rey

a) Primer mensaje de la Corona.- El Rey de España, Juan Carlos DE BORBON en el primer mensaje de la Corona y refiriéndose a su postura para con la Iglesia dijo: " El Rey, que es y se siente profundamente católico, expresa su más respetuosa consideración para la Iglesia"(2).

En estas breves palabras del Rey queda reflejada sin embargo de modo suficientemente claro su postura para con la Iglesia: de respeto y consideración máximos.

b) Discurso del Presidente del Gobierno ante las Cortes el 28 de enero de 1976.-

El Presidente del Gobierno español en su discurso a las Cortes pronunciado el día 28 de enero de 1976, al referirse a la Iglesia dijo: "... es lógico que el Estado español otorgue la más positiva valoración al hecho religioso, reafirmando la mejor voluntad y sinceridad en las relaciones con la Iglesia dentro de un marco de recíproca independencia y mutuo respeto.

El enfoque de las relaciones con la Iglesia, e igualmente con las confesiones no católicas, ha de instrumentarse en el contexto de la libertad religiosa reconocida como derecho fundamental de los españoles"(3).

(1) Respuesta de la Conferencia Episcopal Española al Gobierno de 4 de julio de 1968, Vid. en Rev. Vida Nueva, de 20-IV-74.

(2) " El primer mensaje de la Corona, Vid. en "YA", de 22-XI- 75.

(3) " Discurso del Presidente ante las Cortes, el 28 de enero de 1976, Vid. "YA" de 29 de enero de 1976, pág. 14

La postura del Rey así como la de su Gobierno para con la Iglesia queda también reflejada de forma clara y rotunda en los textos anteriormente transcritos: profundo respeto , cooperación e independencia.

En síntesis, pues, de todos los textos examinados, tanto por parte del Episcopado, como por parte del Gobierno, en España, así en la época de Franco como en la del Rey se deduce una clara postura de mutuo respeto , completa independencia y sana cooperación.

A todo esto hemos de señalar, sin embargo, que entre la Iglesia y el Estado puede y debe haber una sana colaboración y un adecuado entendimiento pero no un pleno ni un tranquilo entendimiento; pues entre Estado e Iglesia habrá siempre la misma tensión que entre el hombre y su conciencia.

Misión de la prudencia de la Iglesia y del Estado será velar para que la inevitable tensión que ha de haber entre ellos no se convierta en hostilidad(1).

En todo caso " solo el rodaje de la realidad y la reacción ante los hechos revelará la capacidad y la voluntad real de entendimiento y de mutuo respeto"(2).

Hechas estas consideraciones previas, sobre dos puntos tan importantes en las relaciones Iglesia- Estado, como son la postura y aportación del Episcopado español y la postura del Gobierno en dichas relaciones, nos será ya más fácil el análisis y comprensión de las numerosas gestiones llevadas a cabo hasta estos momentos en favor de la revisión del Concordato de 1953. Los textos analizados nos servirán ante todo como fundamentales puntos de referencia en el análisis de las gestiones llevadas a cabo hasta ahora respecto a dicha revisión.

3. . Primeras gestiones en favor de la revisión.

Como primeras gestiones en favor de la revisión del actual Concordato de 1953 hay que destacar principalmente las siguientes:

(1) Vid. " El discurso del Presidente", en Rev. Vida Nueva , de 23 -II-74.

(2) Vid. "La Iglesia en España", en Rev. Vida Nueva, de 16 de febrero de 1974, pág. 6.

1ª Comunicación al Papa del Episcopado español de su voluntad de renunciar a todos los privilegios.

Los últimos días de noviembre de 1966 iban a traer una importante noticia. La Conferencia episcopal reunida en su tercera asamblea plenaria, hacía público que en su anterior asamblea - celebrada en julio del 66 - había expuesto al Papa "su total y favorable disposición a renunciar a cualesquiera derechos o privilegios que juzgara oportunos y en la fecha y circunstancias que el propio Papa determine" cumpliendo así las palabras del Concilio en las que se dice que "la Iglesia no pone su esperanza en privilegios dados por el poder civil"(1).

El 28 de noviembre el nuncio comunicaba a los obispos que el Papa "había acogido con viva satisfacción" este ofrecimiento del episcopado español y que estaba examinando " las posibles disposiciones prácticas en la materia y el modo en que podían realizarse"(2).

La decisión del Episcopado fué enormemente importante; pues, con ella se inauguraba por parte de la Iglesia un nuevo espíritu de disponibilidad generosa, favorable siempre a un adecuado entendimiento en la revisión concordataria.

2ª) Carta del Papa al Jefe del Estado.

En abril de 1968 la Santa Sede envió una carta al Jefe del Estado, en la cual, aun sin ser revelado su texto, "no es difícil adivinar, que Pablo VI no pediría ni un ápice más ni una letra menos que cuanto el Concilio había rogado, y que su carta sería tan noble como su persona y tan cordial para España y para la misma persona del Jefe del Estado como es propio de un padre de todos"(2). Consecuentemente se solicitaría fundamentalmente en esa carta, la renuncia, por parte del Jefe del Estado español, al principio de presentación de candidatos al Episcopado.

(1) "El Episcopado español muestra su deseo de renunciar a todos los privilegios", Videx en Rev. Vida Nueva, (un editorial), del día 24 de octubre de 1970, pág. 11

(2) Carta del Papa al Jefe del Estado, Vide en Rev. cit. pág.

3º) Respuesta del Jefe del Estado al Papa.

El 12 de junio de 1968 el Jefe del Estado respondía al Papa con una carta en la que declaraba: " Mi Gobierno está dispuesto a llegar a una revisión de todos los privilegios de ambas potestades"(1).

Esta carta del Jefe del Estado fué calificada de fenomenal por el destacado periodista Ismael Medina, y en ella según el citado periodista "Franco reiteraría devotamente al Vicario de Cristo su fidelidad personal y la del Estado y el pueblo español. Y le diría que uno y otros estaban dispuestos a cualquier sacrificio , como ha sido sobradamente probado, por el bien de la Iglesia. Pero que el Jefe del Estado no podía renunciar a un derecho que no era suyo, si bien confirmaba su buena disposición y también la de la nación, a poner al día, conforme a la doctrina conciliar, todas las cláusulas del Concordato"(2).

En todo caso , esta carta sirvió de base a las negociaciones que se llevaron a cabo entre España y la Santa Sede a partir del mes de julio de 1969.

4º) Comienzo de las conversaciones para la revisión.

En 1969 se iniciaron las conversaciones para la revisión del Concordato.

La XI asamblea plenaria de la Conferencia episcopal abrió sus puertas el 29 de noviembre con un importante discurso de monseñor Morcillo. En él, el arzobispo -presidente señaló que " si las noticias que llegan de haberse iniciado las conversaciones para revisar el Concordato son ciertas, podemos esperar fundadamente que en el nuevo instrumento de concordia queden institucionalizadas con la posible nitidez la independencia recíproca

(1) "El Concordato español" (Servicio de Documentación), en "Diario Pueblo" del 5 de septiembre de 1973.

(2) "La respuesta del Jefe del Estado", en Revista Vida Nueva, del 24 de octubre de 1970, pág. 24.

y la positiva cooperación de la Iglesia y el Estado en España" (1). Había pasado un año, desde que el nuncio de Su Santidad comunicara a los obispos la decisión tomada de iniciar la revisión. Pero un año después los contactos debían estar aún muy en mantillas cuando el presidente de la Conferencia hablaba aún de esos contactos en condicional.

El mil novecientos setenta vivió bajo un signo viajero. El tema concordatario parecía traspasado de los niveles de opinión pública a los altos contactos oficiales. Y entre Roma y Madrid hubo un tejer y destejer de viajes aéreos.

Se inició el intercambio con el viaje de López Bravo a Roma el 28 de enero. El regreso fué pródigo en manifestaciones entusiastas del ministro: "Difícilmente podrían tener un resultado más positivo estos contactos"(2).

"En la audiencia que me concedió el Santo Padre hablamos de las relaciones entre la Santa Sede y el Estado español, respecto de las que, felizmente, no hay que poner por delante la palabra problemas. Las conversaciones exploratorias que vienen celebrándose progresan de forma muy satisfactoria y todo permite creer que las conclusiones sean elevadas próximamente a las respectivas potestades"(3).

"En lo que se refiere de modo concreto al Concordato entre España y la Santa Sede, el ministro puntualizó que no hay problemas específicos, sino que es el paso del tiempo lo que hace que se le reconsidere en su conjunto, a la luz de lo que puede ser el concepto actual de las relaciones entre la Iglesia y un Estado. Pero lo que no se puede hacer es considerar el Concordato en una sola de sus facetas. El Concordato ha de considerarse en su totalidad"(4).

"Las relaciones entre la Iglesia y el Estado español son

(1) "La undécima plenaria del Episcopado", en Rev. Vida Nueva de 24 de octubre de 1970, pág. 37.

(2) Vid. "Todos los caminos llevan a Roma, editorial de Vida Nuevacit. pág. 39.

(3) Ibidem.

(4) Ibidem.

francamente buenas. El entendimiento entre ambas potestades es indudable. La situación de la Iglesia española es satisfactoria. Durante los tres cuartos de hora de coloquio con el Papa no ha habido disonancias, ni en lo que se refiere al problema del nombramiento de los obispos ni sobre ningún otro problema"(1).

" Yo puedo decir que aunque en algunas cuestiones se registran opiniones paralelas, nuestro deseo y el de la Santa Sede es llegar, por supuesto, a un acuerdo correcto. Por otra parte el Concordato ha sido superado, tiene ya muchos años.. Los derechos de presentación forman parte del conjunto de derechos y obligaciones del Concordato. No hemos hablado ni de éste, ni de ningún otro tema concreto, sino del Concordato en conjunto"(2).

El tono, ciertamente, no podía ser más optimista, aunque curiosamente no se oyera por entonces más que la voz de una de las dos partes conversadoras. En Roma, se dijo entonces, no reinaba tanto entusiasmo(3). Y así, Luis Apostúa en las páginas de "YA", el 15 de febrero escribía: " Se opina que esta negociación con la Santa Sede no será rápida, a pesar de ciertos optimismos. Este propósito no viene dado por ningún dato presente, sino como pequeño recuerdo del pasado. Cuando se negoció el Concordato ahora vigente, en un clima casi utópico de buena voluntad por ambas partes, se invirtieron tres años de informes y debates. Sería raro encontrar ahora una "autopista" para negociación a alta velocidad"(4).

El segundo viaje lo hizo el ministro señor Oriol en junio del mismo año (1969). Y nuevamente se reprodujeron las declaraciones optimistas: " No es el Concordato el objetivo de mi venida a Roma, dijo, ni es de mi competencia, sino de la del ministro de Asuntos Exteriores. Pero no obstante, quiero resaltar que en mi visita de hoy a la Secretaría de Estado he podido comprobar a este respecto

(1) "Todos los caminos llevan a Roma", en Rev. Vida Nueva, de 24 de octubre de 1970, pág. 39.

(2) Ibidem.

(3) Ibidem.

(4) Ibidem.

en todos una voluntad de sana cooperacion. No hay plazos fijados para la renovación del Concordato, pero si voluntad de ir de prisa".

"La supuesta tensión entre la Iglesia y el Estado no ha disminuido, por la simple razón de que no existe".

"La pregunta de si se consultará a la Conferencia episcopal, a las Iglesias locales y a los simples fieles, plantea un problema muy discutible, pero en definitiva el responsable de tales acuerdos es siempre el Gobierno. Por supuesto entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal existe una cordialísima relación" (1).

"La fórmula jurídica concordataria , por ahora , es preferible a la inexistencia de un texto delimitador de funciones y competencias que sirva de guía segura en las relaciones diarias en vez de un vaporoso nuevo espíritu"(2).

En agosto de 1970 la piel del país se llenó de nervios. Se decía que era inminente la firma de un concordato, Los rumores hablaban de un anteproyecto presentado por el embajador Garrigues y aceptado en principio por la correspondiente sección de la Secretaría de Estado. Sin embargo dos voces incitaron entonces a la calma. La de monseñor Piovano de la nunciatura de Madrid, que, en versión de la agencia Piresa, señaló que "no era inminente un nuevo concordato" y que " las negociaciones se encuentran todavía en fase de elaboración y preparación , no de terminación" (3). Y al mismo tiempo el cardenal Enrique y Tarancón declaró que en todo caso el Concordato " no podía esperarse al menos antes de dos meses"(4).

(1) "El segundo viaje", un editorial de Rev. Vida Nueva, del 24 de octubre de 1970, pág. 40.

(2) Ibidem.

(3) " Un concordato por sorpresa?, Vid. en Vida Nueva, cit. pág. 41.

(4) Ibidem.

"Esta misma sensación, de que las cosas irían aún despacio y quien sabe para largo, produjeron las declaraciones del ministro López Bravo al regresar de una nueva estancia en Roma (en septiembre), tiembre, de 1970). Fueron esta vez mucho más cautelosas que las de enero. De ellas se deducían tres conclusiones importantes:

- a) que Roma en todo caso consultaría a los obispos españoles antes de una decisión concreta.
- b) que los trámites del concordato no podrían ser rápidos.
- c) Que era voluntad del Papa que el futuro concordato se atuviera con rigurosa exactitud y en todos sus términos al Concilio Vaticano II"(1).

4. . Anteproyecto Casaroli - Garrigues.

La conclusión de la redacción de un anteproyecto de revisión del Concordato fue anunciada claramente en la noche del sábado, 6 d. de febrero de 1971 mediante una nota de la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, primera comunicación oficial sobre la mentalidad, de entonces, del Gobierno sobre el tema. La nota decía así:

" En julio de 1970 se concluyó la redacción de un anteproyecto de revisión del Concordato, fruto de trabajos preliminares llevados a cabo en colaboración por el Consejo para los Asuntos Públicos de la Iglesia y por la Embajada de España cerca de la Santa Sede, documento que ha sido posteriormente transmitido por la Santa Sede a la Conferencia Episcopal Española.

La naturaleza de este documento era evidentemente la de un anteproyecto "ad referendum", es decir, destinado a ser elevado al Gobierno español y a las autoridades competentes de la Santa Sede. El Gobierno ha estudiado cuidadosamente el citado anteproyecto, en la reserva con que es obligado tratar una negociación de esta índole. Sin pretender anticipar los resultados de la etapa subsiguiente, y recogiendo, perfeccionando y actualizan-

(1) "Tercer viaje", comentario en Rev. Vida Nueva, del 24 de Octubre de 1970, pág. 41

-do el contenido de aquel anteproyecto, desea afirmar desde ahora las siguientes fases:

1. El Concordato de 1953 resulta en la actualidad un documento anacrónico y es lógico que así sea dada la evolución que ha tenido lugar, tanto en la doctrina de la Iglesia como en las leyes españolas sobre materia religiosa, en los diecisiete años transcurridos desde que se estipuló. Es necesario, por ello, proceder a una revisión del Concordato, que refleje el reconocimiento jurídico especial que el ordenamiento del Estado otorga a la Iglesia Católica, en atención al hecho social de ser la religión de la inmensa mayoría de los españoles.

2. Tal revisión debe basarse, sin embargo, en una precisa delimitación entre el ámbito de lo espiritual y de lo temporal, en la garantía más eficaz de la libertad de la Iglesia y de la soberanía del Estado y el respeto al legítimo pluralismo en las actitudes de los españoles con respecto a las manifestaciones sociales de la vida religiosa.

3. Este Ministerio de Asuntos Exteriores da por descontado que no surgirán especiales dificultades en la negociación, dado el paralelismo que existe entre los propósitos del Gobierno español y la doctrina más reciente de la Iglesia, contenida en los documentos del Concilio Vaticano II y en las Encíclicas de los Sumos Pontífices Juan XIII y Pablo VI, que reclaman libertad para el cumplimiento de su altísima misión, pero no privilegios otorgados por el poder civil ni discriminaciones entre los ciudadanos por razones de índole religiosa.

4. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha adoptado y adoptará en la negociación una postura abierta frente a la revisión del Concordato, que haga de él un instrumento actual, sin afirmaciones doctrinales innecesarias, que aporte claridad y realismo a la regulación jurídica de las manifestaciones sociales de la vida religiosa. El Gobierno no pondrá obstáculos para que de

-parezcan de nuestro Régimen concordado privilegios del poder civil en materia eclesiástica que pueden hoy resultar anacrónicos. No es deseable recigar ni otorgar ningún privilegio, ni apariencia alguna de tal, que pueda empañar la soberanía del Estado o el testimonio de la Iglesia.

5. A la luz de estas consideraciones resulta obligado revisar el actual sistema de dotación económica de la Iglesia por el Estado. Asimismo, por lo que se refiere al nombramiento de todas las personas revestidas de dignidad episcopal, miembros de la Conferencia Episcopal, son aceptables soluciones congruentes con la doctrina actual de la Iglesia y con las prácticas de las relaciones establecidas recientemente entre la Santa Sede y otros países.

6. Al procederse a una derogación de mutuos privilegios, el Concordato podrá descargarse de buena parte de su actual contenido y, basándose en la legislación vigente del Estado y en los deseos de la Santa Sede, constituir el instrumento jurídico negociado que asegure: la libertad de la Iglesia y la soberanía del Estado; la seguridad jurídica en cuanto al régimen de la personalidad civil de los entes eclesiásticos; la sumisión de todas las personas pertenecientes a la Iglesia Católica, en cuanto ciudadanos, al ordenamiento jurídico del Estado; la eficacia civil del matrimonio católico, sin perjuicio de la libertad de los ciudadanos en materia religiosa; el libre ejercicio de la tarea educativa de la Iglesia, sin necesidad de situación de privilegio, y el reconocimiento de que la Iglesia, insigne servidora del bien común, ha de recibir, las ayudas, económicas y de otro tipo, con que las leyes deben estimular y equilibrar, en proporción justa, su aportación al bien común, etc.

El Gobierno, que ha procurado, cumplir con delicadeza extrema sus actuales compromisos concordatarios, se da perfecta cuenta de que la revisión del Concordato debe llevarse a cabo en un clima

de profundo respeto a la Santa Sede y a la Iglesia española, y de una manera confruente con la discreción que debe revestir toda negociación. En su momento, el pueblo español, a través de las Cortes, tendrá conocimiento de los resultados de esta actividad del Gobierno, y podrá ejercer las competencias que le atribuyen las Leyes Fundamentales de la Nación"(1).

Hay que reconocer que la nota "señala una cierta y positiva, aunque no completa, evolución del problema. Pero lejos de hacer innecesaria la intervención de la Conferencia Episcopal, la hace más importante y conveniente. De ella saldrán sin duda datos decisivos para el futuro concordato o para la modificación del sistema concordatario entre nosotros y esta primera semana de febrero quedará en la historia como la de los días en que, afortunadamente, se pusieron casi todas las cartas sobre la mesa"(2).

4. .1. Texto integro del anteproyecto.

El texto del anteproyecto, Casaroli- Garrigues dice así:

ARTICULO I.- La religión católica apostólica romana es la de la nación española y gozará de los derechos y de las prerrogativas que le corresponden en conformidad con la ley divina y el Derecho Canónico, sin perjuicio de la independencia y autonomía del Estado en su propio campo, ni de la justa libertad civil en materia religiosa..

ARTICULO II.- 1. El Estado español reconoce a la Iglesia católica el carácter de sociedad perfecta y le garantiza el libre y pleno ejercicio de su poder espiritual y de su jurisdicción

(1) "El Concordato salta a la Calle", editorial de Vida Nueva, de 13 de febrero de 1971, págs 6 y 7.

(2) Ibidem ,pág. 7.

en materia eclesiástica, así como el libre y público ejercicio del culto.

2. En particular, la Santa Sede podrá libremente, promulgar y publicar en España cualquier disposición relativa al gobierno de la Iglesia y comunicar sin impedimento con los prelados, el clero y los fieles del país, de la misma manera que éstos podrán hacerlo con la Santa Sede.

Gozarán de las mismas facultades los ordinarios y las otras autoridades eclesiásticas en lo referente a su clero y fieles, en materias propias de su ministerio.

ARTÍCULO III.- 1. El Estado español reconoce la personalidad jurídica internacional de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano.

2. Para mantener, en la forma tradicional, las amistosas relaciones entre la Santa Sede y el Estado español, continuarán permanentemente acreditados un embajador de España cerca de la Santa Sede y un nuncio apostólico en Madrid. Este será el decano del cuerpo diplomático, en los términos del Derecho consuetudinario.

ARTÍCULO IV. -1. El Estado español reconoce la personalidad jurídica y la plena capacidad de adquirir, poseer y administrar toda clase de bienes a todas las instituciones y asociaciones religiosas existentes actualmente en España, constituidas según el Derecho canónico, en particular a la Conferencia Episcopal Española con sus órganos, que podrán libremente reunirse y actuar en la esfera de su propia competencia; a las diócesis con sus instituciones anejas, a las parroquias, a las Ordenes y congregaciones religiosas, las Sociedades de vida común y los Institutos seculares de perfección cristiana canónicamente reconocidos, sean de Derecho pontificio o de Derecho diocesano, a sus provincias y a sus casas.

2. Gozarán de igual reconocimiento las entidades de la misma

naturaleza que sean ulteriormente erigidas o aprobadas en España por las autoridades eclesiásticas competentes, siempre que el decreto de erección o de aprobación sea comunicado oficialmente por escrito a las autoridades competentes del Estado..

3. La gestión ordinaria y extraordinaria de los bienes pertenecientes a entidades eclesiásticas o Asociaciones religiosas y la vigilancia e inspección de dicha gestión de bienes corresponderán a las autoridades competentes de la Iglesia.

ARTÍCULO V.- El Estado tendrá por festivos los días establecidos como tales por la Iglesia en el Código de Derecho Canónico o en otras disposiciones particulares sobre festividades locales.

La legislación del Estado establecerá las garantías necesarias para que los fieles puedan cumplir en esos días sus deberes religiosos y observar el descanso festivo.

ARTÍCULO VI.- En las ceremonias religiosas y de conformidad con las disposiciones de la sagrada liturgia, se elevarán preces por España y por el Jefe del Estado.

Nombramiento de los obispos.

ARTÍCULO VII.- El nombramiento de los arzobispos y obispos es de competencia de la Santa Sede.

Antes de proceder al nombramiento de arzobispos y obispos residenciales, del vicario general castrense o de coadjutores con derecho a sucesión, la Santa Sede comunicará al Gobierno español el nombre de la persona elegida para conocer si existen objeciones de carácter político general en contra de la misma.

El Gobierno español dará su contestación dentro de los treinta días. Transcurrido dicho término, el silencio del Gobierno se interpretará en el sentido de que no tiene objeciones que opo-

-ner al nombramiento.

Todas estas diligencias se cumplirán en el más estricto secreto.

ARTICULO VIII.- Continuará subsistiendo en Ciudad Real el Priorato Nullius de las Ordenes militares.

Para el nombramiento del obispo prior se aplicarán las normas a que se refiere el artículo anterior.

ARTICULO IX.- 1. La Santa Sede podrá erigir nuevas circunscripciones y provincias eclesiásticas y modificar los límites de las existentes o suprimirlas, si lo juzga necesario o útil para la asistencia de los fieles.

A menos que se trate de mínimas rectificaciones de territorio, la Santa Sede comunicará confidencialmente al Gobierno sus proyectos, para saber si éste tiene observaciones que formular en el orden político, en cuyo caso se procurará llegar a una solución de común agrado.

2. Ninguna parte del territorio español o de soberanía de España dependerá de obispo cuya sede se encuentre en territorio sometido a la soberanía de otro Estado, y ninguna diócesis española comprenderá zonas de territorio sujeto a soberanía extranjera, con excepción del Principado de Andorra, que continuará perteneciendo a la diócesis de Urgel.

Párrocos.

ARTICULO X.- La provisión de los beneficios no consistoriales será hecha por la competente autoridad eclesiástica según las normas del Derecho canónico.

Antes de proceder al nombramiento de un nuevo párroco, el ordinario llevará reservadamente a conocimiento del Gobierno el nombre

de la persona designada.

ARTICULO XI.- La autoridad eclesiaística podrá libremente erigir nuevas parroquias y modificar los límites de las ya existentes.

ARTICULO XII (antes XIII).-1. En consideraci'on de los vínculos de piedad y devoción que han unido a la nación española con la patriarcal basílica de Santa María la Mayor , la Santa Sede confirma los tradicionales privilegios honoríficos y las otras disposiciones en favor de España contenidos en la bula "Hispaniarum fidelitas" del 5 de agosto de 1953.

2. La Santa Sede concede que el Español sea uno de los idiomas admitidos para tratar las causas de beatificación y canonización en la Sagrada Congragación de Ritos.

ARTICULO XIII. (antes XIV). - Los clérigos y los religiosos no estarán obligados a sumir cargos públicos o funciones que, según las normas del Derecho canónico , sean incompatibles con su estado.

Procesamiento de clérigos.

ARTICULO XIV (antes XVI-. 1. Las causas contenciosas sobre bienes o derechos temporales en las cuales fueren demandados clérigos o religiosos serán tramitadas ante los Tribunales del Estado, previa notificación al ordinario del lugar en que se haya presentado la demanda, al cual deberán tambien ser comunicads en su día las correspondientes sentencias o decisiones.

2. El Estado reconoce y respeta la competencia privativa de los Tribunales de la Iglesia en aquellos delitos que exclusivamente violan una ley eclesiaística según el Código de Derecho Canónico.

Contra las sentencias de estos Tribunales no procederá recurso alguno ante las autoridades civiles.

3. Las causas criminales contra clérigos o religiosos por los demás delitos previstos por las leyes penales del Estado, serán juzgadas por los Tribunales del Estado.

Sin embargo, la autoridad judicial, antes de proceder, deberá informar al ordinario del lugar en que se instruya el proceso.

Los resultados de la instrucción, así como la sentencia definitiva del proceso, tanto en primera como en ulterior instancia, deberán ser solícitamente notificados al ordinario del lugar arriba mencionado.

4. En caso de detención o arresto, los clérigos y religiosos serán tratados con las consideraciones debidas a su estado y a su grado jerárquico,

A ser posible, las penas de privación de libertad serán cumplidas en una casa eclesiástica o religiosa que, a juicio del ordinario del lugar y de la autoridad judicial del Estado, ofrezca las convenientes garantías, o al menos, en los locales distintos a los que se destinan a los seglares, a no ser que la autoridad eclesiástica competente hubiere reducido al condenado al estado laical..

Les serán aplicables los beneficios de la libertad condicional y los demás establecidos en la legislación del Estado.

5. Caso de decretarse embargo judicial de bienes, se dejará a los eclesiásticos lo que sea necesario para su honesta sustentación y el decoro de su estado, quedando en pie, no obstante, la obligación de pagar cuanto antes a sus acreedores.

6. Los clérigos y los religiosos no podrán ser requeridos por los magistrados ni por otras autoridades a dar informes sobre personas o materias de las que hayan tenido conocimiento por razón del sagrado ministerio.

ARTICULO XV(antes párrafo 4 del artículo XXIV).- En general, todas las sentencias , decisiones en vía administrativa y decretos emanados de las autoridades eclesiásticas en cualquier materia dentro del ámbito de su exclusiva competencia , tendrán también efecto en el orden civil cuando hubieran sido comunicados a las competentes autoridades del Estado.

Dotación del Estado a la Conferencia Episcopal.

ARTICULO XVI(antes artículo XVIII).- La Iglesia puede libremente recabar de los fieles las prestaciones autoizadas por el Derecho canónico, organizar colectas y recibir sumas y bienes muebles e inmuebles, para la prosecución de sus propios fines.

ARTICULO XVII (antes XIX).-1. En consideración del hecho de que la religión católica es la de la nación española, y como contribución a la obra de la Iglesia en favor del bien común, el Estado le asignará anualmente una adecuada dotación que asegure el sostenimiento del culto y la formación y congrua sustentación del clero, así como el fomento de las Ordenes , Congregaciones o Institutos eclesiásticos consagrados a la actividad misional.

Esta dotación será entregada globalmente a la Conferencia Episcopal Española, previo acuerdo con la misma sobre el importe a que debe ascender.

El Estado procurará ayudar económicamente, en la medida de lo posible, a las casas de formación de las Ordenes y Congregaciones religiosas, especialmente a aquellas de carácter misional.

2. El Estado concederá, además anualmente subvenciones para la construcción y conservación de templos parroquiales y rectoriales y de Seminarios.

También atenderá económicamente a la restauración y mantenimiento de los templos y monasterios de relevante valor histórico, así como al sostenimiento en Roma del Colegio Español de San José, de la iglesia y residencia españolas de Montserrat y de los dos auditores de nacionalidad española de la Rota romana a que se refiere el artículo XXIII.

3. El Estado prestará a la Iglesia su colaboración para crear y financiar instituciones asistenciales en favor del clero anciano, enfermo o inválido.

Exención fiscal.

ARTICULO XVIII(antes XX).-1. Salvo lo establecido en este artículo, los bienes de entidades o personas eclesiásticas, así como los ingresos de éstas que no provengan del ejercicio de actividades religiosas propias de su apostolado, quedarán sujetos a tributación conforme a las leyes generales del Estado, en paridad de condición con las demás instituciones o personas.

2. Gozarán de exención de impuestos y contribuciones de índole estatal o local:

a) Las iglesias y capillas destinadas al culto y asimismo los edificios y locales anejos destinados a su servicio o a sede de Asociaciones católicas.

b) La residencia de los obispos, de los canónigos y de los sacerdotes con cura de almas, siempre que el inmueble sea propiedad de la Iglesia.

c) Los locales destinados a oficinas de la Curia diocesana y a oficinas parroquiales.

d) Las Universidades eclesiásticas y los Seminarios destinados a la formación del clero.

e) Las casas de las Ordenes, Congregaciones e Institutos religiosos y seculares canónicamente establecidos en España.

f) Los colegios u otros centros de enseñanza, dependientes de la jerarquía eclesiástica, que tengan la condición de benéfico-docente..

Estarán comprendidos en la exención los huertos, jardines y dependencias de los inmuebles arriba enumerados , siempre que no estén destinados a industria o a cualquier otro uso de carácter lucrativo.

3. Gozarán igualmente de total exención tributaria los objetos destinados al culto católico, así como la publicación de las instrucciones , ordenanzas, cartas pastorales, boletines diocesanos y cualquier otro documento de las autoridades eclesiásticas competentes referentes al gobierno espiritual de los fieles, y también su fijación en los sitios de costumbre.

4. Estarán igualmente exentas de todo impuesto o contribución las dotaciones del culto y clero a que se refiere el artículo XVII y el ejercicio del ministerio sacerdotal.

5. Las donaciones, legados o herencias destinados a la construcción de edificios del culto católico o de casas religiosas, o en general , a finalidades de culto o religiosas, serán equiparadas, a todos los efectos tributarios, a aquellos destinados a fines benéficos o benéfico-docentes.

ARTICULO XIX (antes XXI) .- El Gobierno y la Conferencia Episcopal tomarán los acuerdos oportunos para la conservación, la reparación y las eventuales reformas de los templos, capillas y edificios eclesiásticos declarados monumentos nacionales , históricos o artísticos, de los archivos eclesiásticos públicos, así como de las antigüedades y obras de arte que sean propiedades y obras de arte que sean propiedad de la Iglesia o le estén confiadas en su usufructo o en depósito, y que hayan sido declaradas de relevante mérito o de importancia histórica nacional.

Lugares de culto y fuerza pública.

ARTÍCULO XX (antes XXII).- 1. Salvo en caso de urgente necesidad , la fuerza pública no podrá entrar, para el ejercicio de sus funciones, en los edificios destinados al culto sin haber avisado de antemano a la autoridad eclesiástica competente.

2. Por regla general, los citados edificios están exentos de requisa u ocupación.

Si por grave necesidad pública fuese necesario ocupar temporalmente algún edificio destinado al culto, ello deberá hacerse previo acuerdo con el ordinario competente.

Si las razones de absoluta urgencia no permitiesen hacerlo, la autoridad que proceda a la ocupación deberá informar inmediatamente al mismo ordinario.

3. Dichos edificios no podrán ser demolidos sino de acuerdo con el ordinario competente, salvo en caso de absoluta urgencia.

4. En caso de expropiación por utilidad pública, y de acuerdo con la ley española, será siempre previamente oída la autoridad eclesiástica competente, incluso en lo que se refiere a la cuantía de la indemnización. No se ejercitará ningún acto de expropiación sin que los bienes a expropiar, cuando sea el caso, hayan sido privados de su carácter sagrado.

5. Los ordinarios diocesanos y los superiores religiosos según su respectiva competencia, quedan obligados a velar por la observancia , en los edificios citados , de las leyes comunes vigentes en materia de seguridad y de sanidad pública.

Matrimonio

ARTICULO XXI (antes XXIII). El Estado español reconoce plenos efectos civiles al matrimonio celebrado según las normas del derecho canónico.

ARTICULO XXII (antes XXIV).-1. El Estado español reconoce la competencia exclusiva de los Tribunales eclesiásticos en las causas referentes a la nulidad del matrimonio canónico, en la dispensa del matrimonio rato y no consumado y en el procedimiento relativo al privilegio paulino.

2. Incoada y admitida ante el Tribunal eclesiástico una demanda de nulidad, corresponde al Tribunal civil dictar, a instancias de la parte interesada, las normas y medidas precautorias que regulen los efectos civiles relacionados con el procedimiento pendiente.

3. Las sentencias y resoluciones de que se trate, cuando sean firmes y ejecutivas, serán comunicadas por el Tribunal eclesiástico, al Tribunal civil competente el cual decretará lo necesario para su ejecución en cuanto a efectos civiles y ordenará que sean anotadas en el Registro del Estado Civil, al margen del acta de matrimonio.

4. La Santa Sede consiente en que las causas de separación de personas sean juzgadas por las autoridades judiciales civiles.

ARTICULO XXIII (antes XXV).-1. La Santa Sede confirma el privilegio concedido a España de que sean conocidas y decididas determinadas causas ante el Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica, conforme al "motu proprio" pontificio del 7 de abril de 1947, que restablece dicho Tribunal.

2. Siempre formarán parte del Tribunal de la sagrada Rota dos

auditores de nacionalidad española.

Enseñanza de la religión y libertad civil en materia religiosa.

ARTICULO XXIV (antes XXVI).- En todos los centros docentes de cualquier orden y grado, sean estatales o no estatales, la enseñanza será conforme a los principios del dogma y de la moral de la Iglesia católica, sin perjuicio de la justa libertad civil en materia religiosa.

Los ordinarios ejercerán libremente su misión para salvaguardar en dichos centros docentes la pureza de la fe, las buenas costumbres y la educación religiosa.

ARTICULO XXV (antes XXVII).- El Estado español garantiza la enseñanza de la religión católica como materia ordinaria y obligatoria en todos los centros de instrucción primaria y secundaria, sean estatales o no estatales, exceptuados los de confesiones no católicas legalmente reconocidas.

Dicha enseñanza será impartida según las normas que establezcan de común acuerdo el Gobierno y la Conferencia Episcopal.

A solicitud de los padres o de quienes hagan sus veces, los hijos de no católicos podrán optar por la enseñanza de la moral natural.

ARTICULO XXVI (antes XVIII).- 1. En las Universidades del Estado, según acuerdos establecidos entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal, podrán ser organizados cursos sistemáticos de Filosofía escolástica, Teología, Derecho canónico y otras materias sagradas.

2. Con el consentimiento de las autoridades eclesiásticas los estudiantes seculares podrán matricularse en las Facultades superiores de sagrada Teología, Filosofía, Derecho canónico, Historia eclesiástica , etc., de las Universidades dependientes de las mismas autoridades eclesiásticas , asistir a sus cursos- salvo a aquellos que por su índole estén reservados exclusivamente a los estudiantes eclesiásticos - y obtener en ellas los respectivos títulos académicos.

ARTÍCULO XXVII (antes XXIX).- El Estado cuidará de que en las instituciones y servicios de formación de la opinión pública, en particular en los programas de radiodifusión y televisión, se dé el conveniente puesto a la exposición y defensa de la verdad religiosa por medio de sacerdotes, religiosos y otras personas designadas de acuerdo con el respectivo ordinario.

Centros docentes de la Iglesia.

ARTÍCULO XXVIII (antes XXX).- 1. Las Universidades eclesiásticas, los Seminarios y las demás instituciones católicas para la formación y para la cultura de los clérigos y religiosos continuarán dependiendo exclusivamente de la autoridad eclesiástica y gozarán del reconocimiento y farantía del Estado.

2. Los grados mayores en ciencias eclesiásticas conferidos a clérigos o a seculares por las Facultades aprobadas por la Santa Sede serán reconocidos a todos los efectos por el Estado español.

3. Dichos grados mayores en ciencias eclesiásticas serán considerados título suficiente para la enseñanza, en calidad de profesor titular, de las disciplinas de la sección de letras en los centros de Enseñanza Media dependientes de la autoridad

eclesiástica.

ARTICULO XXIX (antes XXXI).-1. La Iglesia podrá libremente ejercer el derecho que le compete, según el código de Derecho canónico, de organizar y dirigir escuelas públicas de cualquier orden y grado, incluso para seglares. En lo que se refiere a las disposiciones civiles relativas al reconocimiento, a efectos civiles, de los estudios que en ellas se realicen, el Estado procederá de acuerdo con la competente autoridad eclesiástica.

2. La Iglesia podrá fundar Colegios Mayores o residencias, adscritos a los respectivos Distritos Universitarios, los cuales gozarán de los beneficios previstos por las leyes para tales instituciones.

ARTICULO XXX (antes XXXII).- La asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas seguirá regulada conforme al acuerdo del 5 de agosto de 1950.

ARTICULO XXXI (antes XXXIII) .- El Estado, de acuerdo con la competente autoridad eclesiástica, proveerá lo necesario para que en los hospitales, sanitarios, establecimientos penitenciarios, organatos y centros similares se asegure la conveniente asistencia religiosa a los acogidos y la formación religiosa del personal adscrito a dichas instituciones.

Acción Católica.

ARTICULO XXXII (antes XXXIV) .- Las Asociaciones de la Acción Católica Española podrán desenvolver libremente su apostolado, bajo la inmediata dependencia de la jerarquía eclesiástica, manteniéndose, por lo que se refiere a actividades de otro género, en el ámbito de la legislación general del Estado y fuera de toda agrupación política.

Artículo XXXIII (antes XXXV).- 1. La Santa Sede y el Gobierno español procederán de común acuerdo a la resolución de las dudas o dificultades que pudieran surgir en la interpretación o aplicación de cualquier cláusula del presente Concordato, inspirándose para ello en los principios que lo informan.

2. Las materias relativas a personas y cosas eclesiásticas de las cuales no se ha tratado en los artículos precedentes serán reguladas en el ámbito eclesiástico, según el Derecho canónico vigente.

Protocolo final

En relación con el artículo XXI (antes XXIII):

a) Para el reconocimiento por parte del Estado de los efectos civiles del matrimonio canónico será suficiente que el acta del matrimonio sea transcrita en el Registro Civil correspondiente.

Esta transcripción se seguirá llevando a cabo como en el momento presente. No obstante, quedan convenidos los siguientes extremos:

1. En ningún caso la presencia del funcionario del Estado en la celebración del matrimonio canónico será considerada condición necesaria para el reconocimiento de sus efectos civiles.

2. La inscripción de un matrimonio canónico que no haya sido anotado en el Registro inmediatamente después de sus celebración podrá siempre efectuarse a requerimiento de cualquiera de las dos partes o de quien tenga un interés legítimo en ella.

A tal fin será suficiente la presentación en las oficinas del Registro Civil de una copia auténtica del acta del matrimonio extendida por el párroco en cuya parroquia aquél se haya celebrado.

La citada inscripción será comunicada al párroco competente por el encargado del Registro Civil.

3. La muerte de uno de los cónyuges no será obstáculo para efectuar dicha inscripción.

4. Se entiende que los efectos civiles de un matrimonio debidamente transcrito regirán a partir de la fecha de celebración canónica de dicho matrimonio. Sin embargo, cuando la inscripción del matrimonio sea solicitada una vez transcurridos los cinco días de su celebración, dicha inscripción no perjudicará los derechos adquiridos legítimamente por terceras personas.

5. Una Comisión mixta de representantes del Episcopado y del Gobierno estudiará las soluciones prácticas para la regulación de los efectos civiles de aquellos matrimonios canónicos cuya normal transcripción en el Registro Civil sea impracticable por la existencia de un vínculo civil anterior.

En relación con el artículo XXX (antes XXXII):

El artículo VII del acuerdo de 5 de agosto de 1950 sobre la jurisdicción castrense y asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas queda modificado de la siguiente forma:

" La jurisdicción del vicario general castrense y de los capellanes es personal; se extiende a todos los militares de tierra, Mar y Aire en situación de servicio activo (esto es bajo las armas), a sus esposas e hijos, cuando ~~vivan~~ vivan en su compañía; a los alumnos de las Academias y de las Escuelas Militares y a todos los fieles de uno y otro sexo, ya seglares, ya religiosos, que presten servicio establemente, bajo cualquier concepto, en el Ejército, con tal de que residan habitualmente en los cuarteles o en los lugares reservados a los soldados.

La misma jurisdicción se extiende también a los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil y de la Policía Armada, así como a sus familiares, en los mismos términos en que se expresa el párrafo anterior"(1).

Este anteproyecto ofrece en realidad pocas novedades. Sus puntos principales son:

1º) Mantiene la confesionalidad del Estado.

2º) Reconoce al Catolicismo como religión de la nación.

3º) La Santa Sede notificará el nombre de los obispos elegidos, antes de su nombramiento, al Gobierno, reservándose éste una especie de derecho de veto.

4º) Apenas cambia la regulación del matrimonio.

5º) La enseñanza religiosa obligatoria en las escuelas continúa prácticamente igual.

6º) El privilegio del fuero de los clérigos desaparece, pero se mantiene la notificación a los obispos.

7º) Se conserva, en líneas generales, la dotación económica de la Iglesia.

El anteproyecto que comentamos tuvo la extraña virtud de no gustar a nadie. Es que realmente había dejado las cosas como estaban. Con la diferencia de que 1971 no era ya 1953(2).

Si pretender hacer un análisis minucioso de todo su articulado, haremos solamente dos observaciones.

a) "Todo el enfoque del Concordato es gravemente restrictivo del planteamiento conciliar de la "libertad religiosa". Si allí se imponía la libertad como norma y el "especial reconocimiento" como excepción, aquí el "especial reconocimiento" es "tan especial" que se convierte en norma, mientras que la libertad concedida a los no católicos queda reducida a la excepción. Toda

esta cadena de privilegios concedida a la Iglesia católica y sus ministros parecen ofensivos para las demás comunidades no cristianas, que quedan así hondamente discriminadas.

b) Toda la visión de la acción de la Iglesia en la sociedad que fué expuesta en la constitución sobre "La Iglesia y el mundo" aparece aquí olvidada sustancialmente"(1).

5. . . Anteproyecto "Ministerio de Justicia".

" El diario "Arriba" en su número del 5 de febrero de 1971, ofrecía un texto en el que se recogía "el contenido" de otro anteproyecto " en el que posiblemente se recogen los puntos de vista del Ministerio de Justicia". El mismo periódico señalaba "que aunque le constaba la veracidad de su fuente informativa", no podía ofrecer este texto "con ningún aval de autenticidad"

El hecho de que esta información no haya sido rectificada ni desmentida, y, sobre todo, la perfecta coincidencia, de su contenido de fondo con los puntos de vista expuestos por Alfredo López, subsecretario de Justicia en su discurso de apertura del Curso académico 1970-1971 en la Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación, hace que podamos dar al texto una credibilidad suficiente"(2).

Hé aquí el resumen, tal y como "Arriba " lo ofrecía:

" El texto del "segundo" anteproyecto para el nuevo Concordato consta de doce artículos que se extienden a lo largo de quince folios. En sus puntos más esenciales, el citado anteproyecto favorece la independencia económica de la Iglesia, sostiene la prenotificación en el caso de nombramiento de obispos, y aplica en el campo educacional el principio de la libertad re-

(1) "Un anteproyecto que no resuelve nada", Vid. en Vida Nueva de 13 de febrero de 1971, pág. 13.

(2) El anteproyecto "Ministerio de Justicia", Vide en Vida Nueva cit. pág. 14..

-ligiosa.

Comienza con un preámbulo, en el que justifica la necesidad de actualizar el especial reconocimiento jurídico de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, "a la que pertenece" la gran mayoría de los españoles": la Santa Sede, reafirmando los principios del Concilio Vaticano II, y el Estado español, inspirado en el principio de protección de la libertad religiosa, consagrada en las Leyes fundamentales del Estado.

El Estado garantiza a la Iglesia la plena libertad para el ejercicio de su poder espiritual, afirma el artículo 1º. Los diversos párrafos de dicho artículo van dedicados: a reconocer a la Iglesia el derecho a regirse por sus propias normas en el ámbito de su competencia, en materia espiritual; a reconocer asimismo libertad de comunicación entre la Santa Sede y los obispos, así como autoridades y entidades religiosas, y, por por último, a establecer la misma libertad para las reuniones de la Conferencia Episcopal, sínodos, etc.

Los artículos 3º y 4º reconocen la personalidad jurídica internacional de la Santa Sede - el Nuncio será decano del cuerpo diplomático -, y personalidad jurídica de la Iglesia con plena capacidad para adquirir, poseer y administrar bienes; la Conferencia Episcopal está incluida entre los entes eclesásticos reseñados expresamente en el artículo 4º.

La Santa Sede, se dice en el artículo 4º, antes de proceder al nombramiento comunicará al Gobierno español el nombre de la persona elegida para el episcopado, a fin de conocer si existen objeciones de carácter político general contra la misma. El artículo especifica qué grados episcopales deberán ser prenotificados: arzobispos y obispos residenciales, vicario general castrense, coadjutores y auxiliares.

Si transcurridos treinta días desde la notificación previa el Gobierno mantiene silencio, la Santa Sede procederá al nombramiento, ya que interpreta el silencio como signo de que el Gobierno nada tiene que objetar. Si la objeción surge por

parte del Gobierno, éste y la Santa Sede buscarán la solución en común. El artículo garantiza un secreto estricto para todas estas diligencias.

Los dos artículos siguientes establecen que ni los clérigos ni los religiosos están obligados a asumir funciones a cargos públicos que no sean compatibles con su ministerio, así como garantizar respeto al secreto profesional de los clérigos.

El Estado contribuirá de una manera concreta y en un plazo determinado, a ayudar a la Iglesia a su autofinanciación, formando un patrimonio que le permita independencia económica. De este modo, la Iglesia financiará sus propias actividades, El Estado, en reconocimiento a la labor en favor del bien común, que realiza la Iglesia - y siempre bajo la perspectiva de una independencia económica de ésta - entregará a la Conferencia Episcopal, durante cada uno de los años comprendidos en un determinado período de tiempo, una cantidad global, Ni el plazo ni la cantidad vienen especificados en el texto.

Los cinco últimos artículos se refieren a la colaboración entre ambas potestades, la Iglesia y el Estado, para la conservación de templos, etc. (art. 8º), a la entrada de la Fuerza Pública en los templos, en los casos de urgente necesidad y previa notificación al obispo(9º), al matrimonio y a la separación , en el sentido de reconocimiento de efectos civiles de los actos canónicos y, por otra parte, se faculta a las autoridades judiciales civiles para que juzguen las causas de separación (10º), a la educación: garantiza a los padres de que sus hijos podrán recibir enseñanzas de religión (sin que ésta sea obligatoria) y, por último, a la asistencia religiosa que la Iglesia prestará en hospitales, sanatorios, centros benéficos, etc.

El anteproyecto concluye con un apéndice, en el que se reafirma la buena disposición de ambas partes para ponerse de acuerdo en

los asuntos que puedan surgir"(1).

Pretender criticar y aun comentar un texto como éste, conociendo sólo por referencia y tan sumariamente, resulta evidentemente imposible. Sin embargo, dentro de su generalidad(2), podemos apuntar alguna idea que sirva para su valoración. Creemos que " se trata , sin duda , de un texto más moderno que el llamado Casaroli-Garrigues. Muchos de sus puntos están vistos en línea más conciliar y aceptable.

Es importante la reafirmación de los principios del Vaticano II, si bien contrasta con la insistencia posterior en un concepto de Iglesia puramente espiritualista.

Los planteamientos del problema económico sin llegar a un planteamiento ideal parece que podrían señalar un camino como fórmula de transición.

Parece positivo el enfoque dado al problema de la enseñanza, pero más discutible parece el tema matrimonial, nada especificado en este resumen.

La gran lacra de este anteproyecto es la referente al nombramiento de obispos, cuya fórmula es notablemente peor que la del anteproyecto Casaroli-Garrigues y desde luego, radicalmente inaceptable en un planteamiento conciliar. Su articulado muestra hasta qué punto lo que Alfredo López llama en su conferencia "prenotificación con eficacia"(3), no es otra cosa que un eufemismo para pedir un verdadero derecho de veto, pues eso es en realidad la obligación jurídica a llegar en todos los casos a un acuerdo pactado entre las dos partes. Más grave aún es el hecho de que en esta prenotificación eficaz" se incluya a los obispos auxiliares , con lo que no sólo se va contra toda la tradición universalmente seguida por la Iglesia, sino que se crea un nuevo privile-

(1) El anteproyecto "Ministerio de Justicia," en Rev. Vida Nueva de 13 de febrero de 1971, págs. 14 y 15.

(2) "Notas para un comentario", en Rev. cit. pág. 15.

(3) LOPEZ (Alfredo): La Iglesia y el Estado, en Rev. Mundo, de 23 de enero de 1971, págs 20 y ss,

-gio en favor del Estado. La concesión de este nuevo privilegio no sólo no ampliaría la justa libertad a la que aspira la Iglesia en materia tan importante, sino que sería un retroceso al cerrarse a la Santa Sede el único portillo de libertad que le resta en un campo en el que debería disponer de una libertad absoluta y total"(1).

Por todo ello, es claro que tampoco este Anteproyecto puede ser aceptado.

(1) Vid.: "Notas para un comentario", en Rev. Vida Nueva, *cit.*,
pág. 35.

6. 6. Simples contactos previos a las conversaciones Casaroli - López Rodó en Madrid.

En el camino de las negociaciones entre la Santa Sede y España hacia la revisión del Concordato, se produjeron, en 1973, ciertos hechos que bien pueden considerarse como simples contactos previos a las negociaciones, que habían de tener lugar en Madrid, entre Casaroli y López Rodó en el mismo año. Estos hechos fueron:

1ª Entrevista López Bravo- Pablo VI, el 12 de enero.

Tras el naufragio del llamado "proyecto Casaroli-Garrigues" en enero del 71, las posibles negociaciones entre España y la Santa Sede habían quedado un tanto estancadas. Y así continuaron hasta el 12 de enero de 1973, fecha en que el ingeniero naval y ministro de Asuntos Exteriores, señor López Bravo se trasladó a Roma, para entrevistarse con Pablo VI. Aunque esta entrevista pudo calificarse de tensa y difícil, sirvió sin embargo para desbloquear el camino de las negociaciones. En esta ocasión López Bravo entregó al Papa una carta del Jefe del Estado, cuyo texto permanece secreto, en la que, según parece, se expresaba el deseo de iniciar la negociación (1).

La respuesta del Papa, aunque según se cree estaba redactada ya en el mes de marzo, no fué enviada a España hasta el mes de julio. Entre ambas fechas hay que situar el cambio de Gobierno ocurrido en España a primeros de junio y en el cual López Bravo entregaba a López Rodó los trastos de negociar (2).

(1) "Probable encuentro López Rodó y Casaroli en Madrid durante la presente semana", un editorial de "A B C" de 30 de octubre de 1973, pág. 37.

(2) "Iglesia en España", Crónica de ORTEGA (Joaquín), en Rev. Vida Nueva, de 10 de noviembre de 1973, pág. 6.

2º. Primer coloquio Casaroli - López Rodó en Helsinki.

La Conferencia de Seguridad Europea celebrada en Helsinki, durante la primera semana del mes de julio de 1973 y en la que López Rodó se estrenaba como representante de España, fué el marco del primer coloquio entre ambos diplomáticos. "Ni el Papa, ni yo - dicen que dijo en Finlandia Casaroli - creemos que se haya cerrado la época de los concordatos"(1). En este sentido es probable que se expresara la respuesta de Pablo VI - una amplia carta llegada a Madrid en agosto(2).

3º. Carta de López Rodó a la Secretaría de Estado señalando las tres condiciones previas del Gobierno a toda negociación.

Como ampliación del encuentro de Helsinki se produjo una carta del señor López Rodó a la Secretaría de Estado señalando las tres condiciones previas del Gobierno español a toda negociación:

1ª Designación de un "interlocutor válido" por parte de la Santa Sede, precisando el papel que, en la hipótesis de la negociación cumpliría a la Conferencia Episcopal, a la Nunciatura en Madrid y al Consejo de Asuntos Públicos de la Iglesia.

2ª Elaboración de una lista de temas a tratar y discutir.

(1) "Preparada la fase operativa de la revisión del Concordato tras las conversaciones Casaroli-López Rodó en Madrid" Crónica de Iglesia de España, por ORTEGA (Joaquín L), en Rev. Vida Nueva de 10 de noviembre de 1973, pág. 6.

(2) "Probable encuentro de López Rodó y Casaroli en Madrid..." un editorial de "A B C" de 30 de octubre de 1973, p 37

3ª Manifestación por parte de la Santa Sede de una "voluntad de negociar ", es decir intención de entrar en conversaciones formales"(1).

4ª. Visita a Roma del presidente y vicepresidente de la Conferencia Episcopal para aunar las posturas de la Secretaría del Estado y del episcopado español.

Tras la carta de López Rodó a la Secretaría de Estado, estuvo a punto de producirse una nueva entrevista de monseñor Casaroli con López Rodó, en San Sebastián entre el 10 y el 13 de septiembre. Los hechos posteriores mostraron que se juzgó preferible un previo viaje del presidente y vicepresidente de la Conferencia Episcopal a Roma para precisar los puntos de vista del Episcopado y lograr un acuerdo pleno entre las autoridades romanas y la jerarquía española. El cardenal Tarancón acompañado del vicepresidente de la Conferencia, Bueno Monreal, llegó al Vaticano el 3 de septiembre y mantuvo amplios contactos con los altos cargos de la Secretaría de Estado. En algunas de estas entrevistas (en las que se trataba de exponer los puntos de vista del episcopado nacional) estuvieron presentes los prelados españoles residentes en Roma, Tabera, Romero de Lema y Torella. El cardenal de Sevilla(Bueno Monreal) departió personalmente con el Papa y en Roma quedó redactado un apunte recogiendo los puntos de amplia coincidencia entre la Santa Sede y los obispos españoles de cara a la negociación.

5ª Respuesta del cardenal Villot al ministro español recogiendo los puntos que para la Santa Sede y para el episcopado español son imprescindibles en la negociación.

Los puntos de amplia coincidencia entre la Santa Sede y los

(1) "Probable encuentro de López Rodó y de Casaroli en Madrid.. en "A B C." nº y pag. cit.

obispos españoles fueron casi literalmente recogidos en una carta que el cardenal Villot dirigió al ministro español de Asuntos Exteriores.

Estos serían los nueve puntos que la Santa Sede y el episcopado español considerarían imprescindibles para una negociación concordataria:

1. Revisión del concepto de la confesionalidad o prescindiendo de él o planteándolo al menos, como simple confesionalidad sociológica, tal y como lo enfoca el Concordato con Colombia.
2. Renuncia total por parte de la Iglesia al privilegio del fuero, previo el reconocimiento, por parte del Estado, de la libertad de la Iglesia para predicar el Evangelio entero, con sus consecuencias sobre la vida social y cívica del país.
3. Renuncia total, por parte del Gobierno, al privilegio de presentación de obispos. La Santa Sede aceptaría una prenotificación de los obispos residenciales, siempre que se considerase que esta prenotificación no tiene nada que ver con cualquier forma de derecho de veto, confusión a la que se prestarían fórmulas como la llamada "prenotificación eficaz" defendida antaño por algunos. Respecto a los obispos auxiliares, Roma seguirá la práctica que usa en todo el mundo en el sentido de designarlos sin siquiera prenotificación.
4. Reconocimiento de plena libertad de las asociaciones creadas por la autoridad eclesiástica y de ella dependientes dentro del campo de su competencia, tanto estrictamente religioso como de iluminación evangélica del orden temporal.
5. Reconocimiento de este mismo campo de libertad para las publicaciones dependientes de la autoridad eclesiástica.

6. Reconocimiento de la plena libertad de la Iglesia en el campo de la enseñanza religiosa. Esta enseñanza, en los centros estatales, dependería de la autoridad eclesiástica en cuanto a la designación del profesorado y libros de texto.

7. Esta misma dependencia de la Jerarquía eclesiástica tendrían los medios de comunicación social de alcance nacional en lo referente a los programas religiosos.

8. Reconocimiento de la personalidad jurídica de la Conferencia episcopal y aceptación de sus órganos como interlocutor válido normal en los contactos con las autoridades del Estado.

9. Búsqueda de una "fórmula equitativa" para los problemas económicos del culto y clero"(1).

El planteamiento, como se ve, se situaba, así, mucho más en el campo de las libertades que en el de los privilegios o exenciones económicas.

En todo caso hay que reconocer que en estos simples contactos se evidenciaba buena voluntad por ambas partes y deseo de llegar a acuerdos que resolvieran los problemas sin aspiraciones a triunfos.

(1) "Los nueve puntos", un editorial de Vida Nueva de 3 de noviembre de 1973; Vid. también en el mismo sentido diario "A B C" de 30 de octubre de 1973, pág. 38.

7. Conversaciones Casaroli - López Rodó en Madrid.

Apenas amanecido el día 1 de noviembre de 1973 llegaba a Madrid el Secretario del Consejo para los Asuntos Públicos de la Iglesia, Monseñor Casaroli. Su presencia en Madrid dió origen a una serie de parlamentos y declaraciones que alcanzan un indudable valor de testimonio histórico en el umbral de las nuevas negociaciones España Santa Sede.

Monseñor Casaroli , en dos jornadas y media de agenda a tope fué hilvanando una ~~apropiación~~ ~~de~~ ~~contactos~~ y entrevistas que van desde el presidente del Gobierno al de la Conferencia Episcopal y desde López Rodó a monseñor Dadaglio, pasando por cardenales y ministros.

He aquí lo que se dijo en estas entrevistas:

1º. Día 1: Un saludo al país.

A poco de pisar tierra española en el aeropuerto de Barajas, el día 1 de noviembre de 1973, monseñor Casaroli pronunció las siguientes palabras:

" Siento una gran satisfacción de volver a pisar tierra española. He venido en otras ocasiones, como cuando conocí al señor López Rodó... Eramos más jóvenes los dos. Ahora, la ocasión es especial, porque venimos a tomar contacto para estudiar un poquito las cosas y ver como se puede adelantar el asunto de las relaciones entre la Santa Sede y España. Las relaciones son ahora muy buenas, saludo a todo el pueblo español, al que quiero y admiro, como admiro la historia de España y la España de hoy. Un saludo cordial para todos"(1).

(1) Lo que se dijo publicamente en las conversaciones de Madrid, en " Documento- Iglesia de España-, en Rev. Vida Nueva, de 10 de noviembre de 1973, pág. 8.

2º. Día 3 : Brindis en Santa Cruz.

El acto final de las conversaciones Casaroli- López Rodó consistió en un banquete en el Palacio de Viana, con el que el Ministro de Asuntos Exteriores correspondía al ofrecido el día anterior en la Nunciatura de Madrid por el Secretario del Consejo para Asuntos Públicos de la Iglesia. En este último banquete el señor López Rodó pronunció el siguiente brindis:

"Excelencia, eminentísimos señores, señor ministro, excelentísimos señores, señores:

A nadie cabe aplicar con mayor razón que a monseñor Casaroli, viajero infatigable y madrugador, aquellas palabras del Quijote: "Como es ligero el tiempo y no hay barranco que le detenga, corrió caballero en las horas y con mucha presteza llegó la de mañana"

Desde esa madrugada del jueves , al descender del avión, cuando "sorge il sole libero e jocondo", no ha tenido un momento de descanso y ha prodigado su sonrisa y su cordialidad : cuantos hemos tenido la fortuna de verle y de acompañarle.

Es para mi motivo de especial satisfacción el tener a vuestra excelencia aquí entre nosotros, ante todo por el honor de recibir como ministro de Asuntos Exteriores de España, a quien ostenta idéntica responsabilidad en la Santa Sede, y muy particularmente por brindarme una nueva ocasión de renovar y acrecentar una vieja relación de amigos, que tan gentilmente evocasteis, excelencia, en vuestras palabras al pisar tierra española. Sabéis muy bien, monseñor Casaroli, que valoro muy mucho esa firme y antigua amistad, que me ha permitido apreciar , desde hace largos años, las virtudes personales que os adornan y el interés con que habéis contemplado siempre todo lo que se refiere a España.

Vuestra visita, excelencia, ha despertado simpatía y afecto. Todos hemos comprobado la gran satisfacción con que se ha acogido por la opinión pública española la presencia entre noso-

-tros de monseñor Casaroli. No se os oculta tampoco que vuestra visita ha suscitado también expectación. Me atrevería a decir que mucha expectación. Lo cual no es de extrañar porque, dejando de lado las interpretaciones más o menos sensacionalistas, e incluso fantasiosas, esa expectación tiene su raíz verdadera y profunda en el hondo sentir católico del pueblo español."

PROBLEMAS Y DISCREPANCIAS/

Son muchas y muy venturosas las espléndidas realidades nacidas de la fecunda colaboración entre la Iglesia y el Estado en los más amplios y diversos campos de la educación, la cultura, la asistencia social y tantos otros que integran el bien común del pueblo español en todas sus dimensiones. Pero sería pueril pretender ocultar que en este magnífico cuadro de las amistosas relaciones entre la Iglesia y el Estado existen, como en todo cuadro, luces y sombras, problemas y discrepancias que serán, sin duda, superados gracias a la buena voluntad de ambas partes.

La sinceridad ha presidido nuestras conversaciones a lo largo de estas tres jornadas de intenso y fructífero trabajo. Por ello, mi primer deber ha consistido en hacer patentes a la Santa Sede los puntos de vista del Gobierno recordando aquella sentencia del Quijote, según la cual de los leales es "decir la verdad en su ser y figura propia, sin que la adulación la acrecienta u otro vano respeto la disminuya".

Nada tengo que añadir a la postura del Gobierno, que ha sido reiteradamente definida. Basta recordar que en su primera declaración, del 14 de junio del presente año, manifestó la voluntad de que sus relaciones con la Santa Sede se inspiren en el afecto filial hacia la Iglesia Católica, en el reconocimiento de su misión espiritual, en la afirmación solemne del principio de la recíproca independencia entre la Iglesia y el Estado y de la autonomía de la esfera propia del orden político, dentro de la leal colaboración de ambas supremas potestades. Porque, como recordó oportunamente la Conferencia Episcopal en su instrucción de 29 de junio de 1966: "Si es misión de la jerarquía iluminar la con-

-ciencia de los fieles en el cumplimiento de sus deberes cívico-sociales, no lo es invadir el terreno de la autoridad civil adoptando posturas o emitiendo juicios que, por referirse a la elección de medios contingentes en el orden temporal, dependen del ejercicio de la prudencia política".

ADHESIÓN AL PRINCIPIO DE LIBERTAD RELIGIOSA

Entiendo que en estos momentos resulta obligado reiterar nuestra adhesión al principio de la libertad religiosa, reconocido en el Fuero de los Españoles. Me complace recordar ahora que hace tan sólo unos días nuestra delegación ante las Naciones Unidas ha intervenido para defensa de ese principio.

REGIMEN ESPECIAL PARA LA IGLESIA CATOLICA

Sólo dentro de este marco de la libertad religiosa cabe reconocer un régimen especial para la Iglesia Católica, en consonancia con el hecho de que la inmensa mayoría de los españoles profesan nuestra religión, pero sin que tal reconocimiento pueda implicar ningún género de discriminación por motivos religiosos.

IMPORTANCIA DE ESTAS CONVERSACIONES

Ha sido muy importante esta intensa y cordial toma de contacto para la mejora de las relaciones entre la Iglesia y el Estado y para hacer que se desarrollen en armonía con las exigencias de los tiempos en que vivimos. Abrigo la esperanza de que estas relaciones tradicionalmente amistosas encontrarán el marco jurídico adecuado para que puedan ser cada vez más fructíferas. Tanto la Santa Sede como el Estado español consideran que el Concordato de 1953 resulta en la actualidad anacrónico y se hace preciso ponerlo al día para dar una adecuada respuesta a los profundos cambios operados en los últimos veinte años.

DISPOSICIÓN DEL GOBIERNO PARA LA REVISIÓN DEL CONCORDATO.

El Gobierno español se halla dispuesto a llevar a cabo con una actitud abierta las negociaciones conducentes a su revisión en orden a garantizar la recíproca independencia y la amistosa delimitación de competencias entre la Iglesia y el Estado. Estoy seguro, excelencia, que nuestras ulteriores conversaciones se mantendrán en este clima de cordialidad y mutua comprensión, que ha sido la nota dominante de nuestro diálogo durante estos tres días, para mí extraordinariamente gratos e inolvidables.

Os consta, excelencia, que no hay jamás trabajos de amor perdido. Es muy profundo el caudal de afecto que fecunda desde hace muchos siglos los esforzados trabajos que la Iglesia y el Estado han venido realizando en favor de la libertad y de la dignidad cristiana de los hombres de España.

Quiero terminar dando testimonio de mi devoción filial a Su Santidad el Papa Pablo VI y levanto mi copa por los señores cardenales y por cuantos nos acompañan en este acto, y muy particularmente por mi admirado amigo monseñor Casaroli, al que expreso de nuevo mi satisfacción por el placer de tenerle entre nosotros"(1).

3º. Día 3: Banquete de despedida

En el mismo acto, monseñor Casaroli correspondió a las palabras de su anfitrión con un discurso, en el que dijo:

" La inspiración que me ha traído aquí es la misma inspiración que el Santo Padre ha manifestado en su carta muy reciente

(1) Lo que se dijo publicamente en las conversaciones de Madrid,... en Rev. cit. págs. 8 y 9.

al Jefe del Estado español, y, a través de él a todo el pueblo español, a toda España, que traduce el sentimiento de verdadero afecto que sigue uniendo a la Santa Sede, al Santo Padre, con este gran pueblo, grande por tantas razones, pero para nosotros grande porque sigue siendo católico de verdad, profundamente. Vive no digamos la tragedia, pero si los problemas que el catolicismo, la Iglesia, tiene que vivir para seguir el cambio de los tiempos y para poder ser hoy, en nuevas situaciones, frente a nuevos problemas, lo que fueron en siglos pasados.

Y el Santo Padre sigue esta página de la vida de España - no haría yo una distinción entre la Iglesia de España y España, porque realmente las dos realidades no digo que se confunden, pero si que se unen -, la sigue con gran atención y con gran afecto. Tiene gran confianza en los obispos de España. Sabe que puede estar seguro de que todos estos cambios, todos estos problemas pueden ser enfrentados de una manera positiva porque con sus hermanos en el Episcopado está muy cerca de sus hijos, comprende sus problemas, puede comprender también ciertas manifestaciones que no tendrían que existir, pero que existen, con el único fin de ayudar a todos para que puedan colaborar amistosamente, utilmente, para el bien común del pueblo español.

Estos sentimientos los he recibido de los labios mismos del Santo Padre cuando, al emprender mi viaje y preguntarle si seguía estando de acuerdo en que aprovechara esta magnífica ocasión para pararme un poco en tierra de España, me dijo: "Si, sin duda". Esta es la manera de manifestar todo el interés, el afecto, la buena voluntad que animan al Santo Padre, a la Santa Sede. Dificultades las habrá sin duda, hay dificultades entre los hermanos, hay dificultades en la familia, y así consideramos los problemas que hay que resolver. Los consideramos como cosas de familia y siempre es posible en una familia comprenderse y solucionar todos los problemas que existen. Yo, por mi parte, y lo digo con gran sinceridad, no me considero necesario, porque realmente este deseo de la Santa Sede de estar cerca, de ayudar al pueblo español a encontrar su vida católica en las circuns-

-tancias de hoy, no depende de una persona o de otra. Es el deseo del Papa, es el del Papa de hoy y será el del Papa de mañana. En lo que personalmente a mí se refiere, pueden estar seguros tanto vuestra excelencia como los eminentísimos cardenales, como todos los amigos presentes, pueden estar seguros de que siempre podrán contar con esta participación mía personal, que se da cuenta de que no es necesaria, pero que, por el momento, a petición del Santo Padre, sirve en este campo de que podrán contar con su buena voluntad, con su sinceridad, con su lealtad completa; lealtad hacia la Iglesia, evidentemente; lealtad hacia los pastores de esta porción de la Iglesia que es España; lealtad hacia el Gobierno, que nosotros respetamos por títulos, aunque sólo fuera por el hecho de ser un Gobierno que tiene responsabilidades tan grandes, tenermos que respetarle y ofrecerle además una colaboración sincera, leal, para que pueda servir como quiere servir la Iglesia al bien de todo el pueblo español."(1).

4º. Día 3 : Comunicado conjunto

Al término de las conversaciones, el sábado día 3 fué entregado a los medios de comunicación el siguiente comunicado que firman monseñor Casaroli y el señor López Rodó:

Al término de la visita a España de monseñor Agostino Casaroli, secretario del Consejo para Asuntos Públicos de la Iglesia, se ha hecho público el siguiente comunicado conjunto:

"El secretario del Consejo para Asuntos Públicos de la Iglesia, monseñor Casaroli, ha permanecido en España desde la mañana del día 1 de noviembre hasta la tarde del día 3.

Aun no teniendo su visita carácter oficial, fué atendido por parte del Gobierno español con especiales muestras de cortesía y consideración.

Monseñor Casaroli ha sostenido durante estos tres días repetidas y largas conversaciones con el ministro de Asuntos Exteriores, señor López Rodó, y celebró una entrevista con el presidente del Gobierno, almirante Carrero Blanco.

El secretario del Consejo para Asuntos Públicos de la Iglesia se ha entrevistado con los cardenales Enrique y Tarancón, arzobispo de Madrid; Gonzalez Martín, primado de España, y Jubany, arzobispo de Barcelona; con el nuncio de Su Santidad, monseñor Dadaglio, y con el secretario de la Conferencia Episcopal, monseñor Yanes, y tuvo ocasión de conversar con el ministro de Justicia, señor Ruiz-Jarabo.

Monseñor Casaroli ha podido aprovechar su estancia en España para pararse revista a la situación presente y futura de las relaciones entre la Santa Sede y el Estado español, examinando especialmente lo relativo a las negociaciones para la revisión y actualización del vigente Concordato y otros temas de común interés. Ambas partes han confirmado la decisión expresada anteriormente por sus autorizados representantes de estar dispuestos a llevar a cabo dichas negociaciones.

A este respecto se han recordado las palabras contenidas en la carta dirigida por Su Santidad el Papa Pablo VI a Su Excelencia el Jefe del Estado español, con fecha 31 de julio de 1973, en la que expresa el "ferviente deseo de que la Iglesia de España, en consonancia con su propia misión e incumbencia, pueda cooperar con el Estado al bien común del pueblo español".

En el mismo sentido, el Jefe del Estado español, en su último mensaje de Fin de Año, declaró que nuestro Gobierno, "acorde con los sentimientos católicos de la casi totalidad de los españoles, ha mantenido invariablemente, a lo largo de más de siete lustros, una actitud de respeto y cooperación hacia la Iglesia".

Monseñor Casaroli y el señor López Roldán han expresado su esperanza de que no se repitan hechos como los registrados en ocasiones anteriores, al difundirse por ciertos medios informativos determinadas versiones de cartas cruzadas entre la Santa Sede y el Gobierno español sin autorización de sus autores ni de sus destinatarios, versiones que, además, son inexactas. Al propio tiempo desean manifestar su aprecio por la misión informativa y de orientación de la opinión pública, encomendada a la Prensa y a los demás me-

medios de comunicación social.

Ambas partes han expresado el propósito de proseguir en breve plazo estos contactos, que estiman altamente positivos.

5º. Día 3 : Con el pie en el avión

A punto ya de regresar a Roma en el avión puesto a su disposición por la Subsecretaría de Aviación Civil, hizo monseñor Casaroli a los periodistas las siguientes manifestaciones:

"Salgo de Madrid con verdadera satisfacción tras dos días y medio pasados en un ambiente muy agradable. Agradecemos a las autoridades del Estado español, especialmente al presidente del Gobierno y al ministro de Asuntos Exteriores, todas las atenciones recibidas.

Aunque mi visita no ha sido con carácter oficial, me ha dado posibilidades y las he aprovechado para mantener conversaciones largas, intensas y muy útiles. No teníamos que llegar a conclusiones operativas. Las dos partes teníamos verdaderos deseos de reanudar las bases jurídicas bilaterales. Estas conversaciones que hemos mantenido nos han servido para poder llegar a una futura Base operativa. Esperamos que sea dentro de muy poco tiempo, de un período no tan largo, Todo esto en servicio del pueblo español, para el cual deseo renovar mis votos.

6º. Día 3: De nuevo en casa

Poco más tarde, al posar ya en el aeropuerto romano de Fiumicino, resumió de la siguiente manera sus impresiones sobre el viaje recién concluido:

"Pienso que estos largos coloquios han sido útiles", ha declarado monseñor Agostino Casaroli, aludiendo a las conversaciones celebradas durante los tres últimos días en Madrid con las más altas autoridades del Gobierno y del Episcopado español.

" Se ha tratado - añadió monseñor Casaroli - de una visita que no tenía ningún carácter oficial. Mas bien desde el principio parecía que debía consistir en una toma de contacto rápida, aunque no superficial. Pero una vez en Madrid se ha visto que , sea del lado eclesiástico, sea del lado del Estado, había posibilidades, diría incluso interés, para profundizar".

Estamos en vista de un tema del que todos hablan: el posible y progreso "aggiornamento" del Concordato, que, naturalmente, ha sido hecho en épocas diversas, con problemas diversos y que, como toda cosa debe ser aplicada a una situación viva, cambia y tiene necesidad de ser actualizada y de ser regulada según las contingencias".

Tras subrayar que " buena voluntad existe en las dos partes", monseñor Casaroli concluyó diciendo: "Por lo que respecta a la Santa Sede, yo diría que no procede sola, como no puede y no debe hacerlo, sino que se mantiene, se ha mantenido y se mantendrá en contacto con la Iglesia de España y con el Episcopado para poder hacer un trabajo serio que pueda servir verdaderamente a los intereses de la Iglesia y a los intereses profundos del pueblo español"(1).

Tras este intercambio de puntos de vista que inicialmente hizo ver las cosas tal vez de excesivo color de rosa, el atentado al señor Carraró Blanco el 20 de diciembre de 1973 (2) y el "caso Añooveros", en marzo de 1974, llevaron la situación hasta extremos de increíble dureza e incomprensión(3).

No obstante, la calma sobrevino de nuevo en las relaciones Iglesia -Estado, tras el comienzo oficial de las negociaciones España-Santa Sede sobre la revisión del Concordato, llevadas

(1) " Lo que se dijo publicamente en las conversaciones de Madrid, en Rev. cit. pags 8 y 9.

(2) Crónica de quince días" de Segundo Arteché, en Vida Nueva de 5 y 12 de enero de 1974, pág., 13

(13) " El caso Añooveros", vid. en Rev. Vida Nueva , de 9 y de 16/ 23 de marzo de 1974.

a cabo en Madrid, durante los días 4, 5 y 6 de junio de 1974 y en Roma los días 11 al 17 de julio del mismo año. Por todo ello, la importancia de estas negociaciones es obvia y su análisis se hace imprescindible al analizar la revisión del Concordato.

8. . Comienzo oficial de la nueva negociación concordataria"-
Conversaciones Casaroli- Cortina en Madrid.

A las dos y cuarto del mediodía del 4 de junio de 1974, con más de una hora de retraso sobre el horario previsto, llegó a Madrid, procedente de Roma, monseñor Agostino Casaroli, secretario del Consejo para Asuntos Públicos de la Iglesia.

Es su primera visita oficial a España. Las anteriores escalas en la capital española estaban calificadas de escalas técnicas o de visitas privadas. Se produce así el comienzo oficial de la nueva negociación concordataria.

Creemos de interés recordar las declaraciones que se han hecho por una y otra parte, siempre en lenguaje sutilmente diplomático, tan apto para decir lo que se pretende como para velar lo que se manifiesta.

B. 1. Declaraciones en Roma de monseñor Casaroli, antes de emprender viaje a Madrid.

Antes de emprender viaje a Madrid, monseñor Casaroli hizo pública en Roma la siguiente declaración:

" Este nuevo viaje a Madrid responde a una invitación que me ha dirigido el ministro español de Asuntos Exteriores, y se situa en el cuadro de la acción en curso, ya desde hace cierto tiempo , para asegurar , dentro de circunstancias que han cambiado, una correcta relación entre la Iglesia y el Estado, entre la Santa Sede y el Estado español,

" Uno de los aspectos característicos de tal problema está dado por la oportunidad, que para muchos es necesidad, de adecuar a las nuevas situaciones maduras en España y en la Iglesia católica el instrumento jurídico bilateral que desde hace más de veinte años regula fundamentalmente dicha relación. La exigencia de la revisión, del "aggiornamento", de la "actualización" del Concordato ha sido, y continua siendo, afirmada insistentemente tanto por parte de la Iglesia como por parte del Gobierno español".

"Las dificultades para llevar a cabo esta empresa dependen de varias causas. Hay una, en si misma, muy positiva, o sea, la importancia de que en España, bastante más que en otros países, la Iglesia y la nación van a la corrección de las recíprocas relaciones. Esta, en España, más que en otras naciones, no representa una cuestión marginal, sino vital, y como tal está sentida ampliamente no sólo por el clero y por sectores más comprometidos política o eclesiásticamente, sino por toda la población".

Los encuentros que tendré con el señor ministro Cortina deberán señalar el comienzo oficial de la nueva negociación en las formas y por los trámites técnicos que serán acordados.

Deseo y espero que los resultados sean los que requieren los superiores intereses de la Iglesia y de la nación española, y respondan a las honestas esperanzas de cuantos quieren tales comunes intereses, ligados no a episódicas y contingentes vicisitudes de los tiempos, sino a la profundidad de la realidad histórica que ha ligado, que ligará, deseamos, en los siglos, el pueblo español a su herencia cristiana, a la Iglesia católica, a la Santa Sede"(1).

8. ... 2. Primeras declaraciones en Madrid.

Poco después de su llegada a Madrid, monseñor Casaroli, hizo ante los medios informativos la siguiente declaración:

(1) "Monseñor Casaroli llegó a Madrid en visita oficial," un editorial de "YA" de 5 de junio de 1974, pág. 24; vid. también en Rev. Vida Nueva, de 15 de junio de 1974, págs 6 y 7.

"Me es muy grato manifestar - dijo - el agrado con que he accedido a la invitación del ministro español de Asuntos Exteriores para que mantengamos una serie de entrevistas aquí en Madrid.

Para mi - continuó - significa una nueva ocasión de visitar España, lo que siempre es tan agradable.

Quiero expresar mis sentimientos de consideración hacia Su Excelencia el Jefe del Estado y el Gobierno español, así como a los cardenales, obispos y nuncio apostólico, con quien me une gran amistad, y de manera muy cordial y respetuosa para todos los españoles.

Igualmente quiero manifestar que estas simpatías son fiel reflejo del pensamiento del Santo Padre, por cuyo encargo he venido a España. El Padre Santo envía, también, para España una bendición especialísima para que el trabajo que vamos a realizar resulte fructífero"(1).

8. 1. 3. Jornada del miércoles , día 5.

La jornada del miércoles día 5 se clausuró con una cena oficial ofrecida por el ministro de Asuntos Exteriores, don Pedro Cortina Mauri, al secretario del Consejo para Asuntos Públicos de la Iglesia, monseñor Casaroli. En esta cena se pronunciaron por ambas partes sendos discursos que, dentro de su especial género literario ilustran el clima y el desarrollo de la negociación.

8. 4. 1. 1. Discurso del ministro de asuntos exteriores.

El señor Cortina Mauri dijo: " Excelencia, eminentísimo señor, señor ministro(2), ~~excelentísimos~~ señores, señores:

Es para mi un honor y un motivo de profunda complacencia poder dar hoy la bienvenida a un huésped tan ilustre como su excelencia

(1) Tras las conversaciones Casaroli - Cortina, Crónica de L. ORTEGA (Joaquín), en Vida Nueva de 15 de junio de 1974, p.7.

(2) Se refiere al señor ministro de Justicia asistente también.

el secretario del Consejo para los Asuntos Públicos de la Iglesia, monseñor Agostino Casaroli.

No es la primera vez que este palacio de Viana abre sus puertas para acoger a tan distinguido visitante. Monseñor Casaroli conoce bien los caminos que traen a España y los que conducen al corazón de los españoles.

En su incansable peregrinar por los cuatro puntos cardinales, monseñor Casaroli ha tenido la posibilidad de conocer en sus complejos matices los factores que configuran las variadas condiciones de vida de la Iglesia católica en las diferentes sociedades y sus relaciones con los distintos Estados.

Este profundo reconocimiento de cada circunstancia es el que hace del secretario para los Asuntos Públicos de la Iglesia el interlocutor pragmático, el diplomático avisado que intuye los condicionamientos reales de los problemas y se enfrenta con ellos en el campo de lo posible, que es también el campo de la auténtica eficacia.

Pocas de las intervenciones que me ha deparado la actividad exterior me han parecido tan trascendentes como las conversaciones que hemos celebrado estos días, sin duda porque las relaciones de mi país con la Santa Sede tratan de armonizar la acción que la Iglesia y el Estado ejercen sobre la sociedad española en su respectivo afán de satisfacer sus exigencias espirituales y materiales.

Esta confluencia de propósitos da lugar a una interpretación que puede ser sublime si reina la concordia entre las dos potestades, pero que también puede ser una fuente de conflictos cuando la intervención unilateral de la propia misión trasciende al cuerpo social en forma de confrontación, en vez de hacerlo en forma de entendimiento.

Esta problemática de las relaciones de la Iglesia y el Estado es confirmada a diario por la realidad. Por ello reducir las fricciones al mínimo, y si cabe superarlas definitivamente, es la tarea que nos hemos impuesto para que tengan libre cauce los anhelos de la Iglesia y del Estado en el cumplimiento de su fin primordial de promover el bien común.

En este sentido, y en la representación que ostentamos, nos ha correspondido el honroso cometido de poner al día las bases de coincidencia entre España y la Santa Sede, a fin de encontrar el grado de compatibilidad que, sin menoscabo de la misión de cada una, haga factible el holgado desenvolvimiento de la otra. A este logro ha de coadyuvar el recto pensar y adecuado proceder con que hemos actuado en la búsqueda de la solución propicia a la creadora convivencia de las dos potestades.

Creo haber descrito con estas consideraciones las miras que nos han guiado en nuestras conversaciones, y que han hecho posible que el diálogo fluyera sin esfuerzo. Así hemos logrado soslayar las dificultades al impulso de un compartido deseo de esclarecimiento junto a la voluntad de entenderse. Lo menos que se puede decir de estas conversaciones es que han estado presididas en todo momento por un espíritu de colaboración, el cual ha llevado a sentar las bases de una negociación que habrá de permitir a la Iglesia y al Estado dar cumplida prueba de que en España cabe siempre - en forma concordada - una efectiva cooperación basada en el mutuo respeto e independencia.

Con esa confianza quiero, excelencia, reiteraros, en nombre del Gobierno español y en el mío propio, la bienvenida más cordial, y haceros patentes los más fervientes votos para que nuestros trabajos, que han sido el prelude de las negociaciones, conduzcan en breve a la conclusión del nuevo instrumento que regule de manera actualizada las buenas relaciones entre la Santa Sede y el Estado español.

Levanto, pues, mi copa para brindar por ese futuro de comprensión y entendimiento en los que están puestos la voluntad y el anhelo de todos nosotros"(1).

(1) "Tras las conversaciones Casaroli -Cortina,, en Revista cit. pág. 8.

8. 5. . . . Discurso de monseñor Casaroli.

Por su parte, monseñor Casaroli, tras agradecer las palabras del ministro de Asuntos Exteriores y recordando sus conversaciones con el embajador Garrigues, dijo:

"Habíamos llegado a la conclusión de que más vale la concordia que los concordatos, y en esta afirmación común tal vez podía verse una especie de desilusión, ya que no pudiendo llegar a un nuevo concordato nos contentábamos con pensar en la concordia; pero había algo más profundo, señor ministro: nos dábamos cuenta, ya lo sabíamos, de que los instrumentos jurídicos son el cuerpo y la concordia es el alma. Y si el cuerpo sin alma, no sirve de nada, hemos comprendido que el alma sin el cuerpo puede hacer muy poco en las relaciones humanas, y por esto habíamos mantenido él y yo que más vale por parte nuestra, del Santo Padre, de la Santa Sede y puede decir del Episcopado español, el convencimiento de la necesidad de trabajar para que a este anhelo hacia la concordia de las dos potestades en España se agregara también un instrumento jurídico válido - el presente es válido todavía jurídicamente - , pero que responda de una manera mejor a situaciones que se han ido modificando con el pasar de los años por los cambios que se han producido en la sociedad civil no sólo española, sino mundial, y en la propia Iglesia.

Cuando salí de Roma - me parece encontrarme en España no sé desde cuánto tiempo - le dije al Santo Padre: "Voy con esperanza, pero con temor. Hemos trabajado tanto en el pasado sin llegar a resultados " El me dijo: "No tenga miedo, no tenga miedo, no tenga temor. Yo voy a acompañarle a usted y a sus interlocutores en las negociaciones con una oración muy especial, con una bendición muy especial, porque considero que este trabajo es realmente útil y necesario para el bien de España, tanto de la Iglesia como del pueblo de España, ya que es muy difícil hacer una división entre estos elementos".

Ha hablado vuestra excelencia de las bases de coincidencia

a las que , en este trabajo intenso, corto temporalmente pero intenso, hemos llegado, o mejor dicho, cuya existencia hemos podido constatar. Ha hablado vuestra excelencia de un preludio. Yo pienso tal vez con ilusión , con mucha esperanza, con mucha buena voluntad en lo que va a seguir a este preludio, en el edificio que se podrá erigir sobre estas bases. Tendremos que trajar. La buena voluntad no falta. Es verdad que la buena voluntad es también como el alma. Se necesita sabiduría, conocimiento de los hechos, sentido de la realidad, no para aceptarla tal como es, sino porque no se puede hacer nada contra ella. Se puede modificar, pero no se la puede desconocer. Yo cuento muchísimo con la ayuda de mis colaboradores; evidentemente, el señor nuncio tendrá un papel que desempeñar, y con él, cuantos van a rodearle aquí en España. Cuento muchísimo con la buena voluntad , con el espíritu de colaboración, con la sabiduría de vuestra-excelencia y de los representantes del Gobierno de España. Cuento, sobre todo con esta bendición de Dios, que el Santo Padre ha impartido no sólo a mí, sino también a vuestra excelencia y a todos los que nos acompañan en nuestro trabajo, trabajando con nosotros o esperando que este trabajo no sea inútil.

Levanto a mi vez mi copa por vuestra excelencia, por el Gobierno español, por el Jefe del Estado y por la España verdaderamente eterna, porque tiene "parvenir en su historia temporal y nosotros creemos también que en la historia eterna"(1).

8.6. . Comunicado conjunto.

Poco antes de abandonar Madrid monseñor Casaroli se hizo público el siguiente comunicado conjunto, aprobado por ambas delegaciones. Su texto íntegro dice así:

"Su excelencia monseñor Casaroli, secretario del Consejo para

(1) "Tras las conversaciones Casaroli -Cortina", en Rev. cit.

Asuntos Públicos de la Iglesia, ha realizado una visita oficial a Madrid, adonde llegó a mediodía del 4 de junio, siendo recibido en el aeropuerto de Barajas por el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno español, don Pedro Cortina; por el nuncio de su santidad, monseñor Dadaoglio, y por otras autoridades eclesiásticas y civiles y altos funcionarios de los Ministerios de Asuntos Exteriores y Justicia.

Durante su estancia, que ha durado hasta el final de la tarde del jueves, día 6 de junio, monseñor Casaroli ha mantenido amistosas y constructivas conversaciones con el señor Cortina. Ha abordado el examen de las relaciones entre la Santa Sede y el Estado español, en la línea ya convenida anteriormente.

En el curso de este diálogo, monseñor Casaroli y el señor Cortina han reafirmado la buena voluntad expresada entonces, de proceder a la actualización del vigente Concordato, y han estimado que existen las condiciones objetivas para poder entrar seguidamente en la fase operativa de la negociación. En este contexto han examinado los puntos que ambas partes consideraron que debían ser objeto de la misma y han estudiado especialmente la cuestión de una más clara delimitación de los campos que corresponden a la acción propia de la Iglesia y del Estado.

Han pasado revista a los principales problemas existentes, poniéndose de manifiesto la buena disposición de ambas partes para resolverlos y reafirmando la necesidad de que en espera de que se llegue a un marco jurídico actualizado de las relaciones de la Iglesia con el Estado, el Concordato vigente sea debidamente aplicado.

El secretario del Consejo para los Asuntos Públicos de la Iglesia y el ministro de Asuntos Exteriores están de acuerdo en que el espíritu que debe presidir las relaciones entre la Iglesia y el Estado se base sobre la mutua independencia, el respeto recíproco y la necesaria cooperación.

El secretario del Consejo para los Asuntos Públicos de la Iglesia ha celebrado al final de su estancia una entrevista con el presidente del Gobierno, don Carlos Arias Navarro.

Ambas partes han expresado su satisfacción por los resultados

de esta visita y manifiestan el decidido propósito de la Santa Sede y del Estado español de continuar sus esfuerzos hasta que la tarea emprendida se vea coronada por el éxito para mayor bien de la Iglesia y de España"(1).

8.7. . . Ultimas declaraciones en Barajas.

A punto de tomar el avión de regreso a Roma(minutos despues de las ocho del día 6 de junio) , monseñor Casaroli, pronunció ante los informadores unas breves palabras sintetizando así su visita a Madrid:

"El hecho de que ambas partes hayan coincidido en unas condiciones objetivas para, seguidamente, pasar a una nueva fase de las conversaciones, ya es positivo. Precisamente la palabra "seguidamente" ha sido la más meditada de todo el texto del comunicado conjunto".

En poco menos de diez horas se ha conseguido más que en los últimos cinco años; pero todo este trabajo no ha sido inútil , pues ha servido para preparar estas conversaciones".

Subrayó que estos mutuos intercambios tendrán lugar en lo sucesivo tanto en Roma como en Madrid, aunque no concreté las fechas en que se van a producir. "Estamos - dijo - en la recta que puede ser la recta final, pero hay rectas muy largas todavía".

A preguntas de los periodistas sobre si hablaría por teléfono con el Papa a su llegada a Roma, declaró: "Este Papa es igual que Pio XII, no rehusa el teléfono (todo lo contrario que Pio XI), lo cual no quiere decir que hable por teléfono siempre"(2).

Parecidos conceptos ratificó después monseñor Casaroli interrogado por los periodistas en el aeropuerto romano, declarándose satisfecho del trabajo realizado y destacando la "voluntad decidida" que había , apreciado en sus interlocutores españoles.

(1) "Tras las conversaciones Casaroli - Cortina.." en Rev. cit. pág. 9.

(2) Ibidem.

9. Conversaciones Casaroli Cortina en Roma.

La nueva ronda de conversaciones Casaroli - Cortina tuvo lugar en Roma , durante los días 11 al 17 de julio de 1974.

Antes de abandonar Roma el ministro español, se hizo público un comunicado conjunto recogiendo en un texto brevísimo las casi treinta horas de apretada negociación, más las visitas y contactos marginales de los ocho días de estancia romana del ministro Cortina.

En las anteriores conversaciones madrileñas los comunicados fueron abundantes, profusos; sobre todo, el primero. Ahora, todo se concentró en unas escasas líneas. Poco más o menos a línea y media por día de negociación.

9. 1. Texto del comunicado conjunto.

El texto del comunicado conjunto dice así:

" Durante los días 11 al 17 de julio , el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno español, don Pedro Cortina, ha celebrado negociaciones con el secretario del Consejo para los Asuntos Públicos de la Iglesia, monseñor Casaroli, para la actualización del Concordato en vigor. Se han estudiado a fondo todas las materias que interesan a ambas partes, habiéndose llegado a formulaciones susceptibles de traducirse en normas concordadas. Las dos partes han acordado reunirse de nuevo próximamente, en fecha que será determinada de común acuerdo. El ministro de Asuntos Exteriores ha sido recibido en audiencia por Su Santidad el Papa y se ha entrevistado con el secretario de Estado, cardenal Jean Villot, y con el sustituto de la Secretaría de Estado, monseñor Giovanni Benelli. 17 de julio de 1974"(1).

(1) "Tan cordiales como secretas las conversaciones Casaroli-Cortina", Crónica de L. ORTEGA, en Vida Nueva, de 20 -VII-74, pág. 6.

"Cualquier comentario o intento de exégesis de un texto como este resultaría mera filigrana".

El señor Cortina en una conversación que tuvo con los corresponsales españoles antes de salir de Roma, comentó el texto diciendo: "Jamás he tenido conversaciones más comprensivas, más amistosas y con mayor deseo de los dos de acercarse y encontrar un terreno común...Ha existido no cordialidad sino supercordialidad"(1).

Cual ha sido en concreto el resultado de estas conversaciones?

La prensa italiana aventuró una serie de interpretaciones, mientras que la española estuvo del todo ayuna de información objetiva. "L'osservatore Romano", que había silenciado la estancia en Roma del señor Cortina, publicó, por fin, el comunicado conclusivo. El mismo texto fue difundido por Radio Vaticano.

Otros periódicos, según su filiación, han comentado las conversaciones en una u otra clave.

Cabe destacar como denominador común la impresión de progreso y aún de progreso rápido en la negociación. Según "Il Giorno", de Milán, se produjo un "entendimiento bilateral". El Romano "Paese Sera" aventuró más al asegurar que se había logrado un acuerdo sobre los dos puntos más relevantes de las negociaciones: el nombramiento de obispos y el fuero eclesiástico. Otros periódicos aquí y allí hablarán incluso de que Cortina se había traído en la cartera un proyecto de Concordato"(2).

De todas formas parecía que tras estas conversaciones vaticanas algo nuevo se había amasado. Así se podía deducir de las palabras del señor Cortina: "Hemos recorrido un tramo inmenso en la recta de la negociación que se avizora ya la meta. Hay que terminar la negociación", dijo el ministro de Asuntos Exteriores, señor Cortina a su llegada al aeropuerto de Barajas(3).

Una cosa en todo caso parecía haber quedado clara: el período dialógico quedaba abierto pero inconcluso.

(1) Vid. "Tan cordiales como secretas las conversaciones Casaroli -Cortina"..., en Rev, cit. pág. 6.

(2) Ibidem, pág. 7

(3) Ibidem.

10... Almuerzo de trabajo entre los más destacados representantes de la Iglesia y el Estado español el día 26 de enero de 1976 en Madrid.

El día 26 de enero de 1976 tuvo lugar en Madrid, en el palacio de Viana un almuerzo de trabajo entre los más destacados representantes de la Iglesia y el Estado en España, a fin de establecer unas primeras bases de contacto para una nueva andadura de las relaciones bilaterales.

Invitados por el ministro de Asuntos Exteriores señor Areilza, de quien partió la iniciativa, asistieron el ministro de Justicia, don Antonio Garrigues y Diaz Cañabate; el subsecretario de Asuntos Exteriores, don Marcelino Oreja; el director general de Asuntos Eclesiásticos, don Eduardo de Zulueta y Dato, por parte civil; por parte eclesiástica estuvieron presentes el presidente de la Conferencia Episcopal Española, cardenal Enrique y Tarancón; el arzobispo de Toledo, cardenal primado Gonzalez Martín; el nuncio de Su Santidad, arzobispo Luigi Dadaglio; el consejero de la Nunciatura monseñor Dante Pasquinelli, y el provicario de Madrid-Alcalá, padre Martín Patino(1).

Este fue el primer encuentro entre el primer Gobierno de la Monarquía española y los más cualificados representantes de la Iglesia española y el nuncio de Su Santidad.

Fue en realidad una reunión informal, un cambio de impresiones, en el que se puso de manifiesto el deseo mutuo de una distensión, a través del diálogo, la colaboración y el entendimiento.

Constituye en realidad el primer encuentro importante entre los más destacados representantes de la Iglesia y el Estado en España, desde que se avistó la recta final, que resultó más bien un espejismo, con vistas a revisar el Concordato.

Como consecuencia de este almuerzo no se esperan iniciativas especiales. Parece sin embargo que ha quedado abiertas las conversaciones Iglesia Estado, dentro de un clima de cordialidad y entendimiento, para en otro momento y con interlocutores más técnicos negociar los asuntos más urgentes: nombramiento de obispos y fue-

(1) Vid. "Ambiente cordial y claro en el almuerzo Iglesia- Estado", en "YA" de 27 de enero de 1976, pág. 22.

-ro eclesiástico.

11) Visita a la Santa Sede del ministro español de Asuntos ex Exteriores señor Areilza, durante los días 12 y 13 de abril de 1976.

Durante los días 12 y 13 de abril de 1976 el ministro español de Asunto Exteriores don José María de Areilza celebró importantes encuentros con la Santa Sede.

El día 12 el señor Areilza fué recibido por Pablo VI en una audiencia de casi una hora de duración que el mismo ministro español en los brindis del almuerzo homenaje que el día le fué ofrecido por el cardenal Villot, secretario de Estado, calificó de emocionante.

El día 13 el señor Areilza acompañado de los señores Fernandez Valderrama y Zulueta celebró conversaciones con el cardenal Villot (media hora), con monseñor Benelli (una hora) y con monseñor Casaroli (una hora). A mediodía le fué ofrecido por el cardenal Villot un almuerzo homenaje al que asistieron los monseñores Benelli y Casaroli, Mosconi, Silvestrini, Dadaglio y Coppa (asesor de Secretaría de Estado) y los señores Fernández Valderrama, De Zulueta, Aguirre de Carcer, Marquez Cano, De Ghurruca, Fernández de Córdoba y Martínez Fresno.

En cuanto al resultado de estos encuentros parece ponerse de relieve en las declaraciones hechas por el ministro español y el cardenal Villot en los siguientes momentos:

12) En los brindis del almuerzo homenaje al ministro español,

A los brindis de este almuerzo el ministro español agradeció la acogida del Vaticano "sobre todo - dijo - la emocionante del Papa, personal y como representante de España que no olvidaré".

Respondiendo al brindis el cardenal Villot expresó su alegría por este viaje del señor Areilza, tan útil psicológicamente por haber creado una nueva imagen de encuentro de voluntades comunes hacia una normalización que sólo puede ser veneficiosa para la Iglesia y para España.

(1) vid. "YA" del 14-IV-76, pág. 10.

29) En la conversación del ministro español con los periodistas después del almuerzo.

El señor Areilza tuvo una conversación con los periodistas después de este almuerzo en la que respecto a su viaje al Vaticano dijo: " Era mi propósito testimoniar públicamente al Papa el interés de la Monarquía por llegar a una plena normalización y, además, explorar abierta y sinceramente los caminos de un entendimiento programático. Ha habido una especie de reconocimiento mutuo de unanimidad de intenciones, que quizás antes no había.

En la historia de la Iglesia no hay etapas, es siempre la misma, pero quizás hay momentos y matices, y éste es, respecto a España, un momento de expectación positiva, puesto que ha habido un desbloqueo psicológico de posibles recelos de antaño. Hay cosas que conviene mejorar, acordar, rectificar, quizás sustituir. Hemos hablado con absoluta franqueza, No sería justo decir que la táctica hasta ahora ha sido dilatoria. Todo contrato humano que queda anticuado es un semillero de conflictos si no hay ánimo negociador. El bloqueo se ha producido porque el concordato no responde ya a la realidad sociológica de España 1976. Más que un tapón es un anacronismo. A título de rumor cabe recoger el rumor de que la nueva plena disponibilidad al diálogo se basaría, fundamentalmente, sobre : renuncia al derecho de presentación de obispos, y renuncia al Fuero eclesiástico"(1).

30) En las declaraciones del señor Areilza a Radio Vaticano.

El mismo día 13 el señor Areilza hizo las siguientes declaraciones a Radio Vaticano sobre las relaciones de España con la Santa Sede: "No más tarde del mes próximo espero que haya un nuevo paso que podría constituir el comienzo de las negociaciones definitivas".

Probable interlocutor, monseñor Casaroli. Lugar a establecer, pero la praxis exigirá, tal vez que sea Madrid. La Iglesia no hace cues-

Vide "Importantes encuentros del ministro Areilza con el Gobierno italiano y la Santa Sede", en Diario YA de 14 de abril de 1976, pág. 10.

-tión de gabinete, o condición indispensable , si las relaciones se han de regular por un concordato o por acuerdos parciales. Tampoco nosotros tenemos una actitud a priori. El Concordato fué una fórmula buena en un determinado momento, pero ahora los acuerdos parciales podrían ser una fórmula tan buena como cualquier otra.

Cual de las fórmulas barajadas es la mejor ?

Para el señor Areilza hay tres fases a recorrer:

1. Concordia de voluntades , cabría decir que se ha establecido ya con el desbloqueo psicológico que las conversaciones de estos días en Roma han significado.
2. Mutuo entendimiento sobre problemas concretos.
3. Separación de jurisdicciones , aunque ambas partes vayamos a lo mismo."(1).

4º) En la conferencia de prensa en Barajas.

El señor Areilza a su llegada a Barajas celebró una conferencia de prensa en la que refiriéndose a su visita a la Santa Sede declaró su emoción por la audiencia de casi una hora de duración que le concedió el Santo Padre. Añadió que tras sus entrevistas con el secretario de Estado, cardenal Jean Villot, y con los monseñores Benelli y Casaroli podría afirmar que "hemos adelantado muchísimo para llegar al entendimiento y a la sana colaboración que debe presidir las relaciones entre España y la Santa Sede"(2).

En estas declaraciones parece reflejarse, efectivamente, que se dio un gran paso hacia las normales relaciones Iglesia -Estado en España mediante la concordia de voluntades que se ha conseguido con el desbloqueo psicológico que las conversaciones del ministro en Roma han producido.

(1) Vid. Importantes encuentros del ministro Areilza con el Gobierno italiano y la Santa Sede, cit. en "YA" y pág. cit.

(2) Ibidem.

12. Acuerdo entre la Santa Sede y el Gobierno español, de 28 de julio de 1976, sobre renunciias a la presentación de obispos y fuero eclesiástico(1).

A las once y media de la mañana del día 28 de julio del presente año de 1976 el ministro español de Asuntos Exteriores, don Marcelino Oreja Aguirre y el cardenal Jean Villot firmaron en el Vaticano el primer acuerdo para la revisión del vigente Concordato español de 1953. entre España y la Santa Sede.

Mediante este acuerdo se revisan los artículos del Concordato español vigente relativos al derecho de presentación de obispos y al fuero eclesiástico.

Es importante destacar que este acuerdo ha tenido un arranque inmediato: el proposito del Rey de concordia entre las dos potestades, la Santa Sede y el Estado español, dentro de la libertad, autonomía e independencia de ambas potestades.

Las negociaciones se habían iniciado ya en enero pasado por parte del señor Areilza y el ministro de justicia señor Garrigues. Y el 13 de julio pasado, oído el Consejo del Reino y el Gobierno, el Rey don Juan Carlos I comunicó a su Santidad Pablo VI su intención de no utilizar el privilegio de presentación de obispos y encomendó al Gobierno la instrumentación jurídica de tal propósito dentro del conjunto de las nuevas relaciones del Estado español con la Santa Sede.

Este mensaje fué entregado por el marqués de Mondéjar, jefe de la Casa del Rey, en audiencia pontificia especial(2).

(1) Vid. "YA" del 29 de julio de 1976, pág. 15.

(2) Vid. " El Rey no utilizará el privilegio de presentación de obispos", en "YA " de 16 de julio de 1976, pág. 6 y sig.

El acuerdo firmado en el Vaticano entre el Gobierno español y la Santa Sede el 28 de julio del presente año de 1976, según ya hemos señalado, fué ratificado, por unanimidad, por la Comisión de Asuntos Exteriores de las Cortes Españolas, en su sesión del 17 de agosto de 1976(1).

El canje de los instrumentos de ratificación del acuerdo se produjo el día 19 de agosto pasado, y actuaron en nombre de la Santa Sede el nuncio de Su Santidad en España, arzobispo Luigi Dadaglio y en nombre del Gobierno español lo hizo el ministro de Asuntos Exteriores don Marcelino Oreja(2).

Con el canje de los instrumentos de ratificación el acuerdo entró inmediatamente en vigor.

A partir, pues, de la fecha del 20 de agosto del presente año de 1976 comienza, a nivel jurídico la nueva etapa de relaciones Iglesia - Estado en España y también el período de revisión efectiva del Concordato del 53(3).

El acuerdo comprende un preámbulo y dos artículos con cuatro párrafos cada uno de estos(4).

En el preámbulo de este acuerdo se recogen las materias históricas y doctrinales que aconsejan la revisión del Concordato y se sopesa de forma realista, cómo la Iglesia y el Estado están al servicio del hombre y es el hombre al que deben servir. Y es precisamente ese hombre el que ha cambiado mucho tanto individual como socialmente desde 1953, y tanto en su talento político como religioso.

Parte, en efecto, el preámbulo del proceso de transformación de la sociedad española en los aspectos que a las relaciones entre la Iglesia y el Estado; de los principios doctrinales sentados por el Concilio Vaticano II a los que deben ajustarse estas

(1) Vid. "YA" del 18 - VIII- 76, pág. 10.

(2) Vid. "YA" del 20 - VIII - 76, pág. 17.

(3) Vid. "YA" del 18 - VIII-76, pág. 10.

(4) Vid. Primer acuerdo para la revisión del Consordato firmado en Roma, en "YA" del 29 de julio de 1976, pág. 15.

relaciones; y del derecho a la libertad religiosa recogido ya en la legislación española, como hemos visto, desde 1967, circunstancias todas ellas ciertamente nuevas después de la firma del Concordato de 1953.

En el mismo preámbulo las dos partes se comprometen a emprender el estudio de las materias del Concordato de interés común que en las nuevas circunstancias surgidas después de la firma del Concordato de 27 de agosto de 1953 requieren una nueva reglamentación, con el fin de llegar cuanto antes a la conclusión de acuerdos que sustituyan gradualmente las correspondientes disposiciones del vigente Concordato(1). Y en este sentido según indica también el preámbulo se ha dado prioridad a la renuncia a los privilegios de presentación de obispos y del fuero eclesiástico.

En el artículo I se reconoce que el nombramiento de los obispos es de exclusiva competencia de la Santa Sede. Por otra parte, se señala también que en adelante se notificará el nombre del designado al Gobierno español, por si respecto a él existiesen posibles objeciones concretas de índole política general cuya valoración corresponderá a la prudente consideración de la Santa Sede. Asimismo, se dispone en dicho artículo que si el Gobierno no manifiesta objeciones en 15 días se entenderá que no existen. Caso especial lo constituye el procedimiento para nombrar al vicario general castrense, para el que se procederá, según el texto de este primer artículo, de acuerdo a la confección de una terna de nombres, formada de común acuerdo entre la Nunciatura Apostólica y el Ministerio de Asuntos Exteriores y sometida a la aprobación de la Santa Sede; y el Rey presentará, en el término de quince días, uno de ellos para su nombramiento por el Romano Pontífice(2).

En el artículo II se deroga el privilegio del Fuero Eclesiástico. Antes era necesaria la licencia de la Santa Sede o del ordinario para el emplazamiento judicial de prelados o clérigos; ahora las demandas correspondientes serán notificadas, pero esta notifi-

(1) Vid. "YA" del 29 de julio de 1976, pág. 15.

(2) Igualmente, según palabras del ministro, señor Oreja, se ha convenido con la Santa Sede, dada la peculiaridad de la diócesis de Urgel, la articulación de un procedimiento similar; vid. "YA" 18- - 76, pág. 10.

-cación ni detiene ni interfiere lo más mínimo en el curso del procesamiento, ni supone excepcionalidad de tipo de privilegio.

Por último se reconoce en este mismo artículo II la competencia privativa de los tribunales de la Iglesia en los delitos que violen exclusivamente una ley eclesiástica conforme al Derecho Canónico. Y contra las sentencias de estos tribunales no procederá recurso alguno ante las autoridades civiles.

En efecto, el texto del acuerdo dice así:

Preámbulo: "La Santa Sede y el Gobierno español, a la vista del profundo proceso de transformación que la sociedad española ha experimentado en estos últimos años, aún en lo que concierne a las relaciones entre la comunidad política y las confesiones religiosas y entre la Iglesia católica y el Estado, considerando que el Concilio Vaticano II, a su vez, estableció como principios fundamentales, a los que deben ajustarse las relaciones entre la comunidad política y la Iglesia, tanto la mutua independencia de ambas partes, en su propio campo, cuanto una sana colaboración entre ellas, afirmó la libertad religiosa como derecho de la persona humana, derecho que debe ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad, y enseñó que la libertad de la Iglesia es principio fundamental de las relaciones entre la Iglesia y los poderes públicos y todo el orden civil, dado que el Estado español recogió en sus leyes el derecho de libertad religiosa, fundado en la dignidad de la persona humana (ley de 1 de julio de 1967), y reconoció en su mismo ordenamiento que debe haber normas adecuadas al hecho de que la mayoría del pueblo español profesa la religión católica, juzgan necesario regular mediante acuerdos específicos las materias de interés común que en las nuevas circunstancias surgidas después de la firma del Concordato de 27 de agosto de 1953 requieren una nueva reglamentación; se comprometen, por tanto, a emprender, de común acuerdo, el estudio de estas diversas materias, con el fin de llegar cuanto antes a la conclusión de acuerdos que sustituyan gradualmente las correspondientes disposiciones del vigente Concordato.

Por otra parte, teniendo en cuenta que el libre nombramiento de obispos y la igualdad de todos los ciudadanos frente a la adminis-

-tracción de la justicia tienen prioridad y especial urgencia en la revisión de las disposiciones del vigente Concordato, ambas partes contratantes concluyen , como primer paso de dicha revisión, el siguiente

TEXTO DEL ACUERDO

ARTICULO I

1. "El nombramiento de arzobispos y obispos es de la exclusiva competencia de la Santa Sede.

2. Antes de proceder al nombramiento de arzobispos y obispos residenciales y de coadjutores con derecho a sucesión, la Santa Sede notificará el nombre del designado al Gobierno español, por si respecto a él existiesen posibles objeciones concretas de índole política general, cuya valoración corresponderá a la prudente consideración de la Santa Sede.

Se entenderá que no existen objeciones si el Gobierno no las manifiesta en el término de quince días. Las diligencias correspondientes se mantendrán en secreto por ambas partes.

3. La provisión del Vicario General Castrense se hará mediante la propuesta de una terna de nombres, formada de común acuerdo entre la Nunciatura Apostólica y el Ministerio de Asuntos Exteriores y sometida a la aprobación de la Santa Sede. El Rey presentará, en el término de quince días, uno de ellos para su nombramiento por el Romano Pontífice.

4. Quedan derogados el artículo VII y el párrafo 2º del artículo VIII del vigente Concordato, así como el acuerdo estipulado entre la Santa Sede y el Gobierno español el 7 de junio de 1941.

ARTICULO II

1. Queda derogado el artículo XVI del vigente Concordato.

2. Si un clérigo o religioso es demandado **criminalmente**, la competente autoridad lo notificará a su respectivo ordenario. Si el demandado fuera obispo, o persona a él equiparada en el Derecho Canónico, la notificación se hará a la Santa Sede.

Aunque quedan todavía muchas materias en el actual Concordato español de 1953, que necesitan igualmente ser revisadas, como son, según ya hemos señalado, la dotación del culto y clero, la enseñanza, el matrimonio etc. Sin embargo, es claro que con este primer acuerdo, y sin necesidad de un "marco concordatario" ha quedado abierto el camino para una revisión total del Concordato por el sistema de acuerdos parciales: Ambas partes se comprometen en dicho acuerdo a emprender, de común acuerdo, el estudio de estas materias del Concordato, con el fin de llegar cuanto antes a la conclusión de acuerdos que sustituyan gradualmente las correspondientes disposiciones del vigente Concordato español.

Por su parte, el Gobierno español ha señalado el plazo de dos años , a partir de la fecha de la firma del acuerdo, 28 de julio de 1976, para regular a través de unos acuerdos específicos, los temas pendientes del Concordato de 1953. Se establece , así, por el Gobierno español como fecha límite de vigencia del actual Concordato el 28 de julio de 1978. Asimismo el ministro de Asuntos Exteriores de España señor OREJA AGUIRRE en unas recientes declaraciones declaraba que desde ahora comenzarán a funcionar una serie de comisiones mixtas para regular, con criterios actualizados, la problemática común a la Iglesia y al Estado(1).

Esperemos que las promesas de ambas partes se conviertan pronto en una efectiva realidad y se consiga, así, cuanto antes, la revisión completa revisión del Concordato de 1953, de la forma más adecuada y acorde a los signos de los tiempos y especialmente al derecho de libertad religiosa, tal como nosotros propugnamos en el presente trabajo, para una mayor, para una mayor concordia y sana colaboración de la Iglesia y el Estado en la libertad, la autonomía y la independencia, y el bien de todos los españoles(2).

(1) Vid. "YA", del 29 de julio de 1976, pág. 15.

(2) Vid. "YA", del 18 de agosto de 1976, pág. 10.

3. En ningún caso, los clérigos y los religiosos podrán ser requeridos por los jueces u otras autoridades para dar información sobre personas o materias de que hayan tenido conocimiento por razón de su ministerio.

4. El Estado español reconoce y respeta la competencia privativa de los tribunales de la Iglesia en los delitos que violen exclusivamente una ley eclesiástica conforme al Derecho Canónico. Contra las sentencias de estos tribunales no procederá recurso alguno ante las autoridades civiles.

El presente acuerdo, cuyos textos en lengua española e italiana hacen fe por igual, entrará en vigor en el momento del canje de los instrumentos de ratificación"(1).

En conclusión, pues, después de todo lo expuesto, y a la vista del texto del acuerdo transcrito es evidente que mediante este acuerdo entre la Santa Sede y el Gobierno español se ha revisado dos materias de las más importantes del Concordato de 1953, suprimíendose el privilegio del fuero eclesiástico y el de presentación de obispos.

Con este acuerdo, por tanto, podemos decir que termina una etapa y comienza otra nueva en las relaciones de la Iglesia y el Estado en España.

Este acuerdo como dijo el ministro, señor Oreja en las Cortes, "supone el comienzo de unas relaciones liberadas de unos privilegios que, si eran válidos en los momentos en que fueron concordados, no lo son ya hoy, en un momento en que la Iglesia y el Estado quieren encontrar la concordia en la libertad, la autonomía y la independencia"(2).

Ahora, si que podemos afirmar claramente que hemos entrado en la famosa "recta final" prematuramente vaticinada hace algún tiempo.

(1) Vid. "YA" del 29 de julio de 1976, pág. 15

(2) Vid. "YA" del 18 de agosto de 1976, pág. 10.

CAPITULO II

RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LIBERTAD RELIGIOSA EN LA LEY 44/1967 DE 28 DE JUNIO Y EN LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.

SUMARIO

1. Reconocimiento y desarrollo del derecho de libertad religiosa en la Ley 44/1967, de 28 de junio. 1.1. Concepto. 1.2. Ambiente. 1.3. Objeto. 1.4. Derechos individuales. 1.4.1. Derecho a no discriminación para el trabajo. 1.4.2. Derecho al cumplimiento de los deberes religiosos. 1.4.3. Derecho a no ser obligados a actos de culto oficiales. 1.4.4. Derecho a fórmula de juramento según la propia religión. 1.4.5. Derecho a la no coacción en la forma del matrimonio. 1.4.6. Derecho a la educación de los hijos. 1.4.7. Derecho a recibir sepultura según sus propias creencias. 1.4.8. Derecho a no ser impedido en la enseñanza de la fe y derecho de manifestación religiosa. 1.4.9. Derecho de reunión y de asociación. 1.5. Derechos comunitarios. 1.5. 1. Plano social centrípeto. 1.5.1.1. Personalidad jurídica de las confesiones religiosas. 1.5.1.2. Derecho al culto público. 1.5.1.3. Ministros del culto. 1.5.1.4. Derecho comunitario de enseñanza. 1.5.2. Plano social centrífugo. 1.6. El aspecto de la enseñanza pública. 2º El aspecto de la influencia social. 3º El aspecto de penetración a través de diversas asociaciones. 1.6. Sujeto del derecho civil de libertad religiosa. 1.6.1. Sujeto activo - Plano individual. 1.6.2. Sujeto activo.- Plano social. 1.6.3. Sujeto pasivo. 1.6.4. Casos especiales. 1.6.4.1 Los ateos. 1.6.4.2. Los extranjeros. 1.6.4.3. Las confesiones religiosas supranacionales. 1.7. Límites. 1.7.1. El orden público. 1.7.2. La confesionalidad. 1.7.3. El proselitismo.

Sumario- Cont.

1.8. Competencia administrativa. 1.9. Garantías jurídico-administrativas. 1.9.1. Recurso de alzada. 1.9.2. Recurso de súplica. 1.9.3. Recurso contencioso-administrativo. 1.10. Incurre la Ley en contrafuero?. 2. RECONOCIMIENTO Y DESARROLLO DEL DERECHO DE LIBERTAD RELIGIOSA EN LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. 2.1. El Reglamento para la aplicación de la Ley 44/1967 de 28 de junio. 2.2. Otras disposiciones. 2.2.1. Ordenes de 28 de julio y 12 de diciembre de 1967. 2.2.2. Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 23 de octubre de 1967. 2.2.3. Decreto 1138/1969, de 22 de mayo por el que se modifican determinados artículos del Registros civil, e Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado sobre el expediente previo al matrimonio civil de 22 de marzo de 1974. 2.2.4. Instrucción de la Comisión de Libertad religiosa número 9/1968 de 13 de abril referente a la habilitación de recintos para sepultura de los acatólicos. 2.2.5. Ley 44/1971, de 15 de noviembre sobre reforma del Código penal. 2.2.6. Ley 14/1973, de 19 de diciembre sobre negativa a la prestación del Servicio Militar. 2.2.6.1. Análisis previo sobre la problemática de la objeción y de los objetores de conciencia. 2.2.6.1.1. Significado de la objeción y de los objetores de conciencia. 2.2.6.1.3. Fundamento ontológico. 2.2.6.1.4. Movimiento internacional. 2.2.6.1.5. Los Estados europeos. 2.2.6.1.6. Reconocimiento del Consejo de Europa. 2.2.6.1.7. Posición oficial de la Iglesia Católica ante la objeción de conciencia. 2.2.6.1.8. Número de objetores existentes actualmente en España. 2.2.6.1.9. La situación jurídica de los objetores en España antes de la entrada en vigor de la Ley 14/1973. 2.2.6.1.10. Resolución de la Asamblea del Consejo de Europa relativa a la situación de los objetores de conciencia. en España. 2.2.6.1.11. Posición oficial del Episcopado español ante la objeción de conciencia. 2.2.6.2. Análisis de la Ley 14/1973 de 19 de diciembre y su incidencia en los objetores de conciencia. 2.2.7. Ultimas disposiciones , dictadas en España sobre enseñanza religiosa.

- CAPITULO II -

RECONOCIMIENTO Y DESARROLLO DEL DERECHO DE LIBERTAD
RELIGIOSA EN LA LEY 44/1967 DE 28 DE JUNIO Y EN LAS
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.

El derecho a la libertad religiosa es, como ya hemos indicado al principio del presente estudio, un derecho natural del hombre, ya que se trata de un derecho de la persona fundado en su misma dignidad humana, que, como dice el Concilio Vaticano II en la Declaración "Dignitatis humanae", sobre libertad religiosa, "ha de ser reconocido por el ordenamiento jurídico de la sociedad de forma que llegue a convertirse en un derecho civil"(1).

Hay que recordar, sin embargo, que " este derecho no es la clásica facultad de obrar sino un derecho típico a una inmunidad de coacción del hombre en materia religiosa, a garantizar por el Estado en la sociedad ante los demás hombres y comunidades , incluidos los poderes públicos.

El objeto de este derecho no lo constituyen, por tanto, las creencias en si mismas, sino esa prohibición en la sociedad de que los hombres hagan uso de medios coercitivos para impedir u obligar a otros a su religación con Dios(2). Esa inmunidad comprende una doble vertiente: no ser obligados, en ningún caso , a obrar contra el dictamen de la propia conciencia, y no ser impedido de actuar según ella, salvo cuando se atente

(1) Declaración D.H., n.2 a), en ob. cit. pág. 768.

(2) PEREZ -LLANTADA(Jaime): LA Ley 44/1967 y los derechos individuales de libertad religiosa, en "El fenómeno religioso en España", Madrid, 1972, pág. 307-308.

contra el justo orden público(1).

Es un derecho personal fundamental, intersubjetivo, de preponderante contenido negativo, que el Estado no crea sino que simplemente proclama(2).

El Estado español proclama este derecho como principio constitucional. Recordemos, en efecto el artículo 6º del Fuero de los Españoles, que dice: " La profesión y práctica de la Religión Católica, que es la del Estado español, gozará de la protección oficial.

El Estado asumirá la protección de la libertad religiosa, que será garantizada por una eficaz tutela jurídica que, a la vez salvaguarde la moral y el orden público(3).

Pero el Estado no sólo debe proclamar este derecho, sino que debe positivizarlo y procurar su completo desarrollo.

A ello tienden en España la Ley 44/ 1967, de 28 de junio, regulando el ejercicio del derecho civil a la libertad en materia religiosa y las disposiciones complementarias.

Ahora bien, hasta que punto se reconoce el derecho de libertad religiosa en la Ley 44/ 1967, de 28 de junio, y en las disposiciones complementarias?

A dar una respuesta, a este interrogante, lo más exacta y satisfactoriamente posible va encaminado el presente capítulo.

1. Reconocimiento y desarrollo del derecho de libertad religiosa en la Ley 44/1967, de 28 de junio.

El texto de la Ley 44/1967, de 28 de junio, regulando el ejercicio del derecho civil a la libertad en materia religiosa aparece publicado en el "Boletín Oficial del Estado" de 1 de julio de 1967, tras su aprobación por las Cortes Españolas el 26 de junio(4).

"Su enunciado es, como señala PEREZ LLANTADA, más amplio que su

(1) Declaración D.H., n 2 a), en ob. cit. pág. 768.

(2) PEREZ LLANTADA: Ob. cit. pág. 308.

(3) Fuero de los Españoles, de 117 de julio de 1945, modificado por la Ley Orgánica del Estado de 10 de enero de 1967, en Leyes Fundamentales del Reino (Instituto Editorial Reus), Madrid, 1973 pág. 11.

(4) V. B. O. E. nº 156, de 1 de julio de 1967.

contenido, típicamente estatutario"(1).

La Ley consta de un Preámbulo, cuarenta y un artículos, distribuidos en seis capítulos, y dos disposiciones finales y una transitoria.

El Preambulo dice así: " El precepto de la Ley de rango fundamental de 17 de mayo de 1958, según el cual la doctrina de la Iglesia Católica inspirará en España su legislación, constituye fundamento muy sólido de la presente Ley . "

" Porque, como es bien sabido, el Concilio Vaticano II aprobó, en 7 de diciembre de 1965, su Declaración sobre la libertad religiosa, en cuyo número 2 se dice que el derecho a esta libertad, fundado en la dignidad misma de la persona humana, ha de ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la Sociedad, de forma que llegue a convertirse en un derecho civil . "

"Después de la Declaración del Vaticano II surgió la necesidad de modificar el artículo 6º del Fuero de los Españoles por imperativo del principio fundamental del Estado español de que queda hecho mérito."

"Por eso en la Ley Orgánica del Estado de 10 de enero de 1967 se modifica en la Disposición adicional primera el artículo 6º del Fuero de los Españoles, que queda redactado en los siguientes términos: "La profesión y práctica de la religión católica, que es la del Estado español, gozará de la protección oficial, El Estado asumirá la protección de la libertad religiosa, que será garantizada por una eficaz tutela jurídica que a la vez salvaguarde la moral y el orden público."

" Siendo muy de notar que la nueva redacción había merecido previamente la aprobación de la Santa Sede."

"Reformado el Fuero de los Españoles por la aprobación de la Ley Orgánica del Estado, ha quedado expedito el camino para que en el ordenamiento jurídico de la sociedad española se inserte el derecho civil de libertad religiosa, garantizado por una eficaz tutela jurídica que a la vez salvaguarde la moral, el orden público y el reconocimiento especial que en aquel ordenamiento jurídico se atribuye a la religión católica."

(1) PEREZ LLANTADA : La libertad religiosa en España y el Vaticano II, Madrid, 1974, pág. 311.

" El Preámbulo es claramente indicativo de las dificultades del legislador para plasmar una norma de convivencia bajo el nuevo régimen de confesionalidad - libertad religiosa"(1).

El capítulo I, "Del derecho civil a la libertad religiosa", comprende los artículos 1 y 2, que son fundamentales , en cuanto tratan de concretar lo formulado en el Preámbulo.

En el artículo 1 la Ley reconoce el derecho a la libertad religiosa dentro de sus dos primeros números. Su número 3 va a definir la mediatización del Texto por la confesionalidad católica del Estado, que quedará elevada a límite del ejercicio de este derecho con el juego del artículo 2, que recoge también la defensa del ataque del proselitismo. Con todo ello, la apertura de la Ley está perfectamente definida(2).

El capítulo II recoge los "Derechos individuales de cada ciudadano español creyente, a lo largo de los artículos 3 al 11, y el artículo 12 los derechos de los extranjeros no católicos residentes en España. Se abre este capítulo con el artículo 3, que, de acuerdo con el espíritu de la Declaración Vaticana(3), proclama la igualdad de los ciudadanos ante la Ley, cualquiera que sea su creencia religiosa. Esta igualdad se concreta a lo largo de todo el capítulo en una serie de derechos civiles: en paridad de trabajo, de cumplimiento de los deberes religiosos, de no coacción para la asistencia a los actos de culto y prestación de juramento, de sepultura, de recibir enseñanza religiosa etc .

Se autoriza el matrimonio civil cuando ninguno de los contrayentes sea católico. Se reconoce a la familia su potestad doméstica en la educación de los hijos. Se permiten las publicaciones confesionales y las reuniones con fines religiosos(4).

Y se reconocen también a los extranjeros no católicos residentes o transeúntes en España los mismos derechos que en la misma ,

(1) PEREZ LLANTADA: La libertad religiosa en España y el Vaticano II, cit. pág. 312.

(2) Ibidem.

(3) Declaración "Dignitatis humanae", nº 6 d) en Ob c. p.772.

(4) PEREZ LLANTADA: La libertad religiosa en España...cit.

pág. 313.

Ley 44/1967, se reconocen a los españoles, en cuanto les sea de aplicación.

El capítulo III regula en los artículos 13 al 30 los "Derechos comunitarios". El capítulo se divide en cuatro secciones: la primera se refiere a las "asociaciones confesionales"; la segunda al "culto público", la tercera a los "ministros del culto" y la cuarta a la "enseñanza". El control administrativo rígido de los diversos derechos es la nota dominante de este capítulo, que demuestra como ningún otro que la minoría acatólica no fue consultada para la redacción del Proyecto de Ley, a ella sola dirigido(1).

En la sección primera, los artículos 13, 14 y 15 formalizan el procedimiento, dentro del sistema de Ley especial, para que las Asociaciones religiosas no católicas puedan alcanzar su reconocimiento legal en el campo civil sin merma de la catolicidad del Estado. "En esto difiere del modelo francés, en el que lo que se defiende es precisamente la laicidad del Estado"(2).

Las Asociaciones, según dispone el artículo 13, se regirán por sus Estatutos, una vez aprobados por la Administración en el proceso de su reconocimiento y consiguiente inscripción en el Registro oficial. El artículo 18 las autoriza a poder recibir bienes a título gratuito, que han de invertir para atender sus fines propios. El artículo 19 las autoriza también a anotar en el Registro "Secciones locales"(3).

En la sección segunda, la Ley, en sus artículos 21 a 24, regula el culto público que podrá celebrarse en los templos y lugares autorizados al efecto; fuera de ellos las celebraciones deberán ser comunicadas previamente al Gobierno Civil.

La sección tercera, comprende los artículos 25 al 28 inclusive y se ocupa de los ministros del culto. La Ley exige, en esta sección, que los ministros de los cultos minoritarios para te-

(1) PEREZ LLANTADA: La libertad religiosa...ob. cit. pág. 313.

(2) Ibidem.

(3) Ibidem.

-ner garantizada su función religiosa y gozar de los derechos que en la misma Ley se establecen, tengan que solicitar, a través de su Asociación confesional, la inscripción en el Registro Oficial (artículos 25 y 27); "con ello resulta que la Asociación es responsable y fiadora de los actos de sus ministros y que incluso podrá solicitar la cancelación de la inscripción de éstos"(1).

La sección cuarta regula el derecho de las Asociaciones a establecer Centros para la enseñanza de sus miembros y a abrir Centros especializados para la formación de ministros del culto; en ambos casos, previa autorización del Ministerio de Justicia, según disponen los artículos 29 y 30, que constituyen esta sección.

El capítulo IV comprende los artículos 31 al 33, y recoge en dichos artículos las disposiciones comunes a los dos capítulos anteriores, concretando la forma de aprobar la adscripción o no adscripción a una religión acatólica a los efectos civiles. Señalando el artículo 33 que cualquier cambio de adscripción no afectará a las obligaciones que se hayan contraído en virtud de otra anterior(2).

El capítulo V, constituido por los artículos 34 al 38, establece la competencia administrativa para las cuestiones relacionadas con el derecho civil a la libertad religiosa que se atribuye al Ministerio de Justicia, en el que se crea un órgano dependiente de la Subsecretaría, la Comisión de Libertad religiosa, de composición heterogénea, a la que corresponde el estudio, informe y propuesta de resolución de toda la inmensa gama de cuestiones administrativas, que el minucioso control que la Ley establece ha de multiplicar(3).

El capítulo VI, que comprende los artículos 39 al 41, regula la protección de los derechos, misión típica del Estado." El haz de derechos que conforma el Estatuto de Libertad religiosa de los

(1) PEREZ LLANTADA: La libertad religiosa en España...cit. p. 314.

(2) Ibidem.

(3) Ibidem.

acatólicos queda bajo la salvaguardia de los Tribunales de Justicia ordinarios, según dispone el artículo 39, lo que proclama que la libertad religiosa regulada por la Ley es un auténtico derecho civil(1).

Además de esta fundamental protección civil judicial, se da otra en vía administrativa que corresponde, conforme al artículo 40, al Ministerio de Justicia. Para ello, la Ley establece dos recursos ante la Administración: uno de "alzada" frente a las resoluciones de los gobernadores civiles, y otro de "súplica" para todos los demás casos, impugnando resoluciones del Ministerio de Justicia. Las decisiones que sustancian estos recursos, a cargo del Ministerio de Justicia y del Consejo de Ministros, respectivamente, agotan la vía administrativa y dejan libre la interposición del recurso judicial contencioso-administrativo(2).

La disposición final primera abre ciertamente el paso a una normativa complementaria de menor rango legal, entre las que destaca fundamentalmente la Orden del Ministerio de Justicia de 5 de abril de 1968, auténtico Reglamento para la aplicación de la Ley(3).

La disposición final segunda es derogatoria de las disposiciones contrarias a la Ley de Libertad religiosa y señala el plazo de dos meses para que el Ministerio de Justicia publique el cuadro de normas derogadas.

La disposición transitoria se refiere a la reinscripción de bienes de las Asociaciones confesionales acatólicas que estuvieran inscritos a nombre de personas interpuestas y tendrá su desarrollo en el articulado del Reglamento.

Con estas consideraciones, creemos haber expuesto de forma panorámica el contenido de la Ley de 28 de junio de 1967, cuya finalidad última es traducir en Ley ordinaria la dinámica del binomio "confesionalidad - libertad religiosa", por lo que respecta a este segundo término, pero bajo la fortísima incidencia del primero, y que trata de regular las relaciones socio-jurídicas,

(1) PEREZ LLANTADA: La libertad religiosa en España ... cit., pág. 315.

(2) Ibidem.

(3) Ibidem.

dentro del Estado, de las minorías religiosas con la mayoría católica en sus aspectos civiles (1).

1. 1. Concepto.

La Ley de 28 de junio de 1967, quiere regular el ejercicio de un derecho con raíces en el campo del "ius naturale". Por eso el artículo 1º dispone: "Uno. El Estado español reconoce el derecho a la libertad religiosa fundado en la dignidad de la persona humana y asegura a ésta, con la protección necesaria, la inmunidad de toda coacción en el ejercicio legítimo de tal derecho".

La Ley que comentamos, al reconocer en este artículo el derecho a la libertad religiosa, señalando así ese pertenecer al orden de la justicia, añade que está "fundado en la dignidad de la persona humana", con lo que subraya su valor de derecho natural por encima de toda actuación positiva en cuanto a su esencia, y con una dinámica que vincula al Estado a su reconocimiento y a su garantía, aunque también a su regulación como derecho civil. Esa juridicidad del derecho a la libertad religiosa la sancionan también los artículos 39 al 41 del capítulo VI, que examinaremos más adelante, y que formulan la protección de los derechos; de unos derechos que integran el núcleo de la libertad civil en materia religiosa, a hacer valer por los hombres ante los demás hombres. (2).

Sin embargo, es evidente, que el Texto legal no pretende dar una definición, pues se limita, como dijo FERNÁNDEZ CUESTA, a dar la regulación civil de un derecho, ya definido por el Concilio(3). "Lo que aquí se reconoce - había afirmado también en los debates de la Comisión de las Cortes, REYES MORALES - es el derecho de la persona humano a la libertad religiosa, en los términos de una Declaración conciliar que tenemos que acatar"(4).

(1) PEREZ-LLANTADA: La libertad religiosa ...cit. pág. 316.

(2) Ibidem, pág. 318.

(3) Ibidem. ' .

(4) Ibidem, págs 318- 319.

Asimismo, la Pastoral colectiva del Episcopado español sobre la libertad religiosa, de 1968, al afirmar la compatibilidad de los términos del binomio "confesionalidad - libertad religiosa" o "unidad católica - libertad religiosa", se refiere al concepto de este derecho que precisó el Vaticano II y entiende que es el de la Ley española(1). "Para la Ley, como para la Declaración, se trata de un derecho intersubjetivo y universal; su sujeto activo es toda persona humana en su doble dimensión, individual y social; pero por la especialidad de la Ley, se refiere formalmente sólo a todo no católico. El sujeto pasivo de este derecho civil serán los demás hombres y sus estructuras sociales, especialmente el Estado. La Ley trata de regular la convivencia de sus ciudadanos, sin que se altere por el ejercicio de sus creencias religiosas"(2).

Para configurar el concepto de este derecho civil, el artículo 1º, número 2, contempla su expresión más concreta: "la profesión y práctica privada y pública de cualquier religión", que será garantizada por el Estado dentro de las limitaciones que la propia Ley establece. Dice así en efecto, este artículo en su número 2: "La profesión y práctica privada y pública de cualquier religión será garantizada por el Estado sin otras limitaciones que las establecidas en el artículo 2º de esta Ley". Así pues, positivamente, el objeto del derecho es esa independencia de la vida religiosa, individual y social, y desde un punto de vista negativo, ese excluir cualquier coacción externa que pueda mediatizarla por obra de un hacer humano"(3).

La Ley, en su artículo 2º, número 2 remachará esta interpretación al decir: "Se consideran actos especialmente lesivos de los derechos reconocidos en esta Ley, aquellos que de algún modo supongan coacción física o moral, amenaza, dádiva o promesa, captación engañosa, perturbación de la intimidad personal o familiar y cualquier otra forma ilegítima de persuasión con el fin de ganar adeptos para una determinada creencia o confesión o desviarlos de otra".

(1) PEREZ LLANTADA: La libertad religiosa ... cit. pág. 319.

(2) Ibidem.

(3) Ibidem.

Nos brinda también este artículo otro dato para perfilar el concepto legal del derecho civil a la libertad religiosa, al recogerlo como un núcleo, que a lo largo de la Ley se expande en una serie de derechos concretos cuya vigencia conjunta da la efectividad de su contenido dinámico, cuyo ejercicio cotidiano regula la Ley. Los capítulos II y III están dedicados a concretar esos derechos que integran el núcleo y permiten una distinta matización, en los diversos ordenamientos jurídicos de los Estados, al tipificarlos como derechos civiles de sus ciudadanos y de las comunidades religiosas(1).

1. 2. Ambito.

Lo que la Ley de 28 de junio de 1967 regula es la libertad religiosa en el orden civil: "La profesión y práctica privada y pública de cualquier religión(art. 1,nº 2). Sin embargo el ámbito socio-religioso de aplicabilidad del Texto legal es impreciso, ya que no se trata en principio de una regulación general para todos los españoles, sea cual fuere su creencia religiosa, sino formalmente al menos, de la regulación del ejercicio del derecho civil a la libertad religiosa por parte de los ciudadanos y sus asociaciones confesionales que no profesen la religión católica(2).

Así pues, "la Ley es simplemente el Estatuto de vida religiosa de los acatólicos, pese a la generalidad del enunciado del Texto y de la forma genérica en la expresión de algunos artículos"(3). Pues, la Ley, aunque concebida como general en cuanto tal, se aplica como especial en cuanto formalmente afecta sólo a los creyentes acatólicos. Esto puede ser un defecto de técnica jurídica y quedar sólo en eso, siempre que el régimen especial que se otorga a las confesiones religiosas acatólicas no merme el derecho general que les corresponde dentro de una justicia

(1) PEREZ LLANTADA: La libertad religiosa ... cit. pág.320.

(2) Ibidem.

(3) Ibidem, págs. 320- 321;

fundamentalmente igual para todas ellas e igual a la que disfruta la religión católica en el ordenamiento jurídico español.

Hay que señalar también que la Ley de libertad religiosa recibe una incidencia clave de la confesionalidad católica del Estado. Pues, si a nivel de principios es claro que confesionalidad y libertad religiosa son compatibles plenamente, y de ahí la adecuación perfecta del artículo 6º del Fuero de los Españoles a la Declaración "Dignitatis humanae", son muchas las dificultades para que esa compatibilidad radical no se enrarezca con frecuentes colisiones derivadas del ejercicio cotidiano de los derechos concretos que de aquellos principios se derivan, produciendo efectos socio-religiosos-políticos difíciles de prever(1).

Ciertamente, la amplitud del principio de Libertad religiosa, encerrado en el artículo 6º del Fuero de los Españoles, que pide con su nueva redacción del párrafo segundo, una confesionalidad abierta del Estado, está muy lejos de recogerse en la Ley que comentamos, que lo desarrolla a nivel ordinario. "Por ello, ésta ha de considerarse como algo transitorio, a título de ensayo; un primer paso en la nueva directriz de las relaciones Iglesia-Estado, a encuadrar en ese nuevo tipo de confesionalidad, para instaurar el cual el Estado ha de realizar un gran esfuerzo de adaptación conciliar"(2).

Por otra parte, "examinando el contexto de la Ley, claramente se percibe que se trata de aplicar en concreto el párrafo 2º del artículo 6º del Fuero de los Españoles, no quedando de la generalidad del enunciado de la Ley más que la proclamación como derecho civil de la libertad religiosa de todos los ciudadanos, ya que como de ésta disfrutaban plenamente los católicos, sólo se precisa regular su ejercicio por los no católicos"(3)

La finalidad de la Ley es de tal forma concreta, que el Decreto 1530/1968, de 12 de junio(4), que define la estructura orgánica del Ministerio de Justicia, mantiene la Dirección General

(1) PEREZ LLANTADA: La libertad religiosa...cit. pág. 324.

(2) Ibidem, pág. 325.

(3) Ibidem, pág. 321.

(4) Vid. B.O.E. nº 169, de 15 de junio de 1968.

de Asuntos Eclesiásticos, con las siguientes competencias y atribuciones que señala el artículo 49: " a) Procurar la tutelâ de los derechos públicos subjetivos de la libertad religiosa que puedan corresponder a quienes profesan la Religión Católica, Apostólica y Romana. b) Velar en la esfera propia del Estado, por la defensa de los derechos de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. c) Cuidar del cumplimiento de los principios de catolicidad establecidos en el ordenamiento jurídico del Estado. d) Programar y distribuir los medios materiales para dotación del clero y el ejercicio del Mngisterio y Apostolado de la Iglesia, así como promover la constitución del Patrimonio Eclesiástico, c) Mantener las relaciones del Departamento con la Iglesia Católica"

Para garantizar y controlar el ejercicio del derecho civil de los acatólicos, el propio Decreto orgánico citado, "entre los organismos dependientes", estructura la "Comisión de Libertad religiosa", que creó la Ley de 28 de junio de 1967, y que encuadra en la Subsecretaría del Ministerio(1).

Estos órganos del Ministerio de Justicia , totalmente distintos en sus funciones, corregieran cuanto hemos dicho respecto al ámbito de aplicación de la Ley de Libertad religiosa, anterior al Decreto orgánico comentado (2)

En cuanto al haz de derechos en que se proyecta el derecho núcleo de la libertad religiosa de los acatólicos, la Ley se refiere a la realización del mismo, tanto en el plano individual como en el social(3), aunque en este último, como veremos más adelante, con notoria e indebida restricción,

1. 3. Objeto.

El objeto del derecho de libertad religiosa regulado por la Ley es el reconocido por la Declaración conciliar "Dignitatis humanae", pero con criterio más restringido. Así por ejemplo,

(1) PEREZ-LLANTADA: La libertad religiosa... cit.pág. 321.

(2) Ibidem.

(3) CORRAL: "El ordenamiento jurídico español de libertad religiosa y su valoración objetiva", en "Relaciones de la Iglesia y el Estado" Madrid, 1976, pág. 390 y sigs.

la Ley menciona la protección de la inmunidad de toda coacción que el Estado "asegura" en lugar de la promoción eficaz que el Vaticano demanda; se habla de la libertad de la persona humana y se silencia la de las organizaciones religiosas, y la extensión del derecho a la libertad religiosa se reduce a la profesión y práctica de cualquier religión y no se incluye como en la Declaración toda clase de actividad religiosa, dentro de los límites de un justo orden público, lo que incluye el ejercicio de una libre investigación sirviéndose del diálogo, que se comuniquen con otros en materia religiosa, la enseñanza y la profesión pública, de palabra y por escrito de su fe, derechos ciertamente fundamentales, que se ven indebidamente restringidos, como veremos más adelante y en clara contradicción con las normas del Concilio (1).

Recordemos que el objeto del derecho de libertad religiosa, como señala la Declaración conciliar, comprende dos aspectos: de un lado, la libertad del hombre y de las comunidades religiosas para su religación con el Ser supremo en todos los campos de su manifestación; y de otro, la inmunidad de toda coacción humana (2). Ambos aspectos, positivo y negativo forman el objeto o contenido último de la Ley/1967, reconociendo, garantizando y regulando su ejercicio legítimo por todos los ciudadanos, si bien como ya hemos apuntado con indebidas restricciones en el campo social. Ese objeto queda claro en la Ley en los artículos 1 números 1 y 2; 2; 5, números 2 y 3; y 21, número 1, entre otros (3).

La Ley, tras reconocer en su artículo 1, número 1, el derecho de libertad religiosa como fundado en la dignidad de la persona humana, asegura a todos, con la protección necesaria, "la inmunidad de toda coacción en el ejercicio legítimo de tal derecho".

La función del Estado, en orden a este derecho, deberá comprender, sin embargo, tres aspectos: tutelar la libertad de to-

(1) OREJA (Marcelino): Análisis y desarrollo de la libertad religiosa en España, en Boletín de A.C.N.D.E.P., mayo, 1973, págs. VII y VIII.

(2) Vid. Declaración D.H. nº 2, en Ob. cit. pág. 768.

(3) PEREZ -LLANTADA: La libertad religiosa... cit. pág. 326.

-dos los ciudadanos, garantizando la inmunidad de coacción en la esfera personal y social de lo religioso; esa tutela le obliga a intervenir, cuando fuere necesario proteger la libertad de los demás frente al abuso de algunos, y debe como tal Estado favorecer y facilitar la vida religiosa de todos sus ciudadanos con igualdad jurídica(1). Por eso, respecto a este último aspecto, la Ley, en su artículo 3º, acertadamente dice: " Las creencias religiosas no constituirán motivo de desigualdad de los españoles ante la Ley". Declara, así, la igualdad jurídica respecto a la vida religiosa de todos los ciudadanos. Con ello expresa la faceta positiva, social, del objeto del derecho civil a la libertad religiosa, junto a la negativa de la no coacción.

Ahora bien, "el objeto del derecho a la libertad religiosa , primario, se ha de proyectar y desarrollar para no seguir en el puro orden de los principios, en una serie de derechos civiles que integran aquél y cuya garantía supone el cumplimiento real, en la vida del individuo y de las comunidades religiosas, del ejercicio del derecho civil a la libertad religiosa, proclamado y garantizado por el Estado en su ordenamiento jurídico. Esto lo ha comprendido la Ley española, y, así , tras señalar en el artículo 1, número 2, la garantía por el Estado de la "profesión y práctica privada y pública de cualquier religión", va a concretar los derechos individuales y comunitarios que ello implica para las confesiones no católicas y sus creyentes(2).

Por otra parte, conviene recordar que el derecho de libertad religiosa es parte del bien común, y en el amplio campo de éste forma parte de su núcleo esencial, indispensable para la vida social; es decir, el derecho de libertad religiosa se integra en el campo del orden público, cuya garantía es esencia del quehacer del Estado(3).

El poder civil tiene, pues, derecho a reprimir los abusos so pretexto de libertad religiosa, pero ha de hacerlo conforme a nor-

(1) PEREZ-LLANTADA: La libertad religiosa... cit. pág. 327.

(2) Ibidem, págs. 327-328.

(3) Ibidem, pág. 372; CORRAL: "La libertad religiosa y sus límites: ¿El bien común o el orden público? en " Relaciones de la Iglesia y el Estado" cit. pág. 106.

mas jurídicas de orden público, que estén de acuerdo con el orden moral objetivo(1).

Pero, cómo concreta la Ley española los derechos individuales y comunitarios, en qué se ha de proyectar y desarrollar el objeto primario del derecho de libertad religiosa y qué límites impone a este mismo derecho? Todo ello procuraremos analizarlo en los próximos apartados.

1. 4. Derechos individuales.

La regulación de los derechos que conforman el de libertad religiosa, referentes al plano individual, es ciertamente sencilla. Basta, como dice PEREZ-LLANTADA, ese principio genérico establecido por la Ley en su artículo 1 números 1 y 2(2).

En efecto, pues, este artículo, en sus números 1 y 2, tiene presente preferentemente el plano individual. Su texto, ya citado al analizar el concepto del derecho de libertad religiosa según la misma Ley, precisamente, dispone: "Uno. El Estado español reconoce el derecho a la libertad religiosa fundado en la dignidad de la persona humana y asegura a ésta, con la protección necesaria, la inmunidad de toda coacción en el ejercicio legítimo de tal derecho." "Dos. La profesión y práctica privada y pública de cualquier religión será garantizada por el Estado sin otras limitaciones que las establecidas en el artículo 2º de esta Ley"

Desde este plano individual, por el carácter social del hombre y de la religión, es evidente que el derecho se extenderá no sólo a la vertiente externa del individuo sino también al plano social en toda su varia dimensión, aunque esto, en la Ley que comentamos se admita con demasiada restricción, según comprobaremos al estudiar los derechos comunitarios.

Así pues, tras estos principios del artículo 1, números 1 y 2 que hacen referencia especialmente al plano individual, y tras

(1) PEREZ- LLANTADA: La libertad religiosa...cit. pág. 329.

(2) Ibidem, pág. 328.

señalar los límites del derecho a la libertad religiosa, en sus artículos 1, números 2 y 3 y 2, números 1 y 2; que más adelante estudiaremos, la Ley dispone en su artículo 3, ya comentado, la no discriminación de los ciudadanos por motivos religiosos; y a continuación concreta una serie de derechos individuales, en la siguiente forma:

1. 4. 1. Derecho a no discriminación para el trabajo.

Aparece regulado este derecho, en la Ley, en su artículo 4, número 1, que dice: " Todos los españoles con independencia de sus creencias religiosas, tienen derecho al ejercicio de cualquier trabajo o actividad, así como a desempeñar cargos o funciones públicas según su mérito y capacidad, sin otras excepciones que las establecidas en Leyes Fundamentales o normas concordadas".

Las excepciones establecidas en Leyes Fundamentales, a que se refiere el artículo anterior, practicamente se reducen a dos: la que recoge el artículo 12 de la Ley Orgánica del Estado al señalar que el tutor de las personas reales menores de edad, llamadas a la sucesión o del Rey incapacitado recaerá en personas que profesen la religión católica; y la que, como base de la anterior, formula el artículo 9 de la Ley de Sucesión, en que se establece igual requisito para ser Rey o Regente(1).

Pero la confesionalidad con base socio-religiosa del Estado puede justificar, por ser la Iglesia católica supermayoritaria en la nación, esas excepciones, que establecen las Leyes Fundamentales(2).

En cuanto a las excepciones por normas concordadas, a las que tambien alude , como hemos visto el artículo 4 de la Ley, y que pudieran montarse sobre el contenido de los artículos XXVI y XXVII del Concordato vigente, respecto a la enseñanza de la religión católica como obligatoria y a los requisitos que para impartirla han de reunirlos decentes, necesariamente han de ser

(1) Vid. Decreto 779/1967, de 20 de abril, B. O. del E. nº 95, de 21 de abril de 1967.

(2) PEREZ -LLANTADA: La libertad religiosa.. cit. pág. 330.

revisadas, según ya hemos expuesto al analizar el contenido de la revisión del Concordato.

1. 4. 2. Derecho al cumplimiento de los deberes religiosos .

La Ley 44/1967, en su artículo 5, número 1, regula lo referente al cumplimiento , por todos los ciudadanos de los deberes religiosos. Para ello, dispone que "las instituciones, entidades o empresas de cualquier índole, públicas o privadas, deberán adoptar, sin perjuicio de la disciplina general y de las disposiciones laborales en vigor, las medidas que permitan a quienes formen parte de las mismas o dependan de ellas, cumplir normal y voluntariamente sus deberes religiosos."

"La disposición, por el momento y en cuanto a los acatólicos, tiene un marcado carácter de mera declaración de principios, que está precisando un desarrollo reglamentario en disposiciones laborales y de la función pública, para lograr efectividad"(1), pues el Estado español , por razón de su confesionalidad, no ha adoptado el criterio de otras naciones de más amplia base religiosa pluralista, donde las festividades religiosas son simples festividades laborales, sin más finalidad que dar a las personas el necesario descanso. Sin embargo es evidente que el Estado español al adoptar esta posición no hace discriminación entre la mayoría católica y las minorías de otras confesiones, para todas será día de descanso laboral(2).

Ahora bien, así como para los católicos , el Estado español tiene cumplida su misión de favorecer el valor religioso por medio de la Ley de descanso dominical de 13 de julio de 1940(3), debería proporcionar también a los acatólicos una Ley paralela, en la cual las festividades católicas quedarían para ellos como simples días de descanso laboral, en los que incluso, podrían re-

(1) PEREZ-LLANTADA: La Ley 44/1967....^{en} ob. cit. pág. 316.

(2) Ibidem y PEREZ -LLANTADA: La libertad religiosa..cit. pág. 331.

(3) Vid. B.O. del E. de 18 - 7- 40.

-cuperar el tiempo que en otros se les concediese para el cumplimiento de los deberes religiosos que su fe les imponga(1).

1.4. 3. Derecho a no ser obligados a actos de culto oficiales.

Este derecho lo regula la Ley en el artículo 5, número 2, al disponer que los acatólicos, incorporados a las Fuerzas Armadas o internados en establecimientos penitenciarios, sean relevados de la asistencia obligatoria a los actos de culto católico, siempre que hagan constar a su ingreso en las citadas instituciones la acatolicidad de sus creencias, "salvo que trate de actos de servicio"; "expresión ésta, dice con razón PEREZ-LLANTADA, de gran ambigüedad, por lo que precisará de una adecuada interpretación legal y jurisprudencial que perfile su contenido y extensión, ya que el legislador no se sintió preocupado por tipificarla"(2).

Por otra parte, podríamos preguntarnos, con OREJA(3), ante la desafortunada frase "que se trate de actos de servicio" y que fue incorporada en el debate de la Comisión de Leyes Fundamentales, donde se discutió el proyecto de ley, a ver qué asistencia obligatoria - única que puede ser impuesta - a actos del culto católico se puede dar en las Fuerzas Armadas que no sea en actos de servicio. Así pues, "este artículo, lejos de no obligar a nadie a obrar contra su conciencia, como dice el Concilio y como exige el derecho de libertad religiosa, fuerza a los no católicos a obrar contra su conciencia, realizando actos y ceremonias contrarias a su fe"(4).

Por todo ello, creemos, con PEREZ -LLANTADA, que si no se quiere desvirtuar el espíritu de una auténtica libertad

(1) PEREZ -LLANTADA: La Ley 44/1967..., en Ob.cit. pág. 316-317.

(2) Ibidem, pág. 317; y "La libertad religiosa,...cit.pág. 331.

(3) OREJA: Analisis y desarrollo de la libertad religiosa... en Boletín cit. pág. VIII.

(4) Ibidem.

religiosa, la exención debe abarcar todos aquellos actos que supongan participación activa - aunque de hecho pueda convertirse en individualmente pasiva- en una ceremonia de culto católico, que haya sido mandada(1).

1.4. 4. Derecho a fórmula de juramento según la propia religión.

La Ley , tiene presente este derecho, y , así, en su artículo 5, número 3 dispone: " Cuando por imperativo legal se requiera la prestación de juramento, éste será prestado por los no católicos en forma compatible con sus convicciones en materia religiosa, mediante la fórmula que se establezca y con idéntica fuerza de obligar".

Este artículo, parece modificar el criterio de la Ley de 24 de diciembre de 1910 (2), que permitía sustituir , con igualdad de efectos jurídicos, el "juramento" por la simple "promesa", basada en el honor de la persona, prefiriendo aquél, en cuanto añade a la posible obligación jurídica - idéntica para ambos - un deber moral de conciencia en garantía de la verdad de la declaración o actuación prestada. Sigue vigente , por ello, el artículo 434 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 14 de enero de 1882(3) - auténtico pionero - que tras indicar que "el juramento se prestará en nombre de Dios" , añade que los testigos lo harán con arreglo a su religión"(4).

Así pues la Ley vela por esa no coacción en materia del juramento exigido por imperativo legal:

Sin embargo, es evidente que el juramento obliga en conciencia, hace referencia al fuero interno, y el Estado no puede controlar este, pues, cae realmente fuera de la competencia del Estado.

Por ello, la promesa basada en el honor de la persona es la que

(1) PEREZ -LLANTADA: La libertad religiosa...cit. pág. 332.

(2) Vid. Gaceta, de 25- 11- 1910.

(3) Vid. Gaceta, de 19-9-a 10-10-1882.

(4) PEREZ-LLANTADA: La libertad religiosa,... cit. pág.332.

debe exigirse no sólo para el caso de los ateos, única posible, sino incluso para los creyentes, católicos y acatólicos; todo lo cual viene exigido además por el auténtico reconocimiento del derecho de libertad religiosa, que reclama el más profundo respeto para la conciencia del hombre.

1. 4. 5. Derecho a la no coacción en la forma del matrimonio.

Este derecho lo regula la Ley en el artículo 6, números 1 y dos.

Conforme a lo dispuesto en el número 1, la Ley autoriza a los que no profesen la religión católica el matrimonio civil, cuando contraen entre sí, respetando la celebración de los rites propios de las distintas confesiones, que se pueden celebrar antes e después. Con ello la legislación española ha elegido una regulación de tipo intermedio entre la legislación italiana, que reconoce expresamente al matrimonio religioso plenos efectos civiles desde el momento en que se le haga saber la celebración al Estado, y la legislación francesa, belga o alemana, que le desconoce civilmente, considerando totalmente ajena al Estado la ceremonia religiosa (1).

La Ley exceptúa a los católicos de ese criterio amplio por imperativo de los artículos 42 y 83, número 4 del Código Civil.

Sin embargo, no se ve porqué haya de excluir de él a la pareja en la que una parte profese la religión católica. El poder civil ejerce de esta manera una coacción indebida en el contrayente católico, que puede tener sus motivos - concretamente que el contrayente no católico no admita sujetarse a las actuales normas católicas sobre matrimonios mixtos - para recurrir al matrimonio civil. Su decisión será siempre cuestión de su conciencia interna, o interna de la Iglesia Católica" (2).

Y respecto al contenido del número 2 de dicho artículo 6, hay

(1) PEREZ -LLANTADA: La libertad religiosa...cit. págs.332-333.

(2) MUNOZ PALACIOS(Ramón):El proyecto de Ley sobre libertad religiosa, en Rev. Cuadernos para el diálogo, nº 43, abril, 1967,pág.13.

que reconocer que la discriminación es más efectiva, al disponer que "quienes hubieran sido ordenados in sacris o estén ligados con voto **solemne** de castidad dentro de la Iglesia católica no podrán contraer matrimonio sin dispensa canónica, conforme a lo dispuesto en el artículo 83 , número 4 del Código civil.

" La falta de esta dispensa , como señala MUÑOZ PALACIOS , no debió traducirse por la Ley como impedimento del matrimonio, ya que el aceptarlo como tal supone hacer de una prohibición religiosa un impedimento civil, lo que no se justifica aún teniendo en cuenta la vigencia en España del **Derecho Canónico** (Ley eclesiástica, pero en virtud del Concordato Ley civil), ya que la prohibición implica violencia de la conciencia de la persona y de su libertad. El Estado **debe** considerar la no concesión de una dispensa por la Iglesia como asunto interno de ella, ajeno a él"(1).

Por todo ello, es claro que el actual texto legal referente a la regulación del matrimonio debe ser cuanto antes modificado y ello como una exigencia del derecho de libertad religiosa que exige para los contrayentes plena libertad para contraer matrimonio según el dictado de su conciencia.

Quiere esto decir, que la situación jurídica actual referente al matrimonio ~~debe~~ ser sustituida o por un sistema de matrimonio civil obligatorio que respete la libertad religiosa de los ciudadanos para celebrar antes o después del matrimonio civil los ritos propios de su confesión religiosa o por el sistema de matrimonio doble y optativo que indudablemente nos parece el más adecuado para España, y en todo caso el más respetuoso con el derecho de libertad religiosa.

Igualmente, debe suprimirse de la Ley toda discriminación por motivos religiosos, para la celebración del matrimonio.

Consecuentemente, debe ser revisado este artículo de la Ley , según ya hemos apuntado, pero ello exige revisar previamente el apartado C del Protocolo final del actual Concordato en relación con el artículo XXIII y consecuentemente también los artículos 42 y 83-número 4 del Código civil, pues son estos preceptos en los que se fundamenta el texto de la Ley en su regulación del matrimonio.

(1) MUÑOZ PALACIOS: Ob. y pág. citda.

1.4. 6. Derecho a la educación de los hijos.

La Ley regula el derecho a la educación de los hijos , respetando la potestad doméstica de los padres. Es este un derecho civil que la Ley recoge en el artículo 7, números 1 y 2, diciendo: " El Estado reconoce a la familia el derecho de ordenar libremente su vida religiosa, bajo la dirección de los padres, y a éstos la facultad de determinar según sus propias convicciones la educación religiosa que se ha de dar a sus hijos".

" Se reconoce asimismo el derecho de los padres a elegir libremente los centros de enseñanza y los demás medios de formación para sus hijos".

Los padres suplen , de esta forma , la falta de capacidad de sus hijos para actuar por sí libre y responsablemente en esta materia; esta facultad la retendrán, por consiguiente , hasta tanto que sus hijos lleguen a tener la normal capacidad de obrar, por haber alcanzado el total grado de discernimiento y de responsabilidad que el ejercicio de todo derecho exige y que se dará legalmente con su emancipación (1).

Para completar esta regulación , dadas las diversas situaciones y la duración en nuestro Derecho de la "patria potestad", el número 3 del artículo 7 de la Ley señala que "los alumnos de los centros docentes no estarán obligados a recibir enseñanza de una religión que no profesen, para lo cual habrán de solicitarlo los padres o tutores si aquellos no estuvieren emancipados legalmente"

Esto lo estatúa ya el artículo XXVII del actual Concordato, según ya hemos visto al analizar el contenido de revisión de este respecto a la enseñanza.

Por su parte el artículo 4, número 2, de la misma Ley obliga a que la enseñanza de la religión haya de "ser impartida en todo caso por quienes profesen la creencia de que se trate".

Y finaliza por último el artículo 7 otorgando en su número 4

(1) En cuanto a la patria potestad y educación religiosa de los hijos es importante el artículo de SANCHO REBULLIDA: "Patria potestad y educación religiosa de los hijos", en Rev. de la Facultad de Derecho de la Univ. de Navarra, VII-XII, 73; vid. también P. LLANTADA: La Ley 44/1967 art. cit. en o.h.c., p. 341.

un derecho especial a favor de la Iglesia católica, al decir que "la enseñanza en los centros del Estado se ajustará a los principios del dogma y de la moral de la Iglesia Católica".

Es evidente que la exclusividad de la norma es excesiva, pues si en un centro del Estado hay un número suficiente de alumnos no católicos, el Estado debe proporcionarles enseñanza religiosa conforme a sus creencias, "dado el principio de igualdad jurídica de todos los ciudadanos que acertadamente la Ley proclama y para mantener el cual no sería bastante la no obligatoriedad de asistencia a las clases de religión católica; lo que por otra parte supone lógicamente la exención de sufrir examen de esa materia"(1).

El texto de la Ley es realmente insuficiente en cuanto al reconocimiento y regulación del derecho a la enseñanza y formación religiosa.

En efecto el texto legal no tiene en cuenta, como hemos indicado, el derecho que tienen los que no profesen la Religión Católica a recibir enseñanza, conforme a sus creencias, en los Centros de enseñanza del Estado cuando fueren en número suficiente y así lo reclamen. Tampoco tiene en cuenta la Ley que quienes hubiesen quedado exentos de recibir enseñanza religiosa deberán recibir formación de moral natural o de deontología profesional.

Consecuentemente, debe ser revisado dicho texto legal con el fin de conseguir un adecuado y pleno reconocimiento del derecho de enseñanza y formación religiosa.(2).

1. 4. 7. Derecho a recibir sepultura según sus propias creencias.

Se halla regulado este derecho por la Ley en su artículo 8, que muy acertadamente dispone: " Todos los españoles tiene derecho a recibir sepultura conforme a sus creencias religiosas. Se tendrán en cuenta sus disposiciones, si las hubiere, siempre que

(1) PEREZ LLANTADA: LA libertad religiosa...cit. pág. 335.

(2) Vid. la revisión de la enseñanza religiosa en el Concordato en este trabajo; vid. también SANCHO REBULLIDA(Francisco):

"Patria potestad y educación religiosa de los hijos", en Revista de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra, (IUS CANONICUM), julio, diciembre. 1965, vol V, fasc.II, pág. 463-473.

sean compatibles con el orden público y las normas sanitarias vigentes"(número 1).

Para llevar a la práctica este derecho el mismo artículo señala que " las asociaciones confesionales no católicas podrán solicitar la adquisición y habilitación de cementerios propios en aquellos municipios donde tengan una sección local anotada en el Registro" oficial del Ministerio de Justicia"(número 2). "En los cementerios municipales se habilitará , cuando sea necesario, un recinto adecuado para que los no católicos puedan recibir sepultura digna conforme a sus convicciones en materia religiosa"(número 3).

1. 4. 8. Derecho a no ser impedido en la enseñanza de la fe y derecho de manifestación.

Aunque se trata de un derecho más propio de las Confesiones religiosas que de los individuos, la Ley lo reconoce como derecho de aquéllas y de éstos, y así en su artículo 9 número 1 establece que "la libertad religiosa ampara el derecho de los individuos y de las asociaciones confesionales legalmente reconocidas a no ser impedidos en la enseñanza, de palabra y por escrito, de su fe..." ; pero la protección social acusada de este derecho hace que caiga de lleno bajo los límites que se establecen en el artículo 2 de la Ley(1).

"Sin embargo, superando la petición del sector tradicional de que ese derecho de enseñanza quedase restringido a adoctrinar a sus correligionarios, el texto permite que se extienda a cualquier persona, lo que supone perfilar adecuadamente el derecho de propaganda personalmente ejercido por los creyentes"(2).

Esto es exigido por la naturaleza social del hombre y de la propia religión. Y así el mismo Concilio Vaticano II, en su Declaración "Dignitatis humanae", número 3,c) señala que " la misma naturaleza social del hombre exige que éste manifieste externamente

(1) PEREZ -LLANTADA: La libertad religiosa... cit. pág. 335.

(2) PEREZ-LLANTADA : La Ley 44/1967..... cit. pág. 332.

los actos internos de religión, que se comunique con los demás en lo tocante a la religión, que profese su religión en forma comunitaria"; y añade que en su número 4 d) que " las comunidades religiosas tienen también derecho a no ser impedidas en la enseñanza y testimonio públicos de su fe, de palabra o por escrito. Pero en la divulgación de la fe religiosa y en la introducción de costumbres hay que abstenerse siempre de cualquier clase de actos que puedan tener saber a coacción o a persuasión inhonesta o menos recta, sobre todo cuando se trata de personas rudas o necesitadas. Tal comportamiento debe considerarse como abuso del derecho propio y lesión del derecho ajeno"(1).

Ciertamente hay que considerar el derecho de propaganda como parte inseparable del derecho de libertad religiosa. Sin embargo, este derecho a ejercitar tanto por los individuos como por las comunidades religiosas, debe ser distinguido de todo abuso de proselitismo tomada esta expresión en sentido peyorativo. Este abuso se deberá evitar siempre, como acertadamente señala la Declaración vaticana en su número 4 d) anteriormente citada.

El número 2 del artículo 9 permite como medio lícito para esa propaganda religiosa, la difusión de las publicaciones confesionales no católicas que se editen con arreglo a la Ley de Prensa e Imprenta y demás disposiciones vigentes, y las que legalmente se importen del extranjero, en la medida en que no excedan los límites del artículo 2 de la propia Ley de Libertad religiosa.

Este artículo que comentamos, supone evidentemente una posición mucho más restringida que la que disfrutaban la propaganda y las publicaciones católicas, ya que éstas gozan de una mayor libertad al amparo de la disposición final segunda de la Ley de Prensa e Imprenta, de 18 de marzo de 1966, lo que tiene apoyo indudable en esa base socio-religiosa de la nación, continuamente ponderada, muy lógicamente, por el legislador, pero que no debe impedir el disfrute de proporcionales derechos iguales para los

(1) D. H., número 4 d) en Vaticano II cit. pág. 771.

acatólicos(1).

Por otra parte, es evidente que el problema del ejercicio del derecho de propaganda se ve acrecentado por la contradicción que como ya hemos visto se da entre el artículo 6 de un lado, y los artículos 33 y 36, de otro, todos ellos del Fuero de los Españoles, en cuanto éstos dos últimos no fueron modificados por la Ley Orgánica del Estado. "Esta contradicción supone aguda espada de Damocles pendiente sobre toda actividad expansiva de las asociaciones confesionales no católicas y de sus miembros, que puede ser tachada legalmente de atentar a la unidad espiritual de la nación"(2).

Por todo ello se hace necesario y urgente, como ya hemos indicado al analizar la unidad espiritual de España como límite del derecho a la libertad religiosa, la revisión de esos artículos que dan lugar a dicha contradicción.

1.4. 9. Derecho de reunión y de asociación.

La Ley dedica los artículos 10 y 11 a regular este derecho de reunión y de asociación.

En su artículo 10, la Ley dispone: " El derecho de reunión y asociación con fines religiosos se ejercerá por los españoles no católicos de acuerdo con lo establecido en la presente Ley".

Ambos derechos, de posible ejercicio individual, son típicamente sociales o comunitarios, aunque el artículo 11, que concreta el derecho de reunión, se encuadra por la Ley, en el capítulo II, que especifica los derechos individuales que venimos analizando(2).

Este artículo 11 establece: " Uno. El derecho de reunión a que se refiere el artículo anterior, podrá ejercitarse sin necesidad de previa autorización gubernativa, en los lugares dedicados al culto, en los recintos correspondientes de los cementerios con ocasión de los entierros y en los locales debidamente autorizados

(1) Vid. B.O. E. de 19- 3- 66.

(2) PEREZ-LLANTADA: La libertad religiosa... cit. pág. 336.

de las asociaciones confesionales no católicas".

"Des. En los demás casos , para las reuniones confesionales no católicas será necesaria la previa autorización del Gobernador civil de la provincia, que la concederá cuando la petición esté justificada por su finalidad religiosa, haya sido formulada por la Asociación confesional en el plazo y forma que reglamentariamente se determine y no contradiga las exigencias del orden público. Todo el texto de este artículo tiene claramente un espíritu restrictivo, que se manifiesta especialmente en la autorización de aquellas reuniones que salen fuera de los recintos confesionales autorizados, a pesar de la formulación positiva del párrafo, que trata de quitar la impresión de acto discrecional gubernativo, al afirmar que, formulada la petición de autorización , el gobernador civil " la concederá". Pero lo cierto es que ha de justificarse, según el citado número 2, la finalidad religiosa y además es necesario que " no contradiga las exigencias del orden público". "Ambas expresiones son - dice PEREZ LLANTADA - lo suficientemente amplias para que quede un ancho campo discrecional a la Administración del Estado. Esta prudencia del legislador es prueba de que se contempla en el artículo, más que el derecho civil individual de poder asistir, como un miembro más, a una reunión, el derecho comunitario de poder celebrarse legítimamente ésta con concurrencia de muchos"(1).

Por nuestra parte creemos que las expresiones del artículo 11 son amplias , si , pero demasiado amplias, proporcionando así un campo discrecional demasiado ancho a la Administración.

1. 5. Derechos comunitarios.

"La libertad religiosa no tendría sentido si los hombres no pudieran realizar con actos externos en su vida privada, lo mismo que en la social y pública, los dictados de su conciencia; lo mismo que si las personas se vieran privadas de constituir grupos

(1) PEREZ-LLANTADA: La libertad religiosa ... cit. pág. 337.

religiosos para dar culto al Ser supremo con actos externos y sociales y para llevar dentro de ellas vida religiosa"(1).

Por ello, la Declaración "Dignitatis humanae", en su 4, claramente dice: "La libertad e inmunidad de coacción en materia religiosa que compete a las personas individualmente consideradas, ha de serles reconocida también cuando actúan en común. Porque las comunidades religiosas son exigidas por la naturaleza social tanto del hombre como de la religión misma.

A estas comunidades, con tal que no se violen las justas exigencias del orden público, se les debe por derecho la inmunidad para regirse por sus propias normas, para honrar a la Divinidad con culto público, para ayudar a sus miembros en el ejercicio de la vida religiosa y sostenerles mediante la doctrina; así como para promover instituciones en las que colaboren los miembros con el fin de ordenar la propia vida según sus principios religiosos"(2).

Sin embargo, al pasar el sujeto de los derechos civiles derivados del de libertad religiosa y que integran su contenido, del individuo a la persona jurídica, la regulación de su ejercicio por la Ley se hace ya más compleja; y esta complejidad aumenta especialmente porque "esas personas jurídicas, esas comunidades religiosas no sólo actúan sobre sus propios miembros de cara a facilitar su fin religioso natural y sobrenatural, sino que, creyéndose en posesión de la Verdad, tratan de extenderla y propagarla fuera de su círculo de creyentes, incluso saltando las propias fronteras del Estado"(3).

(1) (1 R.O.) Sacrosanctum Oecumenicum Concilium Vaticanum II, Relatio super Schema decreti de Oecumenismo. Caput. V: De libertate religiosa. A.J. DE SMEDT, Ep. Brugensis relatore. Typis Poliglottis Vaticane Romae, 1963, págs. 27-36, cit. per PEREZ-LLANTADA: La libertad religiosa... cit. pág. 338.

(2) D. H. nº 4, en Vaticano II.. cit. pág. 770.

(3) PEREZ-LLANTADA: La libertad religiosa...cit. pág. 337.

Por ello, se hace necesario, para estudiar los derechos comunitarios que encierra la libertad religiosa distinguir dos planos: el plano social centrípeto y el plano social centrífugo.

1. 5. 1. Plano social centrípeto.

La regulación de los derechos comunitarios que encierra la libertad religiosa en el plano social centrípeto se abre en la Ley con el artículo 11, número 1 que contempla el caso de reuniones celebradas en lugares dedicados al culto, en los recintos correspondientes de los cementerios con ocasión de los entierros y en los locales debidamente autorizados de las asociaciones confesionales no católicas; para todos ellos no habrá necesidad de previa autorización gubernativa, tanto para convocar y realizar la reunión como para asistir a ella. Hasta aquí nos parece correcta la redacción de este artículo y de acuerdo con el derecho de libertad religiosa. Sin embargo, no podemos decir lo mismo de la redacción del número 2 del mismo artículo, que regula el ejercicio de ese derecho a la libertad de reunión en materia religiosa para el resto de los casos en que esas asambleas religiosas no se celebren en los citados lugares habituales; ya que para ellas establece la necesidad de previa autorización gubernativa, con lo que es evidente que se establece un excesivo control administrativo.

Frente a esas restricciones, por el contrario, la Iglesia católica tiene sus reuniones libres de ese control, lo que supone gozar de un derecho especial; sin embargo hay que reconocer que también las demás confesiones deberán gozar de esa libertad de reunión, la cual, por otra parte, sólo deberá ser limitada por las justas exigencias del orden público.

1. 5. 1. 1. Personalidad jurídica de las confesiones religiosas.

" En el plano social, con proyección centrípeta y centrífuga y derivado de los derechos de asociación y de reunión, que forman

parte vital del núcleo del derecho a la libertad religiosa, surge el problema capital de la personalidad jurídica de las confesiones religiosas y de sus asociaciones, que afecta decididamente al Estado, que debe reconocer y regular sus relaciones civiles con él y con las demás instituciones de otras confesiones religiosas"(1).

Aherabien, para el reconocimiento civil y consiguiente nacimiento de la personalidad jurídica de estas confesiones y de sus asociaciones, la Ley regula minuciosamente los requisitos a cumplir.

Así, el artículo 13, número 1 de la Ley dispone: " El reconocimiento legal en España de las confesiones religiosas no católicas podrá solicitarse mediante su constitución en asociaciones confesionales con arreglo al régimen establecido en la presente Ley".

Quedan por tanto, las Asociaciones confesionales no católicas fuera del régimen legal de las Asociaciones civiles establecidas por la Ley de 24 de diciembre de 1964, y se rigen por la nueva regulación del texto de libertad religiosa.

El número 2 del mismo artículo establece "que este reconocimiento tiene por objeto permitir y garantizar a las Asociaciones confesionales no católicas el ejercicio de las actividades que les son propias".

"Dichas Asociaciones confesionales no católicas - señala también el número 3 de este artículo - se regirán por sus propios Estatutos, en cuanto no se opongan a lo establecido en esta Ley".

Así pues, una vez reconocidas legalmente por el Estado, se procede a su inscripción en el Registro "ad hoc", y precisamente mediante ésta adquirirán personalidad jurídica, según dispone el artículo 14, que dice: "Las asociaciones confesionales no católicas adquirirán personalidad jurídica mediante su inscripción en el Registro de asociaciones del Ministerio de Justicia".

Esta inscripción tiene por lo tanto un carácter constitutivo para la vida civil de la Asociación, semejante como dice PEREZ-LLANTADA, al que regula la Ley para las Sociedades Anónimas, aunque con una diferencia importante, pues la inscripción es para las

(1) PEREZ LLANTADA: La libertad religiosa...cit.pág. 340.

Asociaciones confesionales no católicas algo que, automáticamente, realiza la Administración del Estado tras su reconocimiento, sin que se dé solución de continuidad entre uno y otro acto administrativo(1).

El artículo 15 enumera los trámites para el reconocimiento y consiguiente inscripción registral; dice así: " Uno. La petición de reconocimiento de una asociación confesional no católica deberá ser formulada ante el Ministerio de Justicia. Dos. Para el reconocimiento y consiguiente inscripción de una asociación confesional no católica en el Registro de asociaciones confesionales no católicas y de ministros de los cultos no católicos en España, que se instituirá en el Ministerio de Justicia, deberán acreditarse los extremos siguientes:

- a) Confesión religiosa a la que pertenece.
- b) Denominación de la asociación que se constituye.
- c) Domicilio social.
- d) Personas residentes en España que la representen, con expresión de su nacionalidad y circunstancias personales. Tres de ellas, como mínimo, deberán tener la nacionalidad española.
- e) Estatutos en los que se determinen con precisión sus fines, órganos rectores y esquema de su organización.
- f) Patrimonio inicial de constitución, bienes inmuebles y recursos económicos previstos.

Tres. Cualquier alteración de las circunstancias expresadas en el número 2 de este artículo deberá ser comunicada al Ministerio de Justicia a los efectos que procedan. Cuatro. El reconocimiento e inscripción en el Registro sólo podrán ser denegados cuando no se acrediten los extremos exigidos o se vulnere alguno de los preceptos de esta Ley". Es evidente, que " este precepto supone una garantía para las propias confesiones religiosas en cuanto saben que, cumplidos los requisitos, serán inscritas sus Asociaciones

(1) PEREZ - LLANTADA: La libertad religiosa... cit. págs. 340-341.

-ciones, logrando su personalidad jurídica civil, y saben también que para cumplirlos sólo han de atender a la Ley, que encierra su normativa especial de vida civil. Para el Estado, el precepto supone también que, antes de reconocer las Asociaciones y dotarlas de personalidad que las haga capaces de derechos ante él, puede controlar que, especialmente sus Estatutos, en que se contiene el régimen interno o doméstico, independiente, en nada se oponen a los preceptos legales. El Estado, pues, al reconocer la Asociación reconoce y aprueba sus Estatutos"(1).

Sin embargo, hay que reconocer que el espíritu restrictivo de la Ley se muestra de forma especial en los artículos que acabamos de examinar y que hacen referencia al reconocimiento legal y consiguiente inscripción de las Asociaciones en el correspondiente Registro, como ya hemos visto...; ya que en los mismos, como hemos podido comprobar, se hace depender la existencia de las Confesiones religiosas, que según hemos señalado están exigidas por la naturaleza social del hombre y de la misma religión, del reconocimiento legal y de su consiguiente inscripción en un registro. " En otras palabras, que sin un reconocimiento, que el Estado puede conceder, o denegar, las confesiones religiosas no católicas no tienen ningún derecho ni ninguna libertad"(2). Esto ciertamente nos parece un abuso de control administrativo, pues como indica la Declaración conciliar, el Estado excede sus límites si pretende dirigir o impedir las actividades propias de las asociaciones confesionales(3).

Este excesivo control administrativo de las Confesiones religiosas no católicas, se muestra también en los múltiples requisitos y formalidades que exige la Ley a estas Confesiones religiosas para su vida civil, como son: llevar un registro de todos sus miembros y unos libros de contabilidad que, según el artículo 17 de esta misma Ley "serán originariamente habilitados y anualmente sellados por la Autoridad administrativa competente", aunque para ser exami-

(1) PEREZ LLANTADA: La libertad religiosa... cit. págs. 341-342.

(2) OREJA (Marcelino): Analisis y desarrollo de la libertad religiosa... en Boletín cit. pág. VIII.

(3) D. H. nº nº 4, en Vaticano II., cit. pág. 770.

-nados contra la voluntad de los órganos de gobierno de la Asociación precisará por parte de la Autoridad gubernativa proveerse del oportuno mandamiento judicial.

El espíritu restrictivo de la Ley se advierte también en el artículo 18 especialmente en sus números 2 y 3. El artículo dice así: " Uno. Las asociaciones confesionales no católicas podrán recibir bienes a título gratuito y organizar colectas entre sus miembros, siempre que los bienes y recursos obtenidos se contabilicen en los libros y queden afectos a los fines estatutarios de la asociación. Dos. A tal efecto, las citadas asociaciones deberán comunicar al Ministerio de Justicia, con la periodicidad que reglamentariamente se determine, las donaciones que reciban y su destino, y presentar anualmente a dicho Departamento su presupuesto de gastos e ingresos y el balance que refleje su situación económica. Al cierre de cada ejercicio presentarán asimismo la liquidación del presupuesto. Tres. Si el Ministerio de Justicia considera que el destino dado a los bienes no coincide con el régimen establecido en esta Ley o se ha alterado la contabilidad, podrá en el plazo de un mes decretar la suspensión de las actividades de la asociación, sin perjuicio de los recursos que procedan conforme a esta Ley".

Hay que reconocer, sin embargo, como indica PEREZ- LLANTADA, que la Ley española se muestra más amplia en este aspecto que las paralelas leyes francesa e italiana, que limitan la capacidad patrimonial exigiendo autorizaciones administrativas para adquirir; además de ejercer un fuerte control sobre los fondos. La ley francesa llega a prever no sólo la suspensión de actividades de la Asociación sino incluso su disolución.

Por su parte, la Ley española, continuando en su espíritu restrictivo, dispone en su artículo 19 que " las asociaciones confesionales no católicas podrán solicitar del Ministerio de Justicia, que recabará el oportuno informe del Gobernador civil de la provincia, la anotación en el Registro de secciones locales cuando se

(1) PEREZ-LLANTADA: La libertad religiosa ... cit. pág.344.

acredite que cuentan con un número de miembros residentes en la localidad que las justifique".

El artículo 20 se limita a señalar que "en caso de disolución de una Asociación confesional no católica se dará a sus bienes la aplicación que los Estatutos les hubiesen asignado. Si nada se hubiere establecido, los bienes se aplicarán a la realización de fines benéficos". Pretende así el Estado interpretar una voluntad implícita en todo Estatuto y evitar todo lo que pueda suponer una confiscación por el erario público(1).

Respecto al derecho de las distintas Asociaciones religiosas a comunicarse con sus autoridades y comunidades residentes en el extranjero no se reconoce espresamente en la Ley española, pero tampoco se excluye tal derecho por ello "pdría alguno creer que implícitamente se admite, mientras que tal comunicación quede centrada en el campo religioso, ya al aceptar en general la doctrina conciliar como inspiradora de la Ley, ya al reconocer en ésta que las Asociaciones religiosas se regirán por sus Estatutos y que el Estado garantizará el ejercicio de las actividades que les son propias"(2). Entendemos sin embargo, con PEREZ -LLANTADA, que dado el tono minimista de la Ley y el fuerte control administrativo de su espíritu, se hace difícil garantizar que esta interpretación extensiva sea la que en la práctica triunfe, No obstante, así debiera ser, pues el artículo 9, número 2, al permitir la importación de publicaciones confesionales no católicas del extranjero, parece sobreentenderlo, e incluso la referencia a la confesión religiosa matriz de los artículos 13, número 1, y 15, número 2, lleva a esa interpretación amplia(3).

1.5.1.2. Derecho al culto público.

El derecho al culto público se reconoce en el artículo 21, nú-

(1) PEREZ LLANTADA: La libertad religiosa..., cit. pág. 343.

(2) LOPEZ DE PRADO: Recepción de la libertad religiosa, en el ordenamiento jurídico español, en Rev. Española de Derecho Canónico, vol. XXIII, núm. 66, septiembre-diciembre, 1967, p. 569.

(3) PEREZ-LLANTADA: La libertad religiosa..., cit. pág. 344.

-mero 1 de la Ley al mismo tiempo que se reconoce el privado. Su texto dice así: " Podrá practicarse libremente el culto público y privado en los templos o lugares de culto debidamente autorizados".

Cuando el culto público haya de salir de esos recintos confesionales, que conforme dispone el artículo 23 y que examinaremos más adelante, "tienen garantizada la inviolabilidad con arreglo a las leyes", la celebración de actos de dicho culto, según establece el número 2 del mismo artículo 21 , deberá ser comunicada con suficiente antelación al Gobernador civil de la provincia, cuyo silencio es garantía de que nada se opone por parte de la Administración para que tenga lugar dicha celebración.

Conviene señalar que continuamos contemplando derechos que caen todavía dentro del plano social centrípeto o interno, "al menos en el sentido de afectar directamente a los miembros de una Asociación, pero es evidente que estamos en el límite con la vertiente expansiva o centrífuga, de ahí la moderación estricta de la normativa civil"(1).

Como complementario de ese derecho a la libre práctica del culto público y privado, el artículo 22 concede a las Asociaciones confesionales no católicas el derecho de establecer los lugares de culto y demás centros que sean necesarios para el servicio y la formación religiosa de los miembros de la confesión respectiva, que lo habrán de solicitar del Ministerio de Justicia, "detallando en la solicitud el emplazamiento y las características de los edificios, así como los símbolos y denominaciones expresivos de su confesionalidad". Una vez autorizados gozarán de inviolabilidad con arreglo a la Ley solamente los lugares de culto, no así los centros de formación; y ello porque no son mencionados en el artículo 23 , que parece referirse solamente a los lugares de culto. Su texto dice en efecto: " Todos los lugares de culto debidamente autorizados tienen garantizada su inviolabilidad con arreglo a las Leyes".

(1) PEREZ LLANTADA: La libertad religiosa..., cit. pág. 345.

Nada se dice pues en este artículo referente a los centros de formación y por ello, y teniendo en cuenta además el tono minimista de la Ley parece como señala PEREZ- LLANTADA que hay que interpretar que no son equiparados a los templos o lugares de culto y por tanto no gozan de inviolabilidad una vez legalmente autorizados(1).

El artículo 24, autoriza a las Asociaciones para poder fijar carteles en el exterior de los locales debidamente autorizados y publicar anuncios indicando los horarios y locales de sus cultos y reuniones en la medida adecuada a las necesidades de las respectivas comunidades religiosas. Parece evidente que con igual extensión podrán publicar anuncios y ello hay que suponer que pueden hacerlo en cualquier publicación, sea o no confesional, ya que este derecho debe ser distinto del recogido en el artículo 9(2).

1. 5. 1. 3. Ministros del culto.

En relación con el culto público regula la Ley como derecho civil todo lo referente a sus Ministros, configurando un "status" jurídico para su función socio-religiosa confesional. En esta regulación la Ley sigue un criterio claro, que es el de canalizar su autorización o reconocimiento, su actuación y también su cese a través de la Asociación como elemento más estable y sujeto de más fácil responsabilidad(3). Así, en el artículo 25, número 1 dispone: "Los ministros de los cultos no católicos solicitarán del Ministerio de Justicia, a través de la asociación confesional a que pertenezcan, su inscripción en el Registro a que se refiere el artículo 36, con expresión de los datos que reglamentariamente se establezcan".

En el número 2 del mismo artículo establece la Ley que "la inscripción en el Registro garantizará al ministro del culto de que se trate el ejercicio de su función religiosa bajo la protección

(1) PEREZ- LLANTADA: La libertad religiosa;...cit. págs. 345-346.

(2) Ibidem, pág. 346.

(3) Ibidem.

de la Ley". Con lo cual es evidente que también esta inscripción tiene rango de constitutiva para sus derechos civiles como tal ministro.

El número 3 de este mismo artículo indica "que no se autorizará la inscripción en el Registro como ministros de un determinado culto a quienes lo hayan sido de otro ni a los ordenados in sacris y religiosos profesos en la Iglesia Católica, salvo dispensa o declaración, en su caso, de la respectiva Autoridad confesional".

La exigencia de esa dispensa o declaración, "viola como señala LOPEZ DE PRADO el derecho a la libertad religiosa del que aspira a ser Ministro, y de la Confesión que le quiere recibir como tal, pues va contra la conciencia de ambos, sin que el Estado, como es evidente, pueda invocar razón alguna de orden público para justificarla, y además, convierte a la Autoridad pública en un instrumento al servicio de intereses, o acaso resentimientos de las distintas confesiones religiosas"(1). "Poner como condición un documento de la Autoridad que abandona- señala con razón MUÑOZ PALACIOS - y no únicamente la garantía de la Autoridad que recibe - que es la que garantiza si en aquel momento es Ministro o no, lo que lleva consigo el cese de ser Ministro de otra diferente - expone a la persona a la obstinación o caprichos de una Autoridad que puede querer retener a quien es libre para pertenecer o no a ésta como tal. En fin es cuestión interna en la que no debe interferir la Autoridad civil"(2).

Parte de la situación jurídica de los ministros de cultos no católicos la contempla el artículo 27, que dice: "Uno. Los ministros legalmente autorizados de los cultos no católicos podrán excusarse de sumir funciones o cargos públicos que sean incompatibles con su ministerio. Dos. Lo dispuesto en el párrafo anterior no afectará al cumplimiento del servicio militar ni a cualquier otro exigible como obligatorio a la Nación". Ciertamente "esta regulación está muy ale-

(1) LOPEZ DE PRADO: Recepción de la libertad religiosa...en ob.cit pág. 570.

(2) MUÑOZ PALACIOS(Ramon): El proyecto de Ley sobre libertad religiosa, en Rev. cit. pág. 14

-jada de la que recoge el artículo 15 del Concordato vigente para los Ministros católicos, al decir que "los clérigos y religiosos ya sean éstos profesos o novicios, están exentos del servicio militar conforme a los cánones 121 y 614 del Código de Derecho Canónico", contemplado para España en el Convenio con la Santa Sede de 5 de agosto de 1950 sobre jurisdicción castrense". Es evidente que esta exención constituye, como ya hemos apuntado al analizar la revisión del Concordato, un auténtico privilegio para los Ministros católicos; por ello evidentemente debe desaparecer esta situación de favor especial para los Ministros católicos. El servicio militar que lo hacen todos o que no lo haga nadie(1). Cabe sin embargo que todos, tanto los católicos como los no católicos puedan acogerse a las normas generales que le sean aplicables, por ejemplo para estudiantes, objetores de conciencia etc.

Otro aspecto de esta situación jurídica especial de los Ministros de cultos acatólicos lo recoge el artículo 28 de la Ley al señalar que "las inscripciones en el Registro sólo podrán cancelarse a instancia del Ministro interesado, de su Asociación confesional o por resolución del Ministerio de Justicia, en el caso de que, en el ejercicio de sus funciones, realice actos contrarios a los preceptos de esta Ley." "La oportuna resolución, debidamente fundada, deberá ser comunicada a la Asociación confesional a que pertenece el interesado, y es evidente que contra ella se darán los recursos administrativos y judiciales correspondientes(2). En este artículo parece claramente desproporcionada la falta y su castigo; aunque con la expresión legal de castigar actos contrarios al contenido de la Ley, es evidente que aún puede evitarse, con una interpretación amplia, el que pudiera cancelarse la inscripción como Ministro por actos totalmente ajenos a la función religiosa, por los que el Ministro debe ser juzgado como cualquier ciudadano(3).

(1) RUIZ -GIMENEZ: Relaciones Iglesia y Estado, en Boletín cit., pág. 14.

(2) PEPEZ-LLANTADA: La libertad religiosa..., cit. pág. 348.

(3) Ibiñem, págs. 348-349.

1. 5. 1.4. Derecho comunitario de enseñanza.

La Ley recoge la enseñanza como derecho comunitario en la Sección Cuarta del Capítulo III. Es evidente que con este derecho como advierte PEREZ- LLANTADA, deberíamos entrar en la regulación de derechos que inciden en el plano social expansivo o centrífugo, donde las interferencias entre derechos iguales en legítimo ejercicio pueden ser muy frecuentes, pero el Texto legal parece contener este derecho en el plano centrípeto exclusivamente(1).

El primer aspecto de este derecho que recoge la Ley se concreta en el artículo 29 que dice: "Las Asociaciones confesionales no católicas podrán establecer, con arreglo a las Leyes vigentes en la materia y previa autorización del Ministerio de Justicia, Centros para la enseñanza de sus miembros cuando lo justifique el número de los que hayan de utilizarlos". "Parece suficientemente claro, como dice PEREZ-LLANTADA, que se trata de poder impartir enseñanza cultural, no directa o propiamente religiosa, a la que se refiere de un modo específico el artículo 22. La Ley es restrictiva en cuanto exige, no sólo los requisitos genéricos para la apertura de Centros de este tipo, sino que además impone la autorización del Ministerio de Justicia, que será quien valore la condición de que esté justificada la presencia del Centro por el número de los que hayan de utilizarlo, lo que convierte la concesión última en discrecional"(2).

El artículo 30 de la misma Ley proclama también el derecho de las Asociaciones confesionales no católicas preparar y formar a sus ministros de culto. Así, el artículo 30 establece: "Uno. Las Asociaciones confesionales no católicas, tendrán derecho, previa autorización del Ministerio de Justicia, a establecer Centros

(1) PEREZ LLANTADA: La libertad religiosa..., cit. pág. 349.

(2) Ibidem.

para que sus miembros puedan recibir la formación propia de los ministros del culto respectivo." " Dos. El número de los Centros de formación de ministros de cultos no católicos deberá ser proporcionado a las necesidades del servicio religioso de los miembros de la respectiva Confesión en España". " Tercero. El Ministerio de Justicia podrá requerir todos los elementos informativos necesarios para dictar la oportuna resolución". En este artículo, la Ley se muestra como en el caso anterior claramente restrictiva, pero en mayor grado, debido sin duda a la incidencia de todo Seminario con el problema del proselitismo, y así, la autorización del Ministerio de Justicia es claramente discrecional, no sólo en cuanto que el número de Centros ha de ser proporcionado a las necesidades del servicio religioso de los miembros de la respectiva Confesión en España, sino en cuanto que afirma en el número 3 ya transcrito que "el Ministerio de Justicia podrá requerir todos los elementos informativos necesarios para dictar la oportuna resolución." Hay que reconocer pues, que esta regulación supone una clara interferencia del Estado en un asunto interno y propio de la Confesión que solicita la apertura del Centro, valorando el Estado unas necesidades típicamente religiosas(1).

1. 5. 2. Plano social centrífugo.

El plano social centrífugo o vertiente expansiva de la manifestación de lo religioso es el más complejo y el de mayor dificultad para una regulación civil acertada del derecho de libertad religiosa. La Ley, sin embargo, no concede expresamente ningún derecho que se refiera al plano social centrífugo o expansivo; contrastando claramente el estrecho criterio de la Ley para fijar los derechos de las Confesiones acatólicas con los paralelos que disfruta la Iglesia católica." Cabe dudar, pues, dice PEREZ-LLANTADA, si se deja justamente respetada la libertad de todos

(1) PEREZ- LLANTADA: La libertad religiosa..., cit. pág. 350.

en el ámbito civil, que es condición "sine qua non" para que pueda exigirse la confesionalidad, según la "Declaratio de Libertate religiosa"(1).

En realidad, la no regulación por la Ley de los derechos derivados del de libertad religiosa, o mejor dicho, integrantes de su contenido en el plano social centrífugo o expansivo, supone una lesión grave en la función civil del derecho de libertad religiosa; y constituye evidentemente un ejemplo más del estrecho criterio de la Ley al fijar los derechos de las Confesiones acatólicas, que encuentran así, en la Ley, una vez más y de forma indebida, limitado su derecho de libertad religiosa.

Por todo ello, y a pesar de la enorme dificultad que entraña una regulación civil acertada de esta vertiente expansiva social del derecho de libertad religiosa es preciso no ignorarla sino reconocerla y regularla dentro de los justos límites.

Ahora bien, esta vertiente, según enseña el mismo Concilio, comprende tres aspectos: el de enseñanza pública, el de la influencia social y el de penetración a través de diversas asociaciones (2).

1º El aspecto de la enseñanza pública.

En cuanto al poder impartir enseñanza a todos, no sólo a sus miembros es evidente que constituye un derecho propio de las Comunidades religiosas, pues como dice el Concilio en la Declaración "Dignitatis humanae", "las Comunidades religiosas tienen también derecho a no ser impedidas en la enseñanza y el testimonio públicos de su fe, de palabra o por escrito. Pero, en la extensión de la fe religiosa y en la introducción de costumbres se debe evitar siempre cualquier forma de actuación que parezca tener sabor a coacción o persuasión desleal o no bastante recta, sobre todo si se trata de gente poco formada o necesitada. Esta forma de actuar debe considerarse como abuso del derecho propio o una lesión...

(1) PEREZ- LLANTADA: La libertad religiosa...., cit. pág. 350.

(2) LOPEZ DE PRADO: El proyecto de Ley sobre la libertad religiosa ante la Declaración "Dignitatis humanae", en Rev. Razón y Fe, nº 832, mayo 1967, pág. 489.

del ajeno"(1).

Este derecho propio de las Comunidades religiosas según hemos dicho y que el Concilio se cuida de deslindar del proselitismo, no es recogido por el texto legal español con igual amplitud ni siquiera en el mismo plano. El artículo 9, dentro del Capítulo II, que contiene los derechos individuales, dice que "la libertad religiosa ampara el derecho de los individuos y de las asociaciones confesionales legalmente reconocidas, a no ser impedidos en la enseñanza de palabra o por escrito, de su fe, dentro de los límites establecidos en el artículo 2 de esta Ley".

"Aislado este texto del contexto de la Ley española, como dice PEREZ-LLANTADA, parece que admite la enseñanza - no habla del testimonio, ni menos público, de la fe - fuera del campo de sus creyentes, al menos en principio, ya que queda afectado por los límites del artículo 2, que recoge entre ellos el justo orden público. Pero la lógica evidente del conjunto del articulado obliga a encuadrarlo en su línea y entonces, parece concluirse que esa enseñanza queda circunstranscrita al sólo plano centrípeto o interno. Así, en primer lugar, los artículos 29 y 30, para la enseñanza cultural de sus creyentes o para la formación de los ministros de culto, limitan el número de sus Centros a las necesidades de sus miembros. En segundo lugar, el artículo 22, más directamente para la formación religiosa de los respectivos creyentes, autoriza únicamente a establecer los Centros necesarios para ellos.

Sin embargo el número 2 del artículo 9 permitirá suponer que se trata de algo más que una simple manifestación pública de una creencia, al permitir la difusión de las publicaciones confesionales dentro de los límites del artículo 2 de la Ley. Aun así, habrá que tener siempre en cuenta que el número 2 de este artículo 2º, configura unos límites vaguísimos para no afectar a casi toda posible acción centrífuga, y a añadir sobre los señalados por el número 1"(2).

Cabe pues, concluir señalando que, aun admitiendo ese derecho

(1) D H/nº 4, en Vaticano II, cit. pág. 771.

(2) PEREZ-LLANTADA: La libertad religiosa..., cit. págs. 351-352.

de enseñanza o propaganda fuera del campo doméstico de una confesión religiosa, como algo pretendido por el artículo 9 de la Ley, en la práctica sería mermado por tanto límite(1).

2º El aspecto de la influencia social.

En cuanto a este segundo aspecto, es evidente que constituye un derecho más indirecto y sutil de las comunidades religiosas: el influir a través de sus doctrinas, en la ordenación social y en la actividad humana. Este derecho constituye otra afirmación del Concilio Vaticano II, que en su Declaración "Dignitatis humanae", lo enuncia así: "Pertenece también a la libertad religiosa el que las comunidades religiosas no se vean impedidas de manifestar libremente la fuerza singular de su doctrina para ordenar la sociedad y vivificar toda la actividad humana"(2).

La Ley no recoge este derecho, que se dirige a la estructuración de la sociedad humana en que la confesión religiosa ve, ya que no es lógicamente deducible, dado el espíritu restrictivo del texto legal, del principio genérico contenido en el artículo 1, número 2, ni por lo dicho cabrá dentro del espíritu del artículo 9, que antes hemos comentado. Lo que sí es evidente, dada la sutilidad de este derecho como dice PEREZ LLANTADA, es que, de hecho, la influencia se dará por el claro influjo social que lo religioso encierra en sí mismo y en su base humana; es decir, por la acción de los propios creyentes en la sociedad civil y en las sociedades menores que la componen (3).

3º. El aspecto de penetración a través de diversas asociaciones.

La Ley tampoco recoge este tercer aspecto que constituye también un verdadero derecho de las comunidades religiosas, pues como dice la Declaración "Dignitatis humanae", "en la naturaleza social del hombre y en el mismo carácter de la religión, se basa el derecho

(1) PEREZ LLANTADA: La libertad religiosa..., cit. pág. 352.

(2) D H. nº 4, e), en Vaticano II, cit. pág. 771.

(3) PEREZ LLANTADA: La libertad religiosa..., cit. págs. 352-353.

en virtud del cual el hombre , movido por su mismo sentimiento religioso, puede libremente hacer reuniones o establecer asociaciones educativas, culturales, caritativas y sociales"(1) . Por otra parte "es claro que este apartado e) se refiere al plano externo, ya que el apartado a) del propio número 4 de la Declaración se refería a la vertiente interna o conservativa, y sería absurdo una repetición sobre este asunto"(2).

En resumen, pues, podemos afirmar que la regulación de los derechos integrantes del contenido del de libertad religiosa en el plano social centrífugo la Ley ha preferido ignorarlos, lo cual constituye evidentemente, según ya hemos indicado una grave lesión en la función civil del derecho de libertad religiosa.

1. 6. Sujetos del derecho civil de libertad religiosa.

Al abordar el estudio de la regulación que hace la Ley española, de 28 de junio de 1967, de los sujetos del derecho civil de libertad religiosa, conviene tener en cuenta que el derecho civil de libertad religiosa "es un derecho subjetivo público; un derecho que todos y cada uno de los ciudadanos puede ejercitar en la Sociedad, garantizado por el Estado con una protección jurídica frente a los demás ciudadanos y frente a los poderes públicos. Este derecho es, pues, una relación intersubjetiva, entre personas físicas y morales; una relación entre sujetos: de una parte, el sujeto activo, es decir el titular o titulares del derecho que están jurídicamente habilitados para ejercitarlo, y de otra el sujeto o sujetos pasivos que deben respetar esa inmunidad de coacción frente a ese ejercicio legítimo del derecho"(3).

Así pues, hay que considerar como sujeto del derecho de libertad religiosa no sólo al hombre individual sino también a las comunidades religiosas.

(1) D H. nº 4 e), en Vaticano II, cit. pág. 771.

(2) PEREZ-LLANTADA: La libertad religiosa...., cit. pág. 353.

(3) Ibidem, pág. 355.

Para la Ley española que estamos analizando, reguladora del derecho de libertad religiosa, el sujeto activo lo será en principio el ciudadano español, es decir todos y cada uno de los españoles capaces de creencias religiosas y de su manifestación externa, y las Comunidades religiosas no católicas legalmente reconocidas. De donde se deduce, como ya indicábamos al analizar la personalidad jurídica de las Asociaciones confesionales no católicas, que sin ese previo reconocimiento legal no se consideran sujetos del derecho de libertad religiosa. Ello, sin embargo, va como señalábamos entonces contra las exigencias de la naturaleza social del hombre y de la misma religión, que reclaman necesariamente la existencia de esas Comunidades religiosas y su consideración de sujetos del derecho de libertad religiosa, sin que quepa hacer depender dicha cualidad de sujetos de un previo reconocimiento legal. Por todo ello, el Estado excede realmente sus límites si pretende dirigir o impedir las Comunidades religiosas. El Estado, por el contrario, como indica el Concilio Vaticano II tiene la obligación de proteger y garantizar la libertad religiosa y los derechos propios de esas Comunidades, con la única reserva de que no se violen las justas exigencias del orden público(1). Pues, como dice el mismo Concilio, según hemos señalado repetidamente en este trabajo, "la libertad o inmunidad de coacción en materia religiosa que compete a las personas individualmente consideradas, ha de serles reconocida también cuando actúan en común. Porque las comunidades religiosas son exigidas por la naturaleza social tanto del hombre como de la religión misma.

A estas comunidades, con tal que no se violen las justas exigencias del orden público, se les debe por derecho la inmunidad(2) para que puedan realizar los derechos que le son propios(3).

El sujeto pasivo lo serán todos y cada uno de los demás ciudadanos y comunidades religiosas y muy especialmente el propio Estado.

(1) D H. nº 4, en Vaticano II, cit. pág. 770.

(2) Ibidem.

(3) Vid. estos derechos en Declaración D H. nº 4, en ob. cit. págs. 770- 771.

Así pues, para estudiar la regulación que hace la Ley 44/1967 de los sujetos del derecho de libertad religiosa es necesario distinguir los siguientes supuestos: el sujeto activo y el sujeto pasivo y en cada uno de ellos dos planos: el plano individual y el plano social.

1. 6. 1. Sujeto activo — Plano individual.

El sujeto activo individual lo contempla el Capítulo II de la Ley, dedicado a los derechos individuales. Se abre este Capítulo con el artículo 3, que considera como sujetos activos individuales a todos los españoles, disponiendo expresamente que " las creencias religiosas no constituirán motivo de desigualdad entre los españoles". También el artículo 4 contempla como sujeto activo individual del primer derecho concreto, que se desgaja del núcleo de la libertad religiosa, a todos los españoles, que tendrán derecho a cualquier trabajo o actividad, sea cualquiera su creencia religiosa. Igual sujeto contemplan los artículos 5, 7, 8 y 12.

El resto del articulado de la Ley, más en consonancia con su carácter de Estatuto civil de la Libertad religiosa de los acatólicos, es a estos, formalmente, a quienes contempla como sujetos de los derechos concretos, cuyo ejercicio regula de forma minuciosa (1).

1. 6. 2. Sujeto activo - Plano social.

La Ley regula en el Capítulo III el ejercicio de una serie de derechos comunitarios, cuyo titular primario son las Asociaciones confesionales no católicas que hayan sido reconocidas legalmente, y a través de ellas, sus miembros, tanto los simples fieles como los ministros del culto. A estas Comunidades las considera la Ley, una vez reconocidas legalmente, como sujetos activos de derechos concretos, integrantes del contenido del derecho de libertad religiosa, como son: regirse por sus propios Estatutos, dar culto públi-

(1) PEREZ-LLANTADA: La libertad religiosa..., cit. pág. 357.

-co al Ser Supremo, ayudar a sus miembros en el ejercicio de la vida religiosa, sostenerlos en su fe y promover las instituciones complementarias en que los fieles colaboren, a fin de ordenar su propia vida según sus principios. Serán también sujetos idóneos para impartir la enseñanza de su fe y manifestar la fuerza especial de su doctrina en la ordenación de la sociedad civil(1).

Considera también la Ley como sujeto activo comunitario la familia en cuanto sociedad que posee un derecho propio y primordial, como célula primaria natural y fundamento de la sociedad y como institución moral dotada de derecho inalienable y superior a toda ley positiva(1) para ordenar libremente su vida religiosa y **determinar**, según sus propias convicciones, la educación religiosa que se ha de dar a sus hijos; todo ello al amparo del artículo 7 ya comentado.

Asimismo, considera la Ley como sujetos activos comunitarios a las Asociaciones confesionales no católicas, al proclamar en el artículo 11 el derecho de reunión con carácter genérico para los individuos y para las asociaciones.

Por otra parte y respecto al derecho de asociación en materia religiosa es importante señalar que se dan hoy en el derecho comparado como dice CARLOS CORRAL, diversos sistemas normativos de reconocimiento de las Asociaciones confesionales. "Primero, el sistema de reconocimiento de derecho público, y segundo el sistema de reconocimiento de derecho privado. Podría añadirse un tercer sistema, el de derecho privado con inflexiones de derecho público"(2). "Quizá caben todavía sistemas intermedios y el español sea uno de ellos"(3).

El sistema de derecho público, en cuanto a la regulación de la personalidad jurídica de las Asociaciones confesionales, es típico de Alemania y Austria, que siguen el criterio de convenios o pactos para la regulación del derecho civil a la libertad religiosa. "Según

(1) PEREZ-LLANTADA: La libertad religiosa..., cit. pág. 357.

(2) CORRAL(Carlos): Valoración comparada de la legislación española de libertad religiosa, en Rev. Española de Derecho Canónico, vol. XXIV, n.º 68, mayo-agosto 1968, pág. 321.

(3) PEREZ-LLANTADA: La libertad religiosa... cit. pág. 358.

él, las Asociaciones se consideran como corporaciones de derecho público - lo que no equivale a corporaciones estatales - con autonomía en la ordenación y administración de sus asuntos y con un "status" jurídico público para los ministros del culto.

Contrariamente, Francia, con la Ley de separación de la Iglesia y el Estado, impuso el "sistema unilateral" de regulación del régimen de libertad religiosa y, ante el derecho de asociación, adopta el criterio de derecho privado, conforme al cual no se reviste a las asociaciones religiosas de un "status jurídico especial, ni tampoco gozan de él sus ministros de culto ante el ordenamiento jurídico del Estado⁽¹⁾.

Un régimen intermedio es el seguido por Italia, que regula el derecho de libertad religiosa, a base de una legislación unilateral del Estado, previa una fuerte base de acuerdo con las confesiones - en la práctica auténticos pactos bilaterales-. Respecto al reconocimiento de la personalidad jurídica de las Asociaciones religiosas, sin equiparse plenamente al sistema germánico, está más cerca de él que del sistema francés. A los cultos permitidos se les da un reconocimiento especial con efectos civiles en muchos aspectos, sobre todo en el matrimonial, y un "status" jurídico para los ministros de culto⁽²⁾.

" España ha elegido un sistema intermedio entre el francés y el italiano. Las Asociaciones religiosas son personas morales de derecho privado, pero a las que el Estado regula por una "norma especial", configurando en la Ley de Libertad religiosa un cierto "status" jurídico de las mismas y de sus ministros en el ejercicio de sus funciones en la Sociedad civil, con un fuerte control administrativo que vela por la confesionalidad católica del Estado y, por tanto por la religión católica, que es la oficial y que queda fuera de esa Ley especial o Estatuto legal de las restantes confesiones"⁽³⁾

La Ley española, según ya hemos indicado, concede a las Asociaciones religiosas no católicas, que cumplen las formalidades seña-

(1) PEREZ -LLANTADA: La libertad religiosa..., cit. pág. 359.

(2) Ibidem.

(3) Ibidem, págs. 359-360.

-ladas por ella, su reconocimiento y personalidad jurídica ante el Estado, y a partir de ese momento pueden gozar de los derechos civiles que les reconoce el Estatuto que configura unilateralmente su ejercicio(1). Así el artículo 13, número 1 de la Ley señala que " el reconocimiento legal en España de las confesiones religiosas no católicas podrá solicitarse mediante su constitución en Asociaciones confesionales con arreglo al régimen establecido en la presente Ley". Y el número 2 del mismo artículo concreta que " ese reconocimiento tiene por objeto permitir y garantizar a las Asociaciones confesionales no católicas el ejercicio de las actividades que les son propias".

Con ello queda claro que para la Ley de Libertad religiosa, que estamos analizando el sujeto activo ordinario del ejercicio de los derechos civiles que la Libertad religiosa supone, es el ciudadano español creyente y por él la Asociación confesional no católica a que pertenezca una vez que haya sido reconocida legalmente, según ya hemos indicado; es decir, que sin un reconocimiento, que el Estado puede conceder o denegar, las Asociaciones confesionales no católicas no tienen ningún derecho ni ninguna libertad(2). Ello supone evidentemente un abuso del control administrativo, ya que, como hemos indicado, el Estado debe proteger y garantizar la libertad religiosa y los derechos propios de las Confesiones religiosas a las que corresponde la cualidad de sujetos sin que quepa supeditar dicha cualidad a un previo reconocimiento legal; todo ello, claro está dentro de las justas exigencias del orden público; pero, excede sus límites si pretende dirigirlas o impedir las.

Por todo ello, se hace necesario revisar la presente regulación legal a fin de que, dentro de las justas exigencias del orden público se proteja y garantice la existencia de las Asociaciones confesionales no católicas como sujetos del derecho de libertad religiosa, sin necesidad de un previo reconoci-

(1) PEREZ- LLANTADA: La libertad religiosa..., cit. pág. 360.

(2) OREJA (Marcelino): Análisis y desarrollo de la libertad religiosa en España, en Boletín Informativo de la A.C.N. DE P. cit. pág. VIII.

-miento por parte del Estado, que puede conceder o denegar.

1.6. 3. Sujeto pasivo.

Es evidente que " el derecho civil a la libertad religiosa en cuanto supone esa facultad, garantizada por el Estado, de exigir que los demás hombres y sus instituciones sociales no coaccionen en materia religiosa , entraña una relación intersubjetiva en la que al derecho del sujeto a sujetos activos corresponde necesariamente el deber del sujeto o sujetos pasivos"(1).

El sujeto o sujetos pasivos del derecho de libertad religiosa, en sus múltiples manifestaciones concretas, lo son para la Ley de Libertad religiosa como para todas las demás de nuestro ordenamiento jurídico , los ciudadanos y sus organizaciones sociales, es la Sociedad y el Estado, es la propia Iglesia y las demás sociedades religiosas. Todos tienen un genérico deber de respetar el ejercicio del derecho de los demás dentro de sus justos límites.

Respecto al Estado, sus obligaciones como sujeto pasivo del derecho civil a la libertad religiosa, reconocido por él a todos sus ciudadanos y emanadas de ese deber genérico de no coacción en materia religiosa, son de dos órdenes: 1ª) no impedir ni pretender dirigir las actividades religiosas, y 2ª) proteger y promover los derechos naturales del hombre(2) y procurando que por motivos religiosos nunca se quebrante la igualdad jurídica fundamental de sus ciudadanos(3).

La Ley de Libertad religiosa recoge ese deber de garantía y protección en su capítulo VI y en su capítulo V , que más adelante estudiaremos.

En cuanto a la Iglesia católica, considerada como sociedad de fieles, también es sujeto pasivo de esa libertad religiosa, derecho natural inherente a la dignidad de la persona humana por ella

(1) PEREZ-LLANTADA: La libertad religiosa..., cit. pág. 360.

(2) D H. nº 3, e), en Vaticano II , cit. pág. 769.

(3) Ibidem , nº 6, d). págs. 762-773.

proclamado y que el Estado ha reconocido en su ordenamiento jurídico, de modo que ha pasado a ser derecho civil de todos los ciudadanos"(1).

La Iglesia está pues obligada a respetar el derecho civil a la libertad religiosa de todos los ciudadanos y de las demás comunidades religiosas, de forma que aun donde logre, por razones socio-religiosas, que se dé en las relaciones Iglesia - Estado el régimen de confesionalidad, ella misma lo condiciona a que se respete aquel derecho(2).

1.6. 4. Casos especiales.

Además de los sujetos ya estudiados, es necesario tener en cuenta también otros posibles sujetos de este mismo derecho de libertad religiosa, como son los ateos, los extranjeros y las confesiones religiosas en cuanto instituciones jurídicas supranacionales.

1.6. 4. 1. Los ateos.

El derecho a la libertad religiosa, como indica la Declaración conciliar, " permanece en quienes no cumplen la obligación de buscar la Verdad y de adherirse a ella"(3), por ello se deben considerar incluidos como sujetos del derecho de libertad religiosa, tanto activa como pasivamente a los ateos.

Sin embargo del contexto de la Ley se deduce que los ateos al igual que los católicos no son sujetos activos primarios de esta Ley, que encierra el Estatuto de los derechos civiles de los acatólicos.

"No obstante, es evidente que de facto pueden hacerla valer a su favor. Incluso de iure, el artículo 32 parece aludir a los no creyentes en cuanto su número 2 indica que "la no adscripción a una confesión religiosa se acreditará mediante declaración expresa

(1) PEREZ-LLANTADA: La libertad religiosa..., cit. pág. 363.

(2) Vid. Declaración DH, nº 6, c) en Vaticano II, cit. pág. 772.

(3) Ibidem, nº 2, b) pág. 769.

del interesado.

Y algo semejante ocurre con el artículo 5, número 2, al señalar que en las Fuerzas Armadas y en los establecimientos penitenciarios no se impondrá la asistencia a los actos del culto acatólico a quienes hagan constar su acatolicidad.

A igual conclusión lleva el artículo 2, nº 2, que supone la defensa por el Estado de la inmunidad de coacción en materia religiosa, en que el derecho a la libertad religiosa básicamente consiste, frente a actos de proselitismo que supongan abuso de derecho por parte de creyentes de cualquier confesión. Es evidente que, aunque otra fuera la mente del legislador y formalmente sea concorde con ella la mente de la ley, al silenciar el tema, el ateo debe poder ejercitar su derecho civil a no ser coaccionado ilegítimamente para hacerle abrazar una creencia"(1).

Por último hay que señalar que el ateo se verá afectado por la Ley como sujeto pasivo y al igual que los creyentes no por su no creencia sino en cuanto ciudadano, teniendo en cuenta además como dice el Concilio que "el derecho a la libertad religiosa no se funda en la disposición subjetiva de la persona sino en su misma naturaleza"(2).

1. 6. 4. 2. Los extranjeros.

La Ley reconoce como sujetos del derecho civil a la libertad religiosa a los extranjeros. Así, en su artículo 12, dispone: " Los extranjeros no católicos residentes o transeúntes en España gozarán en materia religiosa de los mismos derechos y deberes que a los españoles se reconoce en la presente Ley, en cuanto les sea de aplicación".

El texto de este artículo parece un tanto paradójico teniendo en cuenta que la materia que regula sale fuera del ámbito de las que señala el artículo 8 del Código civil, como de fuero territorial.

"Sin embargo, la disposición de la Ley tiene una fuerte lógica,

(1) PEREZ-LLANTADA: La libertad religiosa..., cit. pág. 364.

(2) D H , nº 2, b) en Vaticano II, cit. pág. 769.

ya que el derecho civil a la libertad religiosa no es creación del Estado, sino reflejo del derecho natural aplicable a toda persona como algo debido a su dignidad humana, sin que por tanto puedan entrar en juego los principios de territorialidad y nacionalidad, aplicables a otros derechos civiles"(1).

1. 6. 4. 3. Las confesiones religiosas supranacionales.

Al analizar la consideración que de las confesiones religiosas supranacionales hace la Ley española 44/1967 de 28 de junio, es conveniente tener en cuenta que toda confesión religiosa supone, de una parte, un conjunto de creencias o dogmas espirituales, sentimientos de veneración y respeto hacia la divinidad, de normas morales para la conducta individual y social de los creyentes y de prácticas rituales. Pero, junto a este contenido teológico que implica su aceptación por los fieles aparece naturalmente una estructura jurídica que sostiene la vida comunitaria de la propia confesión religiosa, surgiendo así una persona moral o jurídica con una organización jerárquica, unos fines y unos medios, en definitiva, al servicio de los creyentes(2).

Esta persona moral o jurídica es la que puede actuar como sujeto por medio de sus órganos de gobierno, ejercitando derechos y aceptando deberes, enclavada en la Sociedad civil, con un campo espiritual específico que atender, el religioso(3).

Exceptuada la religión católica, representada por la Santa Sede, con un reconocimiento de su personalidad jurídica de rango internacioncional, parigual a la de los Estados, las demás confesiones religiosas no gozan de él, pese a que su actuación se extiende en numerosos casos a nivel supranacional. Esas confesiones religiosas, con unos órganos de gobierno supranacionales, que las representan, no son reconocidas como sujetos no ya de derecho público, sino incluso de derecho privado, dentro

(1) PEREZ LLANTADA: La libertad religiosa..., cit. pág. 365.

(2) Ibidem, pág. 366.

(3) Ibidem, pág. 367.

de la regulación de las personas morales o sociales, por el ordenamiento jurídico de muchos Estados. Es este el caso de la Ley española de Libertad religiosa?"(1).

La Ley , en su artículo 2, número 1, al fijar los límites del ejercicio del derecho a la libertad religiosa, recoge, como uno de ellos, el respeto a la Religión Católica y a las otras confesiones religiosas. Y en el número 2 del mismo artículo, al prohibir los actos de proselitismo, concreta que tienen como fin ganar adeptos para una determinada creencia o confesión. De los textos citados parece deducirse claramente que sólo se hace referencia al concepto teológico de religión o confesión en cuanto creencia y no al aspecto jurídico de persona moral que encarna esa fe en la sociedad civil. Por ello es evidente que la Ley no la reconoce como sujeto del derecho civil a la Libertad religiosa(2).

Lo mismo ocurre en el artículo 6 de la Ley al autorizar los ritos o ceremonias propios de las distintas confesiones no católicas, como celebrables antes o después de la ceremonia matrimonial civil.

En cuanto al artículo 9, número 2, al recoger las publicaciones religiosas como un medio lícito para la enseñanza de la fe y prever el caso de que puedan ser importadas del extranjero, parece que implícitamente supone la existencia de una organización confesional supranacional que dirja y controle la vida social, independiente del reconocimiento del Estado, a cada correspondiente Asociación confesional de igual creencia. Sin embargo, el citado número 2 sigue diciendo que " en dichas publicaciones deberá constar la Asociación que las edite y la confesión que difundan", con lo cual se ve que la Ley sigue considerando, como sujeto de derecho, a la Asociación confesional exclusivamente ; pensando en la confesión como simple creencia profesada por aquella y por sus miembros (3).

Más equívoco es el artículo 25, al hablar de Autoridad confesional, pero parece que la Ley con ese nombre se remite al régimen

(1) PEREZ LLANTADA: La libertad religiosa..., cit. pág. 367.

(2) Ibidem.

(3) Ibidem, págs. 367- 368.

interno de la Asociación, sin que suponga reconocimiento civil de aquélla, si es a nivel supranacional. Pero el problema se plantearía si la inscripción en el Registro de un nuevo ministro procedente de otro culto se basase en la dispensa concedida por Autoridad confesional, superior a la del más alto rango de la Asociación, que por razón de la organización interna confesional no pudiera darla"(1).

Es realmente el artículo 13 el que va a constituir el máximo vestigio de ese reconocimiento implícito y hasta latente en la Ley, a la confesión religiosa institución jurídica supranacional, como sujeto de derecho(2).

"Podría interpretarse el texto en el sentido de que la Ley se refiere al reconocimiento de una "creencia religiosa no católica" en cuanto valor puramente teológico y no como ente jurídico; pero el artículo 15, número 2, requisito d), hace muy difícil esta hipótesis al hablar de que, para pedir el reconocimiento de una Asociación deben mencionarse las personas residentes en España que la representen, con expresión de su nacionalidad y circunstancias personales. Tres de ellas como mínimo, deberán tener la nacionalidad española". Esta dificultad proviene de admitir la actuación jurídica en representación de una Asociación civilmente no existente.

Por qué se admite? En razón de su vida propia como sociedad religiosa independiente del reconocimiento del Estado, podría ser una primera respuesta; pero ello supondría el ejercicio de un derecho civil de los que componen el núcleo de libertad religiosa, por la propia Asociación, legítimamente representada conforme a sus normas, antes del reconocimiento de la misma por el Estado.

Para salvar esa falta de lógica, parece que hay que admitir que la Ley de Libertad religiosa da por existente esa persona moral supranacional, portavoz de la creencia religiosa, capaz

(1) PEREZ -LLANTADA: La libertad religiosa..., cit. pág. 368.

(2) Ibidem;

de proyectar su actuación en las diversas sociedades civiles nacionales en el campo religioso. En el campo civil, no podrán actuar más que para constituir la correspondiente Asociación confesional, que una vez reconocida por el Estado será el único sujeto de los derechos civiles que intergran, según la Ley, la Libertad religiosa.

Así se desprende del número 2 del propio artículo 13, al decir, "Este reconocimiento tiene por objeto garantizar a las Asociaciones confesionales no católicas el ejercicio de las actividades que les son propias", y del número 3 del mismo artículo, al señalar que "dichas Asociaciones se regirán por sus propios Estatutos, en cuanto no se opongan a lo establecido en la Ley". Es evidente que el Estado, que ha de aprobar esos Estatutos, es consciente de que necesariamente en ellos ha de aparecer esa confesión religiosa, institución jurídica, matriz de la Asociación española. Al Estado le basta, para garantía de su independencia, no reconocer civilmente como sujeto de los derechos que él regula, a la Asociación supranacional.

Esta necesidad de poseer un Estatuto propio que debe ser sancionado por el Estado, es prueba de que, en principio, sólo a través de él podrá existir civilmente una normativa interna, coincidente con las normas supranacionales que pueda tener la Asociación, si se quiere que éstas tengan efectos legales. Pero la Ley considera "ex novo" esas normas, como ordenamiento propio y exclusivo de la Asociación nacional. También prueba que la Asociación confesional nacional es el único sujeto reconocido por la Ley, el que ésta no proclama el derecho de la Asociación a comunicarse con sus órganos centrales supranacionales, salvo lo que sobre el caso dispongan los Estatutos.

Lo mismo se desprende del artículo 15, número 2, requisito a), al exigir para la solicitud de reconocimiento el hacer constar la "confesión religiosa a que pertenezca", tomando este término indudablemente en el sentido decreencia o religión"(1).

Por otra parte, las Ordenes de 28 de julio y 12 de diciembre de 1967, ambas del Ministerio de Justicia, confirman lo dicho.

(1) PEREZ-LLANTADA: La libertad religiosa..., cit. págs. 369-370.

Así la primera, en su artículo único, "establece un plazo que terminará el 31 de diciembre de 1967, para que las confesiones no católicas que desarrollen actualmente en España sus actividades religiosas puedan solicitar ante el Ministerio de Justicia su reconocimiento legal, en la forma prevenida en los artículos 13 y siguientes de la Ley 44/1967, de 28 de junio". En iguales términos la segunda Orden citada prorrogó el plazo hasta el 31 de mayo de 1968. La univocidad del término "confesión" es aquí muy grande, confirmando la tesis de que la Ley únicamente legítima a la institución supranacional para ese acto de petición de nacionalización de la confesión religiosa, mediante el reconocimiento civil de la Asociación confesional correspondiente(1).

A igual solución lleva el artículo 30, número 2, al limitar el número de Centros de formación de ministros del culto no católicos, a que sea proporcionado a "las necesidades del servicio religioso de los miembros de la respectiva confesión en España". Lo mismo el artículo 32, al regular la prueba de la adscripción o no a una confesión religiosa, alude a ésta en cuanto Asociación nacional reconocida por el Estado, por lo que el alta o la baja correspondiente, a efectos civiles, se reglejará en sus libros(2).

Por todo ello podemos concluir afirmando con PEREZ-LLANTADA, que "para la Ley española de Libertad religiosa, son sujetos ordinarios únicamente las distintas Asociaciones confesionales no católicas y sus miembros residentes en España. Sólo de modo extraordinario podrán ser sujetos de un derecho de petición ante la Administración del Estado las confesiones religiosas supranacionales, y precisamente la excepción se da para evitar al Estado una relación jurídica ordinaria con ellas(3).

(1) PEREZ-LLANTADA: La libertad religiosa...cit.,pág. 370.

(2) Ibidem.

(3) Ibidem.

1. 7. Límites

El poder civil tiene derecho ciertamente a reprimir los abusos so pretexto de libertad religiosa, pero ha de hacerlo conforme a normas jurídicas de orden público, que estén de acuerdo con el orden moral objetivo(1).

"Sólo queda, por tanto, la defensa por el Estado de aquellas exigencias naturales que integran el orden público, para legitimar la limitación a los hombres del ejercicio del derecho civil a la libertad religiosa"(2). Esto mismo lo confirma la Declaración "Dignitatis humanae", que, en su número 7, c) expresamente dispone: "Por lo demás, en la Sociedad hay que respetar, como norma, el ejercicio habitual íntegro de la libertad; por ello, se debe reconocer al hombre la mayor libertad posible, y no se debe restringir esa libertad sino cuando sea preciso y en la medida de lo necesario"(3).

La Ley, en su artículo 2, número 1 dispone que "el derecho a la libertad religiosa no tendrá más limitaciones que las derivadas del acatamiento a las Leyes; del respeto a la Religión católica, que es la de la Nación española, y a las otras confesiones religiosas; a la moral, a la paz y a la convivencia públicas y a los legítimos derechos ajenos, como exigencias del orden público".

Pero además el número 3 del artículo 1 señala que "el ejercicio del derecho a la libertad religiosa, convebido según la doctrina católica, ha de ser compatible en todo caso con la confesionalidad del Estado español proclamada en sus Leyes Fundamentales".

La redacción de este artículo va evidentemente contra el derecho de libertad religiosa que no admite otro límite que el justo orden público. Asimismo va contra la Declaración conciliar que expresamente dice lo contrario. Así en su número 6, c) la Declaración dice: "Si consideradas las circunstancias especiales

(1) PEREZ-LLANTADA: La libertad religiosa..., cit. pág. 373.

(2) Ibidem, págs. 772-773.

(3) Vid. D. H. n.º 7, c), en Vaticano II, cit. págs. 773-774.

de los países, se da a una comunidad religiosa un especial reconocimiento civil en la ordenación jurídica de la sociedad, es necesario que a la vez se reconozca y respete el derecho a la libertad en materia religiosa de todos los ciudadanos y comunidades religiosas"(1).

Es evidente, pues, que el número 3 del artículo 1 debería haber sido redactado exactamente al contrario, proclamando que "ese reconocimiento especial de la Religión católica ha de ser compatible en todo caso con el ejercicio del derecho civil a la libertad religiosa.

A estos límites ya señalados la Ley añade otros para el derecho de propaganda que recoge el número 2 del artículo 2 y que comprenden una lista de actos que se consideran como de proselitismo en sentido peyorativo y por tanto especialmente lesivos al derecho de libertad religiosa.

De esta forma las limitaciones impuestas por la Ley al derecho de libertad religiosa pueden resumirse en las siguientes: el orden público, la confesionalidad del Estado y el proselitismo.

1. 7. 1 El "orden público.

El derecho de libertad religiosa, según ya hemos expuesto, no debe tener otro límite que el justo orden público, cuyo contenido, como también ya hemos indicado, de acuerdo con la Declaración conciliar, comprende el respeto de los derechos de todos y la paz y la moralidad públicas.

La Ley española de Libertad religiosa señala en su artículo 2, número 1 el orden público como límite del derecho a la libertad religiosa, pero al contenido señalado añade el acatamiento a las leyes y el respeto a la Religión católica y a las otras confesiones religiosas, lo cual parece evidentemente superfluo, pues ya están incluidos en los tres elementos constitutivos del orden público.

(1) D H, nº 6, c), en Vaticano II, cit. pág. 772.

Pero, además, la Ley señala, en el artículo 1, número 3, como límite del ejercicio del derecho a la libertad religiosa la confesionalidad católica del Estado español, con lo que confirma la vigencia del artículo 33 del Fuero de los Españoles, en concordancia con el artículo 36 del mismo Fuero y con el artículo 2, párrafo a) de la Ley de Orden público, según el cual como ya hemos examinado, "se consideran como contrarios al Orden público los actos que atenten a la unidad espiritual de España", interpretándose esta unidad, como la unidad religiosa católica del pueblo español.

Por todo ello, es evidente que la Ley impone como límite primario para la regulación del derecho a la libertad religiosa la confesionalidad católica del Estado; pero ello va claramente contra lo que dispone el Concilio, que en su Declaración "Dignitatis humanae", condiciona, según ya hemos examinado, la confesionalidad de todo Estado a que se garantice, a la vez el derecho a la libertad religiosa de todos los ciudadanos y comunidades religiosas(1). Y va en definitiva contra el derecho a la libertad religiosa, que como ya repetidamente venimos señalando en este trabajo, no admite otro legítimo límite que el orden público.

Por otra parte, el número 2 del artículo 2 supone una evidente extensión del concepto de agresión al justo orden público, ya que los términos en que se expresa la Ley para delimitar los actos de "proselitismo" son vagos e imprecisos, con remisión expresa a la analogía; lo que hará que el derecho legítimo de propaganda pueda sufrir limitaciones improcedentes, en cualquier momento, por parte del Poder público, en abierta oposición a lo que señala la Declaración conciliar en su número 4, c), según el cual "las comunidades religiosas tienen también el derecho a no ser impedidas en la enseñanza y en la profesión pública de palabra y por escrito, de su fe. Pero en la divulgación de la fe religiosa y en la introducción de costumbres hay que abstenerse siempre de cualquier clase de actos que puedan tener sabor a coacción o a persuasión inhonesta o menos recta, sobre todo cuando se trata de personas rudas o necesitadas. Tal comportamiento debe considerarse como abuso del derecho propio

(1) D H, nº 6, c), en Vaticano II, cit. pág. 772.

y lesión del derecho ajeno"(1).

Así pues, "la Norma legal acepta como límite del derecho civil el motivo de las creencias religiosas , cuando la ilicitud de los medios de propaganda devendrá sólo de su proporción inadecuada o de la agresividad de su empleo; es decir, de la protección del justo orden público en peligro cuando la propaganda religiosa no sea derecho, sino abuso de derecho, e igualmente lo será cuando no respete el derecho a la no coacción de los destinatarios de esa propaganda, posición apuntada por las sentencias del Tribunal Supremo de 29 de febrero de 1972 y 24 de abril de 1973"(2).

1. 7. 2. La confesionalidad del Estado.

La Ley impone como límite principal del derecho a la libertad religiosa, según ya hemos expuesto la confesionalidad católica del Estado español. Y así en su artículo 1, número 3 , ya transcrito, dispone: " El ejercicio del derecho a la libertad religiosa, concebido según la doctrina católica, ha de ser compatible en todo caso con la confesionalidad del Estado español proclamada en sus Leyes Fundamentales".

Este texto va , como ya hemos señalado, contra lo que ordena el Concilio Vaticano II que en su Declaración "Dignitatis humanae", número 6, c) , condiciona, según ya hemos examinado, la confesionalidad de todo Estado a que se garantice a la vez el derecho a la libertad en materia religiosa de todos los ciudadanos y comunidades religiosas. .

Asimismo, este texto va contra el derecho de libertad religiosa, que, como repetidamente hemos indicado, de acuerdo con la Declaración conciliar, no debe ser limitado más que por el justo orden público.

Así pues, es evidente que el texto del número 3 de este artícu-

(1) D H, nº 4, c), en Vaticano II, cit. pág. 771.

(2) PEREZ-LLANTADA: La libertad religiosa..cit., pág. 387.

-lo 1 de la Ley debería haber sido redactado, como también ya hemos expuesto, exactamente al contrario, proclamando que "ese reconocimiento especial de la Religión católica ha de ser compatible, en todo caso, con el ejercicio del derecho civil a la libertad religiosa".

Por otra parte, es claro que a lo largo del texto legal, la compatibilidad de la libertad religiosa con la confesionalidad del Estado no se logra, pues hay en el binomio un término que queda supeditado al otro, la libertad religiosa. Esta queda muy reducida en contra del sujeto principal de la Ley, los acatólicos, al poner la Ley como límite del derecho de libertad religiosa la confesionalidad católica del Estado español, cuando debería ser, como hemos apuntado, exactamente todo lo contrario.

1. 7. 3. El proselitismo.

La Ley española de libertad religiosa tiene en cuenta el difícil y sutil problema del ejercicio del derecho de propaganda religiosa de los acatólicos y la corrupción del mismo encuadrada bajo el nombre de "proselitismo" y que no es más que un abuso de derecho(1).

En su artículo 9, número 1, configura la Ley la libertad de propaganda, diciendo: "La libertad religiosa ampara el derecho de los individuos y de las asociaciones confesionales legalmente reconocidas a no ser impedidas en la enseñanza, de palabra y por escrito, de su fe, dentro de los límites establecidos en el artículo 2º de esta Ley". Y el número 2 del mismo artículo añade: "Las publicaciones confesionales no católicas que se editen con arreglo a la Ley de Prensa e Imprenta y demás disposiciones vigentes, y las que legalmente se importan del extranjero, podrán ser difundidas en la medida en que no violen los límites mencionados en el párrafo anterior".

Así pues, la Ley, "a los límites del número 1 del artículo 2, de aplicación a todo el derecho civil en materia religiosa, añade otros

(1) PEREZ-LLANTADA: La libertad religiosa..., cit., pág. 391.

para el derecho de propaganda, precisamente, que recoge el número 2 de este mismo artículo, enumerándolos de un modo profuso. Así, la lista de actos que se consideran como de "proselitismo" en sentido peyorativo y por tanto especialmente lesivos de los derechos reconocidos en esta Ley, es agotadora"(1); y ello supone evidentemente un excesivo control administrativo, que traspasa los límites legítimos de la intervención estatal. Pues el Estado sólo debe prohibir aquellos actos de propaganda que supongan abuso de derecho que es la nota específica del proselitismo.

Por eso la Declaración Dignitatis humanae, configura muy acertadamente el derecho de propaganda y el proselitismo, señalando en su número 4, d) que " las comunidades religiosas tienen también el derecho a no ser impedidas en la enseñanza y en la profesión pública, de palabra y por escrito, de su fe. Pero en la divulgación de la fe religiosa y en la introducción de costumbres hay que abstenerse siempre de cualquier clase de actos que puedan tener sabor a coacción o a persuasión inhonesta o menos recta, sobre todo cuando se trata de personas rudas o necesitadas. Tal comportamiento debe considerarse como abuso del derecho propio y lesión del derecho ajeno"(2).

En cuanto al alcance de este derecho de propaganda en la Ley, hay que señalar que el artículo 9 pasa por alto el testimonio público, como parte del derecho de propaganda de las comunidades religiosas, con lo que implica ya una merma del contenido de este derecho civil. Pero, este espíritu restrictivo se manifiesta expresamente al someter el ejercicio de este derecho a los límites de la Ley y al configurar los actos que considera lesivos para este derecho, como para los demás, en el artículo 2, número 2.

Por otra parte, es evidente que la relación de actos lesivos de los derechos reconocidos por la Ley, debe poder reducirse de acuerdo con la Declaración conciliar "Dignitatis humanae", a un término jurídico técnicamente elaborado, "el abuso del derecho propio o la lesión del ajeno", y en ese momento se encuadra perfecta-

(1) PEREZ- LLANTADA: La libertad religiosa..., cit. pág. 392.

(2) D H, n 4, d), en Vaticano II, cit. pág. 771.

-mente en el campo del justo orden público, única esfera que el Estado debe proteger coactivamente. Pero, ¿cuando estaremos dentro de este campo, en orden al derecho de propaganda ? (1).

"El criterio teóricamente y en principio es claro, sobre todo cuando se trata de propaganda individualmente realizada y recibida: deberá ser reprimida la actuación cuando se viole el derecho de cada cual a no aceptar esa recepción de la propaganda . Es evidente que el Estado debe armonizar el derecho de propaganda religiosa de uno, con el derecho a no querer soportarla del otro. Si el derecho de propaganda se convierte en abuso al querer violar la resistencia activa a recibirla, el Estado, en defensa del orden público, debe limitar el ejercicio de aquel derecho, o mejor dicho, debe reprimir ese abuso del derecho"(2).

El problema, sin embargo, se complica notablemente cuando la propaganda se dirige organizadamente , a título indiferenciado , a una comunidad; pero "aun entonces - dice LOPEZ DE PRADO - el mismo criterio nos dará la solución aplicado con proporcionalidad. Si sólo una minoría nacional acepta una propaganda religiosa, habrá derecho a hacer esa propaganda con sentido minoritario, es decir, proporcionada al pequeño número de oyentes. Desplegar una propaganda mayoritaria sería una violación del derecho de la mayoría de esa nación, que se opone a esa propaganda. La aplicación cambiaría sí sólo una minoría se opusiera y la mayoría quisiera oír"(3).

Pero, es evidente que "la actuación de este criterio no puede llevar a que el Estado se haga intérprete de un sentimiento religioso del pueblo y que reduzca por Ley el derecho de propaganda a unos límites que le hacen impracticable, y por tanto no haya posibilidad de que el pueblo activamente ejercite su derecho de no aceptarla, que subsidiariamente se ha arrogado el Estado, con lo que limita los dos derechos"(4).

Por todo ello, y relacionando el texto del artículo 9, número 1, con el artículo 2 y con todo el contexto de la Ley, parece

(1) PEREZ- LLANTADA: La libertad religiosa..., cit. pág. 395.

(2) Ibidem.

(3) LOPEZ DE PRADO: El Proyecto de Ley..., ob. cit. pág. 505.

(4) PEREZ-LLANTADA: La libertad religiosa... ob. cit. pág. 396.

claro que la Ley restringe excesivamente el derecho de propaganda, dejándolo reducido al plano individual, practicamente, y lo más al plano social centrípeto, y ello en defensa una vez más de la Religión católica, considerada como base de la unidad política, encontrando además esta posición apoyo en el artículo 33 del Fuero de los Españoles, según ya hemos analizado.

Por otra parte, hay que señalar que el artículo 2, número 2, confunde los actos que sólo afectan al campo de la conciencia, con aquellos que corresponden al campo del derecho, para considerar a todos como especialmente lesivos de los derechos reconocidos por la Ley y por tanto reprimibles por el Estado(1). Con ello se pone de relieve una vez más el espíritu y la letra de la Ley, excesivamente restrictivos, según ya hemos apuntado.

1. 8. Competencia administrativa.

El derecho a la libertad religiosa debe ser reconocido en la ordenación jurídica de la sociedad, según ya hemos señalado, de modo que pase a ser un derecho civil.

Es, por tanto, competencia del Estado el establecer el cauce legal y administrativo, no para configurar su contenido, que es de derecho natural en su esencia, sino para regular y matizar su ejercicio adoptándolo a la base socio-religiosa nacional.

La Ley regula esta competencia administrativa del Estado en su Capítulo V, (artículos 34 al 38 inclusive).

En su artículo 34, número 1, la Ley dispone que esta competencia administrativa corresponde al Ministerio de Justicia y "como órgano del mismo se constituirá en la Subsecretaría una Comisión de Libertad religiosa". En efecto, el número 1 de este artículo dice así: "La competencia administrativa de todas las cuestiones relacionadas con el derecho civil a la libertad religiosa corresponde al Ministerio de Justicia. Como órgano del mismo se constituirá una comisión de Libertad Religiosa".

(1) PEREZ-MANTADA: La libertad religiosa..., cit. pág. 396.

Queda pues claro que la competencia administrativa de todas las cuestiones relacionadas con la libertad religiosa, según el artículo 34, número 1, corresponde al Ministerio de Justicia. Y dependiente de este Ministerio se crea un organismo administrativo, para el control lícito de los aspectos civiles del ejercicio del derecho a la libertad religiosa.

Junto a este órgano continua existiendo otro, la Dirección General de Asuntos Eclesiásticos, según dispone el Decreto 1530/1968, de 12 de junio, que contiene el régimen orgánico de Justicia. Este órgano es el encargado, conforme dispone el artículo 49 del citado Decreto, de "procurar la tutela de los derechos públicos subjetivos de libertad religiosa que puedan corresponder a quienes profesen la Religión Católica", de velar en la esfera propia del Estado, por la defensa de los derechos de la Iglesia Católica", y de cuidar del cumplimiento de los principios de catolicidad establecidos en el ordenamiento jurídico del Estado".

Con ello queda claro que la defensa del principio de confesionalidad es el marco en que hay que encuadrar la Ley de Libertad religiosa que, aunque redactada en algunos puntos como norma general, contiene exclusivamente el Estatuto del Derecho civil de libertad religiosa de los acatólicos.

En cuanto a la Comisión de Libertad religiosa, el artículo 35 de la Ley establece que es a ella, a la que "corresponde el estudio, informe y propuesta de resolución de todas las cuestiones administrativas relacionadas con el ejercicio del derecho civil a la libertad religiosa",

Estas mismas funciones de la Comisión las enumera el Reglamento orgánico del Ministerio, que proclama el citado Decreto, al estructurar la Comisión de Libertad religiosa como organismo dependiente encuadrado en la Subsecretaría, conforme al artículo 107 de dicho Reglamento, que dice: "La Comisión de Libertad religiosa, creada por Ley 44/1967, de 28 de junio, y regulada por Decreto 1708/1967, de 20 de julio(1), es el órgano calificado al que corresponde de forma general, el estudio, informe y propuesta de resolución

(1) Vid. B. O. E. nº 175, de 24 de julio de 1967.

de todas las cuestiones administrativas relacionadas con el ejercicio del derecho civil a la libertad religiosa".

La Comisión está integrada por once representantes de diversos Ministerios y Organismos estatales o paraestatales, bajo la Presidencia del Subsecretario de Justicia. La enumeración de estos representantes la recoge la Ley de forma meticulosa y la repite el Decreto 1708/1967 de 20 de julio, que regula su organización y funcionamiento, y son los siguientes: " el Subsecretario del Ministerio de Justicia como Presidente; un representante de cada uno de los Ministerios de Asuntos Exteriores, Gobernación, Educación y Ciencia e Información y Turismo, designados por sus titulares; un representante del Alto Estado Mayor, un representante del Consejo Nacional del Movimiento, un representante de la Organización Sindical, el Director general de Asuntos Eclesiásticos, el Director general de lo Contencioso del Estado en representación del Ministerio de Hacienda, un funcionario del Ministerio Fiscal y otro del Cuerpo Especial Técnico de Letrados del Ministerio de Justicia con categoría de Magistrado, designados por el titular del Departamento".

El organismo funciona en Pleno y en Comisión Permanente. Será competencia del primero: a) Informar sobre todas las cuestiones relacionadas con el ejercicio del derecho civil a la libertad religiosa; b) Formular propuestas de disposiciones generales en la materia; c) Estudiar , informar y preparar en su caso, propuestas de resolución de todas las cuestiones establecidas por la Ley 44/1967, para el Ministerio de Justicia.

La Comisión Permanente la integran : el Subsecretario de Justicia, como Presidente de la Comisión; el Secretario de ésta, que es un funcionario del Cuerpo especial técnico de Letrados del Ministerio de Justicia, con categoría de Magistrado, designado por el Ministerio; el vocal representante del Ministerio de la Gobernación, y otros tres designados por el Pleno de la Comisión de entre sus miembros. Puede incorporarse en cada actuación, el vocal o vocales a cuyo Departamento afecte la cuestión a tratar.

Las funciones de la Permanente quedan muy mermadas por la enumeración amplia de las atribuidas al Pleno. Sin embargo, el Minis-

-tro de Justicia tiene la facultad discrecional de encomendarla el estudio , informe y propuesta de resolución de los asuntos que considere urgentes, dando cuenta posterior al Pleno .

La Secretaría de la Comisión, con nivel de Subdirección general , tiene las funciones de estudio, información y asesoramiento de carácter técnico, las de coordinación que resulten necesarias, y la dirección y supervisión del funcionamiento de la Oficina administrativa. Esta, a nivel de Sección, tiene como cometido las funciones administrativas y de carácter instrumental que preside la Secretaría , y tendrá a su cargo el funcionamiento del Registro que crea la Ley en su artículo 36, para inscripción de las Asociaciones confesionales no católicas reconocidas y de sus ministros de culto(1).

" La Comisión de Libertad religiosa es el Organo clave para la buena marcha de todo lo regulado en la Ley 44/1967, y su actuación , hasta el momento, ha supuesto algo tan vital para el logro de una justa y pacífica convivencia entre españoles de diversas creencias religiosas, como ha sido abrir el diálogo del Estado con las Confesiones minoritarias y tener en cuenta sus opiniones en la elaboración de la normativa complementaria de la Ley, a ellas principalmente destinada. Los informes de la Comisión, emitidos con ese espíritu ecuménico, han tenido decisiva influencia en la apertura de la regulación civil de la libertad religiosa, ya que , a título de interpretación de la Ley, se han introducido algunas modificaciones muy necesarias.

Además la propia Comisión en virtud de su facultad normativa sobre el tema, ha dado a título de Instrucciones para la aplicación de la Ley, directrices administrativas de igual sentido a-aperturista. Destaca entre ellas, la número 9/ 1968, de 13 de abril , sobre la habilitación de recintos para sepultura de los acatólicos"(2).

Por todo lo dicho hay que concluir señalando que además del control burocrático que la Ley encomienda a la Comisión de Libertad Religiosa, el artículo 34, número 1 , deja claro que la competencia administrativa de todas las cuestiones relacionadas

(1) PEREZ-LLANTADA: La libertad religiosa..op.cit. págs.405-406

(2) Ibidem.

con la libertad religiosa corresponde al Ministerio de Justicia.

Sin embargo, la Ley tiene en cuenta también la competencia del Ministerio de la Gobernación en orden al cumplimiento individual y comunitario de las Leyes y especialmente en materia de orden público. Así el artículo 37 de la Ley señala que "corresponde a los Gobernadores Civiles la vigilancia del cumplimiento de esta Ley conforme a las instrucciones del Ministerio de Justicia. Pero, hay que tener en cuenta que, según el artículo 260 de la Ley de Régimen Local corresponde de modo especial al Gobernador Civil:

" a) publicar , ejecutar y hacer cumplir las leyes y disposiciones del Gobierno; b) mantener el orden público y proteger las personas y los bienes; d) conceder o negar autorización para la celebración de reuniones u otros actos públicos; i) sancionar los actos contrarios a las Leyes y a las disposiciones del Gobierno, al orden público, a la moral y disciplina de las costumbres". La competencia , en realidad estaba genericamente establecida, y de ahí el contenido del artículo 16 de la Ley de libertad religiosa conforme al cual "el Ministerio de Justicia comunicará al Ministerio de la Gobernación para su debido conocimiento y efectos legales, tanto la constitución como la disolución de las Asociaciones confesionales no católicas".

Conforme al artículo 17 número 3 de la Ley de Libertad religiosa, la Autoridad gubernativa podrá examinar el Registro de miembros y los libros de contabilidad de las Asociaciones confesionales no católicas, pero contando con el consentimiento de sus órganos de gobierno o con el oportuno mandamiento judicial.

Según el artículo 19, el Ministerio de Justicia recabará el oportuno informe del Gobernador Civil para la anotación en el Registro Ministerial de las Secciones locales de las Asociaciones religiosas.

Asimismo, y de acuerdo con el artículo 11, "para las reuniones confesionales no católicas, será necesaria la previa autorización del Gobernador Civil de la provincia, que la concederá cuando la petición esté justificada por su finalidad religiosa, haya sido formulada por la Asociación confesional en el plazo y forma que reglamentariamente se determine y no contradiga las exigencias del orden público". Este permiso, sin embargo, sólo es necesario

para las reuniones fuera de los lugares autorizados para la celebración de actos religiosos.

Por lo demás hay que reconocer que es al Ministerio de Justicia a quien corresponde regular - según dispone el artículo 34, número 1 de la Ley ya citado- todas las cuestiones relacionadas con el derecho civil a la libertad religiosa de todos los españoles, y a quien corresponde dictar las disposiciones complementarias necesarias para el desarrollo de la Ley y su aplicación práctica.

Por otra parte, hay que señalar, una vez más, que la Ley española establece un excesivo control administrativo para regular los derechos civiles de los acatólicos que integran su derecho a la libertad religiosa, especialmente en su ejercicio social externo.

Son ejemplos de este fuerte control administrativo los artículos 8, número 2; 9, número 2; 11, número 2; 13; 14; 15; 16; 17; 18, números 2 y 3; 19; 21, número 2; 22; 24; 25; 26; 27; 29; 30, y 36. Más que suficientes, aun sin invocar el problema de los límites, para afirmar que el espíritu y la letra de la Ley española son fuertemente restrictivos y minimistas para regular los derechos civiles de los acatólicos que integran su derecho a la libertad religiosa, especialmente, como hemos apuntado, en su ejercicio social externo(1).

Así, "una forma más o menos encubierta de traspasar los límites legítimos de la intervención estatal es el establecimiento de un régimen administrativo que, o bien para el reconocimiento civil del derecho de los acatólicos y de su ejercicio, o bien para el control de la vida civil de sus manifestaciones externas religiosas, o para ambos supuestos ponga un excesivo número de trámites burocráticos que supongan la asfixia de la manifestación de la vida religiosa, especialmente en el plano social y dentro de él, en su trayectoria expansiva"(2).

Ello es debido, sin duda a la preocupación excesiva del legis-

(1) PEREZ- LLANTADA: La libertad religiosa..., obo. cit. pág. 399.

(2) Ibidem, pág. 398.

-lador de defender desde arriba la Religión católica, oficial del Estado. Con esta finalidad concreta, son muchos los artículos de la Ley que, como dice CIERCO, "instrumentan una serie de posibilidades de casi ilimitada intervención administrativa en la vida de las Asociaciones confesionales no católicas, que son: generalmente discriminatorias; casi siempre injustificadas; a menudo gravemente limitativas; con frecuencia vagamente perfiladas, concediéndose un margen excesivo a la discrecionalidad de la Administración. Es decir, técnicamente poco correctas y prácticamente peligrosas y, por todo ello, en casi todos los casos anticonstitucionales"(1).

"Esta intensa fiscalización administrativa se debe a unas circunstancias socio-político-religiosas, en vez de responder a un esfuerzo en pro de una convivencia abierta a todos los valores personales y sociales, que apuntan nuestras Leyes Fundamentales. Es decir, la Ley de Libertad religiosa olvida que el legislador, al elaborar su contenido y extensión, no debió entrar a considerar ideologías religiosas en relación con la Verdad teológica, ya que el derecho a la libertad religiosa, a regular como derecho civil, es un derecho natural anterior y superior a cualquier potestad humana. Sólo para configurarlo como derecho civil, debe darse la intervención del Estado; por otra parte, plenamente legitimado para ello. El Poder civil debe concretar su función a la tutela de la libertad religiosa de todos los ciudadanos, sin discriminaciones, con igualdad jurídica, sin más derecho a intervenir coactivamente que cuando con el ejercicio del derecho civil concreto se ponga en peligro el orden público"(2).

En todo caso es evidente que la Ley de Libertad religiosa, que formalmente no se dirige a los católicos, verifica sin embargo, una eficacísima protección civil a la Religión Católica contra los impactos, aun legítimos, que pudiera producirle la libertad religiosa de las demás confesiones; interviniendo el Estado en esa defensa de la fe de la mayoría, más allá de

(1) CIERCO(E): Derecho civil a la libertad religiosa, en Rev. Vida nueva, nº 572, de 29-4-1967, pág. 6.

(2) PEREZ-LLANTADA: La libertad religiosa, ..ob. cit. pág. 399.

lo que autorizan las obligaciones de defender los bienes que integran el orden público, que es su campo justo de actuación coactiva"(1)..

1. 9. Las garantías jurídica-administrativas.

Las garantías jurídica- administrativas de los derechos civiles que integran el derecho de libertad religiosa, las recoge la Ley 44/1967, en su Capítulo VI, que dedica a la protección de los derechos.

Hay que reconocer que, dentro de los muchos valores positivos de la Ley, éste es uno de los más importantes, ya que supone que, tras la proclamación de los diversos derechos civiles que integran la Libertad religiosa, el Estado va a proteger eficazmente la tutela de los mismos de conformidad con el párrafo segundo del artículo 6 del Fuero de los Españoles, párrafo de gran dinámica que, en conjunto, no ha acertado a plasmar la Ley(2).

Así pues, para la protección de los derechos civiles que integran el derecho de libertad religiosa, la Ley , además de las garantías contenidas en el Capítulo V, recoge otras en el Capítulo VI, precisamente las más importantes, puesto que regula el sistema de recursos administrativos

Conviene señalar , ante todo, que el artículo 38 de la Ley establece una garantía administrativa de gran trascendencia en cuanto frena decisivamente el arbitrio o discrecionalidad de la enorme intervención administrativa, que hay que considerar como típica de esta Ley. Este artículo dice así: " Las resoluciones administrativas que se dicten en materias reguladas en esta Ley habrán de ajustarse a la de Procedimiento administrativo".

Como consecuencia de ello, los recursos administrativos de alzada y de súplica, que el el artículo 40 establece deberán tramitarse en todas sus fases conforme a la Ley procesal de la Administración del Estado, de 1958.

(1) PEREZ-LLANTADA: La libertad religiosa..., ob. cit. pág.401.

(2) Ibidem, .pág.. 407..

Este artículo 40, en su número 1, establece como principio general que "la protección , en vía administrativa, del derecho a la libertad religiosa corresponde al Ministerio de Justicia", lo que es perfectamente lógico ya que él es el competente para las cuestiones relacionadas con este derecho civil.

Este principio lo concreta la Ley en el número 2 del mismo artículo, al proclamar que "contra los acuerdos de los Gobernadores Civiles se podrá recurrir en alzada ante el Ministerio de Justicia. En los demás casos, las resoluciones del Ministerio de Justicia podrán ser recurridas en súplica ante el Consejo de Ministros".

Por otra parte el artículo 41 de la misma Ley dispone que "contra las disposiciones y los actos de la Administración pública dictados en la materia objeto de la presente Ley procederá el recurso contencioso-administrativo en los términos y con los requisitos que establece la Ley reguladora de dicha Jurisdicción".

Así pues , para la protección de los derechos civiles que integran la libertad religiosa , la Ley establece los siguientes recursos: de alzada, de súplica, y el contencioso-administrativo.

1. 9. 1 Recurso de alzada.

La Ley como hemos visto establece en el artículo 40, número 2, como primer recurso el de alzada ante el Ministerio de Justicia.

Este recurso es recogido por la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958(1) como uno de los dos ordinarios para la revisión de los actos de la Administración. Mediante él, se puede recurrir cualquier resolución administrativa que no ponga fin a esta vía; es decir, que no cause estado y, concretamente en este caso, los acuerdos de los Gobernadores Civiles en materia de derechos establecidos por la Ley de Libertad religiosa.

(1) Vid. B. O.E., nº 171, de 18 de julio de 1958.

El recurso de alzada se ha de dirigir, de acuerdo con lo que dispone el artículo 122 de la Ley de Procedimiento Administrativo citada, al superior jerárquico del que dictó la resolución contra la que se recurre, bien directamente, bien por medio de la misma autoridad que dictó la resolución(1). La Ley de libertad religiosa, en el campo de su aplicación, considera como superior de los Gobernadores al Ministro de Justicia, lo que, aunque sólo sea a estos efectos, supone una excepción orgánica notable(2).

Habrà un plazo para la presentación del recurso, de quince días hábiles, y si se presentó ante el propio Gobernador Civil, éste tendrá diez días para remitirlo al Ministerio de Justicia junto con el expediente y con su informe.

La resolución del Ministerio de Justicia resolviendo la alzada confirmará, modificará o revocará el acto gubernativo. Si se produjese silencio administrativo sobre la alzada, el transcurso de cinco meses desde su interposición supondrá la desestimación y dejará expedita la vía del contencioso-administrativo(3).

1. 9. 2. Recurso de súplica.

La Ley hace posible el recurso de súplica ante el Consejo de Ministros contra las resoluciones del Ministro de Justicia, al disponerlo así expresamente, según exige el artículo 122, número 3 de la Ley de Procedimiento Administrativo, su artículo 40, número 2 ya citado.

El recurso de súplica se dirige, pues, al Consejo de Ministros, presentándolo ante la Presidencia del Gobierno en el plazo de quince días a partir de la notificación del acuerdo recurrido.

Por lo demás, su régimen y efectos es, en todo, el mismo que hemos visto para el recurso de alzada. La resolución que recaiga deja igualmente agotada la vía administrativa, conforme señala el propio artículo 40, en su número 3.

(1) Vid. B. O. E. nº 171, de 18 de julio de 1958.

(2) PEREZ-LLANTADA: La libertad religiosa..., ob. cit. p. 409.

(3) Ibidem.

1. 9. 3. Recurso contencioso- administrativo.

La Ley recoge este recurso en el artículo 41 ya transcrito; y así tras agotarse los recursos en vía gubernativa, respecto a los actos de la Administración pública, será viable acudir al poder judicial que, en competencia contencioso-administrativa, podrá según el citado artículo, examinar esa actuación con mayor objetividad y corregir o sancionar aquellas resoluciones que han de darse conforme a la Ley de Libertad religiosa. Este recurso se interpondrá, según dispone el mismo artículo 41, de acuerdo con la Ley de lo contencioso- administrativo, de 27 de diciembre de 1956(1).

Es evidente que podrán impugnarse también, y directamente, las disposiciones de carácter general que dictare la Administración del Estado, una vez aprobadas definitivamente en vía administrativa, así como los actos que se produjeran en aplicación de las mismas, si tales disposiciones no son conformes a derecho.

El demandante, mediante el recurso, podrá pretender la declaración de no ser conformes a derecho y, en su caso, la anulación de los actos y disposiciones susceptibles de impugnación. Podrá pretender también, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas adecuadas para el pleno restablecimiento de la misma, entre ellas la indemnización de daños y perjuicios cuando proceda(2). Pero el problema se presenta a la hora de valorar por los jueces la vigencia indudable del artículo 33 del Fuero de los Españoles. ¿Cómo salvar la contradicción existente entre el artículo 6, párrafo 2º y el 33 de este Fuero?

Una vía de solución a esa contradicción, puede encontrarse, según ya hemos apuntado, a base de valorar el actual espíritu que debe informar la confesionalidad que proclama el párrafo primero del artículo 6, por incidencia de su nuevo párrafo segundo, a

(1) Vid. B.O.E., nº 363, de 28 de diciembre de 1956.

(2) PEREZ-LLANTADA: La libertad religiosa..ob. cit. pág. 411.

y especialmente, a base de ponderar el nuevo campo de actos de proselitismo que trata de concretar, en la vaguedad de sus expresiones, el artículo 2, apartado dos, de la Ley de Libertad religiosa(1). Esta es, sin duda, como ya hemos indicado, la solución adoptada por la nueva Jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo que, por medio de su Sala 4ª, ha anulado resoluciones sancionadoras gubernativas en sus sentencias de 29 de febrero de 1972 y de 24 de abril de 1973, en las que ha señalado que por lo que respecta al campo de las actividades religiosas, la Ley de Orden Público, debe coonestarse con la Ley 44/1967, de 28 de junio, ya que de otro modo la libertad religiosa derecho civil en ella proclamado no tendría posibilidad de ejercicio. Estas sentencias dicen así: " El hecho de haber repartido(la recurrente contra sanción de la Dirección General de Seguridad, impuesta al amparo del artículo 2 de la Ley de Orden Público) por domicilios particulares las revistas citadas de su Secta, por difundirlas entre personas que quisieran leerlas, más bien supone el ejercicio privado de la instrucción o enseñanza de sus creencias religiosas entre quienes así lo manifestaban, pero sin que con ello se pueda deducir que trataba de convencer a nadie, ni menos emplear los medios enumerados en el precepto antes transcrito (artículo 2, apartado dos) de la Ley de Libertad religiosa para realizar propaganda ilegítima con el fin de ganar adeptos para su confesión religiosa"(2).

Por otra parte, el capítulo IV de la Ley 44/ 1967 establece garantías jurídicas regulando la prueba de que se profesa o no una determinada confesión religiosa acatólica. Así el artículo 32 señala que la adscripción se acreditará mediante certificación del ministro de culto competente; mientras que la no adscripción se probará por simple declaración expresa del interesado .

Cuando se trate de probar el abandono de una confesión religiosa se exigirá, de acuerdo con el número 3 de este artículo 32,

(1) PEREZ-LLANTADA: La libertad religiosa..., ob. cit. pág.414.

(2) Vid. Repertorio de Jurisprudencia citado(1972), nº 1141, y (1973), nº 1864.

la prueba de que el mismo ha sido comunicado al ministro competente de la religión que hubiere sido abandonada. Esta disposición es evidente que constituye una coacción por parte del Estado a la libertad de profesión de una fe religiosa,"ya que desde un punto de vista humano es algo sumamente desagradable y que se presta además a actos de proselitismo, el tener que obtener la prueba de esa comunicación, en muchos casos; si bien es verdad que quedan métodos para conseguirla sin que juegue esa coacción moral sobre el desidente, por ejemplo la comunicación notarial"(1).

En cuanto a la garantía jurídica de las obligaciones que hayan sido contraídas en virtud de una adscripción confesional anterior, el artículo 33 dispone que cualquier cambio no les afectará, en absoluto. Con ello es elaro que el artículo vela acertadamente por la seguridad y la estabilidad de las relaciones jurídicas surgidas del ejercicio de unos derechos civiles(2).

1. 10.¿Incurre la Ley en Contrafuero ?

El recurso de Contrafuero fué creado por la Ley Orgánica del Estado y su estructuración la recoge dicha Ley en el título X, artículos 59 a 66, estableciendo su procedimiento la Ley de 5 de abril de 1968(3).

La calificación de recurso para este instrumento político no es muy acertada técnicamente, ya que la legitimación activa para la interposición del mismo está limitada al Consejo Nacional del Movimiento y a la Comisión Permanente de las Cortes, no dejándose a los ciudadanos más posibilidad que la de promover la actividad de estos Organos haciendo uso del Derecho de Petición(4). Por otra parte tampoco es exactamente su función la que tiene en otros Ordenamientos jurídicos Fundamentales el "recurso de inconstitucio-

(1) PEREZ- LLANTADA: La libertad religiosa..., cit. pág. 414.

(2) Ibidem

(3) Vid. B. O. E., nº 84, de 6 de abril de 1968.

(4) Vid. arts 60 de la Ley 1/1967, 4 de la Ley 8/1968 y 3 de la Ley 92/1960.

-nalidad", aunque se haya tenido presente en la regulación de Contrafuero el Derecho histórico español y el significado de garantía jurídica contra las desviaciones del Poder que allí encerraba(Cfr. Preámbulos de la Ley 8/ 1968) (1).

Sin embargo , hay que reconocer que el Recurso de Contrafuero protege en el vértice la organización jurídico- política fundamental del Estado al admitirse contra todo acto legislativo o contra cualquier disposición general del Gobierno que conculque los Principios del Movimiento Nacional, en cuanto Norma primaria constitucional de España o cualquiera de las demás Leyes Fundamentales de la Nación que, en un segundo escalón, integran el sistema político básico(Cfr. artículo 59 de la Ley 1/1967)(2).

Por lo que se refiere a la Ley de libertad religiosa,"es evidente que tanto el Consejo Nacional como la Comisión Permanente de las Cortes no entendieron que el Texto incurría en Contrafuero, ya que se dejó pasar el plazo legal para interponer el recurso correspondiente que señala el artículo 61 de la Ley Orgánica. Tampoco tenemos noticia de que ningún ciudadano ejercitase su derecho de petición,solicitando la actuación de los Organos legitimados activamente para entablarlo"(3).

La Ley 44/ 1967, como ya hemos expuesto repetidamente, está toda ella informada por la defensa a ultranza de la Religión Católica en cuanto es la oficial del Estado español, que con apoyo en el artículo 33 del Fuero de los Españoles integra la base de la unidad espiritual de la Patria. Pero ello constituye un límite para el ejercicio de los derechos proclamados, expresamente rechazado por la letra y el espíritu de la Declaración vaticana(4).

Por otra parte es incuestionable que el II Principio de los Fundamentales del Movimiento Nacional no ha sabido plasmarse en la Ley de Libertad religiosa, ya que en puntos sustanciales, como el de

(1)PEREZ -LLANTADA: La libertad religiosa..op.cit., pág. 415.

(2) Ibidem.

(3) Ibidem, pág. 416.

(4)

los límites y en todo su contexto, no concuerda con la Declaración "Dignitatis humanae", Y no conviene olvidar que la Declaración conciliar tiene una manifiesta base de derecho natural, expresión de la Ley Divina, de que la Iglesia es intérprete seguro y cuyo acatamiento, la nación española considera, según indica el Principio II citado, como timbre de honor.

Disvirtuada así la Ley de Principios del Movimiento Nacional, hay que señalar que la Ley no acata el artículo 6 del Fuero de los Españoles, concreción del II Principio Fundamental.

En efecto, pues la Ley 44/1967 no plasmó el dinamismo del artículo 6, párrafo 2 del repetido Fuero, que claramente recoge el derecho a la libertad religiosa de todos los ciudadanos en nuestro Ordenamiento jurídico fundamental, y que al integrar con el párrafo primero el binomio "confesionalidad- libertad religiosa", debe darle un nuevo espíritu al primer término, radicalmente distinto al que tenía unido a la tolerancia, en la redacción de 1945(1).

Ahora bien, consideramos haber demostrado ampliamente a lo largo de este trabajo que ese párrafo 2º del artículo 6 del Fuero de los Españoles, sólo en algunos pasajes de la Ley de Libertad religiosa ha sido objetivamente concretado, conforme a su espíritu, que no es otro que el de la "Declaración de libertad religiosa" a cuyo aliento surgió y que debió ser auténtica "ratio legis" de la ley española, como promete su "Preamble" y el del Fuero de los Españoles (2).

" Parece, por tanto, en buena lógica, que al vulnerarse más o menos veladamente esos Textos Fundamentales de nuestro ordenamiento constitucional, el Recurso de Contrafuero pudo intentarse de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Estado y en base de lo preceptuado en el artículo 3 de la Ley de 17 de mayo de 1958. Procesalmente, decayó la acción de todos para hacerla; materialmente, no deja por ello de ser la Ley inadecuada a las Normas Fundamentales vigentes, más abiertas a un espíritu ecuménico, como base de la convivencia de todos los ciudadanos sin desigualdades en

(1) PEREZ) LLANTADA: La libertad religiosa..., ob. cit. pág. 417.

(2) Ibidem, págs. 417- 418.

en sus derechos civiles por razón de sus creencias religiosas"(1).

Pero, caso de haberse intentado el contrafuero, ¿hubiera afectado a la totalidad de la Ley, o sólo a aquellos puntos en que se separa del modelo de la Declaración Vaticana?

" Del contexto de la regulación de la Ley Orgánica del Estado, dice HERRERO TEJEDOR, parece desprenderse que la disposición (contrafuero) ha de ser anulada en su totalidad, pero el problema no queda totalmente resuelto porque, al hablar de la posible suspensión de la disposición recurrida durante la tramitación del recurso, la Ley Orgánica del Estado habla de que ésta puede afectar a la disposición o al precepto o preceptos que de ella resulten afectados por el recurso (artículo 61)"(2).

Esto mismo viene a señalar la Ley reguladora del Recurso en sus artículos 10 y 19. Por todo ello, y en el supuesto que comentamos, es indudable que la anulación hubiera afectado a toda la Ley, ya que si su letra en muchos de sus preceptos es conciliar al no serlo en los fundamentales hace que tampoco lo sea en todo su espíritu y contexto(3).

Todo lo expuesto nos lleva a concluir señalando que la Ley 44/1967 intenta acomodarse a la Declaración "Dignitatis humanae" por imperativo del II de los Principios del Movimiento Nacional, pero es evidente que no lo consigue, ya que no ha acertado a insertar en nuestro ordenamiento jurídico el derecho civil a la libertad religiosa garantizado por una eficaz tutela jurídica sin más límites que los derivados de la defensa del justo orden público, tal como la Declaración vaticana dispone.

Asimismo la Ley ha quedado lejos del artículo 6 del Fuero de los Españoles, que se proponía desarrollar a nivel de norma ordinaria. Sin embargo, hay que reconocer que la Ley 44/1967, reguladora del derecho civil a la libertad en materia religiosa, constituye un paso notabilísimo sobre la situación precedente y un esfuerzo meritorio por reconocer y desarrollar el derecho de li-

(1) PEREZ-LLANTADA: La libertad religiosa: ob. cit. pág. 418.

(2) HERRERO TEJEDOR (Fernando): El Estado de Derecho, en las Leyes Fundamentales españolas, en Rev. de Estudios Políticos, nº 152, marzo-abril, 1967, pág. 200.

(3) PEREZ-LLANTADA: La libertad religiosa, ... ob. cit. pág. 418.

-bertad religiosa tal como defendemos en este trabajo y como el Concilio Vaticano II proclama.

Por otra parte, el fuerte dinamismo del artículo 6 del Fuero de los Españoles, incorporado al Concordato, que el nuevo espíritu conciliar pone en revisión, permite esperar para un futuro, no muy lejano una auténtica Ley de Libertad religiosa para todos los españoles que sustituya la actual, que realmente ha quedado en simple Estatuto para la libertad de las confesiones religiosas no católicas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

RECONOCIMIENTO Y DESARROLLO DEL DERECHO DE LIBERTAD
RELIGIOSA EN LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DE LA
LEY 44/1967.

2. Reconocimiento y desarrollo del derecho de libertad religiosa en las disposiciones complementarias.

Toda Ley precisa de normas de inferior rango que maten sus líneas generales para la aplicación práctica de sus disposiciones.

La Ley 44/ 1967, necesitaba también de esas normas para completar y aplicar su contenido.

Por ello, la misma Ley en su disposición transitoria primera señala que el ministro de Justicia dictará, en su caso, las disposiciones necesarias para la ejecución de la presente Ley.

Hasta el momento presente las disposiciones complementarias, que ya se han dictado y que a continuación intentamos analizar, son las siguientes:

2. 1. El "Reglamento" para la aplicación de la Ley.

Entre las varias disposiciones que se han dictado para completar y aplicar el contenido de la Ley 44/1967 hay que destacar fundamentalmente la Orden del Ministerio de Justicia de 5 de abril de 1968, que a pesar de su modesto título: "Normas complementarias para la ejecución de la Ley 44/1967, de 28 de junio, regulando el ejercicio del derecho civil a la libertad religiosa", merece, sin embargo, por su valor excepcional, ser considerada como verdadero Reglamento para la aplicación de la Ley.

La Orden ministerial comprende tan sólo veintisiete artículos, con una disposición transitoria y otra adicional, distribuyéndose aquéllos en cuatro capítulos: el primero trata "del reconocimiento legal y registro de las Asociaciones confesionales y ministros de los cultos no católicos"; el segundo, " del registro de miembros y de los libros de contabilidad de las Asociaciones confesionales no católicas"; el tercero, " de los lugares de culto de las Asociaciones confesionales no católicas y reuniones con fines religiosos", y el cuarto contiene las "disposiciones generales"(1).

(1) Vid. B.O. E. nº 86, de 9 de abril de 1968.

Esta Orden Ministerial va a concretar su regulación al campo de los derechos comunitarios, regulados por la Ley. El articulado del Reglamento trata de reforzar el aspecto institucional de las confesiones no católicas, encuadrándolas en la estructura social de la nación mediante su normativación en el ordenamiento jurídico del país(1).

Siguiendo a CORRAL y a PEREZ-LLANTADA dividiremos las normas complementarias contenidas en el texto, en dos clases: "unas, de carácter general, y otras de carácter particular. Las de carácter general afectan a la actuación de la Administración del Estado como tal, y las de carácter particular se refieren a puntos concretos de la Ley, en respuesta interpretativa a las observaciones hechas a las disposiciones legales por representantes de las confesiones religiosas acatólicas"(2).

En efecto, pues, si la Ley, como declaró expresamente el Ministro de Justicia(3), no fué consultada con las confesiones acatólicas, aunque sí su boceto - el Estatuto para los Acatólicos de 1961 - el Reglamento sí fué objeto de diálogos con ellas según las directrices de la Comisión de Libertad religiosa, por lo que tiene un cierto aire de norma bilateral paccionada. Las observaciones de los acatólicos han sido atendidas, en cuanto el texto de la Ley lo permitía, en las normas complementarias(4).

El primer criterio genérico de la Orden Ministerial es el de extremar el sometimiento de la actuación administrativa a la Ley

(1) PEREZ-LLANTADA: La libertad religiosa..., ob. cit. pág. 423.

(2) CORRAL(C): Normas complementarias para el ejercicio del derecho civil a la libertad en materia religiosa, en Rev. Española de Derecho Canónico, vol. XXIV, nº 68, mayo-agosto 1966, pág. 403; y del mismo autor: Comentario a las normas complementarias de la Ley de libertad religiosa en "Relaciones de la Iglesia y el Estado" cit. pág. 419 y sigs.; PEREZ LLANTADA: La libertad religiosa cit. pág. 423-424.

(3) ORIOL Y URQUIJO: Conferencia de Prensa de 7-3-67, en "YA" del 8-III-1967

(5) PEREZ-LANATADA: La libertad religiosa cit. pág. 424.

de Procedimiento. A estos efectos, el artículo 1 establece que "en lo no previsto (por la Ley 44/1967) se estará a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958", a efectos del procedimiento legal en España de las confesiones religiosas no católicas, mediante su constitución en Asociaciones confesionales.

Esta tendencia a evitar la discrecionalidad de los actos administrativos la reflejan claramente los artículos siguientes: el 22, en orden a decretar la suspensión total o parcial de la actividad de las Asociaciones acatólicas; el artículo 23, para los recursos de alzada y súplica y para el contencioso-administrativo; el artículo 11, número 2, que insiste en la necesidad de mandamiento judicial para poder examinar sin consentimiento de los órganos rectores de las Asociaciones, su Registro y sus libros.

"Las normas de carácter particular, que son la mayoría del contenido de la Orden Ministerial, tratan de corregir, por vía interpretativa, la única posible dado el rango de la norma complementaria, los defectos más acusados de la Ley, señalados en las reuniones conjuntas de los días 27 y 28 de noviembre de 1967, entre los Letrados mayores, miembros de la Comisión de Libertad religiosa, acompañados de los correspondientes expertos y los miembros de la Comisión de Defensa Evangélica"(1).

El Reglamento sigue, en su articulado, el texto del capítulo III de la Ley, referente a los derechos comunitarios", única materia que intenta completar mediante una acción en muchos casos interpretativa. "Ese grupo de derechos presentaba en la Ley una regulación sólo admisible en el plano centrípeto y totalmente precaria en el plano centrífugo, por lo que cualquier mejora que pudiera aportarse era de enorme interés para lograr la justa convivencia de católicos y acatólicos entre sí, y ante el Estado, en el ejercicio del derecho civil a la libertad religiosa"(2).

(1) PEREZ-LLANTADA: La libertad religiosa..op.cit. págs.424-425.

(2) Ibidem, pág. 425.

La Orden Ministerial, en su capítulo I, que se refiere al reconocimiento legal y registro de las Asociaciones y ministros del culto no católico, comprende los artículos 1 al 10.

Este capítulo I refleja esa mayor amplitud de criterio y el haber escuchado las objeciones de los sujetos activos de los derechos que la Ley contenía. Todo lo cual, se pone de relieve concretamente en los artículos siguientes: en el artículo 1, que hace jugar como suplementaria a la Ley de Procedimiento Administrativo; en el artículo 3, que señala que cuando una confesión religiosa no católica no cuenta con un número suficiente de miembros de nacionalidad española residentes en territorio nacional, podrá ser representada por tres de sus miembros, cualquiera que sea su nacionalidad, residentes en España, a los solos efectos de solicitar su reconocimiento legal como Asociación española con fines religiosos. Evidentemente, este criterio permite una suficiente expansión, bastante mayor que la que contenía el artículo 15, número 2, de la Ley(1).

Asimismo, el artículo 6, al señalar que la inscripción de los ministros del culto en el Registro deberá solicitarse a través de la Asociación confesional respectiva, por medio de escrito en el que, entre otros datos, conste la "denominación, funciones y ámbito de su ministerio", parece dejar clara la independencia que para su nombramiento posee la Asociación confesional, sin que se requiera la previa aprobación por el Estado para ejercer su actividad cultural. El poder civil sólo acredita la condición de ministro en orden a los efectos civiles, y otorga la protección de la Ley para los mismos(2).

El artículo 9, con referencia a la creación de Secciones locales de las Asociaciones nacionales, sin personalidad distinta de la de éstas, establece que cuando en los Estatutos no se hubiera previsto nada sobre el tema, se presumirá justificada la petición de la creación cuando el número de miembros residentes en la localidad exceda de veinte.

(1) PEREZ-LLANTADA: La libertad religiosa..., ob. cit. pág.426.

(2) Ibidem.

El capítulo II recoge lo referente a la materia de fiscalización interna de las Asociaciones, regulando el registro de miembros y los libros de contabilidad de las mismas. Comprende del artículo 11 al 23.

Hay que señalar que si los artículos 17 y 18 de la Ley reflejaban un criterio de publicidad para los datos en ellos contenidos, fácilmente conseguibles, el artículo 11 del Reglamento otorga tanto al Registro miembros como a los libros de contabilidad el carácter de reservados. Estos serán foliados y encuadernados; se habilitarán por el Gobierno Civil antes de su utilización y, dentro del primer trimestre de cada año, serán sellados como prueba de que no se han alterado, extendiéndose diligencia de los folios utilizados.

El artículo 20, concreta en que casos, previo mandamiento judicial, podrán ser examinados tanto el Registro de miembros como los libros de contabilidad, que estimaren necesarios; además se señala respecto a estos últimos que sólo serán obligatorios el de inventarios y el de ingresos y gastos. Según el artículo 21, el reconocimiento lo acordará el Ministro de Justicia.

El artículo 22 determina que "para decretar la suspensión total o parcial de actividades de una Asociación confesional no católica, por las causas establecidas en el número 3 del artículo 18 de la Ley/1967, de 28 de junio, deberá tramitarse el procedimiento previsto en el capítulo II del título VI de la Ley de Procedimiento Administrativo, dictándose la correspondiente resolución en el plazo de un mes a contar de la fecha de la providencia en que se ordene la incoación del expediente". Y, continúa diciendo el mismo artículo, "si existieran elementos de juicio suficientes, podrá el Ministro de Justicia adoptar durante la tramitación del expediente, las medidas provisionales que estimen oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, y que no afecten a las actividades estrictamente de culto de la Asociación".

El capítulo III se refiere a los lugares de culto de Asociaciones confesionales no católicas y reuniones con fines religiosos.

Comprende dos artículos, 23 y 24. El primero de ellos, establece, en orden a las solicitudes para abrir lugares de culto y

demás Centros que sean necesarios para el servicio y la formación religiosa de los miembros de la confesión respectiva, previstos en el artículo 22 de la Ley, que se derigirán al Ministerio de Justicia, mediante escrito firmado por uno al menos de los representantes de la Asociación confesional no católica, y añade que "acreditado el cumplimiento de lo previsto en el artículo 22 de la Ley, se procederá a la anotación en el Registro de los datos expresados en dicho artículo".

El artículo 24 señala que "para la celebración de las reuniones con fines religiosos fuera de los lugares señalados en el artículo 11,1, de la Ley, la previa autorización del Gobernador civil de la provincia se solicitará mediante escrito de uno al menos de los representantes de la respectiva Asociación confesional no católica, en el que se expresará el objeto de la reunión, lugar, día y hora de la misma. El escrito será presentado en el Gobierno Civil con diez días de antelación como mínimo, a la fecha señalada para la reunión, y deberá acordarse inexcusablemente lo procedente en el término de cinco días".

Señala asimismo un trámite semejante para la celebración de actos de culto público fuera de los lugares autorizados. Sin embargo, dispone que para las reuniones con fines religiosos que no excedan de veinte personas, a celebrar en el domicilio de quien profese una confesión religiosa no católica, no se requerirá previa autorización gubernativa. Se muestra, así, de forma clara, la gran amplitud de esta disposición del número 3 del artículo 24, que permite, de esa forma, reuniones religiosas interconfesionales.

El capítulo IV recoge las disposiciones comunes a los capítulos anteriores. Comprende tres artículos, 25, 26 y 27. El primero de ellos estructura la notificación de las resoluciones del Ministro de Justicia al de Gobernación y a los Gobernadores Civiles, que se formalizarán al mismo tiempo que se notifiquen a los interesados.

El artículo 26 se refiere a los recursos de alzada y súplica que establece el artículo 40 de la Ley, para señalar que su tramitación se atemperará a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo. Dispone asimismo que la resolución del Consejo de Ministros agota la vía administrativa y sólo cabe contra ella el recurso contencioso-administrativo.

Finalmente, el artículo 27 indica que "siempre que la Comisión

de Libertad Religiosa lo considere de interés para la mejor ilustración en todas las cuestiones relativas a la aplicación de la Ley, podrá recabar , entre otros informes, el de los representantes de confesiones religiosas no católicas legalmente reconocidos".

El texto de este artículo representa, sin duda , la mejor aportación del Reglamento a la interpretación de la Ley de Libertad religiosa. Pues el espíritu de colaboración perfilado en este artículo representa el verdadero camino para entender la confesionalidad , tal como lo exige un verdadero reconocimiento del derecho de libertad religiosa y la misma Iglesia.

El Reglamento, es evidente que, no puede modificar esencialmente la Ley que debe aplicar, sin embargo, abre notoriamente el espíritu ecuménico que la Ley debía reflejar. Intenta una interpretación amplia de la Ley , en lo posible. No obstante, para ver mejor en que medida ello es así, es necesario analizar los siguientes puntos:

a) El reconocimiento de la personalidad jurídica de las confesiones minoritarias. En este punto es preciso desvanecer "un equívoco: el confundir existencia y actividad de aquellas en si mismas consideradas, con su existencia y actividad en cuanto operantes en la esfera social de la comunidad política"(1). En aquel orden primario , como señala PEREZ-LLANTADA(2), su autonomía es de derecho natural y no afecta a la regulación legal del Estado.

"En el segundo aspecto es donde han de concurrir las normas jurídicas civiles que garanticen la pacífica y justa convivencia. Debe quedar, pues, a la libre opción de las distintas comunidades acatólicas, la solicitud o no de su reconocimiento legal. . . .

Además, cada comunidad, como asunto de su existencia y actividad propias, intrínsecas, debe poder formar y designar sus propios ministros y, por tanto, es ajeno a la potestad del Estado su reconocimiento, quedando bajo el poder civil su actuación en la sociedad política en que opera la Asociación. El Estado sólo puede acreditar al ministro por lo que se refiere a los efectos jurídicos ante el ordenamiento legal establecido"(3).

(1) CORRAL(C): Normas complementarias..., op. cit. pág. 405; PEREZ-LLANTADA: La libertad religiosa.. ob. cit. pág. 429.

(2) PEREZ) LLANTADA: La libertad religiosa..ob. cit. pág. 429.

(3) Ibidem.

Explícitamente el Reglamento es fiel eco de la Ley en este punto; sin embargo, el artículo 7, número 2, parece tender a la interpretación conveniente para ello, fijando el campo de la función estatutal.

Asimismo, como hemos señalado anteriormente, el artículo 3 del Reglamento facilita la posibilidad de solicitar el reconocimiento de las Asociaciones. También el artículo 9, en su número 1, facilita la solicitud de establecimiento de Secciones locales.

En orden al procedimiento sancionador, es evidente que la aplicabilidad de la Ley de Procedimiento Administrativo es garantía más adecuada para canalizar la suspensión total o parcial de las actividades de la Asociación encuasada; previendo el Reglamento que, durante la tramitación, las medidas provisionales adoptadas respeten las actividades estrictamente de culto(1).

b) En cuanto a la actividad de las Asociaciones no católicas, sus representantes apuntaban la necesidad de un menor control en su vida interna y una mayor independencia para el culto público que la que brindaba una interpretación estricta de la Ley.

En este sentido, el Reglamento refuerza el carácter reservado del libro registro de miembros y de los libros de contabilidad de las Asociaciones. El mandamiento judicial, subsidiario del permiso denegado por los órganos de gobierno de la Asociación para el examen de los mismos, sólo procederá: si se realizan actividades o se dan a lo bienes un destino no coincidente con los fines estatutarios o con el régimen establecido en la Ley de Libertad religiosa o se infringe el propio Reglamento de ésta. Para recabar el oportuno mandamiento judicial, previsto en el número 3 del artículo 17 de la Ley, el Ministerio de justicia trasladará integralmente al Fiscal de la Audiencia Provincial respectiva el ... correspondiente acuerdo de reconocimiento de los libros(2).

Por lo que respecta al artículo 21, de la Ley, nada recoge el Reglamento que dulcifique la intervención de la autoridad gubernativa para la autorización de los actos del culto público fuera de los templos y lugares autorizados.

(1) PEREZ-LLANTADA: La libertad religiosa... ob. cit. pág. 429.

(2) Vid. Orden Ministerial de 5 de abril de 1968 cit. art. 20 y 21, número 3, en B. O. E. cit.

c) En orden al derecho de reunión, conviene señalar que, se formularon peticiones por los acatólicos, de cara a la redacción del Reglamento, apuntando la necesidad de dejar vigente la Ley de 15 de julio de 1880 como criterio interpretativo para señalar qué reuniones son públicas. Para esta Ley lo eran aquellas a las que asisten más de veinte personas y se celebran fuera del domicilio habitual de una de ellas(1). El Reglamento recoge, en efecto, en su artículo 24, número 3, que " no se requerirá previa autorización gubernativa para las reuniones con fines religiosos que, no excediendo de veinte personas, se celebren en el domicilio de quien profese una confesión religiosa no católica ".

Ahora bien, cuando se precise autorización, esta se pedirá, según dispone el número 1 del mismo artículo ,ya anteriormente analizado, con diez días de antelación a la reunión y el Gobernador Civil acordará inexcusablemente lo procedente en el término de cinco días.

Por todo lo expuesto, se aprecia que, por la vía del diálogo abierto por la Comisión de Libertad religiosa, se ha podido mejorar sensiblemente con una interpretación amplia, algunos puntos referentes al capítulo II de la Ley, único que trata de reglamentar la Orden Ministerial de 5 de abril de 1968.

De esta forma, pues, "si España adoptó con la Ley 44/ 1967 el sistema francés de regulación unilateral de la libertad religiosa referida a las confesiones no católicas, con las conversaciones previas a la elaboración de la citada Orden del Ministerio de Justicia implícitamente se apunta el sistema bilateral o de pactos, que supone un espíritu de mayor respeto para la ciudadanía de los acatólicos"(2).

El Reglamento ha intentado una interpretación de la Ley amplia, como hemos dicho, en lo posible, más en consonancia con la dinámica del artículo 6 del Fuero de los Españoles, que el texto de la Ley trata de aplicar. Como fruto más inmediato se consigue, en el campo técnico, una mejora de las garantías de las Asociaciones no católicas en su aspecto institucional, y dar testimonio

(1) Vid. PEREZ- LLANTADA: La libertad religiosa...9b. cit. p 430.

(2) Ibidem, pág. 432.

de un espíritu de confesionalidad abierta más en consonancia con el reconocimiento para todos de **un derecho de libertad religiosa** civilmente regulado por el Estado , que no conculque la justicia distributiva(1). Por todo ello, hay que reconocer que, el Reglamento contribuye, en gran medida, al reconocimiento y desarrollo del derecho de libertad religiosa.

(1) PEREZ-LLANTADA: La libertad religiosa...ob. cit. pág. 431.

2. 2. Otras disposiciones.

La Ley 44/1967, en su Disposición final primera, dispone, según ya hemos señalado anteriormente, que " el Ministro de Justicia propondrá al Gobierno o dictará , en su caso, las disposiciones necesarias para la ejecución de la presente Ley". De las ya dictadas , hemos analizado la más importante de todas, con carácter de auténtico Reglamento para la aplicación de los derechos comunitarios establecidos por la Ley. Sin embargo, esta Orden de 5 de abril, ni es la única, ni siquiera la primera en el tiempo, de las disposiciones complementarias que fraccionadamente, en diversos aspectos, van integrando el ordenamiento jurídico español, regulador del derecho civil de libertad religiosa(1).

Por otra parte, debemos señalar que no hemos encontrado publicada en el Boletín Oficial del Estado la disposición conteniendo las normas derogadas por la Ley de Libertad religiosa, lo que ordenaba la disposición final segunda, cuyo texto dice así: "Quedan derogadas cuantas leyes o disposiciones administrativas se opongan a lo establecido en la presente Ley. En el plazo de dos meses, el Ministerio de Justicia publicará el preceptivo cuadro de derogaciones".

Así pues, hasta el momento presente, y en un orden cronológico, las principales disposiciones complementarias aparecidas en el Boletín Oficial del Estado son: el Decreto 1708/1967, de 20 de julio(2), del Ministerio de Justicia, sobre organización y funcionamiento de la Comisión de Libertad religiosa; la Orden de igual Departamento Ministerial de 26 de julio de 1967(3), por la que se establecía el plazo para el reconocimiento legal de las confesiones no católicas , que venían manteniendo actividades religiosas en España; La Orden del Ministerio de Educación y Ciencia,

(1) PEREZ- LLANTADA: La libertad religiosa..., ob. cit. p. 232.

(2) B.O.E. nº 175, de 24 de julio de 1967.

(3) B.O.E., nº 185, de 4 de agosto de 1967.

de 23 de octubre de 1967(1), por la que se desarrolla lo dispuesto en el artículo 7, 3, de la Ley 44/1967 sobre el ejercicio del derecho civil de libertad religiosa en los Centros de Enseñanza; la Orden del Ministerio de Justicia de 12 de diciembre de 1967(2), por la que se prorrogaba el plazo establecido en la de 28 de julio; la Orden del mismo Departamento ya comentada, de 5 de abril de 1968(3), dando normas complementarias para el ejercicio del derecho civil a la libertad en materia religiosa; el Decreto 1530/1968, de 12 de junio (4), del Ministerio de Justicia, que publica el Reglamento **orgánico** del mismo y que encuadra la distinta función de la Dirección General de Asuntos Eclesiásticos y de la Comisión de Libertad religiosa; el Decreto 1138/1969, de 22 de mayo(5), por el que se modifican determinados artículos del Reglamento del Registro civil; la Ley 44/1971, de 15 de noviembre (6), que modifica la Sección 3ª, Capítulo II, Título II, del Libro II del Código Penal, y la Ley 14/1973, de 19 de diciembre(7), sobre negativa a la prestación del Servicio Militar, en cuanto afecta directamente a los objetores de conciencia.

Asimismo hay que anotar, entre las Normas complementarias, las Instrucciones de la Comisión de Libertad religiosa, entre las que destaca la número 9/1968, de 13 de abril, referente a la habilitación de recintos aceduidos para sepultura de los acatólicos, la Instrucción sobre el expediente previo al matrimonio de la Dirección General de los Registros y del Notariado, publicada en el Boletín Oficial del Estado del día 15 de abril de 1974 y las últimas **disposiciones**, dictadas, sobre enseñanza religiosa.

De todas estas normas hemos estudiado ya el Decreto de 20 de julio de 1967, que constituía la Comisión de Libertad religiosa,

(1) B.O. E., nº 273, de 15 de noviembre de 1967,

(2) B.O.E., nº 300, de 16 de diciembre de 1967.

(3) B.O.E., nº 86, de 9 de abril de 1968

(4) B.O.E., nº 169, de 15 de julio de 1968.

(5) B.O.E., nº 144, de 17 de junio de 1969.

(6) B.O.E., nº 274, de 16 de noviembre de 1971.

(7) B.O.E., nº 24662, de 20 de diciembre de 1973.

órgano clave para la puesta en marcha de la Ley, y el Decreto de 12 de junio de 1968 que la encuadraba orgánicamente en el Ministerio de Justicia; así como la Orden de 5 de abril de 1968, con rango de Reglamento, aunque parcial. Restanos, por tanto, examinar las demás normas anteriormente citadas, lo que procuraremos hacer, a continuación, en los apartados siguientes.

2. 2. 1. Ordenes de 28 de julio y 12 de diciembre de 1967(1).

La primera Orden, en su artículo único, concedía un plazo que expiraba el 31 de diciembre de 1967, considerado como prudencial y suficiente para que las confesiones acatólicas pudieran solicitar del Ministerio de Justicia su reconocimiento civil y adquirir así personalidad jurídica frente al Estado.

La posibilidad de solicitar ese reconocimiento y la consiguiente inscripción en el Registro Ministerial se refería exclusivamente a las confesiones no católicas que desarrollaban, en el momento de la entrada en vigor de la Ley, sus actividades religiosas en España. La solicitud debía cumplir por tanto los requisitos fijados por los artículos 13 y siguientes de la Ley 44/1967(2).

La complejidad de éstos y la promesa de elaboración de normas complementarias para la aplicación de la Ley, de carácter general y de adaptación a la misma, que la propia Orden Ministerial anunciaba en su Preámbulo, llevó a una prudente retracción masiva por parte de las confesiones acatólicas. Pero a propuesta de la Comisión de Libertad Religiosa y en atención a lo expuesto por diversas confesiones acatólicas sobre los problemas que la solicitud plantearía, se dictó una nueva Orden de 12 de diciembre de 1967(3) que prorrogó el plazo hasta el 31 de mayo de 1968.

En efecto, la Orden de 12 de diciembre de 1967, expresamente,

(1) B.O.E., nº 185, de 5 de agosto de 1967, y nº 300 de 16-XII-67.

(2) BEREZ-LLANTADA: La libertad religiosa..., cit. pág. 434.

(3) B.O.E., nº 300, de 16 de diciembre de 1967.

dice así: " En atención a lo expuesto por diversas confesiones acatólicas, y a propuesta de la Comisión de Libertad Religiosa, este Ministerio ha dispuesto:

Artículo único. Se prorroga hasta el 31 de mayo de 1968 el plazo establecido en la Orden de este Ministerio de 28 de julio de 1967 para que las confesiones no católicas que desarrollan actualmente en España sus actividades religiosas puedan solicitar ante el Ministerio de Justicia su reconocimiento legal en la forma prevenida en los artículos 13 y siguientes de la Ley 44/1967, de 28 de junio".

El resultado de la prórroga fué efectivo y así en mayo de 1973 estaban ya registradas 194 Asociaciones confesionales no católicas(1). No en vano, además, el Reglamento, en su esfuerzo por encauzar en la legalidad civil la vida del mayor número posible de éstas, había previsto en su disposición transitoria que" (2) " las peticiones de reconocimiento de Asociaciones presentadas con anterioridad a la presente disposición, se completarán en su caso, por los interesados, para acomodarlas a cuanto en la misma se previene".

Así pues, vencido el plazo de 31 de mayo de 1968, "de iure", las Asociaciones religiosas no católicas con actividad entonces en España, hay que suponerlas divididas en dos grupos: el primero comprendería todas aquellas Asociaciones religiosas no católicas que hubiesen obtenido el reconocimiento civil de su personalidad y por tanto serían capaces de derechos y obligaciones civiles en cuanto operantes en la esfera social de la comunidad nacional, garantizados por el Estado; el segundo grupo estaría formado por las demás Asociaciones religiosas no católicas, que, teniendo en la esfera religiosa existencia y actividad propias, serían desconocidas por el Estado en cuanto a su actuación jurídica en el ámbito social de la comunidad política, ya que según

(1) Resoluciones sobre reconocimiento legal de Asociaciones confesionales no católicas, dictadas hasta el día 7 de mayo de 1973, publicadas por el Centro de Publicaciones del Ministerio de Justicia, Madrid, 1973.

(2) PEREZ-LLANTADA: La libertad religiosa..., ob. cit. pág. 435.

el artículo 13, número 2 , de la Ley, " el reconocimiento tiene por objeto permitir y garantizar a las Asociaciones confesionales no católicas el ejercicio de las actividades que les son propias".

Es evidente, pues, que el primer grupo cuenta ante el Estado, como personas jurídicas, con un Estatuto propio, que regula su actuación representado por la Ley 44/1967 y sus normas complementarias y que garantiza su actividad en el ámbito del derecho civil, o "dicho de otro forma, el derecho natural a la libertad religiosa sólo será reconocido derecho civil a las asociaciones que así lo solicitaron, lo que no quiere decir que las demás no pueden ejercitar su derecho natural, que no contará con la garantía jurídica del Estado"(1).

De lo expuesto parece deducirse, como dice PEREZ- LLANTA, que la Ley ha hecho "numerus clausus" con las confesiones religiosas acatólicas, que teniendo actividades en España solicitaron su reconocimiento hasta el 31 de mayo de 1968. Por el contrario, el silencio de la Ley permite entender que aquellas que justificasen que su actividad religiosa es posterior a esa fecha, podrían solicitar el reconocimiento de la Asociación confesional correspondiente. Lo exige así el derecho natural a la expansión de sus actividades, que corresponde a toda confesión religiosa(2).

Ahor bien, frente a esta necesidad de reconocimiento legal y de su correspondiente inscripción en un registro, de las Asociaciones confesionales no católicas para el ejercicio de las actividades que le son propias , impuesta por el ordenamiento jurídico español debemos tener en cuenta cuantas consideraciones hemos hecho al examinar el reconocimiento de las Asociaciones confesionales no católicas, en la Ley 44/1967. Bástenos, pues, recordar aquí que el Estado debe proteger y garantizar a las Asociaciones confesionales no católicas el ejercicio de las actividades que le son propias, sin necesidad de su reconocimiento legal previo, sin otra limitación que el justo orden público, y que la existencia de esas

(1) PEREZ- LLANTADA: La libertad religiosa..., ob.cit. pág.435.

(2) Ibidem, pág. 436.

comunidades, que están exigidas por la naturaleza social, tanto del hombre como de la religión misma no puede hacerse depender de la graciosa concesión por el Estado del "reconocimiento legal y de su correspondiente inscripción en un registro".

En cuanto al cierre del plazo por la Orden Ministerial de 12 de diciembre de 1967, hemos de señalar que refleja de forma evidente la excesiva presión del legislador en su esfuerzo por encauzar en la legalidad civil la vida del mayor número posible de las Asociaciones confesionales no católicas y obtener así el control de las mismas que como ya hemos expuesto llega a ser excesivo.

Pero es claro que las Asociaciones confesionales no católicas deben ser libres para solicitar su reconocimiento legal y por lo mismo no se les debe privar de la posibilidad de solicitar ese reconocimiento, tal como hace sin embargo, la mencionada Orden Ministerial, mediante el cierre del plazo para solicitar aquel.

Actualmente el número de Asociaciones confesionales no católicas registradas asciende a 238(1).

2. 2. 2. Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 23 de octubre de 1967(2).

Para desarrollar lo dispuesto en el artículo 7, número 3, de la Ley 44/ 1967, de 28 de junio, sobre ejercicio del Derecho civil de libertad religiosa en los Centros de Enseñanza, se dictó la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 23 de octubre de 1967.

Constituye, pues, otra disposición complementaria parcial y de indudable carácter reglamentario, ya que se da, además, previo informe de la Comisión de Libertad religiosa.

El artículo 7, número 3 de la Ley dice así: " Los alumnos de los Centros docentes no estarán obligados a recibir enseñanza de una religión que no profesen , para lo cual habrán de solicitarlo los padres o tutores si aquéllos no estuviesen emancipados legalmente".

La Orden Ministerial concreta no sólo la exención de cursar la asignatura de religión en los centros docentes dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia, sino también la lógica dispensa

(1) Resoluciones sobre reconocimiento legal de Asociaciones no católicas dictadas hasta el día 15 de diciembre de 1975, Ministerio de Justicia, Madrid, 1976.

(2) B.O.E. nº 273 de 15 de noviembre de 1967.

de realizar pruebas o exámenes sobre esa materia, así como su liberación del pago de las tasas académicas correspondientes y de la obligación de participar en las prácticas religiosas o actos de culto católicos que se lleven a cabo en el Centro o por los alumnos y Profesores.

En efecto, la Orden Ministerial expresamente, en su número 1º dispone: " En los Centros docentes, cualquiera que sea su ^grado y clase, dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia, los alumnos que no profesen la religión católica no estarán obligados a recibir las enseñanzas de esta religión establecidas en los planes o programas de estudios ni a realizar pruebas o exámenes de las mismas.

Tampoco estarán obligados a participar en las prácticas religiosas o actos de culto católicos que se lleven a cabo en el Centro o por los alumnos y Profesores."

Para ejercitar el derecho a que se refiere el número anterior- la Orden Ministerial señala en su número 2º " que los padres o tutores del alumno de que se trata, o este mismo si fuese mayor de edad o legalmente emancipado, solicitarán la dispensa del Decano, Director o Maestro, según los casos, quienes le habrán de conceder sin otro requisito que la declaración escrita en que se haga constar que el alumno no profesa la religión católica".

En su número 3º la Orden indica que " la declaración acreditativa a que se refiere el número anterior podrá realizarse al verificar la matrícula o en cualquier momento del curso escolar y se hará constar únicamente en los registros y documentación interna del Centro".

Asimismo la Orden, en su número 4º dispone que "la dispensa de las enseñanzas de la religión católica a que se refiere esta Orden implicará la exención del pago de cuantas tasas de matrícula o examen correspondan específicamente a esta enseñanza".

Por último la Orden señala en su número 5º que en los casos en que se realicen calificaciones de conjunto de ejercicios, pruebas o exámenes se obtendrá una media aritmética, de suerte que la falta de puntuación de la asignatura de religión no re-

-percute en la calificación total de aquellos que no la han recibido".

La Orden es, realmente, de gran amplitud de criterio, pero no es suficiente, pues no basta con dispensar a los hijos de los no católicos de la obligación de recibir enseñanza católica en los centros docentes, sino que incluso en las escuelas estatales, como ya hemos indicado, deberá proveerse a la educación religiosa de los acatólicos, cuando estos fueran en número suficiente y así lo desearán, y quienes queden exentos de enseñanza religiosa deberán recibir formación de moral natural o de deontología profesional.

2. 2.3. Decreto 1138/1969, de 22 de mayo(1), por el que se modifican determinados artículos del Reglamento del Registro civil, e Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado sobre el expediente previo al matrimonio civil de 22 de marzo de 1974(2).

Uno de los fines primordiales del Decreto de 22 de mayo de 1969 y de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 22 de marzo de 1974 es, sin duda, el adaptar las normas del Reglamento del Registro Civil de 14 de noviembre de 1958 a los nuevos principios de la doctrina católica y del Estado español en materia de libertad religiosa, procurando evitar que la celebración del matrimonio civil, de aquellos que tengan derecho a él, se vea demorada con trámites cuya utilidad puede estimarse superada a la luz del principio jurídico de libertad en el orden religioso(3).

Se facilita, así, con estas disposiciones, tan extraordinaria-

(1) B.O.E., nº 144, de 17 de junio de 1969.

(2) B. O. E., nº 90, de 13 de abril de 1974

(3) Vid. Preámbulo del Decreto de 17 de junio de 1969, en B.O.E.,

-riamente la prueba de la "no profesión de la religión católica " que prácticamente nuestro sistema matrimonial ha venido a convertirse ya en un sistema de matrimonio civil cuasi facultativo(1).

El Decreto introduce modificaciones que afectan a los artículos 245, 246, 248 y 267, del capítulo II , sección segunda del Reglamento de 14 de noviembre de 1958.

Para contraer matrimonio civil el artículo 243 del citado Reglamento exige una declaración , y entre otros requisitos exige expresamente que conste en dicha declaración que ambos contrayentes no profesen la religión católica y si hubieren sido bautizados en la Iglesia católica o convertidos a ella.

Ahora bien , con esta declaración, el artículo 245 en su nueva redacción dispone que "si se tratara de personas que hubieran abandonado la religión católica, se exigirá que, a la mayor brevedad , se presente la prueba de que el abandono ha sido comunicado por el interesado al párroco del domicilio!" Para disminuir la coacción moral que este requisito supone, el mismo artículo prevé que la comunicación pueda hacerse a través del encargado del Registro , por correo certificado con acuse de recibo.

En los demás casos, "la prueba de que no se profesa la religión católica podrá efectuarse, según el artículo 246 reformado del Reglamento del Registro Civil, bien mediante certificación acreditativa de la adscripción a otra confesión religiosa, expedida por ministro competente o representante autorizado de la respectiva

(1) LUCES GIL(F.): La reforma del Reglamento del Registro Civil, Madrid, 1970, pág. 20.

Asociación confesional, o bien mediante declaración expresa del interesado ante el Encargado".

El artículo 248 se refiere a la celebración del matrimonio civil "in artículo mortis" y en su nueva redacción expresamente dispone que para autorizar el matrimonio civil "in artículo mortis" basta que ambos contrayentes declaren no profesar la religión católica;" y a continuación el mismo artículo señala que, en su caso, y cuando sea posible, se hará la comunicación de su abandono al párroco del domicilio".

Por último en el nuevo texto del artículo 267 se suprime, al igual que en la nueva redacción de los artículos anteriormente examinados, el trámite de la comunicación a la Autoridad eclesiástica diocesana del proyecto de enlace civil.

En conclusión, pues, las modificaciones introducidas en el régimen del expediente previo al matrimonio civil, por el Decreto 1138/1969, de 22 de mayo, son las siguientes:

1ª Se suprime totalmente el trámite de la comunicación a la Autoridad eclesiástica diocesana del proyecto de enlace civil y, en consecuencia, desaparece también la necesidad de esperar el transcurso del plazo de un mes para la celebración del matrimonio, con lo que se simplifica y abrevia la tramitación de estos expedientes.

2ª Se amplían considerablemente las posibilidades de acceso al matrimonio civil, al facilitarse la prueba del requisito de la no profesión de la religión católica, antes tan difícil y rigurosa, especialmente para los bautizados o conversos.

Ahora bien, el acceso al matrimonio civil se hace aún más fácil con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado sobre el expediente previo al matrimonio civil de 22 de

marzo de 1974.

En efecto, pues, en esta Instrucción, se reducen considerablemente los trámites previos a la celebración del matrimonio y en cuanto a la prueba de la no profesión de la religión católica basta la declaración expresa de los contrayentes de no profesar la religión católica.

Así la Instrucción, en su número III y en la aclaración 3ª, dedicada a la prueba de no profesar la religión católica, dice: "En el momento actual está tan facilitada esta prueba que su exigencia nunca debe ser causa de dilaciones, pues, según Resolución de este Centro Directivo de 3 de agosto de 1970, es medio de prueba idóneo" la declaración expresa de los interesados de no profesar la religión católica".

Asimismo, en el número V, declaración 5ª, la misma Instrucción declara: "Para probar que los contrayentes no profesan la Religión Católica basta su declaración expresa, sin perjuicio de exigirse, en su caso, la prueba de haber comunicado el abandono al Párroco".

Por tanto, según lo expuesto, "es claro que prácticamente queda en manos de cualquiera casarse civilmente, si, aunque de verdad sea católico, lo desea, ya que le basta comunicar al párroco que abandonó el Catolicismo. De modo que nuestro sistema matrimonial, de hecho viene a ser electivo (matrimonio civil o canónico, a voluntad de los contrayentes). Cosa que, por un lado, parece preferible, pues el Estado no tiene por qué entrar en la conciencia de sus súbditos, y, por otro, es la única forma ágil de hacer posible el matrimonio civil a quienes habiendo abandonado verdaderamente el Catolicismo, no tengan más medios para probarlo que

su propia declaración"(1).

Ahora bien, es evidente que la reforma del Reglamento Civil que hemos analizado, si bien ha atenuado bastante los inconvenientes del sistema anterior, no nos parece, sin embargo, un avance definitivo y suficiente: queda todavía vigente el artículo 42 del Código Civil - norma de superior rango- y continua nuestro sistema legal expuesto al peligro de la celebración de matrimonios nulos por empleo de una forma inadecuada, con los inconvenientes de todo orden que ello supone(2). Es de desear, pues, una urgente revisión del artículo 42 del Código Civil, a fin de establecer un sistema matrimonial puramente facultativo, que deje a los contrayentes en plena libertad para elegir entre el matrimonio civil, sometido íntegramente a la legislación secular, y el matrimonio canónico o religioso, reconociendo iguales efectos civiles a ambas clases de matrimonio(3).

2. 2. 4. Instrucción de la Comisión de Libertad religiosa, número 9/1968, de 13 de abril, referente a la habilitación de recintos adecuados para sepultura de los acatólicos.

Entre las normas complementarias de la Ley 44/ 1967 hay que

(1) ALBALADEJO(M): Manual de Derecho de Familia y Sucesiones, Barcelona, 1974, pág. 43.

(2) LUCES GIL(F.): Ob. cit. pág. 23.

(3) Ibidem ; y PERE RALUY: Reflexiones sobre el Derecho del estado civil y su Registro, en Revista Pretor, número 53, pág. 677.

incluir la Instrucción número 9/ 1968, de 13 de abril, de la Comisión de Libertad religiosa; pues esta Instrucción, que se dirige al director general de administración Local, para que la curse a todos los gobernadores civiles, tiene como finalidad el completar uno de los preceptos de la Ley de Libertad religiosa, concretamente el artículo 8, número 3 , referente a la habilitación de recintos adecuados para que los no católicos puedan tener sepultura digna conforme a sus creencias. Esta habilitación será necesaria cuando las Asociaciones confesionales no católicas no posean cementerios propios en la localidad. Pero puede suceder que los Ayuntamientos carezcan de recursos económicos para la habilitación y entonces lo más procedente es que la inhumación se verifique dentro del cementerio católico, en espacio acotado para ello.

Es preciso señalar que a esta solución se ha llegado por concesión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, según acuerdo adoptado el 13 de septiembre de 1966, es decir, con anterioridad a la Ley, y que ahora la Comisión de Libertad religiosa utiliza, dando pruebas de su espíritu ecuménico, muy en consonancia con el de la Declaración "Dignitatis humanae"(1).

2.2. 5. Ley 44/1971, de 15 de noviembre sobre reforma del Código penal(2).

La Ley 44/ 1971, de 15 de noviembre modifica la rúbrica y el contenido de la Sección 3ª ,Capítulo II, Título II del Libro II del Código Penal, que hasta entonces venía referida exclusivamente a la Religión Católica. Esta modificación se llevó a cabo por imposición de lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 44/1967, según el cual, como ya hemos analizado, "el Estado español reconoce el derecho a la libertad religiosa fundado en la dignidad de la persona humana y asegura a ésta, con la protección necesaria , la inmunidad de toda coacción en el ejercicio legítimo de tal derecho".

(1) PEREZ- LLANTADA: La libertad religiosa..., ob. cit. pág.438.

(2) B.O.E. nº 274, de 16 de noviembre de 1971.

El nuevo texto de la Sección citada del Código penal, dentro de sus artículos 205 a 212, protege penalmente el derecho mismo a la libertad religiosa de todo ataque por medios violentos o engañosos, lo mismo respecto a la captación o desviación de adeptos que con referencia a un acto aislado de culto cuya práctica sólo puede reconocerse determinada por la propia conciencia de modo rigurosamente libre; se conserva la especial protección a la Religión Católica Apostólica Romana, como religión del Estado, y se extiende la protección penal de que sólo gozaba ésta a las demás confesiones reconocidas por la Ley (1). La nueva redacción de esta Sección del Código penal tiene el acierto de tipificar los delitos contra la libertad religiosa, la religión del Estado y las demás religiones, sin discriminación de fe, aunque, técnicamente, algunos resulten excesivamente imprecisos(2).

Por todo lo expuesto, es claro que la Ley 44/ 1971 contribuye en gran medida a completar y desarrollar la Ley 44/ 1967, y por ello mismo debe considerarse también como una más de sus normas complementarias.

2.2. 6. Ley 14/ 1973, de 19 de diciembre, sobre negativa a la prestación del Servicio Militar(3): su incidencia en los objetores de conciencia.

Estando, por una parte, proclamado el principio de libertad religiosa en España por el artículo 6º del Fuero de los Españoles, y reconocido como derecho civil por la Ley 44/1967, según ya hemos indicado, y establecido, por otra, como obligatorio el servicio a la Patria con las armas, según proclama la declaración VII del mismo Fuero(4), y conforme reitera y desarrolla la Ley

(1) CUELLO CALON(E.): Derecho Penal, Tomo II, Vol. I, Parte Especial, Barcelona, 1972, pág. 112.

(2) PEREZ LLANTADA: Ob. cit. pág. 441.

(3) Vid. B.O.E del 20 de diciembre de 1973.

(4) Vid. en Leyes Fundamentales del Reino(B.O.L) cit. pág. 11.

General del Servicio Militar de 27 de julio de 1968 (1), y no existiendo, sin embargo, ningún precepto jurídico que regulará la problemática de los objetores de conciencia, es decir de aquellas personas que, como veremos más adelante, sujetas al servicio militar se niegan a cumplir el servicio armado por motivos de conciencia o en razón de convicciones profundas, se necesitaba una norma, en cierto modo complementaria de la Ley 44/1967, que, de acuerdo con esta misma Ley, regulase debidamente la situación de los objetores de conciencia.

Para ello, se promulgó la Ley 14/1973, de 19 de diciembre(2), sobre negativa a la prestación del Servicio Militar, que, aunque no se refiere expresamente a los objetores de conciencia, sin embargo, les afecta de modo directo.

Por eso, antes de examinar el texto de la Ley 14/1973 y su incidencia en la situación jurídica de los objetores en España, creemos conveniente realizar un análisis previo sobre la problemática de la objeción y de los objetores de conciencia.

Únicamente así podremos examinar y valorar con fundamento la Ley 14/1973 y su incidencia en la situación jurídica de los objetores en España.

2. 2. 6. 1. Análisis previo sobre la problemática de la objeción y de los objetores de conciencia.

Resulta realmente imposible realizar un estudio exhaustivo sobre la objeción y los objetores de conciencia dentro de los límites siempre reducidos de un sólo epígrafe. Se necesitaría, mas bien una amplia monografía. Solamente analizaremos, por tanto, aquellos puntos que consideramos más fundamentales e imprescindibles para comprender la problemática que encierran la objeción y los objetores de conciencia. Y así, como tales puntos fundamentales e imprescindibles, examinaremos los siguientes: significado de la objeción y de los objetores de conciencia, planteamiento jurídico, fundamento ontológico, la objeción de conciencia: un movimiento internacional, la objeción de conciencia en los Estados europeos, la Recomendación del Consejo de Europa, posición oficial de la Iglesia

(1) Vid. B.O.E. del 29 de julio de 1968.

(2) Vid. B.O.E. del 20 de diciembre de 1973.

Católica ante la objeción de conciencia, número de objetores existentes actualmente en España, situación jurídica de los objetores en España antes de la entrada en vigor de la Ley 14/1973, Resolución de la Asamblea del Consejo de Europa relativa a la situación de los objetores de conciencia en España, y posición oficial del Episcopado español ante la objeción de conciencia.

2.2.6.1.1. Significado de la objeción y de los objetores de conciencia.

La objeción de conciencia supone , ante todo, un conflicto entre la conciencia moral del individuo o sus convicciones profundas y la voluntad de los gobernantes o de la mayoría de los ciudadanos(1).

Significa una oposición a la voluntad de los gobernantes o de la mayoría de los ciudadanos por motivos de conciencia o de convicciones profundas(2).

Es, en realidad " una protesta a la ley social , a las tradiciones y a los reglamentos en nombre de unos imperativos de la conciencia individual cuando estos son incompatibles con ella"(3).

Ahora bien, " hasta el advenimiento del cristianismo, no surgieron las condiciones de un conflicto entre la conciencia moral de un individuo y la voluntad de los gobernantes o de la mayoría de los ciudadanos"(4).

" En la ciudad antigua, la noción de conciencia moral individual era desconocida como tal, por el hecho de que coincidía con la conciencia cívica: el individuo estaba totalmente absorbido dentro de la ciudad, y era inconcebible que entrara en conflicto con ella por razones de conciencia, ya que las creencias cívicas coincidían con las creencias religiosas. Las leyes de la ciudad eran las leyes de los dioses; así pues, no había motivo para que el simple ciudadano les opusiera una exigencia superior"(5).

Sin embargo, y excepcionalmente, el acto de objeción de Antígona se sitúa en el marco de la antigua ciudad de Tebas; en la obra de

(1) CATTELAÍN(J.P): La objeción de conciencia(Traducción de Damiá de Bas), Barcelona,1973,pág.16.

(2) Ibidem, pags. 16 y 10.

(3) Ibidem, pág. 10.

(4) Ibidem ,pág. 16.

(5) Ibidem, pág. 15.

Sófocles, Antígona, que acaba de violar deliberadamente un edicto al dar supultura a su hermano Polices, responde así a Creonte: "No creía yo que tus órdenes tuvieran una autoridad tal que permitieran que un mortal pudiese transgredir las leyes no escritas, inmutables, de los dioses: su vigencia no es de hoy ni de ayer, sino de siempre, y nadie sabe cuándo aparecieron"(1).

Por lo demás, es evidente que fué el cristianismo el que motivó una distinción entre la ciudad terrena y la ciudad celestial desconocida en la Antigüedad pagana. Para el cristianismo el hombre se compone de cuerpo y alma y si bien el cuerpo está sometido necesariamente a la autoridad temporal, el alma depende únicamente de Dios. De este modo, como dice CATTELAÍN, "la autoridad civil está limitada: puede ser de derecho divino en la medida en que cualquier autoridad proviene de Dios, pero ya no es divina en si misma. Ahora el ciudadano tiene dos vasallajes: uno a la autoridad civil y otro a la autoridad religiosa o directamente a Dios. Así como el culto rendido al César se rendía a un dios, Cristo afirma(2): "Dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios"(3).

Por otra parte, hay que señalar que, en general, y en la medida en que el hombre de la calle conoce esta expresión, la objeción de conciencia se define como el rechazo de la guerra y el empleo personal de las armas extendiéndose también la repulsa a la prestación de servicios no armados en el ejército(4).

Y, así, se consideran en general como objetores de conciencia, según ya hemos apuntado, a todas aquellas personas que, sujetas al servicio militar, rehusan cumplir el servicio armado por motivos de conciencia o en razón de convicciones profundas(5).

Lógicamente, los objetores de conciencia se oponen al servicio de las armas, al odio y a la destrucción por cuanto creen que todos los conflictos pueden y deben resolverse no por medio del odio o de la violencia, sino por medio de la negociación, de la fraternidad y del

(1) SÓFOCLES: Antígona; traducción de MIRALLES SOLÀ (Carlos), Biblioteca Básica Salvat- libro R T V 35, Navarra, 1969, pág. 91.

(2) CATTELAÍN: Ob. cit. pág. 17

(3) Mt., 22-21; Mc., 12-17; Lc., 20-25.

(4) Vid. Texto de la ponencia presentada a los obispos españoles en su XIX Asamblea Plenaria, en Rev. Vida Nueva, nº 910, del 8 de diciembre de 1973, pág. 24.

(5) Vid. Resolución 337 de la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa. A., en PERENA: Ob. cit. pág. 45.

amor entre todos los hombres(1).

Los objetores estan realmente convencidos que han nacido para el amor y no para el odio. Y así, Antígona grita a Creonte: " No nací para compartir el odio sino el amor"(2).

Y esto mismo ordena el mandato evangélico, cuando dice: " Este es mi precepto: que os améis unos a otros como yo os he amado"(3); y también en otro lugar: " amarás al prójimo como a ti mismo"(4).

Por todo ello, es claro que la objeción de conciencia forma parte integrante del cristianismo y, así, son millares los mártires que murieron por preferir obedecer a Dios antes que a los hombres(5).

Asimismo es evidente , por todo lo dicho, que los objetores de conciencia se sitúan en la línea de quienes se comprometen en el esfuerzo por humanizar las relaciones entre los pueblos y por consiguiente, de inspirarlas en los valores superiores de la ética. En lugar de ser unos delincuentes los objetores son hombres que aportan positivamente al esfuerzo colectivo por lograr la paz y la concordia(6).

En realidad, pues, los objetores son testimonio de la no violencia . Su aparición histórica entraña, empleando el transparente lenguaje de JUAN XXIII, un signo de los nuevos tiempos.

El objetor de conciencia, como dice PEREÑA (7), es la persona más representativa de nuestra coyuntura atómica que ha dejado de ser un rebelde solitario o un héroe contestario para convertirse - la objeción de conciencia - en un fenómeno social y co-

(1) PEREÑA: Ob. cit. pág. 5.

(2) SOFOCLES: Ob. cit. pág. 94.

(3) Jn, 15,12.

(4) Mt, 22,39; Mc,1231; Lc,10,27.

(5) MICHE HORNUS(Jean): Evangile et Labarum, Etude sur l'attitude du christianisme primitiv devant les problemes de l'Etat, de la guerre et de la violence(Ginebra,1963); PEREÑA; Ob. cit. pág. 19.

(6) Texto de la ponencia presentada a los obispos españoles, cit. en Rev. cit. pág. 29.

(7) PEREÑA: ob. cit. pág. 5.

-lectivo al servicio de la paz social. En este sentido ya señalaba EINSTEIN (1) que los objetores de conciencia son los adelantados de un mundo sin guerra. Y McGregor se preguntaba: ¿qué sucedería si todos los cristianos anunciaran que de ahora en adelante se negaban a participar en las operaciones de guerra?(2). En tal caso, como dice PEREÑA(3), es probable que toda la situación mundial se encontraría radicalmente transformada.

Por su parte John F. KENNEDY (4), Presidente entonces de los Estados Unidos profetizaba con entusiasmo, diciendo: "llegará pronto el día en que se reconocerá a los objetores de conciencia la misma dignidad social que a los militares.

Sin embargo, sería ingenuo desconocer que, por otra parte, el problema de la objeción y del objetor de conciencia se ha politizado peligrosamente. "La objeción de conciencia, dice PEREÑA ha sido en varios países europeos uno de los temas preferidos por la oposición extraparlamentaria, presonificada fundamentalmente por la juventud intelectual. El núcleo creciente de objetores de conciencia se ha transformado poco a poco en un serio problema político...La propaganda publicitaria de las objeciones de conciencia ha crecido progresivamente"(5).

Tampoco se puede desconocer la picarésca de la objeción de conciencia empleada para eludir el servicio militar.

Asimismo, hay que reconocer que la objeción de conciencia para algunos ha servido de pretexto, de subversión o cobardía y que, para espíritus absolutamente radicalizados, se ha convertido en una evidente forma de rebeldía contra el Estado.

Todos estos hechos hacen comprensibles las tensiones, las cau-

(1) Citado por FABRINI(Fabrizio): Un point de vue religieux sur l'objection de conscience, en "IDOC international", 4 (1960), 30; cit. por PEREÑA: Ob. cit. pág. 5.

(2) Citado por FESQUET(Henri): Roma después del Concilio, Barcelona, pág. 69, cit. por PEREÑA: Ob. cit. pág. 5.

(3) PEREÑA: Ob. cit. pág. 5.

(4) Citado por FABRINI(F): Un point de vue religieux sur l'objection de conscience, en "IDOC international", 4(1960), cit. por PEREÑA: Ob. cit. pág. 6.

(5) PEREÑA: Ob. cit. pág. 15.

-telas y la prudencia política en el tratamiento y solución del problema.

No obstante hay que reconocer que el verdadero objetor de conciencia que encarna en el movimiento social de la paz tiene un concepto claro de que la vida es servicio a los demás, un servicio en la convivencia pacífica, en la fraternidad universal y en el respeto mutuo. Y, de ello, quiere dar testimonio(1).

2. 2.6.1.2. Planteamiento jurídico.

Es cierto que no violentos por convicciones han existido en todas la épocas de la Humanidad, sin embargo, la necesidad del reconocimiento o positivización de la objeción de conciencia como un derecho civil aparece en nuestros días y ello motivado por dos razones fundamentales. En primer lugar, por el hecho de la obligatoriedad constitucional o no - del servicio militar - recogida en los diferentes ordenamientos legales. Y, en segundo lugar, por el carácter horroroso de la guerra que repugna a muchas conciencias(2).

Por otra parte , es evidente que "una concepción dinámica de los derechos humanos implica la posibilidad y exigencia del descubrimiento, reinterpretación constante y posterior plasmación de aquellas zonas de la conciencia o actividad humanas que por estar radicadas en el ser del hombre poseen todos los atributos derivados de la intrínseca dignidad de la persona. La aparición de esos nuevos derechos supone el progresivo perfeccionamiento de la conciencia de la Humanidad"(3). Tal ocurre con la objeción de conciencia , que no es otra cosa que el derecho que se debe reconocer a toda persona de negarse a la utilización de medios

(1) PEREÑA: Ob. cit. pág. 28.

(2) Vid. La objeción de conciencia : Problema pendiente, Edito, rial de la Rev. Cuadernos para el Dialogo, Enero 1973, N,112, pág. 6.

(3) Ibidem.

materiales para la agresión o para la defensa, es decir, el elemental derecho a no matar, o a no causar daño físico a ningún semejante(1).

En realidad, el reconocimiento de la objeción de conciencia como derecho civil no puede ponerse ya en tela de juicio y los Estados tienen que hacer que pueda ser utilizado; pues, se trata, como veremos más adelante, de un derecho fundado e inserto en la naturaleza del hombre, en su libertad fundamental. Se trata de un derecho subjetivo del hombre, y, como tal, es reconocido internacionalmente(2).

2.2.6.1.3 Fundamento ontológico.

El fundamento ontológico del derecho a la objeción de conciencia se encuentra en la naturaleza del hombre, en su libertad fundamental, en su triple manifestación de libertad de religión, de conciencia y de pensamiento. Y el objetor exige respeto para sus convicciones profundas religiosas, éticas o filosóficas en virtud de su derecho personal e inalienable a esa libertad de religión, de conciencia y de pensamiento. Por tanto, la motivación a la objeción de conciencia no queda reducida a las creencias puramente religiosas y menos se limita a las normas fundamentales de ciertas asociaciones religiosas que se oponen formalmente al servicio militar en régimen ordinario. La motivación abarca toda clase de convicciones profundas de tipo religioso, ético o filosófico.

2.2.6.1.4. Movimiento internacional.

El problema de la objeción de conciencia y su reconocimiento como derecho civil constituye hoy, sin duda, el punto de referencia de una dialéctica que se amplía progresivamente en todo el mundo y que ha obligado a un número importante de Estados a tolerar la dispensa del servicio militar(3).

(1) Vid. La objeción de conciencia: Problema pendiente, en Rev. Cuadernos ... Nº cit. pág. 6.

(2) Art. 8 del Pacto de las Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos(1956), en TRUYOL: Los Derechos Humanos, cit, p 85 y Resolución 337 de la Asamblea Consultiva del Consejo de E. cit.

(3) PERENA: ob. cit. págs. 17 y 18.

Es evidente que el movimiento internacional de los objetores de conciencia ha ido engrosando progresivamente en la actual crisis de la era atómica, y, aunque todavía constituye un grupo minoritario, sin embargo, es exponente claro de que la objeción de conciencia se ha convertido ya en un movimiento internacional irreversible. Así lo demuestran los siguientes números:

En Inglaterra en 1916 había 16.000 objetores y durante la segunda guerra mundial el número era ya de 66.810. En Estados Unidos durante los años 1941 a 1945 hubo 15.000 objetores. En Suecia se registraron 14.000 en 1954. En Noruega desde 1950 a 1954 más de 3.000 rehusaron el servicio militar. En Luxemburgo, no obstante, sólo se registraron siete casos. Desde 1964 se han dado 90 casos anuales en Bélgica. El problema existe también en las dos Alemanias: en 1965 se registraron 1.500 objetores en la República Democrática Alemana; y en Alemania Federal su número ascendió a 65.727 desde su existencia hasta 1969.

En Canadá había 10.700 objetores en 1944; en Holanda se registraron más de 2.800 desde 1945 sin contar los soldados que se negaron a ir a Indonesia; durante la segunda guerra mundial hubo en Australia 2.791 objetores y 2.100 en Nueva Zelanda. Durante 1952 había en Francia 52 objetores y en 1963 había 130 en prisión; a finales de 1970 había 200 y se habían presentado 110 demandas. Desde 1946 han sido condenados en Italia 410 objetores y el 28 de julio último se encontraban en prisión 111 objetores de conciencia (1). En España había en 1971 189 objetores en prisión (2) y actualmente su número se cifra ya en los 300 objetores (3).

Por otra parte, hay que reconocer también como un hecho evidente ~~que hoy,~~ la opinión pública mundial se muestra decididamente favorable al reconocimiento legal de la objeción de conciencia, manifestándose, especialmente, esta opinión, como veremos más adelante, a través de una multiplicidad de legislaciones y Organismos, tales como la

(1) PEREÑA: Ob. cit. pág. 6; GARCIA ARIAS: Servicio militar y objeción de conciencia, en "Temis", 20(1966), 33 s.;

(2) PEREÑA: Ob. cit. pág. 6; Rev. Vida Nueva del 8 de diciembre de 1973, pág. 25

(3) DIARIO "INFORMACIONES" del 23 de noviembre de 1973, pág. 7.

Asamblea del Consejo de Europa, el Consejo Ecu­ménico de las Iglesias, la Comisión Vaticana Justicia y Paz y el Concilio Vaticano II (1).

2.2.6. 1. 5. Los Estados europeos.

En la actualidad son ya 24 los Estados del mundo que regulan y reconocen la objeción de conciencia en sus respectivos ordenamientos jurídicos. De los 24, 13 son Estados europeos. De ellos, 5, Inglaterra, Finlandia, Suecia, Noruega y Dinamarca, la regulaban mediante leyes especiales, ya antes de la segunda guerra mundial, aunque estas leyes las han ido modificando posteriormente, como veremos a continuación.

En el grupo septentrional Inglaterra promulgó su estatuto sobre la objeción de conciencia en 1926, modificado posteriormente en 1948 y 1957. Finlandia modifica su ley del 2 de mayo de 1931 en 1959 y 1969. Dentro de los países escandinavos en Noruega está en vigor la ley de 1965, que mejoró las leyes de 1922 y 1937; en Suecia la ley de 3 de junio de 1966 modificó radicalmente la ley de 1920; y en Dinamarca la ley de 1933 y el decreto de 1971 anulan la ley de 1917 y 1933(2).

Entre los países de población predominantemente protestante destacan las leyes de 1956 de la República Federal Alemana y de 1964 en la República Democrática Alemana. En Holanda la ley de 29 de octubre de 1964 viene completada por los reglamentos de 1966 y 1970.

En Suiza la ley de 1949 regula la situación del objetor de conciencia(3).

(1) En el mismo sentido se manifiestan también la Comisión Internacional de Juristas, Amnesty International, y la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas; asimismo la Tercera Sesión del Sínodo de los obispos celebrada en los meses de octubre y noviembre de 1971, y múltiples cartas y declaraciones también de los obispos católicos.

(2) PEREÑA: Ob. cit. págs. 10 y 11.

(3) Ibidem, pág. 11.

Entre los países europeos con mayoría católica además de Luxemburgo (1965), la ley de 1963 en Francia ha sido completada con nuevas normas en 1969 y 1971; la ley de 1964 en Bélgica evoluciona por la ley de 1969 y el 27 de julio de 1971 ha sido aprobado por el Parlamento de Italia el proyecto de ley elaborado por el partido socialista y la Democracia Cristiana(1).

Todas estas leyes de los países europeos que regulan la objeción de conciencia tipifican hoy como objetores a aquellos ciudadanos que por motivos de conciencia se oponen a la guerra y al empleo personal de las armas, incluso con fines defensivos(2).

La definición de la ley italiana es típica y la más representativa. Dice así: " Los motivos de conciencia deben formar parte de la propia concepción de la vida basada sobre convicciones profundas, religiosas, morales o filosóficas de la persona"(3).

Por tanto, la motivación a la objeción de conciencia, según señalan también las citadas leyes de los países europeos no queda reducida ya a las creencias puramente religiosas que se oponen formalmente al servicio militar en régimen ordinario. La motivación abarca toda clase de convicciones profundas de tipo religioso, ético o filosófico, Hoy, ciertamente, todas las leyes que regulan la objeción de conciencia en los países europeos citados coinciden, de una u otra forma como dice PEREÑA(4), en esta tipificación general de motivos. Suecia habla de "un serio convencimiento personal que le cause remordimientos profundos" y Dinamarca añade motivos de tipo político(5).

Sin embargo, es claro que el derecho a la objeción de conciencia no puede ser una excusa para eludir las propias obligaciones sociales

(1) PEREÑA: Ob. cit. pág.11.

(2) Ibidem.

(3) Norme per el riconoscimento della obiezione di coscienza, art.,1 (Senato della Repubblica. V Legislatura. Nn 769 e 21 e 21-A. Relazione della 4ª Commissione Permanente. Difesa, pág.7) cit. por PEREÑA: Ob. cit. pág. 11.

(4) PEREÑA: Ob. cit. pág. 11

(5) Ley de 3 de junio de 1966 sobre el servicio militar sin armas, art. 1.

y políticas. Por eso, dentro del actual derecho europeo la objeción de conciencia implica necesariamente un servicio nacional. La fórmula se debe a la ley francesa(1). Y así todas las citadas leyes que regulan la objeción de conciencia, sin excepción, tratan de conciliar los deberes generales y objetivos del bien común con las convicciones personales y subjetivas de la conciencia personal.

" Todo ciudadano a quien se libere del servicio militar - insiste típicamente el texto finlandés - tiene que cumplir un servicio sin armas o un servicio civil de acuerdo con lo que se dispone en la presente ley" (2). Se dice entonces que está sujeto a un servicio oficial sin armas. Se ofrece a los objetores , en definitiva un s servicio civil alternativo. Las distintas leyes europeas citadas establecen los cauces posibles para orientar este servicio nacional (3).

Según la ley francesa, los jóvenes ciudadanos que han sido declarados objetores de conciencia deberán cumplir con sus obligaciones del servicio nacional en una formación militar no armada o en una formación civil que asegure un trabajo de interés nacional y puede revestir carácter peligroso(4).

Existe , en realidad, una coincidencia muy generalizada en la tipificación de destinos. Todas las citadas leyes europeas vienen a coincidir en ciertos tipos de servicio civil o nacional.

En principio, según estas leyes, los objetores, como advierte PEREÑA(5), pueden ser destinados, en tiempo de paz, al cuerpo de guardias forestales, a unidades de intervención inmediata dependientes

(1) Code du Service National(Loi nº 71-424 du 10 juin 1971), cit. por PEREÑA: Ob. cit. pág. 12.

(2) Art. 1 de la Ley sobre servicio militar sin armas y servicio civil, promulgada en Helsingbors el 21 de febrero de 1969 (Boletín Oficial del Estado Finlandés) 1969, número 132-140, ent. por PEREÑA: Ob. cit. pág. 12.

(3) PEREÑA: Ob. cit. pág. 12.

(4) Code du Service National, art. 41 y 47.

del Ministerio de Obras Públicas o del Interior para acudir no sólo en caso de calamidades nacionales, sino en casos de normal administración, sobre todo en las zonas subdesarrolladas del país, a hospitales y establecimientos sanitarios, al cuerpo de bomberos y a la asistencia a países en vías de desarrollo bajo la dependencia del Ministerio de Asuntos Exteriores(1).

Holanda prevé también el destino a centros de educación; Noruega a servicios arqueológicos; Alemania, a servicios sociales y filantrópicos. Francia, a un servicio civil internacional de carácter técnico o cultural; Suecia, a servicio de reparación de ferrocarriles, centrales hidroeléctricas o en la Compañía Telefónica. Sólo la República Democrática Alemana concreta el destino de los objetores de conciencia a servicios militares no armados. En tiempo de guerra generalmente los objetores de conciencia son destinados a "misiones peligrosas en orden a la protección o asistencia de la población civil, pero dentro de organizaciones de defensa nacional"(2).

Asimismo hay que señalar que la sustitución del servicio militar clásico por un servicio social o educativo en los países subdesarrollados es ya una realidad en Bélgica, Francia e Italia. De acuerdo con la legislación italiana los quince meses de servicio militar activo podrán ser conmutados por dos años de servicio social en algún país subdesarrollado dentro de alguno de los programas de ayuda aprobados por el Gobierno italiano. Se han enviado graduados a la Universidad de Piura (Perú) para colaborar en el mejoramiento de las estructuras administrativas y docentes y trabajar también como ayudantes de los profesores(3).

(1) PEREÑA: Ob. cit. pág. 13.

(2) Véase fórmula en normas italianas, artículo 7, cit. por PEREÑA: Ob. cit. pág. 13.

(3) Vid. PEREÑA: Ob. cit. pág. 13 y del mismo autor: Estatuto italiano sobre la objeción de conciencia, en Diario "YA" del 8 de agosto de 1971.

En principio la duración de este servicio civil alternativo es siempre más largo que el servicio militar ordinario: el doble en Francia, doce meses en Holanda, ocho meses (Italia y Finlandia), seis meses (Noruega y Suecia) y tres meses (Dinamarca). Para Inglaterra y Alemania tiene igual duración que el servicio militar ordinario. Se tiende, sin embargo, conforme advierte PERENA(1), a una equiparación total.

Hay que indicar también como, últimamente, los estatutos de Italia, Francia y Bélgica insisten en la igualdad jurídica de los objetores con los soldados, pero también en la igualdad de condiciones del servicio nacional ante el peligro común. Durante su permanencia en estos servicios el objetor está sujeto al mismo sistema penal y económico que el servicio militar, no pudiendo desarrollar ninguna otra actividad de carácter privado ni oficial(2). Su situación, concluye la ley belga(3) no puede en ningún caso ser más favorable que la situación de los soldados que forman parte del ejército. Por su parte, la ley italiana al que se ha acogido a este derecho prohíbe que le sea expedido en toda su vida licencia de armas, asimismo le prohíbe desarrollar funciones públicas que impliquen el uso de armas(4). Estas son en realidad las limitaciones y restricciones que imponen algunos a los objetores de conciencia, como dice PERENA(5).

Por otra parte, y como es natural, existe la preocupación por evitar el abuso y el oportunismo de los que invocan la objeción de conciencia a las armas, pero también es permanente la preocupación por garantizar la protección del derecho subjetivo del objetor. Para detectar la veracidad de las propias convicciones se establece el mecanismo correspondiente a fin de limitar así objetivamente los posibles abusos, tanto de la administración como del ciudadano que se presenta como objetor(6).

(1) PERENA: Ob. cit. pág. 13.

(2) Ibidem, pág. 14.

(3) Ley del 3-VI-1964 modificada por ley del 22-I-1969, art. 19, cit. por PERENA: Ob. cit. pág. 14.

(4) Art. 6.

(5) PERENA: Ob. cit. pág. 14.

(6) Ibidem,

A este respecto, hay que señalar que las Comisiones competentes para valorar las propias convicciones y destinar a los objetores, progresivamente, se van desmilitarizando hasta convertirse en Comisiones administrativas y jurisdiccionales dependientes del Rey, del Primer Ministro, del Ministerio de Justicia, de Gobernación o de Trabajo. En este sentido es característico, como advierte PEREÑA(1), la ley francesa(2).

Dentro de este proceso hay que indicar como típica la constitución que determina la ley italiana(3), según la cual las Comisiones, bajo la presidencia de un magistrado designado por el Consejo Superior de la Magistratura, están integradas por un General o Almirante en servicio permanente nombrado por el Ministro de Defensa, por un Catedrático de Universidad de enseñanza moral, nombrado por el Ministro de Instrucción Pública, por un Abogado del Estado, nombrado por el Presidente del Consejo de Ministros de acuerdo con el Abogado General del Estado y por un médico experto en psicología y nombrado por el Presidente del Consejo de Ministros; hará de secretario un funcionario de la carrera administrativa del Ministerio de Defensa(4).

En cuanto al control de los servicios civiles hay que decir que este ha pasado a instituciones sociales o políticas no militares y varias leyes europeas han ido aceptando poco a poco el recurso del objetor ante la jurisdicción ordinaria. Asimismo y de acuerdo con la Recomendación del Consejo de Europa, que examinaremos en el próximo apartado, existe la tendencia a garantizar al máximo el derecho subjetivo de los objetores. Sin embargo, con el fin de evitar las simulaciones subjetivas, se han establecido una serie de limitaciones o condicionamientos objetivos en la tramitación de solicitudes, en la aplicación del servicio civil y en el recurso contra la decisión, pero poniendo prudente empeño para que el derecho subjetivo del ciudadano sea garantizado al máximo con

(1) PEREÑA: Ob. cit. pág. 14.

(2) Code du Service National, art. 43, comparado con art. 3. de la ley de 21 de diciembre de 1963(número 61-1.255).

(3) Art. 4.

(4) Vid. PEREÑA: Ob. cit. pág. 14.

una serie de limitaciones o condiciones formales para la Administración. En todo caso, es evidente que los estatutos europeos están todavía como dice PERENA(1), en un proceso de democratización y no han conseguido alcanzar la meta propuesta por el Consejo de Europa, la cual nosotros procuraremos examinar a continuación en el apartado siguiente.

2. 2. 6.1. 6. Recomendación del Consejo de Europa.

El 26 de enero de 1967 la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa votaba la Resolución 337, en favor de los objetores de conciencia.

La Resolución modificaba el artículo nueve de la Convención Europea de los Derechos del Hombre, que obliga a las partes, otorgantes, según ya hemos expuesto, a garantizar la libertad de conciencia del individuo(2). Y así, en el ejercicio legítimo de la libertad de conciencia la objeción de las armas constituye también un "derecho subjetivo". La concesión de este derecho estaba ligado a "motivaciones de conciencia" o a "convicciones profundas".

Dice así, en efecto, la Resolución: "Las personas sujetas al servicio militar que por motivos de conciencia o en razón de una convicción profunda de orden religioso, ético, moral, humanitario, filosófico u otro de igual naturaleza, rehúsan cumplir el servicio de armas, deben tener un derecho subjetivo de ser dispensados de este servicio"(3). Porque "en los Estados democráticos, fundados sobre el principio de la preminencia del derecho, decía la misma Resolución, este derecho es considerado como consecuencia lógica de los derechos fundamentales del individuo garantizados por el artículo nueve de la Convención Europea de los Derechos del Hombre"(4).

(1) PERENA: Ob. cit. pág. 15.

(2) Vid. artículo 9 de la Convención Europea, en TRUYOL: Ob. cit. pág. 115.

(3) Resolución 337 sobre la objeción de conciencia, base primera, de la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa, en PERENA: Ob. cit. pág. 45.

(4) Ibidem, base segunda.

El reconocimiento de este derecho por todo Estado democrático implica , continua diciendo la Resolución, el deber de "informar a todo ciudadano en edad de servicio militar inmediatamente después de la primera notificación de inscripción", y el interesado deberá hacer su derecho, a lo más tardar, antes de su incorporación definitiva en una unidad armada(1).

En cuanto al órgano que ha de decidir el reconocimiento, la Asamblea propone que una Autoridad Administrativa competente, distinta de la autoridad militar y dotada en su composición de la máxima garantía de independencia y de imparcialidad, decida en primera instancia sobre la objeción de conciencia(2).

No se pronuncia sobre la necesidad de instituir un segundo recurso, pero da una cierta importancia a la posibilidad de un control superior "por un órgano judicial independiente"(3), y garantizando el derecho del demandante " a ser asistido por un abogado y designar testigos útiles para su proceso"(4).

La Asamblea declara también en dicha Resolución y en cuanto al servicio de reemplazamiento como exigencias mínimas a garantizar por las legislaciones internas las siguientes:

1ª)"El servicio de reemplazamiento a cumplir en lugar del servicio militar debe tener al menos la misma duración que el servicio militar normal.

2ª)Es preciso asegurar la igualdad , tanto en el plano del derecho social como en el plano económico, del objetor de conciencia reconocido y del soldado que asegura el servicio militar normal .

3ª) Los Gobiernos interesados deben vigilar a fin de que los objetores de conciencia sean empleados en tareas útiles a la sociedad o a la colectividad, sin olvidar las múltiples necesidades de los países en vías de desarrollo"(5).

(1) Resolución 337 de la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa, B. Procedimiento, párrafos 1 y 4, en Ob. cit. pags. 45 y 46.

(2) Ibidem , párrafo 2.

(3) Ibidem , párrafo 3.

(4) Ibidem, párrafo 5.

(5) Ibidem, C. Servicio de reemplazamiento, párrafos 1, 2, y 3.

Por otra parte, la Asamblea Consultiva recomendaba en 1969 al Comité de Ministros de los Estados Miembros "conformar en la medida de lo posible sus legislaciones nacionales a los principios adoptados por la Asamblea. Pedía para ello que se encargara al Comité de expertos en Derechos Humanos elaborar proposiciones con vistas a aplicar, por medio de una convención o de una recomendación a los Gobiernos, los principios de la Resolución 337 de la Asamblea y contribuir así a establecer firmemente el derecho a la objeción de conciencia en todos los Estados Miembros del Consejo de Europa"(1).

Pero el Consejo de Ministros de la Comunidad no aceptó la aplicación inmediata de la Recomendación 478 que le fué formulada en 1969. La Resolución del Consejo de Europa era una meta, que, como dice PERENA(2), sólo podía realizarse por etapas sucesivas.

2. 2. 6. 1. 7. Posición oficial de la Iglesia Católica ante la objeción de conciencia.

La objeción de conciencia forma parte integrante del cristianismo, como ya hemos expuesto; sin embargo, hay que reconocer que la Iglesia Católica ha tardado muchos años en manifestarse expresamente sobre la objeción de conciencia(3).

Prepararon el camino como dice PERENA(4), teorizantes como LORSON, CONGAR y DANIELOU, místicos de la paz como Luis LECOIN, Pierre CÉRESOLE, Jean van LIERDE y Pietro PINNA, que encarnan en minorías cristianas progresistas y responsables.

Hoy la Iglesia Católica se manifiesta expresamente sobre la objeción de conciencia y lo hace especialmente a través del Concilio Vaticano II

Dice así, en efecto, el Concilio Vaticano II, en su Constitu-

(1) Vid. PERENA: Ob. cit. pág. 10.

(2) Ibidem.

(3) Vid. en este sentido la crítica de Monseñor ROBERTS arzobispo de Bombay, en PERENA: Ob. cit. pág. 19.

(4) PERENA: Ob. cit. págs 6 y 7.

-ción *Gaudium et Spes* : "Parece equitativo que las leyes provean con sentido de humanidad en el caso de quienes, por motivos de conciencia, se niegan a emplear las armas, siempre que, en otra forma, acepten servir a la comunidad"(1).

Es evidente que "el Concilio no ha querido pronunciarse de forma absoluta sobre la objeción de conciencia. Pero tampoco ha querido ignorar un hecho existente en muchos países cristianos. Habla de la objeción de conciencia, pero no en sentido negativo. Más que urgir o imponer, sugiere y abre su mentalidad a esta realidad nueva. Invoca motivos de equidad y respeto que se debe a la persona humana, siempre que el objetor obre generalmente con madura y buena conciencia. No es sólo oportunismo. Pero no quiere apoyarse en motivos evangélicos, ya que en muchos casos no son invocados por el objetor mismo. La conciencia es suficiente y representa su más alta instancia. La objeción de conciencia se centra en el hombre y su dignidad. sin discriminación de ningún género, ni siquiera religiosa"(2).

El Concilio , con espíritu de equidad y comprensión, según se desprende del texto citado, hace un llamamiento a los Gobernantes para que resuelvan con sentido humano la situación de los objetores de conciencia. No ha emitido , sin embargo , ningún juicio en orden a la moralidad objetiva de la objeción de conciencia. En realidad el Concilio no podía hablar en favor de la objeción de conciencia con palabras que pudieran parecer una reprobación del servicio militar. Por el contrario , el Concilio reconoce a los Gobiernos , una vez agotados todos los recursos pacíficos de solución, el derecho de legítima defensa, mientras la guerra no haya sido desarraigada de la Humanidad; y así la Constitución expresamente señala: Ciertamente, la guerra aún no se ha extirpado entre los hombres, pero mientras persista el peligro de guerra y falte una autoridad internacional competente, dotada de fuerza suficiente, no será posible negar a los Gobiernos que, agotadas todas las posibles formas de tratos pa-

(1) G. S. nº 79, c), en Vaticano II, cit. pág. 399.

(2) PEREÑA: Ob. cit. pág. 20.

-cíficos, recurran al derecho de legítima defensa"(1).

Deja asimismo intacta la noción del servicio militar, e incluso dedica una alabanza especial a los que profesionalmente dedican su vida al servicio de las armas y a los que se consagran a la defensa de la patria y de la libertad. Dice, en efecto, la citada Constitución: " Quienes obligados a servir a la patria se ven enrolados en el ejército, considérense como responsables en la seguridad y libertad de los pueblos, pues mientras lealmente cumplen con su deber contribuyen en verdad al establecimiento de la paz"(2).

Hechas estas consideraciones y a la vista del texto citado, cabe resumir la posición de la Iglesia Católica ante la objeción de conciencia en los siguientes puntos:

1ª) La Iglesia Católica admite hoy la objeción de conciencia como una opción más de los cristianos. Por tanto el objetor de conciencia ha dejado de ser un hereje para la doctrina social de la Iglesia Católica incondicionalmente adherida hasta ahora a la teoría de la guerra justa. La objeción de conciencia a las armas, en el sentido moderno que hoy se da al término, es ya una opción cristiana que había sido históricamente monopolizada por los cuáqueros, los anabaptistas y los testigos de Jehová(3).

2ª) La Iglesia piensa que el Estado no debe obligar a participar en actos militares a aquellos ciudadanos que por motivos de conciencia se oponen a tales actos a condición de que ellos acepten servir a la comunidad de otra forma. Se establece así un límite a la objeción de conciencia, pero un límite natural y lógico. Se trata aquí como dice PEREÑA de un límite superior, de un máximo, más allá del cual estará el más extremado individualismo del que deserta totalmente de la sociedad política(4).

Es claro, pues, que la Iglesia Católica, por primera vez

(1) G S nº 79, d), en Vaticano II, Ob. cit. pág. 399.

(2) Ibidem, e) .

(3) PEREÑA: Ob. cit. pág.; ROLAND BAITON(H): Actitud cristiana ante la guerra y la paz (Madrid, 1963); FRONSAC(Henri): Non-violence et objection de conscience(Tournai, 1962).

después de cuatrocientos años (1), a través del Concilio, habla al hombre del Estado, al ciudadano y al soldado un lenguaje que hace un llamamiento a su conciencia y a su libertad. El Concilio no se opone - y esta es, como dice PEREÑA, su aportación de sagacidad y modernidad en virtud de la evolución de la conciencia social - a la posibilidad de opciones morales a toda guerra y al servicio militar(2).

Asimismo hay que señalar que esta posición que constituye la oficial de la Iglesia Católica ante la objeción de conciencia, manifestada a través del Concilio Vaticano II, según hemos expuesto, se refleja después, especialmente, en la declaración de los obispos suizos del 9 de marzo de 1967(3), en la del Consejo Ecuménico de las Iglesias del 18 de julio de 1968(4), en el manifiesto de la Comisión Justicia y Paz de los Estados Unidos, de septiembre de 1969(5), en el del Comité de Estudios para la Paz y la Comunidad Internacional, órgano consultivo de la Pontificia Comisión Justicia y Paz de mayo de 1971(6), en el manifiesto de la tercera sesión del Sínodo de los obispos, celebrada en los meses de octubre y noviembre de 1971(7); en la declaración de la Comisión Nacional Justicia y Paz de noviembre de 1973(8) y en el Comunicado oficial de la XIX Asamblea Plenaria de los obispos españoles de 1 de diciembre de 1973(9).

-
- (1) Fué Francisco de Vitoria quien estableció la importante regla de la objeción de conciencia, que había de llegar hasta nuestros días y que se impuso dentro de la doctrina social de la Iglesia como principio casi dogmático para la teoría de la guerra justa y a la que la Iglesia Católica hasta la declaración del Concilio Vaticano II estuvo incondicionalmente adherida: "Si los súbditos tienen, con razón o sin ella, conciencia de la injusticia de una guerra, no pueden participar en ella. Pero en caso de duda la presunción en favor de la legítima autoridad del Estado permite participar en la guerra y hasta obliga si el ciudadano es llamado a filas"; Francisco de Vitoria: *De iure belli*, n.23 (ed. Getino, Madrid, 1934, p.407).
- (2) PEREÑA: Ob. cit. pág. 26.
- (3) Vid. Rev. Vida Nueva del 8 de diciembre de 1973, pág. 28.
- (4) PEREÑA: Ob. cit. pág. 7.
- (5) Vid. Rev. Vida Nueva del 8 de diciembre de 1973, pág. 28.
- (6) Vid. Diario "YA" del 1 de junio de 1971, pág. 23.
- (7) Vid. Revista Vida Nueva del 8 de diciembre de 1973, pág. 28.
- (8) Vid. Diario "YA" del 16 de noviembre de 1973, pág. 19.
- (9) Vid. Rev. Vida Nueva del 8 de diciembre de 1973, pág. 33.

2. 2. 6.1.8. Número de objetores existente actualmente en España.

Al intentar examinar cual es el número de objetores de conciencia existentes actualmente en España, comenzaremos diciendo que el problema de los objetores de conciencia al servicio militar no se presenta en España hasta finales de la década de los cincuenta(1). Posiblemente, como advierte PEREÑA, fué en 1958 cuando se produjo el primer caso. El 20 de febrero de 1958 un recluta que decía pertenecer a los Testigos de Jehová aseguraba que sus convicciones religiosas le impedían tomar las armas(2).

Se le hizo conocer la ley penal mediante la lectura de las órdenes. El recluta, sin embargo perseveró en su actitud. Fué condenado en consecuencia, por diversos Consejos de Guerra a quince años de reclusión por desobediencia y a cuatro de prisión militar por sedición(3).

Posteriormente se han producido condenas de objetores de conciencia en diversas provincias españolas, especialmente en Palma de Mallorca, Barcelona, Cartagena, Madrid, Zaragoza, Burgos, Santa Cruz de Tenerife, Lérida y Sevilla.

El número de objetores, como ya hemos indicado, era en 1971 de 189. En el momento actual el número de objetores existentes en España se calcula en unos 300(4).

Hay que señalar que hasta el año 1971 en que se planteó el primer caso de objeción de un católico, sólo habían realizado objeción de conciencia en España los Testigos de Jehová.

En efecto, el día 13 de enero de 1971 y por negarse a realizar el servicio militar fué detenido, procesado y condenado por desobediencia conforme a las normas del Código de Justicia Militar José Luis BEUNZA, católico, el cual, planteó su objeción, sin embargo,

(1) PEREÑA: Ob. cit. pág. 29; para un estudio más completo véase GARCIA(Gullermo): La objeción de conciencia en España(Trabajo para la Licenciatura presentado en el Instituto Social León XIII)

(2) PEREÑA: Ob. cit. pág. 29 -30.

(3) Auto del 14 de octubre de 1960 del Consejo Superior de Justicia Militar, en Rev. Española de Derecho Militar, 12(Madrid, 1961, 299 s.

(4) Vid. La objeción de conciencia : Problema pendiente, en Rev.

Cuadernos cit. pág. 7; "Informaciones", del 23-XI-1973, pág.7

no como católico sino como no violento(1). Este constituye, así, el primer caso de objeción de un católico en España.

Posteriormente fué condenado también otro católico y militante de la J.O.C., Jorge AGULLO GUERRA, que planteó su objeción por motivos universales de humanidad(2).

Asimismo, el 8 de agosto de 1974, otro católico y no violento, Rafael RODRIGO NAVARRO de 27 años de edad, licenciado en Pedagogía, ex-sargento de milicias universitarias, era encarcelado en Valencia por declararse objetor de conciencia(3).

Por todo ello, es claro que el número de objetores de conciencia en España tiende a un progresivo aumento, incluso entre los católicos.(6).

2.2.6.1.9. Situación jurídica de los objetores en España antes de la entrada en vigor de la Ley 14/1973.

Antes de la vigencia de la Ley 14/1973, la situación jurídica de los objetores de conciencia en España estaba sujeta a los siguientes textos legales:

1º) Artículo 7 del Fuero de los Españoles que establece la obligación general del servicio militar en estos términos: "Constituye título de honor para los españoles el servir a la Patria con las armas. Todos los españoles están obligados a prestar este servicio cuando sean llamados con arreglo a la ley"(4).

2º) Art. 108 de la Ley General del Servicio Militar que incapacita para ciertos derechos políticos y cargos a "quienes no cumplan el servicio militar, estando obligados"(5).

(1) CIERCO (E): Diálogo con un objetor de conciencia, en "Mundo Social", 185 (Madrid 1970), 8; DIARIO "INFORMACIONES" del 15 de diciembre de 1971 pág. 8; PEREÑA: Ob. cit. pág. 30.

(2) Vid. Carta de Jorge AGULLO GUERRA al segundo Comandante del Centro de Reclutamiento (Alcoy, 27 de abril de 1971) cit. por PEREÑA: Ob. cit. pág. 30.

(3) Vid. Vida Nueva del 5 de octubre de 1974, pág. 9.

(4) Fuero de los Españoles de 17 de julio de 1945, modificado por la Ley Orgánica del Estado de 10 de enero de 1967, art. 7, en Leyes Fundamentales del Reino cit. pág. 11.

(5) B. O. E. del 29 de julio de 1968.

(6) Esta parte de la tesis ha sido redactada antes de que se dictase el Decreto-Ley sobre amnistía, vid. pág. 567 de esta tesis.

Asimismo y de acuerdo con el Reglamento del Servicio Militar el cumplimiento del servicio militar en España es obligatorio y general para todos los mozos que cumplan diecinueve años, salvo excepciones por razones familiares de humanidad o por razones concordatarias(1). Pero no está prevista la excepción por objeción de conciencia. El Reglamento sobre el servicio militar no ofrece resquicio alguno por donde pueda darse solución a la marginación que implica la objeción de conciencia(2).

Por otra parte, la objeción de conciencia no estaba tipificada como tal en el Código de Justicia Militar y por ello se castigaba con arreglo al artículo 328 del citado Código, como delito de desobediencia, imponiéndosele al reo la pena de seis años de prisión militar a veinte años de reclusión militar o de seis meses y un día a seis años y un día de prisión militar, según se trate o no de órdenes relativas al servicio de armas(3).

Pero una vez cumplida la pena, el objetor de conciencia nuevamente tenía que presentarse para cumplir el servicio y nuevamente recaía en el mismo delito. Era encausado y condenado de nuevo hasta desembocar en lo que se ha llamado una especie de prisión vitalicia a través de una serie de condenas sucesivas o condenas en cadena(4), hasta el cumplimiento de la edad militar.

El Consejo Supremo de Justicia Militar resolvió por auto de 1960 que no había lugar a la aplicación de la figura de un delito de desobediencia continuada, lo que hubiera evitado la aplicación de condenas sucesivas. Tal resolución se apoyaba en la razón de que " las diferentes acciones del procesado, dirigidas contra la prestación del servicio militar, quedaban claramente separadas en el tiempo y rompían el principio de continuidad que se requiere para que pudiera apreciarse la forma de ejecución del delito de desobediencia continuada"(5).

Sin embargo, fué el mismo Consejo de Guerra quien, al condenar

-(1) Decreto de 6 de noviembre de 1969, nº 3.087/69, arts. 1, 2, 3, 27, 91, 156, 493, 532 (ARANZADI 2110, 2113, 2117, 2154 y 3157).

(2) PEREÑA: Ob. cit. pág. 31.

(3) Código de Justicia Militar, art. 328.

(4) Vid. Rev. Vida Nueva del 8 de diciembre de 1973, pág. 25.

(5) QUINTANO RIPOLLES: La objeción de conciencia ante el Derecho Penal, en Estudios de Deusto "XIII" (Bilbao, 1965) 301.

al señor DIAZ el 20 de febrero de 1961 a la pena de un año de prisión militar, llamaba la atención de la Autoridad Judicial en el sentido de que "si bien es cierto que el Consejo en este caso se ha pronunciado en el sentido que ha juzgado más conforme a justicia, también lo es que, una vez transcurrido o terminado el cumplimiento de la condena, de nuevo se planteará la cuestión judicialmente, y es evidente que no se puede someter a la misma persona a una cadena ininterrumpida de condenas, ni es posible tan injusta solución en buena política penal y general del Estado"(1).

El problema de los objetores de conciencia exigía, ciertamente, una solución por vía legislativa mediante la modificación de las leyes existentes.

El Gobierno español trató por primera vez de resolver este problema de los objetores en 1970. En efecto, en el mes de junio de 1970 por acuerdo del Consejo de Ministros se remitía a las Cortes Españolas un proyecto ley sobre la objeción de conciencia por motivos de confesión religiosa. El proyecto constaba de tres artículos, y en él la objeción de conciencia se basaba solamente en los motivos de confesión religiosa, excluyéndose, por lo tanto, las motivaciones éticas o filosóficas. Se autorizaba al Gobierno a regular, mediante Decreto, la prestación en unidades o servicios especiales y durante un periodo de hasta tres años(2). Se concedía también el indulto a todos los objetores que estuvieran cumpliendo condenas de prisión y quienes ya hubieran cumplido tres años de condena pasarían automáticamente a la situación de reserva. Los que no hubieran cumplido dicho tiempo de condena deberían incorporarse a las unidades especiales hasta completar el periodo de tres años(3). Sin embargo, el proyecto expresamente excluía de la revisión de los tribunales de lo contencioso administrativo los actos dictados en materia de objeción de conciencia(4). Faltaba, en realidad una síntesis del procedimiento

(1) Vid. en Rev. Vida Nueva, del 8 de diciembre de 1973, pág. 25.

(2) Art. 1 del Proyecto de ley sobre objeción de conciencia, publicado en el B.O. de las Cortes Españolas del 2 de junio de 1970; su texto también en PEREÑA: Ob. cit. pág. 59.

(3) Ibidem, art. 2.

(4) Ibidem, art. 3.

administrativo aplicable o del mecanismo conveniente para garantizar al Estado y al ciudadano, como dice PEREÑA(1), el ejercicio de sus respectivos derechos.

Este proyecto era , en realidad, demasiado embrionario y excesivamente deficiente .

La discusión del proyecto dejó en claro dos cosas: para unos el objetor de conciencia era o un traidor a la patria o un psicópata; para otros casi se aproximaba tanto al héroe como al mártir. Consecuencia, el proyecto fué devuelto al Gobierno como resultado de una votación que arrojó 21 votos a favor de una enmienda a la totalidad , contra nueve y una abstención(2).

El debate había causado la decepción y el desconcierto en muchas personas, pero había servido de ocasión para que la opinión pública española empezara a sensibilizarse con el problema de la objeción de conciencia . .

El 5 de mayo de 1971 el Boletín Oficial de las Cortes Españolas publicaba el segundo proyecto. Constaba de un preámbulo y tres artículos con cinco bases el primero y dos disposiciones transitorias al final(3).

Este proyecto se diferencia muy poco del anterior. Se observa, sin embargo , en él mayor precisión en los condicionamientos objetivos de la objeción de conciencia, por un primer intento de procedimiento para formalizarla ante los organismos militares y por la determinación de las características de esta prestación personal del servicio en régimen especial. No obstante, el proyecto trata más bien de arbitrar medidas de castigo para ciudadanos "de segunda clase" que de respetar la conciencia de las personas. "Domina la idea de culpabilidad en los objetores hasta terminar por considerarlos como delincuentes(4).

(1) PEREÑA: Ob. cit. pág. 37.

(2) Ibidem.

(3) Proyecto de ley de Bases sobre objetantes al servicio militar activo en tiempos de paz, por motivos religiosos, publicado en el B.O. de las Cortes Españolas del 5 de mayo de 1971.

(4) PEREÑA: Ob.cit. pág. 38.

El problema se veía limitado al servicio militar. Se pretendía, en realidad, regular, no sustituir, el servicio militar. El objetor seguía siendo un soldado y quedaba sujeto a la jurisdicción castrense(1).

Era un proyecto de ley para objetores de conciencia en tiempo de paz. Solamente se admitía en él, por otra parte, la objeción por motivos religiosos y, aun entonces, se aplicaba el criterio objetivo del grupo religioso y no el subjetivo de la conciencia personal.

Al proyecto fueron presentadas numerosas enmiendas, entre ellas una a la totalidad del mismo, y finalmente fué retirado por el Gobierno, tras el dictamen de la Comisión de Defensa Nacional de las Cortes Españolas, cuyas discusiones habían puesto de manifiesto los encontrados pareceres de los procuradores(2).

El 8 de julio de 1971 se publicaba en la prensa, de una manera privada, el proyecto de Ley de Objetores de Conciencia dictaminado por la Comisión de Defensa Nacional de las Cortes Españolas(3).

Este tercer proyecto elaborado y dictaminado por la Comisión de Defensa Nacional suponía, sin duda, un endurecimiento, un retroceso más en la solución del problema. Constaba de 10 artículos y tres disposiciones transitorias.

El artículo primero configuraba jurídicamente un nuevo tipo de objetor de conciencia, señalando como objetores "los mozos que por razón exclusiva de su condición religiosa, derivada de su adscripción a una asociación religiosa inscrita en el Ministerio de Justicia, se opuestos al empleo de las armas".

La objeción de conciencia no nacía entonces de una motivación personal, sino del hecho o condición objetiva de encontrarse adscrito a una determinada asociación religiosa cuyos principios fundamentales por otra parte, prohibieran formalmente a sus miembros el empleo personal de armas(4).

(1) PEREÑA: Ob. cit. pág. 39.

(2) PEREZ LLANTADA: Ob. cit. pág. 441.

(3) El texto oficial no ha sido publicado por el Boletín Oficial de las Cortes Españolas; fué publicado por "YA" de Madrid, el 8 de julio de 1971, pág. 11; su texto también en PEREÑA: Ob. cit. págs. 53-55.

(4) PEREÑA: Ob. cit. pág. 40.

Se cerraba el paso, por tanto, a toda interpretación subjetiva y legalmente se excluían a todos aquellos objetores que perteneciesen a asociaciones religiosas no inscritas o que, estándolo, no prohibiesen estatutariamente a sus miembros el empleo personal de las armas(1).

Para estos objetores que el proyecto configuraba en su artículo primero, según hemos indicado, les señalaba el mismo proyecto en su artículo 2º las condiciones del servicio militar a que estarían legalmente obligados en régimen especial: debería tener una duración de tres años (doble del servicio militar ordinario), previo juramento de la bandera (que exige el compromiso de derramar por la patria "hasta la última gota de su sangre") y dentro de unidades militares. Esta afirmación militar hacía inaceptable la ley a la mayoría de los objetores. El proyecto se endurecía cada vez más(2).

En los artículos siguientes el proyecto establecía una serie de condicionamientos que limitaban todavía más la posibilidad legal de la objeción de conciencia.

Los que pretendiesen acogerse al régimen especial del objetor deberían: 1) acreditar documentalmente su adscripción a una asociación confesional religiosa debidamente inscrita en el Ministerio de Justicia, 2) presentar certificación, firmada por la persona que legalmente la representase, de que esa asociación religiosa prohibía estatutariamente el servicio militar en régimen ordinario y 3) acreditar que llevaba adscrito un año, cuando menos, en esa asociación religiosa.

Los objetantes quedaban inhabilitados, hasta su licencia absoluta, para poseer o llevar armas, obtener licencia de caza y ostentar cualquier clase de honores(3). Y los objetantes de conciencia que se negasen al normal cumplimiento del servicio militar previsto por la ley quedaban además incapacitados para ejercer la enseñanza pública o privada(4).

El proyecto de ley sobre la objeción de conciencia corría el riesgo de terminar en una ley contra los objetores(5).

(1) PERENA: Ob. cit. pág. 40.

(2) Ibiem.

(3) Art. 8, nºs 2 y 3.

(4) Art. 8 nº 1, 2 y 3.

(5) PERENA: Ob. cit. pág. 41.

Pero en el proceso de la polémica sobre el proyecto que tenía lugar en la Comisión (1) iba a suceder algo verdaderamente espectacular. El Teniente General DIEZ-ALEGRÍA, Jefe del Alto Estado Mayor, se levantó en medio del debate y leyó pausada y serenamente estas cuartillas refiriéndose al artículo sexto: " No votaré este artículo ni a favor ni en contra. Tendré que ausentarme de Madrid y no estaré presente en la fase final de esta discusión. Era pretensión del Gobierno y así consta en la exposición de motivos del Gobierno, hacer compatible el respeto a las convicciones religiosas de los españoles con sus deberes de ciudadano ante la comunidad. Por eso propugnó el proyecto un servicio en régimen especial.

La realidad del texto, tras dos días de debates, me parece muy diferente. Por acumulación de obstáculos hemos vuelto a plantear lo que rechazamos en la primera sesión, y en vez de servicio especial proponemos ahora un servicio militar ordinario con determinadas peculiaridades.

Nunca alimenté ilusiones sobre la eficacia práctica de esta ley, pero creí que con ello se presentaría, al menos, una opción suficientemente amplia para salvar ciertos sectarismos. Con esta redacción no se logrará ni eso.

Cierto que algo se ha conseguido al evitarse las condenas en cadena. Pero para alcanzar esto no valía la pena enviar a las Cortes un proyecto de ley. A partir de este momento no parece pertinente participar en las votaciones. No se interprete mi actitud como soberbia ni despecho. Es posible que en el Pleno de las Cortes este proyecto reciba votos negativos. Si yo estoy presente en el hemiciclo, anuncio ya que votaré también en contra"(2).

El 14 de julio , ocho días antes de ser presentado al Pleno de las Cortes, el Gobierno retiraba el proyecto ya dictaminado por la Comisión, recibiendo así, como dice PEREÑA, su golpe de gracia(3).

La discusión jurídica quedaba zanjada por el momento; no así el problema de los 189 objetores de conciencia que entonces estaban encarcelados, cumpliendo sus penas.

(1) Comisión de defensa Nacional de las Cortes Españolas.

(2) DIARIO "INFORMACIONES", del 7 de julio de 1971.

(3) PEREÑA: Ob. cit. pág.42.

En conclusión , pues, y en cuanto a la situación jurídica de los objetores de conciencia en España, antes de la entrada en vigor de la Ley 14/1973, que más adelante examinaremos, hay que reconocer que no existían normas, en el Derecho español entonces vigente en España, que pudieran servir de causas justificativas para exculpar a los objetores. Estos eran castigados , como ya hemos indicado, con arreglo al artículo 328 del Código de Justicia Militar, por el delito de desobediencia a superior, lo que daba lugar a que cumplida la pena y devueltos al Ejército respectivo, en mérito de las accesorias, se volviese a repetir el hecho, provocándose así una serie de condenas sucesivas o condenas en cadena, que indicábamos al principio de este apartado, cuyo final sólo podía preverse con la llegada de la edad en que se pasa a situación de licencia absoluta, si antes no se contraía una causa de inutilidad. . .

2. 2.6.1.10. Resolución de la Asamblea del Consejo de Europa relativa a la situación de los objetores de conciencia en España.

El 22 de enero de 1971 la Asamblea del Consejo de Europa formulaba una resolución relativa a la situación de los objetores de conciencia en España. Su texto decía así:

"Lamentando la severidad extraordinaria con la cual el derecho español amenaza a los elementos de su juventud que reclaman la objeción de conciencia;

Recordando su Recomendación 478 y su Resolución 337 relativas al derecho a la objeción de conciencia adoptadas el 26 de enero de 1967;

Espera que el Gobierno español pueda reconsiderar su posición frente a los objetores de conciencia y permitir por decreto provisional a cualquiera de los doscientos jóvenes condenados a estar en prisión hasta la edad de 30 años, de ser útiles a la sociedad conforme a los Derechos del Hombre;

Desea que el Gobierno español tome las medidas propias para establecer un estatuto de los objetores de conciencia preveyendo un servicio civil sustitutivo"(1).

(1) El texto ha sido divulgado por la Comisión Nacional " Justitia et Pax; Vid. PEREÑA: Ob. cit. págs. 29. y 47.

2.2.6.1.11. Posición oficial del Episcopado español ante la objeción de conciencia

El 1 de diciembre de 1973 la Conferencia Episcopal Española hacía público un "Comunicado Oficial" sobre la objeción de conciencia aprobado en su XIX Asamblea Plenaria que acababa de celebrar.

El texto del Comunicado Oficial decía así:

" 1. La sociedad española tiene planteada, como problema humano, la situación de algunos ciudadanos que, apelando a imperativos de conciencia, se niegan a prestar el servicio militar. Sensibles a esta realidad, las mismas autoridades del Estado han presentado por tres veces ante la Cámara legislativa diferentes proyectos de ley(1), tendentes a suavizar, de algún modo, las consecuencias penales que se siguen de la legislación vigente para las personas que, por este o por otro motivo, recusan su incorporación al Ejército.

Durante los últimos años vienen llegando también hasta la jerarquía eclesial española apremiantes requerimientos para que, desde el plano de su competencia moral y religiosa diga una palabra orientadora y caritativa, inspirada en el mensaje del Evangelio.

2. Conscientes los obispos españoles de la complejidad del tema, de la relativa novedad de su planteamiento entre nosotros y de la sensibilidad de nuestra sociedad ante los valores contrapuestos que aquí entran en juego, presentamos al pueblo cristiano estas orientaciones, fruto de una reflexión fraterna, apoyada sobre estudios previos, en el curso de su XIX Asamblea Plenaria. Realidades de orden moral tan elevado como la conciencia humana, el deber de contribuir al bien común, el servicio de la paz, y el mensaje de las Bienaventuranzas, caen de lleno en nuestro campo y solicitan nuestra atención pastoral.

Esta es la razón por la cual el propio Magisterio de la Iglesia, en niveles distintos como el Concilio Vaticano II, el Sínodo universal de los Obispos y Episcopados de otros países, ha aña-

(1) Se refiere a los proyectos de ley, ya examinados, de 2 de junio e 1971, y al de 26 de julio de 1973, que más

- -tado el problema y apuntado prudentemente posibles soluciones que, respetando los fundamentos morales del deber de defender la patria, den respuesta a estos conflictos de conciencia y abran paso a fórmulas alternativas de servicio a la comunidad.

3. La Iglesia, llamada a participar en los mismos sentimientos de Cristo, no puede ser insensible a los sufrimientos de los sujetos sujetos a penas. Ni puede tampoco quedar indiferente ante las aspiraciones de la humanidad, en la búsqueda, por diversos caminos, de una convivencia más pacífica, más fraterna, más humana.

Con todos los hombres de buena voluntad, ella desea que se aleje el azote de la guerra y que se fundamente la convivencia entre los pueblos sobre bases distintas al mero equilibrio en el temor ante la potencia destructiva de las modernas armas de guerra.

En la situación actual de la humanidad y de las relaciones entre los pueblos, la Iglesia valora y reconoce el servicio que prestan las fuerzas armadas, aun a riesgo del sacrificio de sus vidas, a la seguridad y a la paz de las naciones.

Pero acoge también de buen grado los esfuerzos de los hombres en la búsqueda de nuevos caminos que eliminen o reduzcan en la medida de lo posible la violencia de las guerras y favorezcan un ambiente de paz.

Los Obispos españoles queremos recordar ante todo que el mandato evangélico del amor fraterno de donde ha de brotar la conversión individual y colectiva y el "desarme de las conciencias" (Juan XXIII, "Pacem in terris"), fué rubricado con el testimonio supremo de Cristo con la entrega de su vida.

Es, por otra parte, derecho de la autoridad pública mantener un eficaz dispositivo de defensa para garantizar la necesaria protección de los ciudadanos contra agresiones exteriores, derecho del que se deriva el de establecer, si así lo exige el bien común, el servicio militar obligatorio.

Al mismo tiempo creemos necesario subrayar la importancia que tiene para la realización del bien común, como realidad auténticamente humana, el que los ciudadanos puedan obrar en el respeto y en la fidelidad a sus exigencias éticas más profundas.

La conciliación de una y otra realidad ha de ser un objetivo a lograr mediante la elaboración de fórmulas legislativas integradas

ras y generosas.

4. Estamos, en fin, seguros de que la sociedad ha de saber valorar en su justa medida las voces que denuncian los riesgos de una guerra que , en las actuales circunstancias, amenaza ser total e indiscriminada, voces que además hacen notar la contradicción que supone el empleo en armamentos y gastos bélicos de ingentes recursos, indispensables para atender las necesidades más perentorias de la subsistencia y del desarrollo de los pueblos. El caso de los objetores de conciencia que tengan estas motivaciones no puede identificarse ni recibir el mismo tratamiento que el de los simples desertores.

Consecuentes con estas premisas y con las enseñanzas del Concilio Vaticano II, nos "parece razonable que las leyes tengan en cuenta, con un sentido humano de equidad, el caso de los que se niegan a tomar las armas por motivos de conciencia, con tal que acepten servir a la comunidad humana de otra manera"(GS.,n.79).

La autoridad pública que así obra, a la vez que, con ponderado criterio , permite servir a la comunidad en forma distinta del servicio militar, habrá de proteger a la sociedad frente al recurso fraudulento a los imperativos de la conciencia por motivaciones menos nobles.

Nuestras palabras se dirigen a todos los hombres de buena voluntad y esperan ser acogidas con generosa comprensión"(1).

En este "Comunicado Oficial", quedaba claramente reflejada la posición oficial del Episcopado español ante la objeción de conciencia y la existencia, de hecho, de tan delicado problema en España.

En síntesis, la posición oficial del Episcopado español ante la objeción de conciencia , mostrada a través de su "Comunicado Oficial", no es otra que la posición adoptada por el Concilio Vaticano II.

Los obispos españoles a través de este "Comunicado Oficial", se hacen eco de la realidad del problema de la objeción de conciencia y de su existencia en España. Dejan intacta la noción del servicio militar. Valoran y reconocen , en la situación actual de la humani-

(1) Vid. Rev. Vida Nueva del 8 de diciembre de 1973, pág. 33.

-dad y de las relaciones entre los pueblos, el servicio que prestan las fuerzas armadas, aun a riesgo del sacrificio de sus vidas, a la seguridad y a la paz de las naciones. Reconocen asimismo que es derecho de la autoridad pública mantener un eficaz dispositivo de defensa para garantizar la necesaria protección de los ciudadanos contra agresiones exteriores, derecho, dicen, del que se deriva el de establecer, si así lo exige el bien común, el servicio militar obligatorio. Pero acogen los obispos también de buen grado los esfuerzos de los hombres en la búsqueda de nuevos caminos que eliminen o reduzcan en la medida de lo posible la violencia de las guerras y favorezcan un ambiente de paz. Recuerdan, ante todo, como el mandato evangélico del amor fraterno de donde ha de brotar la conversión individual y colectiva y el desarme de las conciencias fúé rubricado con el testimonio supremo de Cristo con la entrega de su vida. Sbrayan la importancia que tiene para la realización del bien común, como realidad auténticamente humana, el que los ciudadanos puedan obrar en el respeto y en la fidelidad a sus exigencias éticas más profundas(1). Señalan como objetivo la conciliación de una y otra realidad, que se logrará, dicen, mediante la elaboración de fórmulas legislativas integradoras y generosas. Y finalmente, los obispos consecuentes con estas premisas y con el Concilio Vaticano II, abogan porque las leyes tengan en cuenta, con sentido humano de equidad, el caso de los que se niegan a tomar las armas por motivos de conciencia, con tal que acepten servir a la comunidad de otra forma(2).

La posición oficial del Episcopado español, de acuerdo por completo con la adoptada por el Concilio Vaticano II, nos parece decidida y acertada y, por ende, digna de ser tenida en cuenta a la hora de intentar solucionar, con un sentido humano de equidad por fórmulas legislativas, el problema de los objetores de conciencia.

(1) Vid. "Comunicado Oficial" de la XIX Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, publicado en Madrid el 1 de diciembre de 1973, n. 3; Vid. también en Rev. Vida Nueva cit. p. 33

(2) Ibidem, ns. 3 y 4.

2.2.6.2. Análisis de la Ley 14/1973 de 19 de diciembre y de su incidencia en la situación jurídica de los objetores de conciencia

La Ley 14/1973 de 19 de diciembre sobre negativa a la prestación del Servicio Militar aparece publicada en el Boletín Oficial del Estado del 20 de diciembre de 1973(1).

Es el resultado final de un tercer proyecto de ley enviado por el Consejo de Ministros a las Cortes y que estas publicaron en su Boletín Oficial del 26 de julio de 1973, bajo el título de " Proyecto de Ley sobre negativa a la prestación del Servicio Militar"(2).

El texto de la Ley 14/1973 es el texto del citado proyecto, aprobado por las Cortes, tras su discusión, con una enmienda en cuanto a la duración de la pena, si el hecho ocurriera en tiempo de paz, - cuatro años de prisión en el Proyecto, y tres años y un día a ocho años en la Ley.

El texto legal consta de un Preámbulo, un artículo único, tres disposiciones transitorias, una disposición adicional y una disposición final, y dice así:

Preámbulo: " La declaración VII del Fuero de los Españoles proclama, a título de honor, la obligación de servir a la Patria con las armas, obligación que tradicional y universalmente se considera el primer y principal deber del ciudadano con la nación a que pertenece, y que en España se halla reiterado y desarrollado en la Ley General del Servicio Militar de veintisiete de julio de mil novecientos sesenta y ocho.

El legislador no ha previsto el tratamiento penal de la negación expresa a cumplir esta obligación. Pero desde hace algún tiempo se repite, de forma esporádica y limitada, el hecho de reclutas que al incorporarse a Cuerpo se niegan a vestir el uni-

(1) B. O. E. del 20 de diciembre de 1973, nº 304.

(2) Vid. DIARIO "YA" del 27 de julio de 1973, pág. 16.

-forme , hecho que se ha venido castigando con arreglo al artículo trescientos veintiocho del Código de Justicia Militar como desobediencia a superior, lo que ha dado lugar a que cumplida la pena y devueltos al Ejército respectivo, en mérito de las accesorias, se haya repetido el hecho, provocándose así una serie de condenas sucesivas, cuyo final sólo puede preverse con la llegada de la edad en que se pasa a situación de licencia absoluta, si antes no se contrae una causa de inutilidad.

Bien se advierte que la acción finalista del agente no es el mero desacato a la orden particular del superior de que vista el uniforme , sino el más amplio propósito deliberado de dejar incumplida, en términos absolutos, aquella primordial obligación de servir a la Patria con las armas. Por ello se hace preciso llevar a nuestro ordenamiento penal militar este tipo de delito, constituido por la expresa negativa a prestar el servicio militar. A tal efecto se señalan las penas adecuadas, según el hecho tenga lugar en tiempo de paz o en tiempo de guerra o territorio declarado en tal estado; se establece la correspondiente ~~la correspondiente~~ exclusión del servicio en cada supuesto por cumplimiento de la condena, ya que la infracción del deber de prestarlo es precisamente la razón de penalidad, y se incluye como efecto de ésta la incapacidad que para el ejercicio de derechos, cargos y funciones públicas y para el establecimiento de relaciones contractuales y laborales con Entidades públicas, señala el artículo ciento ocho de la Ley General del Servicio Militar, y para ejercer la docencia y obtener licencia de uso y tenencia de armas, reduciendo la posibilidad de rehabilitación a la retractación efectiva de su conducta delictual.

En su consecuencia, se incluye en el texto vigente del título XII, tratado II del Código de Justicia Militar, un capítulo V bis, bajo la rúbrica negativa a la prestación del Servicio Militar, integrado por el artículo trescientos ochenta y tres bis, redactado en los términos que en la parte dispositiva se expresan.

En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada por las Cortes Españolas, vengo en sancionar:

Artículo único.- Se incluye en el texto vigente del título XII, tratado II del Código de Justicia Militar, un capítulo V bis, bajo

la rúbrica "negativa a la prestación del Servicio Militar", integrado por el artículo trescientos ochenta y tres bis, con el siguiente texto:

" El español que, declarado Soldado o Marinero útil rehusara expresamente, y sin causa legal, cumplir el servicio militar, será castigado:

Uno. Con la pena de tres años y un día a ocho años de prisión si el hecho ocurriera en tiempo de paz.

Dos. Con la pena de reclusión si se cometiere en tiempo de guerra o en territorio declarado en estado de guerra, salvo lo que dispongan los bandos que dicten las autoridades militares competentes.

Dichas penas no llevarán consigo las accesorias militares previstas en los artículos doscientos dieciocho y doscientos diecinueve del presente Código , pero si las demás que correspondan y la incapacidad del condenado, mientras no se rehabilite, para ejercer derechos políticos, ostentar cargos y funciones públicas y para establecer relaciones laborales y contractuales públicas de todo orden con Entidades públicas o subvencionadas o intervinidas por el Estado, con Entidades paraestatales autónomas y con las Corporaciones de Administración Local, así como para la docencia y para obtener permiso de tenencia y uso de armas. La rehabilitación sólo podrá obtenerse mediante el cumplimiento efectivo de las obligaciones militares, que podrá solicitarse en cualquier momento desde que se inicia el sumario hasta la fecha en que el condenado alcance la edad de la licencia absoluta, y que en ningún caso será objeto de las reducciones previstas en el artículo sesenta y dos de la Ley reguladora del Servicio Militar. Cumplido el periodo de servicio en filas se declarará también cumplida la condena de quienes no la hubiesen terminado por incorporarse a aquel antes de su término.

Una vez cumplida la condena impuesta, el penado quedará excluido del servicio militar, excepto en caso de movilización por causa de guerra o declaración de estado de guerra."

DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

" Respecto de las cuasas iniciadas , y aún no concluídas y de las condenas en curso de cumplimiento por hechos comprendidos

en la presente Ley, se estará a lo siguiente:

Primera. En las causas que se hallen en tramitación se aplicará la norma penal más favorable, y para su determinación se dará audiencia al procesado, asistido de su defensor, para que opte por la aplicación de uno u otro preceptos y sin que se retrotaiga el trámite procesal, se proseguirán las actuaciones hasta la celebración del Consejo de Guerra.

En aquellas causas en que haya recaído sentencia que se encuentre pendiente de aprobación se dará audiencia al procesado en la forma expuesta, y de optar por la aplicación de esta Ley, se dispondrá la celebración de un nuevo Consejo de Guerra, con anulación de la sentencia recaída.

Si el reo hubiese sido ya condenado en otro u otros procedimientos, se estará a lo establecido en la transitoria tercera.

Segunda. Los condenados, en una o varias causas, a penas de tres años y un día o más de privación de libertad y que lleven cumplido como mínimo ese tiempo, podrán solicitar de la autoridad judicial la aplicación de la presente Ley, con los efectos dispuestos en la misma.

La Autoridad Judicial, con su Auditor, oyendo previamente al Fiscal Jurídico-Militar, conmutará la condena o condenas impuestas, por la que lleve efectivamente cumplida, declarará su exclusión del servicio militar, su incapacidad en los términos previstos y ordenará su inmediata excarcelación.

Tercera. Los condenados en una o varias causas a penas que, sumadas, no alcancen los tres años y un día de privación de libertad efectivos, seguirán cumpliendo normalmente su condena. Si al término de ésta incurriesen en el delito previsto en la presente Ley, la autoridad judicial, con las mismas formalidades y audiencias a que se refiere la disposición anterior, dispondrá que, para el cumplimiento de la pena que en su caso se imponga, se abone el tiempo que el reo hubiese estado privado de libertad como consecuencia de la condena o condenas anteriores.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

"El Gobierno dictará las disposiciones necesarias para el cumplimiento de la presente Ley.

DISPOSICIÓN FINAL

" La presente Ley entrará en vigor el día de su publicación en

el "Boletín Oficial del Estado"

Dada en el Palacio de El Pardo a diecinueve de diciembre de mil novecientos setenta y tres"(1).

La Ley no hace mención explícita de los objetores de conciencia, sin embargo, es evidente que incide directamente sobre la situación jurídica de estos.

En efecto, la Ley mediante la inclusión de un nuevo artículo, el 383 bis, en el Código de Justicia Militar bajo la rúbrica de "negativa a la prestación del Servicio Militar", tipifica el delito consistente en el "propósito deliberado de dejar incumplida en términos absolutos, aquella primordial obligación de servir a la Patria con las armas". El delito lo cometen quienes rehusan cumplir el servicio militar "sin causa legal"; por ello, al no estar reconocida la objeción de conciencia como tal causa, los objetores caen automáticamente bajo la sanción del nuevo artículo(2).

La Ley se limita a considerar penalmente una conducta sin atender a las especiales causas de la misma.

Desaparece, por tanto, todo concepto de objeción de conciencia por motivos religiosos, éticos, filosóficos etc.

La objeción queda, así, incluida necesariamente dentro de las causas no legales. Y consecuentemente ya no se plantea problema alguno sobre el establecimiento de un servicio no armado sustitutorio.

Por otra parte, "una vez cumplida la condena impuesta, el penado quedará excluido del servicio militar", ya que la infracción del deber de prestarlo es precisamente la razón de la penalidad.

Hay que reconocer que la vigente Ley alivia un poco la situación de los objetores, en la medida en que pone fin al anterior e inhumano sistema de "condenas en cadena" hasta cumplir la edad militar; sin embargo, hay que reconocer también que las medidas generales adoptadas en la Ley, aplicables al objetor de conciencia representan - dicho sea con todo respeto - una notoria injusticia

(1) B.O.E. del 20 de diciembre de 1973, Núm. 304.

(2) Vid. Texto de la ponencia presentada a los obispos..en Rev. cit. pág. 27.

que es necesario evitar.

Observémos, en efecto, que la exclusión del servicio militar, una vez cumplida la condena impuesta, no alcanza los casos de "movilización por causa de guerra", que es precisamente cuando la objeción adquiere su máximo sentido. Además, la objeción de conciencia sigue considerándose delictiva con lo cual el objetor se verá obligado a escoger entre violar su conciencia o aceptar tres años y un día a ocho años de prisión si el hecho ocurriera en tiempo de paz, o la pena de reclusión si el hecho ocurriera en tiempo de guerra o en territorio declarado en estado de guerra. Finalmente el objetor de conciencia queda reducido en la Ley a la condición de un ciudadano de segundo rango, a causa de las incapacidades establecidas por dicha Ley, "mientras no fuera rehabilitado; por ello sólo es posible mediante el cumplimiento efectivo de las obligaciones militares, según hemos visto dispone también la misma Ley.

No podemos, por tanto, considerar la Ley 14/1973 como norma complementaria de la Ley 44/1967, pues, aunque la Ley 14/1973 incide directamente sobre la situación jurídica de los objetores de conciencia, según hemos señalado, llegando incluso a aliviar un poco la angustiosa e injusta situación anterior de los objetores de conciencia, al terminar con las condenas en cadena, sin embargo, no completa el texto de la Ley 44/1967, en cuanto a la regulación de la objeción de conciencia. En una palabra, la Ley 14/1973 no reconoce la figura legal del objetor de conciencia tal como debe hacerlo una norma que merezca calificarse de norma complementaria de la Ley 44/1967, en cuanto a la objeción de conciencia se refiera, por exigirle así la misma Ley 44/1967, según se deduce de su mismo texto.

La Ley 14/1973, por el contrario, continua considerando delictiva la objeción de conciencia.

Por todo ello, tenemos que concluir señalando la necesidad de una nueva Ley que, suprimiendo toda medida penal contra los objetores de conciencia, reconozca la figura legal del objetor y le conceda la posibilidad de realizar un servicio civil por un tiempo equivalente o parecido al del militar tal como exige el desarrollo la Ley 44/1967 y especialmente un auténtico reconocimiento del derecho civil de libertad religiosa, y conforme hemos visto reco-

-mienda la opinión pública mundial. La cuestión por lo tanto se presenta en estos términos: el respeto y reconocimiento del derecho de libertad religiosa implica necesariamente el respeto y reconocimiento de la libertad de conciencia y en consecuencia el respeto y reconocimiento legal de la objeción de conciencia.

La Ley 44/1967 no dice expresamente nada sobre la objeción de conciencia, pero si dice reconocer y garantizar el derecho de libertad religiosa, con lo cual parece que debería ser suficiente, pues el reconocer el derecho de libertad religiosa consecuentemente implica, como hemos dicho, la necesidad de reconocer y garantizar la libertad de conciencia y por lo mismo también la necesidad de reconocer la objeción de conciencia como figura legal. Pero es evidente que no basta con lo que se deduce del sentido y significado de la Ley para reconocer y regular jurídicamente la objeción de conciencia. Es imprescindible dictar una nueva norma, de acuerdo incluso en esto con la que sugiere la disposición transitoria primera de la misma Ley, que complete expresamente el texto de la Ley 44/1967 y desarrolle eficazmente su sentido y significado en cuanto a la objeción de conciencia se refiere, reconociendo y regulando la objeción de conciencia como figura legal según hemos expuesto y contribuyendo así de forma decisiva a un mejor y más eficaz reconocimiento del derecho civil de libertad religiosa en España.

2.2.7. Decreto-Ley sobre amnistía de 30 de julio de 1976 y su repercusión en los objetores de conciencia.

Por aplicación del Decreto -Ley sobre amnistía de 30 de julio de este año de 1976 se han visto libres de la prisión muchos jóvenes objetores de conciencia(1). Sin embargo, esta amnistía no comprenderá la incapacidad del condenado, mientras no se rehabilite, para ingresar al servicio de la Administración Militar y para obtener permiso de tenencia y uso de armas.

Así lo dispone este Decreto-Ley que en su artículo primero, número

(1) Vid. sobre el número de objetores amnistiados ya y puestos en libertad, "YA" del 2 de septiembre de 1976, que enumera 24 en Burgos; y "YA" del 25- VIII- 1976, pag. 12; Vid. también "Pueblo" del 2 de septiembre de 1976, pág. 8, entre otros.

4º dispone: " También son amnistiados los que por objeción de conciencia se hubieren negado a prestar el servicio militar en los términos previstos en el artículo 383 bis del Código de Justicia Militar. La amnistía no comprenderá , sin embargo, la incapacidad del condenado, mientras no se rehabilite, para ingresar al servicio de la Administración Militar y para obtener permiso de tenencia y uso de armas"(1).

Hay que señalar además que los objetores han sido amnistiados efectivamente y continúan siendo puestos en libertad, pero el problema de la objeción de conciencia no ha quedado resuelto todavía en España. No existe en efecto aún en España la legislación correspondiente sobre la objeción de conciencia que reconozca el derecho de objeción de conciencia y permita, así, al objetor realizar un servicio civil sustitutorio del servicio armado y acorde con su conciencia, según nosotros propugnamos en esta tesis.

Esperemos que este problema se resuelva próximamente, según el ministro de justicia, recientemente, ha prometido(2) y el derecho de libertad religiosa reclama.

-
- (1) Vid. Texto integro del Real Decreto-Ley sobre amnistía, de 30 de julio de 1976, (B.O.E. de 4 de agosto de 1976) Vid. también en "YA" del 4 -VIII-1976, pág. 10
- (2) Vid. "La Región"(de Orense), del 31 de julio de 1976, p.17.

2.2.8. Últimas disposiciones, dictadas en España, sobre enseñanza religiosa.

Para completar, actualizar y desarrollar las disposiciones fundamentales, actualmente vigentes en España, sobre enseñanza religiosa (Concordato entre la Santa Sede y España de 27 de agosto de 1953, artículos XXVI y XXVII, y la Ley 44/1967, de 28 de junio, regulando el ejercicio del derecho civil a la libertad en materia religiosa, artículo 4, número 2, y artículos 7 y 9, número 1, que ya hemos examinado), el Gobierno español ha dictado en 1967 la Orden de 23 de octubre, que también ya hemos analizado, por la que se desarrolla lo dispuesto en el artículo 7º, número 3 de la citada Ley/1967, de 28 de junio, y, ultimamente, las siguientes disposiciones: Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, artículos 6, y 136, número 4; Disposiciones generales del Ministerio de Educación y Ciencia sobre enseñanza religiosa en los diversos centros docentes, estatales y no estatales, de 11 de septiembre de 1973; Decreto 160/1975, de 23 de enero, que aprueba el Plan de Estudios del Bachillerato, artículo 4, número 2 y artículo 5; Orden de 22 de marzo de 1975 por la que se desarrolla el Decreto 160/1975, de 23 de enero, citado, que aprueba el Plan de Estudios del Bachillerato y regula el Curso de Orientación Universitaria, apartados primero y segundo; y Resolución de la Dirección General de Ordenación Educativa por la que se dan instrucciones para el desarrollo de lo dispuesto en la Orden ministerial de 22 de marzo de 1975 sobre el Plan de Estudios del Bachillerato, en su apartado octavo, número 3.

Estas disposiciones sobre enseñanza religiosa, ultimamente dictadas, dicen así:

1º Ley General de Educación(1):

Artículo 6.1." El Estado reconoce y garantiza los derechos de la Iglesia católica en materia de educación, conforme a lo acordado entre ambas postestades". 2. " Se garantiza, asimismo, la enseñanza religiosa y la acción espiritual y moral de la Iglesia católica en los Centros de enseñanza, tanto estatales como no estatales, con arreglo a lo establecido en el artículo sexto del Fuero de los Espa-

(1) Ley General de Educación.... cit. en B. O. del E. cit.

-Xoles.3."En todo caso se estará a lo dispuesto en la Ley reguladora del ejercicio del derecho civil a la libertad en materia religiosa".

Artículo 136. 4. " La ordenación y supervisión de la educación religiosa prevista en el artículo sexto, así como la selección del Profesorado para la misma, competen a la Iglesia y serán reguladas por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Educación y Ciencia, previo acuerdo con la Jerarquía eclesiástica, Las remuneraciones del Profesorado se fijarán por analogía con las del Profesorado de los correspondientes niveles educativos".

2º Disposiciones generales del Ministerio de Educación y Ciencia sobre enseñanza religiosa en los diversos centros docentes, tanto estatales como no estatales, de 11 de septiembre de 1973(1).

El 13 de septiembre de 1973 aparecían publicadas en el Boletín Oficial del Estado, en España, tres disposiciones generales del Ministerio de Educación y Ciencia sobre enseñanza religiosa, con los títulos y rango jurídico siguientes:

a) "RESOLUCIÓN de la Dirección General de Formación Profesional y Extensión Educativa por la que se dan instrucciones sobre la enseñanza religiosa en los Centros dependientes de la Dirección General de Formación Profesional y Extensión Educativa"

b) "RESOLUCIÓN de la Dirección General de Ordenación Educativa por la que se dan instrucciones sobre la Formación Religiosa en la Educación Preescolar, General Básica y Bachillerato".

c) "RESOLUCIÓN de la Dirección General de Universidades e Investigación por la que se dan instrucciones sobre la enseñanza religiosa en los Centros universitarios".

Los textos de estas disposiciones, fundamentalmente, dicen así:

a') La enseñanza religiosa es obligatoria en todos los centros docentes, tanto estatales como no estatales y a todos los niveles, desde el preescolar hasta el universitario. Se exceptúan aquellos alumnos que obtengan dispensa, de acuerdo al derecho civil a la libertad en materia religiosa(2).

(1) B. O. E. de 13 de septiembre de 1973.

(2) Ley 44/1967, de 28 de junio cit. artículo 7, nº 3.

b') "Los planes de estudio, cuestionarios, programas y orientaciones pedagógicas de la Enseñanza Religiosa serán fijadas en la forma determinada en el apartado 8 del artículo XXVII del Concordato."

c') "La evaluación del rendimiento de los alumnos en la Enseñanza Religiosa se hará en la misma forma y bajo el régimen establecido para el resto de las materias del curso respectivo, teniendo en consideración las exigencias propias de la Educación Religiosa".

e) Los profesores deberán tener una titulación determinada de acuerdo al nivel en el que impartan sus enseñanzas. Corresponde a la Iglesia, a través de sus centros docentes, la capacitación pedagógica, formación doctrinal y perfeccionamiento en ejercicio del profesorado especial que ha de impartir la enseñanza religiosa.

f) El nombramiento de los Profesores especiales de Enseñanza Religiosa en los Centros estatales se hará según lo dispuesto en los apartados 3 y 5 del artículo XXVII del Concordato.

g) El nombramiento de los Profesores especiales de enseñanza religiosa en los Centros no estatales se hará por los Centros respectivos. Para obtener el nombramiento deberán poseer el certificado especial de idoneidad, expedido por el Ordinario propio a que se refiere el apartado 7 del artículo XXVII del Concordato.

h) Sin perjuicio de la función inspectora que el Ministerio de Educación y Ciencia asume en el sistema educativo, los respectivos Ordinarios diocesanos podrán ejercer libremente su misión de vigilancia sobre todos los Centros docentes estatales o no estatales, en lo que concierne a la educación religiosa del alumnado, según dispone el artículo XXVI del Concordato.

i) Los profesores especiales de enseñanza religiosa en los Centros dependientes de la Dirección General de Formación Profesional y Extensión Educativa formarán parte del equipo docente del claustro del Centro.

j) Los profesores especiales de enseñanza religiosa en la Educación Preescolar, General Básica y Bachillerato gozarán de la misma consideración académica que los demás Profesores del Centro respectivo, y formarán parte del equipo docente o claustro del Centro, según lo dispuesto en el apartado 6 del artículo XXVII del Concordato.

k) La condición de Profesor de enseñanza religiosa se perderá por alguna de las causas determinadas en los apartados 6 y 7 del Concordato.

-to.

3º Decreto 160/1975, de 23 de enero, por el que se aprueba el Plan de Estudios del Bachillerato, artículo 4, número 2 y artículo 5(1).

Este Decreto 160/1975 de 23 de enero incluye entre las materias comunes que habrán de ser cursadas en el Bachillerato por todos los alumnos la formación religiosa. Y, así, en su artículo 4, número 2 y artículo 5 dispone:

Artículo 4. Dos: "Las" materias comunes, que habrán de ser cursadas por todos los alumnos se articulan en las siguientes áreas de conocimiento:

d) formación religiosa".

Artículo 5. "Las materias comunes, optativas y enseñanzas y actividades técnico-profesional que comprenden el Plan de Estudios se cursarán en la forma siguiente: 1. Primer Curso. ... Formación religiosa. 2. Segundo Curso. a) Materias comunes: Formación religiosa. 3. Tercer curso. a) Materias comunes: Formación religiosa".

4º Orden de 22 de marzo de 1975 por la que se desarrolla el Decreto 160/1975, de 23 de enero que aprueba el Plan de Estudios del Bachillerato y se regula el Curso de Orientación Universitaria(2).

El 18 de abril de 1975, el Boletín Oficial del Estado hizo pública la Orden de 22 de marzo de 1975 por la que se desarrolla el Decreto 160/1975, de 23 de enero que aprueba el Plan de Estudios del Bachillerato y se regula el Curso de Orientación Universitaria. Esta Orden determina el horario semanal dedicado a las materias relacionadas en el artículo 5º del mencionado Decreto,

(1) B. O. del E.N.38, de 13 de febrero de 1975.

(2) B. O. del E., N. 93, de 18 de abril de 1975.

y dedica a la formación religiosa un horario de 2 horas semanales para cada uno de los tres cursos del Bachillerato. Y, así, textualmente, establece:

"Segundo.- El horario semanal dedicado a las materias relacionadas en el artículo 5º del mencionado Decreto será el siguiente:
1. MATERIAS COMUNES. Primer curso....Formación religiosa, 2 horas semanales. Segundo. curso...Formación religiosa, 2 horas semanales.
Tercer curso.....Formación religiosa, 2 horas semanales"

5º Resolución de la Dirección General de Ordenación Educativa por la que se dan instrucciones para el desarrollo de lo dispuesto en la Orden ministerial de 22 de marzo de 1975 sobre el Plan de Estudios del Bachillerato(1).

Esta Resolución apareció publicada en el Boletín Oficial del Estado el 12 de julio de 1975, y , en ella, como indica su título se dan instrucciones para el desarrollo de lo dispuesto en la Orden ministerial de 22 de marzo de 1975 sobre el Plan de Estudios del Bachillerato. En su apartado octavo , número tercero, se dan instrucciones para el desarrollo del temario de formación religiosa en los siguientes términos:

"Octavo. Desarrollo de los temarios. 3. Formación religiosa. Dado el peculiar carácter de la Formación religiosa , cuyos contenidos esenciales figuran incluidos en el anexo de la orden ministerial de 22 de marzo de 1975, y en consonancia con la competencia de la jeraquía eclesiástica reconocida en el artículo 136,4, de la Ley General de Educación, respecto a la ordenación de dicha enseñanza, se considera procedente que la programación de sus materias y la elaboración y aprobación de los textos y materiales didácticos correspondientes se realicen de acuerdo con la descripción temática , expresión de objetivos y precisiones metodológicas formuladas por los organismos competentes de la jerarquía eclesiástica". De acuerdo con este texto , la Comisión Episcopal de Enseñanza y Educación Religiosa publicó las bases de programación a las que deberá ajustarse

(1) B. O. del E. de 12 de julio de 1975.

la enseñanza de la Formación Religiosa en bachillerato(1).

A la vista de estos textos transcritos creemos conveniente hacer las siguientes consideraciones:

1ª) El artículo 6 de la Ley General de Educación constituye una ratificación unilateral, por parte del Estado español, de lo acordado entre la Santa Sede y el referido Estado en el Concordato de 1953 sobre los derechos de la Iglesia católica en materia de educación, tanto religiosa como profana. Significa, asimismo, una ratificación de cuanto dispone la Ley 44/1967 de 28 de junio sobre enseñanza religiosa y confirma y desarrolla además los textos de esta misma Ley 44/1967 de 28 de junio, en cuanto se refiere a la acción espiritual y moral de la Iglesia en los Centros de enseñanza, tanto estatales como no estatales.

2ª) El artículo 136 contribuye a completar, actualizar y desarrollar las disposiciones del Concordato relativas a la ordenación de la enseñanza religiosa, selección, nombramiento y remuneración de los correspondientes profesores; y contribuye también a completar las disposiciones sobre enseñanza que establece la Ley 44/1967, de 28 de junio, en su artículo 4, número 2, y artículos 7 y 9.

3ª) Las disposiciones de 11 de septiembre de 1973 junto con el Decreto 160/1975, con la Orden de 22 de marzo de 1975 y con la Resolución de la Dirección General de Ordenación Educativa del mismo año, contribuyen en gran medida a completar, actualizar y desarrollar las disposiciones del Concordato respecto a la ordenación de la enseñanza religiosa, selección, nombramiento y remuneración de profesores. En las disposiciones de 11 de septiembre se ratifican además las disposiciones del Concordato referentes a la pérdida de la condición de profesor. Y todas estas disposiciones contribuyen, evidentemente, a completar y desarrollar las disposiciones de la Ley 44/1967 de 28 de junio que regulan la enseñanza religiosa.

Hay que concluir, pues, afirmando que las últimas disposiciones dictadas en España sobre enseñanza religiosa contribuyen a actualizar, completar y desarrollar las disposiciones que el Concordato y la Ley 44/1967 dedican a la regulación de la enseñanza religiosa.

(1) Vid. Diario "YA" de 26 de septiembre de 1975 página 36.
En cuanto a la formación del profesorado de E.G.B., mediante cursillos, vid. Orden ministerial, de 4-V-1973 (B.O.E del 17).

Sin embargo, hay que reconocer que estas disposiciones que acabamos de examinar no dicen nada respecto al derecho que, evidentemente corresponde a los acatólicos de recibir educación religiosa, conforme a su creencia, en los centros estatales de enseñanza, cuando sean en número suficiente y así lo reclamen. Tampoco dicen nada estas últimas disposiciones sobre la formación de moral natural o de deontología profesional que deberán recibir quienes queden exentos de recibir enseñanza religiosa.

Por último, hemos de señalar que estas disposiciones continúan considerando como obligatoria la enseñanza religiosa en los Centros universitarios y, a este respecto, hacemos válidas cuantas consideraciones hemos hecho al examinar la regulación que de la enseñanza religiosa hace el actual Concordato.

CONCLUSIONES GENERALES

I.- El derecho de libertad religiosa es una exigencia de la naturaleza racional y libre del hombre y constituye, por tanto, un derecho natural de la persona humana.

II.- Es igualmente un derecho universal, puesto que es expresión de la misma naturaleza del hombre y permanece por ello independiente del tiempo y de las circunstancias.

III.- El derecho de libertad religiosa es, pues, un derecho humano fundamental que, para su completa efectividad debe ser reconocido como derecho civil en los ordenamientos jurídicos de cada uno de los Estados del mundo.

IV.- En cuanto derecho humano el derecho de libertad religiosa es el derecho natural que la persona tiene de estar inmune de coacción externa en la investigación de la verdad religiosa, en la búsqueda de Dios, en el aceptar o rechazar la fe religiosa, en cambiar de religión y en vivir su vida religiosa o irreligiosamente, en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites exigidos por el justo orden público.

V.- En cuanto derecho civil el derecho de libertad religiosa es ese mismo derecho fundamental reconocido y protegido por el ordenamiento jurídico positivo del Estado.

VI.- Como todo derecho fundamental, el derecho de libertad religiosa es una relación intersubjetiva en la que se distinguen claramente dos sujetos: el sujeto activo y el sujeto pasivo.

El sujeto activo es toda persona humana en su doble dimensión individual y social.

El sujeto pasivo serán los demás hombres y sus estructuras sociales.

- les , especialmente el Estado.

VII.- El objeto del derecho de libertad religiosa no lo constituyen las creencias religiosas sino la inmunidad de coacción externa en materia religiosa: en la investigación de la verdad religiosa, en la búsqueda de Dios, en el aceptar o rechazar la fe religiosa , en cambiar de religión y en vivir su vida religiosa o no religiosamente , en privado o en público , solo a asociado con otros dentro de los límites exigidos por el justo orden público.

VIII.- Esa inmunidad de coacción comprende una doble vertiente: no ser obligados , en ningún caso a obrar contra el dictamen de la propia conciencia y no ser impedidos de actuar según ella, salvo cuando se atente contra el justo orden público.

IX.- El fundamento del derecho de libertad religiosa lo constituye la dignidad de la persona humana: ser racional y libre.

X.- Como limite del derecho de libertad religiosa sólo puede considerarse aquella parte esencial del bien común que denominamos orden público y que es necesario para la existencia de la sociedad.

XI.- La libertad religiosa se reconoce solemnemente como derecho humano fundamental en los actuales documentos internacionales y como derecho civil en las actuales constituciones de los diferentes Estados del mundo.

XII.- Su reconocimiento y protección , sin embargo no se cumple igualmente en todos los Estados.

XIII.- Existen, en efecto, Estados en el mundo, fundamentalmente Estados comunistas, en los que si bien, por una parte, se reconoce en sus Constituciones el principio de libertad religiosa, por otra, se reconoce también la libertad de propaganda antirreligiosa . De esta forma y en la práctica no sólo se permiten sino que incluso se protegen en esos Estados medidas antirreligiosas e incluso de persecución religiosa.

XX.- Entre dichos valores se encuentra ocupando el lugar más importante el valor religioso, la religión.

XXI.- La religión constituye, en efecto, como hemos visto, un valor natural que radica en las mismas entrañas de la naturaleza racional del hombre.

XXII.- La actividad religiosa del hombre individual y asociado en el seno de la comunidad política es un hecho constante y universal.

XXIII. El Estado no puede por tanto desentenderse del valor religioso, ya que la religión, el valor religioso es, según hemos expuesto, algo tan intrínseco a la colectividad políticamente organizada que no puede concebirse ni lógica ni metafísicamente un Estado arreligioso. Sin embargo esto se ha de entender en el sentido del deber ser no en el de las excepciones debidas a la imposición y a la fuerza que por hipótesis impedirían exterior y comunitariamente las manifestaciones de la religiosidad interna.

XXIV.- Rechazamos por tanto el Estado agnóstico, que desconoce la religión y conforma su conducta con el más absoluto ateísmo.

XXV.- El Estado agnóstico repugna jurídicamente, pues supone el desconocimiento y la desvaloración de las realidades sociológicas que integran la comunidad nacional. Además cuando este Estado se establece en virtud de los principios antirreligiosos y anticlericales de los gobernantes, el Estado agnóstico va contra la misma realidad de las cosas y se crea un concepto y realidad de Estado que no tiene más consistencia que la fuerza y la coacción que lo mantiene tiránicamente contra la voluntad libre de los ciudadanos.

XXVI.- El Estado agnóstico supone por tanto la violación de los derechos de la persona humana, cuyos valores fundamentales han de encontrar, por el contrario, en el Estado, como hemos indicado, las condiciones sociológicas y jurídicas necesarias a su desarrollo y perfeccionamiento, ocupando entre dichos valores el lugar más importante el valor religioso.

XXVII.- Por todo ello, esta clase de Estado debe ser rechazado.

XXVIII.- Aceptamos, en cambio, el Estado neutro, pues éste establece como principio fundamental de su legislación, en lo que a materia religiosa se refiere, el respeto y apoyo al valor religioso.

XXIX.- Aceptamos también el Estado confesional, siempre que se trate de una confesionalidad sociológica y reconozca al mismo tiempo y haga compatible su confesionalidad con el derecho de libertad religiosa.

XXX. La posible confesionalidad de un Estado ha de ser siempre y en todo caso plenamente compatible con las exigencias del derecho de libertad religiosa.

XXXI.- La confesionalidad es ciertamente un bien, que forma parte del bien común, que hace referencia a algo útil y que por tanto debe ser defendida y protegida por el poder civil. Pero la justa defensa de la confesionalidad de un Estado sólo puede admitirse a través del derecho de libertad religiosa. Esto quiere decir que la confesionalidad forma parte del bien común, pues hace referencia a algo útil pero la libertad religiosa se integra en esa parte esencial indispensable del bien común, que denominamos orden público y que hace referencia a algo necesario. Así pues en un enfrentamiento entre lo útil y lo necesario, entre la confesionalidad y la libertad religiosa deberá prevalecer lógicamente lo necesario a lo útil y por consiguiente la libertad religiosa a la confesionalidad.

XXXII.- El Estado español adopta ante la Religión los siguientes principios: el de confesionalidad católica del Estado y el de libertad religiosa.

Dicha confesionalidad católica ha sido hasta el año 1967 una confesionalidad expresa de tipo doctrinal y excluyente. En 1967 con la promulgación de la Ley Orgánica del Estado se modificó el artículo 6 del Fuero de los Españoles y desapareció el carácter excluyente de su confesionalidad al aceptar en este artículo el derecho de libertad religiosa.

XXXIII.- El Estado español reconoce, en efecto , en sus actuales disposiciones constitucionales la confesionalidad católica del Estado y el derecho de libertad religiosa.

XXXIV.- La confesionalidad católica del Estado español está expresamente reconocida en las siguientes disposiciones constitucionales , actualmente vigentes: Fuero de los Españoles de 17 de julio de 1945, artículo 6º , modificado por la Ley Orgánica del Estado de 10 de enero de 1967; artículo 1º de la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado de 26 de julio de 1947, modificada por la Ley Orgánica del Estado de 1967; Ley de Principios del Movimiento Nacional de 17 de mayo de 1958, Principio II.

XXXV.- La confesionalidad católica del Estado español actualmente de tipo doctrinal debe ser revisada por otra de tipo sociológico.

La diferencia entre un tipo u otro de confesionalidad no es puramente teórica. Las consecuencias prácticas de aceptar una u otra forma de confesionalidad pueden ser muy importantes. Pues, aceptada la confesionalidad doctrinal en este caso la católica, como principio básico del mismo ordenamiento jurídico español, el Estado queda obligado logicamente a acomodar todas sus normas e instituciones a aquella doctrina católica. Y es lógico también que , como establece el artículo 3 de la Ley Fundamental del Reino, la leyes y disposiciones de cualquier clase que vulneren o menoscaben ese principio fundamental sean nulas por su propia naturaleza.

En cambio, si la confesionalidad es sociológica el Estado no queda obligado a reflejar en todas sus leyes, normas e instituciones la doctrina católica y en su integridad sino sólo y en la medida en que sea exigido por la voluntad de los ciudadanos.

XXXVI. Con la confesionalidad sociológica el Estado está libre para legislar sin estar vinculado necesariamente a una ideología como algo total e indivisible.

XXXVII. La Iglesia saldría también beneficiada con la renuncia a una confesionalidad doctrinal pues quedaría en libertad para ejer-

- cer una de sus funciones irrenunciables : la de iluminar con la luz del evangelio todas las actividades terrenas de los fieles y proclamar su juicio moral aun sobre cosas que tocan al orden político.

La razón es clara, pues si un pastor o ministro de la Iglesia afirma por ejemplo en su predicación que una determinada institución o una norma jurídica-positiva no es conforme a los preceptos evangélicos o no está plenamente de acuerdo con la doctrina católica no sólo está emitiendo un juicio moral , sino que parece estar acusando a esa institución o norma de anticonstitucional. Y, así , la predicación evangélica puede parecer en ese caso hipotético , que incluye un grave delito de injuria a los órganos del poder legislativo, judicial o ejecutivo.

En consecuencia debenser revisadas las disposiciones constitucionales que establecen la confesionalidad doctrinal católica y dar paso a una confesionalidad de tipo sociológico.

XXXVIII.- El derecho de libertad religiosa está reconocido también en el actual ordenamiento constitucional español, concretamente y de modo explícito, en el artículo 6 del Fuero de los españoles que consagra el binomio confesionalidad - libertad religiosa.

Pero la compatibilidad que necesariamente debe existir entre confesionalidad y libertad religiosa encuentra graves dificultades en el ordenamiento constitucional español dado que la Ley Orgánica del Estado de 10 de enero de 1967 modificó el artículo 6 del Fuero de los españoles pero no modificó el artículo 33 del mismo Fuero, según el cual el ejercicio de los derechos que se reconocen en el Fuero no podrán atentar a la unidad espiritual de España. Y es evidente que existe contradicción entre los artículos 6 - apartado segundo y el 33 de dicho Fuero, pues cualquier actuación dirigida a fomentar las religiones, si parece permitida por el artículo 6 del Fuero de los españoles va sin embargo contra la unidad espiritual de España y se opone por ello a lo que dispone el artículo 33 del mismo Fuero. De esta forma la compatibilidad del binomio confesionalidad - libertad religiosa se rompe por encima de la justicia distributiva a favor de una decidida defensa de la confesionalidad católica, que es la oficial del Esta-

-do y que constituye la base oficial de la unidad espiritual de España. Todo ello lleva a poner como limite del derecho de libertad religiosa la confesionalidad católica cuando debería ser todo lo contrario, ya que la unidad espiritual de la nación aun identificada como unidad católica constituye un excelso bien común pero no encajable en la parte más esencial del mismo, que es la que constituye el orden público y por tanto su defensa no debe ser limite del derecho de libertad religiosa que sí es bien esencial y por ello está integrada en el concepto de orden público.

En consecuencia se hace necesario revisar el artículo 33 del Fuero de los españoles a fin de ponerlo en armonía con el artículo 6 del mismo Fuero y lograr así la compatibilidad de la confesionalidad católica del Estado con el efectivo reconocimiento del derecho de libertad religiosa.

XXXIX.- Es necesario distinguir entre unidad nacional política y unidad religiosa. Son contenidos distintos e independientes por su naturaleza y cuentan con medios diversos para el logro de sus distintos fines. La primera es función del Estado conseguirla; la segunda es misión de la Iglesia. Es evidente que se producirá una relación entre ellas al integrar sujetos comunes, pero no deben identificarse por ello; igual que hay una clara relación entre libertad religiosa y libertad política, sin que tampoco quiera decir que tengan que confundirse en su contenido y en su desarrollo.

XL.- La unidad religiosa no es un elemento necesario e indispensable para la unidad política de la nación.

XLI.- El concepto según el cual la unidad del Estado se basa en la unidad religiosa, y el concepto pagano de la fusión completa de la vida política y de la vida religiosa, han sido abolidos por el Cristianismo, que establece, al contrario, una neta distinción entre la Iglesia y el Estado.

XLII.- La idea de que la unidad religiosa sería necesaria para la unidad política conduciría al Estado a decidir en materia de religión y esto sería un atentado a la dignidad de la religión, que por naturaleza es superior al Estado.

XLIII.- El país tiene suficientes resortes como para preservar su unidad política sin hacer recurso abusivo de la unidad religiosa.

XLIV.- La mejor manera de llegar a una política en verdad humana es desarrollar el sentido interior de la justicia, de la bondad y del servicio al bien común, robustecer las convicciones fundamentales sobre la verdadera índole de la comunidad política y su finalidad, como también los límites de la autoridad pública. Para ello hace falta conseguir una renovación de los espíritus, que en palabras conciliares exige no sólo la promulgación de leyes justas, sino también la promoción de la cultura y la utilización de los medios de comunicación social dependientes de la potestad civil que creen un clima favorable al respeto, por parte de los ciudadanos y de los grupos sociales, del derecho de libertad religiosa.

XLV.- También se reconoce la confesionalidad católica del Estado español y el derecho de libertad religiosa en el actual Concordato español de 1953.

XLVI.- La confesionalidad católica del Estado español está reconocida en el vigente Concordato de 1953 en su artículo I y en su Protocolo final en relación con el artículo I.

XLVII.- El derecho de libertad religiosa se reconoce igualmente en el actual Concordato español en su Protocolo final en relación con el artículo I, que recoge el artículo 6 del Fuero de los españoles, modificado por la Ley Orgánica del Estado de 10 de enero de 1967.

XLVIII.- A todo esto hay que decir, sin embargo, por una parte, que la confesionalidad es un acto interno de la nación y por ello el Concordato deberá dejar de vincular en ese punto al Estado, y, por otra, hay que reconocer también que existen en el actual Concordato disposiciones que resultan realmente incompati-

-bibles con el derecho de libertad religiosa como son, entre otras las que se refieren a la libertad de la Iglesia, privilegios de la Iglesia y el Estado, subvención económica; dotación del culto y clero, exenciones fiscales, enseñanza y matrimonio; y, por lo mismo, el Concordato actual deberá ser revisado no sólo en lo que se refiere a la confesionalidad del Estado sino también en lo que concierne a las indicadas materias.

XLIX.- La libertad de la Iglesia está en principio y en términos generales plenamente reconocida en el actual Concordato español de 1953. De una forma implícita en el artículo I; y de una forma explícita en el artículo II.

Sin embargo, la libertad de la Iglesia en varios aspectos de su ejercicio se encuentra o bien limitada por otras disposiciones del Concordato o bien regulada en el mismo texto concordatario de forma discorde con las exigencias del derecho de libertad religiosa y del pluralismo religioso existente actualmente en España.

L.- Es necesario señalar que, ultimamente, por el acuerdo firmado en el Vaticano, el 28 de julio del presente año de 1976, entre la Santa Sede y el Gobierno español la Iglesia ha visto recuperada su libertad para el nombramiento de sus obispos; libertad que en el Concordato actual de 1953 le estaba limitada por el privilegio de presentación que en el mismo se concedía al Jefe del Estado español.

LI.- Es evidente que la libertad de la Iglesia para el nombramiento de cargos eclesiásticos, especialmente para el nombramiento de sus obispos, constituía ciertamente uno de los puntos fundamentales del actual Concordato español que más urgentemente necesitaba ser revisado. Por fortuna este punto tan importante del actual Concordato ya ha sido recientemente revisado juntamente también con el no menos importante del privilegio del Fuero Eclesiástico. Todo esto ha sido posible gracias al acuerdo entre la Santa Sede y el Gobierno español de 28 de julio de 1976, por el que se revisan los

artículos del indicado Concordato de 1953 referentes al privilegio de presentación de obispos y al fuero eclesiástico.

De esta forma quedan suprimidos, realmente, del actual Concordato español los fundamentales privilegios que en dicho Concordato se habían concedido la Iglesia y el Estado, y se abre así una nueva etapa en las relaciones de la Iglesia y el Estado español, hacia una mayor concordia y sana colaboración en la libertad, la autonomía y la independencia.

LII.- La Iglesia debe ser libre para organizar adecuadamente su actividad pastoral. La Iglesia debe tener, por tanto, también libertad para su organización territorial, para erigir diócesis o cualquier tipo de unidad o circunscripción eclesiástica, así como para introducir cualquier modificación territorial.

Sin embargo, en el actual Concordato español la Iglesia sólo puede hacer esto previo acuerdo con el Gobierno. Es necesario, pues, revisar el Concordato también en este punto, a fin de conseguir que la Iglesia tenga plena libertad tan importante aspecto.

El Estado, no obstante, debe ser prenotificado, en todo caso, para que exponga excepcionalmente sus razones en caso de que existan en orden a alguna variación que juzgue conveniente. Podrá haber incluso en caso excepcional, negociación entre la Iglesia y el Estado para buscar un entendimiento en este punto pero nunca un derecho de veto.

LIII.- La Iglesia debe tener libertad para la enseñanza.

En el actual Concordato español de 1953 se reconoce y garantiza la libertad de la Iglesia en la enseñanza: de una forma implícita en el artículo I, y, expresamente, en el artículo II. Pero además de estos principios generales el actual Concordato español dedica al reconocimiento del magisterio de la Iglesia de forma expresa y particular los siguientes artículos: Arts. XXVI, XXVII,

XXVIII, XXIX, XXX y XXXI.

Además, y para dar efectividad a lo que establece el artículo XXXI del Concordato, la Iglesia y el Estado español firmaron el Convenio de 5 de abril de 1962 " sobre el reconocimiento a efectos civiles de los estudios de ciencias no eclesiásticas realizadas en España en Universidades de la Iglesia. Este Convenio fué un avance importante, un primer paso en la implantación efectiva de la libertad de enseñanza universitaria, pero está lleno de limitaciones, de controles, en una palabra de recelo y de desconfianza. Resaltaba en él la falta, ya entonces, de autonomía de las universidades de la Iglesia.

El convenio es, en todo caso, una manera de realizar lo establecido en el artículo XXXI del actual Concordato pero no excluye otras.

LIV.- La libertad de la Iglesia en la enseñanza está claramente reconocida y garantizada, como ya hemos indicado, en el actual Concordato español de 1953, y ello es lógico pues esta libertad de que goza la Iglesia en España no constituye privilegio alguno, antes bien, es un verdadero y fundamental derecho. Sin embargo, es evidente que lo que no constituye privilegio desde un punto de vista estricto puede resultar privilegio en una situación histórica determinada, si, por ejemplo, la libertad de enseñanza sólo se reconoce a la Iglesia católica y no a todas las comunidades humanas que respeten un mínimo ético, dentro de un orden jurídico nacional; y en este sentido hay que reconocer que esta libertad de que deben gozar también todas las

confesiones religiosas no católicas que respeten ese mínimo ético no está suficientemente reconocida y garantizada en el actual Concordato español que se limita a dispensar a los hijos de los no católicos de la obligatoriedad de recibir enseñanza católica en los centros docentes, cuando es evidente que el Estado deberá proveer incluso a la educación religiosa de los acatólicos cuando estos fueran en número suficiente y lo desearan. Este es otro punto por tanto en el que el actual Concordato necesita ser revisado.

Asimismo creemos que el actual Concordato español en lo que se refiere a la enseñanza deberá ser revisado en los siguientes puntos:

- a) Deberán revisarse aquellas disposiciones del Concordato que atribuyen a los Ordinarios funciones y poderes que chocan con la mentalidad actual y que chocaban ya cuando se firmó el Concordato, como lo demuestra el hecho de que no han sido ejercitados. Así la vigilancia de los centros estatales de cualquier orden y grado que establece el artículo XXVI y la facultad de exigir que sean retirados los libros y publicaciones y material de enseñanza que estimen contrarios al dogma y a la moral católica a que se refiere también el mismo artículo.
- b) Deberán revisarse también las normas referentes al nombramiento de los profesores de Religión contenidas en el artículo XXVII; pues en este artículo se regula el nombramiento de los profesores de Religión con detalles que no es necesario descienda un Concordato. Además el criterio adoptado con relación a dichos profesores es de un clericalismo exagerado: para la enseñanza superior se preceptúa que el profesor sea eclesiástico y para la segunda enseñanza sólo subsidiariamente se admite al profesor seglar.

En el mismo artículo XXVII del actual Concordato se establecen pruebas de suficiencia científica y pedagógica para los cargos de profesores de Religión. Se prevee incluso la composición del Tribunal: cinco miembros, tres de ellos eclesiásticos, debiendo ser Presidente uno de estos; sin embargo tales tribunales no han funcionado y no es previsible que hoy se puedan poner en funcionamiento por lo cual parece lógico suprimirlos.

En el mismo artículo XXVII se establece también que los profesores de Religión en los Centros estatales sean nombrados por la Autoridad civil competente a propuesta del Ordinario diocesano y que

confesiones religiosas no católicas que respeten ese mínimo ético no está suficientemente reconocida y garantizada en el actual Concordato español que se limita a dispensar a los hijos de los no católicos de la obligatoriedad de recibir enseñanza católica en los centros docentes, cuando es evidente que el Estado deberá proveer incluso a la educación religiosa de los acatólicos cuando estos fueran en número suficiente y lo desearan. Este es otro punto por tanto en el que el actual Concordato necesita ser revisado.

Asimismo creemos que el actual Concordato español en lo que se refiere a la enseñanza deberá ser revisado en los siguientes puntos:

- a) Deberán revisarse aquellas disposiciones del Concordato que atribuyen a los Ordinarios funciones y poderes que chocan con la mentalidad actual y que chocaban ya cuando se firmó el Concordato, como lo demuestra el hecho de que no han sido ejercitados. Así la vigilancia de los centros estatales de cualquier orden y grado que establece el artículo XXVI y la facultad de exigir que sean retirados los libros y publicaciones y material de enseñanza que estimen contrarios al dogma y a la moral católica a que se refiere también el mismo artículo.
- b) Deberán revisarse también las normas referentes al nombramiento de los profesores de Religión contenidas en el artículo XXVII; pues en este artículo se regula el nombramiento de los profesores de Religión con detalles que no es necesario descienda un Concordato. Además el criterio adoptado con relación a dichos profesores es de un clericalismo exagerado: para la enseñanza superior se preceptúa que el profesor sea eclesiástico y para la segunda enseñanza sólo subsidiariamente se admite al profesor seglar.

En el mismo artículo XXVII del actual Concordato se establecen pruebas de suficiencia científica y pedagógica para los cargos de profesores de Religión. Se prevee incluso la composición del Tribunal: cinco miembros, tres de ellos eclesiásticos, debiendo ser Presidente uno de estos; sin embargo tales tribunales no han funcionado y no es previsible que hoy se puedan poner en funcionamiento por lo cual parece lógico suprimirlos.

En el mismo artículo XXVII se establece también que los profesores de Religión en los Centros estatales sean nombrados por la Autoridad civil competente a propuesta del Ordinario diocesano y que

dichos profesores en las escuelas no estatales habrán de poseer un especial certificado de idoneidad expedido por el Ordinario propio; disponiendo, además, en el primer caso que los profesores serán removidos cuando lo requiera el Ordinario diocesano por alguno de los motivos contenidos en el canon 1381 del Código de Derecho Canónico y en el segundo caso, que la revocación de tal certificado de idoneidad les privará sin más de la capacidad para la enseñanza religiosa.

Estas disposiciones sujetan, evidentemente, al profesor de Religión a su correspondiente Ordinario, lo cual tropieza con los vigentes conceptos de autonomía universitaria y crea el peligro, no irreal, de la presencia en los centros universitarios de profesores más notables por su afección a su Ordinario que por su prestigio científico.

Por todo ello, parece necesario revisar también estas disposiciones del actual Concordato español de 1953 de acuerdo con las exigencias de la mencionada autonomía universitaria. Pero, para una correcta revisión de estas disposiciones concordatarias sobre la enseñanza religiosa se habrá de tener en cuenta que la programación de la enseñanza religiosa en los distintos niveles educativos es uno de los campos principales para una sana colaboración entre el Estado, por ser responsable del bien común del país, y la Iglesia, por su competencia específica en la materia; lo cual quiere decir que dicha programación deberá ser regulada por el Gobierno, previo acuerdo con la Jerarquía eclesiástica.

L V.- En cuanto a lo que establece el número 6 del artículo XXVII del actual Concordato español sobre la equiparación del profesorado de religión a los otros profesores en sus derechos y participación en el claustro del centro docente creemos necesario y urgente el darle completa efectividad.

LVI.- En el actual Concordato español de 1953 la enseñanza de la religión católica está prevista por el sistema de asignatura obligatoria en todas los niveles docentes. Nosotros creemos, en este aspecto, que la enseñanza religiosa debe ser común y obligatoria en todos los niveles educativos excepto en la Universidad, y que el derecho a ser eximido de la misma se realice mediante petición formal que no lleve acarreada declaración de no católico.

Y consideramos que debe admitirse, tanto para los no católicos como para los católicos que así lo decidan, la posibilidad de eximirse de la enseñanza religiosa previa petición positiva y formal de exención de parte de los padres o tutores o del alumno en caso de ser adulto; y que quienes queden exentos de la formación religiosa deben recibir formación de moral natural o de deontología profesional.

LVII.- En cuanto a la enseñanza de la religión en la Universidad es evidente que la situación actual no sólo no es positiva sino que es nociva porque se desprestigia con la asignatura obligatoria su contenido. Por ello sería muy conveniente encontrar otro sistema que podría consistir muy bien en crear alguna cátedra de libre asistencia, donde la Facultad lo permitiese, organizar conferencias de libre asistencia, actuar a través de instituciones para universitarios, sean colegios mayores u otras de la Iglesia etc., El objetivo, en todo caso debe consistir en conseguir que esa instrucción y educación religiosa se lleve a cabo realmente.

No se trata, por tanto, de abandonar la enseñanza religiosa en la Universidad, sino de revigorarla.

Finalmente y en cuanto afecta a la autonomía de la Universidad católica, creemos que debe ampliarse el reconocimiento de los estudios hechos en los centros de la Iglesia y el acceso a estudios eclesiásticos de seculares que deseen hacerlos.

LVIII.- La libertad de la Iglesia en la predicación de su doctrina es un derecho fundamental y una clara exigencia del derecho de libertad religiosa.

LIX.- Por tanto, es de justicia que pueda la Iglesia en todo momento y en todas partes predicar la fe con auténtica libertad, enseñar su doctrina social y ejercer su misión entre los hombres sin traba alguna.

LX.- Esta libertad de la Iglesia en la predicación está reconocida en el actual Concordato español de 1953. Implícitamente en su artículo I. Explícitamente en el artículo II. Por todo ello, podría resultar extraño que se hable de la libertad de la Iglesia en la predica-

-ción de su doctrina como uno de los puntos que deben ser objeto de revisión al afrontar la necesaria reforma del actual Concordato español.

Sin embargo, no pueden ignorarse los casos en que por haber tocado la predicación temas que podríamos llamar políticos, se han producido tensiones entre la Iglesia y el Estado. Tensiones que se han visto agravadas en algunos casos por entrar en juego el artículo XVI en el que se consagra un cierto privilegio del fuero para los clérigos, al exigirse la necesidad del consentimiento previo del Ordinario para instruir el proceso criminal.

LXI.- La Iglesia nunca y menos en estos momentos puede renunciar a proclamar su doctrina sobre el hombre y la sociedad.

LXII.- La predicación de su doctrina sobre el hombre y la sociedad constituye para la Iglesia no sólo un derecho sino incluso una obligación.

LXIII. La religión cristiana y en concreto la católica no es una religión misteriosa en la que el hombre busque su salvación en la celebración de unos ritos o la iniciación en unos misterios, al margen de cualquier concepción ética. La religión cristiana importa, esencialmente, una concepción integral del hombre y de la vida, lleva consigo una ética- inseparable de su doctrina y derivada de la misma -, necesaria para la salvación del fiel y que se refiere a toda actividad humana, que no sea puramente técnica, y que abarca el aspecto individual, familiar y colectivo, y que se refiere a todos los campos vitales, sin excluir el social, político y económico. Y, así, la Iglesia desde su misma fundación ha predicado su doctrina sobre el hombre y sus actividades tanto individuales como colectivas, en el ámbito de su vida privada, familiar o social.

LXIV.- La Iglesia no puede situarse en una ~~etérea~~ neutralidad respecto al quehacer humano. La cuestión es evidente; pues entre evangelización y promoción humana - desarrollo, liberación - existen efectivamente lazos muy fuertes. Vínculos de orden antropológico, porque el hombre que hay que evangelizar no es un ser abstracto, sino

un ser sujeto a los problemas sociales y económicos. Y, así, la Iglesia afirma que tiene el deber de anunciar la liberación total del hombre. Declara que no admite el circunscribir su misión al sólo terreno religioso desinteresándose de los problemas temporales del hombre, pero afirma también que la liberación que la evangelización anuncia no puede reducirse a la simple y estrecha dimensión económica, social o cultural sin que debe abarcar al hombre entero, en todas sus dimensiones, incluida su apertura al Absoluto que es Dios.

LXV.- La Iglesia asocia, pero no identifica nunca liberación humana y salvación en Jesucristo.

LXVI.- No toda noción de liberación es necesariamente coherente y compatible con una visión evangélica del hombre.

LXVII.- La Iglesia no puede aceptar la violencia sobre todo la fuerza de las armas - incontrolable cuando se desata - ni la muerte de quienquiera que sea, como camino de liberación, porque sabe que la violencia engendra inexorablemente nuevas formas de opresión y de esclavitud, a veces más graves que aquellas de las que se pretende liberar. Además esta actitud es contraria al espíritu cristiano e incluso puede retardar, en vez de favorecer la legítima elevación social.

LXVIII.- A todo esto hay que decir, sin embargo, que la fe cristiana no es ninguna ideología política ni puede ser identificada con ninguna de ellas, dado que ningún sistema social o político puede agotar toda la riqueza del Evangelio, ni pertenece a la misión de la Iglesia presentar opciones o soluciones concretas de gobierno en los campos temporales de las ciencias sociales económicas o políticas.

LXIX.- La Iglesia reconoce incluso que para lo que es competencia del Estado los laicos tienen sus propios carismas.

LXX.- Existen, sin embargo, unos valores humanos que han de promoverse , acrecentarse y defenderse en la acción política, y que la Iglesia, que es la gran defensora del hombre, ha de predicar constantemente y que los cristianos tienen el deber ineludible de luchar por conseguir con una actuación adecuada y en colaboración con los demás ciudadanos.

LXXI.- No se mete, pues, en política la Iglesia cuando denuncia las injusticias existentes o cuando pide una mayor libertad responsable para los ciudadanos. Está , sencillamente, cumpliendo con su deber; pues, la Iglesia tiene la obligación de predicar la palabra de Dios sobre la sociedad, sobre todo cuando se trata de promover los derechos humanos.

LXXII.- La Iglesia para cumplir su misión no pide ningún privilegio; pide que se le reconozca la libertad que proclama para todos; pide el derecho a predicar el Evangelio entero; pide una libertad que no es concesión discernible o situación pactable, sino el ejercicio de un derecho inviolable de todo hombre. Y esta es, en realidad, doctrina común a todas las Iglesias cristianas.

LXXIII.- Por su parte el Estado tiene, evidentemente, derecho a defender el bien común y a sancionar cualquier delito que se cometa en la sociedad. Y es claro que en el ejercicio de la profesión se puede cometer un delito tipificado, por ejemplo, de difamación, calumnia o injuria. Y puede ocurrir también que un predicador sin cometer delito tipificado en el ordenamiento estatal, exponga como doctrina evangélica o de la Iglesia católica, lo que en realidad no es más que una opinión suya particular, quizás muy discutible.

LXXIV.- Se distingue, así, en el problema de la predicación de la Iglesia un doble aspecto: la conformidad de la doctrina que se expone en las homilías con el Evangelio y con la doctrina o disciplina de la Iglesia y la posible transgresión de alguna ley civil. El primer aspecto no puede juzgarlo más que la misma Iglesia; el segundo , como es lógico debe juzgarlo la autoridad civil.

LXXV.- El problema es de difícil solución pero desaparecería en gran parte si desapareciera la confesionalidad de tipo doctrinal, en cuyo caso el Estado no quedaría rigurosamente vinculado a legislar conforme a la plenitud de la doctrina católica. De esta forma, la opinión de que una determinada norma no está conforme con aquella doctrina no tiene por qué constituir un delito de calumnia o injuria. Y por otra parte, debe desaparecer totalmente el privilegio del fuero que, ciertamente empaña el testimonio de la Iglesia y dificulta la acción de la justicia.

LXXVI.- De esta forma la Iglesia quedaría libre para exponer su doctrina, incluso sobre las materias políticas, económicas y sociales. Y los abusos de tipo doctrinal que en el ejercicio de la predicación se cometieran deberían ser sancionados por la misma Iglesia. Y el Estado quedaría también libre para procesar o sancionar a cualquier clérigo que, abusando de su ministerio, hubiera cometido cualquier delito tipificado en el código penal.

LXXVII.- Si aún así se plantean conflictos no queda otra solución que la actuación libre de ambas partes: el Estado para mantener su legislación y decisiones y la Iglesia para proclamar ante el pueblo, si así lo estima, que aquellas normas o actuaciones - al margen de cualquier juicio puramente legal - no están conformes con su ética y doctrina.

LXXVIII.- Por principio de igualdad ante la Ley y para una completa independencia de la Iglesia y el Estado deben desaparecer del actual Concordato español de 1953 todos los privilegios que la Iglesia y el Estado se reconocieron en dicho Concordato.

LXXIX.- En el orden del Derecho positivo podemos hablar de situación privilegiada siempre que la Iglesia goce de un estatuto u otros derechos que no sean comunes y compartidos por los otros ciudadanos y grupos sociales, prescindiendo de su naturaleza más íntima desde la perspectiva del Derecho natural o de una filosofía del Estado.

LXXX.- Al hablar de privilegios de la Iglesia y de su renuncia, se hace necesario distinguir entre derechos esenciales y derechos históricos que establecen la sociedad y los individuos. Unos son los que proceden de la esencia de la institución y a los que el titular no puede renunciar. La Iglesia tiene unos derechos que proceden de su esencia y de su institución, que nunca podrá renunciar; por ejemplo: el derecho a predicar el Evangelio.

En cambio los otros derechos, los históricos, son los que se construyen en una circunstancia histórica entre dos instituciones, como son la Iglesia y el Estado; derechos que tienen perfecta consistencia aunque hayan nacido historicamente, pero que son otra cosa. Este tipo de derechos que se construyen históricamente han de ser continuamente revisables en el desarrollo de la historia para ver si siguen teniendo la función que tenían. A estos derechos históricos la Iglesia puede y en ocasiones debe renunciar, si no son reconocidos a todos los hombres, en aras de su testimonio y de su solidaridad con todos los miembros de la sociedad humana. A los otros derechos que son esenciales y que constituyen al mismo tiempo una grave obligación la Iglesia no puede renunciar.

LXXXI.- En este sentido hay que decir que el Concilio claramente declara que la Iglesia no pone su esperanza en privilegios ofrecidos por la autoridad civil; más aún - añade que - renunciará al ejercicio de ciertos derechos legítimamente adquiridos allí donde con su uso se ponga en duda la sinceridad de su testimonio o donde las nuevas condiciones de vida exijan otra ordenación.

LXXXII.- Igualmente se manifiesta el Episcopado español en su declaración sobre "La Iglesia y la comunidad política".

LXXXIII.- Consecuentemente la Iglesia en el caso concreto español podía y debía renunciar al privilegio del fuero. Y por lo mismo debía desaparecer del actual Concordato español de 1953 dicho privilegio. Entre otras razones porque los demás ciudadanos no tienen este punto de apoyo en alguien que salga en su defensa.

En el plano jurídico español sólo los eclesiásticos gozaban de ese privilegio de que hacía falta una autorización para juzgarles.

Por ello, es lógico que la Iglesia haya renunciado al mismo por principio de igualdad. Y tan lógico como conveniente el que haya sido suprimido junto con el privilegio de presentación por el acuerdo entre la Santa Sede y el Gobierno español de 28 de julio de 1976.

LXXXIV.- Deben desaparecer la exención del servicio militar de los clérigos, en cuanto clérigos, y que tanto el clérigo como el religioso puedan acogerse a normas generales que le sean aplicables, por ejemplo para estudiantes, objetores de conciencia o a un posible estatuto particular, fundado en interés social. En este sentido no sería privilegio el establecimiento de un estatuto propio de la Iglesia fundado en el servicio social que la misma presta y en la medida en que la sociedad lo valora y desea. Estatuto que, por otra parte, con matices exigidos por su propia naturaleza podrá ser aplicable a otras confesiones.

Sin embargo, estos estatutos y normas especiales deben reducirse al máximo y deben aplicarse sólo en casos evidentes y excepcionales; pues el mundo actual es especialmente sensible al principio de igualdad y aun cuando la especialización del trabajo social que brota de los estatutos particulares puede enriquecer a la sociedad, su precio sería demasiado elevado si crea un malestar entre los ciudadanos que se sienten discriminados.

Por ello, aun reconociendo que un estatuto particular del clero y de las comunidades religiosas pueda ser justo e incluso conveniente, como el de otras profesiones o grupos sociales, creemos que debe ser reducido a lo absolutamente necesario sin que en ningún caso comporte unos beneficios excepcionales, ni directos ni indirectos para los clérigos o miembros de la Iglesia.

LXXXV.- Consecuentemente, la exención del servicio militar de los clérigos y religiosos de que habla el Código de Derecho canónico en sus cánones 121 y 614 y que el actual Concordato español de 1953 regula en su artículo XV, constituye otro de los puntos fundamentales de este Concordato que necesitan también de revisión.

LXXXVI.- En cuanto a la ayuda económica que el Estado proporciona a la Iglesia y que el Concordato español actual regula en el artículo XIX hemos de señalar que el derecho de libertad religiosa ha de considerarse no ya como un puro derecho civil de los ciudadanos ante el cual el Estado se limite a reconocerlo, como un puro derecho formal , un puro poder hacer sin ofrecerle ningún medio o facilidad para hacerlo eficaz, sino más bien como un derecho subjetivo público de contenido social y positivo. Y es claro que la actitud del Estado ante este tipo de derechos del ciudadano no se agota en el reconocimiento , garantía y tutela de los mismos, sino que procura hacerlos eficaces y posibles, especialmente a las clases económicamente débiles ofreciendo los medios necesarios y llevando a la práctica un auténtico principio de igualdad de oportunidades.

LXXXVII.- Concebido pues lo religioso desde un punto de vista político y sociológico, como una apetencia legítima y enriquecedora del individuo y de la sociedad y como un valor no inferior al cultural, deportivo o recreativo, es lógico que también el Estado ofrezca los medios necesarios para su fomento y desarrollo

LXXXVIII.- Así pues , un Estado moderno , sensible a lo social, deberá ofrecer gratis a todos los ciudadanos la posibilidad de acceder libremente a la cultura, al deporte, a la higiene, etc., y como es lógico también a las actividades y prácticas religiosas.

LXXXIX. Concebido, por tanto, el derecho de libertad religiosa desde un punto de vista político y sociológico es claro que no puede hablarse propiamente de la ayuda estatal a la Iglesia como de un privilegio sino de un auténtico derecho . Sin embargo, aunque no constituye privilegio en sentido estricto si puede resultar privilegio si sólo se concede a la Iglesia católica y no a las demás confesiones religiosas que la moral y el justo orden público.

El problema es realmente serio y no existe unanimidad en la forma de resolverlo.

XC.- En todo caso, es evidente que la ayuda económica a la Iglesia es también otro punto importante dentro del Concordato español de 1953 que necesita ser revisado.

XCI.- La forma más correcta de resolver en estos momentos el problema económico de la Iglesia en España parece ser la vigente en el sentido de tratar esta cuestión como se tratan materias sfines, sueldos de maestros, profesores, etc.

XCII.- Sin embargo es claro que desde un punto de vista especialmente pastoral y evangélico la solución más aceptable y correcta sería que la Iglesia subsistiera por los recursos prestados por los propios fieles a fin de pudiera , así, mantenerse liberada en lo posible de vinculaciones con el Estado. Pero es evidente también que para conseguir esto habrá que concienciar antes al pueblo.

XCIII.- Otro punto importante del actual Concordato español de 1953 que debe ser revisado es el que hace referencia a las exenciones o bonificaciones fiscales de la Iglesia, pues creemos que deben desaparecer todos las exenciones que se funden en el carácter sobrenatural de la Iglesia y no en su función social o carácter benéfico -docente. Y consideramos, por tanto, que debe desaparecer toda protección estatal que se funde en motivos sobrenaturales y que no sean las garantías jurídicas comunes a los ciudadanos, a los grupos sociales o a las personas morales que desde un punto de vista sociológico ejercen funciones análogas.

El criterio de exención tributaria, pues, no ha de ser subjetivo , basado en privilegios o discriminación alguna; ha de ser objetivo, en virtud de la contribución al bien de la sociedad española y en paridad y proporción con instituciones análogas(benéficas, docentes e incluso religiosas de otras confesiones).

XCIV.- Respecto a la presencia de altas personalidades eclesiásticas en organismos del Estado, prevista y regulada por las Leyes fundamentales que integran la vigente Constitución española: Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 26 de julio de 1947 y Ley constitutiva de las Cortes Españolas de 17 de julio de 1942, modificadas por la Ley Orgánica del Estado de 10 de enero de 1967; así como en la Ley orgánica del Consejo de Estado, de 25 de noviembre de 1944 y en el actual Concordato español de 1953, creemos conveniente señalar que en aras de la mutua independencia de la Iglesia y del Estado los miembros de la jerarquía eclesiástica deben retirarse de los puestos en los organismos políticos de la nación.

Este, además, es el sentir oficial de la Iglesia.

Por todo ello, es claro que deben ser revisadas estas disposiciones normativas que establecen dicha presencia eclesiástica en organismos del Estado a fin de conseguir así el poder evitar la grave inconveniencia de que dichos puestos políticos se ocupen por prelados y contribuir de esa forma a una más clara y real independencia de la Iglesia y el Estado.

XCV.- Debía ser revisado también el actual Concordato español de 1953 en lo que se refería al privilegio de presentación, para cuya regulación según dispone el mismo Concordato en su artículo VII estaba vigente el acuerdo estipulado entre la Santa Sede y el Gobierno español de 7 de junio de 1941- anejo 1º al texto concordatario.

La razón es clara, pues, se trataba realmente, de un verdadero privilegio que confería al Estado una intervención eficaz en el nombramiento de quienes habrían de ocupar los puestos de mayor responsabilidad en la vida de la Iglesia; lo cual, evidentemente, creaba grandes dificultades para las pacíficas relaciones Iglesia Estado y privaba a la Iglesia de un derecho propio, peculiar y de suyo exclusivo de su competencia. Pues es evidente que el derecho a elegir y nombrar libremente a sus ministros es una de las consecuencias más obvias del derecho a la libertad religiosa que hay que defender no sólo para la Iglesia católica sino también para las demás confesiones.

Era un privilegio, historicamente explicable, para la Corona de España, que a la altura de nuestro tiempo no era lógico mantenerlo, Sería un poco como si la Santa Sede quisiera intervenir en el

nombramiento de los Gobernadores Civiles.

Cabe, sin embargo el que se notifique, por parte de la Iglesia, al Poder político el nombre de la persona a quién la Iglesia ha elegido para el desempeño de un oficio episcopal; en cuyo caso la Iglesia podría admitir observaciones y hasta objeciones fundadas por parte del Estado, pero nunca podría admitir, como es lógico, un derecho de veto. Y este procedimiento es precisamente el que ha sido adoptado en el primer acuerdo para la revisión del Concordato entre la Iglesia y el Estado español firmado en el Vaticano el 28 de julio de 1976.

XCVI.- En cuanto al privilegio de las preces diarias por el Jefe del Estado, que el Concordato establece en el artículo VI, constituye evidentemente un verdadero privilegio del Estado español y es claro que como tal privilegio no tiene por que existir. Puede subsumirse en las preces de carácter genérico de la nueva Liturgia y con ello se resuelve perfectamente esta cuestión.

XCVII.- Otro importante punto del actual Concordato español de 1953 que necesita ser revisado es el que se refiere al matrimonio, a cuya regulación dedica dicho Concordato los artículos XXIII, XXIV y XXV así como las disposiciones del protocolo final en relación con los artículos XXIII y XXV.

La cuestión se presenta fundamentalmente en los siguientes términos: El texto de la letra C del protocolo final del actual Concordato español de 1953 establece la obligación para el Estado español de poner en armonía su legislación, en lo que se refiere al matrimonio, con la legislación canónica.

Consecuente con esta disposición el legislador español, por medio de la Ley de 24 de abril de 1958 ha llevado a cabo la reforma del artículo 42 del Código civil, estableciendo que el matrimonio habrá de contraerse canonicamente cuando uno al menos de los contrayentes profese la Religión católica. Se autoriza el matrimonio civil cuando se pruebe que ninguno de los contrayentes profesa la Religión católica. De esta forma nos encontramos ante un texto legal cuyo evidente significado es la inequívoca obligación civil de realizar un acto religioso. Así, el español que profese la religión católica no sólo tiene la obligación moral y religiosa de contraer matrimonio canonicamente sino que a esa obligación moral y religiosa se le añade

una verdadera obligación civil.

Esta imposición civil del matrimonio canónico atenta directamente contra el derecho de libertad religiosa, que incluye el derecho que toda persona tiene de contraer matrimonio según el dictamen de su conciencia, respetando siempre las justas exigencias del orden público.

Es claro, pues, que el Estado no es quien para obligar a quienes pretenden contraer matrimonio a celebrar un acto de culto y a recibir un sacramento que ellos voluntariamente rechazan.

El Estado se excede también de su competencia al imponer en el artículo 83, número 4 del Código civil que "quienes hubieran sido ordenados in sacris o estén ligados con voto solemne de castidad, dentro de la Iglesia católica, no podrán contraer matrimonio sin dispensa canónica". Tal prohibición implica la violencia de la persona y de su libertad y ello atenta, indudablemente, también, contra el derecho de libertad religiosa.

Por todo ello, se hace necesario revisar el artículo 42 y 83, número 4 del Código civil; pero dicha revisión exige lógicamente la previa revisión del texto de la letra C del protocolo final del Concordato de 1953 en relación con su artículo XXIII, pues es precisamente el contenido de este texto el que exige la vigencia de aquellos artículos.

Consecuentemente es necesario revisar el apartado C del protocolo final del Concordato en relación con su artículo XXIII, a fin de conseguir, así, en España una regulación de la celebración del matrimonio más acorde con las exigencias de un efectivo reconocimiento del derecho de libertad religiosa.

XCVIII.- Dos fórmulas parecen las más acertadas y acordes con el derecho de libertad religiosa para regular la celebración del matrimonio: el sistema del matrimonio civil obligatorio que permita la celebración de los ritos propios de las distintas confesiones, antes o después de la celebración civil del matrimonio; y el sistema matrimonial optativo.

XCIX.- El Estado debe reconocer plenos efectos jurídicos al matrimonio religioso y ello como una consecuencia del derecho de libertad religiosa que tiene todo ciudadano y como una prueba de realismo jurídico y político por parte del legislador civil, ya que el Estado tiene el derecho y la obligación de ejercer un control sobre la necesaria publicidad de los matrimonios en orden a dotarles de una necesaria protección jurídica. Pero para ello es bastante la obligación de registrar civilmente al matrimonio religioso sin que parezca necesario exigir se repita el consentimiento ante la autoridad civil.

C.- Consecuentemente, la segunda fórmula que consiste en un sistema matrimonial doble y optativo, se presenta como un sistema abierto de matrimonio civil facultativo con reconocimiento de efectos civiles al matrimonio canónico o religioso, con lo que tiene la gran ventaja de reconocer y respetar debidamente el derecho de libertad religiosa de los ciudadanos sin obligarles a repetir el consentimiento ante las autoridades de la Iglesia y del Estado.

CI.- El primer sistema de matrimonio civil obligatorio ofrece evidentemente mayor seguridad social pero tiene en contra suya el desconocer totalmente el matrimonio religioso e imponer la obligación de contraer matrimonio civil. Por ello sólo puede considerarse admisible este sistema siempre que antes o después de la celebración civil del matrimonio permita la celebración de los ritos propios de las distintas confesiones.

El segundo sistema por tanto parece el más respetuoso con la conciencia del individuo y por lo mismo el más acorde con el derecho de libertad religiosa, y en consecuencia el más aceptable.

CII.- El artículo XXIV del actual Concordato español de 1953 reconoce de forma exclusiva a la Iglesia la jurisdicción en las causas matrimoniales. Sin embargo, salvando la competencia de los tribunales eclesiásticos sobre el fondo del asunto, el Estado reclama una intervención, marginal si se quiere pero no poco importante, en una fase previa y en otra posterior a la acción de los órganos canónicos. Y así el Código civil en los artículos 67-68 y 81-82 recoge

fielmente lo acordado por ambos poderes sin más añadido que la posibilidad por parte del juez civil de dictar las medidas convenientes que faciliten a la mujer la preparación de su demanda de separación e impidiendo, por tanto, que el marido pueda interponer acción penal por abandono de familia.

De esta forma existe en España un sistema mixto, eclesiástico-civil, que si por un lado merece los plácemes de haber querido respetar al máximo las normas canónicas, por otro adolece de los inconvenientes propios de la acutación de dos jurisdicciones diferentes con la falta de agilidad consiguiente.

Por todo ello este sistema presenta varios fallos entre los que cabe considerar como principales los siguientes:

a) Por un lado se trata de un proceso largo, costoso, apasionado, que favorece el distanciamiento de los esposos y que se proyecta sobre los familiares e incluso sobre los hijos.

b) Por otro lado la falta dentro del campo civil y eclesiástico de unos verdaderos Tribunales familiares, con asesores competentes para el tratamiento adecuado de estos procesos.

c) Finalmente aflige ver a los Jueces eclesiásticos implicados con la mejor buena fe en asuntos que, aun cuando aparentemente se refieran a las personas de los esposos y de los hijos, en el fondo persiguen intereses económicos, pues lo que principalmente se pretende en el juicio de separación es que se declare la inocencia propia y la culpabilidad del otro cónyuge, no tanto por lo que vale moralmente el título de inocencia, como por lo que tiene de valor económico la culpabilidad del otro.

Consecuentemente parece necesario revisar el artículo XXIV del actual Concordato español a fin de que las causas matrimoniales de separación se sometan a los Tribunales civiles y que estos apliquen la ley civil. Podría darse, sin embargo una cierta intervención religiosa en estos momentos importantes en la vida de los cónyuges y una posible forma podría ser por ejemplo el exigir, como trámite previo a la admisión de la demanda por las autoridades civiles, la celebración ante las autoridades religiosas competentes de una especie de acto de conciliación con vertiente jurídica y pastoral.

Respecto a las causas de nulidad parece más claro que, supuesto el sometimiento del matrimonio religioso a las leyes de la confesión en que se contrae, sean las propias autoridades o tribunales eclesiásticos las que determinen cuándo **hay** o no nulidad del vínculo. Aquí no se trata de juzgar algo devenido con posterioridad a la unión, sino sobre el cumplimiento de una normativa a la que los cónyuges se sometieron voluntariamente. Por ello, en este aspecto creemos aceptable el sistema establecido en el actual Concordato y consecuentemente abogamos porque continúe vigente.

CIII.- Otro punto importante que, en nuestra opinión, deberá ser tenido en cuenta a la hora de revisar el actual Concordato español es el referente al divorcio.

A este respecto hay que señalar que el sistema legislativo español es absolutamente opuesto al divorcio: la indisolubilidad del matrimonio se considera en España como de orden público.

Frente a esta situación hay que decir que es indudable que para una conciencia cristiana el orden público y la moralidad pública deben facilitar la estabilidad matrimonial, como algo que la Iglesia enseña basado en la propia naturaleza humana. Pero es evidente que no puede imponerse tal concepción con carácter general apelando para ello al rigor de la ley y viviendo como vivimos en unas sociedades pluralistas donde el consenso en tal sentido no es real unánime.

El Estado debe atenerse, ciertamente, al bien común y al orden público a la hora de legislar, pero tales conceptos implican una relatividad consecuente con el momento histórico y con las circunstancias ambientales de cada comunidad.

El legislador estatal deberá tener en cuenta, por tanto, que en la sociedad actual, pluralista y democrática buena parte de las confesiones religiosas permiten el divorcio y que si por moral pública universal se entiende la practicada en la gran mayoría del mundo civilizado, el divorcio no puede considerarse ya opuesto a ella: el divorcio es una realidad que de día en día va ganando terreno en el concierto universal de los pueblos.

En cuanto se refiere a España el divorcio es un hecho social insoslayable que adquiere cada día más importancia ante el número

cada vez mayor de matrimonios rotos

A todo esto hay que añadir refiriendonos al caso concreto de España que el actual Concordato de 1953 admite dos casos de divorcio vincular según dispone el artículo XXIV que admite la disolución de matrimonios ratos y no consumados y en los casos en que se aplica el privilegio de la fe, y que el Código civil español consiguiente con dicho Concordato reconoce plenos efectos civiles a estos dos casos de divorcio vincular, por disposición de los artículos 80 y 82. Ante esta situación jurídica de que gozan los católicos no parece justo que el Estado niegue a sus súbditos de otras confesiones lo que concede a los católicos; y no parece tampoco justa la situación de clara desventaja en que, con relación a los católicos, quedan los que contraen matrimonio civil, respecto a la posibilidad de conseguir el divorcio.

Por todo ello y en contra de quienes se oponen a que el Estado dicte una ley de divorcio, nosotros abogamos por una ley que de modo realista lo haga difícil al capricho, pero posible cuando se trata de un mal menor; cuando el fracaso de un matrimonio sea total y definitivo y exista para uno o los dos cónyuges la posibilidad de rehacer su vida. Por lo demás, cada uno verá lo que hace con su conciencia.

Por último y en cuanto a una posible fórmula que sobre el divorcio debería establecerse en las futuras relaciones Iglesia - Estado en España creemos muy aceptable la empleada en el artículo 24 del actual Concordato portugués, en su nueva redacción, cuyo texto dice así: Al celebrar el matrimonio católico, los conyuges asumen, por el propio hecho, frente a la Iglesia, el compromiso de atenerse a las normas canónicas que lo regulan y, en particular, de respetar sus características esenciales. La Santa Sede, a la vez que reafirma la doctrina de la Iglesia católica sobre la indisolubilidad del vínculo matrimonial, recuerda a los cónyuges que han contraído matrimonio canónico el grave deber que les incumbe de no valerse de la facultad civil de pedir el divorcio.

De esta forma creemos podría solucionarse el problema de la regulación jurídica del matrimonio en España, en concordancia con el derecho de libertad religiosa y con las circunstancias del momento presente.

CIV.- Es claro, pues, que el actual Concordato español de 1953 debe ser revisado, fundamentalmente en lo que se refiere a los puntos pendientes y que ya hemos señalado.

CV.- En cuanto a la forma de llevar a cabo dicha revisión la más idónea sería sin duda el realizarla mediante acuerdos parciales, en los que se fuesen derogando aquellas normas que parecen inútiles o que pueden ser sustituidas por otras de carácter unilateral por parte de la Iglesia o del Estado y se mantuviesen mientras tanto aquellas normas concordadas para las que no se hubiese encontrado todavía la sustitución más conveniente.

Por fortuna, este ha sido el procedimiento adoptado al firmarse el primer acuerdo entre la Santa Sede y el Gobierno español el 28 de julio del presente año para la revisión parcial del Concordato actualmente vigente. Por este acuerdo quedan suprimidos el privilegio de presentación de obispos y el fuero eclesiástico, y al mismo tiempo en el mismo acuerdo las partes firmantes se comprometen a emprender, de común acuerdo, el estudio de las diversas materias pendientes de revisión, a las que ya hemos hecho referencia en otra conclusión anterior, con el fin de llegar cuanto antes a la conclusión de acuerdos que sustituyan gradualmente las correspondientes disposiciones del vigente Concordato.

CVI.- En los últimos años se han venido realizando múltiples y laboriosas gestiones entre la Santa Sede y el Gobierno español encaminadas a revisar el actual Concordato de 1953.

De entre las más importantes gestiones hay que destacar las siguientes: la redacción de dos anteproyectos de Concordato, el Anteproyecto Casaroli -Garrigues, de julio de 1970 y el Anteproyecto del Ministerio de Justicia dado a conocer por el diario Arriba en su número de 5 de febrero de 1971, y el recientemente firmado primer acuerdo entre la Santa Sede y el Gobierno español de 28 de julio de 1976.

Los dos anteproyectos se ha considerado como inaceptables: el primero, porque prácticamente dejaba las cosas tal y como estaban, y el segundo, porque, aunque presentaba más puntos positivos y era en conjunto un texto más moderno que el primero, contenía también puntos inaceptables especialmente en lo que se refería al nombramiento de obispos, cuya fórmula reducía enormemente la libertad de la Iglesia en un campo en el que debe tener absoluta

libertad. La única gestión, pues, hasta ahora, con relevancia práctica ⁵⁹⁷
en la vía de revisión del actual Concordato español es indudablemente
el Acuerdo de 28 de julio de 1976, que abre una nueva etapa en las
relaciones de la Iglesia y el Estado español.

CIX.- La Ley 44/1967 de 28 de junio intenta desarrollar el nuevo
principio constitucional en materia religiosa del artículo 6 párrafo
2º del Fuero de los Españoles, e insertar, así, en el ordenamien-
to jurídico español el derecho de libertad religiosa como derecho
civil.

Así lo exige además la Ley española de rango fundamental de 17
de mayo de 1958 de Principios del Movimiento Nacional al disponer
en su Principio II que "la nación española considera como timbre
de honor el acatamiento a la Ley de Dios, según la doctrina de la
Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana, única verdadera y fe in-
separable de la conciencia nacional, que inspirará su legislación".
Y la doctrina de la Iglesia Católica sobre libertad religiosa expre-
sada en la Declaración "Dignitatis humanae" del Concilio Vaticano
II exige claramente que la libertad religiosa sea reconocida en el
ordenamiento jurídico de los Estados como un auténtico derecho civil.

CX.- Sin embargo, es evidente que la Ley 44/1967 de 28 de junio no
ha logrado insertar de forma completa y adecuada el derecho civil
de libertad religiosa en el actual ordenamiento jurídico español,
garantizado por una eficaz tutela jurídica, sin más límites que el
justo orden público.

CXI.- El espíritu y la letra de la Ley 44/1967 son demasiados res-
trictivos y minimistas para regular los derechos civiles de los aca-
tólicos que integran su derecho civil de libertad religiosa, espe-
cialmente en su ejercicio social externo.

CXII.- La Ley no ha logrado hacer compatible el binomio - confesio-
nalidad - libertad religiosa consagrado en el ordenamiento consti-
tucional español por el artículo 6 del Fuero de los Españoles.

CXIII.- La Ley cuida a ultranza de defender la confesionalidad
católica del Estado y con ella la unidad espiritual de la nación y
así pone como límite principal del derecho de libertad religiosa
dicha confesionalidad es decir el respeto a la Religión católica

que es la oficial de la nación española.

CXIV.- El espíritu demasiado restrictivo de la Ley se manifiesta, también, y de modo especial, al establecer como límite del derecho de propaganda religiosa una serie de actos que se consideran en dicha Ley como de proselitismo en sentido peyorativo y por tanto especialmente lesivos de los derechos reconocidos en la misma.

La cuestión es clara pues la lista de actos que se consideran lesivos de los derechos reconocidos en esta Ley es agotadora, ya que los términos en que se expresa la Ley son vagos e imprecisos, con remisión expresa a la analogía. Y es evidente que esta fórmula de delimitar la Ley los actos de proselitismo hará que el derecho legítimo de propaganda pueda sufrir limitaciones improcedentes en cualquier momento por parte del Poder público, lo cual es contrario al derecho de libertad religiosa que sólo admite como límite, en este caso, del derecho de propaganda el abuso del derecho propio o la lesión del ajeno, lo cual ya se encuentra realmente en el campo del justo orden público. Consecuentemente, este es también un punto importante en que la Ley debe ser revisada.

CXV.- La Ley contempla el derecho civil de libertad religiosa en su expresión más concreta, como la expresión privada y pública de cualquier religión y lo regula como un núcleo que, a lo largo de su articulado se expande en una serie de derechos concretos de los individuos y de las comunidades religiosas.

CXVI.- Sin embargo, el enunciado de la Ley es más amplio que su contenido; pues, a pesar de su carácter de norma ordinaria general y de la forma genérica en la expresión de algunos artículos, la Ley 44/1967 de 28 de junio ha quedado en mero estatuto para las confesiones religiosas no católicas y sus miembros.

CXVII.- En cuanto al reconocimiento y regulación del haz de derechos concretos que conforman el derecho civil de libertad religiosa, la Ley lo hace, en algunos casos, de forma opuesta a las exigencias del derecho de libertad religiosa, en otros, de forma insuficiente y otro tan importante, como es el derecho a la objeción de conciencia

al servicio militar, lo pasa por alto.

CXVIII. En el plano individual, la Ley regula el matrimonio de forma opuesta a como lo exige el derecho de libertad religiosa; pues la Ley de acuerdo con el artículo 42 del Código civil español impone en España el sistema del matrimonio civil subsidiario, en virtud del cual la legislación civil asegura la obligatoriedad del matrimonio canónico para los que profesen la Religión Católica y sólo subsidiariamente se autoriza el matrimonio civil cuando se pruebe que ninguno de los contrayentes profesa dicha Religión.

Esta imposición constituye, evidentemente, una coacción indebida en materia religiosa al imponer el Estado el matrimonio canónico a los que no prueben que no profesan la Religión Católica, dado que el matrimonio es una situación vital importante en la que el hombre ha de ejercer la libertad religiosa y por lo mismo el Estado no es quien para obligar a quienes pretenden contraer matrimonio a celebrar un acto de culto y recibir un sacramento que ellos voluntariamente rechazan.

Consecuentemente este texto legal debe ser urgentemente revisado, pues entraña una contradicción con el derecho de libertad religiosa que incluye el derecho de los ciudadanos a contraer matrimonio según el dictamen de su conciencia, dentro, claro está, del justo orden público.

Debe ser sustituido o por un sistema de matrimonio civil obligatorio que respete la libertad religiosa de los ciudadanos para celebrar antes o después del matrimonio civil los ritos propios de su confesión religiosa o por el sistema doble y optativo que indudablemente nos parece el más adecuado para España, y en todo caso el más respetuoso con el derecho de libertad religiosa.

Por otra parte, la Ley, de acuerdo también con el Código civil anterior (artículo 83- número 4) y respecto al matrimonio, dispone que quienes hubieran sido ordenados in sacris o estén ligados con voto solemne de castidad dentro de la Iglesia católica no podrán contraer matrimonio sin dispensa canónica.

Tal prohibición va contra el derecho de libertad religiosa, pues implica violencia de la conciencia de la persona y de su libertad.

Este es, por tanto, otro punto importante de la Ley que también de-

-berá ser revisado; pues la falta de esta dispensa no debe traducirse por la Ley como impedimento al matrimonio civil, ya que el aceptarlo como tal supone hacer de una prohibición religiosa un impedimento civil, lo cual no es, en modo alguno, justificable, dado que el Estado debe considerar la no concesión de una dispensa por la Iglesia como asunto interno de ella y ajeno a él.

Es claro por tanto que la Ley debe ser revisada en lo que se refiere a su regulación del matrimonio. Sin embargo ello exige la previa revisión del apartado C del Protocolo final del actual Concordato en relación con el artículo XXIII y consecuentemente también los artículos 42 y 83, número 4º del Código civil, pues son precisamente estos preceptos los que sirven de fundamento a la Ley en su regulación matrimonial.

CXIX.- En cuanto a la enseñanza religiosa, la Ley reconoce expresamente el derecho de los padres a ordenar libremente la vida religiosa de sus hijos, así como el derecho a elegir libremente los centros de enseñanza y los demás medios de formación para los mismos hijos y la dispensa de la enseñanza religiosa católica de estos mediante la solicitud de los padres o tutores o de los alumnos si estuviesen emancipados legalmente.

Sin embargo, la Ley no dice nada respecto al derecho que evidentemente corresponde a los acatólicos de recibir formación religiosa conforme a su creencia religiosa en los Centros estatales de enseñanza cuando sean en número suficiente y así lo desearan.

Tampoco dice nada la Ley sobre la formación de moral natural y de ~~doctología profesional~~ que deberán recibir los jóvenes que no reciban enseñanza religiosa.

Por todo ello, el texto de la Ley respecto a la enseñanza es insuficiente y necesita obviamente ser completado en los puntos señalados; y ello, como una clara exigencia del derecho de libertad religiosa en materia de enseñanza.

CXX.- Respecto al derecho a la objeción de conciencia la Ley guarda un completo silencio. Sin embargo, es claro que un verdadero reconocimiento del derecho de libertad religiosa exige un profundo respeto a la

libertad de la conciencia y consecuentemente el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia.

Existe, por tanto, en el texto de la Ley una importante laguna que necesariamente debe ser salvada mediante una disposición que reconozca el derecho a la objeción de conciencia y permita a los objetores ser dispensados del servicio armado mediante el cumplimiento de un servicio civil sustitutorio. Por aplicación del Decreto-Ley sobre amnistía muchos objetores ha sido puestos en libertad pero el problema continúa sin resolver.

CXXI.- En el plano social y en cuanto se refiere al reconocimiento legal y consiguiente inscripción de las Asociaciones confesionales no católicas en el correspondiente Registro, a la fiscalización de su actividad por parte del Estado y al derecho de reunión, la regulación de la Ley es opuesta al derecho de libertad religiosa en la medida que representa un excesivo control por parte del Estado de las comunidades religiosas no católicas, de su actividad y del derecho de reunión.

La Ley hace depender la existencia de las confesiones religiosas no católicas de su reconocimiento legal y correspondiente inscripción en un Registro; y ello representa evidentemente un excesivo control por parte del Estado, pues las confesiones religiosas vienen exigidas por la misma naturaleza social del hombre y de la misma religión, así el derecho de libertad religiosa exige su respeto y reconocimiento.

Este excesivo control administrativo por parte del Estado respecto de las Asociaciones confesionales no católicas se muestra también en los múltiples requisitos y formalidades que exige la Ley a estas confesiones religiosas para su vida civil: en la fiscalización de su actividad interna y externa y respecto al derecho de reunión.

La cuestión es clara: la fiscalización de la vida interna de las Iglesias viola la naturaleza religiosa de las mismas; asimismo,

el culto público mientras no se mixtifica con otra actividad, no debe supeditarse a autorización gubernativa; y respecto al derecho de reunión con fines religiosos parece claro que no debe sujetarse a concesión administrativa.

En cuanto al reconocimiento de las confesiones religiosas no católicas es necesario, sin embargo, no confundir la existencia y actividad de aquellas en si mismas consideradas con su existencia y acti-

-vidad en cuanto operantes en la esfera social de la comunidad política. Bajo el primer aspecto la realidad y autonomía de las confesiones religiosas constituye un derecho natural.

Bajo el segundo aspecto se ha de actuar tanto por parte de las comunidades religiosas como del Estado dentro de las vías e instrumentos jurídicos. De ahí, el valor de reconocer su derecho natural como un derecho civil.

En todo caso, es claro que la Ley regula los derechos comunitarios de libertad religiosa de una forma demasiado restrictiva y por ello mismo ~~contraria al derecho de libertad religiosa~~ que exige que todos los grupos religiosos, mientras acepten el orden público de la sociedad en que actúan, tengan la posibilidad de producirse, en el culto privado y público, y en el ejercicio de sus funciones sociales, incluso la de dar testimonio de su entendimiento de la verdad.

CXXII.- Para el desarrollo y la aplicación práctica de la Ley 44/1967, se dictaron varias disposiciones que si bien no podían modificar esencialmente la Ley si han servido para paliar en parte algunos de sus defectos.

En el plano individual y respecto al matrimonio, mediante el Decreto 1138/1969 de 22 de marzo y la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado sobre el expediente previo al matrimonio civil de 22 de marzo de 1974 se ha conseguido abreviar los trámites previos a la celebración del matrimonio civil y facilitar extraordinariamente la prueba de la no profesión de la religión católica a los que deseen contraer matrimonio civil.

Pero el problema en el fondo ha quedado sin resolver, pues no se reconoce todavía a los contrayentes la plena libertad que les corresponde respecto a la celebración del matrimonio.

En cuanto al derecho a la enseñanza religiosa se ha conseguido mediante las normas complementarias una interpretación más amplia de la Ley pero no se ha conseguido un pleno reconocimiento y regulación adecuada del derecho a la enseñanza religiosa.

No se dice nada respecto al derecho que, evidentemente corresponde a los acatólicos de recibir educación religiosa conforme a su creencia en los centros estatales de enseñanza, cuando fuesen en número suficiente y así lo desearan.

Tampoco se dice nada respecto a la formación de moral natural o

de deontología profesional que deberán recibir los que quedan exentos de recibir enseñanza religiosa.

En lo que se refiere a la objeción de conciencia sólo se consigue, mediante la Ley 14/1973 de 19 de diciembre sobre negativa a la prestación del servicio militar, aliviar un poco la situación en que se encontraban los objetores, en la medida en que pone fin al anterior e inhumano sistema de "condenas en cadena" hasta cumplir la edad militar; pero no se tiene en cuenta ni se reconoce el derecho a la objeción de conciencia.

En el plano social, y mediante la Orden del Ministerio de Justicia de 5 de abril de 1968 se consigue perfeccionar el texto legal en los siguientes puntos importantes del aspecto institucional del derecho de libertad religiosa: se da mayor facilidad a las Asociaciones religiosas no católicas para la adquisición de la personalidad jurídica con la garantía de la supervivencia de las mismas en su actividad religiosa y afin; se refuerza el carácter reservado del libro registro de miembros y de los libros de contabilidad de las Asociaciones; se acentúa el sometimiento de la competente autoridad administrativa al régimen jurídico de la administración del Estado; se facilita la solicitud de establecimiento de Secciones locales; y se garantiza más ampliamente el derecho de reunión.

CXXIII. Las disposiciones complementarias contribuyen en buena medida al perfeccionamiento de la Ley 44/1967, aunque, como normas complementarias, se mueven dentro del marco fijado por la Ley y sus principios informadores. Ello quiere decir que la Ley 44/1967 con sus disposiciones complementarias no consiguen ofrecer un reconocimiento amplio y completo del derecho civil de libertad religiosa.

Sin embargo, hay que reconocer que la Ley con sus disposiciones complementarias de aplicación representa un primer paso de enorme trascendencia para la vida de los acatólicos en España, en cuanto supone abandonar la tradicional concesión de tolerancia para dar paso, dentro de nuestro Ordenamiento jurídico, al derecho de libertad religiosa, como derecho civil, protegido y garantizado por el Estado.

CXXIV.- La Ley 44/1967 de 28 de junio con sus normas complementarias

debe considerarse como un punto de partida hacia esa meta que es necesario y urgente alcanzar y que deberá consistir en una Ley de tipo general que reconozca, de forma plena y efectiva, el derecho civil de libertad religiosa para todos los españoles, sin más límites que el justo orden público.